



UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

## **TESIS DOCTORAL**

# **PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS – JUSTIFICACIONES TÉCNICO-JURÍDICAS PARA LA CREACIÓN DE UN TRIBUNAL MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS**

**Autor:**

**ALEXANDRE VIDIGAL DE OLIVEIRA**

**Director:**

**Prof<sup>o</sup> Dr. FERNANDO M. MARIÑO MENÉNDEZ**

**Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas  
Doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos**

**Getafe, Madrid, septiembre de 2011**

**A Simone, Nathalia y Bernardo.**

*“un sistema de derechos fundamentales  
vale en la práctica lo que valen sus garantías”...*

*“la ‘proclamación de las libertades en textos constitucionales o en documentos internacionales no pasa de ser una expresión de buenas intenciones, cuando no un ejercicio de la más vacía retórica, mientras no se acompaña de mecanismos de protección serios y rigurosos frente a todos y muy singularmente frente a los poderes públicos”.*

(LUÍS PRIETO SANCHÍS, aludiendo al pensamiento de  
PECES-BARBA y PEREZ LUÑO) <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> LUIZ PRIETO SANCHÍS, “La protección estatal de los derechos humanos”. En: VVAA, *Diccionario Crítico de los Derechos Humanos*, Universidad Internacional de Andalucía, sede iberoamericana, Huelva, 2000, p. 201.

## Í N D I C E

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>15</b>
---------------------------	-----------

### **PRIMERA PARTE**

#### **LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO GARANTÍA**

<b>A SU CREDIBILIDAD .....</b>	<b>24</b>
--------------------------------	-----------

I – La protección internacional de los derechos humanos en el contexto histórico – breves consideraciones .....	24
II – Caminos a la realización de los derechos humanos .....	41
III – Efectividad de los derechos humanos .....	43
IV – La comunidad internacional .....	48

### **SEGUNDA PARTE**

#### **ESTRUCTURAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES DE**

<b>PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS .....</b>	<b>52</b>
---	-----------

I – Universal/Global - basada en la Carta de Naciones Unidas .....	53
1 – Tutela no jurisdiccional por órganos principales de Naciones Unidas .....	55
A – Asamblea General y sus órganos subsidiarios .....	55
a – Consideraciones generales .....	56
b – Consejo de Derechos Humanos .....	60
b.1 – Principales órganos del Consejo de Derechos Humanos .....	65
b.1.1 – Comité Asesor .....	66
b.1.2 – Comité de Coordinación de los Procedimientos Especiales ....	68
b.1.3 – Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones .....	70
b.1.4 – Grupo de Trabajo sobre Situaciones .....	71
b.2 – Mecanismos Extraconvencionales de Control y Protección de los Derechos Humanos .....	71
b.2.1 – Examen Periódico Universal .....	72
b.2.2 – Procedimiento de Denuncia .....	77
b.2.3 – El Sistema de Procedimientos Especiales y sus Órganos .....	80
b.2.3.1 – Los Procedimientos Especiales de conformidad con las Resoluciones 1235 y 1530 del ECOSOC .....	86

b.2.3.1.1 – Resolución 1235 .....	87
b.2.3.1.1.1 – Mecanismos de Actuación .....	90
b.2.3.1.1.1.1 – Procedimiento Geográfico .....	91
b.2.3.1.1.1.2 – Procedimiento Temático .....	94
b.2.3.1.1.1.3 – Acción Urgente .....	98
b.2.3.1.2 – Resolución 1503 .....	100
b.2.3.1.2.1 – Mecanismo de Actuación .....	101
b.2.3.2 – Los Procedimientos Especiales de conformidad con la Resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos .....	104
b.2.3.2.1 – Misiones sobre el Terreno .....	105
b.2.3.2.2 – Comunicaciones y Llamamiento Urgente .....	107
B – Consejo de Seguridad .....	107
C – Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas-ECOSOC .....	110
a – Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer .....	112
D – Secretaria General de Naciones Unidas .....	113
a – La Secretaria General y los Derechos Humanos .....	114
b – Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – ACNUDH .....	115
2 – Tutela jurisdiccional contenciosa universal/global.....	117
A – Tribunal Internacional de Justicia .....	118
B – Justicia Penal Universal – Tribunales Penales Internacionales Provisorios .....	123
a – Tribunales penales internacionales “ad hoc” .....	127
b – Tribunales Penales Internacionalizados .....	132
3 – Tutela de jurisdicción administrativa .....	133
A – Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo .....	134
B – Tribunal de las Naciones Unidas .....	135
II – Mundial – base convencional .....	135
1 – Tutela no jurisdiccional por órganos especializados de protección .....	136
A – Mecanismos de control y protección de los órganos de tratados .....	143
a – Informe Gubernamental .....	144
b – Denuncia Estatal .....	152
c – Denuncia Particular .....	153

d – Investigación de Oficio .....	156
e – Alerta Temprano .....	157
f – Visitas o Inspecciones .....	157
B– Comités de base convencional .....	158
a –Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial .....	159
a.1 – Informe Gubernamental .....	160
a.2 – Denuncia Interestatal .....	160
a.3 – Denuncia Particular .....	161
a.4 – Alerta Temprano y Acción Urgente .....	162
b – Comité de Derechos Humanos .....	163
b.1 – Informe Gubernamental .....	164
b.2 – Denuncia Interestatal .....	165
b.3 – Denuncia Particular .....	165
c – Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales .....	168
c.1 – Informe Gubernamental.....	170
c.2 – Comunicaciones (Quejas Individuales) .....	173
c.3 – Comunicaciones entre Estados .....	174
c.4 – Procedimiento de Investigación .....	175
d – Comité contra la Tortura .....	175
d.1 – Informe Gubernamental .....	176
d.2 – Investigación de Oficio.....	177
d.3 – Denuncia Interestatal .....	178
d.4 – Denuncia Particular .....	179
e – Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, Inhumanos o degradantes .....	181
f – Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer .....	183
f.1 – Informe Gubernamental .....	185
f.2 – Investigación de Oficio.....	186
f.3 – Denuncia Particular .....	187
g – Comité de los Derechos del Niño .....	187
g.1 – Informe Gubernamental .....	188
h – Comité de protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares .....	188

h.1 – Informe Gubernamental .....	189
h.2 – Denuncia interestatal .....	189
h.3 – Denuncias Individuales.....	190
i – Comité de los derechos de las personas con discapacidad .....	191
i.1 – Informes estatales .....	192
i.2 – Denuncia particular .....	192
i.3 – Medidas provisionales urgentes .....	194
j – Comité contra las Desapariciones Forzadas .....	194
j.1 – Informe Estatal .....	196
j.2 – Comunicación Individual .....	196
j.3 – Comunicación Interestatal .....	197
j.4 – Petición de Acclón Urgente .....	197
j.5 – Visita .....	198
C – Armonización de los métodos de trabajo de los Comités .....	198
D – Relación de los Comités con el Sistema de Relatores Especiales .....	200
2 – Tutela jurisdiccional .....	202
A – Tribunal Penal Internacional .....	202
III – Regional/Continental .....	209
1 – Europa .....	212
A – Consejo de Europa .....	213
a – Los Derechos Humanos en el marco del Consejo de Europa .....	214
a.1 – Convención Europea de Derechos Humanos (Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales) .....	216
a.2 – Carta Social Europea .....	217
b – Protección de los Derechos Humanos en el Consejo de Europa .....	218
b.1 – Tutela no-jurisdiccional .....	218
b.1.1 – Secretario General del Consejo de Europa .....	219
b.1.2 – Comité de Ministros .....	219
b.1.2.1 – Comité Asesor .....	219
b.1.2.1.1 – Mecanismo de actuación .....	220
b.1.3 – Comisario Europeo de Derechos Humanos .....	220
b.1.4 – Comité Europeo para la Prevención de la Tortura .....	221

b.1.5 – Comité Europeo de Derechos Sociales .....	222
b.1.5.1 – Mecanismo de actuación .....	222
b.1.5.1.1 – Informe Nacional .....	222
b.1.5.1.2 – Reclamación Colectiva .....	223
b.1.6 – Comité de Expertos Gubernamentales .....	224
b.1.6.1 – Mecanismo de actuación .....	224
b.1.6.1.1 – Informe .....	224
b.2 – Tutela jurisdiccional .....	225
b.2.1 – Tribunal Europeo de Derechos Humanos .....	225
b.2.1.1 – Competencia jurisdiccional .....	228
b.2.1.1.1 – Medidas provisionales .....	231
b.2.1.2 – Competencia consultiva .....	231
B – Unión Europea .....	231
a – Los Derechos Humanos en el marco de la Unión Europea .....	236
a.1 – Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores – Carta Social .....	237
a.2 – Convención Europea de Derechos Humanos (Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales .....	238
a.3 – Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea .....	240
a.4 – Tratado de Lisboa .....	243
b – Protección de los Derechos Humanos en la Unión Europea .....	244
b.1 – Tutela no-jurisdiccional .....	245
b.1.1 – Consejo de la Unión Europea .....	245
b.1.2 – Parlamento Europeo .....	246
b.1.3 – Defensor del Pueblo .....	246
b.2 – Tutela jurisdiccional .....	247
b.2.1 – Tribunal de Justicia de la Unión Europea .....	248
b.2.1.1 – Mecanismos de actuación .....	248
b.2.1.1.1 – Cuestión prejudicial .....	248
b.2.1.1.2 – Recurso por incumplimiento .....	249
b.2.1.1.3 – Recurso de anulación .....	249
b.2.1.1.4 – Recurso por omisión .....	249



b.2.2 – Tribunal de Primera Instancia .....	250
2 – América .....	250
A – Organización de los Estados Americanos – OEA .....	250
a – Los Derechos Humanos en el marco de la Organización de los Estados Americanos .....	252
a.1 – Convención Americana sobre los Derechos Humanos – Pacto de San Jose de Costa Rica .....	254
a.2 – Carta Democrática Interamericana .....	255
b – Protección de los Derechos Humanos en la OEA .....	257
b.1 – Tutela no jurisdiccional ..	257
b.1.1– Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH .....	257
b.1.1.1 – Mecanismos de actuación .....	260
b.1.1.1.1 – Informe .....	260
b.1.1.1.2 – Denuncia interestatal .....	261
b.1.1.1.3 – Denuncia particular .....	262
b.1.1.1.4 – Medidas Cautelares .....	264
b.1.1.2 – Relatorias Especiales .....	264
b.1.1.2.1 – Relatoria Especial para la Libertad de Expresión .....	265
b.1.1.2.2 – Relatoria sobre Derechos de las Mujeres .....	266
b.1.1.2.3 – Relatoria de Trabajadores Migratantes y Miembros de sus Familias .....	267
b.1.1.2.4 – Relatoria sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas..	268
b.1.1.2.5 – Relatoria sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Americas .....	269
b.2– Tutela jurisdiccional.....	270
b.2.1– Corte Interamericana de Derechos Humanos .....	270
b.2.1.1 – Competencia jurisdiccional .....	273
b.2.1.1.1 – Medidas provisionales .....	277
b.2.1.2 – Competencia consultiva .....	278
3 – África .....	278
A – Unión Africana – UA .....	278
a – Los Derechos Humanos en el marco de la Unión Africana-UA .....	281
a.1 – Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos .....	281

b – Protección de los Derechos Humanos en la Unión Africana .....	282
b.1 – Tutela no-jurisdiccional .....	283
b.1.1– Comisión Africana de Derechos Humanos .....	283
b.1.1.1 – Mecanismos de actuación .....	285
b.1.1.1.1 – Informe Periódico .....	285
b.1.1.1.2 – Denuncia Intergubernamental .....	285
b.1.1.1.3 – Otras Comunicaciones .....	286
b.2 – Tutela jurisdiccional .....	287
b.2.1– Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.....	287
b.2.1.1 – Competencia jurisdiccional .....	289
b.2.1.2 – Competencia consultiva .....	291
4 – Asia y Oceanía.....	291
IV – Intercontinental .....	295
1 – Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa –	
O.S.C.E. (Europa-Ásia-América del Norte) .....	295
A – La O.S.C.E. y los derechos humanos .....	296
a – Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos –	
O.I.D.D.H .....	298
b – Grupo de Expertos para la Prevención de la Tortura .....	298
c – Alto Comisionado para las Minorías Nacionales .....	298
d – Representante para la Libertad de Información .....	299
2 – Liga de los Estados Árabes (África y Ásia) .....	299
A – Los Estados Árabes y los derechos humanos .....	300
V – Subregional .....	305
1 – Comunidad de Estados Independientes – CEI .....	305
A – La Comunidad se Estados Independientes y los derechos humanos .....	306
a – Comisión de Derechos Humanos de la Comunidad de	
Estados Independientes .....	307
2 – Comunidad Andina .....	308
A – La Comunidad Andina y los derechos humanos .....	309
a – La protección a los derechos humanos en la Comunidad Andina .....	311
3 – Mercado Común del Cono Sur - MERCOSUR .....	312
A – El MERCOSUR y los derechos humanos .....	314

4 – Asociación de Naciones del Sureste Asiático - ASEAN .....	318
A – La ASEAN y los derechos humanos .....	318
a – Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos .....	324

### **TERCERA PARTE**

#### **ANÁLISIS CRÍTICO DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL**

<b>DE LOS DERECHOS HUMANOS .....</b>	<b>327</b>
I – Puntos débiles .....	327
1 – Una estructura no-sistematizada .....	328
2 – Una estructura inconclusa .....	341
3 – Deficiencias funcionales .....	344
II – Efectividad restringida .....	348

### **CUARTA PARTE**

#### **TUTELA JUDICIAL INTERNACIONAL GLOBAL DE DERECHOS HUMANOS... 355**

I – Fundamentos a la jurisdicción internacional global en la protección de los derechos humanos .....	362
1 – El discurso de la universalidad como cauce de una jurisdicción global .....	362
2 – Los rasgos de la protección judicial .....	370
3 – Contenido jurídico de las normas de derechos humanos .....	375
4 – Naturaleza supraestatal de las normas de derechos humanos .....	385
5 – Dimensión subjetiva - individualización del tratamiento de las vulneraciones a los derechos humanos .....	390
6 – Dimensión objetiva de la tutela de derechos humanos - restitución, indemnización y rehabilitación .....	391
7 – La jurisprudencia internacional .....	394
8 – La experiencia positiva de los tribunales internacionales de protección de los derechos humanos .....	401
9 – Las limitaciones de la jurisdicción universal ejercida por los países.....	403
10 – El poder judicial y su efecto disuasivo .....	406
II – Los vacíos jurídicos que impiden la tutela de los derechos humanos	
- la tutela judicial efectiva .....	408
1 – Los sin patria .....	409

2 – La inmunidad de jurisdicción y de ejecución del Estado extranjero .....	412
3 – El caso de los detenidos en Guantánamo .....	415
4 – Las violaciones a derechos humanos por los tribunales penales internacionales provisorios .....	418
III – El Tribunal Mundial de Derechos Humanos .....	420
1 – Base normativa para viabilizar la creación de un órgano judicial internacional global de protección a los derechos humanos.....	420
2 – Competencia material del tribunal mundial de derechos humanos .....	427
3 – Competencia funcional del tribunal mundial de derechos humanos .....	436
4 – Estructura .....	437
5 – Mecanismos de demanda al tribunal .....	439
<b>CONCLUSIÓN .....</b>	<b>443</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA .....</b>	<b>449</b>
<b>CONSULTAS A LA INTERNET .....</b>	<b>460</b>
<b>ANEXOS .....</b>	<b>463</b>
(1) Acervo Normativo de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en nivel Universal/global .....	463
(2) Carta de las Naciones Unidas .....	470
(3) Reglas de Beijing .....	493
(4) Reglas de Tokio .....	515
(5) Directrices de Riad .....	525
(6) Principios de Paris .....	534
(7) Resolución 53/144-Asamblea General .....	538
(8) Resolución 5/1-Consejo de Derechos Humanos .....	545
(9) Resolución 5/2-Consejo de Derechos Humanos .....	579
(10) Mandatos por países .....	588
(11) Mandatos temáticos .....	590
(12) Países examinados por la Comisión de Derechos Humanos en virtud del Procedimiento 1503 (hasta 2005) .....	597

(13) Países que han cursado invitación permanente a los procedimientos especiales (el 31 de agosto de 2011) .....	601
(14) Estatuto de la Corte Internacional de Justicia .....	604
(15) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .....	616
(16) Primero Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .....	622
(17) Segundo Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos .....	626
(18) Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales .....	630
(19) Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales .....	635
(20) Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial .....	637
(21) Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial – Enmienda al artículo 8 .....	643
(22) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer .....	645
(23) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – Enmienda al artículo 20, párrafo 1 .....	651
(24) Protocolo Facultativo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer .....	654
(25) Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes .....	658
(26) Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes-Enmienda a los artículos 17 (7) y 18 (5).....	663
(27) Protocolo Facultativo a la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes .....	665
(28) Convención sobre los Derechos de los Niños .....	668
(29) Convención sobre los Derechos de los Niños-Enmienda al artículo 43 (2) ...	674
(30) Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos de los Niños relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados .....	679
(31) Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos de los Niños	

Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía .....	685
(32) Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares .....	691
(33) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad .....	694
(34) Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad .....	699
(35) Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada .....	703
(36) Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea .....	707

## **INTRODUCCIÓN**

La comunidad internacional<sup>2</sup> se encuentra hoy involucrada con tres temas muy expresivos y bien definidos: los derechos humanos, el intervencionismo y las estructuras supra-estatales de integración o cooperación con solidaridad de intereses.

De estos tres, seguramente el que ha encontrado más amplio espacio para debates, instigado relevantes estudios y despertado más intensas preocupaciones, es el tema de los derechos humanos, incluso en este escenario pudimos hablar del nacimiento y fortalecimiento del Derecho Constitucional Internacional. Al contrario de los asuntos del intervencionismo de la comunidad internacional, y de los procesos de consolidación de estructuras supra-estatales de integración o cooperación, cuyo interés se encuentra más concentrado en los Estados y su gente directamente afectada, los derechos humanos es tema que envuelve a toda persona, donde quiera que se encuentre, independientemente del contexto social, económico o cultural en que vive, y del interés del Estado del cual es ciudadano.

Esta categoría de derechos mínimos del hombre, a la cual se ha convenido identificar como derechos humanos, y que se traduce en un lenguaje común de la humanidad, constituye, así, un tema que hace más de medio siglo viene despertando especial atención en la sociedad internacional, con la adopción de constantes medidas para su tratamiento específico y diferenciado. Como asunto de la tónica actual basado en las más profundas directrices del derecho constitucional, revélase, también, tema de destaque en el derecho internacional público moderno, y desde esta perspectiva es que será objeto la presente tesis doctoral.

---

<sup>2</sup> Este término, también muy usado como “sociedad internacional”, sirve para identificar el conjunto de toda la humanidad, reunida en sus más diversas formas, como los pueblos, culturas y formaciones políticas y sociales, gubernamentales o no, y que revelan su existencia por los medios de actuación del Derecho Internacional Público. FERNANDO M. MARIÑO MENÉNDEZ describe todo un capítulo de su obra *Derecho Internacional Público (parte general)*, Madrid, Trota, 1999, en que desvenda los aspectos históricos jurídicos de la “comunidad internacional”, término al cual esta tesis se ira a desarrollar un poco más en el próximo capítulo “aportaciones al tema: comunidad internacional”.

En la identificación de las fases de evolución de los derechos humanos, con relación a su proceso de emancipación<sup>3</sup> - no en cuanto al contenido de las situaciones o hechos reconocidos como tales y por las cuales se tienen definidas las “generaciones” de los derechos humanos -, puede considerarse el momento de reconocimiento y declaración como primera fase y, cuyo marco inicial se registra, de modo substancial, con la Carta de las Naciones Unidas<sup>4</sup>. En tiempos actuales se contabilizan más de 140 instrumentos internacionales con aquel contenido<sup>5</sup>, mas allá de otras tantas iniciativas que se intentan incluir en el catálogo de aquella categoría de derechos, como reflejo de las novedosas situaciones que surgen de la propia condición del individuo en la sociedad.

La importancia de este momento incluso se refleja en la propia evolución del Derecho Internacional Público, o su “*revitalización*” como menciona CANÇADO TRINDADE, para el cual, a lo largo del siglo XX, aquel ramo del Derecho se ha reconstruido “*con atención a los derechos inherentes a todo ser humano*”, pasando “*desde un ordenamiento de simple regulación hacia un instrumental jurídico sobre todo de liberación del ser humano*” trascendiendo de “*los antiguos parámetros del derecho clásico de la paz y de la guerra*” hacia “*las nuevas demandas y desafíos de la vida internacional, con mayor énfasis en la cooperación internacional*”<sup>6</sup>.

En una segunda fase del proceso de emancipación, puede admitirse la cuestión filosófica atinente a la justificación de los derechos humanos, por la cual se debaten con entusiasmo los teóricos de la materia, aunque por más diversos u antagónicos que sean sus argumentos justificadores de los derechos humanos, en

---

<sup>3</sup> Los estudios doctrinarios ofrecen muchas definiciones teóricas de la evolución de los derechos humanos, optando este trabajo por definir un registro evolutivo propio. Entre aquellos se puede citar el cuádruple proceso de evolución mencionado por GREGORIO PECES-BARBA, por el cual menciona el proceso de positivación, el de generalización, el de internacionalización y el de especificación, conforme se ve en PECES-BARBA, G., “Pasado y futuro de los derechos humanos”. En: *Consolidación de Derechos y Garantías: Los grandes retos de los Derechos Humanos en el siglo XXI (Seminario Conmemorativo del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, p. 387.

<sup>4</sup> Texto en anexo (2).

<sup>5</sup> En el anexo (1) hay un resume del acervo normativo universal/global en tema de derechos humanos.

<sup>6</sup> CANÇADO TRINDADE, A. A., “Reflexiones sobre el Desarraigo como Problema de Derechos Humanos frente a la Conciencia Jurídica Internacional”. En: CANÇADO TRINDADE, A. A., RUIZ DE SANTIAGO, J., *La Nueva Dimensión de las Necesidades de Protección del Ser Humano en el Inicio del Siglo XXI*, 2ª e., Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 2003, pp. 63/6.



cualquier caso no dejan de reconocer la existencia, necesidad y fortalecimiento de dichos derechos<sup>7</sup>.

A continuación, puede considerarse una tercera fase de aquel proceso, vinculada a la satisfacción de los derechos humanos, es decir, a sus efectos en concreto, que se puede definir como el derecho realizado. Es el derecho ya no como una mera expectativa, sino efectivamente materializado, perceptible. Y, en esta fase, se pueden caracterizar dos momentos muy distintos e inconfundibles: uno, el de la promoción de los derechos humanos, reflejo de todas las iniciativas tendientes a su cumplimiento voluntario, traducido en la cultura de su realización; el otro, el momento de garantía de su cumplimiento, el cual requiere una estructura con mecanismos que aseguren su plena realización. En esta tercera fase de emancipación, en su vertiente específica de la garantía de satisfacción de los derechos humanos y de la eficacia de los medios de protección puestos a disposición de las víctimas de sus violaciones, es en la cual se asienta esta tesis doctoral.

La tutela de los derechos humanos ha alcanzado una dimensión de interés muy destacado en las últimas décadas. Se ha asistido a un alargamiento muy intenso del catálogo de derechos humanos, aunque se reconozca que lo principal, lo decisivo y lo más importante no está en eso, sino en los instrumentos de tutela que se prevean y que funcionen<sup>8</sup>. Ya en 1964, NORBERTO BOBBIO advertía que el problema grave y cada vez más urgente de los derechos humanos no eran sus fundamentos, sino su efectiva protección y saber cual es el modo más seguro para garantizarlos<sup>9</sup>.

Por eso, son oportunas y adecuadas las incesantes iniciativas que buscan priorizar su respeto incondicional, principalmente por el hecho de que hoy vivimos

---

<sup>7</sup> Véase JOAQUÍN RODRÍGUEZ-TOUBES MUÑIZ, *La razón de los derechos*, Tecnos, Madrid, 1995; JAVIER DE LUCAS, "Algunos equívocos sobre el concepto y fundamentación de los derechos humanos". En: BALLESTEROS, J., *Derechos Humanos. Concepto, fundamento, sujetos*, Tecnos, Madrid, 1992; LUIGI FERRAJOLI, *Diritti fondamentali-Un dibattito teorico*, 2ª edición, Laterza, Roma, 2002, pp. 279-369; NIKLAS LUHMANN, *I Diritti Fondamentali come Istituzione* (Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie), traducción Stefano Magnolo, Dedalo, Bari, 2002, pp. 79-138.

<sup>8</sup> Anotaciones aportadas por JORGE MIRANDA al presentar la obra intitulada *Directos Humanos-Teorías y Prácticas*, VVAA, Almedina, Coimbra, 2003, p. 11/14.

<sup>9</sup> Retrato en el artículo "Presente y Porvenir de los Derechos Humanos". En: VVAA, *Anuario de Derechos Humanos*, 1, Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Madrid, 1981, pp. 09-28.

rodeados por una cultura universal de los derechos humanos, sometidos a una intensa y constante mirada del mundo. Pero, a pesar de que se haya avanzado constantemente en su reconocimiento y declaración, con conquistas muy relevantes, la correspondiente estructura y sus instrumentos para garantizar tales conquistas no se presentan plenamente satisfactorios, en vista del gran distanciamiento entre los derechos humanos reconocidos y estos mismos derechos humanos efectivamente protegidos. Como resaltó la profesora TECLA MAZZARESE *“No hace falta, o sea, traer a la memoria la advertencia de que la efectiva protección de los derechos humanos continua hoy en día siendo una urgente y dramática necesidad, pese a la cada vez mayor cantidad de Declaraciones, Cartas, Convenios internacionales y regionales firmados desde la Carta de Naciones Unidas de 1945, y pese al surgimiento en el ámbito de los derechos internos de nuevas constituciones desde finales de los años cuarenta en Italia y en Alemania y/o los episodios ocurridos en la actualización constitucional tanto anterior como posterior a la guerra”*<sup>10</sup>.

En este contexto, no se puede dejar de admitir que hay hechos cuyas evidencias impiden que se les ignore, o no sean reconocidas destacadamente, con un mayor grado de relevancia. La permanente necesidad de respeto a los derechos humanos y la efectividad de los mecanismos que exigen su cumplimiento se incluyen en estas evidencias que la historia actual no permite negar.

Y en este escenario, este trabajo de tesis doctoral se propone analizar hasta qué punto los derechos humanos cuentan con medidas estructurales e instrumentales de nivel internacional adecuadas y suficientes para garantizar los medios necesarios de su plena, o al menos satisfactoria realización; hasta qué punto los derechos humanos no pasan de una mera declaración de intenciones y se pueden convertir en derechos realizados; o hasta qué punto los derechos humanos dejan de ser una mera abstracción para ser reconocidos concretamente.

---

<sup>10</sup> Conforme palabras de la profesora TECLA MAZZARESE, de la Universidad de Brescia, Italia, al escribir bajo el tema “¿Está la era de los derechos cambiando?”, en VVAA, *Anuario de Derechos Humanos*, Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2004, p. 656.

Para alcanzar sus objetivos, este trabajo de investigación académica adopta la metodología deductiva, partiendo del análisis general evidenciado por la constatación de que gran parte de la población mundial no dispone de mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, y llegando al punto específico de proponer, como alternativa a enfrentar y transformar aquella constatación, la existencia de un tribunal mundial de derechos humanos, de alcance universal o global<sup>11</sup>, con atribuciones para juzgar ciertas vulneraciones de naturaleza no-penal a los derechos humanos, practicadas por cualquier país contra cualquier individuo.

En desarrollo del trabajo, esta tesis es dividida en cuatro partes. En la primera serán abordados algunos puntos iniciales importantes para el debido enfrentamiento del tema, como un breve registro histórico de la evolución de la tutela internacional de los derechos humanos, pasando por los modos actuales de realización de aquella tutela, siguiendo con un breve enfoque sobre la efectividad de los derechos humanos y sobre la comunidad internacional.

La segunda parte expone una “radiografía” de la estructura y funcionamiento actual de protección internacional de los derechos humanos, describiendo cada uno de los principales órganos e instituciones que la integran y apuntando sus rasgos principales, como su fuente de creación, su naturaleza, competencia, alcance, mecanismos de eficacia, composición y funcionamiento.

En seguida, como tercera parte, esta tesis presenta un análisis crítico de aquella estructura y funcionamiento actuales, destacando sus puntos débiles, principalmente por traducir un sistema de protección internacional limitado, que no alcanza a toda la gente del mundo, caracterizándose esa situación como una contundente paradoja entre el discurso de la universalidad de los derechos humanos y el modelo de protección internacional, predominantemente no-universal. Esa situación aún más se agrava cuando se constata que la protección judicial es basada exclusivamente en estructuras regionales, éstas disponiendo de tribunales para juzgar las violaciones a los derechos humanos restringida a la gente sometida a sus

---

<sup>11</sup> Esta tesis adoptará las expresiones “universal” y “global” como sinónimas, identificando el alcance espacial más amplio, es decir, común a toda la gente del mundo.

jurisdicciones, como son, actualmente, parte de los americanos, europeos y africanos, dejando al margen de idéntica protección judicial internacional parte sustancial de la población humana. Esa situación impide el alcance de una mayor efectividad del sistema actual de protección internacional de derechos humanos, y que, a su vez, justifica la necesidad de existencia de un tribunal mundial, de alcance global, para proporcionar una más efectiva protección a aquellos derechos.

En la cuarta parte se presentan los fundamentos que demuestran ser posible y que dan sustentación a la creación de un tribunal mundial de derechos humanos, y que se caracteriza como una jurisdicción autónoma e independiente, con rasgo de complementariedad en relación a la estructura judicial de protección nacional, y como una jurisdicción subsidiaria en relación a los tribunales internacionales regionales de derechos humanos. Más allá, en la cuarta parte se propone un modelo orgánico y funcional en los cuales se puede plantear, concretamente, su existencia.

En este punto de la propuesta de un modelo de funcionamiento del tribunal, es importante señalar que esta tarea en la presente tesis se desarrolla apenas como un registro suplementar, en la medida en que el objetivo de la tesis no es presentar un estatuto de un tribunal mundial de derechos humanos, más, antes, es presentar razones técnico-jurídicas con el objetivo de justificar y convencer cuanto a la propia necesidad de la existencia de aquel tribunal. Desde ahí la coherencia de su título: *“Justificaciones Técnico-Jurídicas para la Creación de un Tribunal Mundial de Derechos Humanos”*.

Como delimitación del contenido del trabajo, y con vistas a alcanzar sus objetivos, no se investigará sobre las decisiones y el posicionamiento de los órganos internacionales en cuestiones de derechos humanos, es decir, no se analizará la protección de los derechos humanos en vista de los precedentes de interpretación de sus normas, sino que se limitará el estudio a informar cuáles son, de qué modo actúan los órganos e instituciones que controlan el cumplimiento de aquellos derechos reconocidos, y cuál alternativa se puede sugerir para alcanzar un modelo más fiable y eficiente en la protección de aquellos derechos.

La propuesta del trabajo se justifica por la importancia de debatir un tema que se traduce en el reconocimiento de que la defensa internacional de los derechos humanos es la última oportunidad de garantía de su cumplimiento, y por ello hay que afirmarse en un modelo de resultados efectivos, o, al menos, que se demuestren aptos para alcanzar un nivel con “el máximo posible” de efectividad.

Y a pesar de esta tesis tratarse de un trabajo con enfoque predominantemente técnico-jurídico, ni por ello deja de considerar el componente político que domina las relaciones internacionales.

Incluso, debido al “*carácter sumamente heterogéneo de una sociedad, como la internacional*”, y propio del entorno del Derecho Internacional, es posible llegar a situaciones de reconocimiento de “*algo completamente ilusorio y más propio de la imaginación que de la realidad*”, como ha afirmado el profesor CÁSTOR MIGUEL DÍAZ BARRADO, al referirse a la imposibilidad de admitir un ordenamiento jurídico internacional<sup>12</sup>.

No obstante, no es demasiado señalar que en la trayectoria histórica de los derechos humanos sus conquistas no se hicieron sin lucha, incomprensiones y fuertes resistencias. Como ejemplo, se puede mencionar que el primer esbozo del Estatuto de la Organización de las Naciones Unidas, por el texto de la Conferencia de Dumbarton Oaks<sup>13</sup>, en octubre de 1944, no hubo referencia a los derechos humanos, por expresa resistencia de las potencias mundiales que no tenían ningún interés en someterse a un régimen jurídico internacional de aquella naturaleza, por la posibilidad de interferencia en sus asuntos internos, de soberanía, y que sólo se ha superado con la Carta de las Naciones Unidas en la Conferencia de Chapultepec, en 1945, y su texto final por la Conferencia de San Francisco. La Declaración Universal de Derechos Humanos, de igual modo, ha experimentado fuertes resistencias e

---

<sup>12</sup> DÍAZ BARRADO, C. M., *El Derecho Internacional del Tiempo Presente*, Universidad Rey Juan Carlos, Dykinson, Madrid, 2004, p. 115.

<sup>13</sup> En CASADAVANTE ROMANI, C. F. (Coordinador), *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, editorial Dilex, Madrid, 2000, p. 90, se registra que la Conferencia de Dumbarton Oaks reunió a Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión Soviética y China, con Gran Bretaña y Unión Soviética oponiéndose a incluir el tema de los derechos humanos en la propuesta de la Carta de Naciones Unidas.

inicialmente ha sido admitido por los países solamente como un “*manifiesto programático*”, sin imponer obligaciones jurídicas<sup>14</sup>.

Esa resistencia a cambios en la protección a los derechos humanos también se ha observado con relación a su estructura y sus mecanismos, como en los procedimientos extraconvencionales de las Resoluciones 1235 y 1503, del Consejo Económico y Social-ECOSOC, y que fueron aceptados con ciertas objeciones en la década de los ochenta, pero hoy están consolidadas. Así como la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos-ACNUDH, hace más de diez años, y que ha sufrido gran resistencia; al igual que en la creación del Tribunal Penal Internacional, cuya propuesta inicial cuenta con más de 40 años. Estos casos, son sólo algunos registros entre tantas otras situaciones, donde la resistencia inicial se ha convertido en consenso favorable a la creación de instituciones u órganos con relevantes atribuciones en el seno de la protección internacional de los derechos humanos, y que hoy ejercen regularmente sus actividades.

Así es que, proponer discutir la actual estructura y funcionamiento de protección de los derechos humanos y proponer la creación de un tribunal mundial para tratar de ciertas y graves violaciones no-penales, puede parecer algo muy arriesgado para un trabajo de investigación académica. Sin embargo, se entiende que en este escenario académico es que el análisis y discusión de tan relevante tema se presenta oportuno, pues otro objetivo no pugna que el de inducir a su reflexión, abriéndose la oportunidad de reunir elementos que puedan ofrecer alguna contribución a la mejora de la garantía de cumplimiento a los derechos humanos.

La propiedad y actualidad del tema se revela, incluso, por la reciente iniciativa del gobierno suizo, apoyado por los gobiernos de Noruega y Austria, que, en 2009, bajo los auspicios del 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puso en marcha “*Un Programa para los Derechos Humanos*” y que contó con el tema Tribunal Mundial de Derechos Humanos<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> CARRILLO SALCEDO, J. A., *Soberanía de los Estados y Derechos Humanos en Derecho Internacional Contemporáneo*, 2ª edición, Tecnos, Madrid, 2001, p. 50.

<sup>15</sup> Los proyectos de investigación seleccionados sobre el tema fueron “A World Court of Human Rights”, de Manfred Nowak y Julia Kozma, de la Universidad de Viena, Austria, disponible, en inglés,

Más allá de todo, la insistencia por alcanzar una mayor efectividad en la realización de los derechos humanos, proponiendo la creación de un correspondiente tribunal internacional universal, es, en realidad, una lucha por el reconocimiento de la propia existencia de los derechos humanos en el seno internacional.

Estas son las razones que motivan a la iniciativa de este trabajo, al reflexionar sobre la efectividad de los mecanismos de protección de los derechos, mismo sin olvidar que *“L’idéal des DH, comme tout idéal, implique une volonté constante de perfectionnement sans jamais qu’il soit imaginable d’atteindre la perfection”*<sup>16</sup>.

Y como el respeto universal de los derechos humanos resulta uno de los principales impulsos para alcanzar y mantener la paz entre los pueblos, cuanto más efectiva o cuanto más se intente alcanzar la respectiva protección, más fortalecida resultará la paz social.

Es importante anotar que el término “tribunal mundial” adoptado en el título busca traducir su alcance global. A su vez, no fue utilizada la denominación “tribunal internacional” pues este es un término muy genérico, que alcanza a todo y cualquier tribunal no-nacional, como los Tribunales Europeo, Interamericano y Africano, y el objetivo de la tesis no es tratar de nuevos tribunales regionales, como en Asia y Oceanía, pero sí, tratar de un tribunal de alcance universal, sin delimitación territorial.

Cabe apuntar, por fin, que los datos utilizados en la tesis tienen como último período de referencia el mes de septiembre de 2011.

---

en Web: <<http://www.udhr60.ch/report/hrCourt-Nowak0609.pdf>> [Consulta: 02 de julio de 2011], y “Towards a World Court Human Rights”, de Martin Scheinin, del European University Institute, Florencia, Italia, disponible en <[http://www.udhr60.ch/report/hrCourt\\_scheinin0609.pdf](http://www.udhr60.ch/report/hrCourt_scheinin0609.pdf)> [Consulta: 02 de julio de 2011], y que hacen parte del documento “Protecting Dignity: An Agenda for Human Rights”, junio de 2009, disponible en Web: <<http://www.udhr60.ch>> [Consulta: 02 de julio de 2009].

<sup>16</sup> MATHIEU, J.-L., *La Défense Internationale des Droits de L’Homme*, Presses Universitaires de France, Paris, 1993, p. 123.

## **PRIMERA PARTE**

### **LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS COMO GARANTÍA A SU CREDIBILIDAD**

En los breves títulos que siguen se buscará esclarecer algunos puntos necesarios a la debida comprensión de esta tesis, desde este inicio de la exposición, con el intento de dejar bien claras las bases y los límites de su contenido, y con el fin de facilitar la concatenación de las ideas.

#### **I – LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO HISTÓRICO – BREVES CONSIDERACIONES**

La evolución de la protección internacional de los derechos humanos se confunde con la propia evolución del Derecho Internacional. Esta rama del derecho, surgido en la Paz de Westfalia, de 1648, al tiempo en que los Estados concentraban sus esfuerzos internacionales en la plenitud de la soberanía, de la independencia, integridad territorial y de la unidad política, se consolidó en razón de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), identificándose como un orden jurídico estrictamente volcado al relacionamiento, la coexistencia y cooperación entre Estados soberanos, siendo estos los únicos sujetos creadores y destinatarios del Derecho Internacional, en su inicio muy caracterizado como un derecho de la paz y de la guerra.

Con la preocupación de la comunidad internacional en la tutela de los derechos humanos, exactamente en razón de la necesidad de manutención de una paz internacional, aquellos derechos pasan a ejercer substanciales transformaciones en el Derecho Internacional tradicional, surgiendo, de ahí, el fenómeno que la doctrina moderna pasó a identificar como un orden constitucional internacional, y estableciendo el inicio de un Derecho Internacional contemporáneo.

CARRILLO SALCEDO<sup>17</sup>, al tratar de la evolución del Derecho Internacional clásico o tradicional al Derecho Internacional contemporáneo, identifica tres procesos

---

<sup>17</sup> CARRILLO SALCEDO, J. A., *Soberanía de los Estados y Derechos Humanos en Derecho Internacional Contemporáneo*, op. cit. pp. 13-4.



históricos muy bien definidos: el de la *institucionalización*, el de *socialización* y el de *humanización* del Derecho Internacional. El primero caracterizado por el desarrollo de las Organizaciones Internacionales, universales o regionales. El segundo, por las relaciones sociales y humanas que pasó a regular, y el tercero por la presencia de las personas y los pueblos como sujetos de derecho, papel que el Derecho Internacional tradicional reservaba exclusivamente a los Estados soberanos.

Momento histórico de relieve en el proceso de evolución de la “*cultura internacional de los derechos humanos*”<sup>18</sup> se registra en el siglo XIX. Hasta entonces, solamente una u otra situación muy rara, aislada y específica era conocida, como las garantías de libertad religiosa a ciertas minorías y la prohibición de la trata de esclavos, y que, en realidad, se conocen desde el año 539 a.C., como el “Cilindro de Ciro”, de Ciro II, rey persa.

Es en el siglo XIX “*cuando aparece la doctrina jusinternacional publicista en sentido propio, buscando la utilización de métodos y técnicas propios*”<sup>19</sup>, en “*rechazo de toda concepción ‘privatista’ del Derecho Internacional*”<sup>20</sup>, como ha apuntado el renombrado profesor FERNANDO MARIÑO. Surge en esta época, por primera vez, y por inspiración de Jeremias Bentham, en su libro *Principles of International Law*, publicado en 1843, la idea de creación de un Tribunal Internacional para solucionar las controversias de los Estados<sup>21</sup>. La nueva conciencia jurídica entre los Países, ahora más comprometidos con la paz internacional, favoreció a una conciencia internacional de los derechos humanos, como la protección a los extranjeros, la libertad de religión y el reproche a la esclavitud, esta última que “*se fue consolidando a lo largo del siglo XIX, aunque sólo a finales del mismo podría considerarse vigente con carácter general*”<sup>22</sup>.

---

<sup>18</sup> En expresión de Carlos Fernandes Liesa en “DESARROLLOS DOCTRINALES Y DE LA PRÁCTICA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XIX”. En: VVAA, *Historia de los Derechos Fundamentales, Tomo III, Siglo XIX, volumen III, El Derecho Positivo de los Derechos Humanos. Derechos Humanos y Comunidad Internacional*, Director PECES-BARBA MARTINEZ, G. y otros, Madrid, Dykinson S. L., 2007, p. 565.

<sup>19</sup> MARIÑO MENÉNDES, F., “LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DURANTE EL SIGLO XIX. MARCO GENERAL, DOCTRINAL Y NORMATIVO”, en VVAA, *Historia de los Derechos Fundamentales, Tomo III, Siglo XIX, volumen III*, op. cit., p. 525.

<sup>20</sup> Ibidem.

<sup>21</sup> Idem, p. 526.

<sup>22</sup> Idem, p. 538.

Es también al inicio del siglo XIX el primer intento en adoptarse un instrumento escrito de alcance internacional con enfoque en derechos humanos, como fue la condenación al tráfico de esclavos, y que se observó en los artículos adicionales al Tratado de Paz de París del 30 de mayo de 1814, firmado por Francia y Gran Bretaña<sup>23</sup>. En los años siguientes se observan diversos avances para acabar con la esclavitud, siendo registro marcante de aquel siglo la mencionada Acta General de Bruselas del 2 de julio de 1890, firmada por todos los países europeos, Congo, Persia, Turquía, Estados Unidos y Zanzíbar, por la cual, más allá del compromiso de oponerse a la esclavitud y al tráfico de esclavos en toda África, se previó la posibilidad de castigar penalmente a los responsables.

No bastase la condena a la esclavitud, FERNANDO MARIÑO apunta también como marco histórico relevante del siglo XIX el surgimiento de las primeras normas internacionales, contenidas en tratados, y que “*obligaban a las Partes a proteger determinadas clases de personas y grupos humanos*”, como fueron los Tratados sobre trato a extranjeros, a las minorías religiosas, a la humanización de las operaciones bélicas y la protección de las víctimas de la guerra, al asilo territorial a los delincuentes políticos y al derecho a una nacionalidad<sup>24</sup>. Sin embargo de tales avances, el Profesor MARIÑO advierte que “*aún la sociedad internacional en su conjunto se encontraba lejos de alumbrar un derecho Internacional de los derechos humanos en el sentido de la creación de normas, mecanismos, procedimientos e instituciones internacionales que otorgaran a la persona, o incluso a grupos humanos diferenciados, una cierta capacidad jurídica y de obrar en el Derecho Internacional*”<sup>25</sup>.

Así es que, aunque los derechos humanos en ámbito internacional no se tengan presentado de modo consistente en aquella época, hasta porque el Derecho Internacional se identificaba con una concepción eminentemente interestatal, no se puede negar, como ha afirmado el profesor CARLOS FERNANDEZ LIESA, que en el siglo XIX “*un elemento positivo del contexto será un ambiente progresivamente*

---

<sup>23</sup> Ibídem.

<sup>24</sup> Idem, p. 541.

<sup>25</sup> Idem, p. 543.

*favorable a la idea de los derechos humanos*<sup>26</sup>, pues “*El contexto es el de la Ilustración, y las primeras décadas de las revoluciones norteamericanas (1776) y francesa (1789), de tanta significación para los derechos humanos*”<sup>27</sup>.

Hasta el siglo XIX no había una “*sistematización del Derecho Internacional de los derechos humanos puesto que este no existía*”<sup>28</sup>. A partir de ahí es que surge el interés doctrinal y los estímulos de su práctica internacional, registrándose “*una labor de sistematización parcial en la que aparece el concepto de derechos humanos en el orden internacional y se empiezan a elaborar catálogos doctrinales de derechos humanos*”<sup>29</sup>.

De aquella época, y bajo el punto de vista doctrinario, un registro muy importante fue el tratamiento internacional de los derechos humanos desarrollado por PASQUALE FIORI<sup>30</sup>, y con énfasis al derecho de propiedad y de libertad. En su obra *Tratado Internacional público* llega a analizar los derechos y deberes del hombre en el escenario internacional, algo muy innovador para aquellos tiempos, pues los únicos protagonistas del Derecho Internacional eran los Estados.

También como registros concretos de la importancia del siglo XIX, y que en palabras de CARLOS FERNÁNDEZ LIESA se identifican como los “*antecedentes de la humanización del orden internacional*”<sup>31</sup>, se pueden citar prácticas internacionales en materia de derechos civiles y políticos, vinculadas a la abolición de la esclavitud, a la erradicación de la trata de blancas, a la libertad de conciencia y religión, a la protección a las minorías y de los extranjeros. Hay, todavía, prácticas en materia de derechos económicos, sociales y culturales, destacándose los primeros pasos a la protección al trabajo, a la protección de la salud y a los derechos culturales, en este caso, con la protección a la propiedad industrial, a las obras literarias, artísticas y al

---

<sup>26</sup> FERNANDEZ LIESA, C., “DESARROLLOS DOCTRINALES Y DE LA PRÁCTICA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL SIGLO XIX”. En: VVAA, *Historia de los Derechos Fundamentales, Tomo III, Siglo XIX, volumen III*, op. cit. , p. 552.

<sup>27</sup> *Ibidem*.

<sup>28</sup> *Idem*, p. 565.

<sup>29</sup> *Ibidem*.

<sup>30</sup> La mención a la obra y a la breve remisión al pensamiento de PASQUALE FIORI se encuentra en FERNANDEZ LIESA, C., “DESARROLLOS DOCTRINALES...”, op. cit., pp. 563-4.

<sup>31</sup> *Idem*, p. 566.

patrimonio común de la humanidad. Más allá, es del siglo XIX el inicio de la codificación del Derecho Internacional Humanitario, con la definición de límites de los medios de combate de modo a proteger las víctimas y asimilados<sup>32</sup>.

No obstante los avances de los derechos humanos en la escena internacional a partir del siglo XIX, hasta inicio del siglo XX todavía era inconcebible imaginarse el ser humano como protagonista del Derecho Internacional, y, consecuentemente, inadmisibile cualquier intento de tratar con énfasis a los derechos humanos en aquel ambiente jurídico, como han afirmado en 1905 dos de los autores más expresivos de aquella época, DIONIZIO ANZILOTTI y LASSA FRANCIS L. OPPENHHEIM<sup>33</sup>, exactamente por el hecho de que aquel derecho se limitaba exclusivamente a las relaciones entre los Estados y no entre las personas.

No se puede olvidar que las conquistas que se han alcanzado en la tutela internacional de los derechos humanos tuvieron fuerte influencia del reconocimiento de derechos humanos en el seno interno de los países. En 1628, con la *“Petición of Rights”*, en 1679, con el *“Habeas Corpus”* y en 1689 con la *“Declaración of Rights”*, los ingleses iniciaban la fase de positivación de aquellos derechos. Casi un siglo más tarde surgen los principales textos de derechos humanos, con el advenimiento de la Declaración de Virgínia, del 12 de junio de 1776, siguiendo la iniciativa francesa de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 26 de agosto de 1789. Todos estos instrumentos normativos son rasgos muy bien definidos en la tutela de los derechos individuales. A su vez, ya en el siglo XX, con el Convenio de Berna del 26 de septiembre de 1906, trazando el inicio del Derecho al Trabajo<sup>34</sup>, y con la Declaración Rusa de los derechos del pueblo trabajador y explotado, del 4 de enero de 1918, advienen los primeros intentos en la tutela de los derechos económicos, sociales y culturales. En el seno de la Sociedad de Naciones, tras la 1ª Guerra Mundial, pasan a ser muy perceptibles los esfuerzos en adoptar algunos instrumentos internacionales de positivación de los derechos humanos. VILLÁN DURÁN cita como

---

<sup>32</sup> Todos estos registros son apuntados por CARLOS FERNÁNDES LIESA, en “DESARROLLOS DOCTRINALES ...”, op. cit., pp. 566-574.

<sup>33</sup> Ídem, p. 14.

<sup>34</sup> MARIÑO MENÉNDIS, F., “LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DURANTE EL SIGLO XIX. MARCO GENERAL, DOCTRINAL Y NORMATIVO”. En: VVAA, *Historia de los Derechos Fundamentales*, ..., op. cit., p. 569.

iniciativas de aquella naturaleza, “*el régimen de mandatos, que impuso obligaciones a las potencias mandatarias en relación con la población de los territorios sujetos a mandato; la prohibición de la esclavitud; la protección de los refugiados; y la protección del trabajador, confiada a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a partir de su establecimiento en 1919 (fecha de su Constitución) y de 1944, en que se adopta la Declaración de Filadelfia, que consagra la libertad sindical como un principio constitucional de esa Organización*”<sup>35</sup>. Concomitantemente, las Constituciones de México de 1917, y la Constitución alemana de Weimar de 1919, son marcos relevantes de la preocupación de tutelar a los derechos humanos en el ambiente interno de los Estados, y pasando a disponer de aquella tutela como exigencia de las constituciones democráticas.

Estas experiencias internas, aunque muy discretas en un primer momento histórico, son las que vienen a inspirar una proyección más amplia de aquella tutela en el seno internacional. “*La idea del Estado social de Derecho, la de una justicia social que sólo alcanza coherencia plena si se consigue a escala universal, entre todos los hombres y todos los pueblos, al servicio del desarrollo integral y armónico de la persona, han penetrado cada vez más en el ámbito del derecho internacional, mitigando su tradicional individualismo y estatismo para apuntar a lo que se ha llamado la ‘humanización’ del derecho internacional, o también a un derecho internacional ‘social’ y personalista*”<sup>36</sup>.

La evolución del Derecho Internacional tradicional al Derecho Internacional contemporáneo trae, así, como divisor histórico, exactamente la presencia del hombre como sujeto de derechos, y, con un rasgo muy significativo, por la institución de sistemas de control y reacción de las violaciones a los derechos humanos, caracterizando una auténtica dimensión constitucional<sup>37</sup> del Derecho Internacional del tiempo actual.

---

<sup>35</sup> VILLAN DURÁN, C., *Curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, op. cit., p. 69.

<sup>36</sup> TRYUOL Y SERRA, A., *Los Derechos Humanos*, Tecnos, Madrid, 4ª ed., 2000, p. 44.

<sup>37</sup> En la expresión de CARRILLO SALCEDO, *Soberanía ...*, op. cit., p. 15.

Y bajo el punto de vista de la de reacción internacional contra las violaciones de derechos humanos, los primeros hechos concretos fueron más propiamente situados en el ámbito del derecho humanitario, en virtud de las atrocidades verificadas durante la Segunda Guerra Mundial, y que tuvo como respuesta la instalación del Tribunal de Nuremberg, en 1945, definido por EUA, Reino Unido, Francia y URSS, en el Acuerdo de Londres, del 08 de agosto de 1945, y del Tribunal Internacional de Tokio, instalado por el Comandante de las Fuerzas de Ocupación de Japón, para juzgar los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin embargo debido a las justificables críticas por falta de imparcialidad de aquellos tribunales, de restringirse al juzgamiento de los vencidos por los vencedores de aquel conflicto bélico mundial, no se puede negar que dichos Tribunales inauguraron una nueva fase de la tutela internacional de derechos en reacción a las graves violaciones a los individuos. Aunque dichos tribunales tuviesen nítida competencia criminal, muchos casos llevados a juzgamiento presentaron como motivación las graves violaciones de naturaleza discriminatoria, por intolerancia y crueldades, y que hoy guardan específica protección internacional en temas de las libertades individuales, de la tortura, temas raciales y de las minorías, todos que, a su modo, actualmente encuentran tutela internacional de naturaleza no-criminal, aunque en el seno interno de los países tales temas sean definidos como crímenes.

Fue con las reacciones a las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra que se inauguró, de un modo concreto, la protección supra-nacional del individuo, en cambio a la protección exclusivamente del Estado, como hasta entonces siempre había sido la característica del Derecho Internacional. El Tribunal de Nuremberg ha significado un poderoso impulso al movimiento de internacionalización de los derechos humanos<sup>38</sup>. Y un aspecto muy relevante en este escenario del Tribunal de Nuremberg es que el primer caso de movilización internacional en contra a las violaciones de derechos humanos se observa con la utilización de un mecanismo de reacción jurisdiccional, punto al cual se direcciona esta tesis.

---

<sup>38</sup> Esta es la observación de la Profesora FLÁVIA PIOVESAN, doctora por la Harvard Law School, al tratar de los precedentes históricos del proceso de internacionalización y universalización de los derechos humanos, en su libro intitulado *Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional*, Max Limonad, São Paulo, 2ª ed., 1997, pp. 131-173.

Antes del Tribunal de Nuremberg el registro que hay en el intento de dotar a la comunidad internacional de un mecanismo concreto de naturaleza jurisdiccional internacional en respuesta contra las violaciones a los derechos humanos, se ha observado en 1872, con la propuesta de creación de un tribunal internacional permanente para juzgar los responsables de las violaciones de la Convención de Ginebra de 1864 relativa al tratamiento de los soldados heridos y enfermos en el escenario de guerra. La propuesta inauguraba el principio de la responsabilidad penal internacional del individuo, es decir, trataba de los crímenes de trascendencia internacional.

La definitiva tutela internacional de los derechos humanos viene a consolidarse con la Carta de las Naciones Unidas. En palabras de TRUYOL Y SERRA, *“cualquiera que sea el papel que quepa asignar a la regulación de determinados derechos de la persona humana en el pasado (libertad religiosa y de conciencia, prohibición de la esclavitud, derechos laborales, etc.), el hecho es que hasta la Carta de la Organización de las Naciones Unidas no encontramos un reconocimiento internacional de principio de los derechos humanos. Éste es indiscutiblemente uno de los méritos históricos de la Carta”*<sup>39</sup>.

Es con la Carta que se va a tener la preocupación de una “efectividad” en aquella tutela, aunque destacadamente concentrada en la “promoción” de los derechos humanos, y con el compromiso de adoptaren medidas para realización de su respeto universal, consonante sus artículos 55 y 56, incluso no pudiendo los Estados invocar la disposición del artículo 2º, apartado 7º, de la Carta, y que trata de la imposibilidad de intervención de la ONU en los asuntos de la jurisdicción interna de los Estados. Su contenido dispone sobre el *“desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”*, conforme enunciado en su artículo 1.3, sobre *“el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades”*, artículo 55.c, y sobre *“promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer*

---

<sup>39</sup> TRUYOL Y SERRA, A., *Los Derechos Humanos*, op. cit., p. 37.

*distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, así como el reconocimiento de la interdependencia de los pueblos del mundo”, artículo 76.c.*

Dato interesante a señalar, y como ya registrado en la introducción de esta tesis, es que en el primer esbozo del Estatuto de la Organización de las Naciones Unidas, por el texto de la Conferencia de Dumbarton Oaks, en octubre de 1944, no hubo referencia a los derechos humanos, por expresa resistencia de las potencias mundiales. El avance de la tutela internacional de los derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas se ha verificado en la Conferencia de Chapultepec, en 1945, y se ha confirmado en el texto final de la Conferencia de San Francisco, aunque no como principios sino como propósitos de la ONU.

Expresión mayor de la internacionalización de la tutela de los derechos humanos se observa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, primer documento de derechos humanos originario de una institución internacional, la ONU, que viene a llenar la omisión de la Carta de las Naciones Unidas y que no definió el que serían y cuales serían los derechos reconocidos como derechos humanos. La Declaración, disponible en 364 traducciones<sup>40</sup> – idiomas y dialectos –, tiene la virtud de la “*interpretación auténtica de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos*”<sup>41</sup> e “*interpretación legítima de las normas de la Carta relativas a la obligación jurídica de los Estados de promover la observancia de los derechos humanos*”<sup>42</sup>, incluso como “*un elemento clave de la estructura constitucional del Derecho internacional contemporáneo*”<sup>43</sup>.

Interesante apuntar que desde los debates iniciales de elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos se definieron algunas posiciones muy claras con respecto a la disposición de los Estados en no asumir compromisos

---

<sup>40</sup> Según informaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en datos de noviembre de 2009, disponible para consulta en la página web <<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspx>>.

<sup>41</sup> CARRILLO SALCEDO, *Soberanía...*, op. cit., p. 69.

<sup>42</sup> Ídem, p. 70, haciendo referencia al manifiesto de Sir Humphrey Waldock, ex-Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Internacional de Justicia.

<sup>43</sup> Ídem, p. 71.



jurídicos en relación a la tutela internacional de los derechos humanos como tampoco a poner en práctica las obligaciones asumidas. Tanto que, entre los Estados partidarios de la Declaración ser un instrumento jurídico vinculante o ser un instrumento sin imponer obligaciones jurídicas, ha prevalecido esta última con más características de un “*manifiesto programático*”, en la expresión de CARRILLO SALCEDO<sup>44</sup>.

A pesar de esto, es con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se fija el marco más concreto a caracterizar la necesidad de la protección a los derechos humanos ultrapasar la preocupación interna de los Estados, debiendo establecerse como una preocupación más allá de las fronteras, como un auténtico esfuerzo de atención de la comunidad internacional.

Y aunque la Declaración Universal no se identifica como un verdadero instrumento de naturaleza jurídica, no se puede negar que “*es indudablemente la expresión de la conciencia jurídica de la humanidad, representada en la ONU y, como tal, fuente de un ‘derecho superior’, un higher law, cuyos principios no pueden desconocer sus miembros. Pero es admisible incluso afirmar que la Declaración no carece de valor jurídico-positivo estrictamente hablando*”<sup>45</sup>.

El cartel normativo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se complementa con los Tratados de Derechos humanos, auténtico desarrollo normativo de la Carta de las Naciones Unidas, y expresiva fuente normativa del Derecho Internacional contemporáneo. De tal orden se expande la normatización internacional de los derechos humanos en las últimas seis décadas, con más de 140 tratados internacionales y sus protocolos, tanto en el seno universal como regional, que la doctrina internacionalista pasa a identificar todo ese contenido normativo como un auténtico “*Código Internacional de los Derechos Humanos*”, a imponer “*obligaciones jurídicas concretas para los Estados Partes en los mismos*”<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> Ídem, p. 50.

<sup>45</sup> TRUYOL E SERRA, A., *Los Derechos Humanos*, op. cit., p. 42.

<sup>46</sup> Esta es la posición defendida por VILLÀN DURÁN, C., *Curso ...*, op. cit., p. 209.

De los instrumentos normativos internacionales algunos se destacan como marco jurídico-político actual de la comunidad internacional, y así son por su relevancia como reacción a las graves y persistentes violaciones de derechos humanos. La propia Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos-OACNUDH los admite como “*los principales tratados internacionales de derechos humanos*”, siendo estos la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Convención sobre los Derechos del Niño; Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumano o Degradantes; Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, y, la más reciente, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada<sup>47</sup>.

Este conjunto normativo derivado de la preocupación con la tutela de los derechos humanos se completa aún con los instrumentos constitutivos de algunos de

---

<sup>47</sup> La definición de este cartel de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos se encuentra disponible en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, específicamente en <<http://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiessp.pdf>>, con el documento identificado como “*Publicación de las Naciones Unidas*”, “*número de venta: S.06.XIV.2*”, ISBN 92-1-354091-4”, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2006.

los organismos internacionales especializados de las Naciones Unidas, como la Organización Internacional del Trabajo-OIT<sup>48</sup>, de 1919, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO, de 1945, la Organización Mundial de la Salud-OMS, de 1946, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación-FAO, de 1945.

En este proceso histórico evolutivo de la protección internacional de los derechos humanos es muy relevante apuntar también, y ahora en un auténtico movimiento inverso, la influencia que el derecho internacional de los derechos humanos pasó a ejercer en el derecho interno de los países, en muchos casos con fuerte destaque de los derechos humanos en las Constituciones nacionales, principalmente en los países occidentales.

Sobre eso, alias, desde el inicio de sus actividades en 1946, la ONU consideró la necesidad de instalar en los países instituciones nacionales envueltas en la protección y aplicación de los derechos humanos

Como registro de las continuas labores que se han emprendido para que los países asuman sus compromisos en la tutela de derechos humanos, son ejemplos de este momento histórico algunos instrumentos normativos de la Asamblea General de Naciones Unidas, de ellos pudiéndose destacar los que se han convenido denominar “Reglas de Beijing”, de 1985, “Reglas de Tokio”, de 1990, “Directrices de RIAD”, de 1990 y “Principios de París”, de 1991<sup>49</sup>.

Es ejemplo destacable, también, la Declaración y el Programa de Acción de Durban, adoptada en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, de 2001<sup>50</sup>, celebrada en

---

<sup>48</sup> Se puede mencionar, por ejemplo, el Convenio N° 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso, de 1930; Convenio N° 105 de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso, de 1957; Convenio N° 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo, de 1973; Convenio N° 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, de 1999; Convenio N° 183 de la OIT sobre la protección de la maternidad, de 2000.

<sup>49</sup> Más adelante, en la Segunda Parte de la tesis, cuando tratar de la Asamblea General, habrá una breve exposición de los instrumentos mencionados.

<sup>50</sup> Realizada del 31 de agosto a 8 de septiembre de 2001. El contenido de la Declaración y del Programa de Acción se puede ver en el documento de la Asamblea General de Naciones Unidas

Durban, Sudáfrica. Aunque sus disposiciones no sean vinculantes en el ámbito legal, tienen un fuerte valor moral con el objetivo de proponer medidas concretas para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, en el plano nacional, regional e internacional, con el reconocimiento de que el racismo es una inquietud mundial, y que para combatirlo se debe emprender un esfuerzo universal<sup>51</sup>.

A propósito de la inspiración internacional en el derecho nacional, es muy importante señalar que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos ha dispuesto, por sus artículos 2.2 y 2.3, cuanto al compromiso de los Estados partes en adoptaren las medidas oportunas para implementar el Pacto en sus ordenamientos jurídicos internos y a garantizar que las violaciones a los derechos y libertades reconocidos en el Pacto puedan encontrar la protección por una autoridad competente incluso con la posibilidad del recurso judicial.

Esta protección judicial, a su vez, se traduce como importante tema en los avances de la tutela de los derechos humanos y directamente involucrado con la tutela internacional jurisdiccional objeto de esta tesis. Tras la experiencia de los tribunales internacionales criminales de Nuremberg y de Tokio, el trazo más destacable y significativo de la existencia de un modelo jurisdiccional de protección de los derechos humanos se ha observado con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La necesidad de disponer de una garantía jurisdiccional surgió en 1948, en el Congreso celebrado en la Haya, por iniciativa del Movimiento Europeo, que, en su *“Mensaje a los europeos”* declaró la necesidad de disponer de *“un Tribunal de Justicia capaz de aplicar las sanciones necesarias para hacer respetar la Carta”*<sup>52</sup>.

---

A/CONF.189/12, disponible en <<http://www.un.org/spanish/comun/docs/index.asp?symbol=A/CONF.189/12&referer=http://www.un.org/spanish/durbanreview2009/ddpa.shtml&Lang=S>>.

<sup>51</sup> Con el objetivo de evaluar el avance logrado respecto a las metas que se establecieron en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, del 20 al 24 de abril de 2009 se celebró en Ginebra, Suiza, la Conferencia de Examen de Durban.

<sup>52</sup> CARRILLO SALCEDO, J. A., *Soberanía ...*, op. cit., p. 127.

Este modelo de un tribunal internacional de derechos humanos así, se hace realidad con la instalación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 1959<sup>53</sup>. En secuencia, en el año de 1979 pasa a funcionar el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. Poco más de dos décadas después, en 2004, se instala el Tribunal Africano de Derechos Humanos.

Importante señalar que en 1993, en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, se ha planteado la idea de un Tribunal Internacional Universal de Derechos Humanos, y que, según CARRILLO SALCEDO, *“apenas fue tomada en consideración por la Conferencia, que se limitó a recomendar el establecimiento de un Alto Comisionado de Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos humanos”*<sup>54</sup>.

La instalación de tribunales de derechos humanos son, así, la propia respuesta de la comunidad internacional con relación a la necesidad de dotar a la protección internacional de los derechos humanos de mecanismos más adecuados al enfrentamiento de sus graves violaciones, incluso caracterizándose esta naturaleza jurisdiccional como *“piezas fundamentales de los sistemas de garantía y control”* del sistema regional de protección de los derechos humanos<sup>55</sup>.

La protección de naturaleza jurisdiccional y la posibilidad de una demanda individual y directa de la víctima resultan, indudablemente, en las dos situaciones más avanzadas en el contexto de la efectividad de protección a los derechos humanos. Y cuando conjugadas aquellas situaciones, es decir, cuando la defensa internacional de los derechos humanos se encuentra asegurada con la posibilidad de la demanda individual a un órgano jurisdiccional internacional, sin duda se ha alcanzado el más alto nivel de protección y con la real posibilidad de admitir la efectividad en aquella protección, evidentemente configurada con la correspondiente respuesta eficaz a la trasgresión sufrida.

---

<sup>53</sup> Ha sido instalado en 20/4/1959.

<sup>54</sup> CARRILLO SALCEDO, J. A., *Soberanía ...*, op. cit., p. 111.

<sup>55</sup> Idem, p. 126.

Así, de concreto, y resumidamente, con el pasar del tiempo la protección internacional de derechos humanos se puede identificar con las siguientes conquistas:

#### NO-JURISDICCIONAL

- 1 – solamente los Estados pueden accionar contra otro Estado en defensa de los derechos de sus propios ciudadanos, por medio de la protección diplomática;
- 2 – el Estado puede accionar contra otro Estado en defensa de una víctima ante un órgano internacional no-jurisdiccional (este cambio se ha dado con el Convenio Europeo de DDHH, de 1950, superando, así, la exigencia de la víctima ser nacional del Estado reclamante, como se había afirmado en relación con la protección diplomática, en el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, el 30 de agosto de 1924, y en el Tribunal Internacional de Justicia, el 6 de abril de 1955 y el 5 de febrero de 1970, relativas a los Asuntos *Nottebohm x Barcelona Traction*<sup>56)</sup>
- 3 – la víctima puede accionar contra un Estado, o su propio Estado, ante un órgano no-jurisdiccional (En la Comisión Europea de DDHH, conforme Convenio Europeo DDHH, de 1950<sup>57</sup> y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 1965, en conformidad con la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria de Rio de Janeiro<sup>58)</sup>;
- 4 – a cualquier persona sometida a la jurisdicción de un Estado-parte le es atribuida la posibilidad de denunciar contra un Estado en defensa de una víctima en un órgano no-jurisdiccional (es la denominada “*actio popularis*”, reconocida en el seno de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, con cauce en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 44<sup>59</sup>, en vigor desde 1978, y en los sistemas extraconvencionales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas);

---

<sup>56</sup> Ídem, p. 129.

<sup>57</sup> Ídem, p. 130.

<sup>58</sup> Ídem, p. 134.

<sup>59</sup> “Artículo 44: *Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte*”.

## JURISDICCIONAL

- 5 – el Estado-Parte de la víctima u otro Estado-parte, así como un órgano de protección internacional, puede accionar al Estado-Parte violador en un órgano jurisdiccional internacional competente;
- 6 – la propia víctima de un Estado-parte puede accionarlo ante un órgano jurisdiccional internacional competente de protección de los derechos humanos (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el Protocolo 11, de 11/5/94, en vigor desde el 1 de noviembre de 1998);
- 7 – cualquier persona o grupo de personas sometidas a la jurisdicción de un Estado-Parte puede accionar contra un Estado en defensa de una víctima en el órgano jurisdiccional internacional competente de protección de los derechos humanos (“actio popularis”).

En suma, se tiene como sucesión histórica en la titularidad de buscar la protección internacional de los derechos humanos, en las situaciones específicas de los Tratados que se los admita, el propio país de la víctima; cualquier país; una organización internacional de protección a los derechos humanos; la víctima y, por fin, en una etapa más avanzada, una tercera persona en nombre de la víctima.

Es notorio reconocer, entonces, los expresivos avances que los derechos humanos han implementado en el seno del Derecho Internacional, así como los avances que la propia tutela de los derechos humanos han observado en las últimas décadas. Estos avances, alias, solamente no son más contundentes en virtud de la posibilidad de los Estados salvaguardaren sus competencias internas, utilizando el mecanismo de las “reservas” e impidiendo que los tratados de derechos humanos se convaliden como la expresión indudable, de carácter general, del intento internacional de definir un cartel mínimo e inderogable de aquellos derechos.

Y mismo que parte importante de la doctrina internacionalista no admita las reservas en los tratados internacionales de derechos humanos, sólo en 4 de ellos se observan su prohibición, siendo dos en ámbito universal, y dos en el ámbito europeo, respectivamente: la Convención del 7 de septiembre de 1956, complementaria del Convenio sobre la Esclavitud; la Convención de la UNESCO en la parte que trata de

la lucha contra la discriminación en el seno de la enseñanza, del 14 de diciembre de 1960; el Protocolo adicional número 6, relativo a la abolición de la pena de muerte, del 28 de abril de 1983, en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y, el Convenio europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, del 26 de noviembre de 1987<sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup> CARRILLO SALCEDO, J. A., *Soberanía...*, op. cit. , pp. 98-99.



## **II – CAMINOS A LA REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS**

La vía que lleva a los derechos humanos no es una vía de única mano, que sigue en un solo sentido, con un flujo permanente y seguro hacia un objetivo común. Es una vía conturbada, con muchas variaciones, desvíos, intercesiones y conflictos, propia de la variedad de los intereses de los pueblos, y que muchas veces poco convergen y mucho divergen.

Por eso, cada fase o etapa de las iniciativas de tutela de los derechos humanos se identifica como una estructura muy particular y que, aunque interdependientes, no encuentran soluciones comunes al enfrentamiento de sus necesidades. Cada cual demanda un análisis propio, como la que es objeto de este trabajo, al tratar del tema específico de la protección internacional de los derechos humanos en el plan de la efectividad.

En las palabras iniciales de este trabajo, se ha procurado utilizar con cierto rigor técnico las expresiones “tutela”, “defensa”, “promoción”, “protección”, “control”, “vigilancia” y “garantía”. Aunque tales expresiones puedan pasar desapercibidas con relación al contenido específico que denotan, es sumamente importante para los objetivos de esta tesis que dichos términos sean muy bien aclarados, pues, en realidad, en algunos casos presentan ideas distintas y bien definidas.

Hablar de tutela de los derechos humanos significa hablar de su defensa, en un contexto donde convergen todas las medidas estructurales e instrumentales para viabilizar su realización. La tutela o defensa de los derechos humanos se identifica así con las medidas puestas en práctica al alcance de la realización de los derechos humanos. Esta tutela o defensa, a su vez, se manifiesta por dos iniciativas propias e inconfundibles: la promoción y la protección.

Con la promoción se entienden los intentos de crear y expandir la cultura de observancia de los derechos humanos. La cultura del incentivo a las prácticas de interacción que favorezcan dichos derechos como valores inalienables, y que lleven a la idea universal de su respeto, su cumplimiento y su no-violación. Con la

promoción se alude a la situación previa a los derechos humanos concretamente realizados.

A su vez, la protección, que es donde se concentrará este trabajo, es la situación que deviene del fracaso de la promoción de los derechos humanos, lo que ha impedido su efectiva realización. Es decir, los derechos humanos no han sido satisfechos y por ello se exige su protección.

En cuanto a la protección, su incidencia se observa por dos iniciativas distintas e inconfundibles: el control o vigilancia, y la garantía.

Controlar y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos es adoptar medidas que conduzcan a su práctica, o que impidan su violación. Es estar atento a las situaciones que no respeten dichos derechos, creándose una estructura que permita actuar tanto en forma preventiva como, posteriormente, remediando la violación.

Cuanto a la garantía, se identifica con la fase de la violación consumada, o su inminencia, y cuyo reconocimiento de la situación violadora implica imponer medidas a su cese o la reparación del derecho violado, medidas éstas de naturaleza coercitiva y que llevan a su realización.

En este enfoque de la garantía del cumplimiento de los derechos humanos es que va a centrar el objetivo y la finalidad de esta tesis, y de modo a proponer un mecanismo de respuesta el más eficiente posible a la violación cometida, y que es la reacción judicial. Y esto porque las iniciativas que buscan garantizar una respuesta efectiva a las violaciones de derechos humanos son tan necesarias e indispensables como las propias declaraciones de derechos, sin las cuales no se puede considerar completo el proceso de reconocimiento de los derechos humanos, ante el riesgo de resultar derechos en vacío. Sólo con las garantías bien definidas para asegurar la realización de los derechos humanos es que se puede reconocer el atributo de seguridad de su cumplimiento y, consecuentemente, hablar de su efectividad.

### **III – EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS**

El presente estudio tiene por foco principal la cuestión de la efectividad de los derechos humanos, a modo de reflexionar sobre su aptitud en alcanzar los propósitos de justificación de su reconocimiento.

El plan de la efectividad se impone como cuestionamiento permanente a la propia concretización de los derechos humanos. Es, en realidad, un discurso actual, presente, que se fija como paradigma de una sociedad internacional justa, y que no se puede renegar a una discusión en segundo plano.

No hay otro motivo de proponer repensar la actual estructura de protección internacional de los derechos humanos y que no sea estrictamente basado en el tema de la efectividad, que, a propósito, se presenta como una exigencia de la Carta de Naciones Unidas, al disponer, por su artículo 55. c *“el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades”*.

Así, conocer y evaluar el funcionamiento de la estructura actual de protección internacional de los derechos humanos son iniciativas que traducen algunos pasos a la reflexión de la efectividad.

Y el intento de repensar la estructura actual de defensa internacional de los derechos humanos, con la intención de alcanzar una mayor efectividad, es tarea que no se puede considerar de las más fáciles, más allá cuando los propios institutos, principios y valores del derecho internacional, es decir, la propia voluntad colectiva internacional, muchas veces parece sucumbir y se reduce a la voluntad de algunos pocos, como si este estado de cosas ya fuera una marcha irreversible, al menos para las actuales generaciones.

Ejemplo de esta dificultad de extraer más grande efectividad a los derechos humanos viene de su propia y actual tutela internacional, con la resistencia de

muchos Estados en asumir compromisos jurídicos en relación a la Declaración Universal de Derechos Humanos, *“ni, menos aún, respecto de los mecanismos internacionales de protección y puesta en práctica de las obligaciones asumidas”*<sup>61</sup>, hasta porque, incluso para algunos, la propia Declaración Universal resulta en un documento que más se caracteriza como un *“manifiesto programático”*<sup>62</sup>.

Por ello, en el desarrollo de este trabajo no se descuidan los nuevos desafíos del derecho internacional, como demuestran los recientes hechos de la crisis en Irak, en que la autoridad de las Naciones Unidas se ha puesto a prueba, principalmente por reconocerse que sus mecanismos de actuación se encuentran desfasados. Como ha advertido VLADIMIR PUTIN, en 2003, como Presidente de Rusia, al manifestarse en una conferencia en la Universidad Estatal de San Petersburgo, en la cual le acompañaban sus homólogos alemán y francés, Gerhard Schröder y Jacques Chirac, *“En los últimos tiempos se han puesto de manifiesto muchas imperfecciones en el sistema de derecho internacional vigente, y también contradicciones internas que, a mi parecer, son potencialmente muy conflictivas. (...) La ineficacia y el desfasase de los mecanismos legales puede tener serias consecuencias. (...) Si en su momento se hubieran elaborado mecanismos legales precisos para resolver las crisis, se habría podido encontrar resolución más efectiva de los problemas mundiales más complicados, y, lo que es importante, sin salir del marco legal. (...) La eficacia del derecho internacional depende de la comprensión común de los valores de la democracia y el humanismo, y de la voluntad del Estado y los políticos de defender y promover estos valores, usando los mecanismos reconocidos del derecho internacional. (...)”*. Es *“extremadamente importante reforzar el papel de la colaboración multilateral de los Estados, que hasta ahora ha sido el fundamento de la estabilidad y la seguridad”*<sup>63</sup>.

Específicamente en temas de derechos humanos, de igual modo hechos recientes también traducen y refuerzan la fragilidad de la estructura internacional de su defensa, como pueden retratar, entre tantas otras, la situación americana de los

---

<sup>61</sup> Ídem, p. 50.

<sup>62</sup> Ibidem.

<sup>63</sup> Conforme el periódico “El País”, de 13 de abril de 2003, p. 8, en materia intitulada “Putin cree que los mecanismos de la ONU están desfasados”.

musulmanes detenidos en “Guantánamo”, o la situación cubana por la condena a muerte a tres de sus ciudadanos disidentes, llevada a cabo en un juicio sumario y definitivo de seis días<sup>64</sup>, en ambos los casos bajo el argumento de violación a la seguridad nacional. Estos dos hechos, a exponer en el escaparate de transgresiones a los derechos humanos dos naciones con definidas y distintas tradiciones democráticas, bien revelan que el problema de la efectiva observancia al cumplimiento de los derechos humanos no conoce fronteras, distingue culturas o selecciona naciones, siendo muy amplio y más actual que nunca.

Así, como es sabido que la formulación normativa de una situación – su definición, alcances subjetivos y objetivos, sanción – , impone la exigencia de una conducta – activa o pasiva; de obligaciones o prohibiciones; de prestaciones o abstenciones – para el cumplimiento de la propia formulación, es sabido también que esta iniciativa no es suficiente para concretar el derecho, es decir, para que se pueda afirmar que se ha alcanzado la efectividad de la declaración de cierta situación protegida jurídicamente. Como ha señalado DIETER GRIMM, Juez del Tribunal Federal Constitucional de Alemania, la efectividad de los derechos fundamentales no se alcanza con la mera vigencia de la norma, y por tanto, no se resuelve exclusivamente en el ámbito del sistema jurídico, transformándose en el problema de una verdadera política de los derechos fundamentales<sup>65</sup>.

En esta preocupación política en la cual debe engendrarse el tema de los derechos humanos, se impone dar especial atención a los mecanismos de protección, ya que sin la eficacia de dichos mecanismos las declaraciones caen en el vacío, son meras declaraciones sin fuerza de cumplimiento, o como ha afirmado LUIGI FERRAJOLI, al tratar de los derechos y sus garantías, la ausencia de éstas implica negar la propia existencia de aquellos, es decir, *“la ausencia de las correspondientes garantías equivale, en cambio, a una inobservancia de los derechos positivamente*

---

<sup>64</sup> Las ejecuciones se produjeron el 11 de abril de 2003.

<sup>65</sup> La remisión a DIETER GRIMM es presentada en análisis crítico sobre el reconocimiento de derechos subjetivos a prestaciones sociales, por SARLET, I. W., *“A Eficácia dos Direitos Fundamentais”*, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2001, p. 325.

*estipulados (...)*<sup>66</sup>. Sobre la cuestión, tampoco está demás apuntar la advertencia de NORBERTO BOBBIO, cuando afirma que las cartas de declaración de derechos del hombre en la sociedad internacional no son más que meras propuestas o directivas para una futura legislación, y que sólo pueden ser consideradas “cartas de derecho” cuando el sistema internacional implanta los órganos y dispone de los poderes necesarios para hacerlos valer siempre que fueran violados<sup>67</sup>.

No se quiere afirmar con estos breves comentarios que los derechos humanos reconocidos se encuentren huérfanos de los correspondientes mecanismos de protección, sino que lo que importa saber es en qué medida estos mecanismos se presentan razonablemente útiles para aquella protección y en qué medida se los puede considerar satisfactorios a sus objetivos.

Y, desde luego, en una primera constatación, fácil es notar que la protección internacional a los derechos humanos no se realiza de modo equilibrado entre las más diversas regiones, pueblos y culturas del mundo, siendo claramente perceptible, como demostrará el contenido de esta tesis, que en este tema se pueden identificar varios mundos, teniendo en cuenta la enorme distinción del tratamiento que aquella protección observa, auténtico “*apartheid global*”, en palabras del Profesor portugués JOSÉ MANUEL PUREZA<sup>68</sup>. En este aspecto, basta apuntar la existencia de la protección internacional, de naturaleza regional y de carácter jurisdiccional, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, y, más recientemente, por el Tribunal Africano de Derechos Humanos, más allá de toda la estructura no-contenciosa o cuasi contenciosa de que disponen Europa y América, y que revelan el importante paso que han conquistado en esta cuestión. Pero, no basta reconocer los avances de la protección de los derechos humanos en ciertas sociedades. Es necesario ir más adelante, mirar hacia los pueblos y la gente que no dispone de idéntica estructura protectora, y hacer un llamamiento a la responsabilidad de la comunidad internacional para que camine en

---

<sup>66</sup> FERRAJOLI, L., *Derechos y Garantías – La ley del más débil*, 2ª edición, traducción Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi, Trotta, Madrid, 2001, p. 43.

<sup>67</sup> BOBBIO, N., *A Era dos Direitos*, op. cit., p. 82.

<sup>68</sup> PUREZA, José Manoel, *O patrimônio Comum da Humanidade: Rumo a um direito internacional de solidariedade?*, Coimbra, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1995, p. 15.

la búsqueda de soluciones para aminorar esta distinción en la defensa de los derechos humanos a personas de diferentes naciones.

Cuanto a ello no se puede olvidar el “*escepticismo*” y “*desaliento*” del hombre de la calle por el notorio contraste que existe entre las innumerables declaraciones sobre derechos humanos y la realidad jurídica de los Estados-miembros<sup>69</sup>.

En este tema, no es razonable admitir la constatación de individuos de primera y de segunda categoría, es decir, aquellos que disponen de un sistema de protección jurisdiccional supranacional, y otros que no lo disponen. Enfocar el problema y encontrar alternativas para ajustarlo es una tarea indudablemente desafiante, aún más cuando “*lo que acontece, entre otras muchas cosas, es que a veces creemos que los derechos humanos son míos, pero no de los otros, que se repliegan en mi mismidad y que no circulan en la nostridad (...) que debe haber derechos porque el hombre – cada quien y todos – convive societariamente, y que los derechos del hombre son derechos de el hombre en sociedad; los míos iguales a los de mis prójimos*” como ha advertido GÉRMAN J. BIDART CAMPOS<sup>70</sup>.

Pensar y luchar por la efectividad de la protección de los derechos humanos es pensar y luchar por la credibilidad de estos derechos que, salvo algunas raras excepciones, encuentran aceptación por la comunidad internacional. Es admitirlos de verdad, y no como mera retórica de buenas intenciones, bajo pena y grave riesgo de aquellos derechos se convirtieren en privilegio de algunos pocos.

Es en el contexto de la efectividad que se impone avanzar en las conquistas de los derechos humanos, de modo que los hombres dispongan de garantías para reaccionar con eficacia contra las violaciones de aquellos derechos.

---

<sup>69</sup> Conforme ha destacado el Profesor y Magistrado JOSÉ MANUEL BANDRÉS, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y Presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, haciendo referencia a TRUYOL Y SERRA, en el texto “Reflexiones sobre el paralelismo entre la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa”. En: VVAA, *La Protección Internacional de los Derechos Humanos a los Cincuenta Años de la Declaración Universal*, Tecnos, Madrid, 2001, p. 48.

<sup>70</sup> En el prólogo de ALBANESE, S., *Promoción y protección internacional de los derechos humanos*, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 1992, p. 10.

#### **IV – LA COMUNIDAD INTERNACIONAL**

Un trabajo académico-científico, por su propia naturaleza, no admite manejar conceptos vagos, imprecisos o abiertos, para no correr el riesgo de la mala comprensión y la posible contaminación del contenido mismo del trabajo. Más allá, es necesario que su propuesta resulte muy bien definida para evitar impresiones equivocadas de lo que se quiere decir y de lo que efectivamente se ha conseguido abordar.

En muchos pasajes de esta tesis se hará mención a los términos “comunidad internacional”, “sociedad internacional” o “consciencia universal”, comúnmente usados en Derecho Internacional Público, incluso cuando se trata de los derechos humanos.

Así se torna necesario esclarecer a respecto de que se trata. Y para tener una buena y adecuada idea de lo que significa “comunidad” o “sociedad” internacional, es oportuno acordar las lecciones del Profesor FERNANDO M. MARIÑO MENÉNDEZ<sup>71</sup>, que, al discurrir sobre la comunidad internacional contemporánea, busca definir aquellas expresiones como *“la formación social concreta en que actualmente se estructura la convivencia de todos los pueblos, personas y entidades políticas y grupos transnacionales de poder en el seno de la humanidad”*, teniendo en los Estados su principal base de formación y constitución, y que encuentra en el Derecho Internacional el ambiente de sus relaciones. Según el Profesor MARIÑO, *“puede afirmarse que la Comunidad Internacional ‘gobierna’ determinados asuntos o ámbitos públicos que interesan a toda la Sociedad Internacional y, en ese sentido global, a la Humanidad misma”*.

Como refuerzo al entendimiento de lo que es “comunidad internacional”, CÁSTOR M. DÍAZ BARRADO señala que dicha expresión incluso significa algo más que la noción de humanidad, y, en realidad supondría los elementos solidarios que

---

<sup>71</sup> El Profesor FERNANDO M. MARIÑO MENÉNDEZ ofrece en la exposición intitulada “La Comunidad Internacional Contemporánea. La Sociedad Internacional como Base Social del Derecho Internacional”, algunas ideas cuanto a la comprensión de lo que es “Comunidad Internacional”, conforme su libro *Derecho Internacional Público (Parte General)*, 4ª edición, Editorial Trotta, Madrid, 2005, p. 19/20.



existen en ella, con la aceptación de principios y normas de intereses colectivos, o “ideas-fuerza”, traducidos en un código de valores mínimos y comunes, como son la paz, la democracia, el desarrollo y los derechos humanos<sup>72</sup>.

En este tema CANÇADO TRINDADE se refiere a la “*consciencia jurídica universal*”, correspondiente a la *opinio juris communis*, y cuya existencia constituye “*la fuente material por excelencia (más allá de las fuentes formales) de todo el derecho de gente, responsable por los avances del género humano no sólo en el plano jurídico sino también en el espiritual*”<sup>73</sup>, incluso recordando que algunos tratados internacionales hacen referencias a la conciencia universal, como es el caso de la Convención contra el Genocidio, de 1948, que en su preámbulo se refiere al “*espíritu*” de las Naciones Unidas; como en el preámbulo del Estatuto de Roma de 1998 del Tribunal Penal Internacional, que se refiere a la “*consciencia de la humanidad*” y como también se tiene en el preámbulo de la Convención Interamericana de 1994 sobre la Desaparición Forzada de Personas, que menciona la expresión “*conciencia del hemisferio*”<sup>74</sup>.

La existencia de una llamada “comunidad internacional” no es de aceptación unánime en el Derecho Internacional<sup>75</sup>. Ni por ello se puede dejar de ser concebida como una realidad “*socio-jurídica*”<sup>76</sup>, incluso “*progresivamente política*”<sup>77</sup> con algunas normas de derecho internacional y mismo la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia se refiriendo a ella para expresar el alcance de algunas situaciones<sup>78</sup>.

En el primer caso, se puede citar la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General que, al tratar de la igualdad soberana, remite al entendimiento de que “*Todos*

---

<sup>72</sup> DÍAZ BARRADO, C. M., *El Derecho Internacional del Tiempo Presente*, op. cit., pp. 116/130.

<sup>73</sup> “Reflexiones sobre el Desarraigo como Problema de Derechos Humanos frente a la Conciencia Jurídica Internacional”, en CANÇADO TRINDADE, A. A., RUIZ DE SANTIAGO, J., *La Nueva Dimensión de las Necesidades de Protección del Ser Humano en el Inicio del Siglo XXI*, 2ª ed., Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 2003, p. 68.

<sup>74</sup> Idem, p. 76/7.

<sup>75</sup> Conforme O. CASANOVAS Y LA ROSA, citado por DÍAZ BARRADO, *El Derecho Internacional ...*, op. cit., p. 124.

<sup>76</sup> MARINO MENÉNDEZ, F. M., *Derecho Internacional Público*, 5ª edición, op. cit., p. 22.

<sup>77</sup> Idem, p. 35.

<sup>78</sup> Los ejemplos que se siguen son descriptos por CASTOR MIGUEL DÍAZ BARRADO, en *El Derecho Internacional ...*, op. cit., pp. 126-130.

*los Estados gozan de igualdad soberana. Tienen derechos y deberes iguales y son miembros iguales de la Comunidad Internacional (...)*”. También se menciona la “comunidad internacional” en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, al disponer sobre las normas imperativas y que son aceptadas y reconocidas “*por la Comunidad Internacional de Estados en su conjunto*”. Otra mención se encuentra en el proyecto del artículo 19 sobre responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos, aprobado por la Comisión de Derecho Internacional, y que buscó definir el crimen internacional como “*resultante de una violación por un Estado de una obligación internacional tan esencial para la salvaguardia de los intereses fundamentales de la comunidad internacional (...)*”.

En el segundo caso, se puede mencionar la decisión del Tribunal Internacional de Justicia-TIJ en la sentencia del *asunto la Barcelona Traction*, al establecer la distinción entre las “*obligaciones de los Estados respecto a la comunidad internacional en su conjunto*” y las demás entre los Estados en el marco de la protección diplomática. Otro caso, en el asunto del personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán, el Tribunal Internacional de Justicia ha dicho que “*estos sucesos no pueden más que socavar la base de un edificio jurídico pacientemente construido por la humanidad a lo largo de los siglos y cuya salvaguardia es esencial para la seguridad y el bienestar de una comunidad internacional tan compleja como la actual, que tiene más necesidad que nunca del respeto constante y escrupuloso de las reglas que presiden el desarrollo ordenado de las relaciones entre sus miembros*”. Y también se puede mencionar, como lo hace FERNANDO MARIÑO MENÉNDEZ<sup>79</sup>, el *Dictamen sobre Namibia*, ocasión en que el propio TIJ, al referirse a África del Sur, ha afirmado que su presencia en el territorio de Namibia “*...causa perjuicio a un pueblo que debe contar con la ayuda de la Comunidad Internacional para alcanzar los objetivos a los que corresponde la misión sagrada de civilización*”.

Con toda la pluralidad, diversidad y profundas diferencias política, económica, social, histórica, cultural, geográfica, ecológica, militar de sus principales actores - los Estados -, no se puede negar, como afirma FERNANDO MARIÑO, que la Comunidad Internacional es titular de ciertos intereses esenciales, basados en valores

---

<sup>79</sup> MARIÑO MENÉNDEZ, F. M., *Derecho Internacional Público*, 5ª edición, op. cit., pp. 20-21.

universales, como son la paz y seguridad internacionales y la dignidad de la persona humana<sup>80</sup>, siendo *“particularmente reseñable que el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales se ha convertido en el horizonte axiológico más universal a cuya imperatividad admite progresivamente la Comunidad Internacional”*<sup>81</sup>.

---

<sup>80</sup>Idem, 20.

<sup>81</sup> Idem, p. 35.

## **SEGUNDA PARTE**

### **ESTRUCTURAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS**

En esta parte se buscará presentar una “radiografía” de la estructura actual y los mecanismos del régimen de protección internacional de los derechos humanos.

En general, la estructura de la protección internacional de los derechos humanos es presentada con base en las fuentes de creación de los respectivos órganos, caracterizándose, así, por sus orígenes convencional o extraconvencional<sup>82</sup>.

En esta tesis se ha optado por presentar una forma propia y diferenciada del modo como se distribuyen los más diversos órganos, optándose por agruparlos en los cinco niveles de alcance geográfico donde se realiza la tutela internacional de dichos derechos, es decir, en el ámbito universal/global, mundial, regional/continental, intercontinental y subregional, con la descripción de cada uno de sus órganos y sus rasgos principales en cuanto a su formación y funcionamiento.

Esta forma de exponer el modo como se distribuye la protección internacional de los derechos humanos, y que se cree sea novedosa, se muestra más compatible con este trabajo, cuyo destaque no son las formas como operan aquellas protecciones, como la convencional o extra-convencional, contenciosa o casi-contenciosa, y las técnicas como se realizan – informes, denuncias estatales y denuncias individuales –, sino el alcance espacial de aquellas más diversas iniciativas de protección, y las eventuales contradicciones y paradojas que presentan, incluso por resultaren en distintas calificaciones de protección decurrentes del local geográfico donde se producen las violaciones de los derechos humanos.

---

<sup>82</sup> Por ejemplo, se puede mencionar las presentaciones ofrecidas en las obras de CARLOS FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, en VVAA, *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, Editorial Dilex, Madrid, 2000, y CARLOS VILLÁN DURÁN, *Curso de Derecho Internacional de los derechos humanos*, op. cit., 2002, en cuyas publicaciones hay un harto registro de los órganos que componen o participan de toda la intrincada y compleja estructura de protección de los derechos humanos.

## **I – UNIVERSAL/GLOBAL – BASADA EN LA CARTA DE NACIONES UNIDAS**

El ámbito universal, o global, es el que se identifica con las labores de las Naciones Unidas, y en el cual hay una serie de procedimientos disponibles para el control y vigilancia del cumplimiento y de la garantía de los derechos humanos. Son medidas puestas en práctica por los propios órganos integrantes de la estructura de la ONU, y que tienen por fundamento el deber general de cooperación internacional en materia de los derechos humanos, basados en los poderes que les confiere la Carta de las Naciones Unidas. Por ello, tales medidas son independientes de la previa aprobación de los Estados para su cumplimiento, ya que sólo el hecho de pertenecer a la ONU es suficiente para exigir la observancia a los derechos humanos contemplados por la comunidad internacional.

El cauce jurídico para esta iniciativa de vigilancia y análisis de los casos de violaciones a los derechos humanos, en el ámbito universal, se encuentra en los Propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, específicamente contenidos en su artículo 1.3, en el sentido de la promoción y estímulo universal al respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; en el artículo 13.1.b, que dispone sobre el incentivo al pleno gozo de los derechos humanos y libertades fundamentales; consignada en el artículo 55, “c”, que trata del respeto universal y efectivo a los derechos humanos y libertades fundamentales; en el artículo 56, que define la obligación de los Estados de cooperar con los propósitos de la Organización, así como en el artículo 62.2 que asegura que se realicen las recomendaciones para promover el respeto y observancia a los derechos humanos y libertades fundamentales.

Por el hecho de que esta protección no depende de la anuencia de cada país, y por derivar de la propia iniciativa de los órganos políticos de las Naciones Unidas, es identificada como tutela “extra-convencional”, es decir, su fuente no son los tratados, convenciones, pactos o acuerdos, sino, los propios principios y compromisos internacionales que emergen de aquellos Propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, así como la buena fe que los Estados observan con relación a sus obligaciones contraídas con la ONU, y la facultad que esta institución tiene para

constituir los órganos subsidiarios que viabilicen el regular desempeño de sus funciones, conforme se extrae de los artículos 2.2, 7.2, de la Carta.

De ahí que el alcance universal de estos medios de control y garantía del cumplimiento de los derechos humanos, realizado por los órganos permanentes que integran la estructura de Naciones Unidas, o por órganos especiales, temporarios, definidos en mandatos específicos, y conocidos como “Sistema de Relatores Especiales”, sea diferente al sistema convencional, en el cual se busca definir la protección de cierta y determinada situación por la vía de instrumentos internacionales - pactos, tratados, convención etc.. -, con la creación de un órgano específico de acompañamiento y control, como los Comités y los Tribunales internacionales, y cuya estructura actualmente existente será tratada en otro capítulo de este trabajo.

La virtud de la estructura universal-extraconvencional es que inaugura la posibilidad de un amplio y general acompañamiento, análisis y control del cumplimiento de los derechos humanos, así como una amplia y eficaz investigación de sus violaciones, incluso promoviendo y acogiendo comunicaciones particulares – quejas o denuncias – formuladas por las propias víctimas, para su protección global o individual, permitiéndose así, que países no-ratificadores de convenciones específicas de protección a los derechos humanos también puedan someterse al control internacional en este escenario de los derechos humanos.

Según ha señalado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos-OACNUDH este sistema universal de tutela extraconvencional *“ocupa un lugar de primera línea en la vigilancia internacional de las normas universales de derechos humanos y en él recae la tarea de afrontar muchas de las peores violaciones registradas en las situaciones más críticas” .... y “tiene por objetivo central mejorar la eficacia de las normas internacionales de derechos humanos. Procuran entablar diálogos constructivos con los gobiernos y recabar su cooperación en relación con situaciones, incidentes y casos concretos, que examinan e investigan de manera objetiva con vistas a comprender la situación y a recomendar*

*a los gobiernos soluciones a los problemas inherentes a la tarea de garantizar el respeto a los derechos humanos*<sup>83</sup>.

A seguir, se pasa a apuntar cada uno de los órganos integrantes de la ONU que, directa o indirectamente, inmediata o mediatamente, participan en la protección a los derechos humanos. Esta presentación se realizará en tres bloques distintos, reuniendo los órganos de naturaleza no-jurisdiccionales, los órganos jurisdiccionales y los órganos de jurisdicción administrativa.

## **1 – TUTELA NO JURISDICCIONAL POR ÓRGANOS PRINCIPALES DE NACIONES UNIDAS**

Se incluyen en esta categoría los órganos de Naciones Unidas que integran su estructura general, vinculada o no específicamente a la tutela de los derechos humanos, y de naturaleza provisoria o permanente. Son no-jurisdiccionales pues, aunque muchas de sus decisiones traduzcan fuerza obligatoria de cumplimiento, sus mecanismos de control y protección a los derechos humanos no se someten, necesariamente, a los mismos rigores procedimentales propios de los procesos judiciales, como la observancia a los principios de la amplia defensa, del contradictorio, de la igualdad procesal y del derecho de petición.

### **A – ASAMBLEA GENERAL Y SUS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS**

La Asamblea General es el principal órgano de deliberación, adopción de políticas y representación de Naciones Unidas<sup>84</sup>. Reúne los 193<sup>85</sup> países que integran la ONU, y que gozan de los mismos derechos y deberes, con igual poder de voto en las decisiones adoptadas por la Asamblea General.

---

<sup>83</sup> Oficina del Alto Comisionado, en texto con el título “*Relatores Especiales, Expertos Independientes... (Mecanismos extra-convencionales)*” disponible en web <[http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/xtraconv\\_sp.htm](http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/xtraconv_sp.htm)>”.

<sup>84</sup> Conforme se ha afirmado en la Resolución 55/2 de la Asamblea General, de 08 de septiembre de 2000, párr. 30, conocida como la Declaración del Milenio.

<sup>85</sup> Dato del 31 de julio de 2011, en que se registra la integración de la República del Sudán del Sur, que se separó del Sudán el 9 de julio de 2011, y fue admitido como nuevo Estado miembro por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de julio de 2011.

Juntamente con el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, el Tribunal Internacional de Justicia y la Secretaría, forman la estructura principal de Naciones Unidas.

## **a – CONSIDERACIONES GENERALES**

Con respecto a los derechos humanos, la Asamblea General tiene una actuación predominantemente subsidiaria, tanto en acciones de promoción como de protección, dando, así, cumplimiento a la Carta de Naciones Unidas, que en su artículo 13 ha definido caber a la Asamblea General *“ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”*.

En el campo de la promoción, la labor más destacado de la Asamblea General se sitúa en su contribución a la codificación de normas internacionales de derechos humanos, principalmente por la Comisión de Derecho Internacional, uno de sus órganos subsidiarios, y que se han convertido en instrumentos normativos como los Tratados y Convenciones, siendo el último ejemplo, el Estatuto de Roma para creación e instalación del Tribunal Penal Internacional.

Se destacan también como actuación más efectiva en materia de derechos humanos, y objetivando atender a las disposiciones del mencionado artículo 13 de la Carta de Naciones Unidas, algunos intentos de la Asamblea General en concretizar los derechos humanos en el entorno de los propios Estados Partes, como la adopción de reglas, principios y directrices, y que son ejemplo las “Reglas de Beijing”<sup>86</sup>, “Reglas de Tokio”<sup>87</sup>, “Directrices de RIAD”<sup>88</sup>, y “Principios de París”<sup>89</sup>.

---

<sup>86</sup> Adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 40/33, del 28 de noviembre de 1985. El texto completo se encuentra en el “Anexo (3)” de esta tesis.

<sup>87</sup> Adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 45/110, del 14 de diciembre de 1990. El texto completo se encuentra en el “Anexo (4)” de esta tesis.

<sup>88</sup> Adoptadas por la Asamblea General en su Resolución 45/112, del 14 de diciembre de 1990. El texto completo se encuentra en el “Anexo (5)” de esta tesis.

<sup>89</sup> Adoptadas por la Comisión de Derechos Humanos en marzo de 1992. El texto completo se encuentra en el “Anexo (6)” de esta tesis.



Las “Reglas de Beijing” son reglas definidas para la administración de la justicia de menores, de modo que los Estados Miembros procuren promover el bienestar del menor y de su familia, y que permita reducir el número de casos en que haya que intervenir el sistema de justicia de menores, con el objetivo de prevenir el comienzo de la vida delictiva y la delincuencia juvenil.

Con el propósito conjunto a las “Reglas de Beijing”, la Asamblea General ha adoptado las “Directrices de Riad”, definiendo medidas de acción a la prevención de la delincuencia juvenil, con el compromiso de que los jóvenes ejerzan una función activa y participativa en la sociedad y evitar que sean “*considerados meros objetos de socialización y control*”<sup>90</sup>.

Por las “Reglas de Tokio” se tienen definidas reglas mínimas para la gestión de la justicia penal, con el objetivo de “*racionalizar las políticas de justicia penal, teniendo en cuenta el respeto a los derechos humanos, las exigencias de la justicia social y las necesidades de rehabilitación del delincuente*”, como previsto en su artículo 1.5, y que dicen respeto a la aplicación de medidas no privativas de la libertad, así como salvaguardias mínimas para las personas a quienes se aplican medidas sustitutivas de la prisión, y, en conformidad con su artículo 1.4, como esfuerzo a “*alcanzar un equilibrio adecuado entre los derechos de los delincuentes, los derechos de las víctimas y en interés de la sociedad en la seguridad pública y la prevención del delito*”.

A su vez, los “Principios de París” son definidos como requisitos para la creación y funcionamiento de las instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos, y fueron fijados en 1991, en la primera Reunión Técnica Internacional sobre las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de Derechos Humanos. Más tarde, en 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 48/134<sup>91</sup>, en la cual fueron convalidados aquellos principios. En la práctica, y observadas las peculiaridades de cada país, aquellas instituciones

---

<sup>90</sup> De conformidad con el artículo 3 de las “Directrices”.

<sup>91</sup> Del 20 de diciembre de 1993.

nacionales se han concretizado en la figura del Defensor del Pueblo o del Ombudsman en defensa de los derechos humanos.

Para concretizar los objetivos establecidos en los Principios de París, ha sido creado el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales-CIC, y que fue “*establecido en virtud de las antiguas Normas de Procedimiento, como se menciona en la Resolución 2005/74 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en la Resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y que ahora asume una personería jurídica autónoma en virtud del presente Reglamento*”<sup>92</sup>. El CIC es una asociación internacional de las instituciones nacionales de derechos humanos creada para impulsar y fortalecer a estas instituciones para que estén en conformidad con los Principios de París y toma la iniciativa en materia de promoción y protección de los derechos humanos.

Se destaca también como dato importante de la actuación de la Asamblea General la “*Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos*” adoptada de la Resolución 53/144, del 9 de diciembre de 1998 (A/RES/53/144)<sup>93</sup>, y por la cual se ha reforzado la garantía de que, tanto en el plano nacional como internacional, “*Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional*”<sup>94</sup>.

Cuanto a la protección de los derechos humanos, la Asamblea General se ha destacado por sus iniciativas en propiciar y estimular la adopción de tratados internacionales en los que se vinculan los órganos técnicos permanentes de control, como son los Comités, y que deben informar periódicamente sobre sus actividades a la Asamblea General, como ocurre con el Comité de Derechos Humanos, Comité

---

<sup>92</sup> Conforme artículo 1.1 del Reglamento del CIC, disponible en <<http://www.nhri.net/2009/ICC%20Statute%20-%20FINAL%20as%20at%20Apr09%20SP.pdf>>.

<sup>93</sup> En “Anexo (7)”.

<sup>94</sup> De conformidad con el artículo 1 de la Declaración (A/RES/53/144).

para la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité de Derechos del Niño, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité contra la Tortura.

Más allá de esas, la Asamblea General actúa por los conocidos “procedimientos extra-convencionales”, instituyendo órganos permanentes o no que actúan junto a las persistentes situaciones violadores de derechos humanos, sea con enfoque geográfico sea con enfoque temático<sup>95</sup>.

Las cuestiones de derechos humanos son examinadas por la Asamblea General por provocación de su Tercera Comisión o del Consejo Económico y Social-ECOSOC, y emite dictámenes al respecto.

La Tercera Comisión, que es la Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales de la Asamblea General, se ocupa de cuestiones relativas a aquellos temas de derechos humanos que afectan a los pueblos de todo el mundo, y es una de las seis Comisiones de actuación de la Asamblea General<sup>96</sup>. Su labor se centra en el análisis de las cuestiones de derechos humanos, entre las que figuran los informes de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos-CDH, dialogando con los relatores especiales, expertos independientes, así como con presidentes de los grupos de trabajo del CDH.

Cuanto al Consejo de Derechos Humanos-CDH, actualmente se destaca como el más relevante órgano en la estructura de la Asamblea General el tema de protección de los derechos humanos.

---

<sup>95</sup> En la secuencia de este trabajo se discurrirá sobre el funcionamiento de estos órganos.

<sup>96</sup> La Primera Comisión (Desarme y Seguridad Internacional) se ocupa exclusivamente de cuestiones del desarme y otras cuestiones relacionadas con la seguridad internacional; la Segunda Comisión (Asuntos Económicos y Financieros) se encarga exclusivamente de cuestiones económicas; la Tercera Comisión (Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales) atiende exclusivamente cuestiones sociales y humanitarias; la Cuarta Comisión (Política Especial y de Descolonización) trata una variedad de asuntos políticos que no son abordados por la Primera Comisión y también se ocupa de la descolonización; la Quinta Comisión (Asuntos Administrativos y Presupuestarios) se ocupa exclusivamente de los aspectos administrativos y presupuestarios de las Naciones Unidas, y la Sexta Comisión (Jurídica) se encarga exclusivamente de cuestiones jurídicas internacionales.

## **b – CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS**

Este es, actualmente, el más nuevo órgano de la estructura de Naciones Unidas, creado por la Resolución A/RES/60/251, aprobada el 15 de marzo de 2006 por la Asamblea General, y que tiene su origen en la Cumbre de los líderes mundiales en septiembre de 2005.

El Consejo de Derechos Humanos-CDH fue creado en sustitución a la Comisión de Derechos Humanos<sup>97</sup>, órgano vinculado al Consejo Económico y Social-ECOSOC, y que ha sido extinta, el 27 de marzo de 2006, por el reconocimiento de

---

<sup>97</sup> La Comisión de Derechos Humanos-CDH era el principal órgano encargado de la labor en derechos humanos de las Naciones Unidas, con naturaleza técnico-política. Ha sido extinta en 27 de marzo de 2006, al realizar su sexagésimo-segunda y última sesión. Estaba compuesta por cincuenta y tres países, identificados como Estados-miembros, escogidos por el ECOSOC entre los Estados que componen la ONU, para un mandato de 3 años. Con su sede en Ginebra, tenía por objetivo conocer de violaciones a aquellos derechos con relación a las personas en cualquier región y circunstancia. De ahí su naturaleza universal, tanto bajo el punto de vista geográfico como temático.

Actuaba por medio de expertos, unipersonalmente o en grupo, que le presentaban “Informes” sobre cuestiones concretas, que eran sometidas a conocimiento en las sesiones anuales, realizadas con la participación de más de tres mil delegados, en representación de los Estados-miembros, países observadores y organizaciones no-gubernamentales. Estas sesiones anuales se realizaban en un período de ocho semanas, entre marzo y abril, y en ellas eran presentados los Informes, de cuya aprobación, por el voto de la mayoría de los Estados-miembros presentes, resultaban alrededor de un centenar de “resoluciones”, “decisiones” y “declaraciones” de la Presidencia.

La Comisión podría también reunirse extraordinariamente para atender a las necesidades de análisis de situaciones urgentes y agudas. En esta situación la CDH se ha reunido extraordinariamente por cinco veces: el 13 y el 14/8/92, sobre la situación de derechos humanos en el territorio de la antigua Yugoslavia; del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 1992 para la misma situación en la ex-Yugoslavia; el 24 y 25 de mayo de 1994, sobre la situación de los derechos humanos en Ruanda; de 23 al 27 de septiembre de 1999, sobre la situación de los derechos humanos en el Timor Oriental; y en la quinta, de 17 al 19 de octubre del 2000, sobre las graves y masivas violaciones de los derechos humanos del pueblo palestino por Israel.

En la Comisión, se trataban los más diversos temas relacionados a los derechos humanos, como su promoción, protección, vigilancia y control, destacándose entre ellos los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la libre determinación, al desarrollo, a la libertad de expresión, los derechos humanos de la mujer, del niño, los trabajadores inmigrantes, las minorías, de las personas desplazadas, las cuestiones indígenas, así como el combate al racismo, a la tortura, a la detención arbitraria, a las desapariciones, ejecuciones sumarias, a la impunidad y la intolerancia religiosa, más allá de la cuestión de los territorios árabes ocupados, inclusive Palestina, y las cuestiones relacionadas a la independencia del poder judicial.

Bajo este aspecto, es importante observar que la Comisión de Derechos Humanos, aunque no fuera un órgano que tuviera su origen en una Convención, es decir, aunque no se tratase de un órgano convencional, tenía también atribuciones relacionadas al cumplimiento de los Convenios, como ocurre con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyos Informes de los Estados son dirigidos al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, quien los remite al Consejo Económico y Social-ECOSOC, y este los transmitía a la CDH “*para su estudio y recomendación de carácter general o para información, según proceda*”, como hace constar el artículo 19 del respectivo Pacto, conforme registra CASADEVANTE ROMANI, C. F., “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, en VVAA, *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, CASADEVANTE ROMANI, C., F., (coord), Dilex, Madrid, p. 59.

que *“había perdido el norte y se había convertido, en buena medida, en un foro utilizado por los infractores de los derechos humanos para conspirar y protegerse entre sí, apartándose así de su finalidad inicial como órgano encargado de promover activamente el respeto de los derechos humanos en todo el mundo”*, en palabras de Kofi Annan<sup>98</sup>, ex Secretario General de Naciones Unidas, y que ha presentado la propuesta de creación del Consejo, en el año de 2005.

Y también sostuvo: *“Para que las Naciones Unidas cumplan las expectativas de los hombres y las mujeres de todo el mundo y, de hecho, para que la Organización asigne a la causa de los derechos humanos la misma importancia que a las causas de la seguridad y el desarrollo, los Estados Miembros deberían convenir en reemplazar la Comisión de Derechos Humanos por un Consejo de Derechos Humanos de carácter permanente y composición más reducida. Los Estados Miembros deberían decidir si desean que el Consejo de Derechos Humanos sea un órgano principal de las Naciones Unidas o un órgano subsidiario de la Asamblea General, pero en ambos casos sus miembros serían elegidos directamente por la Asamblea General por el voto de una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes. La creación del Consejo situaría a los derechos humanos en una posición de mayor autoridad, acorde con la primacía que se atribuye a los derechos humanos en la Carta de las Naciones Unidas. Los Estados Miembros deberán determinar la composición del Consejo y la duración del mandato de sus miembros. Los miembros del Consejo deberían comprometerse a acatar las normas de derechos humanos más rigurosas. (A/59/2005, párr. 183)”*<sup>99</sup>. Y dijo también: *“Debería tener una función definida especialmente para actuar como mecanismo de examen entre los países. Su misión principal sería evaluar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los derechos humanos por parte de los Estados Miembros. De esta manera se concretaría el principio de universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos. También debería prestar la misma atención a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como al derecho al desarrollo. Y debería tener recursos para prestar asistencia técnica a los*

---

<sup>98</sup> Conforme artículo disponible en la página de internet de la ONU, <[www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2006/consejo](http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2006/consejo)> [Consulta: 18 de octubre de 2006].

<sup>99</sup> En el documento A/59/2005/Add.1, de la Asamblea General de Naciones Unidas, página 2.

*Estados y ofrecer asesoramiento normativo a los Estados y a los órganos de las Naciones Unidas. Este sistema permitiría examinar periódicamente la situación en cada uno de los Estados Miembros. Sin embargo, esa rotación no debería impedir que el Consejo se ocupara de las transgresiones masivas y graves que puedan llegar a cometerse. De hecho, el Consejo debe poder señalar a la atención de la comunidad internacional las crisis que requieran medidas inmediatas”<sup>100</sup>.*

Creado con el propósito de ser “*un nuevo comienzo histórico en la labor de las Naciones Unidas centrada en los derechos humanos*” y con el reconocimiento de que “*el desarrollo, la paz y la seguridad y los derechos humanos son los pilares del sistema de las Naciones Unidas ... están vinculados entre sí y se refuerzan mutuamente*”<sup>101</sup>, el Consejo de Derechos Humanos es compuesto por 47 países-miembros, elegidos por mayoría absoluta de la Asamblea General, por voto directo e individual, para un período de tres años, con posibilidad de una re-elección consecutiva, y solamente pudiendo ser candidato países que contribuyen a la promoción y defensa de los derechos humanos.

En la extinta Comisión sus 53 miembros eran elegidos por el ECOSOC, y se lograba por la mayoría de votos entre los presentes.

En el actual Consejo, la distribución de los asientos es de conformidad con una representación geográfica equitativa, siendo 13 del grupo africano, 13 del grupo asiático, 6 del grupo de Europa oriental, 08 del grupo de América Latina y el Caribe, y 7 del grupo de Europa occidental y otros Estados.

Por la importancia de sus labores se prevé que se torne el principal órgano de derechos humanos en el seno de Naciones Unidas, incluso alcanzando el mismo status de importancia institucional del Consejo de Seguridad y del Consejo Económico y Social. Se le ha recomendado un mandato explícito de promover la coordinación eficaz y la incorporación de los derechos humanos en todos los ámbitos

---

<sup>100</sup> Discurso pronunciado ante la Comisión el 7 de abril de 2005, en que el Secretario General describió en más detalle la propuesta de una nueva función fundamental de examen entre los países en el Consejo de Derechos Humanos, disponible en A/59/2005/Add.1, p. 3.

<sup>101</sup> *Ibidem*.

de actividad de las Naciones Unidas, y contribuir en la prevención de las violaciones de los derechos humanos, estando sus labores guiados por los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad.

Los países miembros del nuevo Consejo, al contrario de los miembros de la extinta Comisión de Derechos Humanos, pasan a someterse a un examen periódico y universal durante todo su mandato, y, en caso de que cometan vulneraciones flagrantes y sistemáticas durante aquel período podrán ser expulsados por la Asamblea General, por los votos de una mayoría de dos terceras partes de sus miembros. Para Kofi Annan, estos cambios del Consejo de Derechos Humanos en relación a la extinta Comisión de Derechos Humanos pueden suponer *“un nuevo comienzo histórico en la labor de las Naciones Unidas centrada en los derechos humanos”*<sup>102</sup>.

En vista del importante trabajo de los mecanismos especiales de procedimientos desarrollados por la Comisión, así como la participación de las ONG's, los mandatos y responsabilidades a ella vinculados fueron mantenidos y asumidos en su totalidad por el nuevo Consejo<sup>103</sup>. En palabras de Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *“el Consejo representa un momento definitorio para el trabajo de la Organización relacionado con la protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos. .... La Comisión superó el reto de su época al fijar los estándares mundiales para los derechos humanos. Que la era del Consejo sea la era de la implementación”*<sup>104</sup>.

El Consejo se reúne en su sede en Ginebra, por lo menos 3 veces al año, en no menos de diez semanas por sesión, pudiendo reunirse a cualquier tiempo para abordar situaciones urgentes y realizar sesiones especiales cuando sea necesario

---

<sup>102</sup> Ibidem.

<sup>103</sup> En el período de sesiones de junio de 2007, el Consejo suprimió el mandato del Relator Especial de diversos países, incluso de los Relatores Especiales para Cuba y Bielorrusia, Estados miembros del Consejo, hecho que ha llevado en Secretario General de ONU, Ban Ki-moon a afirmar que esta eliminación no absuelve dichos Estados cuanto al respeto de los derechos humanos.

<sup>104</sup> Artículo publicado en sitio de ONU, disponible en <[www.cinu.org.mx/prensa/opeds/Opedconsejo\\_derechos.htm](http://www.cinu.org.mx/prensa/opeds/Opedconsejo_derechos.htm)> [Consulta: 18 de octubre de 2006].

mediante la solicitud de algún de sus miembros, con el apoyo de un tercio del Consejo. Su primera reunión se ha realizado en el periodo del 19 al 30 de junio de 2006, siendo sus primeros miembros elegidos el 9 de mayo de 2006<sup>105</sup>.

No obstante las expectativas muy favorables al inicio de una nueva época en la protección de los derechos humanos, concretizada con las relevantes labores atribuidas al nuevo Consejo de Derechos Humanos, no se puede dejar de admitir que las primeras sesiones ya han dado un breve panorama de las dificultades que serán encontradas en se perseguir el ideal de realización efectiva de aquellos derechos. Las primeras reuniones del Consejo se han caracterizado por divisiones geográficas e ideológicas, principalmente por la predominancia del tono de los debates definido por la Organización de la Conferencia Islámica, que, junto a países de África, Asia, y algunos de América, han conseguido aislar las acciones del Consejo a ciertos países sistemáticamente violadores de los derechos humanos, específicamente como ha ocurrido con el reproche de resoluciones que trataban de la condena de la guerra en Darfur, en Sudán, de la guerra civil en Sri Lanka, de las denuncias de tortura en Uzbekistán, y de la pena de muerte en Irán, recusas que pueden convertirse en una sombra en la reputación de Naciones Unidas, como ha advertido Kofi Annan<sup>106</sup>.

De todos modos, como ejemplo de las labores actuales, con actuación efectiva y de relieve en las cuales se ha emprendido el Consejo, se puede apuntar la reciente aprobación de la Resolución sobre la "*Mortalidad y Morbilidad Materna y Derechos Humanos*"<sup>107</sup>, y que visa mejorar la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, siendo una preocupación de alcance a todas las regiones y culturas del mundo, debiéndose adoptar medidas a reforzar la asistencia y cooperación internacional en este tema.

En la secuencia se pasa a discurrir sobre los principales órganos y instrumentos del Consejo de Derechos Humanos, destacándose sus más importantes rasgos.

---

<sup>105</sup> El primer Presidente del Consejo ha sido el Embajador Luis Alfonso De Alba, de México.

<sup>106</sup> Conforme ha noticiado la Revista VEJA, de Brasil, de 08 de noviembre de 2006, pág. 62, en materia con el título "*O Conselho dos Direitos Islâmicos*".

<sup>107</sup> Fue aprobada el 17 de junio de 2009.



## **b.1 - PRINCIPALES ÓRGANOS DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS**

En la estructura de organización y funcionamiento, el Consejo pasó a tener una nueva configuración, derivada del que se definió llamar “Construcción Institucional del Consejo de Derechos Humanos”, instituida por la Resolución 5/21<sup>108</sup>. En la nueva estructura, lo esencial, es la extinción de la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la extinta Comisión. Fue creado el Comité Asesor y el Comité de Coordinación de los Procedimientos Especiales. De la Comisión de Derechos Humanos se mantuvo, con nuevos rasgos, el Sistema de Procedimientos Especiales, de las Resoluciones 1235, de 1967, y 1503, de 1970, del Consejo Económico y Social-ECOSOC, el Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones y el Grupo de Trabajo sobre Situaciones.

Algunos otros órganos de la extinta Comisión también fueron mantenidos y otros sufrieron algunos cambios. Por ejemplo, como en los casos de la Resolución A/HRC/RES/6/13<sup>109</sup>, del 28 de septiembre de 2007, que decidió continuar con el trabajo del Foro Social; la Resolución A/HRC/RES/6/14<sup>110</sup>, del 28 de septiembre de 2007, estableció un “Relator Especial sobre formas contemporáneas de esclavitud” para reemplazar el antiguo “Grupo de Trabajo sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud”; la Resolución A/HRC/RES/6/15<sup>111</sup>, del 28 de septiembre de 2007, que estableció un “Foro sobre Cuestiones de las Minorías” para reemplazar el “Grupo de Trabajo sobre Minorías”; la Resolución A/HRC/RES/6/36<sup>112</sup> adoptada por consenso el 14 de diciembre de 2007 estableció un “Mecanismo de Expertos sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas” para reemplazar el antiguo “Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas”<sup>113</sup>.

---

<sup>108</sup> Contendida en el documento A/HRC/5/21, en anexo (7) disponible en internet: <<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/135/61/PDF/G0713561.pdf?OpenElement>> [Consulta: 19 de noviembre de 2009].

<sup>109</sup> En internet: <[http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/resolutions/A\\_HRC\\_RES\\_6\\_13.pdf](http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_13.pdf)> [Consulta: 19 de noviembre de 2009].

<sup>110</sup> En internet: <[http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/resolutions/A\\_HRC\\_RES\\_6\\_14.pdf](http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_14.pdf)> [Consulta: 19 de noviembre de 2009].

<sup>111</sup> En internet: <[http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/resolutions/A\\_HRC\\_RES\\_6\\_15.pdf](http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_15.pdf)> [Consulta: 19 de noviembre de 2009].

<sup>112</sup> En internet: <[http://ap.ohchr.org/Documents/S/HRC/resolutions/A\\_HRC\\_RES\\_6\\_36.pdf](http://ap.ohchr.org/Documents/S/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_36.pdf)> [Consulta: 19 de noviembre de 2009].

<sup>113</sup> Observaciones traídas por la ONG “UPR.INFO”, en la dirección Internet <<http://www.upr-info.org/Procedimientos-y-mecanismos.html>> [Consulta: 19 de noviembre de 2009].

### **b.1.1 – COMITÉ ASESOR**

Creado en virtud de la Resolución 5/1 (A/HRC/RES/5/1)<sup>114</sup>, es identificado como un “grupo de reflexión” del CDH. Ha reemplazado a la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos<sup>115</sup>, se compone de 18 miembros, y celebrará hasta dos períodos de sesiones anuales, de un máximo de diez días laborales por año.

Tiene por función proporcionar conocimientos especializados al Consejo, basados en estudios e investigaciones, y realizados únicamente cuando el Consejo lo solicite, en cumplimiento de sus resoluciones y bajo su orientación. *“El Comité Asesor no adoptará resoluciones ni decisiones, pero podrá formular, dentro del ámbito de trabajo establecido por el Consejo y para que éste las examine y apruebe, sugerencias para mejorar su eficiencia procedimental, así como propuestas de nuevos estudios dentro del ámbito de trabajo establecido por el Consejo. Se insta al Comité Asesor a que, en el desempeño de su mandato, establezca una interacción con los Estados, las instituciones nacionales de derechos humanos, las ONG y otras entidades de la sociedad civil, de conformidad con las modalidades que apruebe el Consejo. Los Estados miembros y los observadores, incluidos los Estados que no sean miembros del Consejo, los organismos especializados, otras organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos, así como las ONG, tendrán derecho a participar en la labor del Comité Asesor sobre la base de las disposiciones, en particular la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social, y las prácticas observadas por la Comisión de Derechos Humanos y por el Consejo, al mismo tiempo que se asegurará la contribución más eficaz posible de esas entidades”*<sup>116</sup>.

---

<sup>114</sup> En internet: [http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A\\_HRC\\_RES\\_5\\_1.doc](http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_1.doc) [Consulta: 19 de noviembre de 2009].

<sup>115</sup> Anteriormente denominada como “Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías”. El cambio de nombre se ha dado en 1999, por la CDH, en la “Declaración del Presidente de 28 de abril de 1999”, párrafo 11.

<sup>116</sup> Informaciones de la página web del Comité Asesor <<http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/advisorycommittee.htm>> [Consulta: 19 de noviembre de 2009].

La extinta Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos era un órgano de destacada actuación en el escenario de protección de los derechos humanos, y principal órgano subsidiario de la Comisión de Derechos Humanos. Fue creado por la extinta Comisión, en su Iª sesión en 1947, y a ella era vinculada. Tenía por objetivo realizar estudios y hacer recomendaciones a la Comisión de Derechos Humanos sobre la prevención de la discriminación de cualquier tipo en relación con los derechos humanos y las libertades fundamentales, y la protección de las minorías raciales, religiosas y lingüísticas.

La Subcomisión desarrollaba sus trabajos en “Plenarios” o también en “Grupos de Trabajo”, formados por cinco miembros, y por “Relatores Especiales”.

Con relación a los “Grupos de Trabajo” sus atribuciones, actualmente mantenidas, eran promover y supervisar la aplicación de instrumentos internacionales, como es el caso del “Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud” y el “Grupo de Trabajo sobre las Minorías”, como también de elaborar normas de interés para la protección de ciertos derechos, caso del “Grupo de Trabajo de las Poblaciones Indígenas”. En cada período de sesiones la Subcomisión podría establecer grupos de trabajo específicos para abordar las más diferentes materias, como son ejemplo el “Grupo de Trabajo sobre la Administración de la Justicia”, “Grupo de Trabajo sobre Métodos de Trabajo y Actividades de las Empresas Transnacionales”, y el “Grupo de Trabajo sobre Métodos de Trabajo de la Subcomisión”<sup>117</sup>.

Más allá de éstos, cabe destacar el “Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones” y el “Grupo de Trabajo sobre Situaciones” que, por sus importancias y naturaleza, serán tratados en un subtítulo específico.

En cuanto a los “Relatores Especiales”, eran los propios miembros de la Subcomisión autorizados a trabajar unipersonalmente para la realización de estudios

---

<sup>117</sup> Conforme anotado por VILLÁN DURAN, C., *Curso ...*, op. cit., pp. 171-174.

específicos tendientes a viabilizar la proposición de nuevas normas sobre materias de interés de la comunidad internacional<sup>118</sup>.

En la Subcomisión, por sus Grupos de Trabajo, es que se iniciaban las medidas de control de los mecanismos de protección contra las violaciones a los derechos humanos y por las cuales se pueden constatar rasgos de efectividad de aquel sistema de protección.

### **b.1.2 – COMITÉ DE COORDINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES<sup>119</sup>**

Con el objetivo de aumentar la coordinación entre los titulares de mandatos de los procedimientos especiales, que el Consejo de Derechos Humanos ha adoptado de la extinta Comisión de Derechos Humanos, y para promover a un mayor diálogo y cooperación entre ellos, en 2005 fue creado el Comité de Coordinación<sup>120</sup>.

El Comité es formado por seis titulares de Mandatos, que lo integran por un período de un año, uno de ellos siendo escogido por los demás como Presidente del Comité.

*Este Comité ha “desempeñado un papel activo durante el proceso de examen de los mandatos dirigido por el Grupo de Trabajo encargado de la cuestión, y, cuando ha sido necesario, en la mejora y racionalización de todos los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades a fin de mantener un sistema de procedimientos especiales, de asesoramiento experto y de procedimiento de denuncias del Consejo de Derechos Humanos. El propósito ha sido asegurar que el*

---

<sup>118</sup> *Ibídem.*

<sup>119</sup> Se creó en la 12ª reunión de los titulares de mandatos.

<sup>120</sup> Esta información del Comité ser un órgano del Consejo de Derechos Humanos se encuentra disponible en el sitio de la web de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de México, y en el cual se divulga que el Presidente del Comité, para el período 2009/2010, será el jurista mexicano Santiago Corcuera Cabezut, conforme <<http://www.cd hdf.org.mx/index.php?id=bol17209>> [Consulta: 25 de noviembre de 2009].

*proceso de examen de los mandatos se traduzca en un sistema de procedimientos especiales más sólido y eficaz*<sup>121</sup>.

Actúa, también, como puente entre los titulares de mandato y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos-OACDH.

El Comité se encarga, entre otras, de las siguientes funciones:

- Aumentar la eficacia e independencia de los titulares de mandatos y facilitar su labor;
- Estar a disposición de los titulares de los mandatos para compartir experiencias sobre métodos de trabajo;
- Plantear en los debates del Consejo de Derechos Humanos las preocupaciones de los titulares de mandatos, y velar por que en el proceso de reforma se tengan en cuenta las preocupaciones de los procedimientos especiales e informar sobre los acontecimientos y avances a ese respecto;
- Individualizar activamente las cuestiones que preocupan a los grupos de titulares de mandatos y facilitar la acción conjunta en cuestiones transversales o de interés común;
- Estructurar el intercambio de información, especialmente manteniendo a los titulares de mandatos informados de las actividades desarrolladas por sus colegas;
- Alentar a los Estados a cooperar con los procedimientos especiales;
- Identificar formas innovadoras de crear conciencia sobre los procedimientos especiales y la labor que realizan;
- Proponer un proyecto de programa para la reunión anual de los procedimientos especiales y presentar un informe a dicha reunión.

---

<sup>121</sup> Conforme contenido en la pagina web del Comité: <http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/ccspecialprocedures.htm> [Consulta: 25 de noviembre de 2009].

Como actividades emprendidas, el propio Comité destaca<sup>122</sup>, el examen de los mandatos por parte del Consejo de Derechos Humanos, la participación de los titulares de mandatos en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, consultas con los titulares de mandatos, la reunión anual de los procedimientos especiales, la revisión del proyecto de manual de los procedimientos especiales, misiones e informes conjuntos, comunicaciones a los gobiernos, la interacción con los órganos creados en virtud de tratados, las ONG's, las Naciones Unidas y los socios externos, sesiones de información del Presidente y los miembros del Comité por invitación de la Red de Seguridad Humana y cuestiones relativas a la cooperación entre los titulares de mandatos.

### **b.1.3 – GRUPO DE TRABAJO SOBRE COMUNICACIONES**

Es un órgano creado al tiempo de la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la extinta Comisión de Derechos Humanos. Actualmente es vinculado al Consejo de Derechos Humanos y se encuentra previsto en la Resolución 5/1<sup>123</sup>, conocida como “Construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos”.

Es compuesto por cinco miembros, nombrados por el Comité Asesor, de entre sus propios miembros, uno de cada grupo regional, y debiendo observarse el equilibrio de género, con mandato de tres años renovable por igual período.

El Grupo de Trabajo es responsable de examinar todas las comunicaciones sobre denuncias que revelen un cuadro persistente de manifiestas y fehacientemente probadas violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales. Admitida, la Comunicación es transmitida al Estado interesado, emitiendo el Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones las recomendaciones al respecto y que serán remitidas al Grupo de Trabajo sobre Situaciones.

---

<sup>122</sup> En <<http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/ccspecialprocedures.htm>> [Consulta: 25 de noviembre de 2009].

<sup>123</sup> A/HRC/5/21.

La importancia de sus actividades se debe al hecho de considerarse como la puerta de entrada al régimen de protección a los derechos humanos en el sistema extra-convencional de las Naciones Unidas.

#### **b.1.4 – GRUPO DE TRABAJO SOBRE SITUACIONES**

El “Grupo de Trabajo sobre Situaciones” también se trata de un órgano que pertenecía a la estructura de la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la extinta Comisión de Derechos Humanos y que, actualmente, se encuentra vinculado al Consejo de Derechos Humanos.

Está compuesto por un representante de cada Estado miembro del Consejo de Derechos Humanos, nombrados por cada Grupo Regional del propio Consejo, por el período de un año, y debiendo tener en cuenta el equilibrio de género.

Es encargado de estudiar las violaciones señaladas en las informaciones y recomendaciones que le ha facilitado el Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones, y, en los casos que se confirme un cuadro persistente de manifiestas y fehacientemente probadas violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales, deberá presentar un Informe al Consejo de Derechos Humanos, con recomendaciones de como proceder, normalmente en forma de un proyecto de resolución o decisión, siempre en manifestaciones fundamentadas.

Las comunicaciones que son remitidas por el Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones, no vinculan al Grupo de Trabajo sobre las Situaciones, pudiendo desestimar un caso.

#### **b.2 – MECANISMOS EXTRACONVENCIONALES DE CONTROL E PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Cuanto a los instrumentos universales de control y protección de los derechos humanos, se ha creado el “Examen Periódico Universal-EPU”, con el objetivo de implementar una igualdad en el tratamiento de todos los Estados miembros de

Naciones Unidas en relación a los derechos humanos, y por lo cual están obligados a informar sobre el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.

Otro instrumento es el procedimiento de denuncia para tratar de los casos persistentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de todos los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales, y basado en la Resolución 1503, del ECOSOC, manteniendo su carácter confidencial.

Está también el “Sistema de Procedimientos Especiales”, creado al mismo tiempo que la Comisión de Derechos Humanos, con base en las Resoluciones 1235 y 1503, del Consejo Económico y Social-ECOSOC, y actualmente asumido por el Consejo de Derechos Humanos.

### **b.2.1 – EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL**

Previsto por la Resolución 60/251, de la Asamblea General, que creó el propio Consejo de Derechos Humanos. En su artículo 5.e dispone que el Consejo “e) *Realizará un examen periódico universal, basado en información objetiva y fidedigna, sobre el cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de una forma que garantice la universalidad del examen y la igualdad de trato respecto de todos los Estados; el examen será un mecanismo cooperativo, basado en un diálogo interactivo, con la participación plena del país de que se trate y teniendo en consideración sus necesidades de fomento de la capacidad; dicho mecanismo complementará y no duplicará la labor de los órganos creados en virtud de tratados; el Consejo determinará las modalidades del mecanismo del examen periódico universal y el tiempo que se le asignará antes de que haya transcurrido un año desde la celebración de su primer período de sesiones;*”.



En palabras de Ban Ki-moon, Secretario-General de Naciones Unidas *“This mechanism has great potential to promote and protect human rights in the darkest corners of the world”*<sup>124</sup>.

A su vez, la Resolución 5/1<sup>125</sup>, del 18 de junio de 2007, del Consejo de Derechos Humanos, definió las bases, principios y objetivos en los cuales los Estados deberían observar aquel mecanismo.

Un resumen muy claro del modo como los Estados miembros deben proceder en relación al Examen Periódico Universal es ofrecido por la Université d'été des droits de l'homme et du droit à l'éducation (UEDH)<sup>126</sup>, de Ginebra, Suiza:

*“-Bases del examen:*

- *La Carta de las Naciones Unidas*
- *La Declaración Universal de Derechos Humanos*
- *Los instrumentos ratificados por el Estado*
- *Compromisos voluntarios y el Derecho internacional humanitario*
- *Principales características*
- *Promover la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos*
- *Proceso intergubernamental orientado a la acción*
- *Involucra plenamente al Estado en el proceso de examen*
- *Garantiza una cobertura y un seguimiento universal y un trato igual de todos los Estados*
- *Completar los otros mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos*
- *Con participación de las partes implicadas, incluidas las ONG y las Instituciones Nacionales*
- *Objetivos*

---

<sup>124</sup> En <<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx>>.

<sup>125</sup> La íntegra del documento se encuentra en el “Anexo (8).”

<sup>126</sup> Las informaciones se pueden encontrar en el sitio de la universidad <<http://www.cuhd.org/index.htm>> [Consulta: 26 de noviembre de 2009].

- *Mejorar la implementación de los Derechos Humanos, teniendo en cuenta los avances y los retos de cada Estado.*
- *Reforzar las capacidades del Estado y la asistencia técnica a los países, un apoyo cooperativo y un intercambio de buenas prácticas.*

*- Documentos considerados*

- 1. Informe general preparado por el país examinado según el esquema adoptado por el Consejo, preferentemente, sobre la base de una amplia consulta con todos los actores (máximo 20 páginas)*
- 2. Una compilación de las informaciones contenidas en órganos de tratados y procedimientos especiales preparado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) (máximo 10 páginas.)*
- 3. Un tercer informe con informaciones verificables (credible and reliable) procedentes de otras partes implicadas (ONG et Instituciones nacionales) preparado también por el ACNUDH (máximo 10 págs.)*

*Estos documentos deben estar disponibles en las 6 lenguas, seis semanas antes del EPU*

*- Modalidades*

*Examen obligatorio para todos los Estados. Los miembros del Consejo deben someterse al EPU durante su mandato.*

*Examen cada 4 años (48 Estados por año).*

- *La EPU se realiza en un Grupo de Trabajo (GT) compuesto por los todos los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos.*
  - *El GT tiene 3 sesiones anuales de 2 semanas (3 horas por país).*
  - *3 países miembros del Consejo procedentes de 3 regiones geográficas distintas, elegidos por sorteo, serán Relatores y facilitadores del proceso. (incluida la preparación del informe del GT).*
  - *Pueden participar en el proceso los Estados observadores y las partes implicadas (ONG).*
  - *El dialogo interactivo tiene lugar en el GT.*
  - *El resultado final es adoptado por el Consejo en plenaria.*
- Conclusiones y seguimiento*

- *Las conclusiones del examen se publican en un informe adoptado por el Consejo en el que se resumen todos los debates, las recomendaciones y compromisos voluntarios de los Estados.*
- *Los Estados antes de la adopción pueden aclarar puntos que a su juicio no hay quedado claros.*
- *Los Observadores y las partes implicadas pueden presentar puntos de vista y recomendaciones antes de la adopción*
- *Examen posterior basado en la implementación de las recomendaciones del precedente examen.*
- *El Consejo decide si es necesario un seguimiento particular y poner conocimiento de la comunidad internacional el caso si no hay cooperación con el mecanismo”.*

Al sustentar la propuesta del Examen Periódico Universal, y considerándose los mecanismos ya existentes en el seno del Consejo de Derechos Humanos y que han sido absorbidos con la extinción de la Comisión de Derechos Humanos, Amnistía Internacional ha hecho las siguientes observaciones<sup>127</sup>:

*“Ninguno de los órganos de derechos humanos de la ONU examina el comportamiento de todos los Estados respecto a los derechos humanos o analiza sistemáticamente la manera de mejorar ese comportamiento mediante una mejor aplicación de todas las obligaciones y los compromisos en materia de derechos humanos. El examen periódico universal puede complementar el trabajo de esos órganos proporcionando una cobertura amplia y sistemática.*

*La Resolución 60/251 establece que el mecanismo de examen periódico universal complementará, sin duplicarlo, el trabajo de los órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos. La naturaleza, el alcance y la actividad de los órganos de los tratados se diferencian bastante de los previstos para el mecanismo de examen periódico universal por los siguientes motivos. En primer lugar, la revisión de los órganos de vigilancia de los tratados se lleva a*

---

<sup>127</sup>El comentario completo se puede ver en <http://www.amnesty.org/es/library/asset/IOR40/033/2006/es/6294e320-d3ec-11dd-8743-305bea2b2c7/ior400332006es.html> [Consulta: 26 de noviembre de 2009].

*cabo entre el Estado Parte y el órgano de vigilancia correspondiente, compuesto por miembros independientes con experiencia en el ámbito del tratado en cuestión. En segundo lugar, puesto que muchos Estados aún no han ratificado los siete tratados principales de derechos humanos, y por lo tanto no están sometidos al examen periódico de todos los órganos de vigilancia, la revisión que llevan a cabo estos órganos no abarca ni todos los países ni todos los derechos humanos.(12) En tercer lugar, la periodicidad de las revisiones del cumplimiento por parte de los Estados Partes de las obligaciones legales contraídas en virtud de los tratados viene determinada por el ciclo fijo de presentación de informes de esos tratados, que en la mayoría de los casos es de un informe cada cuatro o cinco años.(13) En cuarto lugar, la revisión del cumplimiento por parte de los Estados Partes de las obligaciones contraídas en virtud de los tratados se basa en los informes preparados por los propios Estados y, por lo tanto, tiende a hacer hincapié en los aspectos positivos, más que en la identificación objetiva de impedimentos. Por último, a la hora de elaborar sus observaciones finales y recomendaciones tras examinar el cumplimiento por parte de los Estados, los órganos de vigilancia de los tratados no examinan sistemáticamente las necesidades de fomento de la capacidad.*

*El sistema de Procedimientos Especiales también es diferente de lo que se prevé para el examen periódico universal.(14) Ese sistema observa la situación de los derechos humanos en un país individual concreto o en relación con un conjunto específico de derechos en todo el mundo e informa al respecto, conforme establecen las resoluciones que determinan sus mandatos individuales. Estas actividades las llevan a cabo expertos independientes que se centran en los derechos o el país abarcados por sus mandatos específicos. Los Procedimientos Especiales pueden plantear motivos de preocupación en torno a los derechos humanos directamente al gobierno en cuestión, realizar visitas al país y formular recomendaciones al gobierno sobre las acciones que deben emprenderse para abordar las violaciones de derechos humanos, y también pueden llevar a cabo estudios generales para destacar fenómenos de derechos humanos y avanzar en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. La capacidad de los procedimientos temáticos para*

*abarcar sistemáticamente todos los países se ve también limitada, ya que la mayoría de los Estados todavía no han cursado una invitación permanente a los Procedimientos Especiales para que visiten su país,(15) y muchos Estados no responden adecuadamente a las comunicaciones, llamamientos, peticiones para visitar el país o recomendaciones de los Procedimientos Especiales.*

*Un mecanismo fuerte y efectivo de examen periódico universal podría aportar una importante función complementaria al trabajo de los órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos, a los Procedimientos Especiales y al resto del sistema de derechos humanos de la ONU. Puede aportar una evaluación política de situaciones que los expertos independientes y los órganos de vigilancia no pueden evaluar, y puede fomentar respuestas de política adecuadas basadas en esas evaluaciones.(16) El examen periódico universal se encuentra asimismo en una posición excepcional para asumir cuestiones importantes que rara vez se abordan en otras instancias, como por ejemplo los motivos para que un Estado no coopere con los órganos de vigilancia o con los Procedimientos Especiales, los medios para superar esos obstáculos, la identificación de las necesidades de fomento de la capacidad o la manera de propiciar la ratificación de los principales instrumentos de derechos humanos”.*

### **b.2.2 – PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA**

Es un mecanismo creado con base en la Resolución 1503 (XLVIII), con las modificaciones de la Resolución 200/3, ambas del Consejo Económico y Social-ECOSOC, destinado a proteger las víctimas de manifiestas violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales que se produzcan en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia.

La denuncia puede ser presentada por una persona o un grupo de personas que afirmen ser víctimas de violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales, o una persona o grupo de personas, incluidas ONG, que actúen de buena fe de conformidad con los principios de derechos humanos, no tengan posturas políticamente motivadas contrarias a lo dispuesto en la Carta de las

Naciones Unidas y que sostengan tener conocimiento directo y fidedigno de esas violaciones. Debe contener una descripción fáctica de las presuntas violaciones, incluidos los derechos que supuestamente se hayan vulnerado.

Su carácter es confidencial con el objetivo de aumentar la cooperación con el Estado interesado. En el caso del denunciante, si este solicita que no se dé a conocer su identidad, ésta no se comunicará al Estado interesado.

Para ser admisible no puede presentar motivaciones manifiestamente políticas y su objeto debe ser compatible con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables en el campo de los derechos humanos. Deben estar agotados los recursos de la jurisdicción interna, salvo que parezcan que esos recursos serían ineficaces o podrían prolongarse injustificadamente. El lenguaje empleado no puede ser insultante, pero, si la comunicación cumple los demás criterios de admisibilidad y una vez suprimidas las expresiones insultantes podrá ser examinada.

No serán admisibles las Comunicaciones basadas exclusivamente en informes difundidos por los medios de comunicación y que se refieran a un caso que parezca revelar un cuadro persistente de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos del que ya se esté ocupando un procedimiento especial, un órgano creado en virtud de un tratado u otro procedimiento de denuncia análogo, de las Naciones Unidas o regional, en la esfera de los derechos humanos.

Las comunicaciones, una vez admitidas por el Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones, serán transmitidas a los Estados interesados a fin de recabar su parecer sobre las denuncias de violaciones. Cabrá al GT sobre Comunicaciones evaluar las denuncias en cuanto al fondo, en particular para determinar si las comunicaciones, por sí solas o en combinación con otras, parezcan revelar un cuadro persistente de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y las encaminará al Grupo de Trabajo sobre Situaciones, juntamente con sus recomendaciones. Todas las decisiones del

Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones se basarán en una rigurosa aplicación de los criterios de admisibilidad y deberán estar debidamente justificadas.

El Grupo de Trabajo sobre Situaciones, basándose en la información y las recomendaciones que le haya facilitado el Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones, y si no desestimarlos, deberá presentar un Informe al Consejo, en decisión debidamente justificada, y también formulando recomendaciones sobre la manera de proceder, normalmente en forma de un proyecto de resolución o decisión relativo a la situación que se le haya remitido. El GT sobre Situaciones podrá también solicitar nuevas informaciones al Estado interesado.

El Estado interesado deberá cooperar con el procedimiento de denuncia y hará todo lo posible para proporcionar respuestas sustantivas a cada una de las solicitudes de los Grupos de Trabajo o del Consejo. Asimismo, se esforzará al máximo por proporcionar una respuesta dentro de los tres meses siguientes a la formulación de las solicitudes, pudiendo prorrogarse el plazo, de ser necesario, a petición del Estado interesado.

Los casos que el Grupo de Trabajo sobre Situaciones señale para su atención serán examinadas por el Consejo con la frecuencia que sea necesaria pero al menos una vez al año. El Consejo examinará de manera confidencial los Informes del Grupo de Trabajo sobre Situaciones, a menos que el Consejo decida otra cosa, principalmente cuando el Grupo de Trabajo sobre Situaciones recomiende al Consejo que examine una situación en sesión pública, en los casos de manifiesta e inequívoca falta de cooperación del Estado interesado.

Para garantizar que el procedimiento de denuncia esté orientado a las víctimas, sea eficiente y se lleve a cabo de manera oportuna, el período de tiempo entre la transmisión de la denuncia al Estado interesado y su examen por el Consejo no excederá, en principio, de 24 meses.

El procedimiento de denuncia garantizará que tanto el denunciante como el Estado interesado sean informados de las principales actuaciones de los dos Grupos de Trabajo y del Consejo

Cuando no se justifique su examen o la adopción de medidas ulteriores, la situación será mantenida en estudio y se solicitará al Estado interesado que proporcione información adicional dentro de un plazo de tiempo razonable, pudiéndose nombrar a un experto independiente y altamente calificado para que siga de cerca la situación e informe al Consejo al respecto, incluso con la posibilidad de que el asunto deje de ser examinado de modo confidencial pasando a proceder a su examen público. Es posible también que se recomiende al ACNUDH que preste cooperación técnica, asistencia para el fomento de la capacidad o servicios de asesoramiento al Estado interesado.

### **b.2.3 – EL SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES Y SUS ÓRGANOS**

Por la Resolución 60/251 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que estableció el Consejo de Derechos Humanos, el Consejo pasó a asumir todos los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades de la extinta Comisión de Derechos Humanos, con el objetivo de mantener el sistema de procedimientos especiales, incluso cabiéndole examinar, perfeccionar y racionalizar todos los procedimientos existentes.

Así es que, actualmente, el Consejo de Derechos Humanos desarrolla directamente las acciones a favor de la tutela de los derechos humanos por sus órganos permanentes, anteriormente apuntados, como el Comité Asesor, los Grupos de Trabajo de Comunicaciones y de Situaciones, como también por los órganos especiales, temporarios, nombrados en auxilio a aquellas labores del Consejo de Derechos Humanos<sup>128</sup>.

---

<sup>128</sup> Sobre el tema de los nuevos labores del Consejo de Derechos Humanos y sus procedimientos especiales, en relación a los mecanismos extra convencionales, hay un breve y muy interesante estudio intitulado "*La reforma de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos: ¿una mejora de los mecanismos extra convencionales?*" de la Profesora asociada de Derecho internacional público de la Universitat Autònoma de Barcelona, JULIA GIFRA DURALL, publicada en el



Estos órganos especiales tienen sus titulares genéricamente conocidos como “Expertos”, actúan en situaciones específicas, y componen el “Sistema de Relatores Especiales” o “Sistema de Procedimientos Públicos Especiales del Consejo de Derechos Humanos”. Son designados por el Secretario General o por el Consejo de Derechos Humanos, para analizar el cumplimiento de los derechos humanos o investigar sus violaciones graves, presentadas por denuncias o quejas particulares contra Estados, encaminadas a Naciones Unidas, y con el objetivo de alcanzar su protección, estando sus mandatos basados en las Resoluciones 1235, de 1967, y 1503, de 1970, del Consejo Económico y Social-ECOSOC.

El cauce jurídico de legitimación de los órganos especiales son los principios y reglas mínimas de las normas generales del Derecho Internacional, o normas de *ius cogens*, así como las normas convencionales con relación a los tratados ratificados por el país sometido a las labores específicas de este sistema de control y protección, más allá de la competencia que es asegurada a Naciones Unidas para establecer órganos subsidiarios que permitan el desenvolvimiento de sus actividades, de acuerdo con el artículo 7.2, de la Carta, y, en este aspecto, por el deber de colaboración de todos los Estados con relación al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluso caracterizándose la falta de cooperación del Estado en estos temas como incumplimiento a los artículos 55.c y 56 de la Carta de la ONU<sup>129</sup>.

Este modo de protección presenta como finalidad la elaboración de “Informes” sobre la cuestión investigada, con la formulación de conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos. Excepcionalmente, puede actuar preventivamente para evitar que se consuma la violación reclamada, pudiendo emitir condenas a los Estados y asegurar indemnización a la víctima.

---

*Anuário de Direitos Humanos*, Nueva Época, vol 10, 2009, pp. 223-259, disponible en el sitio web <<http://revistas.ucm.es/der/02120364/articulos/ANDH0909110223A.PDF>> [Consulta: 15 de octubre de 2009].

<sup>31</sup> Debido al rechazo de Cuba en cooperar con el Relator Especial y la CDH, ésta ha expedido la Resolución 1996/69, que en su párrafo 3 de la parte dispositiva, recordaba este deber de los Estados miembros de la ONU, conforme apunta VILLÁN DURÁN, C., *Curso ...*, op. cit., p. 673.

Estos órganos especiales nombrados en auxilio a las labores del Consejo de Derechos Humanos, son identificados con las más diversas denominaciones. Son unipersonales, como el Experto, Relator, Relator Especial, Representante Especial, Representante del Secretario General, y el Enviado Especial, y son también multi-personales, como la Comisión, Misión, Grupo de Expertos, Grupo Especial de Expertos, Grupo de Trabajo, Comité Especial, y el Comité Permanente. Al tiempo de la extinta Comisión de Derechos Humanos, estas denominaciones eran definidas por el correspondiente órgano creador, es decir, la Asamblea General, el Secretario General o la propia Comisión de Derechos Humanos. De ellos, el primer mandato fue una Comisión, nombrada en 1952, por la Resolución 616 (VII) de la Asamblea General, para analizar la situación del apartheid en Sudáfrica, y el último establecido en 2008, por la Resolución 7/22, del Consejo de Derechos Humanos, con el nombramiento del “Experto Independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento”<sup>130</sup>.

Sobre estas distintas denominaciones y designaciones a estos órganos especiales, y las razones que las justifican, VILLÁN DURÁN señala que la cuestión refleja la graduación de independencia política que se deseaba conferir a los mandatos, incluso teniendo en cuenta, en este aspecto, al órgano de nombramiento, destacando que el experto “*gozará de mayor grado de independencia*” si se encontraba más vinculado a la extinta Comisión de Derechos Humanos que al Secretario General, éste con actuaciones más político-diplomático y aquella con acciones más técnicas, pudiendo la definición de estas denominaciones del mandato llevar a “*alambicados debates políticos en el contexto de la negociación diplomática del proyecto de resolución*”. Sobre eso, aquel profesor ofrece una definición de jerarquía entre aquellos órganos - comparación limitada a los órganos unipersonales - definido en función del menor al mayor grado de independencia: junto al Secretario General - Representante del Secretario General, Representante Especial del Secretario General, Experto nombrado por el Secretario General, Experto Independiente nombrado por el Secretario General; junto a la extinta Comisión de Derechos Humanos - Enviado Especial de la CDH, Experto de la Comisión, Experto

---

<sup>130</sup> Según datos obtenidos el 22 de noviembre de 2009 junto a la página web de Naciones Unidas <[www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/themes.htm](http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/themes.htm)>.

Independiente de la CDH, Representante Especial de la CDH, y el Relator Especial de la CDH<sup>131</sup>.

Así, los mandatos de los expertos vinculados a la extinta Comisión de Derechos Humanos, generalmente a título unipersonal, tenían sus actividades con naturaleza estrictamente técnica, más independiente, para una amplia y exhaustiva investigación. A su vez, los vinculados por el Secretario General, generalmente a título multipersonal o colectivo, tenían una actuación de naturaleza política, consensual, intentando llegar a una cooperación técnica de asesoramiento y asistencia al desarrollo de los derechos humanos, y con sus trabajos realizándose según orientaciones de los países o regiones a los cuales se encuentran vinculados.

Cada órgano especial ha desarrollado sus propios métodos de trabajo, de acuerdo con las circunstancias y necesidades relativas a la complejidad que le son peculiares. No obstante, hay que considerar que algunos principios y criterios básicos son comunes a todos los mandatos. Dada *“la importancia de preservar y fortalecer el sistema de procedimientos especiales”* y considerándose que *“estos procedimientos y mecanismos deberían poder armonizar y racionalizar su trabajo por medio de reuniones periódicas”*, conforme se ha señalado en la Declaración y Programa de Acción de Viena, en su párrafo 95, segunda parte, de la Segunda Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, se ha constituido la Reunión de Relatores Especiales, Representantes, Expertos y Presidentes de Grupos de Trabajo, que desde 1994 pasó a reunirse anualmente con el objetivo de alcanzar una mayor eficacia en el funcionamiento de estos mecanismos de tutela de los derechos humanos. Incluso, para disciplinar de un modo más uniforme y regular el trabajo desarrollado por aquellos órganos especiales, desde la definición de sus mandatos hasta el modo de sus actuaciones, es que fue aprobado por la “reunión de Relatores Especiales” un Manual definiendo estas cuestiones<sup>132</sup>.

---

<sup>131</sup> Ídem, pp. 687-691, en las cuales el autor ofrece un detallado estudio de los datos vinculados a cada uno de estos órganos.

<sup>132</sup> Trátase del documento “HR NONE/2000/91” aprobado en junio de 1999, en la sexta reunión de Relatores Especiales, identificado como “Manual para Relatores Especiales/Representantes/Expertos y Presidentes de Grupos de Trabajo de Procedimientos Especiales de la Comisión de Derechos Humanos y del Programa de Servicios de Asesoramiento”, en VILLÁN DURÁN, C., *Curso...*, op. cit., pp 927-939.

Los mandatos, es decir, los actos de creación y constitución de los órganos especiales de investigación, son, actualmente, formalizados por Resolución de la Asamblea General o del Consejo de Derechos Humanos-CDH, conforme el caso, en nombramiento de la responsabilidad del Secretario General de Naciones Unidas o del Presidente del Consejo de Derechos Humanos, en el ejercicio de su potestad discrecional, teniendo en cuenta la integridad moral, calificaciones técnicas e independencia del experto.

Para la selección de los titulares de mandatos y la revisión de todos los mandatos de los procedimientos especiales, el Consejo de Derechos Humanos inició, a partir de junio de 2006, un proceso de construcción institucional, y adoptó, el 18 de junio de 2007, la Resolución 5/1 llamada “Construcción Institucional del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”<sup>133</sup>, y que trae, en su anexo, la definición de los criterios para selección y nombramiento de los titulares de mandato, disponiendo que:

*“39. Al proponer, seleccionar y nombrar a los titulares de mandatos serán de fundamental importancia los siguientes criterios generales: a) conocimientos especializados; b) experiencia en la esfera del mandato; c) independencia; d) imparcialidad; e) integridad personal; y f) objetividad.*

*40. Se debería prestar la debida atención al equilibrio de género y a una representación geográfica equitativa, así como a una representación apropiada de diferentes sistemas jurídicos.*

*41. Los requisitos técnicos y objetivos para los candidatos seleccionables como titulares de mandatos serán aprobados por el Consejo en su sexto período de sesiones (primer período de sesiones del segundo ciclo) para garantizar que los candidatos seleccionables sean personas altamente calificadas con reconocida competencia, conocimientos especializados pertinentes y amplia experiencia profesional en la esfera de los derechos humanos.*

---

<sup>133</sup> Aprobada por la Resolución A/HRC/5/21. Su texto en la íntegra se encuentra disponible en el anexo.

*42. Podrán proponer candidatos a titulares de mandatos de procedimientos especiales las siguientes entidades; a) gobiernos; b) grupos regionales que operen dentro del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas; c) organizaciones internacionales o sus oficinas (por ejemplo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos); d) organizaciones no gubernamentales; e) otros órganos de derechos humanos y f) candidaturas individuales”<sup>134</sup>.*

Y con el objetivo de reforzar por un lado la eficacia y la independencia del sistema de los procedimientos públicos especiales, y por otro la eficacia e independencia individual de los titulares de mandato, el Consejo adoptó, en junio de 2007, la Resolución 5/2<sup>135</sup>, estableciendo un “Código de Conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales”. En el mes de junio de 2008, se adoptó el “Manual de los procedimientos especiales de Naciones Unidas”, que consiste en una guía sobre los métodos de trabajo empleados por los titulares de mandato, y el “Procedimiento Interno de Asesoramiento para Examinar las Prácticas y los Métodos de Trabajo”.

Estas medidas, en tanto necesarias para racionalizar las labores de los procedimientos especiales, ha recibido críticas, como las de Amnistía Internacional al comentar que *“La capacidad de los Procedimientos Especiales de desarrollar métodos de trabajo propios les ha permitido adaptarse a nuevas situaciones o circunstancias concretas. Los intentos de negociar los métodos de trabajo de los Procedimientos Especiales y de imponerles un código de conducta pueden menoscabar gravemente su independencia, limitar su eficacia en la protección de los derechos humanos y poner en entredicho, por tanto, la credibilidad del Consejo de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas en general”<sup>136</sup>.*

---

<sup>134</sup> Resolución A/HRC/5/21, pp. 11-12.

<sup>135</sup> Su texto en la íntegra se encuentra disponible en el “Anexo (9)”.

<sup>136</sup> Texto contenido en el documento IOR 40/043/2006, en internet <<https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/Texto%20completo%20del%20Informe?CMD=VEROBJ&MLKOB=25044223838>>[Consulta: 22 de noviembre de 2009].

### **b.2.3.1 – LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE CONFORMIDAD CON LAS RESOLUCIONES 1235 Y 1503 DEL ECOSOC**

Los “Procedimientos Especiales” son también conocidos como “Sistema de Relatores Especiales”, “Mecanismos Extra-convencionales” o “Mecanismos basados en la Carta”.

Las acciones concretas de tutela de los derechos humanos en el ámbito extra-convencional, con relación al tratamiento de las reclamaciones, denuncias o quejas particulares, realizadas por la Comisión de Derechos Humanos y actualmente adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos, derivan de la aplicación de las Resoluciones 1235, de 1967, y 1503, de 1970, del Consejo Económico y Social-ECOSOC.

Hasta la edición de las referidas Resoluciones, las denuncias particulares contra Estados sólo eran admitidas en el seno del sistema convencional, junto a los Comités, e inicialmente limitado al Comité de Derechos Humanos, por su previsión en el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos<sup>137</sup>.

Así ocurría por predominar el entendimiento restrictivo de aceptación de aquellas denuncias por los órganos integrantes de la estructura principal de las Naciones Unidas, debido a la prohibición de intervenir en asuntos esencialmente vinculados a la jurisdicción interna de los Estados, según recoge el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas, con lo que las diversas denuncias particulares de violación a los derechos humanos que llegaban a la ONU no tenían acogida. Lo máximo que se había conseguido conquistar con relación a estas denuncias era admitir su compilación en listas de comunicaciones, una confidencial y otra no, para conocimiento de la extinta Comisión de los Derechos Humanos, medida ésta que fuera autorizada por la Resolución 728 F (XXVIII), de 30 de julio de 1959, adoptada por el Consejo Económico y Social.

---

<sup>137</sup> GONZÁLEZ CAMPOS, J. D., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I., SANTA MARÍA, P. A. S., *Curso de Derecho Internacional Público*, 7ª. ed., Civitas, Madrid, 2002, p. 752.

### **b.2.3.1.1 – RESOLUCIÓN 1235**

Las denuncias o quejas particulares a los órganos internacionales siempre se han presentado como uno de los modos más eficientes de defensa contra las violaciones de los derechos humanos, como medida para dar conocimiento a la comunidad mundial para la adopción de alguna providencia tendente a interrumpir su práctica. Por la Resolución 1235 (XLII) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas-ECOSOC, de 3 de junio de 1967<sup>138</sup>, también conocida como “Procedimiento 1235”, se estableció la primera medida de regulación de la aceptabilidad de dichas denuncias como “*violaciones notorias*” a los derechos humanos, conforme el artículo 2, de la referida Resolución, y que se procesaba en el ámbito de la extinta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su deseo de examinar, acompañar y adoptar medidas sobre la situación de los derechos humanos en todo el mundo<sup>139</sup>, y que ahora pasaron a la competencia del Consejo de Derechos Humanos.

En sus objetivos, este procedimiento se presenta con un amplio espectro de actuación, tanto referido a la adopción de medidas preventivas y correctoras, como protectoras y sancionadoras. Y, más allá de identificarse como un procedimiento, el contenido de las disposiciones de la Resolución 1235 también se caracteriza por afirmar una regla de competencia a favor de la extinta Comisión de Derechos Humanos.

En cuanto a la adopción de medidas de protección y garantía en concreto que justificaron la Resolución 1235 (XLII), su origen deriva del incumplimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales por la política de apartheid practicada por la República de Sudáfrica en su territorio y en el territorio de África

---

<sup>138</sup> Adoptada en la 42ª Sesión de la ECOSOC, el 6 de junio de 1967.

<sup>139</sup> Hasta entonces, las quejas y reclamaciones particulares sólo resultaban registradas en listas por la Secretaría General, de acuerdo con la Resolución 728-F (XXVIII), del Consejo Económico y Social-ECOSOC, y estrictamente para su comunicación a la Comisión de Derechos Humanos y a los Estados reclamados. Anteriormente a esta Resolución 728-F, no se podían acoger tales denuncias, por entender el ECOSOC que ellas interferían en la jurisdicción interna de los Estados, afectando el principio de no-intervención contenido en el artículo 2.7 de la Carta de Naciones Unidas, incluso editando las Resoluciones 75 (V) y 76 (V), en 1947, por las cuales impedía la aceptación de dichas denuncias.

Sudoccidental<sup>140</sup>, como también está vinculada a la discriminación racial practicada en Rhodesia del Sur, en la década de sesenta<sup>141</sup>.

El paso definitivo de la consolidación de este procedimiento ocurrió con el “caso chileno” en 1975, marcado por la dictadura del General Pinochet, a partir de lo cual la práctica de la extinta Comisión de Derechos Humanos-CDH se desarrolló de modo a viabilizar investigaciones incluso sobre materias no contempladas inicialmente en la Resolución 1235<sup>142</sup>.

Así, por la Resolución 1235, de 1967, es que fue conferido a la comunidad internacional, por la Comisión de los Derechos Humanos, un mecanismo de tutela para un estudio a fondo de las situaciones que revelen un cuadro persistente de violaciones de derechos humanos, permitiendo reaccionar urgentemente y llevando al debate público aquellas situaciones. Debido a esta publicidad, es decir, a la divulgación de los hechos en la comunidad internacional, es que la Resolución 1235 también se ha identificado como “procedimiento público”.

El gran mérito del Procedimiento 1235 fue que inauguró la posibilidad de dar conocimiento a las comunicaciones particulares de violaciones a los derechos humanos, es decir, las sufridas por las propias víctimas, permitiéndose así que países no ratificadores de convenciones de protección a los derechos humanos también pasasen a estar sometidos al control internacional. En consecuencia, la extinta Comisión de Derechos Humanos pasó a disponer de la posibilidad de decidir por

---

<sup>140</sup> Para este caso, la Asamblea General editó la Resolución 616 (VII), de 5 de diciembre de 1952, nombrando una Comisión específica para el tema.

<sup>141</sup> Esta última ha llevado al nombramiento del Grupo Especial de Expertos de la Comisión de Derechos Humanos en África Meridional, para investigar e informar anualmente sobre dichas violaciones a los derechos humanos, de conformidad con la Resolución 2 (XXIII), de 6 de marzo de 1967, de la Comisión de Derechos Humanos.

<sup>142</sup> Sobre este aspecto de la expansión material que ha tenido el Procedimiento 1235, admitiendo su alcance a otras situaciones que no le están previstas, VILLÁN DURÁN, C., *Curso...*, op. cit., pp. 673-4, advierte que “la doctrina más reciente ha puesto en duda, con razón, el alcance legitimador de la Resolución 1235 de todos los procedimientos especiales creados hasta esta fecha”, siendo que esta legitimación podría encontrarse asegurada por el consentimiento tácito o expreso del Estado interesado. Sobre la cuestión el profesor remite a los trabajos de E. DOMINGUEZ REDONDO, “Crisis y fundamentos de los procedimientos públicos especiales” (tesina), de la Universidad Carlos III de Madrid, 1998, pp. 136-8, y de ROSSANA GONZÁLEZ GONZÁLES, “El control internacional de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas inhumanas y degradantes” (tesis), Granada, editorial de la Universidad, 1998, pp. 246-259.



establecer un órgano especial de investigación, sin que tal medida dependiese del consentimiento del Estado investigado o que fuera exigido el agotamiento de los recursos internos, situaciones éstas indispensables en el sistema convencional.

Dichas violaciones a los derechos humanos se podrían informar por las más diversas fuentes - como las víctimas y organizaciones internacionales -, bajo las más diversas formas - como fax, cartas o telegramas -, y de alcance tanto a casos individuales como a situaciones colectivas.

La viabilidad del conocimiento de las denuncias depende del cumplimiento de los requisitos de identificación de la presunta víctima, identificación de los presuntos autores de la violación, identificación del representante de la comunicación y descripción detallada de las circunstancias del incidente en que se produjo la presunta violación, no admitiéndose reclamaciones que contengan lenguaje insultante o una base política evidente y patente<sup>143</sup>.

El primer paso de trabajo del órgano especial consiste en la realización de las más amplias investigaciones para llevar al conocimiento del órgano competente de modo a la definición de medidas a implementarse. Estas investigaciones se pueden realizar en el propio territorio donde se constatan las violaciones y sin necesitar del consentimiento del Estado interesado. Para proceder a la investigación se admite toda y cualquier fuente de información, sea pública o privada, quedándose a cargo del órgano investigador definir si se trata o no de una fuente fidedigna.

Las conclusiones del experto eran resumidas en unos “Informes” que eran presentados al menos una vez al año a la Comisión de Derechos Humanos-CDH.

---

<sup>143</sup> Requisitos presentados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. En Web <[http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/8/ex\\_conv\\_sp.htm](http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/8/ex_conv_sp.htm)> [Consulta: 20 de marzo de 2009].

Si se entiende que resultaba configurada una violación grave y masiva<sup>144</sup> de los derechos humanos, cabía a la extinta Comisión de Derechos Humanos expedir las normativas necesarias – decisiones o resoluciones – que pasaban a constituirse en el fundamento jurídico de estas medidas. La finalidad del procedimiento era dar conocimiento a la comunidad internacional sobre la cuestión, con amplia divulgación a la sociedad, incluso realizando los debates sobre la situación en sesiones públicas, realizando su característica de un procedimiento público.

Según apunta VILLÁN DURÁN, se trata de un procedimiento cuya naturaleza jurídica no es contenciosa ni acusatoria, prestándose, eso sí, a fines humanitarios, en el sentido de ayudar a un pueblo o grupo de personas que sufren violaciones graves de los derechos humanos, y para encontrar soluciones contra esa crisis, caracterizándose, en consecuencia, como de naturaleza político-humanitaria<sup>145</sup>.

#### **b.2.3.1.1.1 – MECANISMOS DE ACTUACIÓN**

Para concretar sus trabajos, la extinta Comisión de Derechos Humanos ha adoptado dos líneas de actuación específicas, mantenidas por el Consejo de Derechos Humanos. Una, ubicando las violaciones de derechos humanos en determinados países o regiones, y que se identifica como “procedimiento geográfico”, y, la otra, vinculando las violaciones sobre un determinado tema, materia o fenómeno<sup>146</sup>, que se identifica como “procedimiento temático”, el cual no se encuentra limitado a una determinada región geográfica, sino que tiene alcance en todo el mundo.

---

<sup>144</sup> El término “masiva” tratase de un concepto abierto al punto de los Presidentes de los Comités de derechos humanos haber definido que cabría a cada órgano creado en virtud de un Tratado decidir cuales las situaciones de violaciones a los derechos humanos que se encuadrarían en aquella definición para fines de comunicarse al Consejo de Seguridad. Este registro se puede encontrar en el documento A/48/18, Anexo III, p. 2, ítem 4, disponible en <[http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/A\\_48\\_18\\_Annex\\_III\\_Spanish.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/A_48_18_Annex_III_Spanish.pdf)> [Consulta: 20 de marzo de 2009].

<sup>145</sup> VILLÁN DURÁN, C., *Curso ...*, op. cit., pp. 630 y 672.

<sup>146</sup> El término “materia” es presentado por ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., *La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Violación de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales Estudio de los Procedimientos Públicos Especiales*, 3 v., Universidad Complutense, Madrid, p. 1049.

Los mandatos de los “expertos” son por un período de tres años para los procedimientos temáticos, y de un año para los procedimientos geográficos<sup>147</sup>, pudiendo ser renovables, con limitación al período máximo de seis años, en ambos casos<sup>148</sup>.

#### **b.2.3.1.1.1.1 – PROCEDIMIENTO GEOGRÁFICO**

Por este procedimiento basado en la Resolución 1235, se instaura mecanismo de control vinculado a un determinado Estado o región, debido a masivas violaciones de los derechos humanos comprobadas en el respectivo territorio, de modo que incentive a los Gobiernos a la práctica de acciones tendentes a superar dichas violaciones, o a la adopción de medidas que lleven a su cese inmediato. Es una actuación de la comunidad internacional que se puede entender como de naturaleza “*ratione personae*”.

La iniciación del procedimiento se hace por “Resolución” editada para el caso concreto, en la cual se define la situación a ser investigada, y se formulan recomendaciones al Estado investigado sobre las medidas a adoptar para hacer desaparecer la violación.

Al mismo tiempo que la extinta Comisión de Derechos Humanos, para definir los términos de la “Resolución” se desarrollaban varias negociaciones entre los delegados gubernamentales y los representantes del Estado interesado, de modo discreto y a puerta cerrada, para que pudiesen llegar al consenso de un texto que el Estado pudiera aceptar. De ahí, se tenía al Estado afectado como un “gran protagonista”<sup>149</sup> en el proceso de negociación del proyecto de aquella Resolución.

Aspecto interesante en este procedimiento es que, en la práctica, el Estado sometido a presiones de la Comunidad Internacional por las violaciones a los derechos humanos en su territorio adoptaba la iniciativa de invitar expertos de

---

<sup>147</sup> HR NONE/2000/91, ítem 9.

<sup>148</sup> Definido por la CDH, Dec. 2000/109, de 26 de abril de 2000, cf. VILLÁN DURÁN, C. *Curso ...*, op. cit., p. 679.

<sup>149</sup> VILLÁN DURÁN, C., *Curso ...*, op. cit., p. 677.

órganos temáticos – como, por ejemplo, los que se vinculan a las prácticas de la tortura –, para evitar ser compelido a soportar una investigación por el procedimiento geográfico. Pero esta iniciativa demostraba que no siempre se alcanzaban los efectos pretendidos, puesto que los propios expertos de los procedimientos temáticos sugerían la creación de órganos para actuar en procedimientos geográficos<sup>150</sup>.

Otro aspecto que ha caracterizado este sistema, era que en los últimos años los países en vías de ser sometidos al procedimiento geográfico obtenían la “Declaración del Presidente”, que consistía en una manifestación del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos a la Comunidad Internacional, presentando su preocupación acerca de la situación de los derechos humanos en aquellos países. La práctica de este expediente ha vaciado la constitución de órganos especiales geográficos, hasta el punto en que, en los últimos diez años sólo han sido nombrados cinco órganos con esta finalidad<sup>151</sup>.

Desde su creación, la Comisión de Derechos Humanos ha constituido cuarenta y siete mandatos geográficos para veintiocho países<sup>152</sup>, lo que refleja que un país podría desencadenar el nombramiento sucesivo de más de un órgano especial en su territorio. Estos mandatos, presentados por orden cronológico, fueron: Comisión de la Asamblea General para Unión Sudáfrica; Misión de la Asamblea General para Vietnam; Grupo Especial de Expertos de la CDH para África Meridional; Relator Especial de los derechos humanos para Camboya; Comité Especial de la Asamblea General para los territorios árabes ocupados; Relator Especial de la CDH para los territorios árabes ocupados, incluida Palestina; Comisión de la CDH para los territorios árabes ocupados; Grupo de Trabajo de la CDH para Chile; Relator Especial de la CDH para Chile; Experto de la CDH para Chile; Representante Especial de la CDH para El Salvador; Experto Independiente del Secretario General para El

---

<sup>150</sup> Un caso concreto al respecto, conforme señala VILLÁN DURÁN, C. *Curso ...*, op. cit., p. 694, es el de Colombia, que en 1996 pasó a ser sometida al Procedimiento Geográfico, pero convirtiéndose éste en la instalación, de carácter permanente, de una Oficina del Alto Comisionado de la ONU. Idéntico expediente fuera adoptado por Nigeria, pero sin que escapase del nombramiento de un Relator Especial en su caso específico.

<sup>151</sup> En 2003, para Liberia, y en 2004 para Burundi, para República Democrática de Congo, República Democrática de Corea y 2005 para Sudán.

<sup>152</sup> Distribuidos del siguiente modo: seis de países de América Latina y Caribe; cuatro de Europa Oriental; nueve de África; y nueve de Asia.

Salvador; Experto del Secretario General para Guinea Ecuatorial<sup>153</sup>; Experto de la CDH para Guinea Ecuatorial; Relator Especial de la CDH para Guinea Ecuatorial; Representante Especial de la CDH para Guinea Ecuatorial; Enviado Especial de la CDH para Bolivia; Representante del Secretario General para Polonia; Relator Especial de la CDH para Afganistán; Relator Especial de la CDH para Guatemala; Representante Especial de la CDH para Guatemala; Experta Independiente del Secretario General para Guatemala; Representante Especial de la CDH para Irán; Experto Independiente de la CDH para Haití; Relator Especial de la CDH para Haití; Misión de la CDH para Cuba; Representante Especial del Secretario General para Cuba; Relator Especial de la CDH para Cuba; Relator Especial de la CDH para Rumanía; Relator Especial de la CDH para Kuwait; Relator Especial de la CDH para Irak; Relator Especial de la CDH para Myanmar; Relator Especial de la CDH para la antigua Yugoslavia; Representante Especial de la CDH de la antigua Yugoslavia; Experto de la CDH para la antigua Yugoslavia; Relator Especial de la CDH para Sudán; Representante Especial del Secretario General para Bougainville; Experto Independiente del Secretario General para Somalia; Relator Especial de la CDH para Ruanda; Representante Especial de la CDH para Ruanda; Relator Especial de la CDH para Burundi; Relator Especial de la CDH para Nigeria, Experto Independiente de la CDH para Burundi; Experto Independiente de la CDH para Liberia; Relator Especial de la CDH para Congo; Relator Especial de la CDH para la República Democrática de Corea y Experto Independiente de la CDH para Sudán.

Hasta agosto de 2010 se encontraban en pleno ejercicio los mandatos del Experto Independiente de la CDH para Burundi; Relator Especial de los derechos humanos en Camboya; Relator Especial de la CDH para la República Democrática de Corea; del Experto Independiente nombrado por el Secretario General para Haití; Relator Especial de la CDH para Myanmar; Relator Especial de la CDH para los territorios palestinos ocupados desde 1967; Experto Independiente del Secretario General para Somalia; Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Sudán<sup>154</sup>, como demuestra el cuadro en anexo a esta tesis<sup>155</sup>.

---

<sup>153</sup> Este mismo órgano fue designado en dos ocasiones distintas: de 1979 a 1980, y de 1993 a 1999.

<sup>154</sup> Según datos contenidos en la página oficial de la ONU en Internet <[www.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/countries.htm](http://www.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/countries.htm)> [Consulta: 30 de julio de 2011],

<sup>155</sup> "Anexo (10)".

#### **b.2.3.1.1.1.2 – PROCEDIMIENTO TEMÁTICO**<sup>156</sup>

Por este procedimiento se entiende la acción protectora de los derechos humanos instaurada con fundamento en un tema específico, en virtud de los comprobados importantes fenómenos de violación en el mundo. Su creación surgió con la cuestión de las desapariciones forzadas de los disidentes políticos, más específicamente en los países del sur de América Latina, planteadas por el Experto designado para analizar la referida situación en Chile – mandato geográfico – por lo que la extinta Comisión de Derechos Humanos acordó extender los labores sobre tales violaciones a todo el mundo, constituyéndose, en consecuencia, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones en 1980.

Debido a sus objetivos, este mecanismo de actuación se puede identificar como un procedimiento “*ratione materiae*”, encontrándose sus trabajos estrictamente vinculados al tema de que se trata. Así como en el “Procedimiento Geográfico”, para concretar sus actuaciones son nombrados órganos especiales, vinculados a cada tema de interés y con las más distintas denominaciones. Con respecto a su composición, no hay ninguna previsión que establezca su número de miembros, pudiendo incluso producirse una situación en que esta composición sea abierta, como ha ocurrido con el Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo.

Para realizar sus labores, y debido a la constatación de violaciones reiteradas con respecto a un específico y cierto tema, el mandatario de la ONU/CDH – persona o grupo – puede realizar visitas a un determinado país, inclusive pudiendo proceder a la investigación de casos individuales, con el contradictorio del Estado, emitiendo dictamen para asegurar medidas de sanción y reparación a la violación individual sufrida. En estos casos, que se han observado concretamente con relación a las detenciones arbitrarias, se ha configurado una acción equivalente al “*habeas corpus*”<sup>157</sup>.

---

<sup>156</sup> Un extenso estudio sobre el tema es presentado por CONCEPCIÓN ESCOBAR HERNÁNDEZ, *La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Violación de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales: Estudio de los Procedimientos Públicos Especiales*, Tomo III, Editorial de la Universidad Complutense, Madrid, 1988, pp. 1048-1546.

<sup>157</sup> VILLÁN DURÁN, C., *Curso ...*, op. cit., p. 710.

Las labores realizadas por este procedimiento concluyen con la presentación de Informes, entre los cuales se incluye el “Informe de Misión”, vinculado a la situación propia de un determinado país, y que son presentados anualmente. Dichos Informes deben ser analizados por el Consejo de Derechos Humanos en sesiones públicas, para la adopción de la Resolución correspondiente, en la cual se busca evitar cualquier mención específica a determinado o determinados países, para no concluir con su condena internacional, aunque sea ésta una situación propia del efecto cuasi-contencioso del procedimiento instaurado.

Al contrario de los mandatos geográficos, estos mandatos temáticos no presentan mayores resistencias para su creación puesto que, en general, no llegan a exponer la situación específica de un país a la comunidad internacional.

En cuanto a los temas, se han logrado constituir treinta y tres mandatos temáticos, algunos ya extinguidos, y sobre las siguientes cuestiones<sup>158</sup>: “agua potable y saneamiento”, “alimentación”, “defensores de los derechos humanos”, “derechos culturales”, “derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”, “desapariciones forzadas o involuntarias”, “descendencia africana”, “detención arbitraria”, “deuda externa”, “discriminación contra la mujer”, “educación”, “ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias”, “empresas transnacionales”, “esclavitud”, “extrema pobreza”, “independencia de los magistrados y abogados”, “indígenas”, “libertad de opinión y expresión”, “libertad de religión y de creencias”, “personas internamente desplazadas”, “uso de mercenarios”, “migrantes”, “minorías”, “productos y desechos tóxicos y peligrosos”, “racismo”, “venta de niños”, “violencia contra la mujer”, “vivienda adecuada”, “racismo”, “salud física y mental”, “solidaridad internacional”, “terrorismo”; “tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” y “trata de personas” .

---

<sup>158</sup> De acuerdo con datos del Consejo de Derechos Humanos, disponible en el sitio <<http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/themes.htm>> [Consulta: 30 de julio de 2011] y CONCEPCIÓN ESCOBAR HERNÁNDEZ, La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, op. cit. p. 714-34.

En 2011<sup>159</sup>, los órganos especiales temáticos de investigación en actividad son<sup>160</sup>:

- Grupo de Trabajo sobre:
  - descendencia africana;
  - detención arbitraria;
  - desapariciones forzadas o involuntarias;
  - uso de mercenarios como medio de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación;
  - discriminación de la mujer en la legislación y en la práctica;
- Experto Independiente sobre:
  - derechos culturales;
  - cuestiones de las minorías;
  - derechos humanos y la solidaridad internacional.
  - las consecuencias de las políticas de reforma económica y de la deuda externa para el goce efectivo de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales;
- Relator Especial sobre:
  - el derecho a una vivienda adecuada;
  - libertad de reunión y asociación pacíficas;
  - formas contemporáneas de la esclavitud;
  - a venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía;
  - ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias;
  - extrema pobreza y derechos humanos;
  - el derecho a la alimentación;
  - la libertad de opinión y expresión;

---

<sup>159</sup> Datos disponibles en la web del Consejo de Derechos Humanos, <<http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/themes.htm>> [Consulta: 29 de agosto de 2009].

<sup>160</sup> En el "Anexo (11)" de este trabajo se encuentra presentado un cuadro con algunos aspectos de los mandatos temáticos, en datos del 1 de mayo de 2011, obtenidos en la página web del Consejo de Derechos Humanos <<http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/themes.htm>>. [Consulta: 31 de julio de 2011].



- la libertad de religión y de creencias;
  - el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental;
  - la independencia de los magistrados y abogados;
  - los derechos de los pueblos indígenas;
  - los derechos de las personas internamente desplazadas;
  - los derechos de los migrantes;
  - la formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia, y formas conexas de intolerancia;
  - agua potable y el saneamiento;
  - promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo;
  - la tortura, y o otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
  - los efectos nocivos para el goce de los derechos humanos del traslado y vertimiento ilícito de productos y desechos tóxicos y peligrosos;
  - la trata de personas, especialmente las mujeres y los niños;
  - la violencia contra la mujer;
  - el derecho a la educación.
- 
- Representante Especial del Secretario General sobre
    - la situación de los defensores de los derechos humanos;
    - cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales;

El procedimiento especial temático ya tuvo también el Comité Permanente entre Organismos del Sistema de Naciones Unidas para Asunto de Éxodos Masivos, el Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo, el Experto Independiente sobre el Derecho al Desarrollo, el Relator Especial sobre la Cuestión de las Repercusiones de los Conflictos Armados sobre los Niños, todos estos ya extinguidos. Ha tenido, todavía, el Relator Especial sobre la Utilización de Mercenarios como Medio para Violar los Derechos Humanos y Obstaculizar el Ejercicio de los Pueblos a la Libre Determinación y que se ha convertido en el Grupo de Trabajo sobre el Uso de

Mercenarios como Medio de Obstaculizar el Ejercicio del Derecho de los Pueblos a la Libre Determinación.

### **b.2.3.1.1.1.3 – ACCIÓN URGENTE**

La acción urgente es la medida adoptada por los órganos especiales para la protección individual de los derechos humanos en los casos concretos de su violación, y por la cual los referidos órganos pasan a ejercer protección específica a las víctimas. En general, estos casos están más relacionados a cuestiones de desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias o amenazas de ejecución, detención arbitraria y tortura.

La creación del Procedimiento 1235 no tenía como objetivo atender a la protección de situaciones individuales de violaciones de los derechos humanos, sino que su objetivo era el tratamiento global de dichas violaciones. Por las acciones urgentes, o llamamientos urgentes, es que se pasa a admitir la posibilidad de una medida protectora específica e inmediata contra tales violaciones, de carácter cautelar y preventivo para evitar la consumación de una ofensa a la víctima<sup>161</sup>. Es una iniciativa que se produce en el curso del procedimiento ya instaurado, es decir, se trata de una medida incidental que pretende dotar de eficacia a las medidas de protección respecto de las violaciones concretas o inminentes de derechos humanos.

Esta práctica de las acciones urgentes ha surgido de la propia Comisión de Derechos Humanos al exhortar a algunos de los órganos temáticos que procediesen a reaccionar eficazmente frente a las denuncias individuales de que tenían conocimiento. Tal práctica incluso ha llevado estos órganos a ser identificados como “órganos temáticos de reacción”, en la expresión de FROUVILLE<sup>162</sup>, e incluso caracterizándose tales reacciones como un “recurso de amparo internacional”<sup>163</sup>.

---

<sup>161</sup> Son antecedentes de esta medida las providencias adoptadas por la Comisión de Derechos Humanos, cuando, en el período de 1967 a 1979, ha expedido nueve telegramas a los Gobiernos del Chile, Guatemala, Israel, Reino Unido de Gran Bretaña y Sudáfrica, relativos a determinados casos y situaciones, conforme apuntado por VILLÁN DURÁN, C, *Curso ...*, op. cit, p. 775.

<sup>162</sup> Ídem, p. 740.

<sup>163</sup> Ibídem.

Para su iniciativa<sup>164</sup> cabe al denunciante presentar informaciones suficientes para caracterizar una situación que exija inmediata protección, debiendo por tanto aportar elementos de violación convincentes para superar “*el filtro primero del juicio de credibilidad efectuado por los expertos*”<sup>165</sup>. A este respecto no hay una definición uniforme del juicio de conocimiento de la solicitud para ser ejercitado por cada órgano especial de investigación, los cuales disponen de amplio margen de discrecionalidad sobre la cuestión.

Esta medida protectora se promueve con amplio alcance, incluso pudiendo comprender hechos anteriores al propio mandato constitutivo del órgano especial de investigación, y siempre tendrá por sujeto pasivo al Estado, aunque las violaciones se hayan producido por terceros – como el caso de las actividades de grupos terroristas –. No se exige siquiera el agotamiento de los recursos internos y no está obstaculizada por la eventual protección buscada en otro procedimiento internacional. En general, el procedimiento de la acción urgente exige que la denuncia sea escrita, con identificación del denunciante y de la víctima, presentación de los datos específicos del caso, como las fechas y circunstancias en que ocurrieron.

Admitida la denuncia, cabe al órgano especial competente – Relator Especial, Grupo de Trabajo, etc. – expedir mensaje por el medio más expedito – generalmente fax o telegrama – pidiendo aclaraciones y formulando un llamamiento al Gobierno – en general, por su Ministro de Relaciones Exteriores – para que adopte medidas urgentes tendentes a evitar y a garantizar que no se consume la violación denunciada de lesión irreparable de los derechos humanos. Aunque no haya ninguna disposición normativa al respecto, en algunos casos los Expertos han tornado públicas las acciones urgentes, mediante comunicación a la prensa<sup>166</sup>, lo que ha dado gran publicidad a la cuestión.

---

<sup>164</sup> Las solicitudes de este procedimiento se deben encaminar a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, fax (41 22) 917 9003, o por el correo electrónico “urgent-action@ohchr.org”, identificándose el inicio del texto con las palabras “acción urgente”.

<sup>165</sup> VILLÁN DURÁN, C., *Curso ...*, op. cit., p. 817.

<sup>166</sup> Conforme consta del “Manual para Relatores Especiales/Representantes/Expertos y Presidentes de Grupos de Trabajo de Procedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos y del Programa de Servicios de Asesoramiento”, doc. “HR NONE/2000/91, ítem 27, en texto presentado por VILLÁN DURÁN, C., *Curso ...*, op. cit., pp 927-939.

De los mandatos temáticos hasta 2003, siete han utilizado con frecuencia este instrumento de protección urgente: el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y sobre la Detención Arbitraria; el Relator Especial sobre Ejecuciones; Relator Especial sobre Tortura; Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados; Relator Especial sobre la Violencia contra la Mujer, y el Relator Especial sobre los Defensores de los Derechos Humanos. En cuanto a los demás órganos especiales, nada impide que también puedan hacer uso de la acción urgente cuando las circunstancias lo justifiquen, incluso con relación a los órganos constituidos por el “Procedimiento Geográfico”.

Conforme señala DIEZ DE VELASCO, *“no puede olvidarse que, a pesar de su importancia, las acciones urgentes siguen constituyendo un método de trabajo excepcional y que las principales medidas adoptadas por la Comisión continúan situándose en el plano de las recomendaciones de alcance general dirigidas a la situación globalmente considerada”*<sup>167</sup>.

#### **b.2.3.1.2 – RESOLUCIÓN 1503**

Por este instrumento, que recibe también el número de la Resolución que lo creó, la Resolución 1503 (XLVIII), de 27 de mayo de 1970, del ECOSOC<sup>168</sup>, denominada como “Procedimiento para examinar las comunicaciones relativas a las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, o comúnmente conocido como “procedimiento confidencial”, se establece un mecanismo para permitir la identificación de las comunicaciones particulares – individuales<sup>169</sup> o de grupos – que revelan la situación de un cuadro persistente de violaciones manifiestas a los derechos humanos y libertades fundamentales, o sea, en un contexto en que se traducen los casos que afectan a un gran número de personas y por un tiempo prolongado<sup>170</sup>.

---

<sup>167</sup> DIEZ DE VELASCO, M., *Las Organizaciones Internacionales*, 12ª. edición, Tecnos, Madrid, p. 304.

<sup>168</sup> Por la Resolución 2000/109, de 26 de abril de 2000, la CDH ha simplificado este procedimiento.

<sup>169</sup> Las quejas individuales de este procedimiento se envían a la “Subdivisión de Servicios de Apoyo OACDH-ONUG” – 1211 Ginebra 10, Suiza – fax (41 22) 917 9011.

<sup>170</sup> VILLÁN DURÁN, C., *Curso....*, op. cit., p. 633.

Aunque se basa en denuncias particulares, este procedimiento no se presta a la protección individual, sino que sirve para el control del cumplimiento de los derechos humanos colectivamente considerados.

Como advierte VILLÁN DURÁN, *“debe tenerse en cuenta, además, que tal examen no se realizará con una finalidad protectora en sentido estricto de los derechos humanos de las personas cuyas comunicaciones han sido retenidas, sino desde el ángulo de la promoción de los derechos humanos a la luz del deber de cooperación de los Estados establecido en el artículo 56 de la Carta UN (en relación con el art. 55.c de la misma) en materia de derechos humanos.”*<sup>171</sup>.

#### **b.2.3.1.2.1 – MECANISMO DE ACTUACIÓN**

Para su admisibilidad se exige atender a rigurosos requisitos<sup>172</sup>, como la comunicación compatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que *“revele un cuadro persistente de violaciones manifiestas fehacientemente probadas”*<sup>173</sup>, debiendo ser presentado por la propia víctima, salvo su imposibilidad, admitiéndose comunicación por ONG y no pudiendo ser anónima. Su formulación debe contener la descripción de los hechos, sin utilizar términos ofensivos o insultantes, ni estar basada en motivos manifiestamente políticos. Debe tener agotado los recursos internos, así como ser presentada en un plazo razonable al momento en que se tiene configurado dicho agotamiento de recursos, y no puede referirse a materia de competencia de otros organismos internacionales.

En la extinta Comisión de Derechos Humanos las reclamaciones empezaban con su recibimiento por la Secretaría, encargada del juicio de admisibilidad, debiendo en cuanto a las admitidas a procesamiento, preparar sus resúmenes y elaborar las “Listas Mensuales”, así como dirigir al Estado interesado para la presentación de las respuestas. A continuación, con las respuestas presentadas, la Secretaría

---

<sup>171</sup> Ídem, p. 634.

<sup>172</sup> Conforme Resolución 1 (XXIV) de 13 de agosto de 1971, de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías.

<sup>173</sup> Según términos de la propia Res. 1503, por su párrafo. 1, parte final.

encaminaba las reclamaciones al Grupo de Comunicaciones - de la extinta Subcomisión para la Promoción y Protección a los Derechos Humanos -, así como a los miembros de la Comisión de Derechos Humanos.

Luego, la reclamación era enviada al Grupo de Trabajo sobre Situaciones – de la Comisión de Derechos Humanos – el cual, si decidía reconocer las violaciones apuntadas, realizaba sus recomendaciones a la Comisión, de modo confidencial, y las comunicaba al Estado interesado. La propia Comisión debía manifestarse sobre la cuestión, con oportunidad de manifestación del Estado denunciado. Si la Comisión reconociese la existencia de un *“cuadro persistente de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y las libertades fundamentales”*, conforme el contenido del artículo 1 de la Resolución 1503, podría nombrar un órgano especial – “Comité Especial” –, que *“sólo se llevará a cabo si el Estado interesado da expresamente su asentimiento y que se realizará en una colaboración constante con dicho Estado y conforme las condiciones fijadas de común acuerdo con él”*, según artículo 6.b de dicha Resolución. En sus labores de investigación, el órgano especial nombrado debería mantener contacto con el gobierno denunciado para examinar la situación e intentar la superación de las causas violadoras de los derechos humanos, produciendo “Informes” anuales para hacer conocer la situación a la Comisión de Derechos Humanos. Dependiendo de la gravedad de la situación, el Informe era presentado al ECOSOC.

A pesar de ser un procedimiento confidencial, desde 1978 el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos pasó a revelar los nombres de los países que han sido objeto de examen<sup>174</sup>. En algunas situaciones era posible que el Procedimiento 1503 se transformase en el Procedimiento 1235, con la principal consecuencia de modificarse la confidencialidad de las labores por su publicidad, lo que podría suceder cuando el Estado denunciado no colaboraba con las investigaciones<sup>175</sup>.

---

<sup>174</sup> Conforme información de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, disponible en Web <[www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/8/1503\\_sp.htm](http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/8/1503_sp.htm)> [Consulta: 02 de febrero de 2010], bajo el título “El procedimiento previsto en la Resolución 1503, revisado”.

<sup>175</sup> Este cambio ha sido verificado con relación a Sierra Leona, en 1999.

Recientemente, Argentina, Uruguay y Paraguay han solicitado que toda la documentación examinada por la extinta Comisión de Derechos Humanos bajo el procedimiento confidencial 1503, y a ellos vinculadas, dejara de ser considerada confidencial y que fuera puesta a disposición de individuos y organizaciones interesados<sup>176</sup>.

A propósito, la confidencialidad del Procedimiento 1503 se debe, principalmente, a la presión de la política internacional, hecho que se presenta como un factor muy importante en perjuicio de su eficacia, con lo cual resulta, que en los últimos años, se haya reducido considerablemente el campo de actuación de este mecanismo, y, a pesar de haberse planteado la conveniencia o no de su mantenimiento, ha sido adoptado en la nueva estructura del Consejo de Derechos Humanos.

Así, se trata de un procedimiento que reúne una serie de rasgos que le son específicos y le diferencia cabalmente del Procedimiento 1235, como el hecho de limitarse a las quejas particulares, ser de naturaleza confidencial, depender del agotamiento de los recursos internos, exigir el consentimiento del Estado denunciado para el nombramiento del órgano especial de investigación y de las condiciones en que éste se producirá, estar limitado a los mandatos geográficos y tener funcionamiento de forma permanente.

Es importante señalar que la definición por uno u otro procedimiento cabía a la Comisión de los Derechos Humanos en razón de la presión política ejercida por el Estado investigado.

Hasta ser extinta, en 2006, la Comisión de Derechos Humanos examinó 84 países en virtud del Procedimiento 1503<sup>177</sup>.

---

<sup>176</sup> La documentación de Argentina fue examinada por la Comisión de Derechos Humanos entre 1980 y 1985; la de Uruguay entre 1978 y 1985, y la de Paraguay entre 1978 y 1990.

<sup>177</sup> En el "Anexo (12)" de este trabajo se encuentra la relación de los 84 países y los años en que la Comisión de Derechos Humanos ha decidido por la investigación.

### **b.2.3.2 – LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 5/1 DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS**

En sus actividades, y con base en las comunicaciones de violación a los derechos humanos, los titulares de mandato pueden ejecutar sus labores en misión en el propio territorio, denominadas “misiones sobre el terreno”, con el objetivo de reunir la mayor cantidad posible de pruebas de violaciones a los derechos humanos. Pueden, también, enviar “Comunicaciones” a los gobiernos, identificadas como “Cartas de Denuncias” o “Cartas de Alegaciones”, para solicitar aclaraciones sobre denuncias, incluso, tratándose de situaciones que demandan medidas urgentes, pueden expedir un “Llamamiento Urgente”, con el objetivo de obtener una pronta manifestación del Estado.

De acuerdo con la Subdivisión de Procedimientos Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos *“La decisión de intervenir se deja a discreción del titular del mandato del procedimiento especial y dependerá de los diversos criterios establecidos por él o ella, así como de los criterios determinados en el Código de Conducta. Los criterios por lo general se refieren a: la fiabilidad de la fuente y la credibilidad de la información recibida, los detalles facilitados y el alcance del mandato. Sin embargo, hay que recalcar que los criterios y procedimientos utilizados para dar respuesta a una denuncia individual varían, de modo que es necesario presentar una comunicación de conformidad con los requisitos específicos establecidos por cada procedimiento especial.*

*Para que las comunicaciones puedan evaluarse, deberán proporcionar a todos los procedimientos especiales la siguiente información mínima: la identificación de la(s) presunta víctima(s); la identificación de los presuntos autores de la violación; la identificación de la(s) persona(s) u organización(es) que envían la comunicación (esta información se mantendrá confidencial); fecha y lugar del incidente; una descripción detallada de las circunstancias del incidente en que se produjo la presunta violación”<sup>178</sup>.*

---

<sup>178</sup> Texto disponible en <<http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/communications.htm>>[Consulta: 03 de febrero de 2010].



A los titulares de mandato no cabe la toma de decisiones, sino la recopilación más amplia de datos a ser retratados en sus Informes, para que decida al respecto la comunidad internacional, por los diversos órganos de Naciones Unidas, como el propio Consejo de Derechos Humanos, o igualmente la Asamblea General y el Consejo de Seguridad.

En el ejercicio de sus actividades, que no es remunerada, los titulares de mandato gozan de los privilegios e inmunidades propias al desempeño de sus misiones, generalmente con igual naturaleza a los privilegios e inmunidades diplomáticas, asumiendo la responsabilidad política por los actos relativos a su mandato.

#### **b.2.3.2.1 - MISIONES SOBRE EL TERRENO**

El principal modo de ejecución de los trabajos es la misión en el propio territorio, denominadas “misiones sobre el terreno”, y en las cuales se busca reunir la mayor cantidad de pruebas de violaciones a los derechos humanos, pudiéndose utilizar todos los medios disponibles a aquel intento, con la posterior presentación de un Informe de misión en el que se exponen sus conclusiones y recomendaciones. El valor dado a tales pruebas no se encuentra sometido al mismo rigor que las pruebas judiciales, *“sino que será suficiente que el experto asuma una convicción de tipo moral en cuanto a su relevancia”*<sup>179</sup>.

Antes de iniciaren sus labores en el territorio, los titulares de los mandatos solicitan una visita al gobierno, y, si éste está de acuerdo, les cursa la invitación correspondiente. Algunos países ya han manifestado estar automáticamente disponibles a atender a las solicitudes de cualquiera de los titulares de mandatos de procedimientos especiales para visitar el país. Hasta agosto de 2011, 88 países habían cursado invitaciones permanentes a los procedimientos especiales<sup>180</sup>.

---

<sup>179</sup> VILLÁN DURÁN, C., *Curso ...*, op. cit., p. 683.

<sup>180</sup> En el “Anexo (13)”, al final de este trabajo, hay los datos con relación de los países que han cursado “invitación permanente”.

El modo como se produce el trabajo de los titulares de mandato es resumido por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en estos términos:

*“Durante esas misiones, los expertos evalúan la situación general de derechos humanos en un determinado país, así como los aspectos institucionales, jurídicos, judiciales, administrativos y la situación de facto, en virtud de sus respectivos mandatos. Durante su visita al país, los expertos se reúnen con autoridades nacionales y locales, incluidos miembros del poder judicial y parlamentarios; miembros de la institución nacional de derechos humanos, si es pertinente; organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos; las Naciones Unidas y otros organismos intergubernamentales; y con periodistas durante la conferencia de prensa que se realiza al final de la misión. Después de realizar sus visitas, los titulares de mandatos de los procedimientos especiales elaboran un informe de misión, con sus conclusiones y recomendaciones, dirigido al Consejo de Derechos Humanos.*

*Atribuciones otorgadas a las misiones de investigación de los procedimientos especiales*

*Las atribuciones otorgadas a las visitas a los países se adoptaron en la cuarta reunión anual de los relatores especiales (E/CN.4/1998/45) y están encaminadas a orientar a los gobiernos en la realización de las visitas. En el curso de sus visitas de investigación, los relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos, así como el personal de las Naciones Unidas que les acompañen, deberán obtener del Gobierno que formula la invitación las siguientes garantías y facilidades:*

*a) libertad de movimientos en todo el territorio, lo que incluye facilidades de transporte, en particular en áreas de acceso restringido;*

*b) libertad de investigar, en particular en relación con:*

*i) acceso a cualquier prisión, centro de detención y lugar de interrogatorio;*

*ii) contactos con autoridades centrales y locales de todos los sectores gubernamentales;*

*iii) contactos con representantes de organizaciones no gubernamentales, otras instituciones privadas y medios de comunicación;*

*iv) contactos confidenciales y no supervisados con testigos y otras personas particulares, incluidas las privadas de libertad, que se consideren necesarios para cumplir el mandato del relator especial, y*

*v) pleno acceso a cualquier material documental relevante para el mandato;*

*c) seguridades por parte del gobierno de que ninguna persona que por sus funciones oficiales o como particular haya estado en contacto con el relator especial o representante en relación con el mandato será sometida por esa razón a amenazas, intimidación o castigo o a un proceso judicial;*

*d) medidas de seguridad adecuadas, sin que ello signifique restringir la libertad de movimientos e investigación mencionadas;*

*e) ampliación de las mismas garantías y facilidades citadas anteriormente al personal apropiado de las Naciones Unidas que asista al relator especial o representante antes de la visita, durante la misma y después”<sup>181</sup>.*

#### **b.2.3.2.2 - COMUNICACIONES Y LLAMAMIENTO URGENTE**

Otro modo de ejecución de los trabajos de los titulares de mandato, y tras recibir información sobre denuncias concretas y fiables de violaciones de derechos humanos, es emitir “Comunicaciones”. Esa Comunicación puede ser un “llamamiento urgente”, en casos de posibilidad de que las víctimas pierdan la vida, en casos de situaciones que peligre la vida o en casos en que el daño de gravísima índole sea constante o inminente. No tratándose de esas situaciones que demandan medidas urgentes, las providencias son de enviar “Cartas de Denuncias”, o “Cartas de Alegaciones” a los gobiernos para solicitar aclaraciones. De conformidad con datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos, en 2010 se *“enviaron 604 comunicaciones a 110 Estados, de las cuales dos tercios fueron comunicaciones conjuntas enviadas por dos o más titulares de mandatos. Las comunicaciones abarcaron al menos 1407 personas y numerosos grupos de personas; el 19,2 por ciento se refirió a mujeres. Al 31 de diciembre, los gobiernos habían respondido a un 35,1 por ciento de las comunicaciones enviadas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010. Los titulares de mandatos dieron seguimiento al 17,9 por ciento de las comunicaciones”<sup>182</sup>.*

#### **B – CONSEJO DE SEGURIDAD - CS**

Es el órgano de Naciones Unidas responsable del mantenimiento de la paz y seguridad mundial, y que actúa en nombre de la comunidad internacional buscando evitar que los Estados usen la fuerza como medida para la solución de sus controversias. Su creación tiene como marco la Carta de Naciones Unidas, de 1945, y

---

<sup>181</sup> En web <<http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/visits.htm>> [Consulta: 03 de febrero de 2010].

<sup>182</sup> Según datos en la web <[http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/Facts\\_Figures2010\\_sp.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/docs/Facts_Figures2010_sp.pdf)>[Consulta: 31 de julio de 2011].

está compuesto por quince Estados-miembros<sup>183</sup>, siendo diez miembros no permanentes<sup>184</sup>, y cinco de ellos miembros permanentes – Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China – estos últimos con poder de veto en todas las deliberaciones del Consejo que no sean cuestiones de procedimiento<sup>185</sup>. El Consejo de Seguridad es presidido mensualmente por uno de los Estados miembros que lo componen<sup>186</sup>.

Conforme a la Carta de Naciones Unidas, los Estados Miembros están obligados a aceptar y cumplir las decisiones del Consejo. Aunque las recomendaciones de otros órganos de las Naciones Unidas no tienen el carácter obligatorio de las decisiones del Consejo, pueden influir en determinadas situaciones, ya que reflejan la opinión de la comunidad internacional.

Cuando se le presenta una controversia, la primera medida del Consejo es generalmente recomendar a las partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos. En algunos casos, el propio Consejo emprende actividades de investigación y mediación. También puede establecer los principios para el arreglo pacífico y nombrar representantes especiales o pedirle al Secretario General que use sus buenos oficios.

---

<sup>183</sup> Hasta agosto de 2011, nunca han elegido miembros del Consejo de Seguridad Afganistán, Albania, Andorra, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Barbados, Belice, Bhután, Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, Camboya, Chad, Chipre, Comoras, Dominica, El Salvador, Eritrea, Estonia, ex República yugoslava de Macedonia, Fiji, Georgia, Granada, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Islandia, Islas Marshall, Islas Salomón, Israel, Kazajistán, Kirguistán, Kiribati, Lesotho, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Maldivas, Micronesia (Estados Federados de), Moldova, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea, República Centroafricana, República Democrática Popular Lao, República Dominicana, República Popular Democrática de Corea, Saint Kitts y Nevis, Samoa, San Marino, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Sudán del Sur, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tayikistán, Timor-Leste, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uzbekistán, Vanuatu, según datos del propio Consejo de Seguridad en su página web <[www.un.org/spanish/sc/members.asp](http://www.un.org/spanish/sc/members.asp)> [Consulta: 20 de septiembre de 2011].

<sup>184</sup> Hasta 1965 eran 06 miembros no permanentes, siendo cambiada esta composición para 10 por la Resolución 1991 A (XVIII), de 17/12/1963. Los 10 miembros no permanentes son elegidos por la Asamblea General por un período de 2 años y no pueden ser reelegidos al término de sus mandatos

<sup>185</sup> Cada uno de los 15 miembros del Consejo de Seguridad tiene un voto. Las decisiones sobre cuestiones de procedimientos serán tomadas por el voto afirmativo de 9 de los 15 miembros. Las decisiones sobre todas las demás cuestiones por el voto afirmativo de 9 miembros, incluso los votos afirmativos de los 5 miembros permanentes, siendo esta la regla denominada “poder del veto”.

<sup>186</sup> Según el listado en el orden alfabético inglés de los nombres de los Estados miembros del Consejo de Seguridad.

Cuando una controversia conduce a las hostilidades, la preocupación principal del Consejo es ponerle fin a éstas lo antes posible. Para prevenir la ampliación de las hostilidades, el Consejo puede establecer directrices de cesación del fuego. En apoyo del proceso de paz, el Consejo puede desplegar observadores militares o una fuerza de mantenimiento de la paz en una zona de conflicto.

Específicamente en el escenario de los derechos humanos, el Consejo de Seguridad ejerce la autoridad de fijar la responsabilidad internacional por las vulneraciones cometidas por los Estados y que constituyan amenaza a la paz mundial<sup>187</sup>.

El cauce jurídico para esta atribución del Consejo de Seguridad en el tema de derechos humanos deriva del conjunto de directrices en que la cooperación internacional debe estar atenta, como el mantenimiento de la paz, el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, y la obligación que le cabe a aquel Consejo de actuar de acuerdo con los principios de la Carta, conforme está previsto en su artículo 24, considerándose que estos principios incluyen el respeto y promoción a los derechos humanos<sup>188</sup>.

En la trayectoria de los derechos humanos, el Consejo de Seguridad inicialmente no admitía su competencia en este tema, incluso no determinando providencia a la denuncia de Rusia, en 1963, sobre el genocidio de los Kurdos por Irak. Con la política de discriminación racial en Rodhesia del Sur, denunciada en 1968, es que el Consejo de Seguridad pasó a adoptar una posición específica y concreta contra la violación de los derechos humanos, tornándose esta iniciativa una práctica en sus labores, principalmente a partir de la década de noventa, habiendo intervenido en las situaciones de violación a los derechos humanos en la antigua Yugoslavia<sup>189</sup>, Somalia<sup>190</sup>, Libia<sup>191</sup>, Liberia<sup>192</sup> y Haití<sup>193</sup>.

---

<sup>187</sup> El Tribunal Internacional de Justicia ya tuvo la oportunidad de reconocer como legítima la actuación del Consejo de Seguridad, conforme se puede ver en el caso "Lokerbie", *ICJ Reports 1992*, pp. 34 y siguientes.

<sup>188</sup> Parte de la doctrina está contraria a esa atribución del Consejo de Seguridad en materia de derechos humanos, como apunta CARVALHO RAMOS, A. , *Proceso Internacional de Direitos Humanos*, Renovar, Rio de Janeiro, 2002, pp.176-8.

<sup>189</sup> Resolución 713, de 1991, 757, y 787 de 1992, 820, de 1993.

El poder de su actuación se traduce por la calidad vinculante de sus Resoluciones, las cuales obligan a todos los países miembros de Naciones Unidas. En este contexto, los mecanismos de actuación del Consejo de Seguridad se realizan por diversas providencias, inclusive por medidas provisionales, de contenido recomendatorio o decisorio, estableciendo medidas coercitivas, as veces como sanciones, como la ruptura de relaciones diplomáticas por los Estados miembros, imposición de embargo de armas, de embargo económico o comercial, de limitación al uso del territorio, del espacio aéreo o marítimo, la autorización del uso de la fuerza internacional, e, incluso, el sometimiento de los autores de violaciones de derechos humanos a tribunales penales internacionales, como surge del claro ejemplo de la creación de los Tribunales Penales Internacionales “ad hoc” para la antigua Yugoslavia<sup>194</sup> y para Ruanda<sup>195</sup> y, más recientemente, de los Tribunales Penales Especiales para Kosovo<sup>196</sup>, Sierra Leona<sup>197</sup>, Irak<sup>198</sup> y Líbano<sup>199</sup>. Sobre estos tribunales, juntamente con los Tribunales Especiales para Timor Oriental<sup>200</sup> y Camboya<sup>201</sup>, creados por otros órganos de Naciones Unidas, esta tesis hará un breve abordaje en capítulo más adelante, cuando tratar de los órganos de naturaleza jurisdiccional en el seno de Naciones Unidas.

### **C – CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS-ECOSOC**

El Consejo Económico y Social-ECOSOC es el gestor de la cooperación económica y social en Naciones Unidas, con competencia en los asuntos económicos, sociales, culturales, educativos, sanitarios, y los demás que son conexos a estos. En este contexto, el Consejo Económico y Social se ocupa de promover

---

<sup>190</sup> Resolución 733, de 1992.

<sup>191</sup> Resolución 748, de 1992.

<sup>192</sup> Resolución 788, de 1992. Este caso ha generado el reciente enjuiciamiento por crimen contra la humanidad, de del ex – Presidente de Liberia, Charles Taylor.

<sup>193</sup> Resolución 841, de 1993.

<sup>194</sup> Resoluciones 808, de 22/02/93 y 827, de 25/5/93, del CS.

<sup>195</sup> Resolución 955, del 08/11/94, del CS.

<sup>196</sup> Resolución 1244, de 10/6/99, del CS.

<sup>197</sup> Resolución 1315, de 14/8/2000 del CS.

<sup>198</sup> Resolución 1483, de 22/5/2003, del CS.

<sup>199</sup> Resolución 1757, de 30/5/2007, del CS.

<sup>200</sup> Resolución 1272, de 1999, de la Administración Transitoria de Naciones Unidas en Timor Leste-UNTAET.

<sup>201</sup> Resolución 57/228, de 18/12/2002, de la Asamblea General.

niveles de vida más elevados, el pleno empleo, y el progreso económico y social; de identificar soluciones para los problemas de salud, económicos y sociales en el plano internacional; de facilitar la cooperación en el orden cultural y educativo; y de fomentar el respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Es así un órgano de vastísima competencia funcional, que concentra más del 70% de los recursos humanos y financieros de todo el sistema de la ONU, en coordinación a la labor de los catorce organismos especializados, diez comisiones orgánicas y cinco comisiones regionales que integran su estructura, lo que demuestra la gran importancia de sus tareas.

Sobre derechos humanos cabe al ECOSOC su promoción, y para tanto emite “Resoluciones”, “Decisiones” y “Informes” en temas específicos, como ha ocurrido en la “Cuestión de la violación de los derechos humanos en los países árabes ocupados, incluida Palestina”; “La situación de los derechos humanos de los detenidos libaneses en Israel”; “Asistencia a Guinea Ecuatorial en la esfera de los derechos humanos”; “Situación de los derechos humanos en Burundi”; “Situación de los derechos humanos en algunas partes de Europa sudoriental”; “Situación de los Derechos Humanos en la República Democrática del Congo”; “Situación de los Derechos Humanos en Irak”; “Situación de los Derechos Humanos en Sudán”; “Situación de los Derechos Humanos en Cuba”; “Situación de los Derechos Humanos en Afganistán”; “Situación de los Derechos Humanos en Sierra Leona”; “Cuestión del ejercicio, en todos los países, de los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y estudio de los problemas especiales con que se enfrentan los países en desarrollo en sus esfuerzos por hacer efectivos estos derechos humanos”; “El derecho a la alimentación”<sup>202</sup>.

En su estructura se destacaba, hasta marzo de 2006, como órgano principal y de vinculación exclusiva al tema de derechos humanos, la Comisión de Derechos

---

<sup>202</sup> Según informaciones de las Naciones Unidas disponibles en web <[www.unhcr.ch/spanish/html/menu2/2/ecosoc\\_sp.htm](http://www.unhcr.ch/spanish/html/menu2/2/ecosoc_sp.htm)> [Consulta: 12 de marzo de 2010].

Humanos, y que fue sustituida, en aquellas atribuciones, por el Consejo de Derechos Humanos, ahora vinculado a la Asamblea General de Naciones Unidas.

El ECOSOC se compone de cincuenta y cuatro miembros, elegidos por la Asamblea General, observando la representación geográfica, de modo que actualmente ésta se distribuye en catorce miembros de Estados de África, once de Asia, seis de Europa Oriental, diez de América Latina y Caribe y trece de Europa Occidental y otros Estados. En el desempeño de su mandato, el ECOSOC recibe la consulta de representantes de los sectores académico y empresarial, como también de más de dos mil cien Organizaciones no Gubernamentales, ONG's acreditadas en él.

Sus sesiones se celebran en julio de cada año, por un período de cuatro semanas de duración, un año en Nueva York y otro en Ginebra.

#### **a – COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y SOCIAL DE LA MUJER**

Esta Comisión fue creada en 1946 por el Consejo Económico y Social-ECOSOC, al cual se encuentra vinculado. Tiene categoría intergubernamental, es decir, su composición es formada por Expertos gubernamentales, que representan sus países. Actualmente son cuarenta y cinco miembros, que son elegidos con observancia al criterio de representación geográfica.

Su objetivo es presentar recomendaciones e informes a dicho órgano sobre la promoción de los derechos de la mujer en los campos político, civil, económico, social y docente. En su labor, la Comisión se ocupa de temas específicos como la cuestión de la nacionalidad de las mujeres casadas, los derechos políticos de la mujer y el consentimiento para el matrimonio, aún cabiéndole formular recomendaciones sobre los problemas que presenten un carácter de urgencia, relacionados a la efectiva observancia de la igualdad entre el hombre y la mujer.

Una de las más importantes actuaciones de la Comisión es elaborar recomendaciones y propuestas de providencias sobre protección urgente en la esfera



de los derechos de la mujer, como medida en respuesta a las “quejas individuales” por el incumplimiento de la Convención sobre la Discriminación contra la Mujer, y cuyo Comité no dispone sobre la posibilidad de presentación de aquella medida.

## **D – SECRETARIA GENERAL DE NACIONES UNIDAS**

La Secretaria es otro órgano de la estructura principal de Naciones Unidas, responsable por administrar los programas y las políticas que los demás órganos elaboran. Entre estos se puede mencionar la “*administración de las operaciones de mantenimiento de la paz y la mediación en controversias internacionales hasta el examen de las tendencias y problemas económicos y sociales y la preparación de estudios sobre derechos humanos y desarrollo sostenible*”<sup>203</sup>.

El jefe de la Secretaria es el Secretario-General de Naciones Unidas, que es nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.

La sede de la Secretaria está en Nueva York, y mantiene sus principales oficinas en Addis Abeba, Bangkok, Beirut, Ginebra, Nairobi, Santiago de Chile y Viena, más allá de otras oficinas en casi todos los países.

Los funcionarios de la Secretaria tienen status de funcionarios exclusivamente internacionales y que solamente rinden cuentas a Naciones Unidas, no pudiendo solicitar ni recibir instrucciones de ningún gobierno ni autoridad ajena a ONU.

En la Secretaria se encuentra la estructura orgánica y funcional más amplia de la ONU. Son diversas oficinas, departamentos, comisiones, tribunales y otros órganos que actúan en una infinidad de servicios y programas en temas de paz y seguridad, desarrollo, asuntos humanitarios, derecho internacional y derechos humanos, para alcanzar los objetivos de la Organización.

---

<sup>203</sup> Conforme texto en página web de Naciones Unidas <<http://www.un.org/es/mainbodies/secretariat/>> [Consulta: 12 de marzo de 2010].

## **a – LA SECRETARÍA GENERAL Y LOS DERECHOS HUMANOS**

En el vasto abanico de actividades de la Secretaria se encuentra su actuación en los derechos humanos, tanto en la promoción como en su protección. De la multitud de órganos con labores vinculados directa o indirectamente al tema de derechos humanos se puede mencionar la División de Asistencia Electoral, la División de los Derechos de los Palestinos, la División de Asuntos del Consejo de Seguridad, la Dependencia de Descolonización<sup>204</sup>, la Sección de Desarme, Desmovilización y Reintegración, la Sección de Asesoramiento en Derecho Penal y Asuntos Judiciales, la División de Políticas, Evaluación y Capacitación, el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, la División de Personal sobre el Terreno, la Oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la Oficina del Asesor Especial para África, la Oficina del Asesor Especial para la Prevención del Genocidio, la Oficina del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, la Comisión Económica para África, la Comisión Económica para Europa, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales con sus órganos vinculados como la Oficina de Financiación para el Desarrollo, la Oficina de Apoyo y Coordinación del Consejo Económico y Social, la Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer, la División para el Adelanto de la Mujer, la División de

---

<sup>204</sup> Desde la fundación de ONU, más de 80 naciones pasaron a formar parte de la Organización como Estados soberanos independientes, más allá de muchos otros territorios que han alcanzado la libre determinación mediante la asociación política con otros Estados independientes o mediante la integración con otros Estados. Hasta septiembre de 2011, 16 territorios todavía permanecían como territorios no autónomos, administrados por Estados Unidos, Francia, Nueva Zelandia o Reino Unido, y que son: Anguila, Bermudas, Gibraltar, Guam, Islas Caimán, Islas Malvinas (Falkland) , Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Montserrat, Nueva Caledonia, Pitcairn, Sáhara Occidental, Samoa Americana, Santa Elena y Tokelau.

Política Social y Desarrollo Social, la Secretaria del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques, la División de Desarrollo Sostenible, la División de Población, la División para las políticas y el análisis del desarrollo y la División de Administración Pública y de Gestión del Desarrollo.

En la estructura de la Secretaría también se puede citar como órganos de destacable actuación en derechos humanos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este último, será objeto de un capítulo a parte, por su especial relevancia y liderazgo en el escenario de la tutela internacional a los derechos humanos.

#### **b – ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS – ACNUDH**

En el sistema de tutela de los derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas, el primer órgano de vinculación exclusiva de aquellos derechos es el Alto Comisionado. Este es el órgano máximo en el tema, con la responsabilidad principal en el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas en derechos humanos, concentrando a su entorno y conduciendo toda la política concerniente para la promoción de su disfrute universal, así como la voluntad y determinación de la comunidad mundial.

Actúa promoviendo la cooperación internacional de los derechos humanos, coordinando, estimulando, fortaleciendo y colaborando con acciones en el sistema de las Naciones Unidas. También apoya a los órganos nacionales e internacionales de derechos humanos, adoptando medidas preventivas y reaccionando ante sus violaciones graves, promoviendo la creación de estructuras nacionales a favor de los derechos humanos, con actividades y operaciones, difusión de conocimientos, prestación de servicios consultivos y asistencia técnica en este campo, incluso contribuyendo en la preparación y promoción de las normas de derechos humanos.

En el desarrollo de las actividades conjuntas con los Estados, la cooperación técnica es complementaria, pero no sustitutiva de las actividades de fiscalización e investigación del programa de derechos humanos que se esté desarrollando.

Su naturaleza es la de un órgano estrictamente técnico, desarrollando sus actividades por la Oficina del Alto Comisionado, a cuyo titular es atribuida la categoría de Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, siendo el más alto funcionario de Naciones Unidas con responsabilidad principal en cuanto a actividades en materia de derechos humanos. Su actuación se encuentra bajo la autoridad y dirección del Secretario General, que observa la competencia, autoridad y decisiones de la Asamblea General, del Consejo Económico y Social y del Consejo de Derechos Humanos. Al Alto Comisionado le cabe aún coordinar y administrar toda actividad de la Oficina, y prestar asesoramiento directo al Secretario General de la ONU sobre políticas de derechos humanos, incluso representando a éste en reuniones y eventos en este tema.

El puesto de Alto Comisionado fue establecido por la Asamblea General, a través de la Resolución 48/141, de 20 de diciembre de 1993, la cual define también sus atribuciones. Su nombramiento es por el Secretario General, con la aprobación de la Asamblea General, por un mandato de cuatro años, renovable por otro período de cuatro años, debiéndose observar una rotación geográfica en cuanto a su nacionalidad<sup>205</sup>.

La Oficina, a su vez, tiene su creación con base en los artículos 1, 13 y 55, de la Carta de las Naciones Unidas, como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena<sup>206</sup>. Su sede es en Ginebra, actuando por medio de delegaciones que pretenden alcanzar efectividad en el cumplimiento de las normas internacionales de

---

<sup>205</sup> En la actualidad es Alto Comisionado la Señora Louise Arbour, canadiense, ex Jueza del Supremo Tribunal de Justicia de Canadá. La Señora Louise fue la Promotora del Tribunal Penal Internacional responsable por la acusación del ex Presidente yugoslavo Slobodan Milosevic, por crímenes cometidos en el conflicto de Kosovo. La actual Presidente sucedió al brasileño Sérgio Vieira de Mello, que murió en agosto de 2003, víctima del atentado al predio de la ONU en Bagdá, Irak. Sergio de Mello había asumido el Alto Comisionado en septiembre de 2002, sucediendo a la Sra. Mary Robinson, de Irlanda, que asumió en 1997, y que, a su vez, sucedió al Sr. José Ayala-Lasso, ecuatoriano, que fue el primer Alto Comisionado, a partir de 1994.

<sup>206</sup> La Declaración fue adoptada en la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en Viena, del 14 al 25 de junio de 1993.

derechos humanos, y que se prestan a la observación y cooperación técnica y a operaciones de mantenimiento de la paz<sup>207</sup>. La Oficina se compone también por el Adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es Subsecretario General de la ONU, por la Oficina Auxiliar del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Sección Administrativa, la Oficina de Nueva York<sup>208</sup>.

Las labores de la Oficina son realizadas por dos Divisiones con cuatro Subdivisiones: La División de Procedimientos de Derechos Humanos, con la Subdivisión de Tratados y del Consejo, y la Subdivisión de Procedimientos Especiales; la División de Operaciones, Programas e Investigación, con la Subdivisión de Investigación y del Derecho al Desarrollo y la Subdivisión de Creación de Capacidad y de Operaciones sobre el Terreno.

## **2 – TUTELA JURISDICCIONAL CONTENCIOSA UNIVERSAL/GLOBAL**

En esta categoría se encuentran reunidos los órganos con atribuciones específicas en la solución contenciosa de conflictos, y que, en este contexto, ejercen actuaciones directa o indirectamente en el campo de la protección de los derechos humanos, estando sometidos a la observancia de los principios propios de la actividad judicial, como el debido proceso, con derecho de petición, la amplia defensa, el contradictorio, y la fuerza vinculante de sus decisiones con relación a las partes en litigio.

---

<sup>207</sup> Actualmente estas Oficinas se encuentran instaladas en los siguientes países: (África) Angola, Burundi, Chad, Guinea-Bissau, Liberia, Madagascar, Malawi, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Uganda; (Asia y Pacífico) Afganistán, Camboya, Gaza y Ramallah, Indonesia; (Europa y Asia Central) Abjasia -Georgia-, Bosnia y Herzegovina, Croacia, República Federativa de Yugoslavia, incluso Kosovo; (América Latina y el Caribe) Colombia, El Salvador y Guatemala.

<sup>208</sup> A partir del 15 de septiembre de 1997 la Oficina pasó a integrar también el Centro de Derechos Humanos, de acuerdo con el programa de reforma de la ONU (A/51/950, párrafo 79).

## **A – TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA - TIJ**

El Tribunal Internacional de Justicia es el órgano de naturaleza jurisdiccional en el ámbito de las Naciones Unidas, con su Estatuto<sup>209</sup> formando parte integrante de la propia Carta de las Naciones Unidas. Su jurisdicción alcanza a todos los Estados miembros de la ONU, conforme el artículo 93 de la Carta, y a los que no siendo miembros acepten las condiciones que determine la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad<sup>210</sup>.

Se encuentra incluido en esta tesis como un órgano de actuación universal o global en la tutela de los derechos humanos por ser integrante de la estructura de la propia ONU y, en consecuencia, tener sus actividades identificadas con el alcance universal/global de las labores de aquella institución internacional, cabiendo advertir que la naturaleza universal destacada no significa tratarse de un órgano con jurisdicción universal obligatoria. Sobre eso, se impone esclarecer que la competencia del Tribunal Internacional de Justicia solamente afecta a los países que aceptan voluntariamente su jurisdicción, momento a partir del cual la jurisdicción del TIJ se torna obligatoria, oponible a un Estado, consonante dispuesto en el artículo 36.2, de su Estatuto.

En palabras oficiales del propio Tribunal, este *“puede conocer de un asunto sólo si los Estados implicados han aceptado su competencia de alguna de las siguientes maneras: 1) en virtud de un acuerdo especial (un compromiso) concluido entre los Estados con el propósito de someter su controversia a la Corte; 2) en virtud de una cláusula jurisdiccional. Este es el caso en que los Estados son parte de un tratado en el que una de sus cláusulas prevé aceptar la jurisdicción de la Corte en caso de que surja en el futuro una controversia acerca de la interpretación o la aplicación de dicho tratado; 3) por el efecto recíproco de declaraciones hechas por ellos bajo los términos del Estatuto, mediante las cuales cada uno de ellos ha*

---

<sup>209</sup> El Estatuto se encuentra en el “Anexo (14)”, al final de la tesis.

<sup>210</sup> Esta situación actualmente se encuentra limitada a Nauru, una pequeña isla de Micronesia, con 21 km<sup>2</sup>, relativamente aislada, anteriormente conocida como Pleasant Island (“isla aprazible”), y que es uno de los menores países del mundo, siendo la menor República independiente y que no tiene oficialmente una capital.

*aceptado la jurisdicción de la Corte como obligatoria en relación con cualquier otro Estado que acepte la misma obligación. Las declaraciones de 66 Estados están actualmente en vigor. Sin embargo, un cierto número de ellas contiene reservas que excluyen determinadas categorías de controversias. En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá*<sup>211</sup>.

En la definición de su competencia no dispone de atribución específica en materia de derechos humanos. Con relación a este tema, siendo el Tribunal Internacional de Justicia el órgano internacional competente para dirimir las controversias que se instauran en la interpretación de tratados, cuando estos así dispongan expresamente<sup>212</sup>, resulta que puede ser llamado a manifestarse sobre la cuestión de derechos humanos, puesto que diecinueve tratados en este tema incorporan cláusulas con aquel contenido: la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (art. IX); Convención para Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (art. 22); Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (art. 38); Convención sobre el Derecho de Rectificación (art. V); Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (art. IX); Convención sobre la Esclavitud (art. 8); Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (art. 34); Convención Complementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud (art. 10); Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada (art. 10); Convención de la UNESCO sobre la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (art. 8); Convención para Reducir los Casos de Apatridia (art. 14); Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios (art. 8); Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 22); Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid (art. XII); Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 29); Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (art. 35); Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,

---

<sup>211</sup> Texto en la web <<http://www.icj-cij.org/homepage/sp/files/notice.pdf>>. [Consulta: 05 de febrero de 2010].

<sup>212</sup> En total, hasta 2010 se suman más de trescientos tratados o convenciones que contienen una cláusula de este tipo

Especialmente Mujeres y Niños (art. 15); Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (art. 30)<sup>213</sup>.

La importancia del Tribunal Internacional de Justicia en el escenario de la protección de los derechos humanos se puede constatar por sus decisiones que afirman el carácter inalienable de determinados derechos fundamentales. En un análisis de las manifestaciones de aquel tribunal que generaran implicaciones en temas de derechos humanos, VILLÁN DURÁN ha apuntado trece asuntos que resultaran en fallos de jurisdicción contenciosa, y ocho dictámenes en sus actuaciones en el ámbito consultivo<sup>214</sup>.

Recientemente el Tribunal Internacional de Justicia se ha manifestado sobre la muerte de 8 mil musulmanes en Srebrenica, en Bosnia, ocurridos en 1998, y decidió que Serbia no ha sido responsable por el genocidio, aunque tenga se omitido con los asesinatos cometidos, violando, en consecuencia, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio<sup>215</sup>.

Una demostración también destacada de esta actuación del Tribunal Internacional de Justicia en el seno de los derechos humanos es su práctica en cuanto a la adopción de “medidas provisionales”. Por ellas, aquel Tribunal se manifiesta al respecto de providencias que determinado Estado debe cumplir para evitar cierta violación a los derechos humanos. En casos concretos, tales medidas se vincularon a evitar la ejecución por condena de pena de muerte en Estados Unidos, y a evitar la práctica de genocidio en la República Federal de Yugoslavia<sup>216</sup>. Y según ha

---

<sup>213</sup> Datos obtenidos en <<http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=4>> [Consulta: 05 de febrero de 2010].

<sup>214</sup> VILLÁN DURÁN, C., *Curso ...*, op. cit., pp. 506-510 y 983-4, donde se encuentra el registro de cada uno de esos casos.

<sup>215</sup> Este ha sido el más grande masacre ocurrido en Europa después de la 2ª Guerra Mundial. En este caso Bosnia reclamó a la Corte de Haya que Serbia y Montenegro violaran la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y esta ha sido la primera vez que la Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado sobre aquella Convención. En la Guerra de Bosnia, entre 1992 a 1995, por la cual los musulmanes y croatas del país decidieron separarse de Yugoslavia, murieron 200 mil personas.

<sup>216</sup> VILLÁN DURÁN, C., *Curso ...*, op. cit., pp. 507-8. Los casos referentes a la pena de muerte fueron dos demandas presentadas por Alemania y Paraguay contra EUA, en 1999, y en caso de genocidio, en



decidido el Tribunal el 27 de junio de 2002, estos fallos sobre las “medidas provisionales” son legalmente vinculantes.

Un caso reciente a este respecto, fue la decisión en febrero de 2003, el conocido Caso Avena, en el que el Tribunal ha emitido un fallo para que Estados Unidos adoptara todas las medidas necesarias para impedir la ejecución de tres ciudadanos mexicanos. La decisión fue adoptada como consecuencia de la acción judicial entablada por el gobierno mexicano, en que acusaba a Estados Unidos de incumplir sistemáticamente las obligaciones internacionales que ha contraído en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y que obliga a los funcionarios a informar sin demora a los ciudadanos extranjeros detenidos de su derecho a ponerse en contacto con su embajada para pedir ayuda<sup>217</sup>.

El Tribunal Internacional de Justicia es un órgano autónomo, ejerciendo sus atribuciones con independencia. Está compuesto por quince Jueces, personas que gocen de alta consideración moral y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus países, escogidos por la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad, entre los nominados en una lista propuesta por los grupos nacionales del Tribunal Internacional de Arbitraje<sup>218</sup>, para un mandato de nueve años, prorrogable por igual período, para buscar una representación geográfica equitativa, con miembros representantes de las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo, según consta en el artículo 9 de su Estatuto.

---

demandas de la República de Bosnia y Herzegovina contra la República Federal de Yugoslavia, en 1993.

<sup>217</sup> El “Caso Avena” tuvo su juzgamiento definitivo e inapelable concluido el 31 de marzo de 2004, por el Tribunal Internacional de Justicia, ocasión en que se ha dictaminado que EUA revisara las sentencias de condena a la muerte de 51 mexicanos, por tener habido violación al artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, por no les haber ofrecido asistencia consular. En la internet <<http://www.bibliojuridica.org/estrev/pdf/derint/cont/5/art/art6.pdf>>, [Consulta: 10 de marzo de 2010] se encuentra disponible un excelente artículo de Juan Manuel GÓMEZ-ROBLEDO V., Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a la época de los hechos, y que ha acompañado el caso junto al Tribunal Internacional de Justicia.

<sup>218</sup> Estos “grupos nacionales” son los grupos formados por los cuatro representantes de cada potencia firmante del Convenio de la Haya de 18 de octubre de 1907, que reestructuró la Reglamentación de la Conferencia de Paz de La Haya de 1899, que creó el Tribunal Permanente de Arbitraje. Sobre el tema ver DIEZ DE VELASCO, M., *Instituciones de Derecho Internacional Público*, 13ª. edición, Tecnos, Madrid, 2002, p. 785 y 792.

El Tribunal actúa de forma jurisdiccional y consultiva. En su atribución jurisdiccional la posibilidad de ser parte en litigio está restringida a los Estados, no alcanzando a los particulares – individuos o instituciones –, que no tienen acceso a su jurisdicción. En el alcance de esta jurisdicción a los Estados *“la competencia del Tribunal Internacional de Justicia se mueve dentro de las grandes coordenadas del derecho internacional contemporáneo sobre solución de controversias. Una de esas coordenadas es, como sabemos, el principio de la libertad de elección del medio de arreglo, lo que comporta la consecuencia de que no cabe solución jurisdiccional de la controversia, y por tanto, arreglo judicial sin el consentimiento de los Estados parte”*, como ha destacado PASTOR RIDRUEJO<sup>219</sup>.

Las decisiones del Tribunal tienen efecto vinculante sólo entre las partes - los Estados - no produciendo sus efectos a terceros, conforme dispone el artículo 59 de su Estatuto. Sobre esto, es importante señalar las observaciones de DIEZ DE VELASCO, en el sentido de que *“En puridad de principios la cuestión no admite discusión; pero en la práctica las consecuencias para los casos futuros que puedan plantearse son bien distintas. Hemos comentado ya el respeto que el propio Tribunal siente por su jurisprudencia anterior, y este hecho tiene necesariamente que proyectar su influencia sobre los demás Estados, distintos a las partes en litigio, que deseen llevar en el futuro sus litigios ante el Tribunal, engendrando entre ellos el convencimiento de que los precedentes jurisprudenciales serán tenidos en cuenta.”*<sup>220</sup>.

En forma consultiva, el Tribunal actúa emitiendo dictámenes sobre cualquier cuestión jurídica, y limitando su actuación a las organizaciones internacionales, conforme el artículo 104 de su Reglamento, no alcanzando esta atribución consultiva a los Estados<sup>221</sup>. Estos dictámenes no producen efectos de cosa juzgada, no se firman como jurisprudencia del tribunal y no tienen alcance a los Estados.

---

<sup>219</sup> PASTOR RIDRUEJO, *Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales*, Tecnos, Madrid, 8ª. ed., 2002, p. 725.

<sup>220</sup> DIEZ DE VELASCO, M., *Instituciones de Derecho Internacional Público*, op. cit., p. 102.

<sup>221</sup> PASTOR RIDRUEJO, *Curso de Derecho Internacional Público...*, op. cit., p. 797.

## **B – JUSTICIA PENAL UNIVERSAL – TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES PROVISORIOS**

El discurso en nombre de la soberanía siempre se ha presentado como justificación para encubrir violaciones a los derechos humanos. Con el desarrollo que estos derechos han observado a partir de la década del cuarenta, así como en tiempos más actuales, principalmente después de la Convención de Viena de 1993, se pasó a caracterizar una nueva fase de relación entre la soberanía y el individuo, con la redefinición de los conceptos y fundamentos de aquella. En consecuencia, los derechos humanos pasaron a ser tratados como una preocupación global, extrapolando los dominios reservados de los Estados y ultrapasando sus barreras territoriales, afirmándose como universales e indivisibles, alejándose así la idea de ser un tema restringido a los límites de actuación de la soberanía. En esta nueva dimensión en que la soberanía del Estado no puede prevalecer contra los derechos fundamentales, la persona puede y debe ser defendida no sólo con relación a su condición de extranjero – la protección diplomática – sino también con relación al propio Estado del que es nacional, del que es ciudadano<sup>222</sup>.

En vista del relevante cambio que la mencionada relación soberanía/derechos humanos ha presentado, la comunidad internacional pasó a encontrar espacio para pugnar por el fin de la impunidad con relación a los crímenes contra la humanidad, como el asesinato, el exterminio, genocidio, la esclavitud, tortura, encarcelamiento, y tantos otros actos inhumanos practicados contra la población civil, generalmente por motivos raciales o étnicos, y en resguardo a la propia paz mundial, seriamente amenazada por crímenes de esta naturaleza.

De ese modo, en términos de derechos humanos y su protección por la instancia internacional, principalmente en cuanto a la punición a los crímenes contra la humanidad, cada vez más se debilita el enfoque de la indebida injerencia de la comunidad internacional en asuntos internos de los Estados, fortaleciéndose la

---

<sup>222</sup> MIRANDA, J., “A Incorporação ao Direito Interno de instrumentos jurídicos de Direito Internacional Humanitario e Direito Internacional dos Direitos Humanos”, en VVAA, “*O Tribunal Penal Internacional e a Constituição Brasileira*”, Revista do Conselho de Justiça Federal, n. 11, Brasília, 2000, pp. 23-26.

adopción de medidas protectoras del individuo. En la afirmación de JOHN RAWLS, *“los Estados criminales son agresivos y peligrosos; todos los pueblos están más seguros si dichos Estados cambian o son forzados a cambiar. De lo contrario afectan hondamente al clima internacional de poder y violencia”*<sup>223</sup>.

Así es que, en la última década surgen las primeras iniciativas concretas del establecimiento de una jurisdicción penal supranacional, inicialmente con la “justicia penal universal”, de naturaleza extra-convencional, y la constitución de tribunales provisorios, para tratar las violaciones específicas en ciertos países o regiones, en determinados períodos, como el Tribunal Penal “ad hoc” para la ex-Yugoslavia, evolucionando para la “justicia penal convencional”, con la creación de un tribunal permanente de justicia penal, el Tribunal Penal Internacional, y que se tornaron una realidad en la presente década, caracterizando este mecanismo de protección a los derechos humanos principalmente por ampliar el reconocimiento de los actores de sus violaciones, antes reservada a la responsabilidad de los Estados, y ahora, también, alcanzando a la responsabilidad de los individuos.

La “Justicia Penal Universal”, de naturaleza extra-convencional, guarda rasgos muy propios, siendo sus órganos siempre creados por exigencia de la comunidad internacional, de existencia provisoria, y con su competencia delimitada a hechos determinados.

Se puede clasificarla en internacional o internacionalizada. Como justicia penal internacional será considerada por cumular rasgo de jurisdicción solamente internacional, independiente y no integrante del Poder Judicial del país, para enjuiciamiento con base en la legislación también y exclusivamente internacional, siempre creada “ad hoc”, es decir, por imposición del Consejo de Seguridad, formada por magistrados internacionales y con su funcionamiento en otro país. Caso típico de esta justicia son los Tribunales Penales “ad hoc” para la antigua Yugoslavia y para Rwanda.

---

<sup>223</sup> RAWLS, J., *El derecho de gentes y “Una revisión de la idea de razón pública”*, trad. Hernando Valencia Villa, Paidós, Barcelona, 2001, p. 95.

Como justicia penal internacionalizada es caracterizada por acumular rasgos de la jurisdicción internacional y de la jurisdicción interna del país, incluso en relación a la legislación criminal aplicable, pudiendo tener su creación “ad hoc”, decurrente de imposición de Naciones Unidas, o de común acuerdo de Naciones Unidas con el país donde sus ciudadanos cometieron o sufrieron graves violaciones a derechos humanos, siendo la creación por iniciativa de Naciones Unidas o del propio país. Sus órganos judiciales pueden o no integrar la estructura del Poder Judicial existente, generalmente funcionando en el propio país, y sus magistrados pueden ser exclusivamente nacionales o nacionales y internacionales. Se suele identificar estos órganos judiciales como tribunales “mixtos”, y ejemplo son los Tribunales Especiales para Timor Oriental, Sierra Leona, Camboya, Kosovo, Irak y Líbano.

En la práctica adoptada por la ONU, el primero paso para la creación de los tribunales provisorios, internacionales o internacionalizados, y cuya repercusión internacional refleja una toma de decisión excepcional de alto grado de responsabilidad, es la investigación de la situación en el propio territorio o región de las violaciones, hecho que, en concreto, se ha realizado con la designación de Comisiones de Expertos Independientes para la antigua Yugoslavia, Ruanda, Timor Oriental, Burundi, Sierra Leona, Camboya, Kosovo, Irak y Líbano. De estas, sólo en relación a Burundi no se ha definido por la creación y funcionamiento de una justicia penal supranacional. Para los demás se ha instalado aquella jurisdicción y se encuentra en pleno funcionamiento.

Para el éxito de sus labores estos tribunales dependen de la cooperación de la comunidad internacional, considerándose, en esto, la colaboración de los Estados, por ejemplo, cuanto a las investigaciones, a la presentación de testigos y entrega de los acusados. Por sus actividades los tribunales deben presentar Informes anuales a la Asamblea General y/o al Consejo de Seguridad.

Como la propuesta de esta tesis es presentar un panorama de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos considerándose el ámbito en que ejercen sus atribuciones, es decir, el alcance espacial de sus competencias, si universal/global, mundial, regional/continental, intercontinental o sub-regional, y por

se tratar el presente capítulo de la protección universal o global, de naturaleza extra-convencional, por ahora se abordaran solamente las situaciones de la Justicia Penal Universal, impuesta por la Comunidad Internacional en respuesta a las graves, ciertas y determinadas violaciones a los derechos humanos.

Cabe observar que la jurisdicción universal o “justicia universal”, es también considerada por el ejercicio de la jurisdicción nacional en relación a un crimen practicado en el extranjero, y que sólo por reflejo alcanza intereses de un Estado, por estar obligado a reprimirlo con base en su propia legislación y que remite a ciertos temas de violaciones de derechos humanos previstos en Tratado o Convención. En este último caso se tiene la configuración del ejercicio jurisdiccional delante del principio de la extraterritorialidad<sup>224</sup>. En el ámbito de la jurisdicción penal española, por ejemplo, los crímenes perseguidos con base al principio de “justicia universal” son el genocidio, terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronave, falsificación de moneda extranjera, los crímenes relativos a la prostitución, al tráfico ilegal de drogas psicotrópicas y tóxicas y estupefacientes<sup>225</sup>.

En los rigores de la terminología que esta tesis procura centrarse, la actuación de la justicia nacional, con base en la extraterritorialidad, debería denominarse “justicia mundial”, y no “justicia universal”, pues es de naturaleza convencional. Todavía, considerándose los límites del objeto de esta tesis, no cabe evolucionar sobre el tema, sobre el riesgo de ultrapasarlos.

Cuanto al Tribunal Penal Internacional, por se tratar de una jurisdicción supranacional convencional, limitada a los países que ratificaron el Estatuto de Roma, y, por tanto, de alcance mundial, y no universal, será tratado en capítulo propio sobre la tutela internacional mundial<sup>226</sup>.

---

<sup>224</sup> Caso marcante fue el del General Pinochet, de Chile, sometido a persecución criminal por la Justicia Española.

<sup>225</sup> Estos datos son apuntados por JUAN JOSÉ DIEZ SANCHES, en *El Derecho Penal Internacional (Ámbito Espacial de la Ley Penal)*, COLEX, Madrid, 1990, pp. 186-196.

<sup>226</sup> Véase ítem II.2.A, en esta Segunda Parte.

## **a – TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES “AD HOC”**

Son los Tribunales creados por la ONU, a través del Consejo de Seguridad, para tramitar la responsabilidad penal de crímenes de genocidio y contra la humanidad, en razón de elementos muy bien definidos, como el sitio y el período en que ocurrieran dichas violaciones. Trátase de una iniciativa extra-convencional, con su base jurídica en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que asegura al Consejo de Seguridad adoptar las medidas coercitivas necesarias en casos de violaciones masivas de derechos humanos que puedan amenazar la paz y la seguridad internacional, notoriamente relacionadas a asesinatos, atrocidades, exterminio, tortura, esclavitud y deportación, practicados por motivos raciales, étnicos, políticos, religiosos contra la población civil.

Dada la urgencia de imponer el cese o impedir las graves violaciones, es que dicha instancia penal internacional se constituye “ad hoc”, es decir, por acto unilateral de la propia ONU, sin depender de un tratado internacional con el consentimiento de los Estados, medida esta que, por su propia dimensión, impediría atender a la urgencia de la situación.

Como precedentes de estos tribunales se pueden mencionar los Tribunales militares internacionales de Nuremberg y de Tokio, creados en 1945 y 1946, respectivamente, para juzgar los responsables por los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, practicados durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo de las labores que vienen desarrollando los tribunales “ad hoc”, su creación por el Consejo de Seguridad ha encontrado críticas por parte de la doctrina, como bien expresan las palabras de JOHN PHILPOT<sup>227</sup>:

---

<sup>227</sup> JOHN PHILPOT es abogado en derecho penal, Secretario General Adjunto de la Asociación Americana de Juristas, en Montreal, Canadá, y ha sido miembro del jurado del Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra que celebró sus audiencias en Nueva York el 28 y el 29 de febrero de 1992. Ha expuesto las palabras señaladas en el artículo “*El Tribunal Internacional para Ruanda: La Justicia traicionada*”, disponible en la página web <[www.inshuti.org/jurista.htm](http://www.inshuti.org/jurista.htm)> [Consulta: 05 de marzo de 2010].

*“La Asamblea General aprobó una resolución sobre la cuestión del tribunal internacional. La resolución 46/54, párrafo 3 (1991), estipula que la Asamblea General tiene la responsabilidad de emitir directivas al respecto. Esta autoridad tiene por fundamento los artículos 10 y 13 de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad usurpa el poder de la Asamblea General cuando se otorga el rol de crear un tribunal internacional.*

*El Consejo de Seguridad creó el Tribunal Internacional para Ruanda en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Este capítulo contempla que el Consejo de Seguridad haga uso de coerción cuando se necesite actuar para prevenir agresiones o mantener la paz. Por lo tanto, el tribunal creado en virtud del artículo 29 de la Carta de las Naciones Unidas es una filial del Consejo de Seguridad en el ejercicio de su función coercitiva atribuida de conformidad con el capítulo VII de la Carta.*

*Según creemos, no existe ningún estudio que haya sugerido que un tribunal internacional debería desempeñar un papel dentro de las actividades coercitivas previstas para el Consejo de Seguridad. Un jurista tiene que hacer acrobacias mentales para poder justificar la creación de un tribunal que sería un apéndice de un organismo internacional de coerción. Al desempeñar ese rol activo de coerción, el tribunal no puede satisfacer los requisitos de neutralidad y de independencia que deben ser los distintivos de cualquier tribunal, y aún más de un tribunal internacional que requiere el respeto y el apoyo de todas las naciones.*

*Un tribunal internacional con atribuciones penales debería tener un carácter permanente y no ser un organismo ad hoc. Ahí reside una de las diferencias entre un tribunal de esa índole y una comisión de investigación. Cabe señalar que el mandato del Tribunal Internacional para Ruanda ha sido limitado al procesamiento de ciertas personas en relación a los acontecimientos ocurridos en Ruanda y en países limítrofes, en 1994. En su esencia misma, sus*



*limitaciones y su carácter de organismo ad hoc hacen que se parezca más a una comisión de investigación que a un tribunal con atribuciones penales.*

*La experiencia del Tribunal de Nuremberg dió origen a un abundante cuerpo de derechos que servían para castigar a los autores de guerras de agresión y actos de genocidio. Por el contexto y por ser una primera experiencia, Nuremberg fue un tribunal ad hoc. Los que emitieron críticas sobre Nuremberg dijeron que los vencedores enjuiciaron a los vencidos por sus crímenes. La comunidad internacional ha procurado pasar a otro plano desde Nuremberg y crear un tribunal internacional permanente de manera tal que pueda garantizar su independencia e imparcialidad. Sería inadecuado, entonces, volver al punto de partida que representó Nuremberg, pero totalmente fuera de contexto”.*

Cuanto al funcionamiento y resultados alcanzados por los Tribunales Penales “ad hoc”, la Profesora JOANA ABRISKETA apunta algunos aspectos positivos y negativos en la actuación de aquellos órganos<sup>228</sup>. Como positivos señala el siguiente:

*“a) Han cumplido una función represiva, con la identificación y castigo de parte de los culpables; así como otra preventiva, por cuanto la posibilidad de verse juzgados pudo disuadirles, aunque parcialmente, de cometer nuevos crímenes.*

*b) Igualmente, su creación ha cumplido una función simbólica, al reflejar un avance decisivo en el compromiso de la comunidad internacional para hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario, y en su reconocimiento de que determinados crímenes monstruosos atentan contra toda la humanidad y no deben quedar impunes. De este modo, han servido como paso previo y laboratorio de ensayo para la posterior aprobación, en 1998, del Estatuto para una corte penal internacional permanente.*

---

<sup>228</sup> JOANA ABRISKETA es doctora en Derecho Internacional y profesora de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Deusto, y los aspectos apuntados se encuentran en el texto *Tribunales Penales Internacionales ad hoc (para ex Yugoslavia y Ruanda)*, disponible en la web <<http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/219>> [Consulta: 05 de marzo de 2010].

*c) Al responder cada tribunal a unas necesidades específicas, las reglas de procedimiento y el derecho aplicable pueden ser definidas con más claridad y precisión que si se tratara de un tribunal penal internacional permanente.*

*d) La impartición de justicia por una institución independiente ha contribuido, siquiera parcialmente, además de la identificación y castigo de los culpables, al esclarecimiento de la verdad histórica, dejando constancia de los crímenes cometidos. El conocimiento de lo sucedido y la superación del sentimiento de impunidad son bases necesarias para el proceso de rehabilitación posbélica y para una posible reconciliación.*

*e) La exclusión de la pena de muerte, si bien esto puede dar lugar a un doble estándar de castigo, por cuanto cabe la posibilidad de que a los juzgados por las justicias nacionales sí se les llegue a aplicar.”*

Como puntos negativos o sus deficiencias la Profesora JOANA ABRISKETA registra que<sup>229</sup>:

*“a) Pueden suponer una coartada a la pasividad de los Estados de la comunidad internacional, permitiéndoles no tener que adoptar medidas políticas o militares de mayor alcance ante violaciones de los derechos humanos cometidos fuera de sus países.*

*b) Han sido creados por el Consejo de Seguridad, de modo que es éste, un órgano esencialmente político, el que establece los casos en que se exigen responsabilidades. Dado que los Estados miembros permanentes en el Consejo de Seguridad nunca crearían tribunales ad hoc competentes en su propio territorio o en el de otros Estados donde no quisieran verlos actuar, la figura de los tribunales ad hoc puede llevar a agravios comparativos y a la parcialidad en la administración de justicia.*

*c) La constitución de un tribunal internacional, tanto ad hoc como permanente, resulta una tarea compleja y difícil. Al tratarse de un instrumento nuevo, el sistema financiero y burocrático de la ONU apenas está preparado para asumir esta tarea. En consecuencia, los errores, los retrasos y la infra dotación de recursos han sido palpables. El Consejo de Seguridad se encontró*

---

<sup>229</sup> Ibidem.

*frecuentemente desbordado por problemas y cuestiones relativos a los tribunales y su administración, y quizás como consecuencia de esto no se han vuelto a establecer órganos similares a los Tribunales para la ex Yugoslavia y Ruanda.*

*d) Se ha establecido una justicia con dos niveles de garantías, especialmente en el caso del Tribunal para Ruanda, dado que protege la vida de los principales culpables, por cuanto no contempla la pena de muerte, y les asegura unas mejores condiciones de detención que a las personas perseguidas y condenadas por la jurisdicción ruandesa.*

*e) Ninguno de los dos tribunales tiene policía propia, de modo que los arrestos deben ser efectuados por las policías de los Estados. Sin embargo, según Cassese (1998:10), en muchas ocasiones ha sido manifiesta la falta de cooperación de los Estados en ese terreno. Asimismo ha sido evidente la falta de voluntad para perseguir a los principales líderes políticos o militares.*

*f) Los tribunales internacionales acarrear un alto coste, mayor que el de la justicia impartida por los propios Estados”.*

Los Tribunales Internacionales que han sido creados son el Tribunal Penal Internacional “ad hoc” para la antigua Yugoslavia<sup>230</sup> y el Tribunal Penal Internacional “ad hoc” para Ruanda<sup>231</sup>.

---

<sup>230</sup> Es creado por las Resoluciones 808, de 22/02/93, y 827, de 25/5/93, del Consejo de Seguridad, con el objetivo de juzgar los casos de impunidad con relación a los asesinatos en masa, violaciones de mujeres, práctica de depuración étnica, conquista y retención de territorio, observados principalmente en Bosnia y Herzegovina, a partir del 1 de enero de 1991, y cuyas prácticas se encuentran reprochadas por normas convencionales o del derecho consuetudinario internacional. Funciona en Haya.

<sup>231</sup> Es el Tribunal creado con el objetivo de juzgar los casos de impunidad con relación a los conflictos armados internacionales o internos, el crimen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad, como son los casos de asesinatos en masa, exterminio, tortura, encarcelamiento, violaciones de mujeres, así como contra la salud, el bienestar físico o mental, mutilación, tratos humillantes o degradantes, el castigo corporal, o cualquier otra forma de agresión indecente, practicados en el territorio de Ruanda, principalmente por la masacre de la etnia tutsi por los hutus, en que murieron más de ochocientas mil personas. Su creación fue por la Resolución 955, de 8 de noviembre de 1994, del Consejo de Seguridad, vinculado al enjuiciamiento de aquellas prácticas criminales en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 1994. Ha empezado a funcionar el 08 de febrero de 1996. El Tribunal funciona en la Arusha, Tanzania.

## **b – TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALIZADOS**

Los tribunales penales internacionalizados inauguran un nuevo modelo de Justicia Penal supranacional, pues son nacionales e internacionales al mismo tiempo, agregando rasgos de la jurisdicción nacional con la internacional, tanto del punto de vista de la legislación penal, como de la organización y funcionamiento de sus órganos, creándose o aprovechándose las estructuras judiciales existentes, y de regla creados con el consentimiento del país y con su composición formada por magistrados nacionales e internacionales, estos nombrados por Naciones Unidas o por el propio país, o mismo nombrados conjuntamente por uno y otro.

La primera experiencia surge con el Tribunal Especial en Kosovo, establecido en 27 de mayo de 2000<sup>232</sup>. También son creados los Tribunales Penales Internacionalizados para Sierra Leona<sup>233</sup>, los Tribunales Especiales para Timor Oriental<sup>234</sup> (Tribunal Especial de Derechos Humanos en Indonesia<sup>235</sup> y los Tribunales Especiales de Delitos Graves en Timor Oriental<sup>236</sup>), la Cámara Extraordinaria en las

---

<sup>232</sup> Por la Regulación 2000/6, de la Misión de Administración Provisional de Naciones Unidas en Kosovo-UNMIK. Son muy escasos los estudios académicos sobre la Justicia Internacional en Kosovo. Uno de los pocos trabajos existentes y que procura pasar algunas informaciones más detalladas sobre el tema es la publicación de DÉBORA GARCÍA ORRICO, del 26 de abril de 2007, y disponible en <http://www.iugm.es/ARCHIVOS/Resoluciondeconflictos/UNMIK.%20Fernando%20Val.%20Debora.pdf> [Consulta: 10 de rzo de 2010], página web del Instituto Universitario Gutierrez Mellado, de investigación sobre paz, seguridad y defensa, de Madrid España.

<sup>233</sup> Ha sido creado por Naciones Unidas, en acuerdo con Sierra Leona, por la Resolución 1315, del Consejo de Seguridad, del 14 de agosto de 2000, para el enjuiciamiento de personas con mayor responsabilidad por las graves violaciones al derecho humanitario internacional, notadamente crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad del derecho internacional, y también los delitos tipificados en el derecho de Sierra Leona, cometidos en su territorio desde 30 de noviembre de 1996. Inició sus actividades en enero de 2002 y su sede es en Freetown, capital de Sierra Leona.

<sup>234</sup> En Timor Leste Naciones Unidas instala la Administración Transitoria de Naciones Unidas en Timor Leste-UNTAET, por la Resolución 1272, del 1999, nombrando un Administrador indicado por el Secretario General, con aprobación de la Asamblea General, con funciones ejecutivas y legislativas en el territorio ocupado. En 2001 Indonesia crea el Tribunal Especial “ad hoc” de Derechos Humanos para los crímenes de Timor Leste, practicados en 1999.

<sup>235</sup> Más allá de los graves delitos cometidos en Timor Oriental en 1999, y la correspondiente creación del Tribunal Especial de Derechos Humanos, con sede en Yakarta, Indonesia ha creado también los Tribunales Permanentes de Derechos Humanos con sede en Surabaya, Medan, capital del norte de Sumatra, y Macasar, capital del sur de Sulawesi, para el enjuiciamiento de crímenes contra los derechos humanos practicados en aquellas regiones.

<sup>236</sup> Creada por la Resolución 1272 (1999), del 25/10/99, del Consejo de Seguridad. Por el Reglamento 11, de 2000, la Administración Transitoria de Naciones Unidas en Timor Oriental-UNTAET crea y normatiza la estructura del Poder Judicial, con el Tribunal Distrital de Dili.

Cortes de Camboya<sup>237</sup>, el Tribunal Especial en Irak<sup>238</sup> y el Tribunal Especial para Líbano<sup>239</sup>, cada uno con rasgos muy específicos.

### **3 – TUTELA DE JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA<sup>240</sup>**

En este contexto se sitúan los órganos internacionales del sistema de las Naciones Unidas, encargados de solucionar las cuestiones vinculadas a la función pública internacional, limitándose su competencia estrictamente a esta materia, como son los casos del “Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo-T.A.O.I.T.” y el “Tribunal de las Naciones Unidas-T.A.N.U.”.

La referida jurisdicción se incluye en el presente trabajo en vista de que las situaciones litigiosas de competencia de dichos órganos se traducen en cuestiones de naturaleza jurídica vinculada a los derechos humanos y las libertades

---

<sup>237</sup> Por la Resolución 57/228, del 18 de diciembre de 2002, la Asamblea General de Naciones Unidas formalizó las negociaciones para la creación de un Tribunal internacional para el enjuiciamiento de los acusados de los graves crímenes de genocidio y lesa humanidad, durante el período de gobierno del Jemer Rojo, en Camboya, de 1975 a 1979, ocasión en que murieron cerca de 2 millones de personas, víctimas de ejecuciones, campamentos de trabajos forzados y la hambruna generalizada. En mayo de 2003, la ONU y el Gobierno de Camboya acordaron en instalar las “Salas Especiales de Camboya”, integrante del Judiciario local, y con la delimitación de enjuiciamiento sólo a algunos personajes de aquel período. El modelo de tribunal internacional creado en Camboya se define como un tribunal mixto, con miembros formados por Jueces nacionales y extranjeros. Tiene sede en la capital de Camboya, Phnom Penh.

<sup>238</sup> Por la Resolución 1483 del Consejo de Seguridad y por la Normativa 6, de la Autoridad Provisional de Coalición-APC se define la instalación en Irak de un Consejo de Gobierno, como autoridad provisional y principal órgano de la administración iraquí. Una de las medidas de la APC fue editar el Orden 15, de 23 de junio de 2003, que establece el Comité de Revisión Judicial y suspende la Ley de Organización del Poder Judicial en Irak, de 1979. Crease el Tribunal Especial Iraquí, independiente y no integrante del sistema judicial ordinario existente en Irak hasta su invasión, y con algunos de sus órganos pudiendo ser compuesto por Jueces no iraquíes. El Tribunal Especial para Irak ha sido creado para juzgar a los ciudadanos iraquíes y a los residentes en Irak sospechosos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos entre 17 de julio de 1968 y el 1 de mayo de 2003. Para tanto se ha expedido, el 10 de diciembre de 2003, una normativa propia de organización y funcionamiento del Tribunal, denominado “Estatuto del Tribunal Especial para Irak”. En el se asegura que está prohibida la aplicación de normas de prescripción a los crímenes de su competencia.

<sup>239</sup> El Tribunal Penal Internacional para el Líbano fue creado por la Resolución 1757 (2007), del Consejo de Seguridad, aprobada el 30 de marzo de 2007, con el objetivo del enjuiciamiento de los responsables por el atentado terrorista el 14 de febrero de 2005, en Beirut, que causó la muerte de ex Primer Ministro de Líbano, Rafik al-Hariri y otras 22 personas, más allá de decenas de heridos graves. La iniciativa de creación de un órgano de justicia penal internacional ha sido del propio Gobierno de Líbano, en carta de 13 de diciembre de 2005, dirigida al Secretario General de Naciones Unidas. El funcionamiento del Tribunal se ha definido para iniciarse el 10 de junio de 2007, con su sede localizada en Haya.

<sup>240</sup> Sobre este tema ver QUOC DINH, N., DAILLIER, P., PELLET, A., *Direito Internacional Público (Droit International Public)*, 4ª edición, trad. Vítor Marques Coelho, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1999, pp. 806-809.

fundamentales, como son los temas de los derechos sociales de contrato laboral y de régimen de pensión.

## **A – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO - TAOIT**

Fue el primer tribunal administrativo internacional, creado en 1927, y se compone de seis miembros, siendo tres titulares y tres sustitutos, con mandato de tres años, prorrogable por igual período, y elegidos por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo-OIT.

Su sede es en Ginebra, y a su jurisdicción se someten la propia Organización Internacional del Trabajo-OIT, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO, la Organización Mundial de la Salud-OMS, la Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación-FAO, la Organización Meteorológica Mundial-OMM, la Unión Internacional de Telecomunicaciones-UIT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio-GATT y la Agencia Internacional de la Energía Atómica-AIEA, más allá de otras organizaciones de ámbito regional.

Tiene por finalidad dirimir las controversias entre las organizaciones internacionales y sus agentes, específicamente con relación a los contratos de trabajo y el régimen de pensión en casos de invalidez o de jubilación. Trátase de un órgano con competencia recursal, es decir, sólo actúa en grado de recurso contra las decisiones administrativas definitivas, decidiendo por mayoría de votos, pudiendo anular la medida impugnada o igualmente establecer una reparación pecuniaria<sup>241</sup>.

La decisión del TAOIT es definitiva para el funcionario, pudiendo, en el caso de las organizaciones internacionales, ser sometidas a un mecanismo de revisión por el Tribunal Internacional de Justicia, que se manifiesta por una opinión consultiva sobre la validez de la sentencia.

---

<sup>241</sup> Hasta 1992 el Tribunal había conocido en más de 1000 recursos, cf. QUOC DINH, N., DAILLIER, P., PELLET, A., op. cit., p. 807.

## **B – TRIBUNAL DE LAS NACIONES UNIDAS - TANU**

Creado en 1949, por la Asamblea General de la ONU, se compone de siete miembros, elegidos por la Asamblea General para un mandato de tres años, prorrogable por igual período. Su sede es en Nueva York, pero realizándose una de sus sesiones en Ginebra.

Su objetivo es dirimir las controversias de la ONU con relación a sus propios funcionarios y agentes, y según ha decidido el Tribunal Internacional de Justicia, se trata de un órgano independiente, siendo sus decisiones de carácter obligatorio para todos los órganos de las Naciones Unidas, hasta para la Asamblea General, incluso en lo que se refiere a las ejecuciones de sus juzgados.

De las decisiones del Tribunal cabe recurso al Tribunal Internacional de Justicia, cuya admisibilidad es sometida al “Comité de Pedidos de Revisión de Sentencias del TANU”<sup>242</sup>.

## **II – MUNDIAL – BASE CONVENCIONAL**

Mencionar la estructura mundial de protección a los derechos humanos es hacer referencia a las situaciones basadas en los tratados internacionales de derechos humanos, o sea, enfrentar el tema bajo el punto de vista convencional, que vincula sólo a las partes pactantes, con el objetivo de proteger a cierto y específico tema o fenómeno. En estos casos, generalmente se define la creación de un órgano de acompañamiento, control y garantía permanente, de modo que, para cada Convención, Tratado o Pacto se establece la respectiva Comisión o Comité.

En el seno de las Naciones Unidas esta estructura se identifica, prevalentemente, como “Sistema de Tratados de Derechos Humanos”.

---

<sup>242</sup> En tres situaciones fueron interpuestos estos recursos: opinión consultiva TIJ, de 12 de julio de 1973, proceso FASLA; opinión consultiva de 20 de julio de 1982, proceso Mortished; y opinión consultiva de 25 de mayo de 1987, proceso Yakimetz, conforme registran QUOC DINH, N., DAILLIER, P., PELLET, A., op. cit., p. 809.

Un rasgo muy relevante de este sistema de protección es que su objetivo es asegurar la protección de los derechos humanos en el plano nacional, exigiéndose de los Estados el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados, y que *“constituyen un marco normativo para la labor que llevan a cabo las Naciones Unidas en apoyo de la aplicación de las normas de derechos humanos en el plano nacional”*<sup>243</sup>.

## **1 – TUTELA NO JURISDICCIONAL POR ÓRGANOS ESPECIALIZADOS DE PROTECCIÓN**

En esta categoría se sitúan los mecanismos de actuación de naturaleza no-contenciosa, propios de los Comités, y que desempeñan una función esencial en la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional.

Sobre el tema, MANUEL DIEZ DE VELASCO presenta esclarecedor registro, destacando las siguientes características: *“En primer lugar, son creados por un tratado internacional o por aplicación del mismo. Por consiguiente, a excepción del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no son en sentido estricto órganos de la ONU con independencia de que la Organización asuma su financiación y les preste soporte administrativo y técnico. En segundo lugar, son órganos técnicos integrados por expertos designados a título individual, que no pueden recibir instrucciones gubernamentales ni de ningún otro órgano u organización, nacional o internacional. En tercer lugar, son órganos permanentes en cuanto a su creación, que desarrollan sus trabajos en periodos de sesiones predeterminados cuya duración varía de un caso a otro. En cuarto lugar, su competencia se circunscribe al instrumento convencional que los crea y les sirve de soporte. Por consiguiente, tan sólo pueden interpretar y supervisar la aplicación del mismo y carecen de competencias generales en materia de derechos humanos o respecto de cualquier otro instrumento. Por último, en relación con el alcance de su competencia, ha de tenerse en cuenta que la misma se centra fundamentalmente en el control y supervisión de la forma en que los Estados partes cumplen las obligaciones*

---

<sup>243</sup> HRI/MC/2006/2, p. 5.



*convencionales. Sin embargo, ello no se traduce en un modelo de control único. Por el contrario, dicha actividad la ejercen a través de diversos mecanismos y procedimientos que van desde el mero estudio de informes gubernamentales a la recepción de denuncias individuales, fórmula esta última que se va consolidando en los últimos años como un mecanismo de vocación general*<sup>244</sup>.

En palabras de la Secretaría General de Naciones Unidas, contenidas en el documento HRI/MC/2006/2 *“El objetivo principal del sistema de tratados de derechos humanos es asegurar la protección de esos derechos en el plano nacional por medio del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados. Así pues, la eficacia del sistema de tratados debe medirse por el grado de cumplimiento nacional”*, con medidas para *“prevenir las violaciones de los derechos humanos y asegurar que se adopten medidas prontas y eficaces en los casos en que se produzcan tales violaciones*<sup>245</sup>.

En el marco de Naciones Unidas se puede definir como “Convenciones Centrales” – “core Convencions”<sup>246</sup> – las diez convenciones de protección a los derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966<sup>247</sup>, y sus dos Protocolos Facultativos, el primero de 1966<sup>248</sup>, y el segundo de 1989<sup>249</sup>; el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966<sup>250</sup> y su Protocolo Facultativo, de 2008<sup>251</sup>; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las

---

<sup>244</sup> DIEZ DE VELASCO, M., *Las Organizaciones Internacionales*, op. cit. , p. 297.

<sup>245</sup> Página 5 del documento HRI/MC/2006/2.

<sup>246</sup> Un estudio sobre el proceso de desarrollo de estas Convenciones después de la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos se puede consultar en CANÇADO TRINDADE, A. A., *Tratado de Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, vol III, Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 2003, pp. 235-299.

<sup>247</sup> Entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Hasta marzo de 2006, ha sido ratificada por 155 Estados (80%). En el “Anexo (15)” de esta tesis hay un cuadro con los datos de los países en relación al Pacto.

<sup>248</sup> Entró en vigor el 23 de marzo de 1976. En el “Anexo (16)” de esta tesis hay un cuadro con los datos de los países en relación al Protocolo.

<sup>249</sup> Entró en vigor el 11 de julio de 1991. En el “Anexo (17)” de esta tesis hay un cuadro con los datos de los países en relación al Protocolo.

<sup>250</sup> Entró en vigor el 3 de enero de 1976. Hasta marzo de 2006, ha sido ratificada por 152 Estados (78%). En el “Anexo (18)” de esta tesis hay un cuadro con los datos de los países en relación al Pacto.

<sup>251</sup> De conformidad con la Resolución A/RES/117, adoptada el 10 de diciembre de 2008. En el “Anexo (19)” de esta tesis hay un cuadro con los datos de los países en relación al Protocolo.

Formas de Discriminación Racial, de 1969<sup>252</sup>; Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1981<sup>253</sup> y su Protocolo Facultativo<sup>254</sup>; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, de 1984<sup>255</sup>; Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes<sup>256</sup>; Convención de los Derechos del Niño, de 1989<sup>257</sup> y sus dos Protocolos Facultativos, el primero, el Protocolo Facultativo relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados<sup>258</sup> y, el segundo, el Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, a la Prostitución Infantil y Utilización de Niños en la Pornografía Infantil<sup>259</sup>; Convención internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares<sup>260</sup>; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad<sup>261</sup> y su Protocolo Facultativo<sup>262</sup>, y, la más reciente, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada<sup>263</sup>.

---

<sup>252</sup> Entró en vigor el 4 de enero de 1969. Hasta marzo del 2006, ha sido ratificada por 165 Estados (88%). En el “Anexo (20)” de esta tesis hay un cuadro con los datos de los países en relación a la Convención.

<sup>253</sup> Entró en vigor el 3 de septiembre de 1981. En el “Anexo (22)” de esta tesis hay un cuadro con los datos de los países en relación a la Convención.

<sup>254</sup> Protocolo Facultativo para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, entró en vigor el 22 de diciembre de 2000. En el “Anexo (24)” de esta tesis hay un cuadro con los datos de los países en relación al Protocolo.

<sup>255</sup> Entró en vigor el 26 de junio de 1987. En el “Anexo (25)” de esta tesis hay un cuadro con los datos de los países en relación a la Convención.

<sup>256</sup> Entró en vigor el 22 de junio de 2006. En el “Anexo (27)” de esta tesis hay un cuadro con los datos de los países en relación a la Convención.

<sup>257</sup> Entró en vigor el 20 de septiembre de 1990. En el “Anexo (28)” de esta tesis hay un cuadro con los datos de los países en relación a la Convención.

<sup>258</sup> Entró en vigor el 12 de febrero de 2002. En el “Anexo (30)” de esta tesis se encuentran los datos de los países en relación al Protocolo.

<sup>259</sup> Entró en vigor el 18 de enero de 2002. En el “Anexo (31)” de esta tesis se encuentran los datos de los países en relación al Protocolo.

<sup>260</sup> Entró en vigor en 18 de diciembre de 1990. En el “Anexo (32)” de esta tesis se encuentran los datos de los países en relación a la Convención.

<sup>261</sup> Entró en vigor en 03 de mayo del 2008. En el “Anexo (33)” de esta tesis se encuentran los datos de los países en relación a la Convención.

<sup>262</sup> Entró en vigor en 03 de mayo del 2008. En el “Anexo (34)” de esta tesis se encuentran los datos de los países en relación al Protocolo.

<sup>263</sup> Aprobada por consenso por la Resolución A/RES/61/177, de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 20 de diciembre del 2006. En el “Anexo (35)” de esta tesis se encuentran los datos de los países en relación a la Convención.

En el cuadro abajo se tiene una exposición de las ratificaciones a las principales Convenciones mencionadas, hasta septiembre de 2011:

<b>Convención</b>	<b>Número de Estados partes</b>
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial	174
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	167
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	160
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer	187
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes	149 <sup>264</sup>
Protocolo Facultativo a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura	60
Convención sobre los Derechos del Niño	193
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares	45
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad	104
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada	30

En la actual estructura de Naciones Unidas se encuentran vinculados diez órganos convencionales específicos en la protección de los derechos humanos: el Comité de los Derechos Humanos, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, Comité de los Derechos del Niño, Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el Comité contra la Desaparición Forzada.

A pesar de que el sistema de tratados de derechos humanos sea reconocido como uno de los más importantes por su significativa contribución a la promoción y protección de los derechos humanos, incluso por proporcionar “*orientación fidedigna*”

<sup>264</sup>De los 146 Estados que son partes en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 47 (32%) han ratificado, hasta 1º de junio de 2009, el Protocolo Facultativo de la Convención.

sobre el significado de las normas internacionales de derechos humanos<sup>265</sup>, la Secretaría-General de las Naciones Unidas ha admitido que “No obstante, estas medidas no bastarían para hacer frente a los problemas subyacentes a que se enfrenta el sistema. Pese a sus logros, el sistema sólo es conocido en los círculos académicos y los departamentos estatales, y entre los funcionarios que interactúan directamente con él, los abogados y las ONG especializados. Raras veces se considera al sistema de órganos creados en virtud de tratados un mecanismo accesible y eficaz para lograr cambios. Las víctimas de violaciones de los derechos humanos y los agentes de la sociedad civil suelen desconocer los complejos procedimientos del sistema y sus posibilidades. La cobertura que dan los medios de comunicación es deficiente y la utilización de jurisprudencia de estos órganos por los abogados y los sistemas judiciales nacionales, limitada. Las visitas de miembros de los órganos a los países siguen siendo excepcionales y el sistema suele calificarse de desconectado de la realidad sobre el terreno, ya que las reuniones sólo se celebran en Ginebra o Nueva York<sup>266</sup>”.

Un problema serio que se enfrenta el sistema de tratados de derechos humanos esta relacionado al hecho de que muchos Estados que aceptan el sistema oficialmente “no actúan en consecuencia, o lo hacen de manera superficial, ya sea como resultado de la falta de capacidad o de la falta de voluntad política. Algunos Estados no presentan los informes que exigen los tratados y la mayoría los presentan con una demora considerable. Muchos Estados, incluidos los que tienen una capacidad técnica significativa y un grado elevado de empeño, tropiezan con dificultades para cumplir las complejas obligaciones en materia de presentación de informes, que con frecuencia se superponen, debido a otras exigencias en la materia”. Mas allá, “Los Comités tienen un poder real escaso para obligar a los Estados a cumplir los procedimientos pero, con los métodos de trabajo actuales, no podrían hacer frente a la labor que supondría que los Estados Partes cumplieran sus obligaciones. El logro de la meta establecida por la Alta Comisionada consistente en la ratificación universal y la aceptación de todas las quejas y procedimientos de

---

<sup>265</sup> HRI/MC/2006/2, p. 8.

<sup>266</sup> HRI/MC/2006/2, p. 13.

*investigación, junto con el pleno cumplimiento por los Estados Partes de los procedimientos de presentación de informes, agravaría estos problemas*<sup>267</sup>.

La eficacia del sistema convencional en la tutela internacional de los derechos humanos ha sido, así, objeto de reiteradas discusiones por los distintos actores involucrados con el tema, siendo de se registrar en este aspecto la Declaración de Marrakesh, o Marrocos, del 10 de junio de 2010<sup>268</sup>, sobre el refuerzo de la relación entre las instituciones nacionales y el sistema de los órganos de tratados de derechos humanos. Dicha Declaración resultó de la reunión conjunta de Estados miembros, de los órganos de tratados, de las instituciones nacionales, de los miembros de los órganos de Tratados, sociedad civil y demás partes interesadas realizada el 09 y 10 de junio de 2010, en Marrakesh, en respuesta al llamamiento de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para iniciar un proceso de reflexión sobre la manera de promover y consolidar el sistema de los órganos de tratados para mejor promoción y protección de los derechos humanos a nivel nacional en cada país.

En aquella ocasión los participantes reconocieron que, no obstante las largas conquistas alcanzadas por los órganos de tratados, *“Los múltiples desafíos a los que enfrenta el sistema de los órganos de tratado indica que debe someterse a un proceso de cambio profundo y una mejora importante con el fin de lograr sus objetivos”* hasta porque *“La multiplicación de los mecanismos de los derechos humanos arriba mencionados ha aumentado el riesgo de superposición sustancial, de contradicción, de falta de coordinación y de una fragmentación del sistema de protección de los derechos humanos. El impacto a nivel del país de la labor de estos procedimientos está significativamente debilitado”*<sup>269</sup>.

---

<sup>267</sup> Conforme datos contenidos en el documento HRI/MC/2006/2, página 10/11.

<sup>268</sup> El proyecto de texto de la Declaración se puede ver en la web <[http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:-ByGoq5l1WcJ:www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/docs/MarrakeshStatement\\_sp.doc+%22EI+Consejo+Consultivo+de+derechos+humanos+de+Marruecos+organiz%C3%B3%22&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEEShDTL0qrHTt1g93Rq2xKkHXY6yBUDLwjswOn5Ro9aZyeduQy6O1EXy-ZWqMPtrSjEodhbInpW2GiRANNksB\\_A5PsoSE6r9OOGeiddQHTnSvQT6WMgZ1rW8a-k6pqn2O4mxhHZ8k&sig=AHIEtbStSdwc3mfKKCkvzk\\_iLwbgiZiybog](http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:-ByGoq5l1WcJ:www2.ohchr.org/english/bodies/HRTD/docs/MarrakeshStatement_sp.doc+%22EI+Consejo+Consultivo+de+derechos+humanos+de+Marruecos+organiz%C3%B3%22&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEEShDTL0qrHTt1g93Rq2xKkHXY6yBUDLwjswOn5Ro9aZyeduQy6O1EXy-ZWqMPtrSjEodhbInpW2GiRANNksB_A5PsoSE6r9OOGeiddQHTnSvQT6WMgZ1rW8a-k6pqn2O4mxhHZ8k&sig=AHIEtbStSdwc3mfKKCkvzk_iLwbgiZiybog)> [Consulta: 18 de noviembre de 2010].

<sup>269</sup> Idem, pág. 4.

En los intentos para encontrar soluciones a una mejora del funcionamiento del sistema de tratados ya se plantea, por propuesta de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la creación de un órgano unificado permanente, es decir, un “Súper-Comité”<sup>270</sup>, reuniendo los nueve Comités de Derechos Humanos, con el objetivo de fortalecer y simplificar sus labores, más allá de reforzar la indivisibilidad de las obligaciones de derechos humanos, hasta porque los Estados cumplen de manera integrada sus obligaciones emanadas de los Tratados, y las personas o grupos no disfrutan de aquellos derechos o sufren violaciones distinguiéndose uno u otro tratado.

A juicio de la Alta Comisionada, y como ha destacado la Profesora NATALIA OCHOA RUIZ, *“la creación de un órgano permanente unificado, compuesto por expertos con dedicación exclusiva, parece la medida más adecuada para afrontar de manera definitiva los problemas de los mecanismos convencionales. Este órgano estaría en condiciones de asegurar una aplicación integrada y comprensiva por parte de los Estados de sus obligaciones sustantivas contenidas en las convenciones que hayan ratificado, y reforzaría el nivel de protección de los derechos humanos en el plano interno por medio de un mecanismo visible, efectivo y con autoridad, más accesible para las víctimas de las violaciones. Se espera que este órgano pueda emitir una jurisprudencia coherente y dotada de una mayor autoridad; resulte más accesible para las víctimas; sea capaz de responder con mayor rapidez a las violaciones graves de los derechos humanos; mejore el diálogo con los Estados; pueda innovar en los métodos de trabajo, las vías para avanzar en la protección de los derechos humanos, las modalidades de participación de la sociedad civil y los órganos y organismos de las Naciones Unidas, y la capacidad para ayudar a los Estados en la aplicación de sus obligaciones de derechos humanos, incluyendo las medidas de seguimiento”*<sup>271</sup>.

---

<sup>270</sup> Expresión usada por la Profesora NATALIA OCHOA RUIZ, en “*Crónica de derechos humanos- (enero-junio 2006)*”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales (2006), página 17, disponible en la web <[http://www.reei.org/reei%2012/CronicaDerechosHumanos\(reei12\).pdf](http://www.reei.org/reei%2012/CronicaDerechosHumanos(reei12).pdf)> [Consulta: 18 de noviembre de 2010].

<sup>271</sup> *Ibiden*.

En el documento HRI/MC/2006/2<sup>272</sup> se encuentra presentada una exposición de conceptos sobre la propuesta relativa a un órgano permanente unificado, incluso presentando las formas o modalidades de funcionamiento que podría adoptarse para la existencia de aquel órgano.

Y a pesar de la complejidad y las dificultades del funcionamiento del sistema internacional de protección de los derechos humanos basado en los órganos de tratados, y cuyos *“problemas ya habían repercutido en la efectividad y la credibilidad del sistema y también en la capacidad de las instituciones nacionales de derechos humanos de tratar efectivamente con esos órganos”*<sup>273</sup>, es importante registrar que dichos órganos son reconocidos como *“columnas centrales del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas”* y que sus recomendaciones *“constituían una base excepcional y firme para la actuación intergubernamental y nacional”*, más allá de se reconocer *“la utilidad de las observaciones generales, que servían de guía para reformar leyes y trazar políticas”*, como han reconocido las instituciones nacionales de derechos humanos en la Declaración de Marrakech<sup>274</sup>.

## **A – MECANISMOS DE CONTROL Y PROTECCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE TRATADOS**

Por regla, el mecanismo de control y protección convencional<sup>275</sup> se realiza a través de siete técnicas distintas e inconfundibles: el “Informe Gubernamental”, la “Denuncia Interestatal”, la “Denuncia Individual”, la “Investigación de Oficio”<sup>276</sup>, el

---

<sup>272</sup>En: <<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/410/78/PDF/G0641078.pdf?OpenElement>> [Consulta: 16 de octubre de 2010].

<sup>273</sup> Como ha declarado la Presidenta del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales, Sra. Katharina Rose, haciendo remisión a la Declaración de Marrakech, en A/65/190, pág. 37.

<sup>274</sup> A/65/190, página 37.

<sup>275</sup> También denominados de *“Técnicas de Control”*, como expresa CARLOS FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, en CASADEVANTE ROMANI, C. F. (coord.), *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, op. cit., p. 56.

<sup>276</sup> La mayoría de la doctrina apunta tres técnicas, no mencionando la “Investigación de Oficio”, que es señalada por VILLÁN DURÁN, C., *Curso ...*, op. cit., pp. 405-412.

“Alerta Temprano”<sup>277</sup>, la “Acción Urgente”<sup>278</sup> y las “Visitas” o “Inspecciones” y que no actúan necesariamente de manera conjunta<sup>279</sup>.

## **a – INFORME GUBERNAMENTAL**

El “Informe Gubernamental” o “Informe Periódico” es el expediente adoptado para acompañar la efectividad de las Convenciones, en el sentido del cumplimiento de sus disposiciones por los Estados-parte, tanto en vista de las medidas internas realizadas como de las medidas que se desarrollaren para el alcance de aquella efectividad.

El “Informe” se exige presentar periódicamente, y representa un “*compromiso mínimo*”<sup>280</sup> de los Estados con el objetivo de informar sobre las medidas, en particular legislativas, judiciales y administrativas que hayan adoptado para lograr el disfrute de los derechos reconocidos en el tratado.

En lo que respecta al contenido de los Informes, hay variaciones en el texto de los tratados.

De regla, el Informe se presenta al Secretario General de las Naciones Unidas, a quien cabe enviarlo al Comité competente.

El procedimiento de los Comités se traduce en un análisis y estudio del Informe competente. Cada uno de los órganos de tratados actualmente en funcionamiento, con la excepción del Subcomité de Prevención de la Tortura, tiene un mandato para

---

<sup>277</sup> Es un mecanismo específico del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

<sup>278</sup> También es específico del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

<sup>279</sup> Otra técnica que también se puede citar es la “Visita a los centros de detención”, y que se encuentra prevista en el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, y por la cual el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura puede realizar visitas en cualquier establecimiento de detención de los Estados-parte, pudiendo entrevistarse con cualquier persona, para averiguar las condiciones de tratamiento de los detenidos. Como se trata de una medida específica de un órgano regional de protección a los derechos humanos, la misma no es presentada en esta oportunidad en que se registran las técnicas del mecanismo de control y protección en el ámbito mundial.

<sup>280</sup> CASADEVANTE ROMANI, C., F., “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, en VVAA, *Derecho Internacional ...*, op. cit., p. 58.



examinar los Informes que los Estados-partes deben presentar periódicamente sobre las medidas que hayan adoptado para aplicar las disposiciones de cada tratado y, en el caso del Comité de los Derechos del Niño, sus protocolos facultativos.

Cuanto a la forma con que cada órgano ha de tratar los Informes que recibe, en general, y salvo en relación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se establece el mismo marco básico para su "examen", "estudio" o "análisis", y que resultan en la aprobación de observaciones finales, definidas como "observaciones generales" en relación al Comité de los Derechos del Niño, al Comité de Derechos Humanos y al Comité contra la Tortura; definidas como "sugerencias y recomendaciones", en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y en "observaciones" en el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares; y en "Comentarios", "Observaciones" o "Recomendaciones" en el Comité contra las Desapariciones Forzadas.

La eficacia de las observaciones finales se debe a la gran publicidad que es dada a la comunidad internacional, situación que incluso supone la confiabilidad de los datos ofrecidos por los propios Estados.

El cuadro siguiente presenta la periodicidad de los informes con arreglo a los tratados:

	<b>Informe inicial en el plazo de</b>	<b>Informes periódicos cada</b>
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial	1 año	2 años
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	1 año	4 años <sup>281</sup>
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales <sup>282</sup>	2 años	5 años
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer	1 año	4 años
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes	1 año	4 años <sup>283</sup>
Convención sobre los Derechos del Niño	2 años	5 años
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de Niños en los Conflictos Armados	2 años	Integrados en el siguiente informe al CRC, cada cinco años; cada cinco años para los Estados que no son parte en la Convención
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de Niños en la Pornografía	2 años	Integrados en el siguiente informe al CRC, cada cinco años; cada cinco años para los Estados que no son parte en la Convención
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares	1 año	5 años
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad	2 años	4 años
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas	2 años	---

<sup>281</sup> Periodicidad media. El Comité de Derechos Humanos puede variar la fecha de presentación del informe siguiente en función de su procedimiento de seguimiento. El Comité contra la Tortura también cambia las fechas de los informes periódicos siguientes.

<sup>282</sup> El artículo 17 del Pacto faculta al Consejo Económico y Social a establecer su propio programa de presentación de los informes.

<sup>283</sup> El Comité contra la Tortura también cambia las fechas de los informes periódicos siguientes.

Abajo, se registra un resumen del número de Informes examinados cada año por los órganos de tratados:

	Número de períodos de sesiones por año	Número de semanas por período de sesiones	Número de informes por período de sesiones	Número de informes examinados anualmente <sup>284</sup>
CDR <sup>285</sup>	2	4	12	24
CDH <sup>286</sup>	3	3	4	12
CDESC <sup>287</sup>	2	3	5	10
CEDM <sup>288</sup>	2 a 3 <sup>289</sup>	3	8 a 13	16 a 38
CCT <sup>290</sup>	2	3 <sup>291</sup>	7	14
CDN <sup>292</sup>	3	3	10 a 12 <sup>293</sup>	30 a 48
CTMF <sup>294</sup>	2	1 a 2	1 a 3	3 a 6
CDPD <sup>295</sup>	-	-	-	-
CCDF <sup>296</sup>	-	-	-	-

No obstante la obligación de los Estados en relación a los Informes, en muchos casos aquel cumplimiento no se ha observado satisfactoriamente, incluso habiendo Estados que no lo presentan y, la mayoría, que los presentan con una demora considerable.

Como ejemplo se tienen los datos estadísticos de 2004 y 2005, por los cuales los Comités observaron que era muy reducido el número de países cuyos Informes examinados atendían satisfactoriamente a sus objetivos, en muchos casos habiendo

<sup>284</sup> La mayoría de los comités también examina la situación de varios países que no han presentado informes.

<sup>285</sup> Comité contra la Discriminación Racial.

<sup>286</sup> Comité de Derechos Humanos.

<sup>287</sup> Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

<sup>288</sup> Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

<sup>289</sup> El número varía en función de que se haya o no concedido más tiempo de reunión al comité de que se trate.

<sup>290</sup> Comité contra la Tortura.

<sup>291</sup> En 2006, la reunión del grupo de trabajo anterior al período de sesiones del CCT para su período de sesiones de dos semanas celebrado en noviembre se convirtió en reunión plenaria.

<sup>292</sup> Comité de los Derechos de los Niños.

<sup>293</sup> El número de los informes comprende los presentados con arreglo a la Convención y a los Protocolos facultativos.

<sup>294</sup> Comité de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

<sup>295</sup> Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

<sup>296</sup> Comité contra las Desapariciones Forzadas.

Informes repetidos, con datos insuficientes<sup>297</sup>. A su vez, en datos de febrero de 2006, *“se ha presentado el 70% del total de informes de Estados Partes, porcentaje que se ha logrado gracias a la presentación de informes consolidados. De los informes iniciales que han de presentarse, el 30% todavía no se ha recibido. A febrero de 2006, sólo 8 de los 194 Estados que son partes en uno o más de los siete tratados están al día, mientras que los otros 186 Estados deben 1.442 informes a los órganos creados en virtud de tratados”* según registros de la Secretaría General de Naciones Unidas<sup>298</sup>.

Con el objetivo de suprimir las deficiencias en la presentación de los Informes y aumentar la eficacia de la actuación de los órganos de Tratados, y considerándose que cada país debe presentar un Informe a cada uno de los Comités vinculados a las respectivas Convenciones, se han adoptado medidas con el sentido de simplificar la presentación de Informes por los Estados, armonizando los métodos para la realización de aquella tarea, definiendo procedimientos comunes, como la posibilidad de unificación de aquella presentación en único documento<sup>299</sup>, resumiendo el cumplimiento de todos los tratados internacionales de derechos humanos en que son partes y estableciendo, así, un criterio más coordinado para las actividades de los Comités, incluso para que puedan funcionar como un sistema unificado.

Como resultado de aquellas labores ya se ha avanzado hasta la definición de algunas directrices armonizadas para presentación de Informes, y que se encuentran en el documento HRI/MC/2006/3, del 10 de mayo de 2006<sup>300</sup>, y en lo cual se establece el proceso de presentación, las formas y el contenido de los Informes. Según el artículo 4 de aquel documento el objetivo de las directrices armonizadas es *“fortalecer la capacidad de los Estados para cumplir sus obligaciones en materia de presentación de informes de manera puntual y efectiva, inclusive evitar la duplicación*

<sup>297</sup> Datos contenidos en el documento HRI/MC/2006/2, pp. 14-5, disponible en en sitio web [http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/3487c673efd8a260c125715e004be2d0/\\$FILE/G0641078.doc](http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/3487c673efd8a260c125715e004be2d0/$FILE/G0641078.doc) [Consulta: 15 de octubre de 2010].

<sup>298</sup> Ídem, pp. 10-1.

<sup>299</sup> Esta iniciativa ha surgido por recomendación de los Presidentes de los Comités, que en el período del 26 al 28 de junio de 2002, se reunieron por primera vez con esta finalidad, conforme relata el documento “HRI/ICM/2002”, del 25 de abril de 2002.

<sup>300</sup> Texto completo disponible en <<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/419/45/PDF/0641945.pdf?OpenElement>> [Consulta: 18 de noviembre de 2010].

*innecesaria de información. También tienen por objeto aumentar la eficacia del sistema de vigilancia de los tratados: a) Facilitando la adopción de un enfoque coherente por todos los comités al examinar los informes que se les presenten; b) Ayudando a cada comité a examinar la situación de los derechos humanos en cada Estado Parte sobre una base de igualdad; y c) Reduciendo la necesidad de que un comité solicite información complementaria antes de examinar un informe*<sup>301</sup>.

Otra iniciativa adoptada por algunos Comités es el encaminamiento a los Estados-partes de listas de cuestiones o temas previos a la presentación de Informes, determinando, de antemano, las cuestiones que más importan al Comité. Las respuestas presentadas constituyen un Informe. Este nuevo procedimiento, de cumplimiento facultativo, es utilizado por el Comité contra la Tortura, por el Comité de Derechos Humanos y por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

En la evaluación de varios Estados, este procedimiento ayuda a reducir la carga de presentación de Informes más allá de posibilitar unos Informes más precisos y favorecer el diálogo de los órganos de tratados y las instancias nacionales<sup>302</sup>.

Avanzo muy relevante en la tutela de los derechos humanos y dimanantes de los Informes fue la iniciativa del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en recopilar las “Observaciones Generales” y “Recomendaciones” adoptadas por los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, y que se presentan como un auténtico repertorio de las providencias que los Comités entienden necesarias para avanzar en la realización de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Esta recopilación ha alcanzado a las “Observaciones Generales” y a las “Recomendaciones Generales” adoptadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el Comité de Derechos Humanos, por el Comité para la

---

<sup>301</sup> Idem.

<sup>302</sup> Esta evaluación ha sido registrada en la 11ª Reunión de los órganos de tratados, que se celebró en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, del 28 al 30 de junio de 2010, anotada en el documento A/65/190, página 35.

Eliminación de la Discriminación Racial, por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por el Comité contra la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño, y se encuentra en el documento HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I), del 27 de mayo de 2008<sup>303</sup>.

Otro aspecto cuanto al intento en se aumentar la eficacia del sistema convencional de tutela de los derechos humanos es relacionado a los procedimientos de seguimiento de las observaciones finales de los Informes con el objetivo de supervisar su cumplimiento por los Estados-parte.

Este seguimiento ha sido una cuestión de destaque en las reuniones de los Comités en los últimos años, incluso con la recomendación de ser *“tema permanente del programa de todos los períodos de sesiones de los órganos de tratados”*<sup>304</sup>.

El procedimiento de seguimiento de las observaciones finales objetiva a que los Estados-parte proporcionen *“información sobre la aplicación de las recomendaciones contenidas en las observaciones finales anteriores, bien en sus informes siguientes o durante el diálogo constructivo”*<sup>305</sup>. Empezó en 2003, en el Comité contra la Tortura, y para supervisar más estrechamente la aplicación de las observaciones finales algunos órganos de tratados pasaran a adoptar un procedimiento oficial, por titulares de mandatos específicos (Coordinador, Relator Especial y Relator), como en el Comité de Derechos Humanos, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y en el Comité contra la Tortura y Discriminación contra la Mujer.

En la décima reunión de los Comités, realizada en Ginebra, del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2009<sup>306</sup>, los participantes convinieron en que los procedimientos de seguimiento eran parte integrante del procedimiento de presentación de Informes, y que para seguir mejorando y armonizando los métodos

---

<sup>303</sup> Disponible en web <<http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm>>. [Consulta: 18 de noviembre de 2010].

<sup>304</sup> A/65/190, pág. 15.

<sup>305</sup> *Ibidem*.

<sup>306</sup> *Ídem*, páginas 22 y 23.

de trabajo, recomendaran, todavía, que se estableciera un grupo de trabajo conjunto de los seguimientos de las observaciones finales y de las comunicaciones individuales, y que este grupo de trabajo estuviera directamente subordinado a la reunión de los Comités.

Para alcance de una más grande eficiencia en el mecanismo de Informes, en la décima reunión de los Comités también recomendó que el mecanismo de seguimiento de cada Comité fuera de carácter público debiendo proceder de manera transparente, de modo que el público tuviera acceso a toda información recibida de los Estados partes así como de la correspondencia entre los Estados partes y los órganos de tratados.

Aunque el sistema de vigilancia de los tratados basados en los Informes no se pueda reconocer como un sistema perfecto, la propia ONU, por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ha admitido que *“el proceso de presentación de informes ofrece una oportunidad para que los Estados Partes realicen un examen amplio de las medidas que han adoptado para ajustar su legislación y políticas nacionales a las disposiciones de los tratados en que son parte. La preparación de informes constituye una vía de diálogo nacional sobre derechos humanos entre los diversos interesados de cada uno de los Estados Partes. El propio informe ofrece al Gobierno y a otras entidades, incluida la sociedad civil, una base sobre la cual elaborar políticas claras y con metas bien definidas que incluyan prioridades acordes con las disposiciones de los tratados. El proceso de presentación de informes alienta y facilita también el examen público, en el plano nacional, de los enfoques utilizados por el Gobierno en la aplicación y estimula los debates constructivos con la sociedad civil sobre el modo de promover el disfrute generalizado de los derechos que se enuncian en las diversas convenciones. El examen de los informes que realizan los Comités, por medio del diálogo constructivo con los Estados Partes, permite a cada uno de los Estados y a los Estados en su conjunto intercambiar experiencias sobre los problemas a que se enfrentan en la aplicación de los instrumentos y sobre las buenas prácticas que facilitan la mejora de la aplicación; también posibilita una observación internacional rigurosa, que, a su vez, subraya la responsabilidad y la*

*obligación de rendir cuentas que tienen los Estados respecto de la protección de los derechos humanos*<sup>307</sup>.

## **b – DENUNCIA ESTATAL**

Otro mecanismo es la “Denuncia Estatal”, también conocida como “Denuncia Interestatal”, “Queja Interestatal”, “Queja entre Estados” o “Comunicaciones entre Estados”, esta última prevista en el Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 2008, todas objetivando asegurar a un Estado-parte la denuncia al órgano de protección de la Convención respectiva, contra otro Estado-parte. El procedimiento se encuentra asegurado a todo Estado parte, o, al menos, a aquel que lo haya aceptado contra sí, es decir, podrá denunciar si también pudiera ser denunciado.

Su finalidad no es reconocer las violaciones apuntadas, atribuyéndose responsabilidad al Estado infractor, sino que intenta alcanzar “*un arreglo amistoso o una solución conciliatoria que acomode los intereses de los Estados enfrentados*”<sup>308</sup>.

Por este procedimiento, después de presentada la denuncia, el Estado denunciante pasa a tener la facultad de dirigirse al Estado denunciado para el planteamiento de la cuestión, debiendo éste explicarse. Si no se resuelve la cuestión directamente, cualquiera de ellos puede provocar al órgano competente para que asuma el enfrentamiento del tema, emitiendo su Informe, con una breve exposición de los hechos y la solución alcanzada, o, en caso contrario, con el envío de todas las exposiciones presentadas a los propios Estados- partes.

Para el desenvolvimiento de esta medida es necesario que los Estados interesados – el denunciante y el denunciado – la acepten expresamente. Si el Comité no llega a una solución amistosa, designa una Comisión especial de conciliación, la cual debe dirigir al Presidente del Comité un Informe con sus

---

<sup>307</sup> HRI/MC/2006/2. p. 07, item 8, en web: <<http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/410/78/PDF/G0641078.pdf?OpenElement>> [Consulta: 18 de noviembre de 2010].

<sup>308</sup> VILLÁN DURÁN, C., *Curso...*, op. cit., pp. 438-9.



observaciones y las propuestas para dicha solución, pudiendo los Estados manifestarse sobre la aceptación o no de la propuesta.

En el sistema de las Naciones Unidas, es un mecanismo previsto en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, por sus artículos 11 a 13, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 41.1, y en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, en su artículo 21<sup>309</sup>.

De conformidad con datos disponibles por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hasta junio del 2006 no se tenía recurrido a los mecanismos de queja entre Estados<sup>310</sup>, *“debido sin duda a que los gobiernos no lo consideran ‘políticamente correcto’ en el marco de sus relaciones diplomáticas tradicionales”*<sup>311</sup>.

### **c – DENUNCIA PARTICULAR**

Por el mecanismo de “Denuncia Particular”, también denominado “denuncia individual”, “queja individual”, “reclamación” o “Comunicación Individual”, esta la más reciente, de 2008, prevista en el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-PIDESC, se pretende asegurar a las víctimas de violación de derechos humanos la correspondiente protección para impedir, alejar o reparar el daño. Según precisas observaciones de CANÇADO TRINDADE, el sistema de peticiones viene a cristalizar la capacidad procesal internacional de los individuos, o sea, su derecho de petición individual internacional<sup>312</sup>.

Para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *“los procedimientos de queja ofrecen una oportunidad para que los órganos creados*

---

<sup>309</sup> Ídem, p. 439.

<sup>310</sup> HRI/MC/2006/2, p. 13.

<sup>311</sup> VILLÁN DURÁN, C., *Curso...*, op. cit., pp. 438-439.

<sup>312</sup> CANÇADO TRINDADE, A.A., *A Proteção Internacional dos Direitos Humanos: fundamentos jurídicos e instrumentos básicos*, São Paulo, Saraiva, 1991. p. 8.

*en virtud de tratados que están facultados para recibir quejas determinen las medidas que deben adoptar los Estados para cumplir las obligaciones jurídicas internacionales que les incumben en el contexto de situaciones particulares concretas. Los procedimientos ofrecen socorro individual a las víctimas de violaciones de los derechos humanos y deben estimular el cambio general de la legislación, las políticas y los programas. Los procedimientos de investigación permiten a los Comités hacer frente a las causas estructurales de las violaciones sistemáticas y formular recomendaciones sobre una gama amplia de cuestiones*<sup>313</sup>. El Alto Comisionado admite que, *"Pese a que las decisiones adoptadas por los órganos creados en virtud de tratados en este contexto no son jurídicamente vinculantes, los procedimientos de queja a disposición de los particulares a menudo ayudan a las víctimas. La suma de las decisiones relativas a los diversos casos forma un cuerpo de jurisprudencia sobre la interpretación y la aplicación de los tratados de derechos humanos, al cual hacen referencia con asiduidad los tribunales nacionales y regionales"*<sup>314</sup>.

La iniciativa debe ser hecha por la propia víctima, o, en su imposibilidad, por su representante. Para su admisión se exige que no sea anónima, no se constituya en abuso del ejercicio de derecho, no sea incompatible con el tratado en cuestión, que exista el previo agotamiento de los recursos internos, en este caso la regla considera como tal el prolongamiento injustificado de los recursos internos o que no sea probable que mejore la situación de la víctima<sup>315</sup>, y que la misma cuestión no haya sido o esté siendo sometida a otra instancia internacional<sup>316</sup>.

Conocida la denuncia, se abre la oportunidad para la manifestación escrita por el Estado denunciado, finalizándose con las "observaciones" emitidas por el órgano a las partes, que se hacen acompañar de las respectivas sugerencias o recomendaciones, incluíendo vías de reparación con indemnizaciones para las víctimas. Esta "observación final" pasa a constar en el "Informe Anual" que tienen que

---

<sup>313</sup> HRI/MC/2006/2, p. 7.

<sup>314</sup> Idem, p. 8

<sup>315</sup> En la Convención contra la Tortura, hay remisión expresa al respecto, en su artículo 22.5.

<sup>316</sup> Este tema del agotamiento de recursos internos se encuentra muy bien y sucintamente expuesto en el artículo *"El Agotamiento de Recursos Internos em los Sistemas Regionales de Protección de los Derechos Humanos"*, presentado por FLORABEL QUISPE, en la Revista del Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, ano 8, vol.8, número 8 - 2008, Fortaleza, 2008, pp. 79-91.

presentar los órganos de protección. El plazo medio que transcurre entre la presentación de la queja y la adopción de una decisión final es de 30 meses<sup>317</sup>.

Este procedimiento es admisible contra el incumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer<sup>318</sup>, de la Convención de la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y, últimamente, contra el incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en virtud del Protocolo Facultativo al Pacto, adoptado por la Asamblea General el 10 de diciembre de 2008<sup>319</sup>.

La Convención de protección a los Derechos del Niño no prevé la posibilidad de denuncias de los particulares, pudiendo estas, ser presentadas ante otros Comités con competencia para examinar denuncias de los particulares.

Debido a las limitaciones y dificultades o mismo descumplimiento de los compromisos asumidos por algunos Estados parte, en la medida en que no cooperaban, no respondían o mismo impugnaban las decisiones de los Comités en las comunicaciones individuales, y con el objetivo de “*obtener la máxima respuesta de los Estados partes*”<sup>320</sup> algunos Comités pasaron a adoptar el procedimiento de seguimiento de las decisiones en las comunicaciones individuales. El seguimiento se realiza con la publicación de Informes anuales, notas verbales transmitidas a los Estados partes, reuniones con sus representantes y misiones a los Estados partes. Es un procedimiento observado con regularidad por el Comité de Derechos Humanos,

---

<sup>317</sup> HRI/MC/2006/2, p. 12.

<sup>318</sup> VILLÁN DURÁN, C., *Curso ...*, op. cit., pp. 453-454.

<sup>319</sup> Resolución A/RES/63/117, con entrada en vigor tres meses después del décimo Estado manifestar su adhesión o ratificación, siendo que la fecha para acoger firmas se ha iniciado el 10 de septiembre de 2009.

<sup>320</sup> A/65/190, página 18.

el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Más allá, en la décima reunión de los Comités, realizada en Ginebra, del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2009, los representantes de los Comités recomendaron *“que las decisiones y los dictámenes relativos a las comunicaciones individuales se publicaran de forma periódica y sistemática y se difundieran ampliamente, con el objetivo de promover la participación de las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil para que alienten a los Estados partes a aplicar las decisiones y los dictámenes de los órganos de tratados”*<sup>321</sup>.

#### **d – INVESTIGACIÓN DE OFICIO**

Con la “Investigación de Oficio” se identifica la iniciativa de investigación en cuanto a la amplitud de la práctica sistemática de violación de los derechos establecidos en determinada Convención. Aunque se trate de una iniciativa de oficio, solamente con la autorización y cooperación del Estado es que se podrá desarrollar dicha investigación.

Su procedimiento es confidencial, incluso el “Informe” que se expide al respecto, al cual se dará conocimiento exclusivamente al país investigado, salvo anuencia de éste en contrario. La finalidad de la medida es prevenir futuras violaciones de la normativa convencional.

Trátase de un mecanismo con su utilización asegurada al Comité contra la Tortura, conforme el artículo 20 de la respectiva Convención, y artículos 69 a 84 del Reglamento del Comité<sup>322</sup>. También en la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se prevé este mecanismo, basado en los artículos 8 a 12 de su Protocolo Facultativo, que entró en vigor el 22 de diciembre de 2000, asegurándose así al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

---

<sup>321</sup> Ídem, páginas 24.

<sup>322</sup> Ha sido utilizado para estudiar situaciones en Turquía, Egipto y Perú, conforme señala VILLÁN DURÁN, C., *Curso ...*, op. cit., p. 409.

adoptar la referida iniciativa. Más recientemente, y en el ámbito del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se ha previsto el “Procedimiento de Investigación”, contenido en el artículo 11 del Protocolo Facultativo del respectivo Pacto<sup>323</sup>, para apurar graves y sistemáticas violaciones a derechos económicos, sociales o culturales previstos en el respectivo Pacto.

### **e – ALERTA TEMPRANO**

Otro instrumento de control es el “Alerta Temprano”, mecanismo previsto en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Fue adoptado en 1993<sup>324</sup> con el objetivo de evitar nuevos conflictos originarios de situaciones de tensión relacionados con minorías. Es un mecanismo de actuación preventiva y su iniciativa es del propio Comité, de los Estados Partes o de una ONG, habiendo un Grupo de Trabajo que se encarga específicamente del tema. En 2007<sup>325</sup> el Comité aprobó nuevas directrices para regular el procedimiento<sup>326</sup>.

Y también hay en el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial la “Acción Urgente”, para abordar los problemas que requieran atención inmediata a fin de evitar las violaciones graves de la Convención o reducir su grado o su número. Así como en el “Alerta Temprano”, fue adoptado en 1997<sup>327</sup>, y puede ser provocado por el propio Comité, los Estados Partes o una ONG, y, de igual modo, habiendo un Grupo de Trabajo que se encarga específicamente del tema para evitar una pauta grave, masiva o persistente de discriminación racial.

### **f – VISITAS O INSPECCIONES**

El más reciente mecanismo de control y protección convencional son las “Visitas” o “Inspecciones”, realizadas por el Subcomité para la Prevención de la

---

<sup>323</sup> Adoptado por la Asamblea General el 10 de diciembre de 2008, por la Resolución A/RES/63/117.

<sup>324</sup> Por el documento A/48/18, Anexo III.

<sup>325</sup> Por el documento A/62/18, Anexo III.

<sup>326</sup> Las informaciones sobre el “Alerta Temprano” se han obtenido en el documento HRI/MC/2009/4, de Naciones Unidas, disponible en web: <[http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/9th/HRI-MC-2009-4\\_sp.doc](http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/9th/HRI-MC-2009-4_sp.doc)>. [Consulta: 12 de octubre de 2010].

<sup>327</sup> Por el documento A/48/18, Anexo III.

Tortura en cualquier lugar en que haya o pueda haber personas privadas de su libertad, incluso en instituciones de salud mental o de atención social. En las “Visitas” o “Inspecciones” su objetivo es conocer las condiciones en que se encuentran las personas privadas de su libertad, y de modo a sugerir que se adopten medidas para mejorar la situación. El personal del Subcomité debe tener acceso irrestricto a todos los lugares, así como a todas las informaciones relativas al trato y condiciones de la privación de libertad, incluso con la posibilidad de entrevistarse con cualquier uno, y sin la presencia de testigos.

Junto al Comité contra las Desapariciones Forzadas también se encuentra prevista la posibilidad de “Visita” se acaso el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves, por el Estado-Parte, de las disposiciones de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

## **B – COMITÉS DE BASE CONVENCIONAL**

En un panorama general, se puede presentar la siguiente sinopsis de los Comités<sup>328</sup>:

### **Composición de los órganos creados en virtud de tratados:**

<b>Órgano</b>	<b>Original</b>	<b>Ampliado</b>	<b>Número de Estados Partes para la ampliación</b>
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial	18 miembros	-	-
Comité de Derechos Humanos	18 miembros	-	-
Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales	18 miembros	-	-
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer	18 miembros	23 miembros	35 Estados Partes
Comité contra la Tortura	10 miembros	-	-
Subcomité para la Prevención de la Tortura	10 miembros	25 miembros	50 Estados Partes

<sup>328</sup> Los cuadros presentados se encuentran en el documento HRI/MC/2009/4, disponible en <[http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/9th/HRI-MC-2009-4\\_sp.doc](http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/9th/HRI-MC-2009-4_sp.doc)> [Consulta: 18 de noviembre de 2010].

Comité de los Derechos del Niño	10 miembros	18 miembros*	-
Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares	10 miembros	14 miembros	41 Estados Partes
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad	12 miembros	18 miembros	80 Estados Partes <sup>329</sup>
Comité contra las Desapariciones Forzadas	10 miembros	-	-

Los miembros se eligen por un período de cuatro años. Cada dos años se elige a la mitad de los miembros.

En la secuencia se pasa a abordar algunos de los principales aspectos de cada uno de los Comités de base convencional del sistema de protección a los derechos humanos en el entorno de Naciones Unidas.

#### **a – COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL**

Este Comité surge con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que entró en vigor en 1969. La aceptación del Comité, que es facultativa para los Estados-parte de la Convención, conforme su artículo 14, fue manifestada por 38 Estados. Es la más antigua Convención en materia de derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas y ha sido ratificada por el mayor número de Estados, es decir, hasta el año de 2001, por 161 países, más de  $\frac{3}{4}$  de sus miembros.

El Comité, a su vez, es el primer órgano en la categoría de protección a los derechos humanos creado por las Naciones Unidas, y por el cual se reconoce la necesidad de disponer de medios eficaces para hacer cumplir las normativas de la Convención. Con la iniciativa y experiencia de este Comité es que son creados los demás cinco Comités de las Naciones Unidas.

<sup>329</sup> El número de miembros del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aumentará después de que la Convención haya alcanzado 80 ratificaciones o adhesiones.

Está formado por dieciocho miembros, denominados “Expertos”, que son independientes, ejerciendo sus actividades a título personal, pues no son representantes de sus países, no pudiendo ser destituidos ni reemplazados sin su consentimiento. Son elegidos por los Estados-parte para un mandato de cuatro años, renovándose la composición, por la mitad, cada dos años. En la composición se busca atender a la representación equitativa de las regiones geográficas del mundo, así como las diferentes civilizaciones y sistemas jurídicos.

Las reuniones del Comité se celebran dos veces al año, en un período de tres sesiones, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York o en su Oficina de Ginebra.

Son cinco los instrumentos que viabilizan la actuación del Comité: “Informe Gubernamental”, “Denuncia Interestatal”, “Denuncia Particular”, “Alerta Temprano” y “Acción Urgente”.

#### **a.1 – INFORME GUBERNAMENTAL**

El “Informe Gubernamental” es el procedimiento al que están obligados todos los Estados-parte, debiendo presentar cada cuatro años “Informes Amplios”, que son complementados cada dos años por la presentación de “Informes de Actualización”. Estos Informes son presentados para examen de los Expertos que pueden formular preguntas y observaciones, las cuales serán sometidas al comentario del Estado-parte interesado. Estos procedimientos, presentados resumidamente, con las sugerencias y recomendaciones del Comité componen el Informe a ser llevado a la Asamblea General.

#### **a.2 – DENUNCIA INTERESTATAL**

La “Denuncia Interestatal” es la que asegura a un Estado-parte denunciar otro Estado-parte por incumplimiento a la Convención. La competencia del Comité sobre este procedimiento es reconocida por todos los Estados que ratificaron la Convención. En caso de adopción de este procedimiento, el Comité debe designar



una Comisión de Conciliación, que a ningún efecto sustituye a otros de que dispongan las partes interesadas.

### **a.3 – DENUNCIA PARTICULAR**

La “Denuncia Particular” es el procedimiento confidencial previsto en el artículo 14 de la Convención, por el cual se asegura a las víctimas de discriminación racial formular su denuncia junto al Comité, individualmente o en grupo. En este caso, la medida sólo puede ser adoptada con relación a los Estados que hayan admitido la cláusula convencional de reconocimiento de la competencia del Comité en cuanto a tal medida. Por la Convención, estos Estados reconocedores de la competencia del Comité en la denuncia particular disponen de un órgano nacional para recibir las denuncias de violación al racismo, que será accionado después de agotados todos los recursos internos disponibles. Así, sólo cuando la víctima no obtiene la reparación satisfactoria por este órgano nacional es que podrá provocar al Comité para el conocimiento del caso.

Por este procedimiento, que se tramita sin presentación de la identidad de la víctima – persona o grupo - que presentó la queja, salvo si esta manifiesta lo contrario, el Comité lleva al Estado denunciado a conocer la comunicación presentada, para que se manifieste, después luego emitida su sugerencia o recomendación al autor y al referido Estado.

Cabe destacar la situación peculiar de los “territorios no autónomos”, o no independientes, es decir, aquellos administrados por otros Estados, y en los cuales se observan violaciones a la Convención. En estos casos, el Comité está obligado a recibir las peticiones presentadas, con la responsabilidad de estudiarlas y preparar un Informe con recomendaciones para la Asamblea General, siendo la actuación del Comité en estos casos independiente del Estado que administre aquellos territorios, ya sea aquel parte o no de la Convención<sup>330</sup>.

---

<sup>330</sup> Para estos casos el Comité dispone de tres grupos de trabajo, que se ocupan, respectivamente, de la situación en los territorios africanos; de los territorios del Océano Atlántico y el Caribe, incluido Gibraltar; y de los territorios de los Océanos Pacífico e Índico.

Para asegurar mayor eficacia en las medidas de combate a la discriminación racial, fue aprobado el Programa de Acción, en la Segunda Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial, celebrada en 1983, en la cual se exortó a los Estados que facilitasen en todo lo posible el acceso a sus procedimientos nacionales destinados a atender las denuncias de este tipo. Para eso, se debían dar a conocer los procedimientos y ayudar a las víctimas de la discriminación racial a utilizarlos, así como las normas para la presentación de denuncias debían ser simples y las denuncias debían atenderse con prontitud. También, se debía ofrecer asistencia jurídica en los procedimientos civiles o penales a las víctimas de discriminación que carecieran de medios y debía existir el derecho de obtener compensación por los perjuicios sufridos.

#### **a.4 – ALERTA TEMPRANO Y ACCIÓN URGENTE**

Son mecanismos adoptados para prevenir o responder de manera más eficaz a las violaciones graves de la Convención, y pueden incluir las medidas de fomento de la confianza para identificar y apoyar todo lo que fortalece y refuerza la tolerancia racial, especialmente para evitar una reanudación del conflicto, donde se ha producido anteriormente.

En casos que requieren una acción inmediata el Procedimiento de Urgencia se presenta como la respuesta que puede valerse el Comité para evitar o limitar la escala o el número de violaciones graves de la Convención.

Son adoptadas decisiones, declaraciones o resoluciones y, desde 1993, estos procedimientos que se han utilizado en más de 20 Estados Partes.

Los problemas verificados pueden ser llevados a dar atención del Secretario General, del Consejo de Seguridad u otros órganos pertinentes.

Algunas situaciones específicas pueden identificar la necesidad de utilización del mecanismo de “Alerta Temprano” o de la “Acción Urgente”, como son los casos de “i) la falta de una base legislativa adecuada para definir y penalizar todas las

*formas de discriminación racial, tal como se prevé en la Convención; ii) El cumplimiento inadecuado de los mecanismos de aplicación, incluida la falta de procedimientos de recurso; iii) La existencia de una pauta de aumento del odio y la violencia raciales, o de propaganda racista o de llamamientos a la intolerancia racial por parte de personas, grupos u organizaciones, sobre todo funcionarios electos u otros funcionarios; iv) Una pauta significativa de discriminación racial reflejada en los indicadores sociales y económicos; v) Corrientes significativas de refugiados o personas desplazadas resultantes de una pauta de discriminación racial o de la invasión de las tierras de las comunidades minoritarias*<sup>331</sup>.

## **b – COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS**

El Comité de Derechos Humanos fue creado con la finalidad de acompañar el cumplimiento, por los Estados-parte, de las obligaciones establecidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y sus dos Protocolos Facultativos, teniendo, para tanto, competencia para recibir y examinar quejas individuales, y analizar los “Informes”, que los Estados-parte deben presentar cada cinco años, sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos.

Su existencia tiene origen en el primero Protocolo Facultativo al Pacto, ambos – Protocolo y Pacto – adoptados por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966, y que entraron en vigor el 23 de marzo de 1976. El Segundo Protocolo Facultativo fue establecido para abolir la pena de muerte, adoptado el 15 de diciembre de 1989 y con entrada en vigor el 11 de julio de 1991.

El Comité está compuesto por dieciocho miembros, denominados “Expertos”, que actúan a título personal, sin representación de los gobiernos de sus nacionalidades, y sus sesiones ordinarias se realizan en tres períodos al año, cada uno con una duración de tres semanas, uno en marzo, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y los otros dos en julio y noviembre, en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

---

<sup>331</sup> En el documento A/48/18, Anexo III, página 3.

En el ámbito del Comité de Derechos Humanos se admiten el “Informe Gubernamental”, la “Denuncia Interestatal” y la “Denuncia Particular”.

### **b.1 – INFORME GUBERNAMENTAL**

Su finalidad es informar sobre las disposiciones adoptadas por los Estados-partes y que persiguen dar efecto a los derechos reconocidos en el Pacto, así como cabiéndoles informar sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de aquellos derechos.

Los Informes se deben presentar, inicialmente, en el período de un año después de la entrada en vigor del Pacto para el Estado, el cual se renovará con una periodicidad de presentación cada cinco años, según estipula el propio Comité de Derechos Humanos.

Más allá de las informaciones periódicas encaminadas por los Estados, el Comité de Derechos Humanos puede también valerse de informaciones y comentarios adicionales, prestados por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, la Organización Mundial de Salud y el UNICEF, como también de informaciones procedentes de las Organizaciones No Gubernamentales<sup>332</sup>.

Los Informes son analizados inicialmente por los funcionarios del Comité – Relator Especial o Grupo de Trabajo -, reservadamente, de modo que se puede preparar un cuestionario para complementar el Informe por el Estado interesado. Enseguida el Informe es llevado a estudio por el Pleno del Comité, en sesión pública, y en la cual se realizan los debates respectivos, entre los miembros del Comité y los representantes del Estado interesado.

Concluidos los debates se procede a la evaluación crítica de la situación del Estado examinado, adoptándose las “observaciones finales”, para su inclusión en los “Informes Anuales” que se presentan a la Asamblea General. Estas observaciones no

---

<sup>332</sup> VILLÁN DURÁN, C., *Curso ...*, op. cit., p. 393.

tienen por objetivo la condena del Estado, sino la identificación de las dificultades que impidan la correcta aplicación del Pacto en el ámbito interno.

## **b.2 – DENUNCIA INTERESTATAL**

Este procedimiento que intenta denunciar al Comité el incumplimiento del Pacto por un Estado-parte, en queja presentada por otro Estado-parte, es de competencia facultativa del Comité de Derechos Humanos, y actualmente se encuentra aceptado por cuarenta y siete Estados, aunque no ha sido utilizado por ningún de ellos.

Su finalidad es la de alcanzar un arreglo amistoso entre los Estados-parte interesados, para superar la controversia instaurada. El primer paso es obtener aquel arreglo de modo consensual entre las partes, para el cual se concede un plazo de seis meses. Fracasando éste, cabe al Comité poner a disposición sus buenos oficios para la solución de la controversia, pudiendo los Estados presentar todas las informaciones que entiendan oportunas. En un plazo de doce meses el Comité deberá concluir esta fase, presentando un Informe con la exposición de los hechos y de los resultados obtenidos. No resolviéndose la controversia, el Comité podrá, con el consentimiento de las partes, constituir una Comisión Especial de Conciliación, compuesta por cinco miembros, que deberá finalizar sus tareas en doce meses. Al final también se expide un Informe con registro de los intentos de arreglo, y las observaciones sobre las posibilidades de una solución amistosa.

Es un procedimiento que observa confidencialidad en todas sus fases, y, por ser de naturaleza conciliatoria no puede imponer las propuestas de solución a los Estados-parte.

## **b.3 – DENUNCIA PARTICULAR**

Por ésta, las personas víctimas de violaciones de los derechos previstos en el Pacto, se presentan ante el Comité para pedir explicaciones al Estado-parte violador.

Para ser admitida, la queja no puede ser anónima, debiendo ser presentada por la propia víctima, la cual debe vivir bajo la jurisdicción de un Estado que sea parte en el Protocolo Facultativo. En caso de imposibilidad de presentación por la propia víctima, la queja podrá ser presentada por tercera persona a ella vinculada, no admitiéndose comunicación por cualquier persona, porque sino éstas se caracterizarían como acciones populares, las cuales no tienen cabida en el procedimiento.

Se exige también que la queja no trate de una cuestión que esté siendo examinada con apoyo en otro procedimiento internacional, y que la cuestión no sea posible de ser sometida a los recursos internos, es decir, se impone observar el agotamiento de las instancias judiciales del país de la víctima.

Antes de cada período de sesión se reúne el Grupo de Trabajo de Comunicaciones, establecido con base en el artículo 89, del primero Protocolo Facultativo, para conocer sobre el cumplimiento de las condiciones de admisibilidad de las comunicaciones o quejas individuales presentadas.

Para admitir una queja, el Comité, por su Grupo de Trabajo de Comunicaciones, puede solicitar informaciones adicionales a la víctima o al Estado denunciado. En caso de que éste presente sus manifestaciones, se da conocimiento respectivo a la víctima para formular sus observaciones correspondientes.

Si no es admitida la queja/comunicación, ésta no es transmitida al Estado denunciado. En estos casos, a pesar de que las decisiones son tomadas por consenso, pueden los distintos miembros del Comité agregar opiniones individuales a los dictámenes. En caso de que el autor desista de la denuncia, el Comité la desestima sin adoptar una decisión escrita.

Admitida la queja, el Comité pide explicaciones al Estado, incluso si ha hecho algo para superarla, debiendo manifestarse en seis meses. A continuación el autor es llamado a pronunciarse sobre la manifestación del Estado. Al final, el Comité, en sesión privada, emite un dictamen de carácter público, dando conocimiento al

denunciante y al Estado, y haciendo constar esta decisión en el Informe anual a la Asamblea General.

El proceso de tramitación de la queja transcurre en unos doce a dieciocho meses en la fase del juicio de admisibilidad, y un o dos años más hasta su decisión final, siendo estos plazos variables en virtud del grado de colaboración de las partes envueltas. En las situaciones que demanden una protección urgente del Comité, antes de su dictamen final, es posible adoptar la medida conocida como “Protección Provisional”, que son casos en que el Comité remite peticiones urgentes al Estado acusado para hacer cesar la violación, como ha ocurrido para que no se dé cumplimiento a una amenaza de expulsión, que se suspenda la ejecución de una sentencia de muerte o en que se ha señalado la necesidad de un examen médico urgente<sup>333</sup>.

Las informaciones presentadas por las partes deben ser siempre escritas, y el Comité está obligado al examen de todas estas informaciones. La carga de la prueba cae sobre el denunciante, pero en situaciones de violación extrema, como las relativas al derecho a la vida, casos de tortura y malos tratos, así como detenciones arbitrarias y desapariciones, esta carga puede recaer sobre el Estado-parte denunciado, incluso no pudiendo éste refutar la denuncia en términos generales.

Bajo el punto de vista de la efectividad de la actuación del Comité<sup>334</sup>, desde 1990 se estableció un mecanismo de fiscalización con el objetivo de acompañar más de cerca el cumplimiento de los dictámenes por los Estados. En esta labor se ha observado que las decisiones del Comité han llevado a la modificación de la legislación de varios países, así como se ha conseguido la libertad de presos y la indemnización a las víctimas.

---

<sup>333</sup> Estos datos son ofrecidos por el propio Comité, disponible en web: <[www.unhchr.ch](http://www.unhchr.ch)> [Consulta: 23 de octubre de 2010].

<sup>334</sup> Si puede mencionar como ejemplo el año de 2002, en que el Comité examinó 1132 quejas/comunicaciones, contra 70 países, entre los 103 sometidos a su control. De aquellas quejas/comunicaciones, 873 tuvieron los trabajos concluidos, con 320 quejas no admitidas, 143 archivadas, y de las admitidas, 318 con dictamen reconocedor de violación al Pacto, y 92 sin violación. Hasta aquella fecha se encontraban en seguimiento 259 casos, según informaciones estadísticas disponibles en web: [www.unhchr.ch](http://www.unhchr.ch) [Consulta: 18 de noviembre de 2004].

## **C – COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

El Comité es un órgano cuya actuación vincula a los Estados que adherirán al Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, teniendo por objetivo promover la efectividad de las obligaciones de los derechos declarados en aquel instrumento.

Su creación fue en el año 1985 y se debió a la iniciativa del Consejo Económico y Social-ECOSOC - a diferencia de los demás Comités que derivan de un tratado con este fin específico -, del cual es un órgano subsidiario, y que actúa bajo su autoridad, siendo su creación una alternativa para superar la débil actuación de los órganos a los cuales cabía la vigilancia del Pacto.

Funciona junto a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, dónde se reúne dos veces por año, en el período de tres semanas en los meses de mayo y noviembre-diciembre. Está compuesto por dieciocho miembros, nombrados por el Consejo Económico y Social, con mandato de cuatro años, renovable por igual período, y elegidos entre personas propuestas por los Estados-parte, con observancia de los principios de distribución geográfica equitativa y de representación de distintos sistemas sociales y jurídicos, que actúan a título personal y no como representantes de los gobiernos. Los miembros del Comité definen su Presidente, los tres Vicepresidente y el Relator.

La actuación del Comité se realiza con el acompañamiento de los Estados-parte en cuanto a la aplicación adecuada de las normas contenidas en el Pacto, y contribuyendo con sugerencias y recomendaciones específicas que pretenden tornar más efectiva la eficacia de los derechos económicos, sociales y culturales declarados.

En uno de los días de cada sesión el Comité promueve el “día de debate general”, abordando temas que le incumben directamente<sup>335</sup>. También es reservada

---

<sup>335</sup> Como ejemplo se pueden mencionar los siguientes debates: en 1989 sobre el derecho a la alimentación; 1990, derecho a la vivienda; 1991, indicadores económicos y sociales; 1992, derecho a la participación de la vida cultural; 1993, derecho de las personas de edad y los ancianos y derecho a la salud; 1994, la función de las redes de seguridad social como medio de proteger los derechos



una pauta específica en el primer día de cada período de sesión, por la tarde, para que las organizaciones no-gubernamentales tengan la oportunidad de expresar sus opiniones sobre la aplicación del Pacto por los Estados-parte<sup>336</sup>.

En el ámbito del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los mecanismos disponibles para el acompañamiento de las obligaciones de los Estados-parte con relación al respectivo Pacto, son el “Informe Gubernamental”, la “Comunicación Particular”, la “Comunicación entre Estados” y el “Procedimiento Investigativo”.

El Comité, inicialmente, no disponía de un procedimiento de “Denuncia Particular” para asegurar a los individuos o grupos su protección por las violaciones a los derechos declarados en el Pacto, y que se les pudiera resguardar la obtención de una reparación internacional. Todavía, desde 10 de diciembre de 2008, la Asamblea General de Naciones Unidas ha adoptado, por la Resolución A/RES/63/117, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-PIDESC, en el cual se establece la posibilidad del Comité recibir y examinar comunicaciones *“presentadas por personas o grupo de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de los derechos económicos, sociales culturales enunciados en el Pacto”*<sup>337</sup>.

El Comité también no disponía de la posibilidad de “Denuncia Intergubernamental”. Pero, otra novedad que pasó a ser prevista por el mencionado Protocolo Facultativo al PIDESC fue la posibilidad de Comunicaciones entre Estados, por las cuales un Estado Parte lleva al conocimiento del Comité *“que otro Estado Parte no cumple sus obligaciones dimanantes del Pacto”*<sup>338</sup>.

---

económicos, sociales y culturales, con particular referencia a las situaciones que suponen un importante ajuste estructural y/o la transición a una economía de mercado; también en 1994, la educación en la esfera de los derechos humanos; 1995, la interpretación y aplicación práctica de las obligaciones que incumben a los Estados Partes y un Proyecto de Protocolo Facultativo del Pacto.

<sup>336</sup>Fue el primer órgano a permitir tal manifestación, conforme información disponible en web: <[http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/6/cescr\\_sp.htm](http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/6/cescr_sp.htm)> [Consulta: 18 de noviembre de 2010].

<sup>337</sup> De conformidad con el artículo 2 del Protocolo Facultativo al PIDESC, Resolución A/RES/63/117.

<sup>338</sup> Conforme artículo 10.1 del Protocolo Facultativo al PIDESC.

En el Protocolo Facultativo se encuentra previsto aún la posibilidad de exigir del Estado Parte la adopción de medidas cautelares para evitar posibles daños irreparables a las víctimas de la supuesta violación.

El Protocolo Facultativo al PIDESC está previsto para entrar en vigor tres meses después de la fecha del décimo instrumento de ratificación o de adhesión, siendo que la fecha para la firma de los Estados se ha abierto el 10 de septiembre de 2009<sup>339</sup>.

En cuanto no se supere esta falta de mecanismo específico de provocación del Comité, existe la posibilidad de los interesados de recurrir a los procedimientos generales, con la utilización del denominado “procedimiento de petición oficiosa”.

En la secuencia se expondrán los principales aspectos del funcionamiento actual del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también de los nuevos mecanismos de protección, con las modificaciones previstas en el Protocolo Facultativo.

### **c.1 – INFORME GUBERNAMENTAL**

Debe ser presentado a partir de los dos años de la vigencia del Pacto, con relación al Estado que lo ratifica, y después cada cinco años. En este Informe se deben relatar las medidas legislativas, judiciales, políticas y administrativas que hayan adoptado para garantizar el goce de aquellos derechos, así como presentar información detallada sobre situaciones reconocidas como violadoras, y las medidas específicas definidas para su superación. En cada período de sesión el Comité analiza unos cinco o seis Informes.

---

<sup>339</sup> Artículo 18.1, del Protocolo Facultativo. En fecha del 26 de septiembre de 2011, cuatro países han ratificado el Protocolo Facultativo al PIDESC: Ecuador, el 11 de junio de 2010; Mongolia, el 1 de julio de 2010; España, el 23 de septiembre de 2010; y El Salvador, el 20 de septiembre de 2011. Fuente, web <[http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en](http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3-a&chapter=4&lang=en)>[Consulta: 26 de septiembre de 2011].

Actualmente el propio Comité proporciona a los Estados un conjunto detallado de directrices relativas a los Informes y en el cual se especifica el tipo de información que el Comité necesita para vigilar eficazmente el cumplimiento del Pacto. Con esta providencia se ha obtenido resultados favorables en varias tareas imprescindibles al trabajo del Comité, como la del examen inicial, la de supervisión, de formulación de política, de escrutinio público, de evaluación, de reconocimiento de los problemas e intercambio de informaciones.

Con los Informes, y atendiendo a los objetivos del Comité<sup>340</sup>, se consiguen alcanzar informaciones muy importantes atinentes a la situación del cumplimiento del Pacto por el Estado, como conocer si la actuación legislativa y administrativa de los Estados-parte se ajustan a sus disposiciones y si el Estado se encuentra vigilante en su cumplimiento. Mas allá de eso, proporciona una base para que el Estado elabore políticas adaptadas al Pacto, facilita el examen público de las políticas con respecto a su aplicación, proporciona la base de datos para evaluar los progresos obtenidos en cuanto su cumplimiento, permite que los Estados comprendan mejor los problemas y limitaciones en la realización de los derechos declarados, y facilita el intercambio de informaciones entre los Estados para la adopción de medidas que lleven una mayor eficacia del Pacto.

En caso de omisión del Estado de presentar los Informes, el Comité pasa a examinar la situación de los derechos económicos, sociales y culturales por su propia iniciativa, valiéndose de toda información disponible.

Para el éxito de sus trabajos, el Comité puede disponer, también, de un pedido de invitación a cierto país para que sea realizada una visita tendiente a proporcionar al gobierno la asistencia técnica y de otra índole que se pueda necesitar para aplicar más cabalmente las disposiciones del Pacto y hacerlas cumplir. Esta iniciativa se debe al hecho de que muchos países que aceptan las obligaciones internacionales no siempre están en condiciones de cumplirlas, por carecer de las competencias e infraestructuras necesarias para la aplicación de las normas aceptadas.

---

<sup>340</sup> Estos objetivos del Comité se encuentran en la "Observación General 1 de 1989".

Generalmente, esas decisiones de pedido de invitación pasan por la aprobación del Consejo Económico y Social.

Antes de ser sometidos a las sesiones del Comité, los Informes son presentados a un Grupo de Trabajo, formado por cinco personas, y que se reúne seis meses antes de las sesiones. A este Grupo cabe un estudio previo del Informe, pudiendo solicitar explicaciones del Estado al respecto.

A diferencia de los Informes presentados junto a otros órganos, y que se hacen al Secretario General de las Naciones Unidas, en este caso del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Informes son presentados junto al Consejo de Derechos Humanos<sup>341</sup>.

La decisión sobre el Informe cabe al Comité, que en sesión privada, emite sus “observaciones finales”, retratando la situación del Pacto en el Estado-parte. Estas observaciones se dividen en 5 secciones: la introducción; los aspectos positivos; los factores y dificultades que obstaculizan la aplicación del Pacto; los principales motivos de preocupación; y, al final, sus sugerencias y recomendaciones. Este contenido decisorio es llevado a conocimiento público en el último día de cada período de sesión<sup>342</sup>.

La decisión del Comité no tiene contenido vinculante, recayendo en el Estado el reconocimiento de mala fe por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Pacto.

En una línea de actuación más preventiva, el Comité también emite, desde 1989, “observaciones generales”, con el objetivo de esclarecer la presentación de los

---

<sup>341</sup> Al Consejo de Derechos Humanos en sustitución a la Comisión de Derechos Humanos, órgano al cual los Informes eran presentados.

<sup>342</sup> Las decisiones en las Naciones Unidas son registradas con la identificación (org)/C/(1)/D/(2)/(3), donde: “org/C” son los Comités (CAT/C... Comité contra la Tortura; CCPR/C... Comité de Derechos Humanos; CERD/C... Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial); “(1)” es el período de sesiones; “D”, es la identificación del acto, en el caso una “decisión”; “(2)”, el número del caso; “(3)”, el año en que el caso fuera registrado. Ejemplo: CCPR/C/67/D/666/1995, es una decisión tomada por el Comité de Derechos Humanos en su 67º período de sesiones (del 18 de octubre al 5 de noviembre de 1999) a propósito de un caso registrado en 1995 como caso 666.

Informes y el cumplimiento del Pacto. Esta iniciativa ha contribuido para la generación de la jurisprudencia del Comité<sup>343</sup>.

## **c.2 – COMUNICACIONES (QUEJAS INDIVIDUALES)**

Con este nombre el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales-PIDESC pasa a disponer sobre la posibilidad de una víctima o grupo de víctimas de un Estado Parte comunicar al Comité una violación de cualquiera de los derechos económicos, sociales o culturales enunciados en el Pacto.

Trátase de un modelo muy semejante a las denuncias individuales y que puede ser presentada por la propia víctima o por otra persona con el consentimiento de aquella o mismo sin consentimiento, en este caso, con la debida justificativa de su imposibilidad.

Para la admisibilidad de la “comunicación” se exige el agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna o cuando se alegue demasiado e injustificable tiempo de trámite de los recursos sin solución.

La comunicación debe ser presentada por escrito, ser suficientemente fundamentada, no ser anónima, y hacerse hasta un año tras el agotamiento de los

---

<sup>343</sup> Estas observaciones fueron: la nº 1, de 1989, sobre la presentación de Informes por los Estados-Parte; la nº 2, de 1990, sobre las medidas de asistencia técnica internacional; nº 3, de 1990, sobre la índole de las obligaciones de los Estados-Parte; nº 4, de 1991, sobre el derecho a una vivienda adecuada; nº 5, de 1994 sobre las personas con discapacidad; nº 6, de 1995, sobre los derechos económicos, sociales y culturales; nº 7, de 1997, sobre derechos a una vivienda adecuada y contra la retomada forzada; nº 8, de 1997, sobre las sanciones económicas y el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales; nº 9, de 1998, sobre la aplicación interna del Pacto (el deber de dar efecto al Pacto en el ordenamiento jurídico interno); nº 10, de 1998, sobre la función de las instituciones nacionales de derechos humanos en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales; nº 11, de 1999, sobre plano de acción a la enseñanza primaria; nº 12, de 1999, sobre el derecho a una alimentación adecuada; nº 13, de 1999, sobre el derecho a la enseñanza; nº 14, de 2000, sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud; nº 15, de 2002, sobre el derecho al agua; nº 16, de 2005, sobre la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales; nº 17, de 2005, sobre el derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor; nº 18, de 2005, sobre el derecho al trabajo; nº 19, de 2008, sobre el derecho a la seguridad social; nº 20, de 2009, sobre la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales.

recursos internos, y debe relacionarse a hechos sucedidos o en continuación después de la fecha de entrada en vigor del Protocolo Facultativo para el Estado Parte interesado, no pudiendo referirse a una cuestión que haya sido examinada o esté sometida a examen por el Comité u otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

A fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima, el Comité puede dirigirse al Estado Parte interesado, en cualquier momento, tras haber recibido una comunicación, para que adopte “medidas provisionales” urgentes, sin perjuicio del posterior análisis de la admisibilidad y del juicio de fondo de la comunicación, y que el Comité examinará en sesiones privadas.

No alcanzada una solución amigable entre las partes interesadas, el Comité emitirá un dictamen, con recomendaciones, debiendo el Estado Parte encaminar en un plazo de seis meses una respuesta sobre las providencias que haya adoptado.

### **c.3 – COMUNICACIONES ENTRE ESTADOS**

Este es el instrumento previsto con la finalidad de un Estado Parte comunicar al Comité que otro Estado Parte no cumple sus obligaciones dimanantes del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Para tramitar la Comunicación, el Estado Parte comunicante debe haber reconocido al Comité la posibilidad de Comunicación contra sí mismo.

La Comunicación debe ser por escrito y será encaminada al Estado Parte interesado, pudiéndose dar conocimiento al Comité. En tres meses el Estado Parte receptor deberá ofrecer al Estado Parte comunicante una explicación o declaración por escrito en la cual se aclare el asunto, que podrá resolverse mediante la satisfacción de ambos Estados. Si no se resuelve, el asunto podrá ser remitido al Comité, hasta seis meses de recibida la comunicación por el Estado receptor. En este caso, para dar solución a la Comunicación el Comité podrá emitir un Informe con observaciones que considere pertinentes al asunto entre ambos Estados Partes.

Los Estados Partes deben adoptar medidas para evitar que las personas bajo su jurisdicción, que hayan encaminado una Comunicación, no sean sometidas a malos tratos o intimidación de ningún tipo.

#### **c.4 – PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN**

Por este mecanismo, y en razón de información fidedigna que llega al conocimiento cuanto a graves y sistemáticas violaciones a cualquier derecho económico, social o cultural previsto en el Pacto, el Comité podrá llamar al Estado Parte acusado a colaborar en el examen de la información, pudiendo este presentar sus observaciones.

Con los datos disponibles, el Comité podrá iniciar una investigación de carácter confidencial, e, inclusive, con el consentimiento del Estado Parte, realizar una visita al territorio, pudiendo encargar a uno o más de sus miembros a presentar un Informe al Comité, con carácter de urgencia.

Con las conclusiones de la investigación el Comité dará conocimiento al Estado Parte con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas, cabiéndole, en un plazo de seis meses, prestar sus propias observaciones al Comité.

Los resultados del procedimiento podrán ser incluidos, resumidamente, en el Informe Anual del Comité.

A su vez, y a invitación del Comité, el Estado Parte investigado podrá incluir en el Informe que debe presentar con arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto providencias que haya adoptado en respuesta a la Investigación.

#### **d – COMITÉ CONTRA LA TORTURA**

Una de las principales pautas de desafío definidas por las Naciones Unidas, a partir de la década de los ochenta, fue la adopción de medidas tendentes a la erradicación de la tortura, definiendo mecanismos de protección para evitar su

violación. En el centro de estas medidas la Asamblea General adoptó, el 10 de diciembre de 1984, con entrada en vigor el 26 de junio de 1987, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y con la consecuente institución del órgano encargado de su vigilancia, el Comité contra la Tortura, al cual le cabe amplias facultades de examen e investigación del tema.

El Comité pasó a funcionar el 1º de enero de 1988, con su primera reunión en abril del mismo año. Está compuesto por diez miembros, denominados “Expertos”, que deben ser nacionales de los Estados-parte, elegidos por éstos en sesión secreta, con mandato de cuatro años, pudiendo ser prorrogado por más de cuatro años, y entre los cuales se eligen el Presidente, tres Vicepresidentes, y un Relator, para un mandato de dos años, renovables por igual período.

El Comité se reúne en su sede en Ginebra, en sesiones ordinarias, dos veces al año, y también se puede reunir extraordinariamente, convocado por la mayoría de sus miembros, o a petición de un Estado-parte de la Convención.

Las actividades de acompañamiento de las violaciones a los derechos declarados son ejercidas por cuatro instrumentos: el “Informe Gubernamental”, la “Investigación de Oficio”, la “Denuncia Gubernamental” y la “Denuncia Particular”.

Entre los órganos de protección a los derechos humanos en el seno de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura es el que dispone de más instrumentos de tutela con relación a aquellos derechos.

#### **d.1 – INFORME GUBERNAMENTAL**

El “Informe Gubernamental” es la providencia exigida a partir del primer año de entrada en vigor de la Convención en el país que la adhiere, y que debe renovarse cada cuatro años, como “Informes Suplementarios”, en los cuales se da conocimiento de las medidas que se han adoptado para tornar efectivos los efectos de la Convención.



Los Informes son examinados en las sesiones ordinarias, para las cuales son invitados los Estados a ellos vinculados, emitiendo el Comité sus “comentarios” generales, en casos de regularidades en el cumplimiento de la Convención, o señalando que el Estado informante no ha cumplido con sus obligaciones convencionales. Los “comentarios” son llevados a conocimiento del Estado-parte interesado que puede presentar sus propias observaciones.

Antes de manifestar su examen final, el Comité puede solicitar informaciones suplementarias, debiendo el representante del Estado presentarse en una sesión determinada para responder a las preguntas del Comité y aclarar determinados aspectos de los informes presentados.

#### **d.2 – INVESTIGACIÓN DE OFICIO**

Por el procedimiento “Investigación de Oficio”, conocido también como “Facultades de Investigación del Comité”, se inicia la investigación sobre denuncias de práctica sistemática de tortura en cierto país, y que son admitidas por ser prestadas por fuente fidedigna. Es un procedimiento confidencial y en el cual se busca la cooperación de los Estados-parte interesados, de modo que estén presentes sus observaciones respectivas. El Comité, para acercarse mejor de la cuestión, puede solicitar información adicional a los representantes del Estado, a organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales, así como a particulares, con el objetivo de obtener nuevos elementos de juicio.

Este procedimiento está previsto en el artículo 20, y tiene naturaleza facultativa, estando los Estados sometidos a este instrumento de control si a el manifestaran concordancia en la ratificación de la Convención.

Si la denuncia justifica una acción del Comité, éste podrá iniciar una “investigación confidencial”, para la cual se invita al Estado-parte denunciado a reunirse, por su representante, con miembros del Comité, facilitándoles la información que estimen necesaria, incluso pudiendo realizarse visita al territorio del Estado para oír testimonios.

Las investigaciones son pasadas al Comité, que emite sus propias observaciones o sugerencias al Estado interesado, y que es invitado a informar las medidas adoptadas en respuesta a las observaciones recibidas. Los resultados de la investigación concluida pueden ser incluidos, sumariamente, en el “Informe Anual” del Comité, para su conocimiento público, si con relación a esto ha concordado el Estado investigado.

### **d.3 – DENUNCIA INTERESTATAL**

Otro mecanismo de actuación del Comité es la “Denuncia Interestatal”, por la cual un Estado-parte sostiene que otro Estado-parte no cumple sus obligaciones convencionales. Este mecanismo se desarrolla con el comunicado escrito de un Estado-parte a otro, denunciando la violación a la Convención. El Estado que recibe el comunicado debe manifestarse en tres meses, también por escrito, esclareciendo la situación. Si el asunto no queda resuelto entre ellos, cualquiera podrá provocar el Comité, que se reunirá a puertas cerradas.

Este procedimiento sólo se admite una vez agotados todos los recursos de la jurisdicción interna del Estado acusado, salvo cuando estos se prolonguen injustificadamente o no sea probable que con ellos se obtenga reparación a la víctima de la violación.

Puede el Comité buscar una solución amistosa del asunto, designando una comisión especial de conciliación. En esta modalidad de solución, los Estados pueden presentar observaciones verbales o por escrito y enviar representantes a las sesiones en las que el Comité examina el caso. En un plazo de doce meses desde la presentación de la denuncia, el Comité debe presentar un Informe sumario sobre los hechos y la solución alcanzada. Si no se alcanza una solución amistosa, se debe transmitir a los Estados-parte interesados, por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas, un Informe con exposición de los hechos y las observaciones formuladas por cada uno de aquellos Estados.

#### **d.4 – DENUNCIA PARTICULAR**

El cuarto instrumento es la “Denuncia Particular” o “Queja Individual”, previsto por el artículo 22 de la Convención, por lo cual cualquier víctima de violación a la Convención puede provocar el Comité. Esta titularidad activa requiere que opere un representante de aquella, cuando no esté en condiciones de presentar por sí misma la comunicación.

Para el examen de la denuncia es necesario, primero, que el Estado denunciado haya reconocido, al ratificar la Convención, la competencia del Comité en este instrumento de control. Más allá de eso, debe la comunicación someterse al juicio de admisibilidad, exigiéndose, por tanto, reconocer que la denuncia no es anónima ni incompatible con las disposiciones de la Convención; que no se constituye en abuso de derecho; no ha sido o esta siendo sometida a otro órgano de investigación, y haber agotado todos los recursos de la jurisdicción interna – en este caso también se considera presente este requisito en los casos de prolongamiento injustificado del recurso, o cuando con él no se pudiera alcanzar la reparación a la víctima –. Para superar la admisibilidad, el Comité puede pedir informaciones, aclaraciones u observaciones suplementarias. Si no es admitida, el Comité comunica a los interesados, sin perjuicio de ser revisada la decisión si desaparecen las causas de no admisibilidad.

Recibida la denuncia, se transmite la decisión al autor y al Estado denunciado, pasándose a su examen de fondo. En seis meses después de aquella comunicación de admisibilidad, el Estado debe presentar al Comité sus explicaciones o aclaraciones, debiendo exponer qué medidas ha adoptado para remediar la situación. El autor también puede contribuir en la instrucción del proceso, ofreciendo otros elementos de prueba, incluso estando facultado a comparecer junto al Comité, personalmente, o por su representante, en sesión reservada, con aquella finalidad.

Superada esta fase de instrucción, el Comité formula sus opiniones al respecto, pudiendo cada miembro formular opiniones personales. El procedimiento se concluye con la transmisión de las observaciones finales al autor y al Estado-parte

interesado, que es invitado a informar sobre las medidas que adoptará de conformidad con aquellas observaciones.

La posición definida en el caso concreto por el Comité se incluirá en su “Informe Anual”, conteniendo las comunicaciones examinadas, las declaraciones del Estado-parte y las propias opiniones del Comité<sup>344</sup>.

En cualquier fase del proceso, aún antes de su admisibilidad, el Comité puede decidir sobre medidas provisionales de protección a la víctima, tendentes a evitar un posible daño irreparable por la violación denunciada.

Una peculiaridad de este mecanismo es que si el Informe se presenta insatisfactorio, se puede determinar la realización de investigaciones, conforme dispone el artículo 20.2, de la Convención contra la Tortura.

En el ámbito mundial las acciones vinculadas a la protección contra la tortura también se realizan por el “Relator Especial sobre la Tortura”, cuyo mandato fue establecido por la Comisión de Derechos Humanos el 13 de marzo de 1985. Su competencia es diferente de la atribuida al Comité, siendo la de aquel más preventiva que reparadora, incluso pudiendo adoptar medidas urgentes en casos de inminente riesgo de tortura o situaciones similares. Su esfera de competencia alcanza a todos los Estados-miembros de las Naciones Unidas, de modo que ejercen constante acompañamiento en cuanto al tema, incluso con sus observadores desplegándose en diversas regiones del mundo con aquel objetivo, para la posterior comunicación de sus levantamientos al Consejo de Derechos Humanos.

El Relator Especial sobre la Tortura y el Comité contra la Tortura tienen establecido una estrecha relación, intercambiando informaciones, informes y documentos de interés común, de modo que complementan sus funciones.

---

<sup>344</sup> Por ejemplo, en datos de 2002, de los 50 países sometidos a este procedimiento fueron presentadas 200 quejas contra 21 países. De aquellas, 38 fueron pre-admitidas, 4 admitidas, 4 suspendidas, 37 no admitidas y 55 archivadas. De las admitidas a examen, en 20 fue reconocida la violación, y en 42 no se reconoció que hubo violación. Estos datos son presentados en la página Internet del Comité <[http://193.194.138.190/spanish/html/menu2/6/cat\\_sp.htm](http://193.194.138.190/spanish/html/menu2/6/cat_sp.htm)> [Consulta: 14 octubre de 2004].

Otro órgano que se ocupa de la protección contra la tortura, ahora en ámbito regional, es el Comité Europeo para la Prevención a la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, con el cual, a su vez, no se ha alcanzado un nivel de cooperación satisfactorio con relación a los Estados-parte en las dos convenciones respectivas, ésto debido al propio carácter de confidencialidad de sus procedimientos.

El Comité ha establecido también relaciones de cooperación con el Consejo de Administración del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, creado por la Resolución 36/151, de 16 de diciembre de 1981, de la Asamblea General.

### **e – SUBCOMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES**

Este Subcomité se ha reunido por primera vez el 19 de febrero del 2007, y ha sido creado en virtud del Protocolo Facultativo a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, aprobado el 18 de diciembre del 2002 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que entró en vigor el 22 de junio del 2006, cuando se ha alcanzado veinte países que lo han ratificado.

Se compone por 25 miembros independientes, número alcanzado cuando obtenida la quincuagésima ratificación o adhesión.

Constituye un importante paso en la prevención de la tortura y otros tratos crueles al establecer, como su principal papel, y como método de trabajo, un sistema de visitas regulares realizadas por organismos expertos complementarios e independientes, nacionales e internacionales, a lugares donde se encuentran personas privadas de su libertad<sup>345</sup>. Tiene también como objetivo asesorar y ayudar a los Estados Partes y a los mecanismos nacionales de prevención.

---

<sup>345</sup> Desde el inicio de sus trabajos el Subcomité ha visitado Islas Mauritius y Maldivas el 2007, Suecia, Benín y México el 2008, Paraguay, Honduras y Camboya en 2009, Líbano, Bolivia, Paraguay y Liberia en 2010, y Ucrania en 2011.

Al contrario de las visitas comúnmente realizadas por el sistema de protección internacional de las Naciones Unidas, con el objetivo de investigar y denunciar violaciones a los derechos humanos, el Protocolo parte del concepto básico de que las visitas regulares y anunciadas a lugares de detención emprendidas con espíritu de cooperación constituyen un modo efectivo de prevenir la tortura y los malos tratos.

De acuerdo con los artículos 19 y 20 del Protocolo Facultativo, los Estados partes se comprometen a dar al Subcomité acceso sin restricciones a toda la información acerca de las personas privadas de libertad y a toda la información relativa al trato de esas personas y a las condiciones de su detención. También deben conceder al Subcomité la posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de su libertad, sin testigos, teniendo la libertad para seleccionar los lugares que desee visitar y las personas a las que desee entrevistar.

En lo que respecta a la relación entre el Subcomité para la prevención de la tortura y el Comité contra la Tortura, esta es solamente de cooperación y coordinación, no habiendo una jerarquía general entre ellos. *“El único vínculo expreso entre el Subcomité y el Comité contra la Tortura que se encuentra en el texto del Protocolo Facultativo se refiere a la publicación del informe anual de las actividades del Subcomité (Artículo 16.3) y a las declaraciones públicas realizadas por el Comité contra la Tortura en caso de falta de cooperación con el Subcomité de un Estado Parte (Artículo 16.4).*

*La relación entre el Comité contra la Tortura y el Subcomité es, por lo tanto, de cooperación y coordinación más que de jerarquía. Por ejemplo, a lo largo del proceso de recibir y revisar informes periódicos de los Estados de acuerdo con el Comité contra la Tortura, el mismo recibe gran cantidad de información de los Estados Partes, ONG, instituciones nacionales y otros. Compartir esta información con el Subcomité será de ayuda para el propio Subcomité, ya que mejorará el entendimiento sobre la situación de personas privadas de su libertad en los Estados Partes y proveerá material al Subcomité para la preparación de sus visitas y prestar su asesoría y ayuda. Habría que desarrollar una cooperación similar con otro organismo de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Humanos.*

*Del mismo modo, mediante llamados urgentes y visitas a los países, el Relator Especial sobre la Tortura acopia información tanto sobre la situación general de personas privadas de su libertad en determinados Estados como sobre casos individuales. Esa información sería también de ayuda para el Subcomité y le aseguraría poder realizar visitas a lugares clave, por ejemplo, durante sus visitas a cada país. Además, en lo que se refiere a casos individuales sobre los que llama la atención el Relator Especial, el Subcomité podría hacer preguntas a las autoridades en el transcurso de sus visitas sobre el paradero de individuos en concreto.*

*De modo similar, los informes publicados por el Subcomité pueden ser de utilidad al recién establecido Consejo de Derechos Humanos en el marco de la revisión periódica universal”<sup>346</sup>.*

En sus actividades, y para evitar la duplicación innecesaria de actuación, el Subcomité debe adoptar medidas a la cooperación con otros órganos internacionales semejantes, como son los trabajos desarrollados por el Comité Internacional de la Cruz Roja, por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, el Relator Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la situación de personas privadas de su libertad y el Relator Especial de la Comisión Africana para las condiciones carcelarias.

## **f – COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER**

El Comité se crea con la propia Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con el objetivo de acompañar la aplicación y progreso de sus disposiciones, y comprender el verdadero alcance del problema de la discriminación, relacionadas a la situación efectiva de la mujer en la sociedad, y su plena participación, en condiciones de igualdad, en la vida política, civil, económica,

---

<sup>346</sup>En conformidad con el “Documento de opinión de la ATP”, Asociación para la Prevención de la Tortura, de mayo de 2006, disponible en web: <<http://www.analitica.com/mujeranalitica/documentos/4896621.doc>> [Consulta: 14 octubre de 2004].

social y cultural, conforme se ha reconocido en la Declaración y Programa de Acción de Viena, en su parte I, párrafo 18<sup>347</sup>.

Está formado por veinte y tres Expertos, elegidos en sufragio secreto por la Asamblea General, entre personas indicadas por los Estados-parte, debiendo tenerse en cuenta la distribución geográfica equitativa y la representación de diversas civilizaciones y sistemas jurídicos. Su mandato es de cuatro años, y en el ejercicio de sus actividades son independientes sin mantener vínculo con los Estados de los que son nacionales.

Con relación a los otros Comités de Naciones Unidas, su composición está integrada exclusivamente por mujeres, salvo una única excepción, desde el inicio de sus actividades, y sus miembros proceden de las más diversas profesiones. Otra peculiaridad del Comité es que sus reuniones sólo se realizan una vez al año, en un período de dos semanas, en Nueva York. Las sesiones son públicas, exigiéndose la presencia de doce miembros para que haya quórum, y la presencia de dos tercios para adoptar una decisión, a pesar de que esta se procura adoptar por consenso.

Los miembros del Comité eligen entre sí al Presidente, tres Vicepresidentes, y un Relator, que ejercen sus mandatos por un período de dos años.

Junto al Comité funciona el Grupo de Trabajo Previo al Período de Sesiones, formado por cinco miembros del Comité, y que tiene por objetivo agilizar las actividades del Comité, preparando el examen del segundo Informe Periódico y los Informes siguientes, para formular las cuestiones y preguntas que se anticiparán a los Estados, para que éstos puedan presentar sus respuestas oportunamente en el período de sesiones.

Otros dos grupos de trabajo, de naturaleza permanente, también funcionan junto al Comité, los cuales se reúnen durante los períodos de sesiones, y son identificados como Grupo de Trabajo I, encargado de estudiar y proponer la manera

---

<sup>347</sup> Conforme "A/CONF.157/24 (Part I), cap. III", de la Segunda Conferencia Mundial de los Derechos Humanos.



de facilitar la labor del Comité, y Grupo de Trabajo II, al cual le cabe estudiar la manera de emitir propuestas y recomendaciones generales sobre la aplicación de la Convención.

El principal mecanismo junto al Comité es el “Informe Gubernamental”, admitiéndose, también la “Investigación de Oficio” y la “Denuncia Particular” .

### **f.1 – INFORME GUBERNAMENTAL**

Es presentado por los Estados-Parte al Secretario General de las Naciones Unidas, y por el cual se busca registrar las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra naturaleza que se hayan adoptado en conformidad con las disposiciones de la Convención. Estos Informes también pueden ser presentados por organizaciones no-gubernamentales, y, por invitación del Comité, por otros organismos especializados de las Naciones Unidas, tales como Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-UNICEF, Organización Internacional del Trabajo-OIT, Organización Mundial de Salud-OMS, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura-UNESCO.

El Informe es de presentación obligatoria después de un año de la vinculación del Estado al Convenio, y debe presentarse con la periodicidad de cuatro años, o cuando lo solicite el Comité.

No siempre los Informes que se han presentado han tenido un contenido útil, por ello, para evitar tal error, el Comité ha elaborado un conjunto de orientaciones, de modo que deben contener una parte describiendo el marco político, jurídico y social del país y las medidas generales para aplicar la Convención, y otra parte, una descripción detallada de las medidas tomadas para llevar a la práctica cada artículo.

El examen del Informe se resume en el siguiente procedimiento: después de presentado, el representante del Estado tiene la oportunidad de exponerlo de palabra ante el Comité; posteriormente, en seguida, el Comité presenta observaciones generales y comentarios sobre su forma y contenido, pudiendo formular preguntas,

solicitar informaciones estadísticas sobre la situación de la mujer en la sociedad, informaciones que pueden prestarse por el propio Estado, por ONG's y organismos independientes; se le da al Estado la oportunidad de contestar estas formulaciones, pudiendo hacerlas de inmediato o en uno o dos días; luego, el Comité puede hacer nuevas preguntas, o pedir que se remita ulterior información antes de la presentación del próximo Informe; si se entienden suficientes todos los datos presentados, el Comité emite sus "comentarios finales" para que integren el Informe del Comité.

En la experiencia del Comité, las conclusiones en su labor de examen de los Informes han generado "recomendaciones generales" emitidas no contra un cierto y determinado Estado, sino a todos los Estados-parte sobre medidas que caben adoptar para el desempeño de sus obligaciones en virtud de la Convención. El Comité a través de los Informes busca fomentar un diálogo constructivo entre él y los Estados, por lo que no tiene intenciones de enfrentamiento, siendo el ambiente general de las reuniones del Comité un ambiente de libre intercambio de ideas, informaciones y propuestas, destacándose en este "*ambiente cordial*" el hecho de que *"el Comité nunca declara solemnemente que un Estado ha violado la Convención, sino que se limita a indicar las carencias del Estado mediante una serie de preguntas y observaciones. Sin embargo, este enfoque significa también que el Comité no se pone en condiciones de ejercer fuertes presiones sobre los Estados que violen de modo flagrante la Convención, para que modifiquen sus políticas y su legislación"*<sup>348</sup>.

## **f.2 – INVESTIGACIÓN DE OFICIO**

Otra técnica disponible al Comité es la "Investigación de Oficio", también recientemente acogida, en diciembre de 2000, y prevista en los artículos 8 a 12 del Protocolo Facultativo de la Convención comentada. Por ella se busca realizar un examen de la amplitud de las violaciones denunciadas, intentando prevenir futuras violaciones de la norma convencional<sup>349</sup>. Sus trabajos se desenvuelven en el propio país, con su autorización y colaboración, y de modo confidencial.

---

<sup>348</sup>Según expresiones textuales del "Folleto Informativo" del Comité, disponible en web <[http://193.194.138.190/spanish/html/menu6/2/fs22\\_sp.htm#comité](http://193.194.138.190/spanish/html/menu6/2/fs22_sp.htm#comité)>. [Consulta: 19 junio de 2009].

<sup>349</sup> Antes de la aceptación de la "queja individual" y de la "investigación de oficio", y para asegurar la protección de la mujer víctima del incumplimiento de la Convención, se utilizaba como expediente

### **f.3 – DENUNCIA PARTICULAR**

En el seno del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer existe también la tutela de los derechos por la “Denuncia Particular” o la “Queja Individual”, recientemente admitida, con la entrada en vigor del Protocolo Facultativo de la Convención, en diciembre de 2000, y que fuera ratificado por 28 Estados-parte.

Esta técnica de control en el ámbito del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer guarda iguales características generales de procedimiento observada junto a los demás Comités, de ellos destacándose la reserva de la acción a la víctima y la necesidad del agotamiento de las instancias judiciales nacionales. Como novedades, limita la queja sólo contra el país que bajo su jurisdicción se encuentra la víctima; admite el reconocimiento de la “violación continuada” como elemento justificador de la admisibilidad de la queja, igualmente con relación a hechos anteriores a la entrada en vigor de la Convención para el Estado acusado; y asegura la adopción de “medidas provisionales” para evitar daños irreparables a la víctima<sup>350</sup>.

### **g – COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO**

El Comité fue creado por la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General en 20 de noviembre de 1989 y que entró en vigor el 20 de septiembre de 1990.

Se compone de diez miembros, denominados Expertos, elegidos por los Estados-parte y que ejercen su cargo de modo independiente. Las reuniones se realizan tres veces al año, en enero, mayo-junio y octubre, en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra.

---

hacer comunicación a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, al cual cabía elaborar recomendaciones y sugerencias de medidas urgentes en la esfera de los derechos de la mujer.

<sup>350</sup> En este último caso, la novedad se caracteriza por el hecho de que tales medidas fueron previstas por las propias disposiciones del Convenio, y no como práctica de la labor de control, conforme destaca VILLÁN DURÁN, C., op. cit., p. 482.

El control del cumplimiento de los Estados-parte a la Convención y sus dos Protocolos Facultativos se hace exclusivamente por el “Informe Gubernamental”.

#### **g.1 – INFORME GUBERNAMENTAL**

Es examinado por el Comité en sesiones públicas, con la participación de los representantes de los Estados interesados, emitiéndose las “observaciones finales” y “recomendaciones”.

Después de cada sesión periódica, se reúne el Grupo de Trabajo que prepara la sesión siguiente, en la cual se invita a las ONG’s a participar, mediante el envío de Informes escritos o la presentación de información oralmente.

#### **h – COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES**

Este es el Comité que se encuentra vinculado a la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la Asamblea General en su Resolución 45/158, del 18 de diciembre de 1990.

Se reúne en Ginebra y normalmente celebra un periodo de sesiones al año, siendo que su primera sesión se realizó en marzo del 2004.

Según la Convención, artículo 1.2, su aplicación tiene alcance durante todo el proceso de migración de los trabajadores migratorios y sus familiares, que comprende la preparación para la migración, la partida, el tránsito y todo el período de estancia y de ejercicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo, así como el regreso al Estado de origen o al Estado de residencia habitual.

El funcionamiento del Comité realiza por “Informes Gubernamentales”, “Denuncias Interestatales” y “Denuncias Particulares”.

## **h.1 – INFORME GUBERNAMENTAL**

Es el instrumento a que están obligados los Estados-partes, debiendo informar al Comité sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole que hayan adoptado para dar efecto a las disposiciones de la Convención.

El Informe debe ser presentado en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado-parte, y, en lo sucesivo, a cada cinco años y cada vez que el Comité lo solicite, debiendo dar una amplia difusión pública de sus Informes en sus propios países.

## **h.2 – DENUNCIA INTERESTATAL**

Es admitida para los Estados-parte que reconocen este mecanismo de control y que se realiza con la comunicación en que un Estado-parte alegue que otro Estado-parte no cumple las obligaciones dimanadas de la Convención. La posibilidad de funcionamiento de ese mecanismo sólo puede observarse cuando diez Estados-partes de la Convención hayan hecho una declaración de la competencia del Comité para aceptar una denuncia interestatal. La declaración podrá retirarse a cualquier momento, sin perjuicio que se examine un asunto que haya sido objeto de una comunicación ya transmitida, no admitiendo nuevas comunicaciones a partir del momento del retiro.

Conforme previsto en el artículo 76, “a) *Si un Estado Parte en la presente Convención considera que otro Estado Parte no está cumpliendo sus obligaciones dimanadas de la presente Convención, podrá, mediante comunicación por escrito, señalar el asunto a la atención de ese Estado Parte. El Estado Parte podrá también informar al Comité del asunto. En un plazo de tres meses contado desde la recepción de la comunicación, el Estado receptor ofrecerá al Estado que envió la comunicación una explicación u otra exposición por escrito en la que aclare el asunto y que, en la medida de lo posible y pertinente, haga referencia a los procedimientos y recursos internos hechos valer, pendientes o existentes sobre la materia; c) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de ambos Estados Partes interesados dentro de seis meses*

*de recibida la comunicación inicial por el Estado receptor, cualquiera de ellos podrá referir el asunto al Comité, mediante notificación cursada al Comité y al otro Estado; h) El Comité, en un plazo de doce meses a partir de la fecha de recepción de la notificación con arreglo al inciso b) del presente párrafo, presentará un informe, como se indica a continuación: i) Si se llega a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso d) del presente párrafo, el Comité limitará su informe a una breve exposición de los hechos y de la solución a la que se haya llegado; ii) Si no se llega a una solución con arreglo a lo dispuesto en el inciso d), el Comité indicará en su informe los hechos pertinentes relativos al asunto entre los Estados Partes interesados. Se anexarán al informe las declaraciones por escrito y una relación de las declaraciones orales hechas por los Estados Partes interesados. El Comité podrá también transmitir únicamente a los Estados Partes interesados cualesquiera observaciones que considere pertinentes al asunto entre ambos. En todos los casos el informe se transmitirá a los Estados Partes interesados”.*

### **h.3 – DENUNCIAS INDIVIDUALES**

Solamente va a observarse con relación a los Estados-partes que hayan declarado reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones enviadas por personas sometidas a su jurisdicción, o en su nombre, que aleguen que ese Estado Parte ha violado los derechos individuales objeto de la Convención. El Comité no admitirá comunicación alguna relativa a un Estado Parte que no haya hecho la declaración.

Así como en la denuncia interestatal, la posibilidad de funcionamiento del mecanismo de comunicación individual sólo podrá observarse cuando diez Estados-partes de la Convención declaren la competencia del Comité para aceptarlo. La declaración podrá retirarse a cualquier momento, sin perjuicio que se examine un asunto que haya sido objeto de una comunicación ya transmitida, no admitiendo nuevas comunicaciones a partir del momento del retiro.

Son requisitos para la admisibilidad de la denuncia que no sea anónima o que, a juicio del Comité, no constituya un abuso del derecho a presentar dichas

comunicaciones o sea incompatible con las disposiciones de la Convención. Más allá, se exige que la misma cuestión no haya sido, ni esté siendo examinada en otro procedimiento de investigación o solución internacional, y que la persona haya agotado todos los recursos que existan en la jurisdicción interna, salvo si la tramitación de los recursos se prolongase injustificadamente o no ofrezca posibilidades de dar un amparo eficaz a esa persona.

En un plazo de seis meses, el Estado receptor proporcionará al Comité una explicación u otra exposición por escrito en la que aclare el asunto y exponga, en su caso, la medida correctiva que haya adoptado, reuniéndose el Comité en sesión privada para examinar la denuncia individual, y comunicando sus opiniones al Estado Parte de que se trate y a la persona que haya presentado la comunicación.

## **i – COMITÉ DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

El Comité tubo su primer período de sesiones en el período del 23 al 27 de febrero del 2009, y que fue celebrado en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Es formado por 12 expertos que desempeñarán sus funciones a título personal. Cuando la Convención obtenga otras 80 ratificaciones o adhesiones, la composición del Comité se incrementará en seis miembros más, con lo que alcanzará un máximo de 18 miembros.

El Comité se encuentra vinculado a la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, del 13 de diciembre del 2006, y que entró en vigor el 3 de mayo del 2008, cuando alcanzó la 20ª ratificación o adhesión. El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás

El Comité de los derechos de las personas con discapacidad es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención.

Son instrumentos de control y protección al cumplimiento de la Convención el “Informe Estatal”, la “Denuncia Particular” y las “Medidas Provisionales Urgentes”.

### **i.1 – INFORMES ESTATALES**

En conformidad con el artículo 35 de la Convención, los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de la Convención en el Estado Parte de que se trate. Posteriormente, los Estados Partes presentarán informes ulteriores al menos cada cuatro años y en las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.

Los informes podrán estar a disposición de todos los Estados Partes y estos darán amplia difusión pública a sus informes en sus propios países y facilitarán el acceso a las sugerencias y recomendaciones generales sobre esos informes.

### **i.2 – DENUNCIA PARTICULAR**

La posibilidad del Comité recibir y considerar denuncias o comunicaciones de individuos se encuentra prevista en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que fue aprobado el 13 de diciembre del 2006 y entró en vigor el 03 de mayo del 2008, en las mismas fechas de vigência de la Convención, y por haber alcanzado la 10ª ratificación o adhesión.

Las denuncias pueden ser formuladas directamente, o a su nombre, por las personas o grupo de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado Parte en el Protocolo y que aleguen ser víctimas de una violación, por ese Estado Parte, de



cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. El Comité no recibirá ninguna comunicación que concierna a un Estado Parte de la Convención y que no sea parte en el presente Protocolo.

La comunicación no será admisible cuando sea anónima, constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación o sea incompatible con las disposiciones de la Convención, se refiera a una cuestión que ya haya sido examinada por el Comité o ya haya sido o esté siendo examinada de conformidad con otro procedimiento de investigación o arreglo internacionales, no se hayan agotado todos los recursos internos disponibles, salvo que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o sea improbable que con ellos se logre un remedio efectivo, que sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada, o que los hechos objeto de la comunicación hubieran sucedido antes de la fecha de entrada en vigor del Protocolo para el Estado Parte interesado, salvo que esos hechos continúen produciéndose después de esa fecha.

En los casos de información fidedigna *“que revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado Parte de los derechos recogidos en la Convención, el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información y, a esos efectos, a presentar observaciones sobre dicha información. Tomando en consideración las observaciones que haya presentado el Estado Parte interesado, así como toda información fidedigna que esté a su disposición, el Comité podrá encargar a uno o más de sus miembros que lleven a cabo una investigación y presenten, con carácter urgente, un informe al Comité. Cuando se justifique y con el consentimiento del Estado Parte, la investigación podrá incluir una visita a su territorio. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte interesado, junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas. En un plazo de seis meses después de recibir las conclusiones de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité, el Estado Parte interesado presentará sus propias observaciones al Comité. La*

*investigación será de carácter confidencial y en todas sus etapas se solicitará la colaboración del Estado Parte*<sup>351</sup>.

### **I.3 – MEDIDAS PROVISIONALES URGENTES**

De acuerdo con el artículo 4 del Protocolo Facultativo al Convenio, son admisibles medidas provisionales urgentes, a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación. Esas medidas podrán ser adoptadas por el Comité tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una conclusión sobre el fondo de ésta, y el ejercicio de esa facultad discrecional no implicará juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación.

Toda comunicación que el Comité reciba será llevada al conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, y que tendrá un plazo de seis meses para presentar explicaciones o declaraciones por escrito, en las que se aclare la cuestión y se indiquen las medidas correctivas que hubiere adoptado.

Las comunicaciones serán examinadas en sesiones privadas y el Comité llevará sus sugerencias y recomendaciones, si las hubiere, al Estado Parte interesado y al comunicante.

### **I – COMITÉ CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS**

Es el Comité de más reciente creación y funcionamiento de Naciones Unidas. Su primera reunión se realizó el 13 de abril de 2011. Su primera sesión se encuentra prevista para 8 a 11 de noviembre de 2011.

El Comité es el órgano creado para hacer cumplir las obligaciones de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, y que objetiva a prevenir aquel delito y a luchar contra la impunidad en lo que respecta a la

---

<sup>351</sup> Conforme artículo 6, del Protocolo.

desaparición forzada, más allá de asegurar el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación.

De acuerdo con el artículo 2 de la Convención “*se entenderá por ‘desaparición forzada’ el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley*”.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas, de acuerdo con su artículo 26, es integrado por diez expertos, con representación equilibrada de género, elegidos por cuatro años, pudiendo ser reelegidos una vez, que tengan experiencia jurídica pertinente, exigiéndose gran integridad moral, reconocida competencia en materia de derechos humanos, independencia, y que ejercerán sus funciones a título personal y con total imparcialidad. La elección de los miembros se realiza por los Estados-Partes teniendo en cuenta una distribución geográfica equitativa.

Las formas de protección junto al Comité son el Informe, la Comunicación Individual, la Comunicación Interestatal, la Petición de Acción Urgente y la Visita.

En casos de práctica de desaparición forzada de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado-Parte, el Comité, en carácter urgente, podrá llevar la cuestión a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de su Secretario General<sup>352</sup>.

A los efectos de la Convención se entiende por "víctima"<sup>353</sup> la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada, siendo que la competencia del Comité se

---

<sup>352</sup> Artículo 34 de la Convención.

<sup>353</sup> Artículo 24 de la Convención.

limitará a las violaciones que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Convención para el Estado-Parte<sup>354</sup>.

Como resultado de sus actividades el Comité debe presentar un Informe Anual a los Estados-Partes y a la Asamblea General.

### **i.1 – INFORME ESTATAL**

El Informe Estatal se encuentra previsto en el artículo 29 de la Convención, y por la cual los Estados-Partes comunican las medidas que hayan adoptado para cumplir con las obligaciones que han asumido. El Informe debe presentarse hasta 2 años desde la entrada en vigor de la Convención para el Estado.

Los Informes son presentados por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas y que los pondrá a disposición de todos los Estados.

Tras examen, el Comité emite Comentarios, Observaciones o Recomendaciones.

### **i.2 – COMUNICACIÓN INDIVIDUAL**

Es la medida disponible a cualquier persona víctima de violaciones de las disposiciones de la Convención, practicada por Estado-parte. Para su aceptación es necesario que el Estado tenga declarado reconocimiento a la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones.

La Comunicación Individual será inadmisibile cuando sea anónima, constituya un abuso del derecho a presentar tales comunicaciones o es incompatible con las disposiciones de la presente Convención, cuando la misma cuestión está siendo tratada en otra instancia internacional de examen o arreglo de la misma naturaleza, o si los recursos internos efectivos disponibles no han sido agotados. Esta regla no se

---

<sup>354</sup> Artículo 35 de la Convención.

aplica si los procedimientos de recurso exceden plazos razonables, de conformidad con el artículo 31 de la Convención.

Cuando admitida, cabrá al Comité solicitar al Estado-Parte que presente sus observaciones y comentarios, y que serán llevados al conocimiento del autor de la Comunicación.

Las Comunicaciones Individuales serán examinadas en sesión a puerta cerrada del Comité. En casos urgentes y con miras a evitar posibles daños irreparables a la víctima, el Comité podrá adoptar medidas cautelares, no implicando tal providencia en alguno juicio sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la Comunicación.

### **j.3 – COMUNICACIÓN INTERESTATAL**

Es la comunicación de un Estado-Parte al Comité dando cuenta de que otro Estado-Parte no cumple las obligaciones que le impone la Convención y está prevista en el artículo 32 de la Convención.

Para ser acepta la Comunicación es necesario que el Estado-Parte reconozca la competencia del Comité para recibir y examinar aquella medida.

### **j.4 – PETICIÓN DE ACCIÓN URGENTE**

Medida prevista por el artículo 30 de la Convención, es para los casos en que se objetiva la localización y búsqueda de una persona desaparecida, caso en que el Comité solicitará al Estado-Parte que proporcione información sobre la situación de la persona.

Con la información proporcionada por el Estado-Parte el Comité podrá transmitirle sus recomendaciones, incluso para que adopte todas las medidas necesarias, hasta mismo medidas cautelares, para localizar y proteger a la persona. El Comité informará a la persona que presentó la petición de acción urgente sobre

sus recomendaciones y sobre las informaciones transmitidas por el Estado-Parte cuando éstas estén disponibles.

El Comité implementará esfuerzos para colaborar con el Estado-Parte mientras la suerte de la persona desaparecida no haya sido esclarecida, manteniendo informado al autor de la petición.

Para ser admitida, la petición no debe carecer manifiestamente de fundamento, no puede ser un abuso del derecho a presentar tales peticiones, hay que tener sido presentada previamente y en la forma debida a los órganos competentes del Estado-Parte interesado, tales como las autoridades encargadas de efectuar las investigaciones, cuando tal posibilidad existe, no debe ser incompatible con las disposiciones de esta Convención y no debe ser tratada en otra instancia internacional de examen o arreglo de la misma naturaleza.

## **i.5 – VISITA**

Es la providencia<sup>355</sup> adoptada por el Comité acaso recibe información fidedigna que revele violaciones graves, por el Estado-Parte, de las disposiciones de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

La Visita se realiza por uno o más miembros del Comité, tras la previa autorización del Estado-Parte, y como resultado se producen Observaciones o Recomendaciones llevadas al conocimiento del Estado-Parte.

## **C – ARMONIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE TRABAJO DE LOS COMITÉS**

Con el objetivo de se alcanzar una aplicación efectiva de las labores de los Comités de Derechos Humanos del sistema de tratados y también con el objetivo de que todos los órganos tuviesen criterios más coherentes e integrados para racionalizar sus tareas y prestar asistencia a los Estados Partes, con la utilización de

---

<sup>355</sup> Prevista en el artículo 33, de la Convención.

un mecanismo que proporcionase el intercambio de información, en relación a los métodos de trabajo desarrollado por cada órgano fue creado el Grupo de Trabajo sobre la armonización de los métodos de trabajo de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, cabiéndole *“formular recomendaciones sobre aspectos específicos en que tal vez conviniera adoptar un criterio común, como las prácticas relativas a las listas de cuestiones, la preparación de informes sobre temas específicos, los relatores para los países, la armonización de las directrices y la terminología propia de cada órgano, los procedimientos de seguimiento y los grupos de trabajo anteriores a los períodos de sesiones, la formulación de observaciones generales y recomendaciones, el examen de la situación de un Estado Parte en ausencia de un informe. El mecanismo también podría reflexionar sobre la relación que había de establecerse entre los órganos de tratados y el Consejo de Derechos Humanos, así como con la nueva estructura encargada de las cuestiones de género”*<sup>356</sup>.

De igual modo también se han adoptado nuevas prácticas en la conducción de los trabajos de los Comités, como la primera reunión de sus Presidentes que se ha realizado en Bruselas, y no en Ginebra, con la participación de órganos del Consejo de Europa y de la Unión Europea, *“con miras a acercar los órganos de tratados al ámbito de la ejecución y dar a conocer, en los ámbitos regionales, su labor, a fin de reforzar los vínculos y potenciar la sinergia entre los mecanismos y las instituciones regionales e internacionales de derechos humanos”*<sup>357</sup>.

Esas, en líneas generales, son algunas observaciones cuanto a las principales características de los mecanismos de protección de derechos humanos en el seno del sistema convencional mundial.

En secuencia se pasa a tratar de cada uno de los órganos que componen el sistema de tratados internacionales en el seno de las Naciones Unidas.

---

<sup>356</sup> En HRI/MC/2007/2/Add.1, del 1º de junio de 2007, páginas 3 y 4.

<sup>357</sup> Conforme consta del documento de la Asamblea General, A/65/190, página 4.

## **D – RELACIÓN DE LOS COMITÉS CON EL SISTEMA DE RELADORES ESPECIALES**

Con el intento de mejorar las labores de tutela de los derechos humanos, optimizando sus tareas y buscando mejores resultados, los órganos del sistema de Comités han buscado una mayor aproximación con diversos otros órganos del sistema internacional de protección de derechos humanos, sea de nivel universal o regional.

En esta cooperación se han realizado reuniones de los Presidentes y los miembros de los órganos de Tratados con los Relatores y Representantes Especiales, Expertos y Presidentes de los Grupos de Trabajo de los procedimientos especiales<sup>358</sup>.

En este relacionamiento, los Comités, por intermedio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, obtienen los Informes de los Relatores Especiales temáticos o geográficos, como ocurre, por ejemplo, en la estrecha colaboración del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura con el Comité contra la Tortura, incluso realizando aquellos órganos una reunión oficial anual<sup>359</sup>.

Otro ejemplo es la relación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos, con invitaciones para que estos hagan uso de la palabra en las reuniones y participen de las deliberaciones del Comité. Hay casos en que se ha establecido una relación especialmente estrecha, como con los relatores especiales sobre el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la educación y los derechos de los indígenas, la Experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento, así como con los

---

<sup>358</sup> Véase, por ejemplo, la 11ª reunión conjunta de los Comités y órganos de tratados de derechos humanos, y la 22ª reunión de los Presidentes de los órganos de tratado, realizadas en Ginebra del 28 a 30 de junio de 2010 y del 1º a 2 de julio de 2010, respectivamente.

<sup>359</sup> Las informaciones contenidas en este tópico se encuentran en el documento HRI/MC/2009/4, del 24 de junio de 2009, disponible en la página de internet <[http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/9th/HRI-MC-2009-4\\_sp.doc](http://www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/9th/HRI-MC-2009-4_sp.doc)> [Consulta: 14 de noviembre de 2009]



titulares de mandatos de los procedimientos especiales respecto de los derechos económicos, sociales y culturales.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha intercambiado información en numerosas ocasiones con la antigua Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y ha asistido a todos los períodos de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la aplicación efectiva de la Declaración y Programa de Acción de Durban. También ha mantenido extensos diálogos con varios titulares de mandatos, incluidos los Relatores Especiales sobre el racismo, una vivienda adecuada, la salud y cuestiones relativas a las minorías, más allá de cooperar con el Asesor Especial del Secretario General sobre la prevención del genocidio.

Hay una estrecha colaboración también del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer con la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, con el Relator Especial sobre el derecho a la salud, con los Relatores Especiales sobre la violencia contra la mujer y sobre el derecho a la salud, así como con el Experto independiente encargado de examinar la situación de los derechos humanos en Haití.

De igual modo es la colaboración entre el Comité de los Derechos del Niño y el Experto independiente nombrado por el Secretario General para dirigir un estudio a fondo de la cuestión de la violencia contra los niños. A su vez, en el ámbito del Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, se registra la particular colaboración con el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes.

Con relación al Consejo de Derechos Humanos, hay estudios con vistas a establecer una cooperación eficaz del Consejo con los órganos del sistema de tratados, con el fortalecimiento de los vínculos institucionales entre ellos, hasta porque los trabajos de los órganos creados en virtud de tratados y el mecanismo de

examen periódico universal, del Consejo, aunque se traten de procesos distintos, debían ser complementarios y reforzarse<sup>360</sup>.

## **2 – TUTELA JURISDICCIONAL**

Tiene por objetivo la solución contenciosa de conflictos, y se encuentra sometida a la observancia de los principios propios de la actividad judicial, como el derecho de petición, la amplia defensa, el contradictorio, y la fuerza vinculante de sus decisiones con relación a las partes en litigio.

En el escenario mundial se encuentra ejercida por el Tribunal Penal Internacional.

### **A – TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL - TPI**

El Tribunal Penal Internacional, o Corte Penal Internacional, se traduce en la primera iniciativa de creación de una instancia permanente de jurisdicción internacional penal, de alcance mundial<sup>361</sup>, para juzgar las personas responsables por crímenes de genocidio<sup>362</sup>, lesa-humanidad<sup>363</sup>, guerra y de agresión. Su creación se da por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios, reunida en Roma, entre el 15 de junio y el 17 de julio de 1998, y por la cual se adoptó el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, aprobado por ciento veinte países, de los ciento sesenta inscritos, con siete en contra y veintiuna en abstención<sup>364</sup>, siendo que 12 no participaron. Estuvieron presentes en la referida Conferencia 133 organizaciones no-

---

<sup>360</sup> Conforme registro contenido A/64/276, del 10 de agosto de 2009, de la Asamblea General de Naciones Unidas.

<sup>361</sup> Se dijo “mundial” y no “universal” pues, como se ha definido en el capítulo “Justicia Penal Universal”, ítem I.2.B de esta 2ª Parte de la tesis, la jurisdicción universal es extra-convencional, al tiempo que el Tribunal Penal Internacional es de naturaleza convencional, pues depende de la adhesión de los países.

<sup>362</sup> El artículo 6º del Estatuto define los actos que se consideran crímenes de genocidio.

<sup>363</sup> El artículo 7º del Estatuto define los actos que se consideran como crímenes contra la humanidad.

<sup>364</sup> (...) *aunque la votación no fue registrada, consta que votaron en contra los Estados Unidos de América – principales protagonistas de los debates –, China – notablemente reservada –, la India, junto a Irak, Israel, Libia y Sudán. Figuran entre los que se abstuvieron México, Pakistán, Turquía y la mayoría de los Estados árabes*, conforme destacado por Truyol y Serra, A., *Los Derechos Humanos*, op. cit., pp. 100-101.

gubernamentales. Su creación se torna una realidad con su funcionamiento a partir de 1º de julio de 2002<sup>365</sup>.

Su sede es en La Haya, y sus atribuciones se desarrollan por la Presidencia, una Sección de Apelaciones, una Sección de Primera Instancia, una Sección de Cuestiones Preliminares y la Fiscalía<sup>366</sup>.

Es un tribunal internacional y no un tribunal extranjero, y en esta jurisdicción internacional se tiene la extensión de la propia jurisdicción de los Estados, de su justicia nacional, siendo así una jurisdicción de la cual el Estado participa. De ahí que la competencia del TPI se establece en función del principio de la complementariedad, que significa justificar su actuación cuando no actúa la jurisdicción nacional, en los casos de los crímenes internacionales, así considerados los crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa-humanidad, estos identificados como el asesinato, el exterminio, la violación, la esclavitud sexual, la desaparición de personas a la fuerza y el crimen de apartheid, cuando cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto, es decir, el 1º de julio de 2002, conforme dispone su Estatuto.

Esta complementariedad justifica la adopción del instituto de la “entrega” del acusado, y no de su “extradición”, puesto que, en el Tribunal Penal Internacional se tiene parcela de la soberanía del propio Estado.

Su competencia alcanza a todos los individuos del mundo, independientemente de que los Estados de los que sean nacionales hayan o no ratificado su Estatuto, puesto que todos los Estados del mundo están obligados a juzgar, por sus tribunales nacionales, los crímenes humanitarios.

---

<sup>365</sup> Hasta septiembre de 2011, 139 Estados firmaron el Tratado de Roma, y 118 también lo ratificaron, de acuerdo con los artículos 125 y 126, del Estatuto. El último país ha sido Maldivas, el 21 de septiembre de 2011.

<sup>366</sup> Es Fiscal, Luis Moreno Ocampo, de Argentina; ha sido elegido el 21 de abril de 2003.

Tras su instalación en julio de 2002, 118<sup>367</sup> países son Estados-parte del Estatuto de Roma y sometidos a las reglas del Tribunal Penal Internacional.

La oportunidad temporal en que se crea e instala el TPI es bien retratada en los datos presentados por la ONU sobre las violaciones criminales contra los derechos humanos:“(…)Los conflictos armados, no ya entre naciones sino entre facciones opuestas dentro del mismo Estado, son en la actualidad una de las amenazas más graves a la paz y la seguridad internacionales. Aunque se trata de situaciones de violencia interna, éstas a menudo trascienden las fronteras nacionales, poniendo en peligro la seguridad de otros Estados y provocando complejas emergencias de índole humanitaria. Los atropellos de los derechos humanos que imperan en los conflictos internos se cuentan hoy entre los más atroces del mundo. En 1996 había 19 situaciones de violencia interna en el mundo en las que 1.000 o más personas habían resultado muertas. Esos conflictos, denominados ‘conflictos de gran intensidad’ provocaron acumulativamente entre 6,5 y 8,5 millones de muertos. Ese mismo año hubo también 40 ‘conflictos de poca intensidad’, cada uno de los cuales causó entre 100 y 1.000 muertos. A esas cifras habría que sumar otros 2 millones de muertos, si se tienen en cuenta las situaciones de violencia interna que habían disminuido en intensidad en 1996.

*La cantidad de muertos apenas da una idea del sufrimiento, desplazamiento y devastación enormes causados por los conflictos. Los ataques contra el derecho*

---

<sup>367</sup> Datos de septiembre de 2011. Los Estados-partes son, en orden alfabética, en inglés: Afganistán, Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Belgium, Belize, Benin, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Canada, Central African Republic, Chad, Chile, Colombia, Comoros, Congo, Cook Islands, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Estonia, Fiji, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guinea, Guyana, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Jordan, Kenya, Latvia, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nauru, Netherlands, New Zealand, Níger, Nigeria, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Suriname, Sweden, Switzerland, Tajikistan, The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, United Kingdom, United Republic of Tanzania, Uruguay, Venezuela y Zambia. De conformidad con el sitio oficial del TPI, <<http://www.icc-cpi.int/menus/asp/states%20parties/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute?lan=en-GB>> [Consulta: 23 de septiembre de 2011]

*fundamental a la vida son generalizados: matanzas, ataques indiscriminados contra civiles, ejecuciones de prisioneros, poblaciones enteras que se mueren de hambre... La tortura es común en los conflictos internos, igual que las medidas para restringir la libertad de circulación (reasentamientos forzados, expulsiones en masa y derogación del derecho a solicitar asilo o del derecho de la persona de regresar a su hogar). Las mujeres y niñas son violadas por los soldados y obligadas a prostituirse y se secuestra a los niños para convertirlos en soldados. Decenas de miles de personas detenidas en conexión con los conflictos "desaparecen" todos los años, generalmente asesinadas y enterradas en secreto, y sus familias atormentadas no conocerán jamás la suerte que han corrido. Miles de otras son encarceladas arbitrariamente sin ser nunca enjuiciadas o, de serlo, sometidas a procesos judiciales extraordinariamente injustos. Se destruyen deliberadamente hogares, escuelas y hospitales. Se ataca a los convoyes de socorro, que tratan de suministrar asistencia humanitaria a los civiles. (...)"<sup>368</sup>.*

La creación del Tribunal Penal Internacional demuestra así que resulta efectivamente conquistada y concretizada la relevante aspiración de la comunidad internacional de evitar la impunidad de los crímenes contra la humanidad, en la medida en que tanto por la jurisdicción penal universal, con los tribunales penales provisorios<sup>369</sup>, como por la "justicia universal", de enjuiciamiento por cierto país de crimen de grave violación a los derechos humanos practicado en otro país por criminoso que no es su ciudadano<sup>370</sup>, las dificultades y restricciones encontradas impedían sus actuaciones satisfactorias.

Por inaugurar una nueva fase de protección de los individuos de todo el mundo, indistintamente, el Tribunal Penal Internacional ciertamente se afirma como un marco histórico singular – habrá "*un antes y un después del Estatuto de Roma*"<sup>371</sup> –, caracterizando los nuevos tiempos como el milenio de la seguridad, es decir, el milenio donde se concretiza la seguridad en no ser asesinado, torturado,

---

<sup>368</sup> Informaciones disponibles en web: <www.un.org> [Consulta: 26 de mayo de 2010] por la publicación "*Human Righth Today*".

<sup>369</sup> Véase el ítem I.2.B de esta parte de la tesis.

<sup>370</sup> Como el "caso Pinochet" juzgado por España.

<sup>371</sup> DELGADO, I., L. y MARTÍNEZ, M. M. M., *La Corte Penal Internacional – Justicia versus Impunidad*, Ariel Derecho, Barcelona, 2001, p. 293.

violado, agredido. En suma, seguridad de vivir dignamente, en eso se incluye la seguridad de la pronta respuesta mundial a las violaciones a los derechos humanos, marcando un paso definitivo a la consagración del individuo como sujeto y principal protagonista del Derecho Internacional, y que hasta entonces tenía a los Estados como principales actores.

Como ha concluido Koffi Annan, ex Secretario General de las Naciones Unidas, *“hemos dado un paso de gigante en la vía del respeto universal de los derechos del hombre y del Estado de derecho. La Corte es una prenda de esperanza para las generaciones futuras, a las que está llamada a proteger contra los crímenes espantosos de que sus antepasados fueron víctimas”*<sup>372</sup>.

Todos los Estados, tengan o no ratificado el Estatuto, están obligados a juzgar, por sus tribunales nacionales, los crímenes humanitarios. La no-ratificación genera efectos sólo en desobligar dichos Estados en cooperar con el Tribunal Penal Internacional, pues en ellos no puede el TPI ejercer atribuciones y funciones, de acuerdo con el artículo 4.2 del Estatuto, incluso no estando obligados a atender a la detención y entrega de un acusado, como dispone el artículo 89.1.

A su vez estos Estados tampoco pueden provocar directamente la competencia del TPI, como está previsto en el artículo 13 “a” y 14, sólo pudiendo hacerlo mediante información al Fiscal, en conformidad con los artículos 13 c, y 15 del Estatuto.

Más allá de eso, la no-ratificación no genera efectos excluyentes a los ciudadanos del Estado<sup>373</sup>, puesto que éstos estarán siempre sometidos a la jurisdicción de aquel Tribunal Internacional, pudiendo ser perseguidos donde quiera

---

<sup>372</sup> Conforme destaca ANTONIO TRUYOL Y SERRA, op. cit., p. 104.

<sup>373</sup> El Consejo de Seguridad, por iniciativa de Estados Unidos, ha aprobado la Resolución 1422, de 12 de julio de 2002, por la cual se pretende conferir impunidad frente a toda investigación o enjuiciamiento llevado a cabo por el Tribunal Penal Internacional contra ciudadanos de países que no hayan ratificado el Estatuto de Roma, cuando estas personas hubieran participado de operaciones establecidas o autorizadas por Naciones Unidas.

que se encuentren<sup>374</sup>, y si el Estado no-parte no se dispone a juzgar al delincuente de los crímenes internacionales, ni a extraditarlo o entregarlo al Tribunal Penal Internacional, estará incumpliendo un deber internacional, y ciertamente sujeto a soportar las presiones internacionales. En suma, los Estados no-parte “sólo podrán evitar que la Corte procese a sus nacionales enjuiciándolos ellos”<sup>375</sup>.

Sobre este punto, es obligado analizar que hay imprecisión en el artículo 89.2 al referirse que el “Estado” cumplirá la solicitud de entrega, cuando, en realidad, esta obligación se encuentra restringida al “Estado-Parte”, puesto que sólo este está obligado a atender peticiones del Tribunal Penal Internacional. Si no fuera así, el Estatuto estaría imponiendo el cumplimiento a un Estado que no es parte.

Como requisitos de admisibilidad de una demanda junto al Tribunal Penal Internacional se exige que la violación criminal tenga sido practicada posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto, el 1º de julio de 2002, (artículo 126 del Estatuto), y, de conformidad con el artículo 17, que el asunto no “sea objeto de una investigación o enjuiciamiento en el Estado que tiene jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo; que el asunto no haya sido objeto de investigación por el Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo; que la persona de que se trate no “haya sido ya enjuiciada por la conducta a que se refiere la denuncia”; y que el asunto “sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte”.

---

<sup>374</sup> Para evitar la persecución de sus ciudadanos Estados Unidos ha adoptado el American Servicemembers' Protection Act, ASPA (Ley de Protección de Miembros Americanos de Servicio) que contiene disposiciones para restringir la cooperación de EEUU con países signatarios del TPI. Por el ASPA, Estados Unidos pasó a firmar “Acuerdos Bilaterales de Inmunidad-ABI's” con otros países, Estados-parte o no del TPI, con base en el artículo 98 del Estatuto de Roma, y que establecen que los gobiernos no entregarán ni trasladarán a ciudadanos estadounidenses al TPI si este lo solicita, aunque Estados Unidos deje de investigar o enjuiciar a dichas personas en sus tribunales, mismo si existentes pruebas suficientes. Hasta marzo de 2011, se han firmado 102 acuerdos bilaterales, de conformidad con la noticia veiculada en la web <<http://www.nacion.com/2011-03-14/Investigacion/NotasSecundarias/Investigacion2711040.aspx>> [Consulta: 30 de abril de 2011].

<sup>375</sup> DELGADO, I. L. y MARTINEZ, M. M. M., *La Corte Penal Internacional – Justicia versus Impunidad*, op. cit., p. 298..

En 2004 el TPI se ha encargado del primer caso sometido a su jurisdicción, relacionado a la situación en la República Democrática del Congo<sup>376</sup>. Desde entonces, son otros 6 casos más que están bajo la jurisdicción del Tribunal<sup>377</sup>, y relacionados a Uganda<sup>378</sup>, a la República Centro-Africana<sup>379</sup>, a Sudán<sup>380</sup>, Kenya<sup>381</sup>, Costa del Marfíl<sup>382</sup> y Libia<sup>383</sup>.

---

<sup>376</sup> El caso de Congo esta relacionado a atrocidades cometidas a partir de octubre de 2002 en la provincia nororiental de Ituri donde grupos de rebeldes masacraron a más de un centenar de civiles, cometieron actos de canibalismo y violaron a decenas de mujeres. Las investigaciones han sido anunciadas en 23 de junio de 2004, con el primer enjuiciamiento del TPI y que ha sido contra Thomas Lubanga Dyilo, Presidente de la milicia Unión Patriotas Congolese, a quién se le imputan los cargos de reclutar crianzas durante la guerra civil de Congo. Thomaz Lubanga es también el primer acusado a ser entregado al TPI. El Fiscal del TPI ha presentado cargos también contra Germain Katanga

<sup>377</sup> En datos de septiembre de 2011: ICC-01/04 Situation in Democratic Republic of the Congo: ICC-01/04-01/06-Case The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dilo, ICC-01/04-01/07-Case The Prosecutor v. Germain Kananga; ICC-02/04 Situation in Uganda: ICC-02/04-01/05-Case The Prosecutor v. Joseph Pony, Vincent Otti, Okot Odhiambo and Dominic Ongwen; ICC-01/05 Situation in Central African Republic; ICC-02/05 Situation in Darfur, Sudan: ICC-02/05-01/07-Case the Prosecutor v. Ahmad Muhammad Harun ("Ahmad Harun") and Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman ("Ali Kushayb"); ICC-01/09-01/11 Pre-Trial, Case The Prosecutor v. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang ; ICC-01/11-01/11 Pre-Trial, Case The Prosecutor v. Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi ; ICC-02/11 Pre-Trial, Situation in the Republic of Côte d'Ivoire. Datos disponibles en el sitio oficial del TPI, en web: <<http://www.icc-cpi.int/Menu/ICC/Situations+and+Cases/Situations/>> [Consulta: 22 de septiembre de 2011].

<sup>378</sup> Las investigaciones en Uganda se han anunciado en 29 de julio de 2004, y se relacionan a las graves violaciones criminales cometidas por el Ejército de Liberación del Señor (LRA) de Uganda, desde 1º de julio de 2002, con sus líderes siendo acusados de miles de asesinatos, torturas y del secuestro de niños y niñas para convertirlos en guerrilleros y esclavas sexuales, respectivamente, crímenes que vienen siendo cometidos hace más de dos décadas. Son acusados los líderes conocidos como "señores de la guerra", y que ostentan los máximos rangos en el LRA: Joseph Kony, su líder y principal nombre de la lista, Vincent Otti, considerado su mano derecha, y dos de sus principales comandantes, Okot Odhiambo y Dominic Ongwen. Contra ellos, juntamente con Raska Lukwiya han sido emitidas las primeras órdenes de detención del Tribunal Penal Internacional.

<sup>379</sup> El propio Gobierno de la República Centro-Africana ha remitido el caso ante el fiscal general del TPI, que decidió, en mayo de 2007, abrir investigaciones por crímenes graves como homicidios, violaciones y saqueos, cometidos en la República Centroafricana (RCA) entre 2002 y 2003, en el contexto de los enfrentamientos armados entre el Gobierno y grupos rebeldes. En el caso de la República Centro-Africana la violencia sexual parece haber constituido un componente central del conflicto, y se ha identificado al menos a 600 víctimas de violaciones. Se trata de la primera vez que el TPI abre una investigación en la que las acusaciones por crímenes sexuales superan ampliamente a las de asesinatos. Gran parte de los crímenes fueron cometidos en los alrededores de la capital, Bangui, pero también en zonas más alejadas. Para el enjuiciamiento de los culpables, la propia Corte de Casación concluyó que la Justicia centroafricana no tenía medios para iniciar un proceso contra el ex presidente Patassé, el ex vicepresidente de la República Democrática del Congo (RDC) Jean-Pierre Bemba, el ex jefe de la guardia presidencial de Patassé, Abdoulaye Miskine, el chófer del ex presidente Victore Ndoubabé y el ex policía francés Paul Barril, principales acusados de la represión posterior al intento de golpe de Estado.

<sup>380</sup> El TPI inició en junio de 2005, a petición del Consejo de Seguridad de la ONU, una investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Darfur, por crímenes de guerra y lesa humanidad. Desde que estallara el conflicto en febrero de 2003, unas 200.000 personas han muerto y dos millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares y a alojarse en campos de refugiados en Sudán y Chad, en lo que, según alertó la ONU, constituye uno de los peores desastres humanitarios. Los acusados son el ex viceministro del Interior de Sudán Ahmad Mohamed Harun, por reclutar y buscar fondos para la milicia janjawid y de incitar a los ataques de este grupo pro gubernamental, y el líder de



### **III – REGIONAL/CONTINENTAL**

El nuevo sistema de relaciones entre los Estados está marcado por el proceso de integración o cooperación regional, agregando países de un mismo continente, evolucionado del modelo de la lógica de paz de Westphalia, de 1648<sup>384</sup>, que pugnaba por la coexistencia de Estados independientes y en la plenitud de múltiples soberanías, para una nueva realidad de cooperación e integración, donde las fronteras no son marcos de distanciamiento de las naciones, sino de aproximación, constituyéndose las acciones de política de desarrollo y seguridad comunes o de expansión de los flujos de comercio e inversiones económicas en importante instrumento de promoción en el fortalecimiento de los países miembros, y bien-estar de sus habitantes.

Por este proceso de integración o cooperación se va consolidando en las relaciones internacionales una época caracterizada ya no por la noción absoluta de soberanía, sino de una soberanía compartida o de soberanía hermanada, con enfoque a la noción de solidaridad entre las naciones y los pueblos.

Estos procesos regionales de integración/cooperación surgen con una dimensión estrictamente política o económica, sin ninguna preocupación por otros temas que no sean los específicamente vinculados a las vertientes de aquellas

---

la milicia janjawid, Alí Kushayb, por ordenar a sus tropas cometer violaciones, agresiones sexuales y torturas contra civiles. Los acusados se encuentran con órdenes de arresto emitidas por la CPI.

<sup>381</sup> Son acusados William Samoei Ruto, ex-ministro de Educación, Ciencia e Tecnología, y Henry Kiprono Kosgey, miembro del partido ODM, por crímenes contra la humanidad, entre ellos, asesinatos e persecuciones a la población civil. Por los mismos crímenes también será juzgado Joshua Arap Sang, que trabajaba en la radio Kass FM, y que usaba su programa para incitar la violencia entre diferentes grupos. Los hechos ocurrieron entre 2007 y 2008, y en cerca de dos meses unas 1.100 personas perdieron la vida y hubo 600.000 refugiados. Las violaciones se contaron a cientos y al menos 100.000 hogares fueron destruidos en seis de las ocho provincias de Kenia.

<sup>382</sup> La situación de Costa del Marfil está en fase de investigación a pedido del Presidente electo, Alassane Ouattara, **y que** trata de las matanzas en su país desde el mes de noviembre de 2010, cuando comenzaron los enfrentamientos posteriores a las elecciones presidenciales.

<sup>383</sup> El Fiscal del TPI, Luis Moreno Ocampo, pidió el 16 de mayo de 2011 el encarcelamiento del dictador Muammar Gaddafi, más allá de su hijo Seif al Islam y del Jefe de los Servicios de Inteligencia de su régimen, Abdallah Al Senusi, por crímenes contra la humanidad. Entre las acusaciones están los ataques a civiles en vías públicas.

<sup>384</sup> Con los instrumentos de la “paz de Westfalia” - Tratado de Osnabruck, de 24 de octubre de 1648, y el Tratado de Munster, de 30 de enero y 24 de octubre de 1648 – se reconoce las principales líneas de la evolución de la Sociedad Internacional y del Derecho Internacional “clásico”, conforme registra FERNANDO M. MARIÑO MENÉNDEZ, *Derecho Internacional Público-Parte General*, op. cit., p. 24.

cuestiones. No obstante, la natural “*profundización política de dicho proceso, y sobre todo, la ampliación progresiva de los ámbitos materiales*”<sup>385</sup>, resulta, consecuentemente, en la necesidad de también ingresar en el tema de los derechos humanos, como se revela, por ejemplo, en el caso comunitario Europeo, con el Acta Única Europea de 1986, que en su preámbulo consigna la protección a los derechos humanos como fundamento ideológico del sistema de integración, y que se culmina con el Tratado de Lisboa, en vigor en 2009, pasando por la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, de 1989, por la Convención Europea de Derechos Humanos adoptada por el Tratado de la Unión Europea en 1992, y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 2000.

Así, en esta perspectiva de una nueva percepción de las fronteras territoriales, y aunque sus objetivos sean prioritariamente políticos o económicos-comerciales, se pasa a tener la oportunidad para la promoción más intensa de los derechos humanos, como si esta nueva práctica se debiera “*convertir en preocupación prioritaria de la política exterior de todos los regímenes justos y decentes*”, como ha expresado JOHN RAWLS<sup>386</sup>.

Y, si a primera vista no se admite la relación entre los objetivos predominantemente políticos o económico-comerciales de los procesos de agrupamiento regionales – integración o cooperación – con los derechos humanos, la misma viene marcada por su aspecto dinámico, ya que a cada momento se observan medidas que la concretan más, muchas veces alcanzando los derechos humanos un nivel de importancia tan relevante como los propios asuntos políticos y económicos que inicialmente justifican las uniones regionales.

En este contexto, más allá de la estructura universal y mundial, los derechos humanos también pasan a ser tutelados por estructuras de protección regionales, generalmente identificados por agrupamientos predominantemente geográficos, en razón de cierto continente, y que buscan imprimir una técnica de reconocimiento a

---

<sup>385</sup> Según expresiones de MANUEL DIEZ DE VELASCO, *Instituciones de Derecho Internacional Público*, op. cit., p. 580.

<sup>386</sup> RAWLS, J., *El derecho de las gentes ...*, op. cit., p. 61.

dichos derechos basada en sus características regionales propias y específicas, principalmente en vista de sus rasgos políticos y culturales. Y, como ejemplo de las iniciativas regionales/continentales de integración y cooperación, ya se ha concretizado la formación del Consejo de Europa, de la Unión Europea-UE, de la Organización de los Estados Americanos-OEA y de la Unión Africana, difundiéndose también, en algunos casos, los correspondientes mecanismos de control y protección de los derechos humanos, con la creación de órganos regionales respectivos, y con su actuación vinculada a los países que forman estos determinados sistemas regionales.

Esta preocupación regional en cuanto a los derechos humanos no había tenido ninguna manifestación motivadora de la ONU hasta el año 1977, cuando por la Resolución 32/127, 1977, de la Asamblea General, pasó a incentivar los Estados en áreas en que los acuerdos regionales sobre el tema aún no existían, para que estableciesen en sus respectivas regiones un sustentable aparato regional para la promoción y protección de los derechos humanos<sup>387</sup>.

Así es que, entre las cinco regiones continentales del mundo, este sistema de protección se ha implementado y desarrollado con relevancia en Europa y América, y con algún intento en el continente africano, no pudiéndose considerar existente igual modelo regional en Asia y Oceanía.

En todo caso, en este tema, no se puede olvidar las precisas advertencias de BRUNO DE PODESTÁ en el sentido de que las acciones intergubernamentales en cuestiones de derechos humanos, principalmente por su dimensión social, pueden servir sólo como mecanismo compensatorio de los daños y perjuicios que un proceso de integración regional puede traer, debiendo la sociedad estar atenta para no permitir que ese peso compensatorio sea insoportable<sup>388</sup>.

---

<sup>387</sup> Conforme observa HENRY STEINER, citado por PIOVESAN, F., *Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional*, op. cit., p. 218.

<sup>388</sup> Esa advertencia es mencionada por BRUNO DE PODESTÁ, en el texto "*A integração regional e as possibilidades de uma Agenda Social*", de noviembre de 2000, disponible en la web: <www.sela.org> [Consulta: 22 de noviembre de 2004].

En este escenario regional/continental en que hay necesidades de incorporación de los países por motivos geopolíticos, y principalmente en razón del contexto geográfico en que se sitúan, existe, también, agrupamiento envolviendo países de más de un continente, y que se identifican como agrupamiento intercontinental. A su vez, más ahora por limitaciones de identidad en aquellas razones geopolíticas, se tiene también la reunión de apenas algunos países de un mismo continente, identificándose esta situación como sub-regional, y que serán analizados en capítulos específicos.

A continuación, se pasa a presentar los principales rasgos de organización y funcionamiento del sistema regional.

## **1 – EUROPA**

En el ámbito europeo la tutela de los derechos humanos observa un gran desarrollo, siendo tema de destacado interés en las dos organizaciones regionales de Estados en aquel continente: el Consejo de Europa y la Unión Europea. En cada una de ellas se realizan actuaciones muy específicas en esta área, en algunos casos ocupando espacios de prioridad muy amplios, con una multitud de instrumentos normativos y órganos de protección, hecho que asegura una posición de destaque de este tema en el seno europeo con relación a los demás continentes.

No se puede olvidar que, más allá de los dos órganos mencionados, en Europa se tiene también acciones protectoras de los derechos humanos por la “Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa-OSCE”, organización intercontinental integrada por todos los países de Europa, por Estados Unidos, Canadá y algunos países de Asia, totalizando cincuenta y cinco países del hemisferio norte, y por la “Comunidad de Estados Independientes-CEI”, organización intergubernamental de cooperación, formada por doce países integrantes de la ex-Unión Soviética<sup>389</sup>, y cuyo

---

<sup>389</sup> Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguizistán, Moldavia, Federación Rusa, Repúblicas de Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania.

alcance de sus atribuciones en el campo de los derechos humanos son objeto de análisis en el capítulo específico<sup>390</sup>.

## **A – CONSEJO DE EUROPA**

El Consejo de Europa es la entidad política internacional de más alto grado en el nivel regional europeo, instituida en 1949 por el Estatuto de Londres, con el objetivo de establecer una cooperación de política general y jurídica entre sus países-miembros, integrado por 47 países europeos<sup>391</sup>. Su sede es en Estrasburgo, Francia. Para integrar el Consejo de Europa el país europeo debe observar a los principios y valores de democracia pluralista, del Estado de Derecho y del respeto de los derechos humanos.

En su estructura, se compone por el Comité de Ministros – su órgano político – la Asamblea Parlamentaria – órgano parlamentario – y por la Secretaria General – su órgano ejecutivo -.

El Comité de Ministros es integrado por los Ministros de Asuntos Exteriores de cada uno de los 47 países, con poder para concluir convenciones y acuerdos.

La Asamblea Parlamentaria es compuesta por 636 miembros – 318 titulares y 318 substitutes – que son parlamentares de los Estados-parte, distribuidos según la densidad de población de cada uno de los 47 países miembros. No tiene competencia para legislar y ejerce sus atribuciones para investigar, recomendar y aconsejar.

La Secretaria, como órgano ejecutivo, tiene atribuciones de coordinar las políticas y acciones del Consejo.

---

<sup>390</sup> Véase en esta tesis, OSCE en Segunda Parte, IV.1, y CEI en Segunda Parte, V.1.

<sup>391</sup> Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijón, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República da Macedonia, Rumania, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania. Está aún prevista la entrada de Yugoslavia. El último país a ingresar en el Consejo de Europa ha sido Montenegro, el 11 de mayo de 2007, Informaciones oficiales del Consejo de Europa se puede obtener en su sitio <[www.coe.int](http://www.coe.int)> [Consulta: 21 de septiembre de 2011].

## **a – LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL CONSEJO DE EUROPA**

Una de las finalidades más expresivas del Consejo de Europa es la vinculada a los derechos humanos. Para alcanzar sus objetivos, el Consejo ha definido “*la protección y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales*”, conforme consta en el preámbulo de su “Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”, de 1950, con entrada en vigor en 1953.

En esta labor de tutela específica de los derechos humanos en el ámbito del Consejo de Europa los principales instrumentos son el mencionado Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea. Hay, todavía, más de una centena de acuerdos, convenciones y protocolos en temas de derechos humanos<sup>392</sup>, de ellos se pudiendo destacar el “Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de penas o tratos inhumanos o degradantes”, en vigor desde el 1 de febrero de 1989; el “Convenio Europeo sobre el estatuto jurídico del trabajador migrante”, del 24 de noviembre de 1977; el “Convenio sobre protección de las personas sobre el tratamiento informatizado de datos de carácter personal”, del 18 de enero de 1981, en vigor desde el 1 de octubre de 1985, y el “Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales”, del 1 de febrero de 1995, en vigor desde el 1 de febrero de 1998.

El cartel de acción del Consejo de Europa en tema de derechos humanos incluye los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, la prevención de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, la protección de las minorías nacionales, la lucha contra el racismo y la intolerancia, la protección contra la violencia, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la transversalización de género, la protección de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, la promoción de los medios de comunicación independientes y pluralistas, la lucha contra todas las formas de la delincuencia, incluido el blanqueo de dinero, la

---

<sup>392</sup> De un universo de 211 tratados en diversos temas, en datos de 2010. Los textos de los Tratados están disponibles en <<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8&CL=ITA>>. [Consulta: 14 de diciembre de 2010].

corrupción y delincuencia, el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia penal, en particular con respecto a las prisiones, al derecho de familia, de nacionalidad, la protección de datos, y la promoción de la justicia independiente, eficiente.

La cualidad de país-miembro del Consejo de Europa impone la condición de ser parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, situación que asegura a cualquier persona que se halle bajo la jurisdicción del Estado perteneciente al Consejo que *“ha de gozar de los derechos humanos y libertades fundamentales”*, de acuerdo con el contenido del artículo 1 del Convenio.

Sobre este grado de importancia de los derechos humanos en el seno del Consejo de Europa, DIEZ DE VELASCO ha afirmado que *“la cooperación en el plano político, junto con la protección de los derechos humanos, son las finalidades esenciales del Consejo”*<sup>393</sup> y que *“si la obra del Consejo de Europa es importante como foro de discusión y entendimiento entre los Estados Europeos, entendida en un sentido muy amplio, la parte más meritoria y acabada de ella ha sido y es la definición y mecanismo de protección de los derechos humanos”*<sup>394</sup>.

Los principales órganos de defensa de derechos humanos son el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Secretario General del Consejo de Europa, el Comité de Ministros, el Comisario Europeo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, el Comité Europeo de Derechos Sociales, el Comité Europeo de Expertos Gubernamentales, y el Comité Asesor<sup>395</sup>.

---

<sup>393</sup> DIEZ DE VELASCO, M., *Las Organizaciones Internacionales*, op. cit., p. 472.

<sup>394</sup> Ídem, p. 473.

<sup>395</sup> Junto al Consejo de Europa funciona también el “Comité Europeo para la Cohesión Social”, creado en 1998, por los países reunidos en la Cumbre de Estrasburgo de 1997, y en la cual definieron la “cohesión social” como una de las prioridades políticas de la Organización. Trátase de un órgano intergubernamental, que actúa por una Dirección General junto a la Secretaría del Consejo de Europa, y que tiene por competencia, según las prioridades comunicadas por el Comité de Ministros, presentar propuestas de estrategia y cooperación en Europa y la promoción y supervisión de los derechos sociales reconocidos en el sistema de la Carta Social. Por no tratarse de un órgano de naturaleza específica en las actividades de control y garantía de los derechos humanos, a las cuales se delimita este estudio, dicho órgano no es presentado como parte integrante principal del presente trabajo.

## **a.1 – CONVENCIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS (CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES)**

La Convención Europea de Derechos Humanos, con nombre oficial de Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, también conocida como “Convenio de Roma”, entró en vigor el 3 de septiembre de 1953, tras ser editada el 4 de noviembre de 1950<sup>396</sup>.

Presenta en su contenido un extenso rol de derechos humanos y derechos fundamentales a ser protegidos, basados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, destacándose por establecer un amplio y eficaz mecanismo de control, tanto extra-jurisdiccional como jurisdiccional.

El Convenio contiene 59 artículos, divididos en tres títulos. El en primer título trata de los derechos y libertades, como el derecho a la vida, prohibición de la tortura, prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado, el derecho a la libertad y a la seguridad, derecho a un proceso equitativo, derecho al respeto a la anterioridad de la ley penal, al respeto de la vida privada y familiar, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la libertad de expresión, la libertad de reunión y de asociación, derecho a contraer matrimonio, a un recurso efectivo y de la prohibición de discriminación.

En el título primero trae todavía disposición sobre la posibilidad de derogación de las obligaciones previstas en el Convenio, en casos de guerra u otro peligro que amenace la vida de la nación, sobre la posibilidad de los Estados-miembros, en las actividades políticas de los extranjeros, imponer restricción a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, más allá de la prohibición a la discriminación, (artículo 16), disponiendo también sobre la prohibición del abuso de derecho (artículo 17).

---

<sup>396</sup> El Convenio fuera alterado/modificado por los Protocolos Adicionales 3, de mayo de 1963, en vigor el 21 de septiembre de 1970; 5, de 20 de enero de 1966, en vigor el 20 de diciembre de 1971; 8, de 19 de marzo de 1985, en vigor el 1 de enero de 1990; y 11, de 28 de noviembre de 1996, en vigor el 1 de noviembre de 1998.



El título segundo dispone sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el título tercero trata de disposiciones diversas.

Ha sido completado por catorce Protocolos adicionales<sup>397</sup>, en temas sobre el derecho de propiedad, de educación, elecciones libres, la prohibición de pena de muerte, incluso en tiempos de guerra, y que entran en vigor con la ratificación de un mínimo de 10 países.

## **a.2 – CARTA SOCIAL EUROPEA**

Más allá de los derechos civiles y políticos - o derechos a la libertad -, en el ámbito del Consejo de Europa se buscó acudir a los derechos económicos, sociales y culturales - derechos a la igualdad -, firmándose, para ello, la denominada Carta Social Europea<sup>398</sup>, o Carta de Turín, en esta ciudad el 18 de octubre de 1961<sup>399</sup>, y que entró en vigor en 26 de febrero de 1965<sup>400</sup>. La Carta fue complementada por el Protocolo Adicional del 5 de mayo de 1988, y revisada por los Protocolos del 21 de octubre de 1991 y 9 de noviembre de 1996, y que actualmente forman la “Carta Social Revisada”, que entró en vigor el 1 de julio de 1999<sup>401</sup>, por la cual se tiene el

<sup>397</sup> El último con entrada en vigor el 1 de junio de 2010.

<sup>398</sup> La adopción de la Carta Social Europea no significa la primera iniciativa para declarar el reconocimiento a los derechos económicos, sociales y culturales en el marco del Consejo de Europa. El propio Convenio Europeo de Derechos Humanos ya disponía al respecto, como registra el Prof. FRANCISCO GIMENEZ GARCÍA, como es el caso del “*derecho a la libre sindicalización, previsto en el artículo 11, así como el derecho de propiedad y el derecho a la educación regulados en el Protocolo Adicional de 20 de marzo de 1952*”, de acuerdo con el trabajo “El Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos: El Consejo de Europa y la Carta Social (II)”, VVAA, *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, op. cit., p. 163.

<sup>399</sup> Ha sido firmada por 13 países: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Suecia y Turquía. Datos disponibles en <[http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/SignaturesRatifications\\_en.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/SignaturesRatifications_en.pdf)> [Consulta: 2 de febrero de 2011].

<sup>400</sup> Cuando entró en vigor había sido ratificada por 5 países del Consejo de Europa: Alemania, Irlanda, Noruega, Reino Unido y Suecia, conforme datos disponibles en el sitio del Consejo de Europa, <[http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/SignaturesRatifications\\_en.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/SignaturesRatifications_en.pdf)> [Consulta: 2 de febrero de 2011].

<sup>401</sup> En septiembre de 2011, la Carta Social Revisada contaba con 43 firmas: Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijón, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República da Macedonia, Rumania, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Turquía, Ucrania. El último país que la firmó ha sido Alemania, el 29 de julio de 2007. En septiembre de 2011 contaba con 25 ratificaciones: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijón, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Estonia, Eslovenia, Finlandia, Francia,

reconocimiento y ampliación de nuevos derechos de aquella especie, y a ella se encuentran sometidos veinte y tres Estados-parte.

Los derechos contemplados en este instrumento tratan sobre el respeto a los derechos del trabajo, a la eliminación de todas las formas de discriminación al empleo, derecho a la seguridad e higiene del trabajo, derecho a ejercer una actividad lucrativa en el territorio de otro Estado contratante, derechos sindicales, derechos de protección social, jurídica y económica a la familia, a las madres y a los niños, derecho de protección a la salud, derecho a la asistencia social y médica, derecho a los beneficios de los servicios sociales, derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias, derechos relativos a la formación profesional y a la vivienda.

## **b – PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONSEJO DE EUROPA**

En el seno del Consejo de Europa fueron constituidos órganos muy específicos en el control y garantía del cumplimiento de los derechos humanos, tanto en el ámbito jurisdiccional con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como no-jurisdiccional, con el Secretario General del Consejo de Europa, el Comité de Ministros, el Comité Asesor, Comisario Europeo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, el Comité Europeo de Derechos Sociales y el Comité Europeo de Expertos Gubernamentales.

### **b.1 – TUTELA NO JURISDICCIONAL**

Es la tutela ejercida por los órganos del Consejo de Europa que integran su estructura general, se encuentren vinculados o no específicamente a los derechos humanos. Son no-jurisdiccionales pues aunque muchas de sus decisiones tengan fuerza obligatoria, sus mecanismos de vigilancia y garantía de cumplimiento de los derechos humanos no se someten, necesariamente, a los mismos rigores

---

Georgia, Holanda, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Moldavia, Noruega, Portugal, Rumania, Suecia, Turquía y Ucrania, de acuerdo con datos del sitio oficial del Consejo de Europa, en la web <[http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/SignaturesRatifications\\_en.pdf](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/SignaturesRatifications_en.pdf)>[Consulta: 23 de septiembre de 2011].

procedimentales propios de los procesos judiciales, como la observancia de los principios de defensa en juicio, del contradictorio, de la igualdad procesal y del derecho de petición.

### **b.1.1 – SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE EUROPA**

Es facultado al Secretario General requerir informaciones a los Estados-partes sobre la efectividad de las disposiciones del Convenio con relación a su derecho interno. Este mecanismo, de naturaleza eminentemente política, está previsto en el artículo 53 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Como acentúa PASTOR PALOMAR, la eficacia de este procedimiento “*radica en la presión moral o política que puede sentir un Estado*”, presentándose “*útil para idear fórmulas que faciliten las reformas en curso en ciertos países de la Europa central y oriental*”<sup>402</sup>.

### **b.1.2 – COMITÉ DE MINISTROS**

Es el principal órgano político del Consejo de Europa, integrado por cada uno de los cuarenta y siete Estados, que representan sus gobiernos por sus Ministros de Asuntos Exteriores. Más allá de relevantes competencias en el escenario regional, en el tema de protección a los derechos humanos es el órgano encargado de velar por la ejecución de las sentencias definitivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

#### **b.1.2.1 – COMITÉ ASESOR**

Es el órgano que funciona junto al Comité de Ministros y fue instituido por la “*Convención marco para la protección de las minorías nacionales*”, ratificada por veinte y siete Estados y en vigor desde 1998, se compone por dieciocho miembros, designados como expertos independientes.

---

<sup>402</sup> PASTOR PALOMAR, A., “El Sistema Europeo: El Consejo de Europa (I)”, en VVAA, *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, CASADEVANTE ROMANI, C.F. (coord)., op. cit. p. 150.

#### **b.1.2.1.1 – MECANISMO DE ACTUACIÓN**

Por la Convención, los Estados-parte deben presentar Informes sobre la cuestión de las minorías nacionales cada cinco años, los cuales son llevados al conocimiento del Comité Asesor, para la realización de estudios y emisión de dictámenes confidenciales al respecto. En seguida, dichos dictámenes son dirigidos al Comité de Ministros del Consejo de Europa, que adoptará públicamente las conclusiones y recomendaciones que entienda necesarias.

Según señala VILLÁN DURÁN, *“aunque no se le autoriza a recibir quejas individuales, el Comité Asesor sí podrá recibir informaciones de particulares y ONG’s sobre la aplicación de la Convención marco en sus respectivos países”*<sup>403</sup>.

#### **b.1.3 – COMISARIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS**

Es un órgano de derechos humanos con atribuciones exclusivas en su prevención y promoción, con relación a los derechos que fueron reconocidos en los instrumentos acogidos por el Consejo de Europa.

Sus actividades se han producido concretamente a partir de septiembre de 1999, con el nombramiento del primer Comisario de Derechos Humanos, por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, para un mandato de seis años, no renovable.

En sus funciones no le cabe conocer de quejas individuales, aunque esto no significa que no conozca de las informaciones particulares o públicas, de las más distintas fuentes, como los individuos, las ONG’s, y los gobiernos. De su labor son elaborados Informes para conocimiento del Comité de Ministros y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

---

<sup>403</sup> VILLÁN DURÁN, C., *Curso ....*, op. cit., p. 186.

#### **b.1.4 – COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA**<sup>404</sup>

Este Comité se encuentra vinculado al Consejo de Europa, y fue creado por la “*Convención Europea para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes*”, en vigor desde el 1 de febrero de 1989, inspirada en el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, complementada por dos Protocolos que entraron en vigor en 2001. Se encuentra ratificada por los cuarenta y siete Estados-miembros del Consejo de Europa, destacándose que los Estados no integrantes del Consejo pueden adherir a la Convención, conforme está previsto en el Protocolo 1, que entró en vigor el 1 de marzo de 2002.

Trátase de un órgano de naturaleza cuasi-contenciosa, que está compuesto por un representante de cada uno de los Estados-parte del Consejo nombrados por un período máximo de seis años, y elegidos por el Comité de Ministros.

El Comité tiene por atribuciones realizar visitas a cualquier lugar de detención en los Estados-parte, intentando proteger a los detenidos contra la tortura y los malos tratos, emitiendo Informes confidenciales, y cuya labor es conferida a “expertos independientes”, generalmente abogados, médicos o especialistas en detenciones o cuestiones policiales, los cuales no pueden estar sometidos a ninguna restricción en sus actividades, disponiendo de amplio acceso a las instalaciones de detención, pudiendo entrevistarse con cualquier persona<sup>405</sup>.

En caso de falta de cooperación del Estado-parte en las visitas procedidas, o igualmente en los casos en que el Estado no cumple las recomendaciones del Comité, éste podrá hacer una “declaración pública” sobre tales situaciones, instrumento que se presenta muy eficaz en vista de la condena moral y repulsa pública de tales conductas.

---

<sup>404</sup> Informaciones más detalladas sobre el Comité y su labor se puede obtener junto a la web <[www.cpt.coe.int](http://www.cpt.coe.int)>.

<sup>405</sup> Hasta diciembre de 2010 fueron realizadas 303 visitas periódicas o “ad hoc”, con datos disponibles en <http://www.cpt.coe.int/en/visits.htm> [Consulta: 26 de marzo de 2011].

### **b.1.5 – COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES**

El Comité Europeo de Derechos Sociales, anteriormente denominado Comité de Expertos Independientes<sup>406</sup>, es un órgano de naturaleza política, compuesto por un mínimo de nueve miembros, elegidos por la Asamblea Parlamentaria entre nombres propuestos por los Estados-parte contratantes de la Carta Social Europea, para un mandato de seis años, renovable por otro igual período, y que deberán ejercer sus atribuciones con independencia, imparcialidad y disponibilidad inherente al mandato. Estas disposiciones constan en el Protocolo de enmienda de 1991. En las deliberaciones del Comité puede actuar un representante de la Organización Internacional del Trabajo - OIT.

#### **b.1.5.1 – MECANISMO DE ACTUACIÓN**

En sus atribuciones, cabe al Comité analizar, bajo un punto de vista jurídico, la compatibilidad de las legislaciones y acciones de gobierno de los Estados con relación a las obligaciones de la Carta Social Europea.

Los mecanismos de actuación del Comité son el Informe Nacional y la Reclamación Colectiva.

##### **b.1.5.1.1 – INFORME NACIONAL**

Los Estados-parte deben enviar “Informes” bianuales al Secretario General del Consejo de Europa en cuanto a la aplicación y cumplimiento de las obligaciones de la Carta Social Europea. Estos Informes son sometidos al Comité Europeo de Derechos Sociales, que puede dirigirse directamente al Estado interesado para solicitar informaciones complementarias. La finalidad del Comité es analizar, bajo un punto de vista jurídico, si las acciones del Estado en sus legislaciones y prácticas nacionales se adecuan a las obligaciones de la Carta. Las conclusiones adoptadas son dadas al conocimiento público, y son transmitidas por el Secretario General al Comité de Expertos Gubernamentales – o Comité Gubernamental –, a la Asamblea

---

<sup>406</sup> El cambio se ha dado a partir de 2000.

Parlamentaria, a las organizaciones internacionales de empresarios y trabajadores y a las organizaciones no gubernamentales.

Como ha advertido DIEZ DE VELASCO, por el resultado de este procedimiento de control “*se puede dirigir recomendaciones individualizadas a cada Estado, pero no puede condenarle por una presunta violación ni imponerle pautas obligatorias de comportamiento*”<sup>407</sup>.

#### **b.1.5.1.2 – RECLAMACIÓN COLECTIVA**

Por este medio de control y protección, instaurado por el Protocolo Adicional del 9 de noviembre de 1995<sup>408</sup>, se autoriza a terceros a presentar “Reclamación Colectiva” contra el Estado contratante, por el incumplimiento de la Carta Social Europea. No se trata de un mecanismo para la protección de violaciones individuales. Son legitimados en esta iniciativa las organizaciones internacionales de empresarios y trabajadores, las ONG’s con estatuto consultivo ante el Consejo de Europa e inscritas junto al Comité Gubernamental de la “Carta”, así como las organizaciones de empresarios y trabajadores vinculadas a la jurisdicción del Estado reclamado.

Las “Reclamaciones” son presentadas al Secretario General del Consejo de Europa, por escrito, y sólo se puede admitir contra incumplimiento de disposición de la Carta aceptada por el Estado reclamado. El Secretario General la remite al Comité Europeo de Derechos Sociales, el cual cabe establecer el contradictorio, solicitando explicaciones al Estado reclamado, y adoptando, al final, su Informe, con las conclusiones de reconocimiento o no de la reclamación presentada. A continuación, este Informe se transmite al Comité de Ministros y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, así como al reclamante y a los Estados-parte contratantes de la Carta.

---

<sup>407</sup> DIEZ DE VELASCO, M., *Instituciones...*, op. cit., p. 579.

<sup>408</sup> En fecha del 30 de marzo de 2010, 14 países habían aceptado el procedimiento de Reclamación Colectiva: Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Portugal y Suecia, conforme consulta al sitio oficial del Consejo de Europa <[http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/presentation/overview\\_FR.asp?](http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/presentation/overview_FR.asp?)> [Consulta: 18 de noviembre de 2004].

El proceso se concluye con una Resolución del Comité de Ministros, y a partir de ahí se torna pública la Reclamación, lo que ocurrirá, en todo caso, hasta pasados cuatro meses desde el recibimiento del Informe.

### **b.1.6 – COMITÉ DE EXPERTOS GUBERNAMENTALES**

El control y la protección de los derechos contemplados en la Carta Social Europea se realiza también por el Comité de Expertos Gubernamentales, o Comité Gubernamental, igualmente de naturaleza política.

El Comité de Expertos Gubernamentales está formado por un representante de cada uno de los Estados-parte de la Carta, y tiene por atribución elaborar el Informe público sobre la situación de política social y económica que le fuera retratada por el Comité Europeo de Derechos Sociales, y que deban ser objeto de recomendación por el Consejo de Ministros.

Más allá de eso, *“y sobre la base de constataciones relativas a la aplicación de la Carta en general, el Comité gubernamental podrá someter propuestas al Comité de Ministros dirigidas a que se realicen estudios sobre cuestiones sociales y sobre los artículos de la Carta que podrían ser, eventualmente actualizados (art.27.4)”*<sup>409</sup>.

#### **b.1.6.1 – MECANISMO DE ACTUACIÓN**

El mecanismo de control en cuanto al cumplimiento de la Carta Social Europea se realiza con el estudio de Informes Gubernamentales, a través del “Informe Nacional”, periódicamente presentado por los Estados firmantes de aquel documento.

##### **b.1.6.1.1 – INFORME**

Tras las conclusiones del Informe Nacional, transmitidas por el Comité Europeo de Derechos Sociales, el Comité de Expertos Gubernamentales debe presentar al Comité de Ministros del Consejo de Europa un Informe sobre la situación

---

<sup>409</sup> DIEZ DE VELASCO, M., *Las Organizaciones...*, op. cit. p. 480.



del Estado-parte, quien expide Resolución al respecto, en la cual se remiten recomendaciones para que se hagan efectivas a dicho Estado. A su vez, a la Asamblea General deben someterse las conclusiones del Comité de Expertos Gubernamentales para los debates periódicos en sesión plenaria.

## **b.2 – TUTELA JURISDICCIONAL**

En el contexto regional europeo la tutela jurisdiccional es ejercida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su naturaleza jurisdiccional se traduce en la solución contenciosa de conflictos, con sus atribuciones sometidas a la observancia de los principios propios de la actividad judicial, como el derecho de petición, la amplia defensa, el contradictorio, y la fuerza vinculante de sus decisiones con relación a las partes en litigio.

### **b.2.1 – TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS**

Hasta 1998, la estructura de protección específica a los derechos humanos en el Consejo de Europa estaba integrada por la Comisión Europea de Derechos Humanos, de naturaleza técnica y cuasi-contenciosa, y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de naturaleza contenciosa – jurisdiccional. Después de aquel año, en virtud de la entrada en vigor del Protocolo 11, del 11 de mayo de 1994, se estableció el marco divisorio de la historia o evolución de la estructura del Consejo de Europa en el tema de protección de los derechos humanos, ya que ésta pasó a concentrarse en un único órgano, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos-TEDH, extinguiéndose la Comisión<sup>410</sup>, de modo que el referido mecanismo de protección pasó a ser estrictamente jurisdiccional<sup>411</sup>.

---

<sup>410</sup> La extinción definitiva de la Comisión se observó el 31 de octubre de 1999, y en el período de 1 de noviembre de 1998, cuando se inició el funcionamiento del “nuevo” Tribunal Europeo de Derechos Humanos-TEDH, hasta aquella fecha, la Comisión funcionó con carácter transitorio, limitada a examinar las demandas que habían sido admitidas hasta la entrada en funcionamiento de aquel TEDH.

<sup>411</sup> Hasta el funcionamiento definitivo del “nuevo” Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a partir del 1 de noviembre de 1998, también el Comité de Ministros podría decidir sobre cuestiones de fondo de un caso, limitando su competencia actual al control de la ejecución de las sentencias del Tribunal, conforme PASTOR PALOMAR, A., “El Sistema Europeo: El Consejo de Europa (I)”, en VVAA, *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, op. cit., p. 135.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es así el órgano de mayor importancia en el tema de derechos humanos en el seno regional europeo, y actúa como una instancia permanente y subsidiaria a los ordenamientos jurídicos de los Estados-parte del Consejo de Europa. Gran parte de la doctrina lo identifica como el “nuevo” tribunal ya que no se traduce en la fusión de la extinta Comisión de Derechos Humanos y del antiguo Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que es un tribunal con rasgos propios y distintos de aquellos órganos extintos<sup>412</sup>.

Su entrada en funcionamiento ha sido paulatinamente, en dos fases, después de la extinción del antiguo tribunal, el 31 de octubre de 1998, y de la Comisión, el 31 de octubre de 1999, pasando a funcionar como órgano único a partir del 1 de noviembre de 1999. Tiene su sede en Estrasburgo, Francia, y su composición es de cuarenta y siete jueces, con la nacionalidad de cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa, y que ejercen sus atribuciones a título personal, independientemente, es decir, no representan a los países de su nacionalidad.

Una de las más importantes características de este tribunal es que su jurisdicción se impone automáticamente a los Estados-parte del Consejo de Europa, de modo que no dependen de formular cualquier manifestación específica a tal fin ni establecer limitaciones a su competencia.

Para desarrollar sus atribuciones, el Tribunal Europeo se compone de cuatro Sesiones, y funciona en Comités, Salas y Gran Sala. De las Sesiones, tres están integradas por diez miembros, y una por once, subdividiéndose cada una de estas cuatro Sesiones en cuatro Salas, integrada por siete de sus jueces, a quienes cabe el examen de admisibilidad y de fondo de cada proceso. Los tres jueces restantes de cada Sesión – o cuatro en el caso de la que se compone de once jueces – funcionan como jueces sustitutos. En cada Sesión funcionan tres Comités, integrados por tres de sus jueces. Dispone aún de dos “Grandes Salas”, formada por diecisiete jueces y otros tres que le son suplentes, que se caracteriza como una segunda instancia, conforme el artículo 44.2, del Convenio, y es el órgano competente para conocer de una cuestión grave relativa a la interpretación del Convenio Europeo de Derechos

---

<sup>412</sup> Ídem, p. 142.

Humanos, o a una cuestión grave de carácter general, cabiéndole igualmente unificar la jurisprudencia del Tribunal, en todo caso siendo definitiva su sentencia. El Tribunal Europeo también funciona en Pleno, teniendo este órgano competencia exclusiva en asuntos administrativos. La competencia de sus órganos se encuentra establecida en los artículos 26 a 32 del Convenio, y en el Reglamento del Tribunal.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene también competencia para la interpretación y aplicación del “Convenio Europeo para la prevención de la tortura y de penas o tratos inhumanos o degradantes”, del “Convenio Europeo sobre el estatuto jurídico del trabajador migrante”, del “Convenio sobre protección de las personas sobre el tratamiento informatizado de datos de carácter personal”, y del “Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales”<sup>413</sup>.

Un aspecto a destacar con relación a aquel tribunal es que inauguró, en el contexto internacional, la posibilidad de demandas individuales como iniciativa de protección a los derechos humanos, en la cual *“no opera el requisito de la nacionalidad de la reclamación”*, siendo *“lo fundamental que la persona dependa de la jurisdicción de uno de los Estados partes”*. Por eso, su jurisdicción es ejercida en una población de, por lo menos, más de ochocientos millones de personas, nacionales de los cuarenta y siete países que integran el Consejo de Europa, sin perjuicio de los individuos de otras nacionalidades que están bajo la jurisdicción de algún de aquellos países, como garantiza el artículo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, como ha señalado el profesor ANTONIO PASTOR PALOMAR<sup>414</sup>.

Es importante señalar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se identifica como si fuera una cuarta y última instancia de las jurisdicciones nacionales. Para eso sería necesario que tuviera competencia para decidir sobre la legislación interna de cada país, lo que, obviamente no ocurre. Al contrario, su competencia se encuentra limitada a las normas del Convenio Europeo de Derechos Humanos y

---

<sup>413</sup> Según anotaciones de DIEZ DE VELASCO, *Las organizaciones....*, op. cit., p. 475.

<sup>414</sup> PASTOR PALOMAR, A., “El Sistema Europeo: El Consejo de Europa (I)”, en VVAA, *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, op. cit., p. 132.

algunos otros convenios específicos, y por eso se reconoce su naturaleza como una instancia propia, exclusiva, subsidiaria de las jurisdicciones nacionales en temas de derechos humanos, e inconfundible con relación a ellas. Además, por el hecho de ser un órgano internacional, independiente y autónomo, no puede imponer la ejecución de lo juzgado al Estado condenado, siendo tal atributo conferido al Comité de Ministros, órgano internacional distinto del Tribunal, a quien cabe “velar”<sup>415</sup> por la ejecución, es decir, ser el responsable para exigir su cumplimiento.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos actúa jurisdiccional y consultivamente, y recibe, anualmente, alrededor de 120.000 causas, según información de su Secretario Adjunto<sup>416</sup>.

#### **b.2.1.1. – COMPETENCIA JURISDICCIONAL**

Esta es la principal actuación del Tribunal Europeo, en el sentido de expedir una sentencia de cumplimiento obligatorio para las partes, estableciendo “*un orden público europeo, o unas normas mínimas comunes, en materia de derechos humanos*”<sup>417</sup>.

Para ejercer sus atribuciones jurisdiccionales, el Tribunal Europeo puede ser provocada por la “denuncia intergubernamental”, en la cual un Estado-parte somete al tribunal cualquier incumplimiento del Convenio y sus Protocolos por otro Estado-parte, aunque el Estado provocante o su nacional no sean la víctima. Puede también ser provocado por la “demanda individual”, en la cual cualquier persona física, individualmente o en grupo, que sea víctima o tenga interés personal en la violación respectiva, o también cualquier organización no- gubernamental, puede provocar la actuación de aquel tribunal por las violaciones de aquella naturaleza practicadas por uno o más Estado-parte. En esta delimitación de la *legitimatío activa*, se impone reconocer que el Tribunal se manifiesta jurisdiccionalmente en vista de casos concretos que le son presentados, no pronunciándose en abstracto.

---

<sup>415</sup> Este es el término utilizado por el artículo 46.2, del Convenio.

<sup>416</sup> Dato disponible en el documento A/65/190, de la Asamblea General de Naciones Unidas, página 8.

<sup>417</sup> PASTOR PALOMAR, A., “El Sistema Europeo: El Consejo de Europa (I)”, ... op. cit., p. 150.

El procesamiento de cada una de estas acciones se resume en cuatro fases o situaciones distintas: la admisibilidad, el arreglo amistoso, la sentencia y las medidas provisionales.

En la fase de admisibilidad se examinan los requisitos para la aceptación de la demanda, para la cual se exige el agotamiento de los recursos internos y que se recurra al Tribunal Europeo hasta seis meses desde este momento. En este aspecto, *“cuando exista una duda sobre la eficacia de un recurso es aconsejable ejercitarlo e introducir paralelamente la demanda ante el TEDH, y de esa forma interrumpir el plazo de seis meses para el caso de que el recurso fuese declarado ineficaz por el TEDH”*<sup>418</sup>.

En cuanto a los demás requisitos, se exige que no puede ser anónima, no estar sometida a otra instancia internacional, no ser mal fundada o abusiva, ni incompatible con las disposiciones del Convenio. La importancia de esta fase se revela por el hecho de que las decisiones de no admisión son definitivas, no pudiéndose superar en otras instancias del Tribunal, y constituyéndose en práctica en la fase de más difícil superación, salvo en cuanto a la falta de comprobación de agotamiento de los recursos internos, para la cual se admite comprobar la situación en nueva demanda.

El “arreglo amistoso” es el procedimiento de conciliación junto al Tribunal Europeo. Reconociéndose la conciliación de las partes, el tribunal editará una Resolución, cancelando el asunto del registro de entrada, y limitándose a una breve exposición de los hechos y solución adoptada.

Prosiguiendo la demanda sin conciliación, será sometida a un análisis de fondo, después de la amplia manifestación de las partes, adoptándose la decisión por la mayoría simple del órgano de juzgamiento – Sala o Gran Sala -. Las decisiones y sentencias serán públicas y motivadas, con efectos vinculantes para los Estados-parte, cabiendo al Consejo de Ministros velar por su ejecución, *“mediante la adopción de las medidas individuales o de índole general apropiadas para remediar la*

---

<sup>418</sup> Ídem, p. 142.

*violación*<sup>419</sup>. Es importante notar que las decisiones del Tribunal también se traducen en una obligación jurídica a todos los Estados-parte en el sentido de considerar su jurisprudencia<sup>420</sup>.

De las sentencias de las Salas cabe recurso para una de las Grandes Salas, en el plazo de tres meses, conforme dispone el artículo 44.2.b, del Convenio. Mas allá de esta instancia de recursos a la que pueden someterse las sentencias, también pueden estar sometidas a la solicitud de “aclaración” y a la demanda de “revisión”, contenidas en los artículos 79 y 80, del Reglamento del Tribunal. En el primer caso, su objetivo es aclarar los puntos oscuros de la sentencia, o suplir un error material, en un plazo de un año desde su pronunciamiento. En el segundo caso, su finalidad es rescindir la sentencia en vista de un hecho del que se tiene conocimiento posterior, y que si se hubiera conocido en la época de la sentencia podría haber generado una solución diversa de la alcanzada. El plazo para interponer su requerimiento es de seis meses a partir de la fecha del conocimiento del hecho de interés.

En cuanto a la eficacia ejecutoria, se encuentra ella asegurada por el compromiso de los Estados-parte en acatar las sentencias definitivas del Tribunal, de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 46, del Convenio, cabiendo al Comité de Ministros adoptar “Resolución” en la cual declara la satisfacción de la obligación impuesta al Estado. Al revés, en los casos de resistencia del Estado condenado, y que se caracterizan como situación grave de violación a los compromisos del Estado-parte, el Comité de Ministros podrá utilizar medidas represivas contra el infractor, como la presión moral o política, pudiendo, en caso de persistencia de su incumplimiento, suspenderlo del derecho de representación como miembro del Consejo de Europa, invitarlo a retirarse o, incluso, llevarlo a la expulsión de aquel Consejo.

---

<sup>419</sup> Ídem, p. 151.

<sup>420</sup> Sobre el tema, ver CARRILLO SALCEDO, J. A., “El proceso de internacionalización de los derechos humanos. El fin del mito de la soberanía nacional (II). Plano regional: El sistema de protección instituido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en VVAA, *Consolidación de derechos y garantías: los grandes retos de los derechos humanos en el siglo XXI, Seminario conmemorativo del 50 aniversario de la declaración de los derechos humanos*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, pp. 47-76.

La ausencia de la autoridad ejecutoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos lleva a que sus sentencias se caractericen como de naturaleza declaratoria, consistiendo en limitarse a reconocer si un Estado-parte violó o no las normas del Convenio.

#### **b.2.1.1.1. – MEDIDAS PROVISIONALES**

Estas medidas son providencias excepcionales, de naturaleza cautelar, tomadas con el objetivo de evitar un atentado contra la vida y la libertad en situaciones que configuren riesgo cierto de violación. Trátase de un mecanismo de protección previsto en el Reglamento del Tribunal Europeo, artículo 39, reservado a la competencia de las Salas, y su petición cabe a cualquier persona interesada, así como puede ser tomada de oficio, con adopción de las medidas que se estimen necesarias en el interés de resguardar la protección de aquel que se encuentre sufriendo amenaza a su derecho.

#### **b.2.1.2 – COMPETENCIA CONSULTIVA**

Es la atribución conferida al Tribunal Europeo por la cual éste emite opinión sobre cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sus Protocolos y demás Convenios adoptados por el Consejo de Europa. Esta competencia se ejerce bajo el impulso del Consejo de Ministros, que tiene legitimación exclusiva para provocar consultivamente aquel tribunal.

### **B – UNIÓN EUROPEA**<sup>421</sup>

Es la organización comunitaria formada por 27 países europeos<sup>422</sup>, con soberanía compartida para alcanzar sus intereses comunes en cuanto a la institución

---

<sup>421</sup> Se incluye la Unión Europea en esta parte “Regional/Continental”, y no en la “sub-regional”, que se verá más adelante, pues la Unión Europea, aunque no esté integrada por todos los 50 países del continente europeo, es abierta a todos ellos, situación diferente de los agrupamientos subregionales, pues son limitados a algunos países de un mismo continente y que se reúnen por algún aspecto común.

<sup>422</sup> En septiembre de 2011 la UE es integrada por Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, Italia, Luxemburgo, – países fundadores; Dinamarca, Irlanda y Reino Unido – con adhesión en 1973; Grecia

de una ciudadanía europea, de la promoción y progreso económico y social, cooperación en la justicia y seguridad y con una política externa común.

Tiene sus orígenes<sup>423</sup> en la Comunidad Europea del Carbón y del Acero-CECA, de 1951<sup>424</sup> - Tratado de París -, en la “Comunidad Europea de Defensa-CED”, de 1952<sup>425</sup>, en la “Comunidad Económica Europea-CEE”, de 1957<sup>426</sup> - Tratado de Roma o Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea<sup>427</sup> -, y en la “Comunidad Europea de Energía Atómica-EURATOM”, también de 1957<sup>428</sup>. El 08 de abril de 1965, en Bruselas, por el Tratado de Fusión, en vigor el 1 de julio de 1967, la CECA, la CEE y la EURATOM se reuniran para constituir un solo ejecutivo de las tres instituciones, formando la Comisión Europea o Consejo de la Unión Europea.

El 01 de julio de 1987 entra en vigor el Acta Única Europea, firmada en Luxemburgo y la Haya, respectivamente el 17 y 28 de febrero de 1986, y que introdujo adaptaciones necesarias para completar el mercado interior.

Por el Tratado de Maastricht, o Tratado de la Unión Europea<sup>429</sup>, del 07 de febrero de 1992, en vigor el 01 de noviembre de 1993, se han adoptado nuevas formas de cooperación intergubernamental en ámbito económico y político, con la formación de la Unión Europea o Comunidad Europea. Se identifica como la culminación política del conjunto normativo integrado por los otros tres Tratados hasta entonces vigentes: el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del

---

– en 1981; España y Portugal – en 1986; Austria, Finlandia y Suecia – en 1995; Chipre, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa – en 2004; Bulgaria y Rumania – en 2007. Croacia, Turquía, Macedonia, Montenegro y Islandia son candidatos a la UE, con las negociaciones empezadas oficialmente en octubre de 2005, según datos en la web <[http://europa.eu/about-eu/countries/index\\_es.htm](http://europa.eu/about-eu/countries/index_es.htm)> [Consulta: 23 de septiembre de 2011].

<sup>423</sup> Informaciones de la página oficial de la Unión Europea en la web <[http://europa.eu/index\\_es.htm](http://europa.eu/index_es.htm)> [Consulta: 8 de diciembre de 2010].

<sup>424</sup> La Comunidad Europea del Carbón y del Acero-CECA fue instituida por el Tratado de París del 18 de abril de 1951, que entró en vigor el 23 de septiembre de 1952, y que expiró el 22 de julio de 2002, y también conocido como Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero.

<sup>425</sup> Tratado constitutivo firmado en París, el 27 de mayo de 1952.

<sup>426</sup> Constituida en Roma, el 25 de marzo de 1957.

<sup>427</sup> También denominado Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, hasta 1992, y hasta 2009 conocido como Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

<sup>428</sup> También en Roma, el 25 de marzo de 1957, conocido como Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

<sup>429</sup> También denominado Tratado de la Unión.



Acero, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea.

El Tratado de Ámsterdam, del 02 de octubre de 1997, en vigor desde el 01 de marzo de 1999, estableció una versión consolidada de los Tratados de la Unión Europea y de la Comunidad Europea.

El 26 de febrero del 2001, es firmado el Tratado de Niza, en vigor desde el 01 de febrero de 2003, con alteraciones institucionales para viabilizar en funcionamiento eficaz de la Unión tras su ampliación a 25 y 27 Estados miembros, en 2004 y 2007, respectivamente.

Con el Tratado de Lisboa, en vigor desde 01 de diciembre de 2009, y firmado el 13 de diciembre de 2007, con el objetivo de alcanzar una Europa más unida y más fuerte, con una mayor influencia mundial, se han introducido modificaciones en los Tratados de la Unión Europea – Tratado de Maastricht – y de la Comunidad Económica Europea – Tratado de Roma. El Tratado de Lisboa sustituyó el intento de se adoptar una “Constitución Europea”, texto firmado por los Jefes de gobierno de los 27 países de la Unión Europea el 29 de octubre de 2004, pero que ha sido rechazado por la población de Francia y Holanda, frustrando aquella iniciativa de la existencia de una Constitución en el seno de Europa.

El Tratado de Lisboa objetivó más eficacia en la toma de decisiones, más democracia en razón del mayor protagonismo del Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales y más coherencia en la actuación exterior, y con prioridades más importantes en los campos de la libertad, la justicia y la seguridad. Las innovaciones implantadas visan poner en práctica las políticas de la Unión en los campos del crecimiento económico y competitividad, desarrollo del empleo y las condiciones sociales, aumento de la seguridad personal y colectiva, fomento del medio ambiente y las condiciones sanitarias, desarrollo de la cohesión y la solidaridad entre los Estados miembros, progreso científico y tecnológico<sup>430</sup>.

---

<sup>430</sup> Según registros obtenidos en el sitio oficial de la Unión Europea: <[http://europa.eu/lisbon\\_treaty/faq/index\\_es.htm](http://europa.eu/lisbon_treaty/faq/index_es.htm)> [Consulta: 8 de diciembre de 2010].

De las instituciones de la Unión Europea se destacan el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo<sup>431</sup> y la Comisión Europea, responsables por elaborar las políticas y leyes de aplicación en la Unión Europea.

El Parlamento Europeo o Eurocámara representa a los ciudadanos de la Unión Europea y sus 736 diputados son elegidos directamente por aquellos, a cada cinco años. Todos los ciudadanos de los países que integran la Unión Europea tienen legitimidad para votar y presentar su candidatura, el que expresa una voluntad de más de 490 millones de personas. De la legislación del Parlamento Europeo que afecta común y directamente a la vida de los ciudadanos se pueden mencionar temas en la protección del medio ambiente, derechos de los consumidores, igualdad de oportunidades, transportes y libre circulación de trabajadores, capitales, bienes y servicios.

El Consejo de la Unión Europea<sup>432</sup> es la representación de los Estados miembros y ejerce funciones de definición de algunas políticas y de coordinación, en los términos fijados por los Tratados. También ejerce un papel legislativo, generalmente en codecisión con el Parlamento Europeo, siendo que los miembros del Consejo son políticamente responsables ante sus parlamentos nacionales. A las reuniones del Consejo participan un Ministro de cada gobierno nacional, y que es definido en función de los temas del orden del día. El Consejo se reúne en nueve configuraciones distintas: Asuntos generales y relaciones exteriores; Asuntos económicos y financieros; Justicia e interior; Empleo, política social, salud y consumidores; Competitividad; Transporte, telecomunicaciones y energía; Agricultura y pesca; Medio ambiente; Educación, juventud y cultura.

---

<sup>431</sup> El Consejo de la Unión Europea y el Consejo Europeo son órganos de la Unión Europea y no se confunden con el Consejo de Europa, institución no comunitaria, perteneciente a otra estructura de los países europeos, conforme apuntado en la Segunda Parte, ítem III.1.A, de esta tesis.

<sup>432</sup> También nombrado por algunos autores como "Consejo de Ministros", según expone CISNAL DE UGARTE, E. S., LIESA, C.R.F., GONZÁLEZ, C.M., *Descripción, análisis y comentarios al Tratado de la Unión Europea*, McGraw-Hill, Madrid, 1993, p. 30.

El Consejo Europeo<sup>433</sup> es el órgano que reúne los Jefes de Gobierno – Presidentes y/o Primeros-Ministros – juntamente con el Presidente de la Comisión Europea y el Presidente del propio Consejo Europeo, y, en el modelo actual, fue instituido a partir del 1 de diciembre de 2009, por el Tratado de Lisboa. No ejerce función legislativa y tiene por atribución determinar la dirección política general y las prioridades de la Unión Europea resolviendo cuestiones que no se pueden solventarse en un nivel más bajo, como por los Ministros en reuniones regulares del Consejo de la Unión Europea.

La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, siendo la responsable por ejecutar los programas y aplicar las políticas de la Unión Europea. Actúa en defensa de los intereses de la Unión en su conjunto, aplica las decisiones del Parlamento y del Consejo de la UE, vela por su cumplimiento por los Estados miembros y propone las nuevas normas. Actúa con independencia de los gobiernos nacionales. Su función es representar y defender los intereses de la UE en su conjunto, actuando como guardiana de los Tratados y velando por el respeto y efectivo cumplimiento del Derecho comunitario.

Más allá de los órganos mencionados, se destacan también en la Unión Europea el Tribunal de Justicia, su órgano judicial, garantizador del respeto a la legislación comunitaria, y el Tribunal de Cuentas, responsable de asegurar la buena gestión del presupuesto de la UE<sup>434</sup>.

---

<sup>433</sup> De conformidad con la página web oficial de la Unión Europea: <[http://europa.eu/index\\_es.htm](http://europa.eu/index_es.htm)> [Consulta: 8 de diciembre de 2010]. *"El Consejo Europeo fue creado en 1974 con la intención de establecer un foro informal de debate para los Jefes de Estado o de Gobierno. Rápidamente evolucionó hasta llegar a ser el órgano que fijaba los objetivos de la Unión y determinaba el curso para alcanzarlos, en todos los ámbitos de actividad de la UE. Adquirió un estatuto oficial en 1992, con el Tratado de Maastricht, que dispone que "el Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones políticas generales".*

<sup>434</sup> Se compone aún por los siguientes órganos: Comité Económico y Social Europeo; Comité de las Regiones; Proveedor de Justicia Europeo; Banco Europeo de Inversión; Banco Central Europeo. En DIEZ DE VELASCO, M., *Las Organizaciones...*, op. cit., pp. 577-609, se tiene un amplio registro a respecto de los órganos integrantes de la Unión Europea.

## **a – LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA**

En los orígenes del proceso de constitución de la Unión Europea-UE, por el Tratado de Roma, los derechos humanos no se presentaban como un abanico de cuestiones de interés para su formación, por la propia finalidad comunitaria de su institución, como un proceso de integración entre Estados, para alcanzar una unión económica, monetaria, de política exterior y de seguridad<sup>435</sup>. Más allá, se admitía que los propios países-miembros garantizaban la protección a los derechos humanos por su legislación interna, además de haber dicha protección en el seno del Consejo de Europa, por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sólo a partir de la entrada en vigor del “Acta Única Europea”, el 1 de julio de 1987, y por el cual se intensificó la política de aquel proceso comunitario, es que se comenzó a considerar “*los derechos humanos como fundamento ideológico del sistema de integración*”<sup>436</sup>.

A su vez, cabe señalar que los esfuerzos para garantizar los derechos humanos en la Unión Europea ya habían comenzado antes mismo del “Acta Única Europea”, de 1986, porque el “Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea” ya entrañaba “*un paso decisivo en la evolución del tema en este ámbito europeo*”, con “*las sentencias T.J.C.E. de 11 de noviembre de 1969 (asunto Stauder), y de 17 de diciembre de 1970 (asunto Internationale Handelsgesellschaft)*”, y por las cuales “*se declara, de un lado, que los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del derecho cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia, al ser comunes a las tradiciones constitucionales de los estados miembros. De otro lado, la salvaguardia de estos derechos debe ser asegurada en el marco de la estructura y los objetivos de la Comunidad*”<sup>437</sup>. En esta directriz, hay que se considerar la

---

<sup>435</sup> Hay doctrinadores, como el Profesor MIGUEL AGUDO ZAMORA, de la Universidad de Córdoba, que reconocen que, mismo no habiendo un catálogo de derechos fundamentales o de derechos humanos, los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea ya mencionaban preceptos con aquella naturaleza, como las libertades, la paz, la vida, el bienestar de los pueblos y de la salud de la población. Véase en *La Protección de los Derechos en la Unión Europea. Claves para Entender la Evolución Histórica desde el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea al Tratado por el que se Establece una Constitución para Europa*, en <[www.ugr.es/~redce/REDCE4/articulos/13bisagudo.htm](http://www.ugr.es/~redce/REDCE4/articulos/13bisagudo.htm)> [Consulta: 4 de noviembre de 2010], p. 7-14.

<sup>436</sup> DIEZ DE VELASCO, M., *Instituciones...*, op. cit., p. 580.

<sup>437</sup> GONZÁLES CAMPOS, J. D.; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I.; SÁENZ DE SANTA MARIA, P. A., *Curso ...*, op. cit., p. 762.

sentencia del asunto “Nold”, del 14 de mayo de 1974, señalada por PAOLO MENGIOZZI, Juez del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, por la cual el T.J.C.E. “*reconoció que ‘los Tratados internacionales para la protección de los derechos humanos en los cuales han sido parte o a los cuales se han adherido los Estados miembros pueden aportar indicaciones que conviene tener en cuenta en el marco del Derecho comunitario’*”<sup>438</sup>.

En esta visión comunitaria involucrada con los derechos humanos<sup>439</sup> se deben mencionar, igualmente, la “Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores” o “Carta Social”<sup>440</sup>, por la Cumbre de Estrasburgo, en 1989, la “Convención Europea de Derechos Humanos”, adoptada por el Tratado de Maastrich, de 1992, la “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, en la Cumbre de Niza, de 2000, y el “Tratado de Lisboa”, de 2007.

#### **a.1 – CARTA COMUNITARIA DE LOS DERECHOS SOCIALES FUNDAMENTALES DE LOS TRABAJADORES – CARTA SOCIAL**

La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores fue aprobada por el Parlamento Europeo el 15 de marzo de 1989, y el 9 de diciembre de 1989, en la Cumbre de Estrasburgo, tras la aprobación de la Comisión Europea y del Consejo de la Unión Europea, y fue aprobada también, en forma de declaración, por el Consejo Europeo, por Jefes de Estado o de Gobierno de once Estados-miembros<sup>441</sup>.

---

<sup>438</sup> MENGIOZZI, P., *Derecho Comunitario...*, op. cit., p. 317.

<sup>439</sup> Esta visión comunitaria en tema de derechos humanos se observa también en su política exterior, en el que se refiere a su promoción y control, como demuestra el Convenio de Lomé IV, firmado el 1990, en la ciudad de mismo nombre, capital del Togo, con su revisión de 1994. Este instrumento se trata de una medida de cooperación técnico-financiera entre la “UE” y los países de la “ACP” – Asia, Caribe y Pacífico -, constituida por setenta y siete países, con el objetivo de fomentar el desarrollo económico, social en estos países de la “ACP”, y que, delante del enfoque a los derechos humanos señalado en el Tratado de Maastricht, se pasó a disponer como condición para aquella cooperación que los países del “ACP” observasen el respecto a la democracia y a los derechos fundamentales, conforme informaciones disponibles en la Web <<http://www.europarl.eu.int/intcoop/acp/en/acplist.htm>>.

<sup>440</sup> No confundir con la Carta Social Europea, del Consejo de Europa, o Carta de Turín, del 18 de octubre de 1961. Ver Segunda Parte, ítem III.1.A.a.2, en esta tesis.

<sup>441</sup> En 1998, Reino Unido firmó la Carta Comunitaria.

Trató de definir el que se conoce como “derechos sociales fundamentales comunitarios” y es fruto de la necesidad de que la dimensión social estuviera presente en el ámbito de las actividades laborales de un mercado común, como ha constado en el preámbulo del Tratado de la Comunidad Económica Europea, al identificar como algunos de sus objetivos el “*progreso económico y social*” y la “*mejora constante de las condiciones de vida y de empleo de sus pueblos*”.

La Carta Comunitaria, que contó con la participación de representantes de los empresarios, de los trabajadores, de los profesionales liberales, agricultores y de las pequeñas y medianas empresas, establece los grandes principios sobre los que se basa el modelo europeo de derecho laboral y, de forma más general, el lugar que ocupa el trabajo en la sociedad. Contiene apartados sobre la libre circulación, empleo y retribución, mejora de las condiciones de vida y de trabajo, protección social, libertad de asociación y negociación colectiva, formación profesional, igualdad de trato entre hombres y mujeres, información, consulta y participación de los trabajadores, protección de la salud y de la seguridad en el medio de trabajo, protección de los niños y de los adolescentes, personas de edad avanzada y personas con discapacidad.

## **a.2 – CONVENCIÓN EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS (CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES)**<sup>442</sup>

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, o Convención Europea de los Derechos Humanos, ha sido adoptada en 1950 en el marco del Consejo de Europa, órgano no integrante de la Unión Europea, y que no se confunde con el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea, estos sí órganos de aquella organización comunitaria.

En el ámbito de la Unión Europea, la Convención Europea de Derechos Humanos ha sido adoptada por el Tratado de la Unión Europea, o “Tratado de

---

<sup>442</sup> Para mayores detalles sobre la Convención Europea de Derechos Humanos ver en esta Segunda Parte, ítem III.1.A.a.1.

Maastricht”, del 7 de febrero de 1992, con entrada en vigor el 1 de noviembre de 1993, el cual se tiene como el *“instrumento que constitucionaliza el respeto a los derechos humanos como fundamento de la Unión”*<sup>443</sup>, puesto que en él se prevé, por su artículo 6, que *“la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho Comunitario”*.

El subsiguiente Tratado en el seno de la Unión Europea, el Tratado de Ámsterdam, de 17 de junio de 1997<sup>444</sup>, o Tratado de la Unión Europea, ha reforzado este enfoque de los derechos humanos, incluso imponiendo su respeto como condición a los candidatos que pretendan integrar la Unión – artículo 49 –, conforme a los principios enunciados en el artículo 6.1: *“La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados”*.

Y, en cuanto a los países ya integrantes de la Unión, aseguró al Consejo, en su composición de Jefes de Estado y Gobierno, hacer “recomendaciones” o imponer la suspensión de derechos comunitarios en casos de riesgo claro de violación grave de existencia de una violación grave y persistente, como ha previsto el artículo 7<sup>445</sup>.

Más allá, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 2000, ha establecido un vínculo con la Convención Europea de Derechos Humanos al afirmar, en su preámbulo, la observancia de la Unión Europea a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

---

<sup>443</sup> MENGOZZI, P., *Derecho Comunitario...*, op. cit., p. 317.

<sup>444</sup> Firmado el 2 de octubre de 1997, con la ratificación por los 15 miembros de la U.E., y que entró en vigor el 1 de mayo de 1999.

<sup>445</sup> A este respecto es oportuno citar el caso de Austria, en vista de *“la inclusión en el Gobierno de Austria de representantes de un partido de derecha con un programa xenófobo”*, conforme registra GONZALES CAMPOS, J. D.; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I.; SÁENZ DE SANTA MARIA, P. A., *Curso ...*, op. cit., p. 763.

### **a.3 – CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA**

En el proceso de consolidación de los derechos humanos en la Unión Europea, se destaca aún la adopción de la “Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, aprobada el 7 de diciembre de 2000, en la Cumbre de Niza, por el Consejo de la Unión Europea, la Comisión y el Parlamento Europeo.

La Carta de Derechos Fundamentales consagra en la legislación comunitaria valores jurídicos de la dignidad humana, de las libertades, de la igualdad, la solidaridad, la ciudadanía europea y la justicia, presentándose así como un instrumento completo para disponer tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos y sociales, y de reconocimiento a todos los individuos, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia, salvo, en cuanto a esto, evidentemente, los derechos especialísimos reservados a la condición de la propia ciudadanía europea, traducéndose, así, en un documento que permite *“recopilar y reconocer los derechos humanos que se consideran comunes entre todos los Estados Miembros”*<sup>446</sup>.

La Carta, como previsto en su Preámbulo, expresa una compilación de los principios generales recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, del Consejo de Europa, de los derechos económicos y sociales enunciados en la Carta Social Europea, también del Consejo de Europa, en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales y Fundamentales de los Trabajadores-Carta Social, de la Unión Europea, de los principios que derivan de las tradiciones constitucionales comunes de los países de la UE, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dispone su preámbulo:

*“La presente Carta reafirma, respetando las competencias y misiones de la Comunidad y de la Unión, así como el principio de subsidiariedad, los derechos reconocidos especialmente por las tradiciones constitucionales y las obligaciones internacionales comunes de los Estados miembros, el Tratado de*

---

<sup>446</sup> VILLÁN DURÁN, C., *Curso...*, op. cit., p. 189.



*la Unión Europea y los Tratados comunitarios, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas Sociales adoptadas por la Comunidad y por el Consejo de Europa, así como por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.*

Más allá del preámbulo introductorio, contiene 54 artículos distribuidos en 7 capítulos:

- capítulo I: dignidad (dignidad humana, derecho a la vida, derecho a la integridad de la persona, prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado).
- capítulo II: libertad (derechos a la libertad y a la seguridad, respeto de la vida privada y familiar, protección de los datos de carácter personal, derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, libertad de expresión e información, libertad de reunión y asociación, libertad de las artes y de las ciencias, derecho a la educación, libertad profesional y derecho a trabajar, libertad de empresa, derecho a la propiedad, derecho de asilo, protección en caso de devolución, expulsión y extradición).
- capítulo III: igualdad (igualdad ante la ley, no discriminación, diversidad cultural, religiosa y lingüística, igualdad entre hombres y mujeres, derechos del menor, derechos de las personas mayores, integración de las personas discapacitadas).
- capítulo IV: solidaridad (derecho a la información y a la consulta de los trabajadores en la empresa, derecho de negociación y de acción colectiva, derecho de acceso a los servicios de colocación, protección en caso de despido injustificado, condiciones de trabajo justas y equitativas, prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo, vida familiar y vida profesional, seguridad social y ayuda social, protección de la salud, acceso a los servicios de interés económico general, protección del medio ambiente, protección de los consumidores).

- capítulo V: ciudadanía (derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo y derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales, derecho a una buena administración, derecho de acceso a los documentos, Defensor del Pueblo Europeo, derecho de petición, libertad de circulación y de residencia, protección diplomática y consular).
- capítulo VI: justicia (derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, presunción de inocencia y derechos de la defensa, principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito).
- capítulo VII: disposiciones generales.

En su origine, y así como otros instrumentos de derechos humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea tampoco disponía de naturaleza vinculante, y tal situación, en lo general, se debía al hecho de que *“la Comunidad Europea no ha recibido competencias por parte de los Estados para adoptar medidas normativas generales en materia de derechos humanos, siendo preciso una reforma de los Tratados si se desea atribuirles tal competencia”*, como ha declarado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su Dictamen 2/1994, de 28 de marzo de 1996<sup>447</sup>.

En este contexto, aunque careciendo la “Carta” de atributo vinculante, y más presentándose como un compromiso moral y político, o *“una declaración sin valor jurídico”*<sup>448</sup>, sus efectos jurídicos concretaran en más o menos tiempo en la integración europea, por la propia tradición constitucional de protección a los derechos humanos por los Estados miembros, no pudiéndose desconocer, según consta en el mismo Dictamen 2/1994, que *“ese respeto de los derechos humanos constituye ‘un requisito para la legalidad de los actos comunitarios’, y, por tanto, ‘ha de guiar la actividad de los órganos de las Comunidades Europeas’*<sup>449</sup>.

---

<sup>447</sup> DIEZ DE VELASCO, M., *Instituciones.....*, op. cit., p. 580.

<sup>448</sup> VILLÁN DURÁN, C., *Curso...*, op. cit., p. 189.

<sup>449</sup> GONZALES CAMPOS, J. D.; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I.; SÁENZ DE SANTA MARIA, P. A., *Curso ...*, op. cit., p. 762.

#### **a.4 – TRATADO DE LISBOA**

El Tratado de Lisboa, del 13 de diciembre de 2007, en vigor el 1 de diciembre de 2009, sustituyó el Tratado aprobado el 18 de junio de 2004, conocido como Tratado Constitucional de la Unión Europea o Constitución Europea, que, aprobado por el Parlamento Europeo el 12 de enero de 2005<sup>450</sup>, fue rechazado por Francia y Holanda en referéndum con alta participación<sup>451</sup>, el que frustró el intento de una Constitución Europea.

El borrador del Tratado de Lisboa fue propuesto el 19 de mayo de 2007 por la Presidenta alemana del Consejo de la Unión Europea, abandonando la idea de una Constitución Europea y limitándose a presentar modificaciones – Tratado de Reforma – a los tratados en vigor: el Tratado de la Unión Europea – Tratado de Maastrich – y el Tratado de la Comunidad Europea – Tratado de Roma.

Con el Tratado de Lisboa, se reforzó los derechos humanos como uno de los valores fundamentales de la Unión Europea, como está proclamado en su artículo 2:

*“La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”.*

---

<sup>450</sup> Con 500 votos a favor, 137 en contra y 40 abstenciones.

<sup>451</sup> Reprobación de 69% en Francia y 63% en Holanda.

A partir del Tratado de Lisboa, y salvo cuanto a Reino Unido y Polonia<sup>452</sup>, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea pasó a ser reconocida con efectos jurídicos vinculantes a todos los Estados-partes de la Unión Europea, y con mismo valor jurídico del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Más allá, el Tratado de Lisboa obliga a la Unión Europea a negociar su adhesión a la Convención Europea de Derechos Humanos, el que significará que los actos de la Unión Europea o de sus países integrantes que violen la Convención podrán estar sometidos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Y tal es la importancia de Unión Europea en el marco de los derechos humanos, que ha llevado a KOFI ANNAN a declarar: *“La Unión Europea, por su parte, tampoco es ajena a muchas de las contradicciones de EE.UU, pero tiene el deber de asumir la tarea de reconstruir la comisión pues, ‘si no es esta quién lucha para que los derechos humanos sean respetados en todos los lugares, - se pregunta Kofi Annan, Secretario General de Naciones Unidas – ¿quién lo hará?”*<sup>453</sup>.

## **b – PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA UNIÓN EUROPEA**

En continuación se pasa a exponer algunos datos de los órganos de la Unión Europea que se encuentran involucrados con la defensa de los derechos humanos tanto con base en una tutela no-jurisdiccional como en una tutela jurisdiccional.

---

<sup>452</sup> La situación de Reino Unido y Polonia ha sido excepcionada por el Tratado de Lisboa, según su Protocolo 7, artículos 1 y 2: *“Artículo 1.1. La Carta no amplía la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni de ningún órgano jurisdiccional de Polonia o del Reino Unido para apreciar que las disposiciones legales o reglamentarias o las disposiciones, prácticas o acciones administrativas de Polonia o del Reino Unido sean incompatibles con los derechos, libertades y principios fundamentales que reafirma. 2. En particular, y a fin de no dejar lugar a dudas, nada de lo dispuesto en el título IV de la Carta crea derechos que se puedan defender ante los órganos jurisdiccionales de Polonia o del Reino Unido, salvo en la medida en que Polonia o el Reino Unido hayan contemplado dichos derechos en su legislación nacional. Artículo 2. En la medida en que una disposición de la Carta se refiera a legislaciones y prácticas nacionales, sólo se aplicará en Polonia o en el Reino Unido en la medida en que los derechos y principios que contiene se reconozcan en la legislación o prácticas de Polonia o del Reino Unido”*. Texto disponible en <www.lisbon-treaty.org> [Consulta: 13 de diciembre de 2010].

<sup>453</sup> HERRAIZ, I., *La crisis de los Derechos Humanos*, artigo publicado en 30 de abril de 2003, disponible en web <www.lainsigna.org> [Consulta: 20 de julio de 2008].

## **b.1 – TUTELA NO-JURISDICCIONAL**

Esta tutela se caracteriza como no-jurisdiccional por ser ejercida por los órganos de la Unión Europea que integran su estructura general, y que, a pesar de que muchas de sus decisiones se traduzcan en obligatorias, sus mecanismos de vigilancia y garantía de cumplimiento de los derechos humanos no se someten necesariamente a los rigores que emergen de los principios judiciales.

### **b.1.1 – CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA**

Por el Consejo se destaca la actividad de control político a la que están sometidos los Estados-miembros, incluso en lo que se refiere al respeto a los derechos humanos, principalmente en vista de las modificaciones introducidas por el Tratado de Ámsterdam, y que, entre otras novedades, como destaca PAOLO MENGGOZZI, se apunta *“la habilitación del Consejo para la adopción de acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”*<sup>454</sup>.

Con respecto a este tema, dispone el apartado 1 del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea que *“el Consejo, reunido en su composición de Jefes de Estado o de Gobierno, por unanimidad y a propuesta de un tercio de los Estados miembros o de la Comisión y previo dictamen conforme del Parlamento Europeo, podrá constatar la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de principios contemplados en el apartado 1 del artículo 6, tras invitar al Gobierno del Estado miembro de que se trate a que presente sus observaciones”*, pudiendo, acaso constatada dicha violación, decidir, por mayoría de votos, sobre la suspensión de los derechos derivados de la aplicación del Tratado<sup>455</sup>.

---

<sup>454</sup> MENGGOZZI, P., *Derecho Comunitario ...*, op. cit., pp. 34-35.

<sup>455</sup> Ídem, p. 332.

### **b.1.2 – PARLAMENTO EUROPEO**

En tema de derechos humanos tiene por atribución el estudio de los Informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, disponiendo de instituciones previstas en su Reglamento, como la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos Interiores, que tiene por atribución estudiar la situación de los derechos humanos en los Estados-miembros de la Unión Europea, entre ellos los asuntos tratados por el Observatorio Europeo sobre el Racismo y la Xenofobia, y cabiéndole emitir Informe anual sobre el tema, así como por la Comisión de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia<sup>456</sup>, y por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades<sup>457</sup>.

### **b.1.3 – DEFENSOR DEL PUEBLO**

Trátase de un órgano individual e independiente, nombrado por el Parlamento Europeo, con su existencia introducida en el sistema de la Unión Europea por el Tratado de Maastricht, como medida para crear un órgano no-jurisdiccional encargado de conocer los casos de mala administración de las instituciones u órganos comunitarios, así como actuar contra los actos irregulares de la Administración, salvo en cuanto a las actividades jurisdiccionales de sus Tribunales, siendo sus atribuciones y finalidades similares al del “Ombudsman”.

En su labor, cabe proceder a las investigaciones de las irregularidades, actuando de oficio o por provocación de cualquier ciudadano comunitario o persona física o jurídica que resida o tenga domicilio social en un Estado-miembro, en estos casos debiendo la reclamación encaminarse directamente al Defensor, o por intermedio de un miembro del Parlamento Europeo, no admitiéndose la reclamación cuando el hecho se encuentre sometido a la instancia judicial.

---

<sup>456</sup> VILLÁN DURÁN, C., *Curso ...*, op. cit. p. 189.

<sup>457</sup> Existe aún el “Mediador Europeo”, creado con base en el art. 195, del Tratado de Ámsterdam, pero sin competencia en el tema específico de los derechos humanos, cabiéndole controlar la administración de las instituciones comunitarias e investigarlas, mediante quejas de los particulares.

El procedimiento de investigación se traduce en encaminar la reclamación al órgano investigado, el cual tendrá tres meses para manifestarse, limitándose el Defensor a elaborar un Informe sobre el caso, para conocimiento del Parlamento, ya que no dispone de atribuciones sancionadoras. Al Parlamento le cabe instrumentalizar la superación del acto irregular, ejerciendo, para tanto, presión política sobre el órgano investigado.

Como ha destacado PAOLO MENGGOZZI, *“el Defensor del Pueblo puede desempeñar, en cualquier caso, una importante función en la promoción y aumento de la eficacia de la protección de los derechos de los particulares en el desarrollo de su papel de auxiliar del Parlamento Europeo. Así, a través del informe que aquél presenta cada año al Parlamento, realizará una radiografía actualizada y fidedigna de las disfunciones de la administración comunitaria, idónea también para poner en evidencia las lagunas en el sistema de libertades y las deficiencias de formulación normativa y de protección de los derechos”*<sup>458</sup>.

## **b.2 – TUTELA JURISDICCIONAL**

Como ya se ha afirmado en líneas anteriores, la jurisdicción comunitaria no es competente para conocer las cuestiones de derechos humanos, sólo manifestándose sobre el tema reflejamente, a través de aquellos derechos que forman parte de los principios generales de la propia constitución comunitaria. Ejemplos de esta manifestación, son las mencionadas sentencias del 11 de noviembre de 1969 (asunto Stauder), 17 de diciembre de 1970 (asunto Internationale Handelsgesellschaft), y del 14 de mayo de 1974 (asunto “Nold”), por las cuales se declara que los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del derecho cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al ser comunes a las tradiciones constitucionales de los Estados-miembros, y que la salvaguardia de estos derechos debe ser asegurada en el marco de la estructura y los objetivos de la Comunidad. Más allá, el Dictamen 2/1994, de 28 de marzo de 1996, destaca como requisito para la legalidad de los actos comunitarios la observancia a los derechos

---

<sup>458</sup> MENGGOZZI, P., *Derecho Comunitario ...*, op. cit., p. 108.

humanos, y que por eso debe guiar la actividad de los órganos de las Comunidades Europeas.

### **b.2.1 – TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA**

Es el órgano jurisdiccional en el ámbito comunitario europeo, creado en 1952<sup>459</sup>, con sede en Luxemburgo, formado por un Juez de cada Estado-miembro, para asegurar la representación de los distintos sistemas jurídicos nacionales, y por ocho abogados generales; todos, jueces y abogados, nombrados por un período de seis años, con renovación parcial de su composición cada tres años.

Tiene por competencia garantizar la aplicación del derecho comunitario y la uniformidad de su interpretación, en litigios en que pueden ser parte los Estados-miembros, las instituciones comunitarias, las empresas y los particulares. Se reúne en sesión plenaria, “Gran Sala”, integrada por once Jueces, así como en “Salas” de tres o cinco jueces, definidas en razón de la complejidad e importancia del asunto. Al Tribunal de Justicia cabe elegir su Presidente por un período de tres años.

#### **b.2.1.1 – MECANISMOS DE ACTUACIÓN**

Las actividades jurisdiccionales de aquel órgano judicial se producen principalmente por medio de cuatro especies de procedimientos: la “cuestión prejudicial”; el “recurso de incumplimiento”; el “recurso de anulación”; y el “recurso por omisión”.

##### **b.2.1.1.1 – CUESTIÓN PREJUDICIAL**

Trátase de una iniciativa tendiente a evitar la divergencia entre las decisiones nacionales y las comunitarias, y que es provocado por los Jueces nacionales, en sus dudas en cuanto a la interpretación o validez de la norma comunitaria, considerándose que estos también son garantizadores de aquel derecho. Es así, una

---

<sup>459</sup> El Tratado de Niza ha introducido considerables modificaciones en la estructura y competencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia.



medida que pretende asegurar a los jueces nacionales la observancia de la interpretación del Derecho Comunitario afirmada por la respectiva jurisdicción comunitaria.

Tiene carácter incidental y sólo es obligatoria cuando la Resolución del órgano judicial es definitiva, es decir, no sea susceptible de un recurso a la instancia superior, conforme normas procesales del derecho interno.

#### **b.2.1.1.2 – RECURSO POR INCUMPLIMIENTO**

Es un recurso que asegura al Tribunal acompañar el cumplimiento de la legislación comunitaria por los Estados-miembros, y que puede ser de iniciativa de éstos o de la Comisión Europea. En caso que resulte comprobado el incumplimiento, el Estado está obligado a superarlo.

#### **b.2.1.1.3 – RECURSO DE ANULACIÓN**

Por esta medida se pretende controlar la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión Europea, con la declaración de nulidad si es reconocida la violación a la normativa comunitaria. Pueden requerirlo los Estados-miembros, el Consejo, la Comisión y el Parlamento con relación a una disposición comunitaria, o los particulares con relación a los actos jurídicos que les afectan directa e individualmente.

#### **b.2.1.1.4 – RECURSO POR OMISIÓN**

Pretende superar la inercia del Parlamento, del Consejo o de la Comisión, en cuanto a las iniciativas que deberían adoptar, caracterizándose aquella como un incumplimiento al Tratado. El recurso se puede interponer por los Estados-miembros, las demás instituciones de la Comunidad y las personas físicas o jurídicas, éstas en condiciones específicas.

## **b.2.2 – TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA**

El Tribunal de Primera Instancia-TPI fue creado en 1988<sup>460</sup>, por el Consejo Europeo, por iniciativa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y tiene por competencia juzgar determinados asuntos, como las cuestiones de competencia y los recursos de los particulares. Está compuesto por al menos un Juez de cada Estado-miembro y *“su creación ha pretendido mejorar la protección judicial en los recursos que requieren un examen profundo de hechos complejos y permitir al T.J.C.E. concentrarse en su labor esencial, que es la de velar por la interpretación uniforme del derecho comunitario”*<sup>461</sup>.

De sus Resoluciones cabe recurso de casación al Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de derecho y en casos que se considere que existe un riesgo grave de que se vulnere la unidad y la coherencia del derecho comunitario.

## **2 – AMÉRICA**

En el continente americano la protección de los derechos humanos se encuentra bien desarrollado, con la existencia de un relevante órgano de tutela no-jurisdiccional, el Comité Interamericano de Derechos Humanos, con alcance a todos los treinta y cinco países miembros de la Organización de los Estados Americanos. En nivel jurisdiccional es también importante registrar la existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, aunque no tenga alcance a todos los países del continente, ejerce destacada actuación en la región.

## **A – ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS –OEA**

La Organización de los Estados Americanos-OEA es una institución regional del sistema de cooperación política general, y fue creada por la Carta de Bogotá<sup>462</sup>,

---

<sup>460</sup> D.O.C.E., 1988, L 319.

<sup>461</sup> DIEZ DE VELASCO, M., *Las Organizaciones.....*, op. cit., p. 602.

<sup>462</sup> Reformada por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Buenos Aires", suscrito el 27 de febrero de 1967, en la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria; por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los

de 1948. Congrega a los países de las tres Américas y Caribe<sup>463</sup>, totalizando treinta y cinco miembros<sup>464</sup>, con su sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Fue constituida por la Carta de la Organización de los Estados Americanos, firmada en Bogotá el 30 de abril de 1948, en IX Conferencia Interamericana, en vigor el diciembre de 1951<sup>465</sup>. Es la más antigua organización regional de países, con su origen en la Primera Conferencia Internacional Americana, de octubre de 1889 a abril de 1890, en Washington, D.C.

Ha sido creada para alcanzar en los Estados americanos *“un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”*, conforme artículo 1º de la Carta, constituyendo el principal forum gubernamental político, jurídico y social de la región para el diálogo multilateral y la toma de decisiones basadas en cuatro pilares: la democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Actúa, todavía, en actividades de áreas prioritarias como la promoción de la paz, el fomento del comercio y la lucha contra los problemas de la pobreza, narcotráfico y la corrupción<sup>466</sup>.

---

Estados Americanos "Protocolo de Cartagena de Indias", aprobado el 5 de diciembre de 1985, en el decimocuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General; por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Washington", aprobado el 14 de diciembre de 1992, en el decimosexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, y por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Managua", adoptado el 10 de junio de 1993, en el decimonoveno período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.

<sup>463</sup> La OEA ha conferido el status de observador permanente a 62 países y a la Union Europea.

<sup>464</sup> De los 35 países, 21 son miembros originales: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Adherirán a la OEA posteriormente: Barbados, Trinidad y Tobago (1967), Jamaica (1969), Granada (1975), Suriname (1977), Dominica, Santa Lucía (1979), Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas (1981), Las Bahamas (1982), Saint Kitts y Nevis (1984), Canadá (1990), Belice y Guyana (1991). Cuba fue excluida de la participación en el sistema en 1962. La exclusión de Cuba ha sido reconsiderada el 3 de junio de 2009, por la Resolución AG/RES. 2438 (XXXIX-O/09). Honduras ha sido suspendida, el 5 de julio de 2009, del derecho de participación activa en la OEA, con base en el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, y como consecuencia del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

<sup>465</sup> La Carta fue reformada por el Protocolo de Buenos Aires, firmado en 1967, en vigor el febrerode 1970; por el Protocolo de Cartagena de las Indias, firmado en 1985, en vigor en noviembre de 1988; por el Protocolo de Managua, firmado en 1993, en vigor el 29 de enero de 1996; y por el Protocolo de Washington, firmado en 1992, en vigor el 25 de septiembre de 1997.

<sup>466</sup> De conformidad con la información oficial de la OEA, disponible en la web <www.oas.org>.

Su estructura se compone por la Asamblea General, en la cual están representados cada uno de los Estados-miembros y es el principal órgano coordinador de sus actividades; la Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores, órgano de naturaleza consultiva y que actúa en cuestiones urgentes; el Comité Jurídico Interamericano, órgano consultivo en temas jurídicos; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano encargado de la promoción y protección de los derechos humanos; y la Secretaría General, órgano ejecutivo de la OEA. Más allá de éstos, hay una serie de órganos especializados de la estructura principal, así como órganos subsidiarios<sup>467</sup>.

## **a – LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS**

En el escenario de América, los derechos humanos pasan a tener reconocimiento con la Organización de los Estados Americanos-OEA, instituida por la Carta de la Organización de Estados Americanos, ocasión en que fue adoptada la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, siendo ésta la primera expresión internacional de reconocimiento a aquellos derechos.

La Carta, ha previsto, en su artículo 106, la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de una Convención, determinando *“la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de los otros órganos encargados de esa materia”*.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, firmada en Bogotá el 30 de abril de 1948, en IX Conferencia Interamericana, no obstante su importancia histórica como primero instrumento internacional de derechos humanos, no tiene reconocido su valor jurídico, pues no forma parte de la Carta de la OEA y no es considerada como un Tratado. La Declaración contiene 38 artículos, y cuanto a los derechos humanos y fundamentales dispone sobre el derecho a la vida, a la libertad,

---

<sup>467</sup> La especificidad de esta estructura se puede encontrar en DIEZ DE VELASCO, M., *Las Organizaciones Internacionales*, op. cit., pp. 693-699; PASTOR RIDRUEJO, J. A., *Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales*, op. cit., pp. 795-797.

a la seguridad e integridad de la persona, a igualdad ante la Ley, a libertad religiosa y de culto, libertad de investigación, opinión, expresión y difusión, protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar, a la constitución y a la protección de la familia, de protección a la maternidad y a la infancia, de residencia y tránsito, inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad y circulación de la correspondencia, preservación de la salud y al bienestar, a la educación, a los beneficios de la cultura, al trabajo y a una justa retribución, al descanso y a su aprovechamiento, a la seguridad social, al reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles, a la justicia, a nacionalidad, al sufragio y de participación en el gobierno, de reunión, de asociación, a la propiedad, de petición, a la protección contra la detención arbitraria, a proceso regular y de asilo.

A su vez, el principal instrumento de protección a los derechos humanos en el sistema interamericano es la Convención Americana sobre la Protección de los Derechos del Hombre o Convención Americana sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969, adoptada en la Conferencia inter-gubernamental promovida por la OEA en San José, Costa Rica, con vigencia a partir del 18 de julio de 1978<sup>468</sup>, y también conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”.

En el sistema regional americano de protección a los derechos humanos se prevé aún la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, con entrada en vigor el 28 de febrero de 1987; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en vigor desde 03 de mayo de 1995 y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en vigor el 28 de marzo de 1996.

El 11 de septiembre de 2001, fue aprobada la Carta Democrática Interamericana, basada en los principios democráticos y de derechos humanos.

Específicamente en cuanto a los órganos de defensa de los derechos humanos, en 1959 se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, prevista desde 1948 por la Carta de la Organización de Estados Americanos, y con la

---

<sup>468</sup> Cuando se deposita el undécimo instrumento de ratificación.

Convención Americana se instituyó, en 1979, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La tutela se realiza, también, por la Comisión Interamericana de Mujeres, por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, y por Relatores Especiales<sup>469</sup>.

En la secuencia se pasa a breves registros de algunos aspectos de los principales instrumentos de derechos humanos en seno de la OEA: la Convención Americana de Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. La Carta de la Organización de Estados Americanos no será mencionada con destaque pues no ha definido un cartel de derechos humanos, apenas tratando de principios y compromisos a ser observados por los estados-partes cuanto a aquellos derechos, el mismo ocurriendo con el “Protocolo de Buenos Aires” que, mismo disponiendo sobre los temas económicos, sociales y culturales, se ha limitado a definirlos como desafíos al desarrollo en la región.

#### **a.1 – CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS - PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA**

Su contenido traduce un catálogo de derechos civiles y políticos definidos en 23 artículos, e incluso presentando algunas novedades en relación a otros instrumentos conocidos hasta el momento en que fue adoptada, el 22 de noviembre de 1969 - como el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Europea de Derechos Humanos -, como el reconocimiento del derecho a la personalidad jurídica, al derecho de reparación por denegación de justicia, al derecho de rectificación, el derecho al nombre, a la nacionalidad, a la igualdad ante la ley, a los derechos del niño y el derecho de asilo. Los demás derechos contemplados son: derecho a la vida, derecho a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y servidumbre, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y de retroactividad, protección de la honra y de la dignidad, libertad de

---

<sup>469</sup> Relator Especial para la Libertad de Expresión; Relator sobre los Derechos de la Mujer; Relator sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias; Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad; Relator sobre los Derechos de la Niñez.

conciencia y de religión, libertad de pensamiento y de expresión, derecho de rectificación o respuesta, derecho de reunión, libertad de asociación, protección a la familia, derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad privada, derecho de circulación y de residencia, derechos políticos y protección judicial.

Cuanto a los derechos sociales, culturales o económicos, la Convención tiene el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como “Protocolo de San Salvador”, suscrito el 17 de noviembre de 1988, y el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la Pena de Muerte, suscrito en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990.

Desde 22 de noviembre de 1969, firmaron el Pacto de San José de Costa Rica diecinueve países: Argentina, Barbados , Chile, Colombia, Costa Rica , Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. La ratificaran, sin antes firmarla, siete países: Bolivia, Brasil, Dominica, Haití, México, Suriname y Trinidad y Tobago. La firmó, y no la ratificó, Estados Unidos. No la firmaran ni ratificaran, ocho países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belize, Canadá, Guyana, San Kitts y Nevis, Santa Lucia y San Vicente y Granadinas<sup>470</sup>.

## **a.2 – CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA**

La relevancia de la Carta Democrática Interamericana en relación a los derechos humanos se traduce en el propio contenido de aquel documento al registrar que *“la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia”,* y que *“la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática, y reconociendo la importancia que tiene el*

---

<sup>470</sup> Datos en septiembre de 2011.

*continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la consolidación de la democracia”.*

Más allá, la Carta contiene disposiciones específicas cuanto a la protección de derechos humanos en el contexto de la OEA, al tratar del tema en el título II – “La democracia y los derechos humanos”:

*“artículo 7 - La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.*

*Artículo 8 - Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.*

*Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio.*

*Artículo 9 - La eliminación de toda forma de discriminación, especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.*

*Artículo 10 - La promoción y el fortalecimiento de la democracia requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de los trabajadores y la aplicación de normas laborales básicas, tal como están consagradas en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así como en otras convenciones básicas afines de la OIT. La democracia se fortalece con el mejoramiento de las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores del Hemisferio”.*



Por fin la Carta Democrática dispone, por su artículo 21, que mismo en los casos en que un país sea suspendido del derecho de participación en la OEA<sup>471</sup> *“deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos”*.

## **b – PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS**

En el ámbito de la Organización de los Estados Americanos existen dos órganos creados específicamente para la protección de los derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano no-jurisdiccional, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano jurisdiccional.

### **b.1 – TUTELA NO JURISDICCIONAL**

En el seno regional americano, la tutela no-jurisdiccional de los derechos humanos es principalmente ejercida por un órgano específico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La tutela de derechos humanos también es ejercida por la Comisión Interamericana de Mujeres, por el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, por el Relator Especial para la Libertad de Expresión, el Relator sobre los Derechos de la Mujer, Relator sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, Relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, por el Relator sobre los Derechos de la Niñez y por el Relator sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial.

#### **b.1.1 – COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS - CIDH**

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH es el principal órgano de promoción y defensa de los derechos humanos en el escenario regional

---

<sup>471</sup> Honduras ha sido el primero país a soportar los efectos de la Carta Democrática Interamericana, y con base en su artículo 21, el 5 de julio de 2009, ha sido suspendido del derecho de participación activa en la OEA, y como consecuencia del golpe de Estado del 28 de junio de 2009

americano. Creada en 1959, a ella se encuentran vinculados todos los treinta y cinco países que firmaron la Carta de la OEA, no limitando su competencia a la aceptación previa por los países, como ocurre por regla en los demás sistemas internacionales de protección.

Su sede está en la ciudad de Washington, D.C., y está integrada por siete miembros, nombrados por la Asamblea General, entre candidatos propuestos por los Estados-miembros de la OEA, para un mandato de cuatro años, prorrogable por igual período, y que ejercen sus actividades a título personal, sin dependencia de los países de los que son nacionales. Sus sesiones son ordinarias y extraordinarias, habiéndose reunido por primera vez en 1960.

La labor inicial de la Comisión Interamericana en la protección de los derechos humanos se inició en 1961, cuando pasó a realizar visitas “in loco” con el objetivo de observar la situación general de aquellos derechos en determinado país, publicando Informes Especiales, y también investigando una situación particular<sup>472</sup>. A partir de 1965 pasó a recibir y procesar denuncias o peticiones sobre casos individuales de violaciones a los derechos humanos<sup>473</sup>.

Dato importante en cuanto a la Comisión es la posterior adopción de la Convención Americana sobre la Protección de los Derechos Humanos, que entró en vigor en 1978 y que ha sido ratificada por veinte cinco países<sup>474</sup> de los treinta y cinco miembros de la OEA, siendo la última ratificación de 1999, por Trinidad y Tobago. La Convención, a pesar de definir las atribuciones y procedimientos de la Comisión - así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está creada a partir de entonces – no por eso limitó sus labores a aquellos veinte cinco países que la ratificaron, sino que la Comisión ha continuado obligando a todos los países

---

<sup>472</sup> En esta actividad la CIDH ha realizado, hasta 2010, 92 visitas.

<sup>473</sup> Hasta 1997 se cuentan más de 12.000 denuncias recibidas; en 1998, 571; 1999, 520; 2000, 658; 2001, 885; 2002, 979; 2003, 1050; 2004, 1319; 2005, 1330; 2006, 1325; 2007, 1456; 2008, 1323; 2009, 1431, según datos de la Comisión Interamericana, en <<http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/cap.3b.09.sp.htm>> [Consulta: 8 de diciembre de 2010].

<sup>474</sup> Estos países son: Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. En 26 de mayo de 1998, Trinidad y Tobago había denunciado la Convención, por comunicación dirigida al Secretario General.

integrantes de la OEA, salvo en lo referido a las denuncias interestatales. En este contexto, como ha registrado CONCEPCIÓN ESCOBAR HERNÁNDEZ, la Comisión Interamericana traduce una doble naturaleza en sus actividades, “*en tanto que órgano de la O.E.A. y en tanto que órgano específico del Pacto de San José*”<sup>475</sup>. En el primer caso, legitimando su actuación por los mecanismos extra-convencionales, basados en la propia Carta de la Organización de Estados Americanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y en el segundo caso, por los mecanismos convencionales, vinculados al mencionado Pacto de San José de Costa Rica.

Y, aunque aquellas situaciones parezcan demostrar la existencia de dos instrumentos con igual finalidad, ya que todos los treinta y cinco Estados-miembros se someten a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en realidad la distinción entre ambos se presenta por el hecho de que en la protección por los mecanismos convencionales se tiene la participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más allá de la Comisión, al tiempo que los mecanismos extra-convencionales se limitan a la protección por esta Comisión.

Las principales atribuciones de la Comisión Interamericana en la defensa de los derechos humanos, juntamente con sus objetivos de promoción de aquellos derechos, son recibir, analizar e investigar peticiones individuales, así como observar la vigencia general de aquellos derechos en los Estados-miembros, realizando visitas “*in loco*”, haciendo recomendaciones a los miembros de la OEA, incluso pudiendo requerir, en casos urgentes de violaciones a dichos derechos, que los Estados adopten “medidas cautelares” al respeto, o así mismo que la Corte Interamericana determine “medidas provisionales”.

El Reglamento de la Comisión entró en vigor el 31 de diciembre de 2009<sup>476</sup>.

---

<sup>475</sup> ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., “Logros: La Acción de la O.E.A. en el ámbito de los derechos humanos”, en DIEZ DE VELASCO, *Las Organizaciones...*, op. cit., p. 687.

<sup>476</sup> Disponible en <<http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/Reglamento CIDH.htm>> [Consulta: 17 de noviembre de 2010].

### **b.1.1.1 – MECANISMOS DE ACTUACIÓN**

Para desarrollar sus atribuciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispone de mecanismos específicos, que se observan por los procedimientos de “Informe”, “Denuncia Interestatal” y “Denuncia Particular”<sup>477</sup>.

#### **b.1.1.1.1 – INFORME**

La competencia genérica de la OEA en asuntos de derechos humanos, que resulta de su Carta constitutiva, así como de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948, le asegura realizar un estudio de la situación de dichos derechos, con investigación en el territorio de cualquier Estado-miembro de la OEA, con el objetivo recabar informaciones de autoridades locales, organizaciones de derechos humanos, víctimas, testigos, como también visitas a locales donde exista la posibilidad de violaciones a derechos, como las cárceles y centros de detención.

Tal medida permite concluir sobre la situación de los derechos humanos en el país, para su conocimiento por la Asamblea General de la OEA, por Informes anuales o igualmente por Informes especiales individualizados, traducéndose en un *“procedimiento especialmente idóneo para efectuar el control respecto de supuestos de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos”*<sup>478</sup>.

Mas allá de este procedimiento “geográfico” o por país<sup>479</sup>, se tienen también los procedimientos “temáticos”, de los cuales se ha utilizado la Comisión para los asuntos de los derechos de los pueblos indígenas y de la condición de la mujer<sup>480</sup>.

---

<sup>477</sup> Total de casos y peticiones en trámite por año, de 1997 hasta 2009: 1997, 976; 1998, 945; 1999, 945; 2000, 930; 2001, 936; 2002, 973; 2003, 982; 2004, 1021; 2005, 1137; 2006, 1237; 2007, 1251; 2008, 1376; 2009, 1450. Datos em <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/cap.3b.09.sp.htm>.

<sup>478</sup> ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., “Logros: La Acción de la O.E.A. en el ámbito de los derechos humanos”, en DIEZ DE VELASCO, *Las Organizaciones...*, op. cit., pp. 691-692.

<sup>479</sup> A ello ya se sometieron Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay, conforme expone CONCEPCIÓN ESCOBAR HERNÁNDEZ, Logros: La Acción de la O.E.A. en el ámbito de los derechos humanos”..., op. cit., p. 692.

<sup>480</sup> *Ibidem*.

Son así mecanismos que proporcionan el acompañamiento de la observancia de los derechos humanos en todos los países integrantes de la OEA.

A su vez, bajo el punto de vista convencional, existe también la obligatoriedad de los Estados-parte de la Convención de proporcionar a la Comisión Interamericana las informaciones que ésta solicite sobre la manera en que el derecho interno del Estado-parte asegura la efectividad de las disposiciones contenidas en aquella Convención, conforme está previsto en su artículo 43. A diferencia del procedimiento anterior, de naturaleza extra-convencional, el Informe es producido por el Estado, mientras que aquel era producido por la propia Comisión.

#### **b.1.1.1.2 – DENUNCIA INTERESTATAL**

Este mecanismo, por haber surgido con la Convención y no con la Carta de la OEA y su Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, sólo se encuentra vinculado a los países que la firmaron y que aceptaron la correspondiente competencia de la Comisión, no alcanzando a todos los países que ratificaron la Convención, ni tampoco a todos los miembros de la OEA<sup>481</sup>.

Su objetivo es asegurar la posibilidad de un Estado-parte de denunciar a otro Estado-parte por violación a los derechos humanos establecidos en la Convención, y desde que los Estados-parte implicados hayan expresamente declarado la aceptación de la Comisión al respecto, afirmándose en el caso el principio de la reciprocidad, de modo que no es posible denunciar sin haber aceptado previamente la posibilidad de ser denunciado, así como no es posible denunciar contra quien no ha aceptado la referida condición<sup>482</sup>.

---

<sup>481</sup> Los países que aceptaron son: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Nicaragua, Peru, Uruguay y Venezuela.

<sup>482</sup> El primer caso de denuncia interestatal fue de Nicaragua contra Costa Rica, en 2006, y que fue declarado inadmisibile en 2007. El primer caso de una denuncia interestatal admitida fue el 21 de octubre de 2010, de Ecuador contra Colombia, de conformidad con informaciones en web: <<http://cidh.org/annualrep/2010sp/EC-CO.PI-02ADM.SP.doc>> [Consulta: 5 de febrero de 2011].

### **b.1.1.1.3 – DENUNCIA PARTICULAR**

Es la medida asegurada para examinar los casos de violaciones individualizadas a los derechos humanos, admitiéndose la respectiva denuncia o queja por cualquier persona, sea el propio ofendido o no. En este aspecto, el mecanismo adoptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es más amplio que los demás sistemas convencionales<sup>483</sup>, pudiéndose admitir que se está “*en presencia de una auténtica ‘actio popularis’ del individuo*”<sup>484</sup>.

Otro aspecto innovador con relación a este tema es que en el seno de la Comisión Interamericana la denuncia individual es de aceptación obligatoria en todos los países integrantes de la OEA, no existiendo a este respecto la opción por la cláusula facultativa de someterse a tal control, como es admitido por otros sistemas. En este aspecto, la protección de los derechos humanos por la Comisión se caracteriza como extra-convencional, de naturaleza similar al observado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en cuanto al sistema de Relatores Especiales y sus Procedimientos 1235 y 1503.

Los requisitos para este procedimiento son los conocidos también por los demás sistemas, o sea, no ser anónima la denuncia; haber la víctima agotado los recursos internos; no haber litispendencia, es decir, no estar sometida a otra instancia de protección internacional; y que observe los requisitos formales, como su presentación en el plazo de 6 meses de notificación de la decisión definitiva.

Admitida la denuncia<sup>485</sup>, se solicita información al Estado denunciado, que deberá presentarla en el plazo definido por la Comisión. Recibidas las informaciones y verificado que la violación no subsiste, el caso es archivado. Confirmándose la

---

<sup>483</sup> Esa amplitud lleva la CIDH a ejercer una “*jurisdicción discrecional sobre el conjunto de las peticiones que recibe, toda vez que rechaza un 90% de las mismas antes de entrar a su tramitación, simplemente porque no tiene capacidad para recibir todas las quejas*”, según apunta VILLÁN DURÁN, C., *Curso ...*, op. cit. p. 541.

<sup>484</sup> *Ibidem*.

<sup>485</sup> De 1997 hasta 2010, se tiene el siguiente cuadro de peticiones en las que se ha adoptado una decisión de iniciar trámite: 1997, 147; 1998, 116; 1999, 161; 2000, 110; 2001, 96; 2002, 83; 2003, 115; 2004, 160; 2005, 150; 2006, 147; 2007, 126; 2008, 118; 2009, 122; 2010, 275. Datos en <<http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/CAP.III.B.doc>> [Consulta: 5 de febrero de 2011].

sospecha de violación, la Comisión Interamericana procede a la instrucción del proceso, pudiendo realizar investigaciones, para las cuales los Estados deben posibilitar las facilidades necesarias. Reunidos los elementos que entienda necesarios, la Comisión buscará una “solución amistosa”, bajo la cual se emitirá el Informe respectivo, dándose conocimiento a las partes, a los demás Estados-miembros de la OEA y al Secretario General.

No pudiéndose alcanzar una solución amistosa, la Comisión Interamericana también debe expedir el Informe respectivo, que se puede nombrar como “informe preliminar”, en el cual presentará sus conclusiones en cuanto al reconocimiento o no de la violación denunciada, quedando facultado a presentar las opiniones, proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas. Este Informe, que tiene naturaleza de “mandamiento”<sup>486</sup>, será llevado al conocimiento confidencial del Estado denunciado, que tendrá un plazo de tres meses para solucionar la violación reconocida. En este plazo, si el asunto no se ha resuelto, la Comisión emitirá un dictamen, por mayoría absoluta de sus miembros, para definir si el Estado ha tomado o no las medidas para superación del problema e insistirá en las recomendaciones pertinentes, fijando un plazo para que el Estado adopte las medidas para remediar la situación examinada. Pasado el plazo sin el cumplimiento determinado, la Comisión decidirá, por mayoría absoluta de sus miembros, si publica o no el caso en su Informe anual, dándose por concluido el procedimiento. En este acto de publicidad es que se centra la eficacia del sistema.

Si el país ha aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el incumplimiento en cuanto a las recomendaciones y conclusiones de la Comisión, después de transcurrido aquel plazo de tres meses, será llevado al conocimiento de la Corte, que pasará a asumir la cuestión<sup>487</sup>, como se verá más adelante, en la parte del estudio sobre este órgano.

---

<sup>486</sup> De acuerdo con observaciones de PIOVESAN, F., *Direitos Humanos....*, op. cit., p. 232.

<sup>487</sup> La Comisión ha presentado a la Corte Interamericana en 1997, 2 casos; en 1998, 3; 1999, 7; 2000, 3; 2001, 5; 2002, 7; 2003, 15; 2004, 12; 2005, 10; 2006, 14; 2007, 14; 2008, 9; 2009, 11; 2010, 16. En <<http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/CAP.III.B.doc>> [Consulta: 5 de febrero de 2011].

Importante providencia que puede adoptar la Comisión es que en casos graves y urgentes, mediante previo consentimiento del Estado, y tan sólo provocada por una petición o comunicación, podrá realizar investigaciones en el territorio del país denunciado.

#### **b.1.1.1.4 - MEDIDAS CAUTELARES**

Es un mecanismo que se encuentra previsto en el artículo 25, del Reglamento de la Comisión Interamericana y que la autoriza, en situaciones de gravedad y urgencia, solicitar a un Estado que adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier caso o petición pendiente. Estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables. En consecuencia, el número de medidas cautelares otorgadas no refleja el número de personas protegidas mediante su adopción. El otorgamiento de esas medidas y su adopción por el Estado no constituirá prejulgamiento sobre la violación de los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables<sup>488</sup>.

La medida cautelar adoptarse por iniciativa propia de la Comisión o a solicitud de parte<sup>489</sup>.

#### **b.1.1.2 – RELATORÍAS ESPECIALES**

Junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos funcionan las Relatorías Especiales sobre la Libertad de Expresión, los Derechos de las Mujeres,

---

<sup>488</sup> El total de medidas cautelares otorgadas por año, desde 1998 hasta 2010, ha sido: 1998, 54; 1999, 52; 2000, 52; 2001, 50; 2002, 91; 2003, 56; 2004, 37; 2005, 33; 2006, 37; 2007, 40; 2008, 28; 2009, 34; 2010, 68. En <<http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/CAP.III.B.doc>> [Consulta: 5 de febrero de 2011].

<sup>489</sup> En 2005 fueron solicitadas 265 medidas cautelares; en 2006, 314; en 2007, 250; en 2008, 301; en 2009, 324, en 2010, 375. En <<http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/CAP.III.B.doc>>. [Consulta: 5 de febrero de 2011].



Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias, Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos de las Personas Privadas de Libertad y sobre los Derechos de la Niñez.

#### **b.1.1.2.1 – RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN**

Creada en octubre de 1997, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para atender a las profundas preocupaciones por las restricciones a la libertad de expresión e información en el continente americano, vinculadas a las graves amenazas y problemas que existen para el pleno y efectivo desarrollo de este derecho. Es una oficina permanente, con independencia funcional, estructura operativa y presupuesto propios.

La creación de la Relatoría buscó estimular de manera preferente la conciencia por el pleno respeto a la libertad de expresión e información, considerando el papel fundamental que ésta juega en la consolidación y desarrollo del sistema democrático y en la denuncia y protección de los demás derechos humanos.

Actúa formulando recomendaciones específicas a los Estados miembros sobre materias relacionadas con la libertad de expresión e información, a fin de que se adopten medidas progresivas en su favor, incluso para que modifiquen las leyes y artículos vigentes en sus legislaciones y que afectan la libertad de expresión, con el fin de que las adecuen con los estándares internacionales para una mas efectiva protección del ejercicio de este derecho

La Relatoría busca también reaccionar prontamente a las peticiones y otras comunicaciones en donde se señale que este derecho está siendo vulnerado en algún Estado miembro de la OEA, analizando las denuncias recibidas ante la Comisión referidas a violaciones a la libertad de expresión y remitiendo a dicho organismo sus consideraciones y recomendaciones con respecto a la apertura de casos. Hace seguimiento de los casos abiertos ante la Comisión, requiriendo a la propia Comisión la solicitud de medidas cautelares a los Estados miembros para proteger la integridad personal de los periodistas y otros comunicadores sociales

amenazados o en riesgo de sufrir danos irreparables. La Relatoría colabora con las partes para encontrar soluciones amistosas dentro del marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Relatoría también recibe información sobre el estado de la libertad de expresión en los Estados miembros. Esta información es enviada por distintas organizaciones de defensa de este derecho, periodistas en general y otras fuentes. En los casos que considera que existe una violación grave a la libertad de expresión, la Relatoría emite comunicados de prensa sobre la información recibida manifestando su preocupación a las autoridades y efectuando sus recomendaciones para el restablecimiento de este derecho. En otros casos, la Relatoría se dirige directamente a las autoridades del Estado para obtener mayor información o solicitar que se reparen las violaciones efectuadas<sup>490</sup>.

#### **b.1.1.2.2 – RELATORÍA ESPECIAL SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES**

La Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres ha sido creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1994, para renovar su compromiso de asegurar el pleno respeto y la garantía de los derechos de la mujer en cada uno de los Estados miembros.

Si bien las constituciones de éstos garantizan formalmente la igualdad, el examen por la Comisión de los sistemas legales y las prácticas nacionales ha revelado cada vez más la persistencia de discriminación por razones de género.

Las obligaciones de igualdad y no discriminación siguen sirviendo de puntos de orientación para seleccionar los temas que aborda la Relatoría. Además, la Comisión y su Relatoría ponen especial énfasis en el problema de la violencia contra la mujer, por razones de discriminación de género, tal como lo reconoce la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará).

---

<sup>490</sup> El contenido de este ítem fue adaptado del texto disponible en el sitio oficial de OEA, <<http://www.cidh.oas.org/relatoria/>> [Consulta: 7 de febrero de 2011].

La Relatoría actúa realizando visitas en sitio, formulando recomendaciones específicas a los países, promoviendo los mecanismos de defensa, elaborando Informes por países, asistiendo a la Comisión en la respuesta a peticiones y la preparación de otros informes de violaciones de estos derechos en la región, más allá de realizar y publicar estudios temáticos y de prestar asistencia en la formulación de nueva jurisprudencia dentro del sistema de casos individuales, y apoyar a la investigación de temas más generales que afectan a los derechos de la mujer.

La Relatoría está a cargo de un comisionado nombrado por el plenario de la Comisión<sup>491</sup>.

#### **b.1.1.2.3 – RELATORÍA ESPECIAL DE TRABAJADORES MIGRANTES Y MIEMBROS DE SUS FAMILIAS**

Esa Relatoría fue creada en 1997 a pedido de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA)<sup>492</sup> y tiene su campo de acción delimitado a los trabajadores migrantes y sus familias cuando éstos se encuentran en un país del que no son nacionales.

La Relatoría Especial de Trabajadores Migrantes realiza actividades de monitoreo, siguiendo atentamente como los acontecimientos políticos, sociales o económicos inciden en los flujos migratorios e investigando las prácticas de los estados en materia migratoria. Ejerce actividades de promoción en materia de derechos humanos, elaborando informes y estudios especializados sobre la situación de los trabajadores migratorios y sobre temas relativos a la migración en general. Actúa con prontitud respecto a peticiones o comunicaciones en donde se señale que los derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familias son vulnerados en algún Estado miembro de la OEA.

---

<sup>491</sup> El contenido de este ítem fue adaptado del texto disponible en el sitio oficial de OEA, <<http://www.cidh.oas.org/women/Default.htm>> [Consulta: 7 de febrero de 2011].

<sup>492</sup> AG/RES. 1404 XXVI-O/96 y AG/RES 1480 XXVII-O/97.

El Relator Especial es escogido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre uno de los siete Comisionados<sup>493</sup>.

#### **b.1.1.2.4 – RELATORÍA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS**

Con el objetivo de impulsar, sistematizar, reforzar y consolidar la acción que la propia CIDH venía desarrollando en la materia, la Comisión creó la Relatoría Especial sobre los Pueblos Indígenas en el año de 1990.

En el marco de su labor, se han realizado una serie de visitas a comunidades indígenas, se han efectuado reuniones y establecidas relaciones de colaboración con organismos (gubernamentales y no gubernamentales) encargados de velar por los derechos de los pueblos indígenas. La Relatoría, ha logrado la protección de líderes indígenas amenazados, la liberación de líderes comunitarios perseguidos por su labor de defensa de las tierras tradicionalmente habitadas por sus comunidades, como asimismo, ha facilitado la participación de los pueblos indígenas ante el sistema interamericano de derechos humanos y ante el Grupo de Trabajo de la OEA encargado de elaborar el proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

Dentro de las principales labores de la Relatoría se encuentra la de prestar colaboración permanente al Grupo de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA encargado de elaborar el “Proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Durante los últimos años la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos ha logrado importantes avances en el área de los derechos de los pueblos indígenas, tanto a nivel de la CIDH, que se ve reflejada en los procesos de

---

<sup>493</sup>El contenido de este ítem fue adaptado del texto disponible en el sitio oficial de OEA, <<http://www.cidh.oas.org/Migrantes/Default.htm>> [Consulta: 7 de febrero de 2011].

soluciones amistosas, decisiones en casos individuales y medidas cautelares, como en las resoluciones y sentencias de la Corte Interamericana<sup>494</sup>.

#### **b.1.1.2.5 – RELATORÍA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS**

Inició sus actividades en noviembre de 2004, con el objetivo de conocer sobre la situación de todo tipo de personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión en los Estados miembros.

En sus actividades se encarga de preparar para la Comisión informes sobre la situación carcelaria en un centro de detención en particular, en un país, o a nivel regional o subregional, con las recomendaciones que considere necesarias para la Comisión; emite recomendaciones a los Estados miembros sobre las condiciones de detención o encarcelamiento y darle seguimiento al cumplimiento de dichas recomendaciones; promueve acciones o llamamientos urgentes a los Estados en casos de gravedad respecto de personas detenidas, en orden a que se cumplan sus obligaciones internacionales en esta materia; promueve la adopción de medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole a fin de que se garanticen los derechos de las personas privadas de libertad y de sus familias; coordina acciones de verificación y seguimiento de las condiciones carcelarias en los Estados miembros con las Defensorías del Pueblo o las instituciones nacionales de derechos humanos y realiza cualquier otra acción o gestión que considere necesaria para la protección de las personas privadas de libertad, dentro del mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para alcanzar sus objetivos realiza visitas a los Estados integrantes de la OEA, recopilando información o solicitando a las autoridades del Estado respecto de toda persona privada de libertad y sobre sus condiciones carcelarias, visita lugares de

---

<sup>494</sup> El contenido de este ítem fue adaptado del texto disponible en el sitio oficial de OEA, <<http://www.cidh.oas.org/Indigenas/Mandato.htm>> [Consulta: 7 de febrero de 2011].

detención o centros de privación de libertad de menores de edad, aun sin previo aviso a las autoridades carcelarias.

La Relatoría actúa entrevistando libre y privadamente a personas detenidas o en prisión y a funcionarios y autoridades carcelarias, a los familiares de las personas detenidas, a personas en prisión en calidad de testigos, miembros de organizaciones no gubernamentales, o a cualquier funcionario, autoridad o persona; reúne documentación o utiliza cualquier otro medio adecuado para informarse sobre la situación de las personas privadas de libertad<sup>495</sup>.

## **b.2 – TUTELA JURISDICCIONAL**

En el ámbito regional americano se ha creado un órgano específico de protección jurisdiccional de los derechos humanos, cuyas decisiones vinculan a los Estados-parte denunciados. La importancia de este órgano se refleja por la propia repercusión que los pronunciamientos de la Corte han tenido por los ordenamientos internos, la jurisprudencia nacional, los programas y las prácticas de los Estados

### **b.2.1 – CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**

La Corte es el órgano autónomo de naturaleza jurisdiccional en temas de derechos humanos junto a la Organización de los Estados Americanos.

Creada con la Convención Americana, en su artículo 33, empezó a funcionar el 29 de junio de 1979, ocasión en que se celebró su primera reunión<sup>496</sup>. El 3 de septiembre de 1979 se realizó, en San José de Costa Rica, local de su sede, la ceremonia de instalación. Se compone de siete jueces, independientes, nombrados por la Asamblea General de la OEA, entre candidatos indicados por todos los países que integran aquella Organización, con mandato de seis años, prorrogable por igual período.

---

<sup>495</sup> El contenido de este ítem fue adaptado del texto disponible en el sitio oficial de OEA, <<http://www.cidh.oas.org/PRIVADAS/default.htm>> [Consulta: 7 de febrero de 2011].

<sup>496</sup> Esta primera reunión ocurrió en la sede de la OEA en Washington, D. C.

La Corte Interamericana también puede contar con el nombramiento de Jueces interinos, conforme artículo 6.3 del Estatuto, y que son llamados a preservar el quórum de las sesiones. Hay, todavía, la figura del Juez “ad hoc”, prevista en el artículo 55 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y que son designados a actuar en los casos originados en comunicaciones interestatales, y no pueden conocer de una petición individual sometida a la Corte cuando sean nacionales del Estado demandado<sup>497</sup>.

La Corte funciona en cuatro períodos ordinarios de sesiones al año, pudiendo funcionar en sesiones extraordinarias, cuando convocada por el Presidente del Tribunal o por la mayoría de sus miembros. En los períodos de sesiones la Corte realiza audiencias públicas<sup>498</sup> y emite resoluciones sobre casos contenciosos, adopta medidas provisionales, ejerce la supervisión del cumplimiento de las sentencias y examina los Informes presentados por la Comisión Interamericana.

Junto a la Corte puede actuar el Defensor Interamericano, nombrado por la Corte en los casos en que presuntas víctimas carecen de recursos económicos y no cuenten con representación legal en el procedimiento ante la Corte.

Los escritos a la Corte se pueden enviar por medio electrónico, y cuando contienen la firma de quién los suscribe, es innecesaria la remisión de una copia impresa de éstos. La Corte también puede transmitir documentos y realizar notificaciones a las partes exclusivamente por medios electrónicos, así como la recepción de declaraciones por medios electrónicos audiovisuales.

---

<sup>497</sup> Esta situación es nueva, y fue definida por el nuevo Reglamento de la Corte, que entró en vigor el 1 de enero de 2010. Antes, los jueces “ad hoc” eran utilizados por los Estados cuando entre los Jueces llamados a conocer del caso ninguno era de la nacionalidad del Estado demandado.

<sup>498</sup> En 2010 se celebraron 11 audiencias públicas sobre casos contenciosos, con el recibimiento de las declaraciones orales de 15 presuntas víctimas, 13 testigos y 21 peritos, que suman un total de 49 declaraciones; 10 audiencias sobre medidas provisionales y 22 audiencias sobre supervisión del cumplimiento de sentencias. Datos en <[http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/2010\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/2010_esp.pdf), p. 4> [Consulta: 12 de mayo de 2011].

La competencia de la Corte<sup>499</sup> es contenciosa y consultiva y a ella se someten sólo los países que han aceptado facultativamente su jurisdicción, lo que ocurre actualmente con veinte y un de los veinte cinco países que han adherido a la Convención<sup>500</sup>.

El 1 de enero de 2010 entró en vigor el nuevo Reglamento de la Corte, siendo que el papel de la Comisión Interamericana ante la Corte ha sido la principal reforma que el nuevo Reglamento ha introducido, destacándose las siguientes modificaciones: *“a) la Comisión inicia el procedimiento con el informe de fondo, emitido conforme al artículo 50 de la Convención. Al enviar este informe, la Comisión debe presentar los fundamentos que la llevaron a someter el caso a la Corte. De este modo la Comisión ya no inicia el procedimiento con la presentación de una demanda distinta al informe, sino con la remisión del informe de fondo; b) la Comisión no ofrecerá testigos y declaraciones de presuntas víctimas. De acuerdo al mencionado artículo, sólo en ciertas circunstancias podrá ofrecer peritos; c) en los casos en los que se realice audiencia, la Comisión será la que inicie la misma, exponiendo los motivos que la llevaron a presentar el caso. Sólo podrá interrogar a los peritos en la situación prevista en el artículo 52; y d) al cerrar la etapa de alegatos, la Comisión expone sus observaciones finales”*<sup>501</sup>.

En temas procesales el nuevo Reglamento también implementó modificaciones importantes como: *“la solicitud de lista definitiva de testigos (artículo 46); la presentación de alegatos finales escritos por parte de las presuntas víctimas o sus representantes y el Estado demandado, y de observaciones finales por parte de la Comisión, si así lo desea (artículo 56); los elementos que deben contener los escritos*

---

<sup>499</sup> El profesor emérito de la Universidad Complutense, JOSÉ ANTÓNIO PASTOR RIDRUEJO, en el artículo *La Protección Internacional de los Derechos Humanos: Una Comparación entre el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana*, publicado en la Revista Electronica Iberoamericana-ALCUE, vol., 1, nº. 1, 2007, traza algunas breves consideraciones críticas de la distinción de aquellos Tribunales. El artículo se encuentra disponible en internet: <[http://www.urjc.es/ceib/investigacion/publicaciones/REIB\\_01\\_JA\\_Pastor\\_Ridruejo.pdf](http://www.urjc.es/ceib/investigacion/publicaciones/REIB_01_JA_Pastor_Ridruejo.pdf)> [Consulta: 27 de abril de 2009].

<sup>500</sup> Han aceptado la jurisdicción de la Corte, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, siendo que Trinidad y Tobago denunció al Convenio en mayo de 1998, y que Perú se ha retirado de la aceptación a la jurisdicción contenciosa de la Corte en el período de 1999 a 2001.

<sup>501</sup> Informe de la Corte Interamericana, en [http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/2010\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/2010_esp.pdf), pág. 15.



*de solicitudes, argumentos y pruebas de las presuntas víctimas o sus representantes y de contestación del Estado; la acumulación de medidas provisionales o de la supervisión de cumplimiento de sentencias, cuando se cumplen los requisitos establecidos (artículo 30); lo relativo a la presentación de prueba extemporánea (artículo 57.2), así como aquella prueba presentada de manera incompleta o ilegible y sus consecuencias (artículo 59); las causas de impedimento de testigos y peritos (artículos 48 y 49); el ofrecimiento, citación y comparecencia de declarantes (artículo 50), y 17 el desarrollo de audiencias ante el Tribunal (artículo 51). Asimismo, el nuevo Reglamento regula el sometimiento de casos por los Estados, conforme al artículo 61 de la Convención Americana. Dentro de sus artículos transitorios, el nuevo Reglamento estipula que los casos contenciosos que hubiesen sido sometidos a la consideración de la Corte antes del 1 de enero de 2010 se continuarán tramitando, hasta que se emita sentencia, conforme al Reglamento anterior y que, cuando la Comisión hubiese adoptado el informe de fondo con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo Reglamento, la presentación del caso ante la Corte se registrará por el Reglamento anterior pero sólo en lo referente al inicio del proceso y la presentación de demanda. En una tramitación posterior se aplica el nuevo Reglamento”<sup>502</sup>.*

#### **b.2.1.1 – COMPETENCIA JURISDICCIONAL**

En su jurisdicción contenciosa, prevista en el artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte decide si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados o estipulados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables al sistema interamericano, por haber incumplido con sus obligaciones de respetar y garantizar esos derechos. Más allá, supervisa el cumplimiento de las medidas dictadas en sus resoluciones.

Los casos sometidos a la Corte son las denuncias no resueltas en el seno de la Comisión Interamericana, y desde que el Estado denunciado haya aceptado su

---

<sup>502</sup> Ídem, págs. 16-17.

jurisdicción, caso en que este, así como la Comisión Interamericana, puede llevar el caso a la Corte<sup>503</sup>, de acuerdo con el artículo 61.1 de la Convención.

Admitida la demanda, la víctima o sus familiares pueden presentar solicitudes, argumentos o elementos de prueba, en cualquier fase del proceso<sup>504</sup>. Es decir, aún que en el sistema americano no haya previsión de denuncia particular junto a la Corte, cuando el caso esté a ella sometido, la víctima podrá ejercer plenamente su participación en el proceso, pasando a disfrutar de igualdad procesal con relación al Estado demandado<sup>505</sup>. La decisión de la demanda es adoptada por la mayoría absoluta de los Jueces, debiendo el fallo ser fundamentado, y permitiéndose incorporar las opiniones disidentes o individuales. Al reconocer la violación de los derechos asegurados en la Convención, la Corte deberá garantizar a la víctima su goce, así como las consecuencias de su violación, incluso con la condena a una justa indemnización, conforme prevé el artículo 63.1, de la Convención<sup>506</sup>.

El fallo de la Corte es definitivo e inapelable, siendo transmitido a los Estados-partes de la Convención para que se informen al respecto, y también es publicado para conocimiento general.

Las formas de ejecución de sentencia son las “medidas de restitución”, “medidas de rehabilitación”, “medidas de satisfacción”, y las “garantías de no repetición y obligación de investigar, juzgar y sancionar”, definidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en los siguientes términos<sup>507</sup>:

---

<sup>503</sup> En 2010, dieciseis casos contenciosos han sido sometidos a la Corte, y que emitió nueve sentencias, terminando el año con 21 casos a resolver. Datos obtenidos en <[http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/2010\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/2010_esp.pdf), pag. 8> [Consulta: 12 de mayo de 2011].

<sup>504</sup> Este derecho fue asegurado a partir del 24/11/2000, por el Reglamento que entró en vigor el 1 de junio de 2001.

<sup>505</sup> Conforme reconoce CANÇADO TRINDADE, ex-Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en “O acesso direto à Justiça Internacional”, *Direito & Justiça – Correio Braziliense*, Brasília, 21 de agosto de 2001, p. 1.

<sup>506</sup> Entre los años de 2006 a 2010 el promedio de duración del procedimiento de un caso contencioso ha sido de 17,4 meses, considerándose como inicio de este período la fecha de sometimiento del caso ante la Corte, y como fin, la emisión de una sentencia por la Corte. Datos contenidos en el Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del año de 2010, publicado en 2011, en <[http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/2010\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/2010_esp.pdf), pag. 8> [Consulta: 14 de mayo de 2011].

<sup>507</sup> En web: <[http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/2010\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/2010_esp.pdf), págs. 10-12> [Consulta: 14 de mayo de 2011].

**“1. Medidas de restitución.** Estas medidas implican el restablecimiento hasta donde sea posible de la situación que existía antes de que ocurriera la violación. La restitución como forma de reparación contempla medidas tales como: a) el restablecimiento de la libertad de personas detenidas ilegalmente; b) la devolución de bienes confiscados ilegalmente; c) el regreso al lugar de residencia del cual la víctima fue desplazada; d) el reintegro al empleo; e) la anulación de antecedentes judiciales, administrativos, penales o policiales y cancelación de los registros correspondientes, y f) la devolución, demarcación y titulación del territorio tradicional de las comunidades indígenas para proteger su propiedad comunal.

**2. Medidas de rehabilitación.** Son aquellas medidas destinadas a brindar atención médica y psicológica necesaria para atender las necesidades de salud física y psíquica de las víctimas, lo cual deben hacer de forma gratuita e inmediata, incluyendo la provisión de medicamentos.

**3. Medidas de satisfacción.** Las medidas de satisfacción se encuentran dirigidas a reparar el daño inmaterial (sufrimientos y las aflicciones causados por la violación, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y cualquier alteración, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas). Comprenden asimismo actos u obras de alcance o repercusión pública, como la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata, pretendiendo de esta manera la recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos.

En este sentido, las medidas de satisfacción se pueden dividir a su vez en cinco grupos, según su naturaleza y finalidad, a saber: a) acto público de reconocimiento de responsabilidad y de desagravio a la memoria de las víctimas; b) publicación o difusión de la sentencia de la Corte; c) medidas en conmemoración de las víctimas o de los hechos; d) determinar el paradero de la víctima o identificar y entregar sus restos mortales; y e) otras medidas de satisfacción a favor de las víctimas, tales como proporcionarles becas de estudios de educación primaria, educación secundaria, o educación superior o universitaria; darles participación en un programa de alfabetización a través de instituciones estatales; brindarles asistencia vocacional o capacitación y

*actualización profesional mediante el otorgamiento de becas; abstenerse de ejecutar a las víctimas condenadas a pena de muerte; en casos de masacres, implementar un programa habitacional mediante el cual se provea de vivienda adecuada a las víctimas sobrevivientes que así lo requieran; y medidas socioeconómicas de reparación colectiva.*

**4. Garantías de no repetición.** *Éstas son medidas tendientes a que no vuelvan a ocurrir violaciones a los derechos humanos como las sucedidas en el caso. Estas medidas tienen un alcance o repercusión pública, y en muchas ocasiones resuelven problemas estructurales viéndose beneficiadas no sólo las víctimas del caso pero también otros miembros y grupos de la sociedad.*

*Las garantías de no repetición se pueden dividir a su vez en 3 grupos, según su naturaleza y finalidad, a saber: a) capacitación a funcionarios públicos y educación a la sociedad en derechos humanos; b) adopción de medidas de derecho interno; c) adopción de medidas para garantizar la no repetición de violaciones.*

**5. Obligación de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar.** *Se trata de la obligación que tienen los Estados de garantizar los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad personales a través de la investigación efectiva de los hechos que afectaron tales derechos y, en su caso, sancionar a los responsables. Implica que el Estado deba remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los 12 procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos violatorios. El cumplimiento de esta obligación, a su vez, contribuye a la reparación de las víctimas y sus familiares”.*

La ejecución de los juzgados en cuanto a la indemnización es realizada junto al país condenado, y de acuerdo con su legislación interna. Para implementación efectiva de sus decisiones, la Corte ejerce el mecanismo de “*supervisión de cumplimiento de sentencia*”, con base en los artículos 67 y 68.1, y que obligan los

Estados a utilizar todos los medios y mecanismos disponibles para efectivo implementación de los derechos declarados de las sentencias del Tribunal<sup>508</sup>.

El procedimiento de supervisión en general *“implica, en primer término, que ésta solicite información al Estado sobre las actividades desarrolladas para los efectos de dicho cumplimiento, así como recabar las observaciones de la Comisión y de las víctimas o sus representantes. Una vez que el Tribunal cuenta con esa información puede apreciar si hubo cumplimiento de lo resuelto, orientar las acciones del Estado para este fin y cumplir con la obligación de informar a la Asamblea General, en los términos del artículo 65 de la Convención. Asimismo, cuando lo considere pertinente, el Tribunal convoca al Estado y a los representantes de las víctimas a una audiencia para supervisar el cumplimiento de sus decisiones y en ésta escuchar el parecer de la Comisión. El procedimiento sobre la supervisión del cumplimiento de sus sentencias y otras decisiones se encuentra regulado en el artículo 69 del nuevo Reglamento de la Corte”*<sup>509</sup>.

#### **b.2.1.1.1 – MEDIDAS PROVISIONALES**

En casos urgentes y de extrema gravedad, la Corte puede adoptar “medidas provisionales”, previstas en el artículo 63.2, de la Convención, para evitar daños irreparables a las personas, como la protección a su vida e integridad personal, y que podrán ser tomados por el Presidente para posterior referendo por la Corte.

Si el caso encontrase bajo el conocimiento de la Corte, ésta podrá expedir la medida de oficio, o en caso contrario - no tramitando el caso junto a la Corte -, la medida podrá ser adoptada a pedido de la Comisión<sup>510</sup>.

---

<sup>508</sup> En 2010 habían 111 casos contenciosos en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia.

<sup>509</sup> Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del año de 2010, publicado en 2011, en <[http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/2010\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/2010_esp.pdf), pag. 10> [Consulta: 14 de mayo de 2011]

<sup>510</sup> En 2010 fueron sometidas a la Corte doce solicitudes de medidas provisionales, de las cuales siete fueron adoptadas, tres de ellas con resolución urgente del Presidente de la Corte, cuatro rechazadas y una se encuentra pendiente de resolver, conforme datos en el Informe 2010, en <[http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/2010\\_esp.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/informes/2010_esp.pdf), pág. 13-14> [Consulta: 14 de mayo de 2011].

Para acompañar el cumplimiento de las medidas, la Corte adopta el mecanismo de “supervisión de la implementación de medidas provisionales”<sup>511</sup>.

### **b.2.1.2 – COMPETENCIA CONSULTIVA**

En esta competencia la Corte emite opiniones y dictámenes sobre la interpretación de la Convención Americana de los Derechos Humanos y otros tratados de idéntica naturaleza celebrados entre los Estados americanos, incluso en relación a la compatibilidad de las leyes internas y referidos tratados<sup>512</sup>.

Están habilitados a promover esta actuación de la Corte, los Estados-miembros de la OEA, aunque no sean parte en la Convención, la Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores y el Consejo Permanente de la OEA.

## **3 – ÁFRICA**

Entre los sistemas regionales de protección a los derechos humanos el que se encuentra en una fase aún inicial, sin relevantes conquistas, es el sistema Africano, y cuya iniciativa en el reconocimiento a aquellos derechos se establece en el marco de la Organización de la Unidad Africana-OUA – actualmente sucedida por la “Unión Africana”-UA.

Así como en los sistemas europeo y americano, en el sistema africano la protección de los derechos humanos se realiza jurisdiccionalmente o no.

## **A – UNIÓN AFRICANA - UA**

La Unión Africana es la actual organización de Estados del continente africano, concebida en 1999, en el encuentro de líderes africanos en la ciudad de Sirte, en

---

<sup>511</sup> La Corte emitió, en 2010, 36 resoluciones sobre la supervisión de la implementación de medidas provisionales, encontrándose 46 medidas bajo supervisión.

<sup>512</sup> Hasta 2010 fueron emitidas veinte Opiniones Consultivas, siendo la última el 29 de septiembre de 2009, OC-20/09.

Libia, y creada por la “Acta de Constitución de la Unión Africana” que fuera aprobada por la Organización de la Unidad Africana-OUA, en su reunión de 11 de julio de 2000, en Lomé, Togo. La referida Organización de la Unidad Africana fue sucedida por la Unión Africana a partir de 26 de mayo de 2001<sup>513</sup>, congregando cincuenta y tres países del continente africano<sup>514</sup>. La sustitución oficial de la OUA se ha dado en la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Durban, Sudáfrica, el 9 de julio de 2002<sup>515</sup>.

El cambio se observa después de casi cuarenta años de existencia de la OUA, creada el 25 de mayo de 1963, con el objetivo inicial de acabar con la colonización y los regímenes racistas, y debido al casi integral desaparecimiento de estas situaciones en aquel continente africano en la última década. Más allá de eso no ha conseguido alcanzar el éxito en otros de sus objetivos relacionados a la cooperación política y social en aquel continente, hecho que ha llevado a considerarla como una entidad vacía, de espaldas a la población, y más reconocida como un “club de dictadores”<sup>516</sup>.

Así es que, por la Unión Africana se pretende formar una nueva organización, de modelo comunitario parecido con la Unión Europea en lo que se refiere a sus objetivos de prosperidad y democracia a través de la integración social, económica y regional, en condiciones de intervenir en conflictos armados para evitar genocidios y crímenes contra la humanidad, y que tenga una presencia más fuerte en la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales, como ha constado expresamente en su “Acto de Constitución”: *“DETERMINED to promote and protect human and peoples’ rights, consolidate democratic institutions and culture, and to*

---

<sup>513</sup> Cuando se alcanzó la ratificación del 36º país, con Nigeria.

<sup>514</sup> Angola, Argelia, , Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Camarones, República Democrática de Congo, , Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesotho, Liberia, Libia, Malawi, Malí, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República de Centroafrica, República Popular de Benin, República Popular de Congo, Ruanda, Sahara Occidental, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudan, Swazilandia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Yibuti, Zambia, Zimbabwe. No integran la UA Marruecos y Madagascar.

<sup>515</sup> Solamente no comparecieron a esta Cumbre Marruecos y Madagascar.

<sup>516</sup> Expresión utilizada por el comunicado de prensa de “AP, EFE y CNN”, disponible en la web <www.laprensa-bolivia.com> [Consulta: 29 de julio de 2009].

*ensure good governance and the rule of law*<sup>517</sup>. Según ha afirmado WINSTON MESO, del Instituto Africano de Sudáfrica “*uno de los principios sagrados del acuerdo de la OUA era la no injerencia en asuntos internos. Para la Unión Africana este principio deja de ser válido. Teniendo como punto de partida los principios democráticos, los miembros tendrán poder de intervención en países vecinos, para impedir levantamientos y impedir conflictos*”<sup>518</sup>.

La estructura de funcionamiento de la Unión Africana tiene diversos órganos, entre ellos destacándose: la Asamblea de la Unión que es formada por los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros, o sus representantes debidamente acreditados y es el órgano supremo de la Unión; el Consejo Ejecutivo de la Unión Africana, que es compuesto por los ministros de los negocios exteriores o otras autoridades designadas por los gobiernos de los Estados miembros; la Comisión de la Unión Africana, que es la Secretaria de la Unión y es compuesta por un Presidente, un Vice-Presidente e ocho Comisarios, todos ellos elegidos por la Asamblea, así como por lo personal designado; el Comité de Representantes Permanentes de la Unión Africana, que es responsable por la preparación de las sesiones del Consejo Ejecutivo y es compuesta por Representantes Permanentes de la UA y otros plenipotenciarios de los Estados miembros; por el Comité de Paz y Seguridad; el Parlamento Panafricano, que es el órgano que asegura la participación de los pueblos africanos en el gobierno, desarrollo y integración económica del Continente<sup>519</sup>; la Corte Africana de Justicia, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos<sup>520</sup>; el Consejo Económico, Social y Cultural, que es el órgano consultivo de la organización y se compone de diferentes grupos sociales y profesionales de los Estados Miembros de la UA; los Comités Técnicos Especializados, grupos que estudian problemas en áreas específicas e son compuestos por ministros y altos funcionarios de los Gobiernos; la Comisión Africana y el Comité Africano de Peritos sobre Derechos y Bien-Estar de la Crianza, entidad

<sup>517</sup> Según datos disponibles en la Web <www.africa-union.org> [Consulta: 2 de agosto de 2009].

<sup>518</sup> De acuerdo con el Informe de la “Radio Nederland”, disponible en la Web <www.rnw.nl> [Consulta: 2 de agosto de 2009].

<sup>519</sup> Actualmente ejerce sólo un papel consultivo, pero será investido de poderes legislativos tan luego el protocolo de su establecimiento sea revisado en este sentido.

<sup>520</sup> La Corte Africana de Justicia y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha sido fusionada por la Unión Africana en uno sólo tribunal, con el nombre de Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos, y que, todavía, hasata 2010, no ha empezado a funcionar.



encargada de vigilar la aplicación de la Carta Africana de los Derechos y del Bien-Estar de la Crianza.

## **a – LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE LA UNIÓN AFRICANA**

En este enfoque sobre los derechos humanos, la extinta Organización de la Unidad Africana y la actual Unión Africana cuentan con la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, del 27 de junio de 1981, y que entró en vigor el 21 de octubre de 1986, así como su Protocolo, de 9 de junio de 1998. Dispone aún de la “Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño” que entró en vigor el 29 de noviembre de 1999, y de la “Convención sobre los Aspectos Propios de los Problemas de los Refugiados en África”, en vigor el 20 de junio de 1974, y del Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de la Mujer, que entró en vigor el 25 de noviembre de 2005. Como órganos de protección a los derechos reconocidos en estos instrumentos, integran la UA el Consejo de Paz y Seguridad, la Comisión Africana de Derechos Humanos y la Corte Africana de los Derechos Humanos.

### **a.1 – CARTA AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS**

La Carta Africana también es conocida como Carta de Banjul<sup>521</sup>, fue aprobada el 27 de junio de 1981, en la XVII Conferencia de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, y entró en vigor el 21 de octubre de 1986, tras la ratificación por la mayoría simple de los miembros de la OUA. Actualmente la Carta ha sido firmada por los cincuenta y tres países integrantes de la Unión Africana.

Con sus 68 artículos, ha sido el primer instrumento internacional de derechos humanos que reúne, en uno sólo documento, disposiciones sobre los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos de tercera

---

<sup>521</sup> Banju es capital de Gambia, y es la ciudad donde se han realizado las dos sesiones de la Conferencia de Ministros de Justicia de la OUA en las que fue elaborado el proyecto definitivo de la Carta Africana de Derechos Humanos.

generación, como al medio ambiente – artículo 24 – y al desarrollo de los pueblos – artículo 22 – disponiendo a respecto en su preámbulo, en estos términos:

*“Convencidos de que en lo sucesivo es esencial prestar especial atención al derecho al desarrollo y de que los derechos civiles y políticos no pueden ser disociados de los derechos económicos, sociales y culturales en su concepción y en su universalidad, y de que la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales constituye una garantía del disfrute de los derechos civiles y políticos”.*

En la Carta Africana también se establecen los mecanismos de supervisión, con los Informes Periódicos, y de protección a los derechos humanos, con la posibilidad de comunicaciones interestatales e individuales.

## **b – PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA UNIÓN AFRICANA**

Los principales órganos de protección en ámbito Africano son la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.

Se puede apuntar también como iniciativa en el tema de derechos humanos y las libertades fundamentales la creación de un Comité de Expertos para acompañar el grado de democracia en cada Estado-miembro que, aunque se trate de una medida de eficacia discutible, puesto que la vinculación a este Comité es facultativa, hay que reconocer que en un continente donde existen países con regímenes dictatoriales, no se puede negar la valía de la iniciativa en vista de su repercusión política en la comunidad internacional.

En África, la protección a ciertas cuestiones ligadas a los derechos humanos también es ejercida por juicios en los Tribunales de Justicia de las Comunidades Económicas Regionales – CERs – y que son: el Tribunal de Justicia de la Comunidad de África Oriental en Arusha, Tanzania, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental en Abuja, Nigeria, el Tribunal de

Justicia del Mercado Común de África Oriental y Austral en Lusaka, Zambia, y el Tribunal de la Comunidad de Desarrollo de África Austral, en Windhoek, Namibia

Es importante señalar que, a pesar de que los países africanos adoptaron significativas iniciativas en cuanto a los derechos humanos, firmando algunos instrumentos regionales al respecto, no se ha apreciado igual interés en su auténtica aplicación, y, en consecuencia, en su apropiada defensa. Sobre la cuestión, y comparando entre la Carta Africana de Derechos Humanos y los instrumentos de idéntica naturaleza en los demás sistemas de protección, DIEZ DE VELASCO apunta *“(...) el reducidísimo papel atribuido al mecanismo de protección, en el que la denuncia individual ocupa un lugar marginal, y cuya eficacia se hace depender en último extremo de un órgano político: la Asamblea de Jefes de Estado o de Gobierno”*<sup>522</sup>.

De cualquier modo, y aunque sean muy discretas las actuaciones de los órganos de defensa a los derechos humanos en aquel continente, se realizará una breve remisión al tema.

## **b.1 – TUTELA NO-JURISDICCIONAL**

En el seno regional africano la tutela no-jurisdiccional de los derechos humanos es ejercida por la Comisión Africana de Derechos Humanos.

### **b.1.1 – COMISIÓN AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS**

Fue establecida por la Carta Africana de Derechos Humanos, y está compuesta por once miembros, nombrados por la UA, para un mandato de seis años, prorrogable por igual período, y que ejercen sus atribuciones a título personal e independiente. Su sede es en Gambia, y las reuniones de la Comisión se realizan en sesiones confidenciales.

Sus decisiones no son vinculantes. En su labor, la Comisión recopila documentos e investigaciones sobre la situación africana respecto a derechos

---

<sup>522</sup> DIEZ DE VELASCO, M., *Instituciones...*, op. cit., p. 588-9.

humanos y de los pueblos, organiza conferencias y difunde información sobre derechos humanos en África, interpreta los contenidos de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y sus Protocolos, revisa informes por país sobre la situación de los derechos humanos, recibe, analiza e investiga comunicaciones individuales – “otras comunicaciones” – e interestatales, publica informes sobre la situación de los derechos humanos y lleva a cabo visitas para observar la situación de los derechos humanos en diversos países.

En conformidad con cada caso la Comisión puede adoptar “medidas provisionales”, “acuerdo amistoso” o “decisión”.

Con las Medidas Provisionales la Comisión pide a los Estados que adopten providencias para detener o prevenir violación de los derechos humanos, como evitar daños graves e irreparables a la vida humana y la integridad personal en casos urgentes. Por ejemplo, la comisión puede pedir a un estado que no aplique la pena de muerte a una persona, o que no envíe a una persona a un país en el que su vida pueda correr peligro.

Por el Acuerdo Amistoso la Comisión puede intentar que se llegue a un acuerdo entre el individuo o la ONG que presenta una queja y el estado en cuestión. No obstante, la Comisión sólo intentará que se llegue a un acuerdo amistoso si las dos partes así lo desean.

La Recomendación o Decisión final es adoptada cuando la Comisión termina el examen de una queja y concluye que se ha violado la Carta Africana, estableciendo la acción que el estado en cuestión deberá emprender para remediar dicha violación.

Las recomendaciones finales de la Comisión no son legalmente vinculantes por sí mismas para los estados en cuestión. Así, el Estado no tiene la obligación de seguir las recomendaciones de la Comisión. Pero, si una recomendación final de la Comisión se incluye en el Informe Anual sobre Actividades de la Comisión, podrá convertirse en legalmente vinculante para el Estado en cuestión

Los casos ante la Comisión sólo pueden presentarse después de haber agotado todos los recursos legales internos disponibles y desde que sea dentro de un tiempo razonable a partir de la fecha en que se agotaron los recursos internos.

#### **b.1.1.1 – MECANISMOS DE ACTUACIÓN**

La Comisión ejerce atribuciones de promoción, defensa y consultiva. En su actuación de defensa de los derechos humanos, asunto al cual se dedica este trabajo, la Comisión utiliza tres mecanismos distintos: “Informe Periódico”, “Denuncia Intergubernamental” y “otras comunicaciones distintas a las presentada por los Estados”.

##### **b.1.1.1.1 – INFORME PERIÓDICO**

Es la providencia que los Estados-miembros deben tomar cada dos años, con el objetivo de dar conocimiento a la Asamblea si sus actividades internas, como la legislativa, por ejemplo, se encuentran de acuerdo con las normas de derechos humanos de la “Carta”. Pero, este es un mecanismo que “*presenta un escaso nivel de eficiencia*”<sup>523</sup>.

##### **b.1.1.1.2 – DENUNCIA INTERGUBERNAMENTAL**

Es la medida que autoriza un Estado-parte a denunciar violaciones de derechos humanos por otro Estado-parte. Esta denuncia se puede presentar directamente junto a la Comisión o a través de un “arreglo bilateral”, por el cual el Estado denunciante busca directamente junto al Estado denunciado una solución para la situación. En caso de no obtener éxito en este intento, puede el Estado denunciante dirigirse a la Comisión.

En la Comisión se deberá instaurar un procedimiento contradictorio y confidencial, culminando con un Informe sobre la situación, por lo cual se pueden encaminar recomendaciones a la Asamblea para que exija el cumplimiento del

---

<sup>523</sup> Ídem, p. 590.

derecho violado por el Estado infractor. Este Informe se da al conocimiento de los demás Estados-parte.

#### **b.1.1.1.3 – OTRAS COMUNICACIONES**

Esta técnica se confunde con las “denuncias particulares” de los demás sistemas de protección internacional. Su admisibilidad es semejante a la de estos otros sistemas, exigiéndose no ser anónima, haber agotado los recursos internos, no encontrarse la cuestión sometida a otra instancia de protección internacional y ser presentada en un plazo razonable de la fecha de la violación o de la decisión del país infractor.

El poder de la Comisión en relación a tales denuncias es muy reducido, puesto que, una vez reconocida la violación, le cabe encaminar el caso a la Asamblea, y ésta puede adoptar medidas más concretas en relación al caso, como determinar la realización de un estudio más profundo de la situación.

En este mecanismo no se ha considerado aceptable la eficacia producida, como resulta de las consideraciones de DIEZ DE VELASCO, ya que *“es utilizado muy escasamente, en buena medida por el desconocimiento del sistema entre la población afectada, por la escasa satisfacción que otorga al particular y por la inexistencia de una red de organizaciones no gubernamentales en el continente africano que le sirva de soporte, sin las que el sistema de control es prácticamente inoperante”*<sup>524</sup>.

La comunicación se puede presentar por cualquier persona, en nombre propio o de la víctima, aunque el autor de la demanda no esté relacionado con la víctima, tanto individualmente como por grupo, ONG's y Estados.

Un ejemplo de utilización de este mecanismo estuvo relacionado al Gobierno de Eritrea, en septiembre de 2001, cuando once miembros del Senado de aquel país fueron arrestados por críticas al gobierno, ocasión en que la ex-OUA, a iniciativa de

---

<sup>524</sup> Ídem, p. 591.

un ciudadano sueco de origen eritreo, llevó al conocimiento de la Comisión dicho hecho. Ésta, en consecuencia, exigió Informaciones al Presidente Eritreo sobre el caso, ya que se configuraban violaciones a la Carta Africana de Derechos Humanos.

## **b.2 – TUTELA JURISDICCIONAL**

En el ámbito regional africano se ha creado un órgano específico de protección jurisdiccional de los derechos humanos, con peculiaridades muy propias en relación a los demás mecanismos jurisdiccionales regionales.

### **b.2.1 – CORTE AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS<sup>525</sup>**

La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos fue creada por el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos, adoptado por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unión Africana, el 10 de junio de 1998, en Uagadugú, Burkina Faso, y que entró en vigor en enero de 2004, con la ratificación del número mínimo de 15 países de la Unión Africana (UA) que se exigía<sup>526</sup>. Tras ese momento, fue necesario pasar 30 días para que el Protocolo adquiriera validez formal.

En julio de 2004, en su tercer periodo ordinario de sesiones, celebrado en Addis Abeba (Etiopia), la Asamblea de la Unión Africana decidió fusionar en un sólo tribunal la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Corte Africana de Justicia, creando un nuevo tribunal con la denominación Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos<sup>527</sup>.

---

<sup>525</sup> Los datos sobre la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos han sido obtenidos junto a su sitio oficial <<http://www.african-court.org>>[Consulta: 16 de septiembre de 2010].

<sup>526</sup> La ratificación necesaria ha sido de las Islas Comores, el 26 de diciembre de 2003. En 2010 el Protocolo cuenta con veinte cinco ratificaciones: África del Sur, Argelia, Burkina Faso, Burundi, Camarones, Costa del Marfil, Gabán, Gambia, Gana, Libia, Lesoto, Mali, Malauí, Mozambique, Mauritania, Mauricio, Nigéria, Níger, Quénia, Ruanda, Senegal, Tanzanía, Togo, Tunisia y Uganda.

<sup>527</sup> El Protocolo del Estatuto del nuevo Tribunal está disponible en <[http://www.african-court.org/fileadmin/documents/Court/Statute%20ACJHR/ACJHR\\_Protocol.pdf](http://www.african-court.org/fileadmin/documents/Court/Statute%20ACJHR/ACJHR_Protocol.pdf)> [Consulta: 16 de septiembre de 2010]

La fusión no se ha realizado y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos empezó a funcionar en Adis Abeba, Etiopía, en noviembre de 2006. En agosto de 2007 fue transferido para su sede definida en Arusha, Tanzania.

En julio de 2008 se adoptó el Protocolo que establece el “Estatuto del Tribunal Africano de Justicia y Derechos Humanos”, en la undécima Sesión ordinaria de la Conferencia mantenida el 1 de julio del 2008 en Sham El-Sheikh (Egipto). El Protocolo estipula en su Artículo 2:

*“ La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Corte de Justicia de la Unión Africana, creadas respectivamente por el Protocolo relativo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Acta constitutiva de la Unión Africana se fusionan en una Corte única, llamada Corte africana de Justicia y de Derechos Humanos”.*

Debido a que para el funcionamiento del nuevo tribunal un cierto número de países necesitan ratificar el Protocolo, hasta 2010 aquel tribunal no ha sido instalado. El Tribunal funcionará con base en el nuevo Reglamento Interno, en vigor desde junio de 2010<sup>528</sup>.

La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos tiene su sede establecida en Arusha, Tanzania<sup>529</sup> y es formada por 11 Jueces<sup>530</sup>, observada la representación equitativa de las cinco grandes regiones de África, siendo su primera composición de 2006, reuniéndose por primera vez entre el 2 y el 5 de julio de 2006.

El Tribunal basará su funcionamiento y competencia en el Acta de Derechos Humanos de la Unión Africana y trabajará conjuntamente con la Comisión Africana

---

<sup>528</sup> El Reglamento esta disponible en <[http://www.african-court.org/fileadmin/documents/Court/Interim%20Rules%20of%20Court/Final\\_Rules\\_of\\_Court\\_for\\_Publication\\_after\\_Harmonization\\_-\\_Final\\_\\_English\\_7\\_sept.PORT.\\_VERSION\\_1\\_.pdf](http://www.african-court.org/fileadmin/documents/Court/Interim%20Rules%20of%20Court/Final_Rules_of_Court_for_Publication_after_Harmonization_-_Final__English_7_sept.PORT._VERSION_1_.pdf)> [Consulta: 16 de septiembre de 2010].

<sup>529</sup> Inicialmente se ha definido su sede en Addis Abeba, capital de Etiopía y se de la Unión Africana.

<sup>530</sup> La composición de la Corte en 2010 era: M. Gérard Niyungeko, Presidente (Burundi); Sophia A.B. Akuffo, Vice-Presidente (Ghana); Bernard Makgabo Ngoepe (África del Sur), Modibo Tounty Guindo (Mali), Fatsah Ouguergouz (Argelia), Joseph Nyamihana Mulenga (Uganda), Augustino S. L. Ramadhani (Tanzania), Duncan Tambala (Malawi), Elsie Nwanwuri Thompson (Nigeria) and Sylvain Ore (Costa del Marfil).



para los Derechos Humanos, complementando y reforzando sus funciones, sin sustituirla.

Según Alpha Oumar Konaré, presidente de la Comisión de la UA, el Tribunal aumentará el empeño de la Unión Africana en la realización de los Derechos Humanos y en los valores fundamentales de la tolerancia, la solidaridad, la igualdad de género y las cuestiones humanitarias en el continente.

La Corte funciona con jurisdicción consultiva y contenciosa.

#### **b.2.1.1 – COMPETENCIA JURISDICCIONAL**

A diferencia de la Comisión Africana, la Corte Africana tiene autoridad para dictar decisiones vinculantes y ejecutables sobre los asuntos sometidos a su consideración, ordenar medidas de reparación en comunicaciones individuales cuando el Estado afectado haya reconocido expresamente su competencia adjudicataria.

Un aspecto relevante es que el Protocolo Adjunto a la Carta Africana de Derechos Humanos prevé, en su artículo 3.1, que la Corte Africana de Derechos Humanos puede ser llamada a se manifestar con base en cualquier instrumento internacional de derechos humanos, desde que tenga sido ratificado por el Estado-parte demandado, el que puede resultar en un sistema de protección a los derechos humanos más fuerte que los demás sistemas.

De acuerdo con los artículos 33 del Reglamento de la Corte, y los artículos 5 y 34 (6) del Protocolo, la Corte Africana cabe examinar los casos de violaciones de derechos humanos que le remitan la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, establecida con arreglo a la Carta Africana. Una demanda también puede ser sometida a la Corte por el Estado parte que haya sometido el caso a la Comisión, por el Estado parte contra el cual se haya dirigido la demanda, por el Estado parte del cual sea residente la víctima de una violación de Derechos Humanos, y por las Organizaciones intergubernamentales africanas. Más allá, las

demandas pueden ser presentadas por la propia víctima o un representante, y desde que el Estado Parte en cuestión acepte la jurisdicción del Tribunal<sup>531</sup>.

La Corte también puede ordenar la adopción de medidas provisionales para evitar daños graves e irreparables a la vida humana y la integridad personal en casos urgentes y adoptar opiniones consultivas sobre la interpretación de la Carta Africana y sus Protocolos.

De acuerdo con los artículos 56.2, 56.3 y 56.5, para ser admitida la demanda debe ser compatible con el Acta Constitutiva de la Unión Africana y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; no debe contener términos ultrajantes o insultantes respecto al Estado acusado, sus Instituciones, o la Unión Africana; debe haber agotado todas las vías de recurso internas; debe el demandante poner a disposición del Tribunal todas las pruebas de que ha agotado todos los recursos internos. En los casos en que los procedimientos internos son anormalmente prolongados por mecanismos dilatorios, la Corte puede admitir la demanda.

La Corte puede resolver las demandas por resolución amigable de controversias y, en los casos llevados a juzgamiento, es competente para revisar sus propias sentencias a la luz de nuevas evidencias.

La primera sentencia del Tribunal ha sido dictada en diciembre de 2009<sup>532</sup>, en una demanda interpuesta por un particular contra la República de Senegal. Por el hecho de Senegal no haber aceptado la jurisdicción del Tribunal para conocer de denuncias particulares, el que fue alegado en objeciones preliminares de su defensa, el Tribunal decidió carecer de jurisdicción para conocer del caso.

---

<sup>531</sup> Los dos países que han aceptado las denuncias individuales son Burkina Faso e Mali.

<sup>532</sup> Demanda 001/2008. Caso M. Yogogombaye v. República de Senegal, disponible en <[http://www.iam.es/docs/web3/doc/TRB\\_AFR\\_TADHP\\_AsuntoMichelot.pdf](http://www.iam.es/docs/web3/doc/TRB_AFR_TADHP_AsuntoMichelot.pdf)> [Consulta: 18 de septiembre de 2010].

### **b.2.1.2 – COMPETENCIA CONSULTIVA**

Es atribuida a la Corte para opinar sobre cualquier asunto jurídico relacionado con la Carta o cualquier otro instrumento de derechos humanos, desde que el objeto de la consulta no esté pendiente junto a la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Pueden provocar la jurisdicción consultiva cualquier Estado-miembro de la Unión Africana, los órganos de la UA, o cualquier de las ocho organizaciones africanas reconocidas por la UA<sup>533</sup>.

## **4 – ASIA Y OCEANIA**

En la región de Asia y Oceanía se encuentran siete<sup>534</sup> de los diez países más poblados del mundo, que, por sí solos, representan más de 60%<sup>535</sup> de la población mundial. En 2006, Bangladesh, China, Corea del Sur, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Malasia, Pakistán y Sri Lanka pasaron a formar parte del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, prometiendo respetar los derechos humanos, colaborar con los procedimientos especiales y los mecanismos de derechos humanos de la ONU, crear o mantener sólidos marcos nacionales de derechos humanos, y ratificar y respetar las normas internacionales de derechos humanos.

Algunos avances en temas de derechos humanos fueron alcanzados en la región en los últimos años: en Filipinas se abolió la pena capital; Corea del Sur pasó a analizar una legislación destinada a abolir la pena de muerte con la suspensión, aunque no oficial, de su aplicación; en Pakistán se modificó la definición de los delitos

---

<sup>533</sup> Las Organizaciones Africanas fueron previstas en el Tratado de 1991, y que estableció las Comunidades Económicas Africanas, existentes en gran número en los Estados-miembros de la UA. Pero, sólo ocho han sido reconocidas por la Asamblea de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana: Unión del Maghreb Árabe, Mercado Común de África Oriental y Austral, Comunidad de los Estados de Sahel y del Saara, Comunidad de África Oriental, Comunidad Económica de los Estados de África Central, Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo y la Comunidad para el Desarrollo de la África Austral.

<sup>534</sup> China, India, Indonesia, Paquistán, Bangladesh, Rusia y Japón.

<sup>535</sup> En 2010, con cerca de 4 billones de personas.

de violación y violencia sexual para garantizar su punición; en India, por fin se introdujo una ley relativa a la violencia contra las mujeres<sup>536</sup>.

Sin embargo, Asia y Oceanía continúan siendo los únicos continentes del mundo en que no hay mecanismos regionales de protección de los derechos humanos de alcance a los países integrantes a cada una de aquellas regiones. En realidad, mismo las declaraciones de derechos en el sistema jurídico interno de cada país todavía dependen de algunos avances.

Según el Profesor Kentaro Serita<sup>537</sup>, catedrático de la Universidad de Kobe, Japón es el único país fuera de occidente donde el concepto de los derechos humanos está arraigado, incluso teniendo representantes en los principales órganos mundiales defensores de derechos humanos, ya que fue miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas desde 1982, tiene un representante en el Comité de los Derechos Humanos, otro en la Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y una juez en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia.

Para el Profesor Kentaro, la complejidad de los países que forman el vasto continente asiático torna extremadamente difícil establecer un proyecto de aseguramiento de derechos humanos uniforme que aglutine a todos en la región.

Entiende que en Asia Oriental es donde se puede tornar viable un sistema de derechos humanos, ya que a excepción de Corea del Norte y de Myanmar, no existen dictaduras, y que algunos de estos países son firmantes de los Pactos Internacionales de 1966. Este sistema se puede crear con un alcance subregional, con bases en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático-ASEAN<sup>538</sup>, que ha tomado medidas para conceder un mayor protagonismo a los derechos humanos en

---

<sup>536</sup> Según datos de Amnistía Internacional, en <<http://thereport.amnesty.org/esl/Regions/Asia-Pacific>> [Consulta: 12 de octubre de 2010].

<sup>537</sup> Las referencias que se hace al profesor Kentaro Serita en su palestra "La diplomacia japonesa y el régimen internacional de los derechos humanos", ministrada en el Instituto Matías Romero de la ciudad de México, son registros de Luis Peraza Parga, Profesor de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana de Bogotá y de la Panamericana de la ciudad de México, en 09 de agosto de 2003, y disponibles en <[http://www.lainsignia.org/2003/agosto/der\\_012.htm](http://www.lainsignia.org/2003/agosto/der_012.htm)> [Consulta: 18 de abril de 2008].

<sup>538</sup> Sobre la ASEAN se dedicará un capítulo específico en esta tesis.

la región, y, mismo con la falta de una Convención de derechos humanos, puede adoptarse como base jurídica la Declaración Universal de Derechos Humanos, promoviendo los derechos humanos sin misión jurisdiccional, incluso se pudiendo pensar , más adelante, en la creación de un Tribunal Asiático Oriental de Derechos Humanos.

Se puede también registrar como intento de protección de los derechos humanos en la región asiática la Carta Popular Asiática de Derechos Humanos, de 17 de mayo de 1998, en Kwangju, Corea del Sur, iniciativa de varias organizaciones no gubernamentales. La Carta afirma la universalidad de todos los derechos humanos y busca demostrar que los derechos humanos, lejos de ser un concepto ajeno o extranjero, son una aspiración y una exigencia legítimas de los pueblos de toda Asia y Oceanía, así como que estos principios universales pueden articularse con fuerza desde una perspectiva cultural, religiosa y filosófica asiáticas<sup>539</sup>.

La propia presencia de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas en el continente asiático es muy reciente y data de agosto de 2001, con la instalación de Oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos-OACDH. La primera fue la Oficina Regional del Pacífico, en Suva, Islas Fiji, y que abarca dieciséis países miembros del Foro de las Islas del Pacífico, que son Australia, Estados Federados de Micronesia, Fiji, Islas Cook, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Nueva Zelandia, Niue, Palau, Papua Nueva Guinea, República de las Islas Marshall, Samoa, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

La otra es la Oficina Regional del Sureste Asiático establecida en Bangkok, Tailandia, desde 2002, con el objetivo de fortalecer la presencia y las alianzas de la OACDH en la región y que abarca once países: Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, Malasia, Myanmar, Filipinas, República Democrática Popular Lao, Singapur, Tailandia, Timor-Leste y Vietnam.

---

<sup>539</sup> Las informaciones son de Amnistía Internacional disponibles en <<http://web.amnesty.org/library/index/esIASA010021998?open&of=esl-2as>> [Consulta: 12 de octubre de 2010].

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos-OACDH, sus prioridades y estrategias para la región son contribuir *“a que todas las partes interesadas de la región tengan un mejor conocimiento de las normas y estándares internacionales de derechos humanos, así como de los mecanismos de la ONU en materia de derechos humanos. Mediante un enfoque de cooperación y consulta, la OACDH apoya las iniciativas por país y regionales destinadas a reforzar los sistemas nacionales de protección. Esta cooperación se lleva a cabo con los Estados, la sociedad civil, el Foro de las Islas del Pacífico y otros socios nacionales y regionales.*

*Una de las principales prioridades que se identificaron para la Oficina Regional es la promoción de la ratificación de los tratados de derechos humanos y el apoyo a las obligaciones en materia de presentación de informes y aplicación. La cooperación de la OACDH incluye además iniciativas como prestar apoyo a la creación de instituciones nacionales de derechos humanos. La labor de la Oficina del Pacífico ayuda además a facilitar la habilitación de los titulares de los derechos y a reforzar los mecanismos nacionales de protección.*

*Las actividades de sensibilización, divulgación de información y formación sobre derechos humanos están generando un mejor entendimiento del concepto de derechos humanos, y se espera que este tipo de iniciativas contribuya a un mayor cumplimiento de las normas y estándares en materia de derechos humanos por parte de agentes gubernamentales y no gubernamentales.*

*La OACDH fortalece aún más la capacidad de los UNCT (con sede en Fiji, Samoa y Papua Nueva Guinea) al integrar la cuestión de derechos humanos en actividades seleccionadas estratégicamente, en particular a través de la formulación y la aplicación de los procesos del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF), con el fin de incrementar su repercusión en las cuestiones humanitarias y de desarrollo<sup>540</sup>.*

---

<sup>540</sup> Conforme informaciones disponibles en <<http://www.ohchr.org/spanish/countries/regional/asia/southeast.htm>> [Consulta: 22 de octubre de 2010].

Son resultados esperados por la OACDH el “*mayor uso por parte de los titulares de los derechos de las normas y mecanismos internacionales en materia de derechos humanos. Mayor ratificación y presentación de informes según lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos. El fortalecimiento de los sistemas nacionales de protección. El fortalecimiento de la capacidad de los UNCT en materia de promoción y protección de los derechos humanos*”<sup>541</sup>.

#### **IV – INTERCONTINENTAL**

En esta sesión se pasa al estudio de las estructuras de protección a los derechos humanos formadas en virtud del agrupamiento de los Estados que presentan alguna identidad común por razones geopolíticas, culturales o puramente geográficas. Contrariamente a la estructura universal y mundial, de alcance a todo y cualquier país del mundo, en el presente contexto, a semejanza del modelo regional, se establecen limitaciones geográficas para permitir que los Estados adhieran a una determinada estructura, pero agregando países de distintos continentes.

#### **1 – ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y LA COOPERACIÓN EN EUROPA - O.S.C.E. (EUROPA-ÁSIA-AMÉRICA DEL NORTE)**

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa-O.S.C.E., es la entidad formada por cincuenta y cinco países<sup>542</sup> del hemisferio norte, entre ellos todos los de Europa, algunos de Asia, más Estados Unidos y Canadá, con el objetivo de formar una cooperación para cuestiones de seguridad, economía, ciencia y tecnología, medio ambiente y en el campo humanitario, en el continente europeo.

---

<sup>541</sup> Ibidem.

<sup>542</sup> Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Kazajistán, Kirguizistán, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco, Noruega, Polonia, Portugal, República Eslovaca, República Checa, República de Macedonia, Reino Unido, Rumania, Rusia, San Marino, Suecia, Suiza, Tayikistán, Turquía, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán, Vaticano, Yugoslavia.

Su origen se da con la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa-C.S.C.E., realizada en Helsinki en 1975 – “Conferencia de Helsinki” - en el período de la “guerra fría”, y como motivo de facilitar la cooperación entre los bloques del Este y del Oeste. El actual nombramiento como O.S.C.E. surge con la Cumbre de Budapest, de 6 de diciembre de 1994, siendo sus principales órganos la “Reunión en la Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno”, el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, el Secretario General y la Asamblea Parlamentaria.

Con relación a los derechos humanos, en la O.S.C.E. el tema tiene tratamiento específico, como adelante se pasa a tratar.

## **A – LA O.S.C.E. Y LOS DERECHOS HUMANOS**

La primera manifestación más directa y substancial de la O.S.C.E en tema de derechos humanos surge con el “Acta Final de Helsinki”, del 1 de agosto de 1975, más específicamente por su principio VII, por el cual uno de sus aspectos más destacables, según afirma PASTOR RIDRUEJO, es *“el equilibrio entre los principios que reafirman la soberanía del Estado y el ‘status quo’...(I, III, IV, VI que se refieren respectivamente a la igualdad soberana, inviolabilidad de las fronteras, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos) y el principio VII que trata del respeto a los derechos del hombre”*<sup>543</sup>.

A pesar de este tratamiento del tema en el seno de la O.S.C.E., principalmente por el hecho de que en la época de el “Acta Única de Helsinki” aún prevalecían los regímenes cerrados del este europeo, había una omisión total en cuanto a las garantías de cumplimiento de aquellos derechos por los países-miembros de la O.S.C.E. La cuestión observa un cambio muy importante por el “Documento Final de la Reunión de Continuidad de Viena”, del 15 enero de 1989, en el que se adoptan las primeras iniciativas de mayor grado en el tema de la defensa a los derechos humanos y libertades fundamentales con alcance a aquellos países-miembros, y por el cual se

---

<sup>543</sup> PASTOR RIDRUEJO, J. A., *Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales*, op. cit., p. 219.



pasa a tener la definición de la “Dimensión humana de la O.S.C.E.”<sup>544</sup>, como iniciativa para definir las situaciones en que los Estados-miembros pueden presentar Reclamaciones recíprocas en cuanto al cumplimiento de sus compromisos en aquel tema, y se estableciéndose como mecanismo de control la técnica de los “Informes”<sup>545</sup>.

El paso siguiente en esta evolución es en la reunión de Copenhague, de 29 de junio de 1990, que trata de la ampliación de los derechos y libertades reconocidos, y en el cual se establecen plazos para los procedimientos de las “reclamaciones recíprocas”. Tales medidas evolucionaron en la Conferencia de París, del 21 de noviembre de 1990, previéndose un sistema protector de las minorías nacionales, con la inclusión del recurso a los servicios de Expertos, medida que en la Conferencia de Moscú, en 1991<sup>546</sup>, evoluciona para la creación del procedimiento de misiones de Experto y Relatores<sup>547</sup>, “*con facultades de investigación y con la función primordial de facilitar la solución de una cuestión, en particular relativa a la dimensión humana, que actúa bien a petición del Estado interesado, bien por decisión del Comité CSCE de Altos Funcionarios a solicitud de cualquier Estado participante*”<sup>548</sup>, medida ésta contra la cual el Estado acusado de graves y masivas violaciones de los derechos humanos no puede oponerse, conforme se ha definido en la Reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, en Praga, el 29 de febrero de 1992<sup>549</sup>.

A partir de estos pasos iniciales más concretos en la protección de los derechos humanos, se evoluciona para la fase de creación de órganos específicos con aquella finalidad, como la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos

---

<sup>544</sup> MARIÑO MENÉNDEZ, F., M., “La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (O.S.C.E.)”, en DIEZ DE VELASCO, M., *Las Organizaciones...*, op. cit., pp. 673-674.

<sup>545</sup> PASTOR RIDRUEJO, J.A., op. cit., p. 221, se refiere a cuatro etapas de esta fase.

<sup>546</sup> Se celebra entre los días 10 de septiembre y 4 de octubre de 1991.

<sup>547</sup> Ejemplo de estas medidas son las acciones junto a Croacia y Bosnia y Herzegovina, con relación a los ataques a civiles; a Estonia en cuanto a la compatibilidad de sus leyes con las normas internacionales de derechos humanos; Moldavia, cuanto a los derechos de minorías, conforme a los datos señalados por MARIÑO MENÉNDEZ, F., M., “La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (O.S.C.E.)”, en DIEZ DE VELASCO, M., *Las Organizaciones...*, op. cit., pp. 676 y 677. Más allá de estos casos, se puede mencionar la Misión de la OSCE en Kosovo, la cual dependió de la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, por su Resolución 1203(1998), de 24 de octubre de 1998, de acuerdo con datos apuntados por VILLÁN DURÁN, C., *Curso ...*, op. cit. p. 36.

<sup>548</sup> PASTOR RIDRUEJO, J.A., *Curso de Derecho Internacional Público*, op. cit., p. 222.

<sup>549</sup> Ibidem.

Humanos - O.I.D.D.H, el Alto Comisionado para las Minorías Nacionales, el Representante para la Libertad de Información y el Grupo de Expertos para la Prevención de la Tortura, que van a ser tratados a seguir.

#### **a – OFICINA DE INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS Y DERECHOS HUMANOS – O.I.D.D.H.**

Se crea en la Reunión del Consejo de Ministros de Asuntos exteriores, en Praga, el 29 de febrero de 1992, oportunidad en que se decidió que el Consejo de la O.S.C.E. pudiera *“sin el consentimiento del Estado interesado, adoptar medidas adecuadas a casos de violaciones claras, graves y no corregidas de los compromisos pertinentes de la C.S.C.E.”*<sup>550</sup>.

En las atribuciones de la OIDDH, la que se observa con especial atención es el acompañamiento de las prácticas democráticas y, consecuentemente, de los derechos civiles y políticos, en este campo siendo bastante extensas las actividades desarrolladas, con más de cien proyectos de asistencia en más de veinte países de la OSCE, y más de cien elecciones observadas desde su creación<sup>551</sup>.

#### **b – GRUPO DE EXPERTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA**

Creado en 1998 tiene por atribución asesorar a la Oficina de las Instituciones Democráticas y de los Derechos Humanos en sus programas y actividades que debe desarrollar para combatir la tortura en los Estados-miembros.

#### **c – ALTO COMISIONADO PARA LAS MINORÍAS NACIONALES**

Tiene origen en la Cumbre de Helsinki de julio de 1992. Su sede es en La Haya y su misión es acompañar las posibles tensiones derivadas de problemas de las minorías nacionales, pudiendo acoger todas las informaciones necesarias a su labor,

<sup>550</sup> DIEZ DE VELASCO, M., *Las Organizaciones Internacionales*, op. cit., p. 677.

<sup>551</sup> Conforme datos presentados por el Embajador GÉRARD STOUDMANN, Director de la OSCE, el 17 de septiembre de 2001, en la conmemoración de los 10 años de la OIDDH, y disponible en la web <www.osce.org> [Consulta: 6 de marzo de 2008].

incluso contando con libre tránsito en los países de la O.S.C.E., a los cuales podrá solicitar que tomen providencias urgentes para reducir o eliminar la tensión detectada, caracterizándose sus funciones como *“esencialmente políticas de prevención de conflictos en la fase más temprana posible respecto a las tensiones provocadas por las cuestiones de minorías”*<sup>552</sup>.

Una práctica que el Alto Comisionado viene realizando en su labor son las “recomendaciones” a los Estados-miembros, para prevenir o impedir violaciones a los derechos de las minorías. A ese respecto, ha adoptado tales medidas con relación a Albania, Croacia, Estonia, Hungría, Kazajstán, Kirguizistán, Latvia, Lituania, Moldavia, República Eslovaca, Rumania, Rusia, y Ucrania.

#### **d – REPRESENTANTE PARA LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN**

Es el órgano creado en noviembre de 1997 y que tiene por competencia el control de los principios y compromisos en cuanto al respeto a la libertad de expresión y de información. Su sede es en Viena, cabiéndole dar respuesta urgente y adoptar medidas que leven al cese de la violación de aquel derecho en los países de la O.S.C.E.

#### **2 – LIGA DE LOS ESTADOS ÁRABES (ÁFRICA Y ASIA)**

Con relación a los estados árabes, desde 1945 se ha firmado el Pacto de la Liga de Estados Árabes, integrando veintidós Estados árabes localizados en el continente africano y asiático<sup>553</sup>, y que fuera precedido por el Protocolo de Alejandría de octubre de 1944, constituyéndose, de este modo, en la organización intergubernamental regional de naturaleza política de aquellos Estados.

---

<sup>552</sup> PASTOR RIDRUEJO, J. A., *Curso de Derecho ...*, op. cit., p. 223.

<sup>553</sup> Los Estados son los siguientes: República Argelina Democrática y Popular, Reino de Arabia Saudita, Estado de Bahrein, República Federal Islámica de las Comores, República de Yibuti, República Árabe de Egipto, Emiratos Árabes, República de Irak, Reino Hachemita de Jordania, Estado de Kuwait, República del Líbano, Jamahiriya Árabe Libia y Socialista, Reino de Marruecos, República Islámica de Mauritania, Sultanado de Omán, Palestina, Estado de Qatar, República de Somalia, República del Sudán, República Árabe Siria, República de Túnez y República del Yemen.

Su organización está formada por el Consejo de la Liga, entidad suprema que define la política general y que se compone por representantes de los Estados miembros; por Comisiones Especiales Permanentes, encargadas de establecer las reglas y determinar el alcance de colaboración entre los Estados miembros; y por la Secretaría General, su órgano administrativo y ejecutivo.

Entre las Comisiones Especiales Permanentes, se destaca la Comisión Regional Permanente Árabe para los Derechos Humanos.

## **A – LOS ESTADOS ÁRABES Y LOS DERECHOS HUMANOS**<sup>554</sup>

Dentro de la estructura de la Liga de Estados Árabes, la Resolución del Consejo de la Liga 2443 (XLVII), de 3 de septiembre de 1968, ha constituido la Comisión Regional Permanente Árabe para los Derechos Humanos, con el objetivo de promover aquellos derechos a través de funciones de información y coordinación. Sin embargo, entre las atribuciones no se encuentra prevista ninguna actuación atinente a la protección de los derechos humanos.

La Comisión se encuentra integrada por los mismos miembros de la Liga Árabe, realizando sus reuniones cuando son convocadas por el Secretario General. Las mismas son en sesión a puertas cerradas, y sus decisiones sólo culminan en proyectos y acuerdos que se someten al Consejo de la Liga.

Las actividades de la Comisión predominan en la participación en encuentros regionales y mundiales sobre la protección de los derechos humanos, más que en una actuación dentro del continente árabe.

Con el intento de adoptar un catálogo de derechos comunes a la comunidad musulmana, principalmente basada en sus creencias, y en el fundamento de que todo derecho proviene de Dios, y como alternativa a los valores occidentales de la

---

<sup>554</sup> Sobre el tema ver MOHAMED AMÍN AL-MIDANI, "La Liga de Estados Árabes y los Derechos Humanos", en VVAA, *La Protección Universal y Regional de los Derechos Humanos*, Instituto de Relaciones Internacionales, Departamento de Derechos Humanos, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 1995, pp. 7-20.

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los Estados Árabes han adoptado la Carta Árabe de Derechos Humanos<sup>555</sup>, del 15 de septiembre de 1994<sup>556</sup>, resultando en un instrumento menos laico y más en línea con los principios de la religión islámica.

Es un texto formado por un preámbulo y cuarenta y tres artículos, y de los cuales se destacan la reafirmación de los principios de la Carta de Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Naciones Unidas. Se refiere así mismo al derecho a la libertad, incluso de creencia, pensamiento, opinión y enseñanza; así como al derecho a la integridad física y moral, sin dejar de resaltar que el derecho musulmán constituye el cauce principal de sus disposiciones.

Como órgano de protección, prevé la creación del Comité de Expertos en Derechos Humanos, con atribuciones de analizar los Informes Gubernamentales, los cuales son el único instrumento de control y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de la Carta, y que serán exigidos después de un año de su entrada en vigor, y con su presentación periódica cada tres años.

Sobre esta cuestión del monitoreo de los derechos humanos, Mohammed Amin Al-Midani<sup>557</sup> ha destacado que *“El problema central con los Estatutos es la falta de algún mecanismo de control en Derechos Humanos, teniendo en cuenta los mecanismos Europeos y Americanos de las Convenciones de Derechos Humanos, e igualmente los Estatutos Africanos en Derechos Humanos y del Pueblo. Desde mi punto de vista, los Estatutos Árabes son primitivos comparados con los mecanismos*

---

<sup>555</sup> Por las Resoluciones 6089, de 12 de marzo de 2001, 6243, de 05 de septiembre de 2002 y 6032, de 24 de marzo de 2003, la Liga de los Estados Árabes ha decidido revisar y actualizar la Carta Árabe de Derechos Humanos.

<sup>556</sup> Se puede citar como primero intento de un conjunto de reglas de derechos humanos la Declaración del Cairo de Derechos Humanos en el Islam (CDHRI) de 1990, elaborada por la Organización de la Conferencia Islámica, adoptado por la Resolución N. 49/19-P en la XIX Conferencia Islámica de los Ministros de Asuntos Exteriores.

<sup>557</sup> Mohammed Amin Al-Midani es Presidente del Centro de Educación de Derechos Humanos y Leyes Humanitarias Internacionales, en Estrasburgo, Francia. La transcripción mencionada ha sido extraída del Resumen de la Conferencia realizada en Georgia Perimeter College el 10 de octubre del 2006 (Faculty Development Day), disponible en Internet <[http://www.acihl.org/articles.htm&article\\_id=15](http://www.acihl.org/articles.htm&article_id=15)> [Consulta: 28 de marzo de 2008] con traducción al español por Camila Uribe García, estudiante en Lenguas, Georgia Perimeter College.

*de control en otros sistemas regionales. Los Estatutos Árabes son primitivos debido a los limitados sistemas de monitoreo estatal dentro de las provisiones de los Estatutos. El mecanismo de control consiste en presentar reportes ante el Comité especialista, sin ningún sistema de petición individual o Estatal ante violaciones significativas frente a los Estatutos por parte de miembros del estado”.*

En 2004, tras críticas de la comunidad internacional a las deficiencias presentadas en el Estatuto Árabe de Derechos Humanos, y bajo la promoción de la Comisión Árabe en Derechos Humanos fue presentada, ante la Cumbre Árabe en Túnez, una nueva versión del Estatuto<sup>558</sup>, conteniendo 53 artículos posteriores y su preámbulo. Mohammed Amin Al-Midani<sup>559</sup> señala los principales rasgos del Nuevo Estatuto:

*“Dicho preámbulo se mantuvo de la primera versión, a pesar de las grandes críticas presentadas sobre la incompatibilidad entre la Declaración del Cairo y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.*

*El artículo número dos de los Estatutos es muy similar al segundo artículo en los Convenios Internacionales de 1966. Este trata de los derechos del pueblo Árabe a la tenencia de auto determinación, el derecho a poder controlar los recursos propios naturales y la riqueza, la posibilidad de formar una estructura política propia de manera libre, y la posibilidad de llevar a cabo un desarrollo económico, social y cultural.*

*Es posible dividir los artículos de los Estatutos en cuatro categorías básicas:*

*La primera categoría se refiere a los derechos individuales: el derecho a la vida (artículos 5, 6 y 7); el derecho a no ser torturado o tratado de manera degradante o inhumana (artículos 8, 9, 18 y 20); el derecho a no ser esclavo (artículo 10); el derecho a la seguridad de la persona (artículos 14 y 18).*

---

<sup>558</sup> Para entrar en vigor necesita de 7 ratificaciones, pero, hasta octubre de 2006, únicamente Jordania lo ha ratificado. Egipto, Qatar, Siria y Túnez lo han firmado pero no lo ratificaron.

<sup>559</sup> Al-Midani, A. M., op. cit.

*La segunda categoría se refiere a reglas judiciales: derecho de todas las personas a ser iguales ante la ley (artículo 12); derecho a ser procesados ante la ley de manera ecuéanime (artículos 13, 15, 16, 17, y 19).*

*La tercera categoría se refiere a los derechos políticos y civiles: el derecho a libre movimiento (artículos 24, 26 y 27); el derecho al respeto por la vida privada y la familia (artículo 21); derecho a las minorías (artículo 25); el derecho al asilo político (artículo 28); el derecho a adquirir una nacionalidad (artículo 29); libertad de pensamiento y de religión (artículo 30); el derecho a la propiedad privada (artículo 31); el derecho a la información y a la libertad de opinión, expresión e investigación (artículo 32); el derecho al matrimonio (artículo 33).*

*La cuarta categoría se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales: el derecho a trabajar (artículo 34); el derecho a conformar uniones comerciales (artículo 35); el derecho a la protección social (artículo 36); el derecho al desarrollo (artículo 37); el derecho a la educación (artículo 41); el derecho a participar en la vida cultural (artículo 42).*

*Dentro de la nueva versión de los Estatutos sobresale un tema nuevo y muy importante, en el que se confirma la igualdad en el Mundo Árabe entre hombres y mujeres (artículo 3 y 3). La nueva versión igualmente protege los derechos del menor (artículo 34 y 3) y los derechos de las personas discapacitadas (artículo 40).*

*Sin embargo, la principal falta presente en la primera versión sigue existiendo en la nueva: no existe un efectivo mecanismo de control. El Comité Experto continúa siendo el único sistema de monitoreo del estado a conformidad. El Comité, comprendido por siete miembros, recibe periódicamente reportes por parte de los partidos del estado. Ésto teniendo en cuenta, que un partido del estado no puede realizar peticiones individuales o estatales al Comité, en caso de existir una violación a cualquier artículo de los Estatutos.*

*Por otra parte, la falta de una Corte Árabe en Derechos Humanos es una omisión clave en el sistema de control“.*

Se puede señalar también algunas situaciones de derechos humanos que no lograron avance en la propuesta del nuevo Estatuto como la imposición y ejecución de la pena de muerte a menores si lo autorizaban las leyes del país, y las que contemplaban la derogación del derecho a la vida en los estados de excepción. Además, no se ha previsto prohibición a castigos crueles, inhumanos y degradantes<sup>560</sup>.

En años recientes, varios Estados árabes han tomado medidas positivas hacia una reforma política, jurídica, económica y social. Estas medidas incluyen la organización de elecciones legislativas y municipales multipartidarias, la creación de instituciones nacionales de derechos humanos, la facilitación de la labor de las ONG, el respeto del derecho a la libertad de expresión y la mejora del status de la mujer en la sociedad.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *“pese a estas mejoras, aún persisten obstáculos que impiden alcanzar la plena realización de los derechos humanos, a saber, el conflicto armado, la impunidad, las restricciones de los derechos de las mujeres y los migrantes, las restricciones a la libertad de expresión y de asociación, la falta de protección para los defensores de los derechos humanos y la imposición de leyes de emergencia. Si bien se han creado algunas instituciones nacionales, la continua ausencia de estructuras democráticas es un obstáculo para el crecimiento y la habilitación de la sociedad civil en toda la región.*

*La mayoría de los países árabes forma parte de los tratados fundamentales en materia de derechos humanos y algunos de los protocolos opcionales. Sin embargo, la presentación de informes acerca de la aplicación y el seguimiento de las recomendaciones formuladas por los órganos creados en virtud de tratados sigue siendo insuficiente”*<sup>561</sup>.

---

<sup>560</sup> Conforme observaciones de Amnistía Internacional en su Informe “Oriente Medio y Norte de África; perspectiva general 2004”.

<sup>561</sup> Comentario disponible en <<http://ohchr.org/spanish/countries/regional/arab/programme.htm>> [Consulta: 23 de mayo de 2008].



## **V – SUBREGIONAL**

En la presente parte, la estructura de protección a los derechos humanos se presenta también en razón de alguna identidad geopolítica, cultural o geográfica común, como se ha observado en los agrupamientos regionales e intercontinentales de las sesiones anteriores, con la característica de reunir y estar restringida a apenas algunos países de un mismo continente.

### **1 – COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES – CEI**

La “Comunidad de Estados Independientes-CEI” está formada por doce países integrantes de la ex-Unión Soviética<sup>562</sup>, y que se caracteriza como una organización intergubernamental que pretende una cooperación más amplia, intensa y profunda de sus Estados-miembros, sin perjuicio de la mayor libertad posible.

Se creó en la “Declaración de Minsk” de 1991 y en el “Acuerdo de Alma Ata” de 21 de diciembre de 1991, con el objetivo de formar una unidad central para establecer una esfera económica común de “*transición hacia una economía de mercado*”<sup>563</sup> y de coordinar la política extranjera y de inmigración, la protección medioambiental y la lucha contra el delito, más allá de “*contribuir a la realización de la democracia, la protección de los derechos humanos*”<sup>564</sup>. Su proceso de constitución culmina con la “Carta de la Comunidad de Estados Independientes”,<sup>565</sup> firmada también en Minsk en 1993, y en la cual se desarrollan sus fines y su estructura orgánica.

---

<sup>562</sup> Los doce países son los siguientes: Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Georgia, Kazajstán, Kirguizistán, Moldavia, Federación Rusa, Repúblicas de Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Ucrania.

<sup>563</sup> GARZÓN CLARIANA, G., “Otras Organizaciones Internacionales en el ámbito europeo – en la Europa oriental”, en DIEZ DE VELASCO, M., *Las organizaciones ...*, op. cit., p. 668.

<sup>564</sup> Ibidem.

<sup>565</sup> El texto integral de la Carta, en inglés, se puede ver en <<http://www.dipublico.com.ar/english/treaties/charter-establishing-the-commonwealth-of-independent-states-cis/>> [Consulta: 8 de abril de 2010].

## **A – LA COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES Y LOS DERECHOS HUMANOS**

En la Carta de la Comunidad de Estados Independientes, artículo 2, se enumera “*la garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con los principios y parámetros reconocidos por el Derecho internacional y por los documentos de la Conferencia sobre Seguridad y la Cooperación en Europa*”, así como “*la promoción de la libertad de asociación, contacto y circulación de los nacionales de los Estados miembros.*”

El 21 de mayo de 1995, en Minsk, los países de la CEI aprobaron la Convención sobre los Derechos y las Libertades Fundamentales del Hombre<sup>566</sup>, con treinta y nueve artículos y con texto introductorio en estos términos:

*“ Los Estados participantes de la Comunidad de los Estados Independientes, en lo sucesivo, las Partes Contratantes;*

*Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Culturales y Económicos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo al mismo, así como a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que entró en en el marco de la OSCE (CSCE);*

*Teniendo en cuenta que los mencionados instrumentos anteriormente mencionados tienen por objeto garantizar el reconocimiento efectivo y la observancia universales de los derechos consagrados en ella;*

*Vista la Declaración de los Jefes de los Estados participantes de la Comunidad de Estados Independientes sobre las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y las libertades fundamentales;*

*Considerando que la observancia de las normas internacionales en el ámbito de los derechos humanos en los derechos de todos los Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes, y el desarrollo y fomento del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción de raza, sexo, idioma, creencias políticas, religión y origen social, contribuye a la profundización de las reformas democráticas y sociales del crecimiento económico y el fortalecimiento de la ley y el orden;*

---

<sup>566</sup> Ha sido firmada por siete de los doce Estados miembros de la CEI: Armenia, Bielorrusia, Georgia, Kirguistán, Moldavia, Rusia y Tayikistán. Ha sido ratificada por Bielorrusia, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, y entró en vigor el 11 de agosto de 1998, el día del tercer instrumento de ratificación fue depositado por Belarús.

*La lucha por el cumplimiento efectivo de sus obligaciones para proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, en el espíritu de la concertación de los esfuerzos de las Partes Contratantes con el fin de afirmar los ideales de libertad y el imperio de la ley, la prevención de las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la defensa de las tradiciones, la tolerancia y la amistad entre los pueblos, y reforzar la paz civil y la concordia;*

*Suponiendo que esos esfuerzos fomentan el respeto universal y la observancia de los derechos humanos, los derechos y las libertades fundamentales de conformidad con los instrumentos básicos de derecho internacional en materia de derechos humanos;*

*Han acordado lo siguiente.<sup>567</sup> “*

Y pese a los intentos de tutela a los derechos humanos en la región de la CEI, es todavía muy presente el historial de violaciones a los derechos individuales, principalmente cuanto a la libertad de expresión, de medios de comunicación, de reunión o asociación, a la impunidad, discriminación, intolerancia y detenciones arbitrarias<sup>568</sup>.

De todo modo, para el alcance de los objetivos del contenido de derechos humanos se creó la Comisión de Derechos Humanos de la CEI.

## **a – COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS INDEPENDIENTES**

Por la “Carta de la CEI” es que se crea la “Comisión de Derechos Humanos”, integrando ésta la categoría de los denominados “órganos de exclusión facultativa”<sup>569</sup>, y que significa que no se trata de un órgano al cual deben pertenecer

---

<sup>567</sup> El texto integral, en inglés, en la web: <graduateinstitute.ch/faculty/clapham/hrdoc/docs/CIS%20convention.doc> [Consulta: 8 de abril de 2010].

<sup>568</sup> Un panorama muy reciente de la situación de los derechos humanos en la región de CEI, con datos de 2009, se puede consultar en el Informe 2010 del Observatorio para la protección de los defensores de los derechos humanos, en la web <[http://www.omct.org/files/2010/09/20875/obs\\_2010\\_es\\_europe.pdf](http://www.omct.org/files/2010/09/20875/obs_2010_es_europe.pdf)> [Consulta: 8 de abril de 2010].

<sup>569</sup> Más allá de éste, existen los “órganos comunes”, que constituyen la estructura irreducible de la CEI y que está formada por el Consejo de Jefes de Estado, Consejo de Jefes de Gobierno y Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, según GARZÓN CLARIANA, ídem, pp. 669-670.

obligatoriamente todos los países de la CEI, pudiendo cada uno adherir facultativamente.

A la “Comisión de Derechos Humanos” se agregó la “Convención sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales”, instrumento específico y garantizador de la protección de los derechos humanos en el seno de aquellos países de la ex – Unión Soviética, y cuyo contenido contempla los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales.

La Comisión está compuesta por representantes de los Estados-parte y sus atribuciones son el control y protección de los derechos humanos, pudiendo recibir denuncias interestatales, así como particulares, individuales o colectivas, sobre las violaciones de aquellos derechos por los Estados que ratificaron la Convención.

## **2 – COMUNIDAD ANDINA**

La Comunidad Andina surge como iniciativa de integración económica entre los países andinos, y cuyo primero intento se realiza con la Declaración suscrita en Bogotá, el 18 de agosto de 1966, por Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador y Perú, a ella adhiriendo Bolivia un año después. Aquella Declaración sucedió el Acuerdo de Cartagena, del 26 de mayo de 1969, y actualmente la Comunidad Andina está regida por el Protocolo de Trujillo, del 10 de marzo de 1996, que entró en vigor el 3 de junio de 1997, estando integrada por los mencionados países, con exclusión de Chile y Venezuela<sup>570</sup>.

En su estructura, la Comunidad Andina está compuesta por el Consejo Presidencial Andino; Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; Comisión de la Comunidad Andina; Secretaria General; Tribunal de Justicia y el Parlamento Andino.

---

<sup>570</sup> Chile se retiró en 1976 y Venezuela en 2006. España y Panamá gozan de la condición de “observadores” de la Comunidad.

## **A – LA COMUNIDAD ANDINA Y LOS DERECHOS HUMANOS**<sup>571</sup>

En el ámbito subregional del proceso de integración andino, la preocupación por los ideales de los derechos humanos encuentra inicialmente una discreta e indirecta mención en el preámbulo del Acuerdo de Cartagena de 1969, al disponer sobre sus bases fundadas “*en los principios de igual justicia, paz, solidaridad y democracia*”. Una mención más directa, pero no tan contundente al respecto, se observa en la “Carta de Conducta” suscrita en Riobamba, Ecuador, en 1980, por los Presidentes de los países-miembros, en la cual se estableció el carácter democrático que debe regir el ordenamiento político de aquellos países, bien como el compromiso de la conducta interna de los países miembros para respetar a los derechos humanos, políticos, económicos y sociales. Tales compromisos fueron renovados por la “Declaración del Consejo Presidencial Andino sobre la Democracia e Integración”, suscrita en Santafé de Bogotá el 7 de agosto de 1998. A su vez, por la Decisión 458, sobre “Lineamientos de la Política Exterior Común”, del 25 de mayo de 1999, adoptada por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en Cartagena de Indias, se estableció que, dentro de los principios en que se basan la política de integración andina, se señala la promoción y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Como hecho concreto en esta línea de principios, se puede destacar como primera iniciativa en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos la manifestación del Consejo Consultivo Laboral Andino, materializada por el documento “Opinión 011”, del 9 de junio de 2000, en Lima, Perú, por lo cual se opina que “*es indispensable que los órganos del Sistema Andino de integración encarguen a un Grupo de Experto del más alto nivel la realización de un informe sobre un ‘Programa de Acción de la Comunidad Andina en el ámbito de los Derechos Humanos orientado a su incorporación en la normativa comunitaria y a su protección por el Tribunal Andino de Justicia’, que permita al proceso andino de integración contar, en el más*

---

<sup>571</sup> Las informaciones presentadas sobre este tema fueron obtenidas en su mayor parte junto al site oficial de la Comunidad Andina <[www.comunidadandina.org](http://www.comunidadandina.org)>.

*breve plazo, con un instrumento de reconocimiento explícito e inequívoco de los derechos fundamentales.*<sup>572</sup>.

Posteriormente se puede registrar el “Acuerdo de Cooperación” firmado en Lima, el 25 de julio de 2001, entre la Secretaría General de la Comunidad Andina y la Comisión Andina de Juristas, con el objetivo de desarrollar trabajo conjunto en cuanto a la promoción y defensa de los derechos humanos y fortalecimiento de la democracia, y por el cual se admite que aquellos derechos son tema sobre los cuales se debe reflexionar desde la perspectiva de la integración, adoptándose medidas que pasen de la cooperación a la práctica efectiva, de modo que la cooperación interinstitucional promueva la ejecución de programas y proyectos con aquel objetivo en el ámbito subregional andino.

Este proceso evolutivo de una preocupación cada vez mayor con relación a los derechos humanos culmina con la “Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, firmada en Guayaquil, el 26 de julio de 2002, como fruto del reconocimiento de que la acción internacional para la defensa de los derechos humanos no constituye injerencia en los asuntos internos de los Estados, siendo que su iniciativa surge en el Seminario Subregional sobre Democracia y Derechos Humanos, convocado por Ecuador y la Comunidad Andina, realizado en Quito, en agosto de 2000, ocasión en que los cinco países acordaron la elaboración de aquella Carta, encargando a Ecuador la formulación de la propuesta.

En su aspecto de reconocimiento a los derechos humanos, la Carta incorpora, más allá de los reconocidos derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, el derecho al desarrollo, a los derechos humanos de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, de los grupos en situación de vulnerabilidad, en esto incluyéndose las mujeres, niños, adolescentes y jóvenes, personas de la tercera edad, personas con discapacidades, los migrantes, los

---

<sup>572</sup> La iniciativa se debió al “preocupante cuadro de violaciones del derecho de libertad sindical que se vive en nuestra región”, y que lleva los países de la comunidad andina a tener cerca de 39% de las quejas, a nivel mundial, interpuestas junto al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, de un total de cerca de 42% de las que reúnen América Latina en este contexto, según datos que constan del propio documento “Opinión 11”.

derechos de las personas con diversa orientación sexual, refugiados, desplazados internos y personas privadas de su libertad, y aún el derecho a la democracia y cultura de la paz, el derecho a un medio ambiente sano y protegido.

## **a – LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS EN LA COMUNIDAD ANDINA**

A pesar del gran paso que ha dado la Comunidad Andina en adoptar un instrumento específico de reconocimiento a los derechos humanos, en su defensa la Carta Andina no ha avanzado tanto, limitándose a reconocer su control y protección como contenido meramente programático, no creando o previendo cualquier órgano específico al respecto. En este punto, incluso fue descartada la iniciativa de crear un órgano que sería la “Sala Especial” en el Tribunal de Justicia Andino, optándose por el aprovechamiento de los sistemas de defensa de los derechos humanos disponibles en los niveles nacionales, internacionales y comunitarios, de modo que se estableció una posición “complementaria” de la Carta en relación a tales normativas, conforme el contenido de su artículo 63.

En estos casos específicos, y a empezar por el plano nacional – arts. 64/79 – la Carta, entre otras disposiciones, pugna por la promoción de que los países-miembros cuenten con una administración de Justicia eficiente, independiente, imparcial y autónoma, con capacidad de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos, incluso reconociendo el derecho de las personas de acudir a los mecanismos de protección internacional; reconoce el papel de las Defensorías del Pueblo como garantía institucional de protección de los derechos humanos, así como reconoce también la legitimidad del trabajo de los defensores de los derechos humanos.

A nivel regional – arts. 82 y 83 - reconoce la importancia de las recomendaciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y reitera el compromiso de acatar las resoluciones y sentencias de la Corte Interamericana. En cuanto a las denuncias por violaciones a los derechos humanos, se admitió que fuesen recibidas y sometidas a trámite por los propios cuerpos orgánicos ya creados

en el Sistema de Integración Andina, como el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, el Parlamento Andino, y el Consejo Andino de Defensores del Pueblo<sup>573</sup>.

Por fin, en el plano internacional – arts. 80 a 81 - reafirma la voluntad de que los países miembros presenten a tiempo los “informes periódicos” a que están obligados por los instrumentos internacionales, con el interés de que la sociedad civil participe en el proceso de preparación y seguimiento de tales instrumentos, dando a sus observaciones finales la más amplia divulgación.

### **3 – MERCADO COMÚN DEL CONO SUR- MERCOSUR**

Con la Declaración de Iguazú, del 30 de noviembre de 1985, firmada entre Brasil y Argentina, secundada por la firma del Acta de Integración Brasileño-Argentina, del 20 de julio de 1986, se tiene el marco inicial de un "Mercado Común en el Cono Sur", que establece el Programa de Integración y Cooperación Económica- PICE, con el cual se busca definir un espacio geográfico común con objetivos económicos. Este surge el 29 de noviembre de 1988, con el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo Brasil-Argentina, con el objetivo de alcanzar la formación de un mercado común, con la liberalización completa del comercio de bienes y servicios, que se concreta el 31 de diciembre de 1994, con el Acta de Buenos Aires, del 6 de julio de 1990, y en el Acuerdo de Complementación Económica nº 14, del 20 de enero de 1990.

En 1990, Uruguay y Paraguay son invitados a incorporarse a este proceso de integración, el que se amplía el 26 de marzo de 1991, con la firma del Tratado de Asunción, en el cual se ha previsto la constitución de un mercado común entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, con el objetivo del establecimiento de una zona de libre comercio, y a partir de 1º de enero de 1995, con la “Tarifa Externa Común”, se caracteriza el marco de la Unión Aduanera. Por el Protocolo de "Ouro Preto", de

---

<sup>573</sup> En este caso según consta del texto “Ayuda Memoria de la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, en octubre de 2002, obtenido junto al site oficial de la Comunidad Andina en internet.



diciembre de 1994, el MERCOSUR pasa a tener reconocida su personalidad jurídica de derecho internacional, y a ser el representante del bloque de aquellos cuatro países para negociar en nombre propio acuerdos con terceros países, grupos de países y organismos internacionales. Actualmente el MERCOSUR se compone por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, miembros plenos, y por Bolivia y Chile, como miembros asociados.

Es importante registrar que el MERCOSUR, al contrario de la Unión Europea, no se identifica con las bases del Derecho Comunitario, cuyas instituciones tienen un carácter supranacional, con sus normas y decisiones disponiendo del atributo de la aplicabilidad directa a los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados-parte. En realidad, se sitúa el MERCOSUR en el ámbito del Derecho de Integración, que es un subconjunto del Derecho Internacional Público, dependiendo sus actos del mecanismo de recepción de las normas internacionales al ordenamiento jurídico interno<sup>574</sup>.

Afuera de aquellos objetivos, surge la pauta de contenido no-económico, con el denominado "MERCOSUR POLÍTICO"<sup>575</sup>, que tiene la meta de coordinar posiciones sobre cuestiones de interés común. Con vistas a intensificar las acciones necesarias para ampliar y sistematizar la cooperación política entre las partes, entendida aquella cooperación como todas las acciones en los campos no incluidos en la agenda económica y comercial de integración, el 17 de junio de 1997, en Asunción, Paraguay, se firma la Declaración Presidencial sobre Consulta y Concertación Política de los Estados-parte del MERCOSUR, y que, más tarde, se concretiza con la Decisión 18/98, en la Cúpula de Rio de Janeiro, con la creación del Foro de Consulta y Concertación Política.

---

<sup>574</sup> Para tenerse una idea de esta situación, en el ámbito del MERCOSUR, del total de normas emanadas (acuerdos, Protocolos, Decisiones, Resoluciones y Directrices), solamente el 32% fueron consideradas dispensables para la incorporación. De las que necesitaban incorporarse, sólo el 28% fueron incorporadas por los cuatro Estados-parte, conforme datos ofrecidos por CARLOS MARCIO B. CONZENDLEY, Jefe de la División del Mercado Común del Sur-Ministerio de las Relaciones Exteriores de Brasil, en el texto "Sistema de Incorporação das Normas do MERCOSUL a Orden Jurídica Interna", de 23/10/2001, disponible en la web: <[www.mercosul.gov.br](http://www.mercosul.gov.br)> [Consulta: 4 de junio de 2008].

<sup>575</sup> Su marco inaugural es el 25/6/96, en San Luis, Argentina, donde se firma la Declaración Presidencial sobre Diálogos Políticos, con la creación del Mecanismo de Consulta y Concertación Política-MCCP,

Punto de destaque en este campo del "MERCOSUR POLÍTICO" es la denominada "*cláusula democrática*", contenida en el Protocolo de Ushuaia, Argentina, de 1998, y que firmó el Compromiso Democrático en el MERCOSUR, disponiendo su artículo 1º que "*la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Partes del presente Protocolo*", lo que marca el MERCOSUR como garantía de la consolidación de los regímenes democráticos en la región<sup>576</sup>.

Esta preocupación político-social demuestra en consecuencia, y con claridad, la reafirmación democrática de respeto a los derechos humanos.

## **A – EL MERCOSUR Y LOS DERECHOS HUMANOS**

En diversas ocasiones el MERCOSUR tuvo oportunidad de manifestarse expresamente sobre temas de derechos humanos, tanto internamente - con instrumentos de compromiso entre sus propios miembros -, como en su aspecto externo - envolviendo declaraciones sobre aquellos derechos con relación a otras naciones -. En este contexto ha demostrado compromiso explícito con los temas de democracia<sup>577</sup>; libertades fundamentales, derecho humanitario, desarrollo social y

---

<sup>576</sup> Tal es la importancia de esa opción democrática, que en las crisis de 1996 y 1999 en Paraguay, la actuación conjunta de los países del MERCOSUR fue factor preponderante para asegurar el mantenimiento de la integridad de las instituciones democráticas en aquel país.

<sup>577</sup> (a)-DECLARACIÓN PRESIDENCIAL DE LAS LEÑAS, de 26 y 27 de junio de 1992, en Las Leñas, Argentina, en la cual se firma la plena vigencia de las instituciones democráticas como condición indispensable para la existencia y desarrollo del MERCOSUR. (b)-DECLARACIÓN PRESIDENCIAL SOBRE EL COMPROMISO DEMOCRÁTICO EN EL MERCOSUR, de 25 de junio de 1996, en San Luis/Argentina, por el cual se reitera lo expresado en la Declaración Presidencial de Las Leñas, en que se establece como condición esencial para la cooperación en el ámbito del MERCOSUR la plena vigencia de las instituciones democráticas, constituyéndose la alteración de aquel orden un obstáculo inaceptable para la continuidad del proceso de integración, y definiendo como medidas represivas contra las violaciones al orden democrático la suspensión de participación en los foros del MERCOSUR, o la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de sus normas. (c) - PROTOCOLO DE ADHESIÓN A LA "DECLARACIÓN SOBRE COMPROMISO DEMOCRÁTICO EN EL MERCOSUR", de 25 de junio de 1996, firmada por Bolivia y Chile en reafirmación al prevalecimiento del régimen democrático. (d) - COMUNICADO DE PRENSA, de 12 de febrero de 1998, en la Ciudad de Panamá, en que los países que integran el MERCOSUR, así como Chile y Bolivia, analizando sus situaciones internas en cuanto a la democracia, destacan el respeto a las instituciones y el mantenimiento del aquel régimen, así como reafirman que la democracia representativa es indispensable en el hemisferio sur. (e) - PROTOCOLO DE USHUAIA SOBRE EL COMPROMISO DEMOCRÁTICO EN EL MERCOSUR, LA REPÚBLICA DE BOLIVIA Y LA REPÚBLICA DE CHILE, de 24 de julio de 1998, en Ushuaia, Argentina, en que se reafirma el compromiso con las instituciones democráticas.

medio ambiente<sup>578</sup>; libertad de convicción religiosa<sup>579</sup>; educación<sup>580</sup>; derechos sociales<sup>581</sup>; derechos laborales<sup>582</sup>; refugiados<sup>583</sup>; asistencia jurídica<sup>584</sup> y violencia familiar y contra la mujer<sup>585</sup>.

---

<sup>578</sup> DECLARACIÓN POLÍTICA DEL MERCOSUR, BOLIVIA Y CHILE COMO ZONA DE PAZ, de 24 de julio de 1998, en Ushuaia, Argentina, por la cual se define que el respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, al progreso social y a la protección al medio ambiente constituyen elementos indispensables para el afianzamiento de la paz y la seguridad en la región, destacándose la necesidad de adoptar medidas para evitar la proliferación de armas. Reiterase el apoyo al Tratado de Tlatelolco sobre Proscripción de Armas Nucleares, y el Compromiso de Mendoza sobre la prohibición Completa de las Armas Químicas y Biológicas, con el apoyo a las medidas de no proliferación de armas nucleares y otras de destrucción en masa, y la prohibición de minas terrestres antipersonal en el territorio de los países firmantes. Se define también la estimulación de cooperación entre sus miembros para el uso exclusivamente pacífico y seguro de la energía nuclear y de la ciencia y tecnología espaciales.

<sup>579</sup> COMUNICADO DE PRENSA, de 6 de marzo de 1998, en Buenos Aires, Argentina, por lo cual los miembros del MERCOSUR, Chile y Bolivia, se manifiestan favorablemente por la iniciativa de libertad religiosa en Cuba, en vista de la visita del Papa Juan Pablo II a aquel país, así como por la liberación de más de 200 ciudadanos cubanos en aquella ocasión.

<sup>580</sup> (a) - DECISIÓN 07/91-CMC, de 17 de diciembre de 1991, en Brasilia, Brasil, crea la REUNIÓN DE MINISTROS DE EDUCACIÓN DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, órgano encargado de coordinar las políticas educacionales de la región. (b) - DECISIÓN 07/92, de 27 de junio de 1992, en Las Leñas, Argentina, en que se aprueba el "PLAN TRIENAL PARA EL SECTOR DE EDUCACIÓN DEL MERCOSUR", con el objetivo de la formación de la conciencia ciudadana favorable al proceso de integración. (c) - DOCUMENTO MERCOSUR 2000, de 20 de junio de 1996, donde se manifiesta la preocupación con la calidad de enseñanza. (d) - DECISIÓN 04/97-CMC, de 19 de junio de 1997, en Asunción, Paraguay, en que se firma el protocolo de admisión de títulos universitarios para ejercicio de actividades académicas en los Estados-parte. (e) - PLANO TRIENAL DE METAS DEL SECTOR EDUCACIONAL, de 10 de diciembre de 1998, en que se busca definir metas de actuación conjunta para formación de la conciencia ciudadana para la integración, con educación de calidad para todos en un proceso de desarrollo con justicia social y consecuente con la singularidad cultural de sus pueblos.

<sup>581</sup> DECISIÓN 19/97, de 15 de diciembre de 1997, en Montevideo, Uruguay, por la cual se reconoce a los trabajadores, y sus familiares, derechos a la seguridad social con relación al período de trabajo en cualquier Estado-parte.

<sup>582</sup> "Acta de la XV Reunión del CMC", de 10 de diciembre de 1998, en Río de Janeiro, Brasil, por la cual se aprueba la "Declaración Socio-Laboral del MERCOSUR".

<sup>583</sup> (a) - DECLARACIÓN SOBRE EL CONFLICTO DE LA ANTIGUA YUGOSLAVIA, de 15 de junio de 1999, en Asunción, Paraguay, por la cual los integrantes del MERCOSUR, Chile y Bolivia manifiestan su satisfacción por el cese de las hostilidades en la antigua Yugoslavia, y para que se consiga obtener el regreso seguro de los refugiados. (b) - DECLARACIÓN DEL RIO DE JANEIRO SOBRE REFUGIADOS, de 10 de noviembre de 2000, en Río de Janeiro, Brasil, por la cual se expresa la preocupación de los Estados del MERCOSUR, Chile y Bolivia, con la protección que se deba conceder a los individuos perseguidos por motivo de raza, nacionalidad, religión, grupo social, opinión política o víctima de grave y generalizada violación a los derechos humanos.

<sup>584</sup> DECISIÓN 50-CMC, de 14 de diciembre de 2000, en Florianópolis, Brasil, y que dispone sobre el ACUERDO SOBRE EL BENEFICIO DE LA JUSTICIA GRATUITA Y ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA ENTRE LOS ESTADOS-PARTE DEL MERCOSUR, CHILE Y BOLIVIA, en el cual se asegura a los nacionales, ciudadanos y a las personas residentes en aquellos Estados, igualdad de condiciones en aquellos beneficios de gratuidad judicial.

<sup>585</sup> RESOLUCIÓN 79-GMC, de 07 de diciembre de 2000, en Brasilia, Brasil, por la cual se persigue instar a los Gobiernos de los Estados-parte, Chile y Bolivia, para que adopten medidas de enfrentamiento de la violencia familiar, con la prevención y sanción de los actos de aquella naturaleza.

Mas allá de estas medidas, en el seno del Cono Sur se ha afirmado también el compromiso de los Poderes Legislativos de los seis países en reunirse anualmente, lo que se verifica desde 1998 en los denominados “Encuentros Parlamentarios de derechos humanos del MERCOSUR”, y donde son trazadas pautas políticas comunes en este tema.

Es pertinente señalar las medidas relacionadas a los derechos laborales, como refleja el “Acta de la XV Reunión del CMC”, del 10 de diciembre de 1998, en Rio de Janeiro, Brasil, por la cual se aprueba la “Declaración Socio-Laboral del MERCOSUR”<sup>586</sup>, que al fortalecer el tratamiento de las cuestiones sociales, y consagrar derechos laborales reconocidos en convenciones internacionales, instituye mecanismos de acompañamiento de su aplicación<sup>587</sup>.

Hay que destacar también, como pauta de compromiso en la defensa de los derechos humanos la creación, por el Consejo del MERCOSUR, en 2009, del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, como resultado de una de las resoluciones de la XII Reunión de Altas Autoridades Competentes en Derechos Humanos y Cancillerías y Estados Asociados (RAADDHH), en Buenos Aires, realizada del 2 al 5 de junio de 2008. El Instituto *“permitirá concretar, diseñar y seguir políticas públicas en toda la región y adoptar estándares internacionales (en*

---

<sup>586</sup> Por la Declaración Socio-Laboral del MERCOSUR se definen los derechos individuales de no-discriminación, de igualdad, la protección al trabajador migrante o fronterizo, la eliminación del trabajo forzado, la prohibición del trabajo infantil o de menores, la salvaguarda a los derechos de los trabajadores, los derechos colectivos de libre asociación, de libertad sindical, de la negociación colectiva, de la huelga, de la promoción y desarrollo de procedimientos preventivos y de auto-composición de conflictos, del diálogo social, el compromiso de fomento al empleo, a la protección del trabajador, formación profesional y desarrollo de recursos humanos, salud y seguridad del trabajo y seguridad social. Esta declaración apuntó como sus premisas el desarrollo económico con justicia social, la mejoría de las condiciones de vida de sus habitantes, el compromiso de los Estados-parte con los instrumentos de protección internacional de derechos humanos, la armonización entre el progreso económico y el bienestar social, la observancia de los principios de la democracia política y del Estado de Derecho, la expansión de la esfera comercial económica de la integración regional para la temática social y la observación plena de los derechos humanos.

<sup>587</sup> En tema de derechos laborales se destacan aún (a) - RESOLUCIÓN 15-GMC, de 9 de marzo de 1999, en Asunción, Paraguay, que crea la Comisión Socio-Laboral del MERCOSUR como órgano tripartito auxiliar del Grupo Mercado Común-GMC, con carácter promocional y no sancionador, dotado de instancias nacionales y regionales, con el objetivo de incrementar y acompañar la aplicación de la Declaración.(b) RESOLUCIÓN 12-GMC, de 5 de abril de 2000, en Buenos Aires, Argentina, que define el Regimiento Interno de la Comisión Socio-Laboral del MERCOSUR/Regional (c) - RESOLUCIÓN 85-GMC, de 7/12/2000, en Brasilia, Brasil, que adopta el Reglamento Interno de la Comisión Socio-Laboral del MERCOSUR -Comisiones Nacionales.

*Derechos Humanos)* ya establecidos por los sistemas interamericano y de Naciones Unidas", como informó la Secretaria de Derechos Humanos de Argentina, presidente Pro Tempore de la reunión.

El Instituto actuará prestando asistencia técnica en actividades de promoción y protección de los derechos humanos, realizando estudios e investigaciones, y ofreciendo un espacio permanente de reflexión y diálogo entre funcionarios/as públicos/as y organizaciones de la sociedad civil.

El contenido de estas iniciativas apuntadas revelan su rasgo marcadamente promocional, ciertamente como reflejo de la fase aún embrionaria en que se encuentra este proceso de cooperación regional, pero suficientes para demostrar el grado de compromiso que ha expresado el MERCOSUR en el asunto, y como intento, por lo menos inicial, en alcanzar una mayor efectividad en el cumplimiento de los derechos humanos.

Comparado con los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos, las conquistas ya alcanzadas por el MERCOSUR se pueden caracterizar como aún muy discretas, pero que demuestran vitalidad suficiente para tornarse una institución capacitada para emprender grandes transformaciones en la sociedad suramericana, incluso para reafirmar las intensas afinidades político-sociales que dimanen de la diversidad de sus culturas, y para fomentar un paulatino y constante proceso de paz, desarrollo y sociabilidad entre las naciones, con su enfoque en la garantía a los derechos humanos, y que se impone como prioridad por la comunidad internacional. En este sentido, no está demás recordar las precisas palabras de DIEZ DE VELASCO en que *"la penetración de las normas comunitarias en la esfera estatal es, en efecto, más intensa que la de la mayoría de las normas jurídicas internacionales."*<sup>588</sup>.

---

<sup>588</sup> DIEZ DE VELASCO, M., *Las Organizaciones...*, op. cit., p. 652.

#### **4 – ASOCIACIÓN DE NACIONES DEL SURESTE ASIÁTICO – ASEAN**

La ASEAN es una organización que reúne a diez países del sudeste asiático, y fue creada en 8 de agosto de 1967, con el objetivo de incrementar el desarrollo económico y fomentar la paz y la estabilidad regionales.

Integran la ASEAN Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania (Myanmar) y Camboya y su sede es en Yakarta, Indonesia, alcanzando un universo de más de quinientas y cincuenta millones de personas.

Con la Carta de ASEAN, del 20 de noviembre de 2007, es que aquella organización ha pasado a tener personalidad jurídica.

#### **A – LA ASEAN Y LOS DERECHOS HUMANOS**

La primera manifestación de ASEAN sobre derechos humanos se ha dado en julio de 1993, en su 26ª Reunión Ministerial, tras la Cumbre Mundial sobre Derechos Humanos, en Viena, de aquel mismo año, ocasión en que los seis países integrantes de la organización a época<sup>589</sup> se manifestaron en estos términos:

*“The Foreign Ministers agreed that ASEAN should coordinate a common approach on human rights and actively participate and contribute to the application, promotion and protection of human rights. They noted that the UN Charter had placed the question of universal observance and promotion of human rights within the context of international cooperation”*<sup>590</sup>.

La relevancia de este momento estableció un marco divisor en relación a los derechos humanos en aquella región debido a la fuerte vinculación de los países del sudeste asiático a los principios de soberanía nacional, integridad territorial y no interferencia en asuntos internos.

---

<sup>589</sup> Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Brunéi.

<sup>590</sup>“Joint Communiqué of the Twenty-Sixth ASEAN Ministerial Meeting”, Singapur, 23-24 de julio de 1993, p. 17.

Desde entonces, en un proceso de evolución que se ha prolongado por quince años, concretamente desarrollado a partir de 1994 con la creación de un Grupo de Trabajo para un Mecanismo de la ASEAN de Derechos Humanos, se tiene como punto destacable la adopción del Estatuto de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos, el 20 de julio de 2009.

Conforme resumido por el profesor BJÖRN ARP, de la Universidad de Alcalá, los esfuerzos iniciales con los derechos humanos en ASEAN implicaban en adoptar cuatro medidas generales:

- “(a) creación de una red de cooperación entre las instituciones nacionales de derechos humanos que ya existían en los Estados miembros (Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia);*
- (b) promoción y educación, así como fomento del conocimiento público de las cuestiones de derechos humanos;*
- (c) redacción de un instrumento de la ASEAN para la protección y promoción e los derechos de los trabajadores migrantes;*
- (d) creación de una Comisión de la ASEAN para la promoción y protección de los derechos de las mujeres y de los niños<sup>591</sup>.*

En este proceso de evolución se pueden registrar, además, algunos hechos que identifican una posición más visible de preocupación con temas de derechos humanos en los países de aquella región, aunque muy discretas se considerada la evolución de la tutela de los derechos humanos en otras regiones del mundo. Mas allá de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos, con Estatuto adoptado el 20 de julio de 2009, se apuntan los siguientes datos relevantes:

- Comité de la ASEAN sobre Mujeres, creado en 1976 como Subcomité sobre la Mujer, con el objetivo de desarrollar actividades de cooperación regional frente a algunas prioridades, como combatir el tráfico y los delitos de violencia

---

<sup>591</sup> BJÖRN ARP, *La Nueva Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN: ¿Un avance global de derechos humanos o un tigre sin dientes?*, pág. 6, texto disponible en <[http://www.reei.org/reei20/doc/Articulo\\_ARP\\_Bjorn.pdf](http://www.reei.org/reei20/doc/Articulo_ARP_Bjorn.pdf)> [Consulta: 19 de agosto de 2010].

contra las mujeres, alcanzar la plena aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y otros instrumentos internacionales relacionados con la mujer; intensificar los esfuerzos de la Red de la ASEAN para la Mujer en el entrenamiento de habilidades.

- Declaración de la Promoción de la Mujer en la Región de Asean, del 5 de julio de 1988<sup>592</sup>, en la cual se reconoce la importancia de la participación activa y de la integración de la mujer en la región para compartir el desarrollo futuro y el progreso de la ASEAN; se reconoce la necesidad de satisfacer las necesidades y aspiraciones de las mujeres en los países miembros de la ASEAN; se declara esfuerzo para promover e implementar la participación equitativa y efectiva de la mujer siempre que sea posible en todos los campos y en los distintos niveles de la vida política, económica, social y cultural de la sociedad en los planos nacional, regional e internacional, para permitir a las mujeres en la región para llevar a cabo su importante papel como agentes activos y beneficiarios del desarrollo nacional y regional, particularmente en la promoción del entendimiento y la cooperación regional y en la construcción de sociedades más justas y pacíficas; para integrar en los planes nacionales las preocupaciones específicas de las mujeres y su papel como agentes activos y beneficiarios del desarrollo, en particular teniendo en cuenta su papel como una fuerza productiva para alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad humana.

- Programa de Acción de Hanoi, de 1997, que incluyó medidas para reforzar la colaboración de la ASEAN para combatir el tráfico y la violencia contra mujeres e niños. Ha buscado promover un más grande intercambio de información entre los Estados miembros de ASEAN para promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración y

---

<sup>592</sup> El texto integral de la Declaración, en inglés, se puede ver en <<http://www.aseansec.org/23894.htm>> [Consulta: 19 de agosto de 2010].



Programas de Acción de Viena, la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;

- Programa de Acción de Vientiane (Laos) para crear la Comunidad ASEAN, de 2003, en esta se destacando el desafío para concentrar esfuerzos en la protección de las mujeres, niños y trabajadores migrantes;

- Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, del 30 de junio de 2004, en Yakarta, Indonesia. Su artículo 4 dispone: *“Promulgar leyes para prevenir la violencia contra la mujer y, cuando sea necesario, reforzarlas o modificarlas; potenciar la protección, curación, recuperación y reintegración de las víctimas y supervivientes, por ejemplo, adoptando medidas para investigar, procesar, castigar y, en caso pertinente, rehabilitar a los perpetradores; e impedir que las mujeres y las niñas que hayan estado sometidas a cualquier forma de violencia, ya sea en el hogar, el lugar de trabajo, la comunidad, la sociedad o bajo custodia, vuelvan a ser objeto de victimización”*<sup>593</sup>.

- Declaración de la ASEAN contra el Tráfico de Personas, en particular las mujeres y los niños, del 29 de noviembre de 2004, en Vientiane, Laos. La Declaración prevé que los países miembros de ASEAN deben desplegar esfuerzos para abordar eficazmente la trata de personas, adoptando medidas al establecimiento de una red de coordinación regional para prevenir y combatir la trata de personas, adoptando medidas para proteger contra el fraude los documentos de viaje y documentos de identidad oficiales, promoviendo el intercambio de información, el fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia en las fronteras y la promulgación de la legislación necesaria, así como la intensificación de la cooperación entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y el tratamiento con humanidad

---

<sup>593</sup> Texto oficial disponible en <http://www.aseansec.org/16189.htm> [Consulta: 19 de agosto de 2010].

de las víctimas de la trata, más allá de la garantía de una asistencia y pronta repatriación<sup>594</sup>;

- Declaración de Cebú, Filipinas, de 13 de enero de 2007<sup>595</sup>, en la cual se hace referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y a la Convención sobre los Derechos del Niño, así como a la promoción de los derechos humanos, notadamente a la adopción de medidas sobre la protección y promoción de los derechos de los trabajadores migrantes<sup>596</sup>;

- Declaración para el establecimiento del Comité para la Aplicación de la Declaración de Cebú sobre la Protección y Promoción de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, del 30 de julio de 2007, en Manila, Filipinas<sup>597</sup>, y por la cual los países de ASEAN se comprometieron a garantizar la aplicación efectiva de los compromisos asumidos en la Declaración; facilitar el desarrollo de un instrumento de la ASEAN sobre la protección y promoción de los derechos de los trabajadores migrantes; promover la cooperación bilateral y regional y asistencia en asuntos relacionados con los derechos de los trabajadores migrantes; facilitar el intercambio de datos sobre cuestiones relacionadas con los trabajadores migrantes, con el fin de mejorar las políticas y programas para proteger y promover los derechos de los trabajadores migrantes en ambos países emisores y receptores; ampliar el apoyo y asistencia a la aplicación de las medidas contenidas en la Declaración; promover la armonización de los mecanismos entre ambos países emisores y

---

<sup>594</sup> El texto integral de la Declaración, en inglés, se puede ver en <<http://www.aseansec.org/16793.htm>> [Consulta: 19 de agosto de 2010].

<sup>595</sup> El texto integral de la Declaración, en inglés, se puede ver en <<http://www.aseansec.org/19264.htm>> [Consulta: 19 de agosto de 2010].

<sup>596</sup> Un resumen sobre la Cumbre de Cebu se puede ver en el artículo de la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, GRACIA ABAD QUINTANAL, “LA ASEAN tras la Cumbre de Cebu; ¿En el camino de la integración?”, disponible en internet::

<sup>597</sup> El texto integral de la Declaración, en inglés, se puede ver en <<http://www.aseansec.org/16793.htm>> [Consulta: 19 de agosto de 2010].

receptores que promueven y protegen los derechos de los trabajadores migrantes para cumplir el compromiso de la ASEAN; trabajar en estrecha colaboración con la Secretaría de la ASEAN en la preparación del Informe del Secretario General de la ASEAN a la Cumbre de la ASEAN, y trabajar por el desarrollo de un instrumento de la ASEAN sobre la protección y promoción de los derechos de los trabajadores migrantes.

- Carta de la ASEAN<sup>598</sup>, del 20 de noviembre de 2007, y que entró en vigor el 15 de diciembre de 2008, en Singapur, se ha convertido en un acuerdo legalmente vinculante entre los diez países integrante de ASEAN. La Carta estableció un nuevo marco jurídico-institucional, codificando las normas y valores de la ASEAN y estableciendo sus metas. Entre ellas se incluyen el respeto a las libertades fundamentales, la promoción de la democracia, los derechos humanos, la transparencia y la buena gobernanza, incluso estableciendo su artículo 14 que la ASEAN instaurará un órgano de derechos humanos;

De todo modo, no se puede olvidar, como ha señalado el profesor BJÖRN ARP, que *“los Estados miembros de la ASEAN no atribuyen a los derechos humanos un carácter superior a otras reglas de Derecho Internacional, como los principios de la soberanía nacional, la integridad territorial y nacional, e incluso la no interferencia en los asuntos internos. Se formuló, además, una concepción de los derechos humanos que también se encuentra en África y en Asia, caracterizada por enfatizar la existencia de derechos cuyos titulares son las comunidades de personas, y no cada individuo considerado en sí mismo”*<sup>599</sup>.

---

<sup>598</sup> El texto original esta disponible en inglés en <<http://www.aseansec.org/publications/ASEAN-Charter.pdf>> [Consulta: 19 de agosto de 2010].

<sup>599</sup> Idem, pág. 4.

## **a – COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL DE DERECHOS HUMANOS<sup>600</sup>**

La Comisión es un órgano integrante de la estructura de la ASEAN, previsto en el artículo 14 de la Carta de la ASEAN. Caracterizase por ser intergubernamental, consultivo y de cooperación entre los países de la ASEAN en tema de derechos humanos, no disponiendo de atribuciones para adoptar decisión que imponga obligación a los países miembros.

El Estatuto de la Comisión ha definido sus tareas específicamente en el campo de la promoción de los derechos humanos, sin tratar de acciones de protección, a pesar del artículo 14 de la Carta de ASEAN disponer a respeto. En aquellas atribuciones de promoción cabe a la Comisión envidar esfuerzos para aumentar la conciencia pública por los derechos humanos y ofrecer servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos a los órganos especializados de ASEAN, pudiendo ejercer sus atribuciones directamente con sus países-miembros. Incluso cabrá a la Comisión elaborar una Declaración de Derechos Humanos para la ASEAN y que sirva de referencia para la adopción de tratados de derechos humanos por los países de aquella organización.

La labor de la Comisión Intergubernamental se realiza por medio de consultas de los Estados-partes y todas sus decisiones son adoptadas por consenso. En los casos en que no se alcance consenso la cuestión es remitida a la Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno. Es posible que la Comisión visite a un Estado-parte desde que cuente con su previa invitación.

La Comisión se compone por un representante de cada país de ASEAN, con experiencia en derechos humanos, para un mandato de tres años, renovable por otro período, y que pueden ser sustituidos en cualquier momento por los respectivos países que representan.

En el día 26 de octubre de 2009 la Comisión realizó su primera sesión, en la ciudad de Cha-am Hua Hin<sup>601</sup>, Tailandia, y la primera situación de violación a los

---

<sup>600</sup> En internet el sitio oficial de la Comisión es <http://www.aseansec.org/22769.htm>.

derechos humanos sometida a la Comisión se refirió a las víctimas de la masacre de Maguindanao, en Filipinas<sup>602</sup>.

Aunque se tenga logrado algún avance en la tutela de los derechos humanos en el entorno de ASEAN, la comunidad internacional ha manifestado dudas cuanto a la eficiencia de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos pues no se encuentra basada en un tratado internacional que vincule los países a los principios universales del derecho internacional de los derechos humanos, no hay la existencia de un mecanismo que obligue a los países miembros de la ASEAN a reparar los daños causados por violaciones de derechos humanos, falta monitoreo e información sobre el cumplimiento de los derechos humanos por los países de ASEAN, así como faltan poderes de investigación y de un mandato efectivamente direccionado para la protección y no sólo para la promoción. Más allá hay la preocupación de si los miembros de la Comisión tendrán independencia con relación a los gobiernos de sus países<sup>603</sup>.

Así es que, no obstante el importante gesto de avance en la protección de los derechos humanos por los países de ASEAN, no se puede dejar de considerar que en la práctica la situación en los países del sudeste asiático aún está muy lejos de informar una nueva mentalidad en el tratamiento de los derechos humanos, siendo ejemplo muy destacable sobre eso la situación de Vietnam, que mismo presidiendo la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN, en 2010, ha mostrado en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en septiembre de 2009, su *“negativa a proteger los derechos humanos al rechazar más de 40 recomendaciones concretas y de sentido común*

---

<sup>601</sup> Por ocasión de la instalación de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos los Jefes de Estado/Gobierno de los países integrantes de la ASEAN manifestaron homenaje a la entrada en funcionamiento del nuevo órgano, conforme Declaración de Cha-am Hua Hin, que se ve en <<http://www.aseansec.org/documents/Declaration-AICHR.pdf>> [Consulta: 19 de agosto de 2010].

<sup>602</sup> Maguindanao, es una ciudad al sur de Filipinas y donde, el 23 de noviembre de 2009, 75 personas, entre ellas dieciocho periodistas, fueron brutalmente asesinados cuando estaban de camino hacia la Comisión Electoral para presentar el certificado de candidatura del vicealcalde Ishmael Mangudadutu de Buluan, para las elecciones de mayo de 2010. Entre las víctimas, algunas fueron decapitados y las mujeres supuestamente sufrieron violación antes de ser matadas.

<sup>603</sup> BJÖRN ARP, *La Nueva Comisión...*, op. cit., pags. 11-13.

*para mejorar los derechos humanos*”, conforme ha señalado la Federación Internacional de Derechos Humanos<sup>604</sup>.

De igual se expone la grave y persistente situación de violaciones a los derechos humanos en Myanmar (Birmania), principalmente por la represión creciente contra activistas políticos, asociada a la violación a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, como ha advertido Amnistía Internacional<sup>605</sup>.

---

<sup>604</sup> En Internet, <<http://www.fidh.org/-Vietnam,1273~>>[Consulta: 19 de agosto de 2010].

<sup>605</sup> La advertencia ha sido objeto de la noticia intitulada “*La ASEAN debe actuar respecto al historial de derechos humanos de Myanmar*”, en <<https://www.amnesty.org/es/news-and-updates/asean-debe-actuar-historial-ddhh-myanmar-2010-04-07>> [Consulta: 20 de agosto de 2010].

## **TERCERA PARTE**

### **ANÁLISIS CRÍTICO DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**

En la parte anterior se han presentado los datos del modo de funcionamiento de la estructura del actual régimen de protección internacional de los derechos humanos, tanto en su aspecto organizacional, su estructura, como en su aspecto instrumental, o de su funcionamiento. En esta oportunidad se pasará a un análisis crítico de aquella estructura.

#### **I – PUNTOS DÉBILES**

En el inicio de este trabajo se afirmó que el sistema internacional de protección de los derechos humanos presenta algunas deficiencias, impidiendo el alcance de un adecuado cumplimiento de aquellos derechos. Algunos datos y registros comprueban esta premisa, y se traducen, específicamente, en mostrar que la estructura actual no se puede caracterizar como formadora de un sistema, más allá de encontrarse inconclusa, y que los procedimientos de control y garantía existentes se presentan insuficientes, aspectos que llevan a restringir el alcance de una máxima efectividad posible.

Como observan MANFRED NOWAK y JULIA KOZMA, de la Universidad de Viena, hay una importante brecha en la aplicación de los derechos humanos y que se identifica por la falta de efectividad de los órganos y procedimientos internacionales para responsabilizar los Estados por descumplimiento a sus obligaciones internacionales<sup>606</sup>.

---

<sup>606</sup> La observación se ha producido en el proyecto de investigación sobre el tema “A World Court Human Rights”, página 21, disponible, en inglés, en <<http://www.udhr60.ch/report/hrCourt-Nowak0609.pdf>> [Consulta: 2 de julio de 2011], que hace parte del documento “Protecting Dignity: An Agenda for Human Rights”, junio de 2009, disponible en <<http://www.udhr60.ch>> [Consulta: 2 de julio de 2011] y que resultó de la iniciativa del gobierno de suiza para debatir relevantes cuestiones actuales de derechos humanos.

## **1 – UNA ESTRUCTURA NO-SISTEMATIZADA**

Una primera constatación que emerge de aquella estructura, bajo el punto de vista de su aspecto organizacional, es que no se la puede caracterizar como un sistema, esto es, como expresión de una estructura armónica y equilibrada, de modo que sus actividades, aunque desempeñadas con independencia y autonomía, puedan converger en un funcionamiento ordenado, con distribución de atribuciones bien definidas, asegurando a sus destinatarios un suficiente nivel de seguridad en lo que se refiere al conocimiento de los recursos estructurales de que disponen para socorrer cuando sea necesario<sup>607</sup>.

Prueba contundente de esta ausencia de una estructura armónica y equilibrada se puede constatar de las afirmaciones de la Secretaría General de Naciones Unidas: *“En el sistema de órganos creados en virtud de tratados se ha ido desarrollando de forma no sistemática y no funciona como marco integrado e indivisible de protección de los derechos humanos. Ello ha debilitado su repercusión general. La existencia de siete órganos que actúan independientemente para vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos hace que puedan darse interpretaciones divergentes que, a su vez, pueden generar incertidumbre respecto de conceptos y normas fundamentales de derechos humanos, con lo cual se socava la posibilidad de dar una interpretación global, exhaustiva e intersectorial de las disposiciones relativas a los derechos humanos. La falta de coordinación y colaboración entre los órganos puede dar lugar a jurisprudencia contradictoria, cuestión a la cual se hace frente específicamente en el proyecto de Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en el cual se exige que su Comité consulte con otros órganos con miras a asegurar la coherencia de sus*

---

<sup>607</sup> Este posicionamiento que no admite el régimen de protección a los derechos humanos como un “sistema” es contrariado por algunos autores, como se puede destacar de las palabras de PEDRO NIKKEN Juez y ex – Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al afirmar que “aunque en un cierto nivel esa consideración puede ser parcialmente atinada, hay más de una razón para considerar que, a despecho de la diversidad normativa y organizativa y de la carencia de vínculos sistemáticos en sentido estricto, existen importantes elementos de conexión profunda entre los distintos cuerpos legales y órganos de protección, que definen rasgos comunes suficientes para justificar una consideración unitaria del conjunto.”, en NIKKEN, P., *La Protección Internacional de los Derechos Humanos-Su Desarrollo Progresivo*, Civitas, Madrid, 1987, p. 313.



*observaciones y recomendaciones respectivas . La multiplicidad de recomendaciones derivadas de cada uno de los órganos dificulta que los Estados Partes y otros interesados nacionales se formen una imagen completa de las cuestiones y recomendaciones clave respecto de la situación imperante en los Estados en materia de derechos humanos. Ello puede disminuir la posibilidad de que los Estados Partes traduzcan estos resultados en planes y en programas nacionales intersectoriales integrados*<sup>608</sup>.

Es evidente que delante de la gran complejidad del tema que se está tratando, en el cual se concentran subestructuras totalmente autónomas e independientes, vinculadas a los distintos agrupamientos culturales o geográficos de los más distintos pueblos del mundo, no se puede imaginar la posibilidad de alcanzar la formación de una estructura en moldes perfectamente sistematizados. Pero, eso no implica reconocer que no se pueda avanzar en la búsqueda de su mejor perfeccionamiento.

La estructura de protección internacional de los derechos humanos presenta una característica muy fuerte en el sentido de realizarse en razón de cierto y determinado tema, llevando a situaciones en que una igual situación temática de protección a los derechos humanos es tratada por más de un órgano, en el mismo o en distinto nivel de actuación, el universal, mundial, regional, intercontinental y subregional. En la actualidad son cuarenta los enfoques temáticos cuyo acompañamiento se realiza por los siguientes órganos:

#### **AGUA E SANEAMIENTO**

- Relator especial del derechos humanos con el acceso al Agua potable y el saneamiento

#### **ALIMENTACIÓN**

- Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

---

<sup>608</sup> Disponible en el documento HRI/MC/2006/2, página 14

## **DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS**

- Representante Especial del Secretario General sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

## **DERECHO AL DESARROLLO**

- Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
- Experto Independiente sobre el Derecho al Desarrollo, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

## **DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS**

- Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
- Comisario Europeo de Derechos Humanos, del Consejo de Europa
- Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa –OSCE
- Comisión de Derechos Humanos, de la Comunidad de Estados Independientes
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos
- Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos de la Unión Africana

## **DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

- Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
- Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de las Naciones Unidas
- Comité Europeo de Derechos Sociales, del Consejo de Europa

## **DERECHOS HUMANOS Y SOLIDARIEDAD INTERNACIONAL**

- Experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional

## **DERECHO DE LIBERTAD DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN PACÍFICAS**

- Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas

## **DESAPARICIONES**

- Comité contra las Desapariciones Forzadas

- Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

### **DETENCIÓN ARBITRARIA**

- Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de la Detención Arbitraria, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

### **DEUDA EXTERNA**

- Experto Independiente sobre los Programas de Ajuste Estructural y Deuda Externa en el Disfrute de los Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

### **DISCRIMINACIÓN RACIAL, XENOFOBIA Y FORMAS CONEXAS DE INTOLERANCIA**

- Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas
- Observatorio Europeo sobre el Racismo y la Xenofobia del Parlamento Europeo de la Unión Europea
- Comisión de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia del Parlamento Europeo de la Unión Europea
- Relator Especial sobre todas las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

### **EDUCACIÓN**

- Relator Especial sobre el Derecho a la Educación, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

### **EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS O ARBITRARIAS**

- Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas

### **ESCLAVITUD**

- Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud
- Relatora Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud

### **ÉXODOS MASIVOS**

- Comité Permanente entre Organismos del Sistema de Naciones Unidas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas

### **EXTREMA POBREZA**

- Experta Independiente sobre los Derechos Humanos y la Extrema Pobreza, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

### **IMPUNIDAD**

- Experto independiente designado por el Secretario General para poner al día el Conjunto de principios para la protección y la promoción

### **INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA**

- Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

### **INDÍGENAS**

- Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

### **LIBERTAD DE INFORMACIONES**

- Representante para la Libertad de Información, de la OSCE

### **LIBERTAD DE OPINIÓN Y EXPRESIÓN**

- Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas

### **LIBERTAD DE RELIGIÓN Y CREENCIA**

- Relator Especial sobre la Libertad de Religión y de Creencias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

### **MEDIO AMBIENTE**

- Relator Especial sobre los efectos nocivos del traslado y vertimiento de productos tóxicos y peligrosos y los desechos en el disfrute de los derechos humanos

### **MERCENARIOS**

- Grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación
- Relator Especial sobre la Utilización de Mercenarios como Medio para Violar los Derechos Humanos y de Obstaculizar el Ejercicio del Derecho de los

## Pueblos y la Libre Determinación, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

### **MIGRANTES**

- Comité sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares
- Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

### **MINORÍAS NACIONALES**

- Alto Comisionado para las Minorías Nacionales, de la OSCE
- Comité Asesor del Consejo de Europa
- Comité de Ministros del Consejo de Europa
- Experto independiente en cuestiones de las minorías

### **MUJER**

- Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
- Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas
- Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, del Parlamento Europeo de la Unión Europea
- Relator Especial sobre la violencia contra la Mujer
- Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica

### **NIÑO**

- Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas
- Relator Especial sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas
- Representante Especial encargado de la Cuestión de las Repercusiones de los Conflictos Armados sobre los Niños, de la Asamblea General de las Naciones Unidas

### **PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

- Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

- Representante del Secretario General sobre las personas internamente desplazadas

### **PERSONAS DESPLAZADAS**

- Representante del Secretario General sobre los Derechos Humanos y los Desplazados Internos, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas

### **POBREZA**

- Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos

### **PUEBLOS INDÍGENAS**

- Grupo de trabajo sobre el Proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas
- Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas
- Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
- Relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas

### **RACISMO**

- Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD)
- Grupo de eminentes expertos independientes
- Grupo de trabajo intergubernamental sobre la aplicación efectiva de la Declaración y Programa de Acción de Durban
- Grupo de trabajo sobre las personas de descendencia africana encargados de estudiar los problemas de discriminación racial a que hacen frente las personas de ascendencia africana que viven en la diáspora
- Relator Especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia

### **SALUD FÍSICA Y MENTAL**

- Relator Especial sobre el derecho de toda persona de disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental

### **TERRORISMO**

- Experto Independiente sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo
- Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo

## **TRATA DE LAS PERSONAS**

- Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente las mujeres y los niños

## **TORTURA**

- Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas
- Grupo de Expertos para la Prevención de la Tortura de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa-OSCE
- Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa
- Relator Especial sobre la Cuestión de la Tortura de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
- Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, Inhumanos o degradantes

## **VERTIDOS TÓXICOS**

- Relator Especial sobre los Efectos Nocivos para el Goce de los Derechos Humanos del Traslado y Vertimiento Ilícito de Productos y Desechos Tóxicos y Peligrosos, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

## **VIVIENDA**

- Relator Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Más allá de estos órganos, los más diversos temas apuntados tienen su acompañamiento por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

No suficientes estos registros de los temas y respectivos órganos a que se vinculan, es importante señalar que existen muchos otros organismos de Naciones Unidas que también actúan en la promoción y protección de los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos-ACNUR, en su página oficial de internet, destaca los siguientes órganos:

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR)
- Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
- Inter-Agency Internal Displacement Division

- Organización Internacional del Trabajo (OIT)
- Organización Mundial de la Salud (OMS)
- Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas (la UNESCO)
- Programa Conjunto de la Naciones Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS)
- Comité Permanente entre Organismos (IASC)
- Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA)
- Comisión de la Condición de la Mujer (CSW)
- Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer (OSAGI)
- División para el Adelanto de la Mujer (DAW)
- Fondo de la Población De las Naciones Unidas (UNFPA)
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
- Fondo de desarrollo de Naciones Unidas para las mujeres (UNIFEM)
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Organización de alimento y de agricultura de las Naciones Unidas (FAO)
- Programa Humano De los Establecimientos De Naciones Unidas (HABITAT)

Por estos datos, es fácil percibir que, sin desconocer el lado positivo de la gran capacidad evolutiva que el derecho internacional de los derechos humanos ha tenido en las últimas décadas, la estructura actual de su protección se traduce en una multitud de órganos que tratan los más diferentes temas o fenómenos en lo relativo a los derechos humanos, con múltiples normas y directrices definidas para sus labores, incluso dándose situaciones con duplicación y superposición de mandatos y tareas, y donde un idéntico enfoque temático se encuentra vinculado a una pluralidad de órganos, como demuestran los temas atinentes a los derechos civiles y políticos, a los derechos económicos, sociales y culturales, a la tortura, discriminación racial, mujer, niño y el derecho al desarrollo, y sin que se perciba un nivel de integración o interdependencia entre ellos.

Y, como si no fuera suficiente el repetido tratamiento de un determinado tema en los diversos campos de actuación, es decir, en su esfera universal, mundial, regional, intercontinental o subregional, lo que se observa es que en un igual nivel de



actuación el tema también soporta idéntico tratamiento, como se constata con las cuestiones sobre la tortura, la discriminación racial, la mujer, el niño y el derecho al desarrollo, todos disponiendo de más de un órgano en el ámbito de la estructura propia de las Naciones Unidas para tratar las violaciones respectivas.

Aunque se busque una delimitación de las atribuciones de cada órgano en un mismo enfoque temático, no es posible establecer un marco divisorio que disponga, con claridad, dónde empiezan o terminan las atribuciones de uno u otro, en sus funciones de vigilancia y garantía. Este escenario de órganos que se superponen en sus actividades, y donde se constata la falta de una coordinación central que establezca con objetividad las atribuciones específicas de cada uno, es reconocida por la propia Asamblea General de las Naciones Unidas, al apuntar la falta de una definición clara y precisa de sus órganos de protección a los derechos humanos, con la existencia de duplicaciones innecesarias entre sus mecanismos de promoción y de protección, conforme se ha registrado al crear el Alto Comisionado<sup>609</sup>.

Como si no bastase, encontrándose los órganos de protección, por regla, asociados a situaciones que se han definido como necesarias a un tratamiento específico de tutela por la comunidad internacional, nada impide que, delante de una nueva situación, se autorice otro tratamiento específico, y se genere un nuevo y correspondiente órgano de control y protección, proliferándose tales iniciativas.

A propósito, en el propio seno de las Naciones Unidas es reconocido que la creación de órganos en virtud de tratados no se observa de modo sistemático, incluso con la superposición de sus disposiciones y competencias<sup>610</sup>.

Un análisis de algunas manifestaciones sobre la estructura de protección a los derechos humanos, presentada por profesionales con percepción práctica por su amplia experiencia en las labores de aquel tema, revela esta constatación de un cierto desorden, confusión, dispersión, indefinición y hasta de su mal funcionamiento.

---

<sup>609</sup> Este el contenido del párrafo 13 del preámbulo de la Resolución 48/141, de la Asamblea General.

<sup>610</sup> HRI/MC/2006/2, p. 12.

En este sentido, JOSÉ MARIA MORENILLA RODRÍGUEZ, cuya experiencia en el asunto viene respaldada por sus actuaciones como Agente de España ante la Comisión Europea de Derechos Humanos y Jefe del Servicio Jurídico para la Comisión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha afirmado que *“la pluralidad de instrumentos, órganos y procedimientos conlleva unos grandes inconvenientes, porque no sólo es causa de una confusión o inseguridad jurídica en el individuo, único destinatario del sistema, sino de graves dificultades en el funcionamiento y una seria duda sobre su eficacia. ....”*<sup>611</sup>.

De igual modo, JOSÉ L. GÓMEZ DEL PRADO, miembro del Grupo Asesor del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo y ex - Funcionario de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha señalado que *“dicha acción se enmarca en un laberinto formado por una multiplicidad de procedimientos y órganos dentro de los mecanismos convencionales o extra-convencionales. La coordinación se hace cada vez más difícilmente. (...) Todos los años, se efectúan reuniones de coordinación en la que participan los presidentes de los comités de los tratados y los responsables de los mandatos extra-convencionales. Sin embargo, se va tomando cada vez más conciencia de que el sistema es muy complicado y pesado y que habría que simplificarlo y aligerarlo. Existe el peligro que si se simplificase se corre también el riesgo de debilitarlo”*<sup>612</sup>.

Otra voz que suena en este sentido, es la de JEAN-BERNARD MARIE, con su autoridad y experiencia como Secretario-General del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo y Director de Investigación del Centro Nacional de Investigación Científica en Francia, al alertar que *“basándose en el principio de la cooperación internacional conjunta y sobre la noción de garantía colectiva de los derechos humanos, estas organizaciones deben reforzar y desarrollar los procedimientos de supervisión que ellas han constituido. Esto exige una mejor*

---

<sup>611</sup> MORENILLA RODRÍGUEZ, J. M., *Los Sistemas para la Protección Internacional de los Derechos Humanos*, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, Madrid, 1986. p. 89.

<sup>612</sup> GÓMEZ DEL PRADO, J. L., “La Protección de los Derechos Humanos en el Sistema de las Naciones Unidas y de los Organismos Especializados”, en VVAA, *Recueil des Cours, Trentième session d’enseignement, Institut International des Droits de L’Homme*, Estrasburgo, 1999, p. 77.

*coordinación de los trabajos de los diferentes órganos de protección, una independencia y una objetividad acrecentadas en la identificación y el tratamiento de las violaciones en todo el mundo, una mayor eficacia gracias al envío de medios y de recursos que corresponden efectivamente a la amplitud de la función*<sup>613</sup>.

Al discurrir sobre “la dialéctica universalidad-regionalización”, y hasta que punto la expansión regional del reconocimiento y mecanismos de protección a los derechos humanos no constituye una amenaza a la universalidad, el profesor ANTONIO BLANC ALTEMIR advierte que *“este proceso multiforme y poliédrico de universalización y al mismo tiempo de regionalización, ha desembocado en una proliferación de instrumentos internacionales de reconocimiento y protección de los derechos humanos, que puede presentar determinados problemas en la práctica. En efecto, la total autonomía de los sistemas regionales respecto a los universales, pero también la complejidad y, en ocasiones, la falta de coordinación de las numerosas normas, instancias e instituciones, pueden dar lugar a disfunciones operativas y a duplicaciones inútiles, por lo que se impone una clarificación de estructuras y una coordinación de sistemas, organismos y procedimientos que faciliten al individuo la elección de la previsión más favorable*”<sup>614</sup>.

Es verdad que, la propia ONU, preocupada con esta cierta confusión de las actividades de los múltiples órganos de tutela de derechos humanos, viene adoptando providencias al superar los problemas de actuación y efectividad detectados. Ejemplo muy perceptible de esa preocupación es la que se observa en relación a los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. Objetivando optimizar los trabajos de ese sistema convencional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos-ACNUDH y la Secretaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas han promocionado reuniones de los Comités de Derechos Humanos vinculados a la ONU, en las cuales están esforzándose para caminar hacia la armonización de los métodos de trabajo,

---

<sup>613</sup> MARIE, J.-B., “Los Mecanismos de Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, en VVAA, *La Protección Universal y Regional de los DDHH*, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 1995, pp. 96.

<sup>614</sup> BLANC ALTEMIR, A., “Universalidad, Indivisibilidad e Interdependencia de los Derechos Humanos a los Cincuenta años de la Declaración Universal”, en VVAA, *La Protección Internacional de los Derechos Humanos a los Cincuenta años de la Declaración Universal*, Tecnos, Madrid, 2001, p. 20.

principalmente en cuanto a los Informes Gubernamentales. Mas allá se está buscando que los Comités establezcan “*mecanismo de relatores o coordinadores para mejorar la cooperación y facilitar una interacción más eficaz con los organismos especializados de las Naciones Unidas en relación con aspectos temáticos y cuestiones específicas de los países y en materia de seguimiento*”<sup>615</sup>, así como los Presidentes de los Comités reconocen la necesidad de una mayor cooperación entre los Comités y el Consejo de Derechos Humanos<sup>616</sup>.

En las reuniones de los Comités de derechos humanos se ha también insistido para que los propios Comités incentiven a los Estados-partes a la ratificación de otros tratados básicos de derechos humanos

Así, no es difícil apuntar deficiencias emergentes de esta multitud de órganos para el tratamiento de la protección de los derechos humanos. Y refuerza esta constatación la propia situación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde la imprecisa definición de sus atribuciones ha llevado a la doctrina a reconocer “*el carácter a la vez amplio y ambiguo de sus funciones*”, con sus tareas desarrollándose en el ámbito de la “*competencia residual*” que le asignen los órganos integrantes de la estructura de las Naciones Unidas<sup>617</sup>.

Con estas breves aportaciones no se quiere dejar de admitir que no se deba tratar sin dimensión una exigencia - la protección de los derechos humanos - que, por su propia característica, es demasiado grande, y que, en consecuencia, genera naturalmente amplias dificultades, equívocos y desaciertos. Admitiéndose que la protección internacional a los derechos humanos afecta a todas las personas, es evidente que es necesario tratar el asunto con una dimensión proporcional a esta grandeza, la cual, inclusive, no se puede considerar como concluida y acabada.

---

<sup>615</sup> Conforme se ha registrado en la 20ª Reunión de los Presidentes de órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, en Ginebra, del 26 al 27 de junio del 2008, y en la Séptima reunión de los comités que son órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, en Ginebra, del 23 al 25 de junio del 2008, y que constan del documento HRI/MC/20088/2, con la citación específicamente a la página 6.

<sup>616</sup> A/62/224, párr. 26, de la Asamblea General de ONU, 13 de agosto de 2007.

<sup>617</sup> La observación es presentada por VILLAN DURÁN, C., *Curso ...*, op. cit., p. 151, haciendo referencia a las observaciones de la profesora CONCEPCIÓN ESCOBAR HERNÁNDEZ, en ponencia en Seminario realizado en Lima, en 1994.

A su vez, la cuestión es saber hasta que punto esta compleja y disonante protección esta por acomodarse en lo que ha conquistado, dejando de enfrentar lo mucho que ha de conquistar, principalmente por el riesgo de dejar al margen, sin la debida, o, al menos, la mínima protección, parcela considerable de la gente que sufre por no disponer de recursos que lleven al respeto de los derechos humanos.

## **2 – UNA ESTRUCTURA INCONCLUSA**

La extensa indicación de los órganos presentados en este trabajo, con el registro de decenas de entidades internacionales vinculadas directa o indirectamente a la defensa de los derechos humanos, y millares de personas desarrollando su labor en las actividades afines de aquellas instituciones, demuestran bien los avances que la sociedad internacional viene alcanzando en ésta área. Como se no fuera suficiente, diariamente, en los asuntos que tratan de aquellos derechos, no es difícil tener conocimiento de otras iniciativas tendientes a la creación de más órganos de control y garantía, incluso bajo el entendimiento de que cuanto más entidades haya de defensa a los derechos humanos mejor.

Es significativo registrar que el último Comité de derechos humanos creado, y que ha sido de los derechos de las personas con discapacidad, ha empezado su funcionamiento en febrero del 2009<sup>618</sup>, y, todavía, está pendiente la creación del Comité vinculado a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

La relevancia de los datos presentados se hace con el objetivo de demostrar que el reconocimiento y protección de los derechos humanos no encuentra límites a su expansión, afirmándose como una pauta cada vez más importante y destacada en el ámbito internacional, con la adopción de frecuentes instrumentos políticos y jurídicos que implementan el reconocimiento de situaciones para exigir una especial atención de los Estados, incluso alcanzando situaciones y proyectos de tutela que,

---

<sup>618</sup> En Ginebra y su primera sesión del 23 al 27 de febrero de 2009.

siendo impensables en un cierto momento histórico, hoy son una realidad, como por ejemplo la reciente institución del Tribunal Penal Internacional.

No obstante, este progreso que el tratamiento de la tutela de los derechos humanos ha alcanzado en las últimas décadas no se puede considerar como una conquista acabada, o que redunde como resultado de lo que era necesario hacerse, aunque sea imprescindible admitirla como bastante evolucionada por todo que representa en el alcance del tema en un período quizá tan corto, y en un mundo de constantes, repentinas y considerables transformaciones.

No está demás acordar que la dimensión de universalidad de los derechos humanos impone que este atributo no esté limitado a la promoción de su goce, sino también, a su garantía, de modo que todos los individuos puedan disponer de eficaces medidas para la protección de aquellos derechos, con amplio acceso a sus instrumentos, evitando que sean violados, así como asegurando el cese de la violación ya iniciada, y hasta la adopción de medidas para compensar los daños por la violación sufrida. En este contexto, algunos mecanismos de la estructura internacional de protección consiguen atender satisfactoriamente a cada una de estas funciones, pero no se puede desconocer que muchos no consiguen desarrollar satisfactoriamente ni siquiera una sola de ellas. Para ejemplificar, una breve comparación entre los sistemas europeo y africano retrata la considerable distancia que hay entre ellos, debido al amplio amparo internacional en la exigencia para el cumplimiento de los derechos humanos de que gozan los ciudadanos europeos, y a la poca y diminuta tutela internacional de idénticos derechos a favor de los ciudadanos africanos, constatación que demuestra que el principio de la universalidad en relación a la tutela de los derechos humanos cae en el vacío. Este igual fenómeno de menor y casi imperceptible dimensión a la tutela de aquellos derechos se puede mencionar también con relación a los individuos de Asia y de Oceanía, que no disponen ni siquiera de instituciones internacionales de nivel regional para la protección de sus derechos.

Así es que, en realidad, la radiografía presentada en el capítulo anterior, más allá de registrar el gran paso que se ha conquistado en la defensa internacional de los

derechos del hombre, sirve también para plantear la necesidad de que la comunidad internacional no se acomode con lo que ya ha conquistado, sino que permita repensar el actual modelo de protección que se va creando y adaptando en los últimos sesenta años, y del cual no necesariamente se puede reconocer una eficacia adecuada, o al menos suficiente, a todos los hombres, en su debida dimensión de igualdad en cuanto ciudadanos del mundo.

En este sentido, como ha señalado PASTOR RIDRUEJO, *“lo que realmente importa en la protección internacional de los derechos del hombre no es la enumeración y la definición de ellos, sino la eficacia de los recursos que se pongan a disposición de los particulares ante instancias internacionales de control y garantía”*<sup>619</sup>.

Y hablar de la eficacia de este “sistema” internacional es cuestionar sobre su propia existencia, puesto que, caracterizándose su competencia como subsidiaria de los sistemas nacionales, se presenta como última alternativa para reaccionar contra las violaciones a los derechos humanos.

Ejemplo en concreto de esta subsidiariedad de rasgo jurisdiccional se observa actualmente con los Tribunales Regionales de Derechos Humanos de Europa, América y África, dónde solamente actúan cuando la jurisdicción interna se omite o es insuficiente a dar una respuesta efectiva contra las violaciones a los derechos humanos, incluso por la obligación internacional que los países tienen de garantizar el acceso a la justicia y al proceso debido, y sin olvidar del Tribunal Penal Internacional, cuya naturaleza de complementariedad también busca superar la ineficiencia de la jurisdicción nacional en los casos de crímenes contra la humanidad.

Así es que, si los sistemas nacionales son débiles, insuficientes o inadecuados para aquella protección, y por eso justifican la existencia del sistema internacional, no se puede admitir que éste se deje contagiar por iguales vicios de ineficiencia comunes a la protección interna o nacional. El último baluarte de los derechos humanos es el sistema internacional de protección, y para el cual se deben buscar

---

<sup>619</sup> PASTOR RIDRUEJO, J. A., Curso de Derecho Internacional, op. cit., p. 220-1.

incesantemente medidas para el alcance máximo de su efectividad, con los resultados siempre más positivos posibles, no debiéndose conformar sólo con los resultados mínimos posibles de ser alcanzados.

### **3 – DEFICIENCIAS FUNCIONALES**

Las deficiencias de esta estructura no se limitan a su aspecto orgánico, detectándose fragilidades también bajo su punto de vista funcional, esto es, con relación a los mecanismos puestos a disposición de la tutela de los derechos humanos. En este punto, un registro inicial importante es la constatación de que no todos los mecanismos de tutela - informes, denuncia estatal, denuncia particular, investigaciones de oficio - son admitidos en las más diversas estructuras de protección, y que algunas peculiaridades propias de dichos mecanismos impiden que, aún en los casos donde son aceptables, no puedan traducirse en iniciativa suficiente y adecuada a aquella tutela.

En este orden del incompleto funcionamiento de los instrumentos de protección internacional, cabe señalar la dificultad que se viene observando con relación a la obligatoriedad de la presentación periódica de “Informes” por los Estados, aunque se trate éste del instrumento de mayor aceptabilidad por los Gobiernos. Ni aún así, tal instrumento se tiene por completamente eficaz para acompañar el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo, puesto que, en algunos casos, se ha constatado gran falta de compromiso de los gobiernos en atender a sus obligaciones de presentación de Informes.

Para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *“el sistema se enfrenta también a problemas derivados de que muchos Estados aceptan el sistema de tratados de derechos humanos oficialmente pero no actúan en consecuencia, o lo hacen de manera superficial, ya sea como resultado de la falta de capacidad o de la falta de voluntad política. Algunos Estados no presentan los informes que exigen los tratados y la mayoría los presentan con una demora considerable. Muchos Estados, incluidos los que tienen una capacidad técnica significativa y un grado elevado de empeño, tropiezan con dificultades para cumplir*



*las complejas obligaciones en materia de presentación de informes, que con frecuencia se superponen, debido a otras exigencias en la materia. Las cifras correspondientes a febrero de 2006 indican que se ha presentado el 70% del total de informes de Estados Partes, porcentaje que se ha logrado gracias a la presentación de informes consolidados. De los informes iniciales que han de presentarse, el 30% todavía no se ha recibido . A febrero de 2006, sólo 8 de los 194 Estados que son partes en uno o más de los siete tratados están al día, mientras que los otros 186 Estados deben 1.442 informes a los órganos creados en virtud de tratados. Los Comités tienen un poder real escaso para obligar a los Estados a cumplir los procedimientos pero, con los métodos de trabajo actuales, no podrían hacer frente a la labor que supondría que los Estados Partes cumplieran sus obligaciones. El logro de la meta establecida por la Alta Comisionada consistente en la ratificación universal y la aceptación de todas las quejas y procedimientos de investigación, junto con el pleno cumplimiento por los Estados Partes de los procedimientos de presentación de informes, agravaría estos problemas”<sup>620</sup>.*

Y si se considera que la capacidad de labor de los Comités, conjuntamente, es de análisis de unos cien Informes al año, la presentación de todos aquellos llevaría a que los Comités y la Secretaría estarían desbordados, según se ha señalado en varios estudios, como los de Anne Bayefsky y Philip Alston<sup>621</sup>.

La deficiencia del mecanismo de tutela basada en los Informes ha llegado a un punto tan crítico que el Secretario General de las Naciones Unidas ha afirmado, en 2002, tratarse de un “fracaso crónico”<sup>622</sup>. Este comentario ha sonado como una fuerte advertencia sobre la necesidad de repensar el funcionamiento de aquel modelo para no comprometer de una vez su utilidad, y ha llevado a que los Comités creados para tratar de derechos humanos pasaran a reunirse, bajo la coordinación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en busca de soluciones para encontrar una armonización en el sistema de presentación de

---

<sup>620</sup> HRI/MC/2006/2, p. 10/1.

<sup>621</sup> Conforme consta del documento “HRI/ICM/2002/2”, de 25 de abril de 2002, de la ONU, disponible en la Web <<http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/a.htm#annual>>. En la web <<http://www.unhchr.ch/r2002s>>, se puede obtener información actualizada de la situación de los Informes por países.

<sup>622</sup> A/57/387, de 9 de septiembre de 2002, párrs. 52 a 54.

Informes, incluso con la posibilidad de establecimiento de un órgano permanente unificado de vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos basados en el sistema de tratados, ahora no sólo para acompañamiento de los Informes, sino de los mecanismos de control de cumplimiento de los Tratados, como las peticiones individuales, quejas estatales y denuncias de violaciones graves o sistemáticas, en los órganos que proveen tales medidas<sup>623</sup>.

Esta necesidad de creación de un órgano de supervisión único para todos los Tratados ha surgido en estudios presentados a la Asamblea General ya desde 1989, por el Expert Independiente PHILIP ALSTON, nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas, siendo que, desde 1984 los Presidentes de los Comités se reúnen para debatir el modo de mejorar el sistema de tratados<sup>624</sup>.

Básicamente, los estudios que se han realizado en las reuniones de los Comités para la armonización del sistema de Tratados avanzan hacia *“un criterio más coordinado para sus actividades”, “una norma sobre las diversas obligaciones de presentación de informes”* y que *“debería permitirse que los Estados presentaran un único informe en el que se resumiera el cumplimiento de todos los tratados internacionales de derechos humanos de los que son partes”*<sup>625</sup>.

Otro punto de fragilidad de estos mecanismos se puede constatar con referencia a la “denuncia interestatal”. Más allá de estar necesariamente sometida a la observancia de las reglas de reciprocidad y confidencialidad, que por sus propias características son restrictivas a ejercitar un amplio control del cumplimiento de los derechos humanos, su principal objetivo no es la investigación, análisis y enfrentamiento de violaciones a los derechos humanos, sino *“encontrar un arreglo amistoso o una solución conciliatoria que acomode los intereses de los Estados enfrentados”*<sup>626</sup>.

---

<sup>623</sup> Un aporte muy técnico de informaciones al respecto de la creación y funcionamiento de un órgano permanente unificado, se encuentra registrado en el documento HRI/MC/2006/2, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

<sup>624</sup> A partir de 1994 las reuniones de los Presidentes pasaron a realizarse anualmente.

<sup>625</sup> HRI/MC/2006/2, p. 6, haciendo referencia al Informe del Secretario General de Naciones Unidas en el Informe A/57/387, párr. 54).

<sup>626</sup> VILLAN DURÁN, C., *Curso ...*, op. cit., pp. 438-9.

Pero, aún teniendo en cuenta estas relevantes limitaciones para su utilización y su objetivo, se trata de un instrumento que *“nunca ha sido utilizado en el marco de NU, debido sin duda a que los gobiernos no lo consideran ‘políticamente correcto’ en el marco de sus relaciones diplomáticas tradicionales”*<sup>627</sup>. En el sistema interamericano se ha utilizado una única vez esta vía de tutela<sup>628</sup>. A su vez, en el ámbito regional europeo, hasta enero de 2004 sólo se habían presentado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos 20 demandas interestatales, siendo la primera en 1956<sup>629</sup>.

Estos datos revelan que en el tratamiento del tema de los derechos humanos, es necesario más que “buena intención” de los Estados e instituciones involucradas con la labor de transformar aquellos derechos en efectivamente realizables.

Con relación a las denuncias particulares, que se presentan como el instrumento más identificado con el auténtico control de las violaciones de los derechos humanos, en su práctica se han observado también iniciativas muy restrictivas para su utilización, incluso, muchas veces, sin que estas restricciones presenten cualquier criterio para justificarlas, como por ejemplo lo que ocurre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ejerce una *“jurisdicción discrecional sobre el conjunto de las peticiones que recibe, toda vez que rechaza un 90% de las mismas antes de entrar a su tramitación, simplemente porque no tiene capacidad para recibir todas las quejas”*<sup>630</sup>.

Últimamente, incluso se ha admitido la necesidad de permitir la denuncia particular en órganos que no disponen de esta facultad. Es el caso, por ejemplo, del

---

<sup>627</sup> Ídem, p. 439.

<sup>628</sup> En los más de cincuenta años del sistema interamericano de protección de los derechos humanos la única denuncia interestatal ha sido de Nicaragua contra Costa Rica en 2006, cuando este país fue acusado de xenofobia y discriminación contra inmigrantes nicaragüenses. En 2007 la CIDH declaró inadmisible la denuncia.

<sup>629</sup> La cantidad de 20 denuncias interestatales incluyen las presentadas en el antiguo sistema. Algunos de los casos son: Grecia versus Reino Unido, en 1956; Austria versus Italia, en 1960; Dinamarca, Suecia Noruega y Holanda versus Grecia, en 1967; Irlanda versus Reino Unido, en 1971; Chipre versus Turquía, 1974; Dinamarca, Francia, Holanda, Noruega y Suecia versus Turquía, en 1982; Chipre versus Turquía, en 1994.

<sup>630</sup> Según apunta VILLÁN DURÁN, C., Curso ..., op. cit. p. 541.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado el Protocolo Facultativo, adoptado por la Resolución A/RES/63/117, del 10 de diciembre de 2008, estableciendo competencia para examinar las comunicaciones individuales o de grupos de individuos, o en nombre de la víctima que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado-parte<sup>631</sup>.

## **II – EFECTIVIDAD RESTRINGIDA**

No es necesario mucho esfuerzo para admitir que la realización de los derechos humanos, con todo que se conquistado, aún carece de resultados satisfactorios al reconocer su efectividad. Como ha advertido el Profesor PABLO ANTONIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, *“es verdad que en el ámbito universal se han conseguido Tratados sobre derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, que se han creado muchos Comités y muchos órganos de control que desarrollan una labor encomiable pero que por su penuria jurídica y económica, carecen en general de eficacia”*<sup>632</sup>.

Entender que los derechos humanos deban necesariamente ser sometidos a la máxima protección posible es una cuestión que sobrepasa el mero hecho de posicionarse favorablemente a la multitud de órganos de su actual estructura internacional, con todas sus virtudes y defectos, como abogan muchos estudiosos y profesionales del tema. La cuestión a poner en cuenta es saber si esta diversidad de órganos internacionales, con los recursos materiales y humanos de que dispone, está o no apta para alcanzar un resultado de control y garantía que se pueda definir como “el máximo posible”, considerándose en esto la advertencia de ANTONIO PAPISCA en el sentido de que *“la garanzia dei diritti umani o è una garanzia reale o non è”*<sup>633</sup>.

---

<sup>631</sup> La propuesta partió del Grupo de Trabajo sobre un Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su quinto período de sesiones, el 04 de abril del 2008.

<sup>632</sup> FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P. A., “Presentación”, en VVAA, *La Desprotección Internacional de los Derechos Humanos (a la luz del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)*, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, p. 11.

<sup>633</sup> PAPISCA, A., “Infrastruttura Diritti Umani Per il Sistema Democratico” en VVAA, *Costituzione Diritti Umani Garanzie*, CEDAM, Padova, 1998, p. 39.

Así es que, bajo el punto de vista de un análisis de la efectividad de la protección de los derechos humanos, no cabe poner en relieve sólo el aspecto de la multitud de dichos órganos y sus instrumentos, sino la capacidad que ofrezcan de generar un grado de satisfacción al cumplimiento de aquellos derechos. Si dicha multitud se puede admitir en un nivel de razonable efectividad, es decir, próximo al máximo posible de lo que se puede hacer para alcanzar aquella efectividad, en esto incluso considerándose la inexistencia de alternativas a su mejora, entonces se pueden considerar irrelevantes las críticas a las deficiencias del funcionamiento de esta estructura.

Pero ésta no es la constatación que fluye de la práctica. Por ejemplo, en estudios realizados por Amnistía Internacional con relación a algunas de las vulneraciones de los derechos humanos en 2009, el cuadro retratado reveló la siguiente situación<sup>634</sup>:

- en 61 países los responsables por actos de tortura gozaron de impunidad;
- en 55 países fueron constatados condenas por juicios injustos;
- en 96 países ocurrieran restricciones a la libertad de expresión;
- en 80 países se mantuvieron sin resolver los casos de personas desaparecidas, sumándose en las últimas décadas más de 40.000 personas;
- en 111 países fueron constatadas acciones de tortura y malos tratos producidos por agentes del Estado;
- en 48 países se constataron presos o posibles presos de conciencia;
- en 54 países fueron detenidas y recluidas personas arbitrariamente;
- en 18 países se dictaron penas de muerte con 714 personas ejecutadas;
- aproximadamente 500.000 mujeres murieron por complicaciones derivadas del embarazo; la discriminación de género, las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos, y la negación del derecho a atención médica son a menudo causas directas de la mortalidad materna

---

<sup>634</sup> De acuerdo con datos de Amnistía Internacional, en la web: <[www.a-l.es](http://www.a-l.es)> [Consulta: 10 de octubre de 2010].

Uno de los graves problemas en se alcanzar una mayor efectividad en los resultados de la tutela de los derechos humanos se debe al hecho de que en la práctica, el control y protección de los derechos humanos se realizan en el plano marcadamente político, con el predominio de instrumentos de carácter no-contencioso o cuasi-contenciosos, y excepcionalmente caracterizándose con naturaleza judicial y sus correspondientes instrumentos contenciosos de persecución a las violaciones de los derechos humanos.

Los resultados desfavorables a un avance en la protección internacional de los derechos humanos es reflejo de *“una perversa tendencia: la de la protección mutua entre estados con un amplio historial de violaciones de Derechos Humanos. Más preocupado por protegerse a sí mismos que a las víctimas de los abusos, países como Argelia, China, Cuba, Libia, Rusia, Sudan o Siria se han dedicado a obstaculizar cualquier resolución crítica”*, como ha comentado IÑIGO HERRAIZ<sup>635</sup>.

Evidentemente este escenario político es expresión natural del propio contexto en que se sitúa el tema de la protección internacional de los derechos humanos, es decir, en el contexto del Derecho Internacional, provisto de todas sus peculiaridades, restricciones y limitaciones propias de la complejidad de las relaciones internacionales, aunque se deba reconocer, como afirmó WILFRED JENKS, que *“el derecho internacional contemporáneo ya no puede ser racionalmente presentado dentro de esquemas clásicos como el derecho que regula las relaciones entre Estados, sino que debe ser considerado como un derecho común de la humanidad en una etapa incipiente al desarrollo”*<sup>636</sup>.

Así es que, en tema de tan relevante importancia para la humanidad, y en el cual ya se ha avanzado hacia el reconocimiento de la naturaleza supra estatal de los derechos humanos, es posible y autorizado hablar de mecanismos que mejor se amolden a esta dimensión, y entre estos, presentándose el sistema judicial internacional como el más apropiado al intento de buscarse una mayor efectividad en

---

<sup>635</sup> Según IÑIGO HERRAIZ, “La crisis de los derechos humanos”, artículo publicado con fecha del 30 de abril del 2003, en la web: <www.lainsigna.org>.

<sup>636</sup> JENKS, C. W., *El derecho común de la humanidad*, traducción de M. T. Ramirez de Arellano, Tecnos, Madrid, 1986, p. 1.

la protección de aquellos derechos, por las propias características ínsitas de las instituciones judiciales, como garantizadoras imparciales del cumplimiento normativo.

Y es exactamente éste el punto principal para avanzar en el respeto a los derechos humanos: la garantía del cumplimiento de sus normas. El problema contemporáneo de los derechos humanos es su protección, y no más su reconocimiento o fundamentación<sup>637</sup>. En la actualidad, no carecen los derechos humanos de los correspondientes instrumentos normativos internacionales, como los pactos, convenciones, tratados, etc, que podrían llevar a la constatación de ser los derechos humanos una realidad. Los casi ciento cincuenta instrumentos internacionales de aquel contenido bien revelan la disposición de la comunidad internacional en tratar con atención y de modo especial aquellos derechos. A su vez, carecen los derechos humanos, eso sí, de la correspondiente y eficaz garantía para su realización, puesto que su disfrute, como ha advertido VILLÁN DURÁN, “es *pura ilusión en la mayor parte de las sociedades nacionales*”<sup>638</sup>.

Tal es la necesidad de plantearse la creación de una estructura judicial internacional de protección a los derechos humanos que la misma es una realidad en el propio contexto mundial, con relación a los crímenes contra la humanidad, y la correspondiente creación del Tribunal Penal Internacional. Así también es en el seno regional, pero restringida, efectivamente, al ámbito americano y europeo, y sus respectivos Tribunal Interamericano de Derechos Humanos y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque en el seno de África, con el recién instalado Tribunal Africano de Derechos Humanos, haya la tendencia de también concretizarse la tutela judicial. Y en esta tutela judicial internacional no se intenta proteger los derechos humanos en razón de las específicas culturas y tradiciones regionales, sino en razón de la propia dimensión de universalidad de aquellos derechos. Un análisis de los

---

<sup>637</sup> Como destacado por JAVIER BORREGO BORREGO, refiriéndose a NORBERTO BOBBIO, en BORREGO BORREGO, J., “El Nuevo Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y otros Órganos Internacionales de Protección de los Derechos Humanos” en VVAA, *Hacia una Justicia Internacional – XXI Jornadas de Estudio – Abogacía General del Estado*, Dirección del Servicio Jurídico del Estado, Civitas, Madrid, 2000, fls. 137.

<sup>638</sup> VILLÁN DURÁN, C., Curso ..., op. cit., p. 44.

casos juzgados por los Tribunales Europeo y Americano<sup>639</sup>, en el ejercicio de su jurisdicción contenciosa, retrata temas como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, al proceso justo, a la protección judicial y a la igualdad ante la ley<sup>640</sup>, que son comunes a todos los hombres.

A propósito, este registro de una estructura judicial regional existente en América, Europa, y más recientemente en África, aunque positivo por demostrar que es posible la existencia de una justicia internacional, bien revela que la efectiva tutela de los derechos humanos se encuentra marcadamente concentrada en beneficio de algunos pueblos o sociedades, sin un alcance universal a todos los individuos, como si las vulneraciones a los derechos humanos sometidos a la tutela judicial regional fuesen un “privilegio” de los individuos americanos, europeos y africanos, y no de las personas de todo el mundo.

Y, en la medida en que ciertas agrupaciones de personas disponen de medios para viabilizar una mayor protección a los derechos humanos y otras no los disponen, es fácil admitir que en este tema hay dos categorías de individuos: los (potencialmente) más protegidos, y los (potencialmente) menos protegidos.

La gravedad de la constatación de esta realidad es que los derechos humanos, como universales que son en su reconocimiento, no pueden dejar de gozar de este atributo de universalidad también con relación a su tutela.

Mismo con la conquista que, principalmente, los pueblos de los continentes americano y europeo lograron alcanzar con la efectiva creación y funcionamiento de un modelo regional de protección judicial no es suficiente para servir de referencia y estímulo para que otras agrupaciones regionales-geográficas del mundo adopten

---

<sup>639</sup> Véase la mención a algunos de los casos juzgados por la CIDH en la Cuarta parte de esta tesis, bajo el título “La Jurisprudencia Internacional”.

<sup>640</sup> Una referencia a la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se puede consultar en CANÇADO TRINDADE, A. A., *Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos*, op. cit., pp.66-80, 147-168; y, específicamente en el ámbito regional interamericano, en CARVALHO RAMOS, A. , *Direitos Humanos em Juízo*, Max Limonad, São Paulo, 2001, pp. 102-333.



semejante modelo. La práctica ha demostrado que tales avances no se confirman como un hecho concreto en otras sociedades, no habiéndose difundido este modelo en otras regiones del mundo, aunque en algún caso se haya obtenido progresión en aquel sentido, pero muy discretamente, como es la situación en África, donde ya se cuenta con la creación de un Tribunal supra-estatal de protección a los derechos humanos, pero sin resultados prácticos en su concreción.

Mas allá de lo que se puede constatar en tales realidades, y que muestra que en el tema de protección a los derechos humanos el mundo está dividido en individuos de primera y segunda categoría, considerándose el grado de la estructura de protección a su disposición, lo que cabe traer al debate es que hay espacio para alternativas que tapen estos huecos de las distinciones que impiden el reconocimiento de la universalidad en el contexto de la protección internacional de los derechos humanos, ya que esta protección, efectivamente realizada, es la que puede situarse como el punto de equilibrio entre las personas cuyos derechos humanos se realizan y aquellas que no alcanzan su realización.

No avanzar en tales preocupaciones de una tutela lo más eficiente posible de los derechos humanos, y que sea un desafío día a día, es caer en *“la tentadora y autocomplaciente conclusión de que la tarea en materia de derechos humanos está ya acabada y que lo que había que hacer está ya hecho”*, como advierte el profesor PAUL GORDON LAUREN<sup>641</sup>.

En este sentido, la propuesta que presenta este trabajo en búsqueda de instrumentos de una protección lo más efectiva posible, pasa necesariamente por el reconocimiento de la necesidad de un modelo internacional de protección de naturaleza judicial y alcance indistinto a todos los países e individuos, coherente, por si mismo, con los postulados de que ciertas categorías de derechos, como la protección a la vida, a la libertad, a la integridad física, moral y psicológica, son

---

<sup>641</sup> GORDON LAUREN, P., “Nuevos retos para los derechos humanos. El futuro a la luz del pasado” en VVAA, *Anuario de Derechos Humanos*, Nueva Época, vol. V, Instituto de Derechos Humanos, Universidad Complutense, Madrid, 2004, p. 370.

comunes a cualquier persona del mundo, donde quiera que se encuentre. Son derechos universales y, por lo tanto, exigen una correspondiente garantía universal.

## **CUARTA PARTE**

### **TUTELA JUDICIAL INTERNACIONAL GLOBAL DE DERECHOS HUMANOS**

Por las observaciones registradas hasta este momento, no se quiere desconocer que la estructura actual de protección internacional de los derechos humanos no presente sus méritos y no se caracterice como bastante evolucionada. Lo que se sostiene es que hay espacio para que se avance más en el enfrentamiento a las vulneraciones de los derechos humanos, y avanzar en el sentido cualitativo, de modo de extender la protección judicial internacional a todas las personas, y principalmente, reduciendo el protagonismo de los Estados con la intensificación del protagonismo de los individuos en este escenario del Derecho Internacional, hasta porque, el Derecho Internacional Contemporáneo no se reduce a un instrumental a servicio del poder, mas, por el contrario, *“su destinatario final es el ser humano, debiendo atender a sus necesidades, entre las cuales la realización de la justicia”*<sup>642</sup>.

No se puede dejar de reconocer que la defensa de los derechos humanos en el ámbito interno de cada país muchas veces no es suficiente, habiendo una demanda real de protección en un nivel más amplio, de alcance a todos los individuos del mundo, donde quiera que se encuentren. *“Así se abre una nueva era, la de la internacionalización de los derechos humanos, larga y llena de dificultades por la resistencia de los propios Estados, celosos de su soberanía, pero en la que no cabe ya la marcha atrás”*<sup>643</sup>.

Desde ahí surge la necesidad de una protección internacional jurisdiccional, no-penal, en los moldes de actuación de los tribunales regionales europeo, interamericano y africano de protección, pero de alcance más amplio, global, a toda la gente del mundo, hasta porque no está demás recordar que la protección judicial de los derechos humanos se identifica con uno de los propios derechos de aquella

---

<sup>642</sup> CANÇADO TRINDADE, A. A., “Reflexiones sobre el Desarraigo como Problema de Derechos Humanos frente a la Conciencia Jurídica Internacional”, en CANÇADO TRINDADE, A. A., RUIZ DE SANTIAGO, J., *La Nueva Dimensión de las Necesidades de Protección del Ser Humano en el Inicio del Siglo XXI*, 2ª e., Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 2003, p. 68.

<sup>643</sup> MARKIEGI, X, “Balance en Euskadi 50 años después”, en *Los Derechos Humanos en un mundo dividido*, Universidad de Deusto, Bilbao, 1999, p. 249.

naturaleza catalogados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 7 y 8.

Cabe señalar que la importancia de una jurisdicción supra-estatal y de alcance general de los derechos humanos se revela en la propia existencia de los tribunales internacionales regionales – el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Africano de Derechos Humanos. Es decir, si esta protección es buena y necesaria para mucha gente, los que se encuentran alcanzados por la protección de aquellos tribunales regionales, esto es una señal muy segura y convincente de que dicha protección también debe revelarse necesaria y buena para los demás, la gente del mundo que no dispone de idéntica protección contra las violaciones de derechos humanos.

Y de tal modo se reviste esta importancia de un órgano jurisdiccional internacional de protección a los derechos humanos, que la Corte Interamericana rechazó la retirada de sumisión a su jurisdicción, formulada por Perú, teniendo señalado que *“el pretendido retiro, con efectos inmediatos, por el Estado peruano, de la declaración de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es inadmisibile”*. Esta decisión adoptada por la CIDH ha sido recibida con aplausos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reconociendo esta *“la imposibilidad de retirar las declaraciones de reconocimiento de competencia de los tribunales internacionales en materia de derechos humanos”*<sup>644</sup>.

Es evidente que pretender la extensión de la efectiva protección de los derechos humanos a toda la gente del mundo, y basada en una única estructura jurisdiccional internacional, no es tarea fácil cuando confrontada con la realidad de muchos países, destacadamente en vista del gran apego que aún se sostiene a la soberanía nacional, que es el principal adversario de una más perceptible emancipación de aquellos derechos, y que impide se alcanzar el cambio de la *“tradicional cultura de impunidad por una nueva cultura de responsabilidad”*<sup>645</sup>.

---

<sup>644</sup> Cf. Comunicado de Prensa CDH-CP 13/99, mencionado por ORTIZ AHLF, L., op. cit., p. 38.

<sup>645</sup> GORDON LAUREN, P., “Nuevos retos para los derechos humanos. El futuro a la luz del pasado”, en *Anuario de Derechos Humanos...*, op. cit., p. 375.

Y este apego a la soberanía nacional, mismo no siendo el retrato más fiel de los avances que se viene observando en el mundo, al punto de, *“irónicamente nunca en la reciente historia la soberanía nacional ha sido tan directa y exitosamente puesta en duda”*<sup>646</sup>, aún así hay situaciones muy relevantes que demuestran haber un espacio muy grande a conquistar en la tutela de los derechos humanos. Los casos de Estados Unidos, China, Israel, los países islámicos, y otros que a menudo resisten en ratificar o firmar tratados de derechos humanos o someterse al control externo de sus acciones, no admitiendo ni mismo críticas a las violaciones, son ejemplo muy claros de barreras que impiden reconocer una auténtica dimensión de la efectividad de los derechos humanos.

Las resistencias a la adopción de un modelo jurisdiccional, como el que propone este trabajo, seguramente son tan intensas que se puede imaginar como algo meramente utópico, sin cualquier posibilidad razonable de existencia. Dificultades técnicas, operacionales, financieras, excesivo judicialismo, resistencia política, son algunos de los argumentos que indudablemente se cercan a resistir sobre la real posibilidad de existir un tribunal internacional de derechos humanos, no-penal, común a toda la gente del mundo.

No obstante, la propia evolución histórica de los derechos humanos reflejan que mucho de lo que se ha tornado realidad hoy era impensable en el pasado, y, a lo mejor, *“la comunidad mundial necesita volver a la audaz visión de aquellos que soñaron con los Derechos del Hombre y del Ciudadano y prepararon la Declaración Universal de Derechos Humanos. Un nuevo milenio es una ocasión ideal para reafirmar tal visión – y para renovar los compromisos prácticos que la hagan realidad”*<sup>647</sup>.

Si no fuese por los incesantes esfuerzos del pasado, con las constataciones de los hechos y las iniciativas en revertir lo que estaba consolidado, seguramente con muchas resistencias, a lo mejor nada se podría estar escribiendo sobre derechos

---

<sup>646</sup> Ib. Idem.

<sup>647</sup> Texto mencionado por PAUL GORDON LAUREN, en “Nuevos retos para los derechos humanos. El futuro a la luz del pasado”, *Anuario de Derechos Humanos*, vol 5, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2004, p. 382.

humanos, por la simple razón de que este, recientemente, ni al menos existiría con el nivel de emancipación que ha alcanzado en los días actuales.

En reciente proyecto de creación de un Tribunal Mundial de Derechos Humanos, MANFRED NOWAK y JULIA KOZMA afirmaron que la existencia de aquel tribunal internacional es un desafío que se impone al siglo XXI, y que, desde el punto de vista legal como político, trátase de una providencia absolutamente factible: *“It goes without saying that the authors assumed from the outset that the establishment of a World Court of Human Rights was feasible, both from a legal and a political point of view”*<sup>648</sup>.

Impensable en el pasado reciente, por el propio distanciamiento geográfico de las sociedades, y que no tenían un medio de interacción de los hechos, esta realidad hoy, con los recursos tecnológicos de las comunicaciones, y que ha reducido la extensa dimensión territorial del planeta cuanto al conocimiento de todo lo que sucede, es patentemente viable y apropiada a impulsar la existencia de un órgano de jurisdicción mundial para dar respuesta a las graves violaciones de los derechos humanos, de naturaleza no-penal, donde los sistemas internos o mismo los sistemas externos de protección no se presentan satisfactorios a aquel intento.

Plantear la creación de una instancia judicial no-penal específica para la protección de los derechos humanos no implica en desconocer las amplías y, a las veces, inimaginables dificultades para realizar tal intento, sea del punto de vista político, jurídico o mismo financiero.

El problema político sigue siendo, sin duda, el más relevante obstáculo a impedir un logro cada vez más consistente en la tutela de los derechos humanos, puesto que en este se encuentra la definición de la medida de cuales y en que intensidad se puede permitir la interferencia internacional en asuntos internos para reparar violaciones a los derechos humanos.

---

<sup>648</sup> “A World Court of Human Rights”, op. cit. página 7, disponible, en inglés, en <<http://www.udhr60.ch/report/hrCourt-Nowak0609.pdf> > [Consulta: 2 de julio de 2011].

Y lo peor es que, no obstante los progresos experimentados con la cultura de los derechos humanos tras la Segunda Guerra, algunos doctrinadores reconocen hoy que, tras el final de la guerra fría, aquella misma cultura *“ha comenzado a debilitarse”*, como advierte la profesora TECLA MAZZARESE, de la Universidad de Brescia<sup>649</sup>. Como principal constatación de este regreso tiene la *“revalorización de la guerra no sólo en un sentido más amplio de legítima defensa, sino incluso como medio de impedir ‘graves violaciones de derechos’ que puedan llegar a perpetrarse. Tal debilitamiento, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre a los EEUU, se está haciendo más profundo y generalizado debido a las medidas jurídicas nacionales y supranacionales que, en nombre de la seguridad común frente al peligro del terrorismo internacional, explícitamente abogan por la derogación de un gran número de derechos protegidos desde siempre: desde el derecho a la intimidad al derecho a la información y la libertad de expresión, desde las garantías judiciales a un proceso debido – due process o law – al mismo derecho al mantenimiento de la paz”*<sup>650</sup>. Al fin, advierte la profesora TECLA MAZZARESE que el discurso actual de que solamente con la salvaguardia a la seguridad colectiva es que se puede concebir la defensa de la democracia y el mantenimiento de la paz, ha permitido en tiempos actuales que aquella seguridad pueda encontrar justificaciones para la violación de un derecho fundamental.

Desde esta perspectiva, la existencia de un órgano jurisdiccional internacional, no-penal, de alcance global o universal, preséntase aún más justificable, en la medida en que puede firmarse como institución apropiada a decir sobre las controversias entre los derechos en tensión, incluso por tener la imparcialidad necesaria para sopesar en igualdad la evaluación de los derechos en conflicto. Mismo la eventual carencia de elementos imprescindibles a la caracterización del auténtico poder jurisdiccional, como su fuerza disuasiva, o protección que se funda en la *“vis coacta”*, como ha citado BOBBIO<sup>651</sup>, ni así una jurisdicción internacional global estaría a

---

<sup>649</sup> Esta advertencia lo hace en su artículo “Está la era de los derechos cambiando?”, en VVAA, *Anuario de Derechos Humanos...*, op. cit., p. 668.

<sup>650</sup> Ib. idem.

<sup>651</sup> NORBERTO BOBBIO, en su artículo “Presente y Porvenir de los derechos Humanos”, en VVAA, *Anuario de Derechos Humanos*, 1, Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Madrid, 1981, pp. 20-21.

traducirse como desnecesaria pues, como mínimo, podría ofrecer, por el contenido de sus decisiones, el cauce más seguro del reconocimiento o no de una violación.

Así, plantearse la creación de una instancia jurisdiccional internacional global de protección a los derechos humanos, que se puede denominar “Tribunal Mundial de Derechos Humanos”, para juzgar las graves violaciones no-penales de derechos humanos practicadas por los Estados, y que no encuentran respuesta en otros tribunales nacionales o internacionales – regionales – no es avanzar en el campo de la retórica, incluso ya habiéndose producido este debate en el pasado, como registran los “propósitos”<sup>652</sup> de creación de aquella jurisdicción en la Conferencia de Dakar de 1967, en la Conferencia de París de 1968, y en la Conferencia de Teherán de ese mismo año<sup>653</sup>.

Alias, hablar en retórica es hablar en una cantidad de derechos reconocidos, aclamados, pero sin mecanismos de protección para garantizar su efectivo cumplimiento. LUÍS PRIETO SANCHÍS, reportándose al pensamiento de PECES-BARBA y PEREZ LUÑO, señala que *“un sistema de derechos fundamentales vale en la práctica lo que valen sus garantías”* y que *“la proclamación de las libertades en textos constitucionales o en documentos internacionales no pasa de ser una expresión de buenas intenciones, cuando no un ejercicio de la más vacía retórica, mientras no se acompaña de mecanismos de protección serios y rigurosos frente a todos y muy singularmente frente a los poderes públicos”*<sup>654</sup>. Desde esta óptica se puede considerar la propia protección que algunas veces se hace necesaria hasta mismo del individuo contra el propio país de que es ciudadano.

Más específicamente en lo que se refiere a la creación de un órgano jurisdiccional internacional, cabe recordar que la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 1979, se ha dado bajo un momento histórico en que la mayoría de los países de América Latina estaban sometidos a regímenes dictatoriales

---

<sup>652</sup> Según expresión textual de NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, *La protección procesal internacional de los derechos humanos*, Civitas, Madrid, 1975, p. 34.

<sup>653</sup> Ídem, p. 35.

<sup>654</sup> LUIZ PRIETO SANCHÍS, en el artículo “La protección estatal de los derechos humanos”, en VVAA, *Diccionario Crítico de los Derechos Humanos*, Universidad Internacional de Andalucía, sede iberoamericana, Huelva, 2000, p. 201.



militares, es decir, ciertamente contando con resistencia muy intensas. Y otros órganos internacionales de protección a los derechos humanos más recientes, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Tribunal Penal Internacional, también protagonizaron grandes dificultades, con muchas manifestaciones de descrédito, hasta que se tornaron realidad<sup>655</sup>.

Más allá de estas constataciones en el pasado, en la actualidad se debate en el seno de las Naciones Unidas, por ejemplo, la ampliación del número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad, incluso habiéndose constituido un Grupo de Trabajo específico sobre el asunto. Trátase de propuesta que, antes impensable, actualmente encuentra respaldo por parte de los cinco miembros permanentes.

No reconocer la amplia y general necesidad de protección de los derechos humanos como medida imprescindible a toda la gente del mundo, y en la cual exista una jurisdicción internacional global, es impedir su real efectividad, y es lo mismo que admitir, en el seno interno, del orden jurídico de los Estados, que se pueda aceptar no existir una instancia contenciosa para garantizar la efectiva realización de los derechos fundamentales, hecho impensable.

En un último análisis, insistir en la idea de un órgano judicial internacional global, no-penal, de protección a los derechos humanos es reforzar la naturaleza universal de aquellos derechos, y que *“no puede quedar relegada a la esfera de los postulados ilusorios”* mas, por el contrario, *“reclama un esfuerzo constructivo tendiente a su realización”*<sup>656</sup>. Además de eso, *“sólo tiene sentido la búsqueda de bases para crear en la realidad un sistema viviente, en caso que no exista. Ello*

---

<sup>655</sup> En el Ciclo “Los Derechos Humanos en un mundo dividido”, realizado por la Universidad de Deusto en homenaje a los 50 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre diciembre de 1997 y diciembre de 1998, el Profesor ALAIN PELLET, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, abogaba la necesidad de creación de un órgano de jurisdicción penal internacional, pero advertía cuanto a los problemas de naturaleza jurídica y política en tal intento, cf. “Los Derechos Humanos en un mundo dividido”, VVAA, *“Presentación temática del ciclo ‘Los Derechos Humanos en un mundo dividido’*, Universidad de Deusto, Bilbao, 1999, p. 19.

<sup>656</sup> PEREZ LUÑO, A. E., “La Universalidad de los Derechos Humanos”, en VVAA, *Diccionario Crítico de los Derechos Humanos*, Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, 2000, p. 38.

*supone también, necesaria y simultáneamente, denunciar las asistematicidades dentro del orden jurídico y con respecto a su funcionamiento real”<sup>657</sup>.*

## **I – FUNDAMENTOS A LA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL GLOBAL EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS**

No basta identificar las deficiencias y debilidades de una estructura y la necesidad de una determinada solución para su enfrentamiento si no hay bases que puedan sostener las propuestas presentadas.

Por eso se va a indagar sobre cuáles son las buenas razones que dan soporte a la creación de un órgano judicial internacional global de protección a los derechos humanos, principalmente considerándose las críticas lanzadas en esta propia tesis cuanto a la multitud de órganos que actualmente componen la estructura internacional de aquella protección, y la aparente paradoja que surge en plantear, para la mejora de aquella estructura, exactamente la creación de un otro órgano y de más relevantes atribuciones en aquel contexto.

En las páginas siguientes se presentarán algunas respuestas a esta indagación.

### **1 – EL DISCURSO DE LA UNIVERSALIDAD COMO CAUCE DE UNA JURISDICCIÓN GLOBAL**

No hay como sostener la necesidad de existencia de un órgano judicial internacional global, es decir, de protección universal, basado en esta propia naturaleza de la universalidad, si la universalidad, por si misma, no es algo que se reconozca.

Este trabajo de tesis doctoral no tiene por foco los temas y discusiones de contenido filosófico, como, en su esencia, es la discusión sobre la universalidad de

---

<sup>657</sup> GORDILLO, A., “Los derechos humanos en un mundo nuevamente en crisis y transformación”, *Derechos Humanos*, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 4ª. e. 1999, p.I-1.

los derechos humanos. Sin embargo, no es demasiado, en el desarrollo de este trabajo, registrar algunas breves consideraciones a respecto de la universalidad de los derechos humanos, hasta porque la misma es una premisa reconocida como justificación a la necesidad de avanzar en la efectividad de la protección de aquellos derechos, en el cual se encuentra basado este trabajo.

Por eso se torna necesario tejer un breve abordaje cuanto a este tema.

La universalidad de los derechos humanos y el consecuente reconocimiento de su validez, son temas bastante controvertidos en la comunidad internacional, y en el cual se debaten con intensidad doctrinadores de todos los matices en los planos político, jurídico y filosófico<sup>658</sup>.

En un mundo tan heterogéneo, con tanta diversidad histórico-cultural y geopolítica, puede parecer que no sea posible encontrar rasgos comunes que lleven a identificar algún valor común a toda la gente. Pero esto no es imposible, y más allá, es absolutamente viable en un ser que guarda algunos valores morales comunes, algunas necesidades que se pueden identificar como deseos naturales de la propia condición humana, y, por eso mismo, universales, propios de cada hombre en cualquier lugar, en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia que se encuentre.

Se puede mencionar a respeto el que la doctrina ha convenido definir como “estándar mínimo universal”. FERNANDO MARIÑO alude a este “estándar mínimo” como siendo los derechos inviolables, inherentes a la dignidad de la persona, como el derecho a la vida, a la integridad física y moral, incluyendo el derecho a no ser sometido a esclavitud, o servidumbre, a un juicio imparcial, a la legalidad, a la irretroactividad de la ley penal, a ser sometido a un proceso debido y a gozar de las

---

<sup>658</sup> El profesor PASTOR RIDRUEJO identifica en la universalidad el punto más importante de convergencia de las vías filosófica e internacional de aproximación académica de los derechos humanos, conforme ha señalado en el “Prólogo”, a la publicación de CARIDAD VELARDE, *Universalismo de Derechos Humanos – Análisis a la luz del debate anglosajón*, Thomson Civitas, Madrid, 2003, pp. 11-13.

garantías penales básicas, a la personalidad jurídica, a crear una familia y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión<sup>659</sup>.

Es verdad que la aceptación de la naturaleza universal de los derechos humanos no es convergente en el seno de la comunidad internacional, habiendo argumentos que buscan negar aquella característica de los derechos humanos, principalmente centrados en la diversidad cultural de los pueblos y cuya peculiaridad ética, por las más diferentes razones de identidad del entorno social, no permite firmar un padrón único de los deseos morales de la humanidad. En opinión de JEAN-YVES LE GALLOU, citado por ERNESTO GARZÓN VALDÉS en su artículo “Derechos Humanos y Diversidad Cultural”<sup>660</sup>, *“No existe una ‘lógica universal’ que sea válida para todos los seres racionales ... Hay que rechazar sistemas de valores universales: algo es bueno, verdadero, bello, sólo para el tipo humano a cuyo ‘sustrato étnico’, situación psicológica, composición genética y medio ambiente social y racial responde... A todo ‘sustrato étnico’ corresponde una lógica propia, una propia visión del mundo”*.

Haciendo un panorama de las actuales resistencias cuanto a la universalidad, el profesor PÉREZ LUÑO define que las críticas a la universalidad se concentran en los planos filosófico, político y jurídico.

En el plano filosófico, destacase el movimiento de revisión crítica de los valores de la racionalidad, la universalidad y la igualdad, por los valores de las pulsaciones emocionales, el particularismo y la diferencia, haciendo referencia al movimiento “comunitarista”, por el cual los derechos son expresión de cada comunidad histórica que es la que va a dotar los derechos de cada persona de ciertos perfiles específicos y concretos<sup>661</sup>.

---

<sup>659</sup> MARIÑO MENÉNDEZ, F. “Los extranjeros y el Derecho Internacional” en *Derecho de Extranjería Asilo y Refugio*, 1995, Ministerio de Asuntos Sociales, p. 112.

<sup>660</sup> En VVAA, *Los Derechos Humanos en un mundo dividido*, Universidad de Deusto, Bilbao, 1999, p. 97.

<sup>661</sup> “La Universalidad de los Derechos Humanos”, en VVAA, *Diccionario Crítico de los Derechos Humanos*, Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, 2000, p. 30-31.

En su contexto político, la resistencia a la universalidad adviene del relativismo cultural, por el cual se impone el respeto del tejido institucional de cada pueblo, y que no hay como juzgar que el conjunto de formas de vida e instituciones de un pueblo son mejores que de los demás. Por no existir un modelo ideal de las instituciones culturales y políticas, no cabe juzgar unas en razón de las otras. El discurso del universalismo nada más sería del que un intento vuelto al eurocentrismo, neo imperialismo o neocolonialismo<sup>662</sup>.

En la mención al plano jurídico, el profesor PEREZ LUÑO señala que las críticas presentadas apuntan para la heterogeneidad de los textos constitucionales en materia de protección a los derechos humanos, que ni mismo las Constituciones de Estados pertenecientes al mismo ámbito político-histórico-cultural presentan un padrón de reconocimiento común de los derechos humanos, habiendo divergencias notables, como en el caso de los países que siguen el modelo del Estado Liberal de Derecho, cuya énfasis constitucional se dirige a los derechos civiles y políticos, al tiempo en que para los países con identidad al Estado Social de Derecho, hay una reserva de protección también a los derechos económicos, sociales y culturales<sup>663</sup>.

No obstante tales observaciones, no se puede alejar de la idea de que cuando hay derechos alcanzables a todas las personas se puede hablar de derechos humanos, es decir, de su “*titularidad universal*”, en palabras de PERÉS LUÑO<sup>664</sup>. Y, según el renombrado profesor, “*Nunca como hoy se había sentido tan intensamente la necesidad de concebir los valores y derechos de la persona como garantías universales, independientes de las contingencias de la raza, la lengua, el sexo, las religiones o las convicciones ideológicas*”<sup>665</sup>.

En este punto, no hay otra manifestación más intensa y marcante de la universalidad sino la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que, señálese, no se satisface en la calificación *internacional*, sino, *universal*.

---

<sup>662</sup> Idem, p. 32.

<sup>663</sup> Idem, p. 33-4.

<sup>664</sup> “La Universalidad de los Derechos Humanos”, en VVAA, *Diccionario Crítico de los Derechos Humanos*, Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, 2000, p. 28.

<sup>665</sup> Idem p. 30.

Aunque se admita, como lo hace BOBBIO, que sólo después de la Declaración Universal es que se ha podido tener la certidumbre histórica de que la humanidad comparte algunos valores comunes y que por eso se puede creer en la universalidad<sup>666</sup>, esa naturaleza universal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace mucho recibe severas críticas del mundo no occidental, por expresar dicho documento la voluntad y reflejo de la cultura, la costumbre, los deseos del mundo occidental, específicamente de Europa y Estados Unidos, incluso con rasgo de dominación ideológica por parte de los países desarrollados, y sin tener en cuenta las peculiaridades y diversidad social, política, económica, histórica y cultural de los demás países.

Esta predominancia occidental o “euro céntrica”, de hecho guarda mucho más una identidad regional y menos universal, siendo *“lógico observar en el texto de la Declaración, el influjo de las tesis occidentales de la época, claramente dominantes en su confrontación con las de los Estados socialistas y las de los Estados del Tercer Mundo”*<sup>667</sup>.

Tal el reconocimiento no tan incluyente de las culturas no-occidentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el seno de la Organización de la Conferencia Islámica, integrada por 53 Estados-miembros, se ha suscrito la Declaración de El Cairo sobre los Derechos Humanos en el Islán, incluso, en la Cumbre de la Conferencia Islámica, celebrada en Teherán, aprobada en 11 de diciembre de 1997, se ha reiterado *“que el reconocimiento y total respeto a los principales sistemas legales del mundo, incluida la jurisprudencia islámica, es esencial para la promoción de la universalidad de la DUDH. Abogó por la codificación de las normas islámicas y principios contenidos en la Declaración de El Cairo en un instrumento islámico de derechos humanos universalmente reconocido. Y potenció la*

---

<sup>666</sup> Véase el artículo “Presente y Porvenir de los Derechos Humanos”, en VVAA, *Anuario de Derechos Humanos*, 1, Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Madrid, 1981, pp. 09-28.

<sup>667</sup> VILLAN DURÁN, c., “La Declaración Universal de Derechos Humanos em la Práctica de las Naciones Unidas, VVAA., *La Protección Internacional de los Derechos Humanos a los Cincuenta Años de la Declaración Universal*, Tecnos, Madrid, 2001, p. 55.

*adopción de posiciones comunes en los foros internacionales de derechos humanos, en defensa de los valores encarnados por la sharía islámica*<sup>668</sup>.

A pesar de tales críticas y posiciones fraccionarias de la universalidad, y mismo considerándose que la DUDH ha sido adoptada en una época en que muchos Estados que hoy integran la ONU ni siquiera existían, aun hoy no se conoce ninguna manifestación expresa de rechazo a aquel documento, siendo que los principios por ella consagrados han sido política y jurídicamente aceptados por la comunidad internacional<sup>669</sup>.

Todavía, para la debida comprensión del atributo de la universalidad de los derechos humanos no basta referirse a las declaraciones que los reconocen; es necesario ir más adelante, pues hay una contradicción patente entre la proclamación teórica de los derechos humanos, “*suficientemente consolidada*”, y su manifiesta inobservancia práctica, “*ampliamente constatada*”<sup>670</sup>.

El gran y actual desafío de la universalidad reside, en realidad, en se reconocer que su alcance exige conquistas efectivas en la protección y garantía de la realización de los derechos humanos, y que sean comunes a toda la gente del mundo, de modo que sean tratados “*de forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándole a todos el mismo peso*”<sup>671</sup>, permitiéndose oportunidades de protección iguales para todos.

Como ha afirmado el juez KAKOURIS, del Tribunal Europeo de las Comunidades Europeas, “*la noción de universalidad comporta un aspecto procedimental, en la medida en que supone la instauración de un mecanismo internacional susceptible de asegurar su protección, y, al mismo tiempo, material, desde el momento en que los derechos humanos deben ser protegidos siempre, en*

---

<sup>668</sup> Idem, p. 56

<sup>669</sup> Ibidem.

<sup>670</sup> Idem, p. 16

<sup>671</sup> Conforme ha enfatizado la Profesora ANA SALADO OSUNA, de la Universidad de Sevilla, en “La Protección Internacional de los Derechos Humanos”, VVAA, *Diccionario Crítico de los Derechos Humanos*, Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, 2000, pp. 210-221.

*todo lugar, en relación con todos los hombres sin distinción alguna y de una forma plena, es decir con la máxima cobertura posible, ...*<sup>672</sup>.

En el contexto de la efectividad de la protección de los derechos humanos el modelo jurisdiccional se destaca como medio más importante, con las largas experiencias de los tribunales internacionales regionales, notadamente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cada vez más consolidan la constatación del éxito de sus labores en el plano de la efectividad de los derechos humanos.

Así, siendo la universalidad un atributo de los derechos humanos, y que en el modelo jurisdiccional internacional se encuentra el más grande reconocimiento de la efectividad en la protección de aquellos derechos, se impone reconocer que la jurisdicción internacional con alcance universal/global es el más avanzado que se puede conquistar en tema de protección internacional de derechos humanos.

Y la existencia de un órgano judicial internacional, de alcance global, no está a impedir o perjudicar las intensas y exitosas labores de los tribunales regionales internacionales de protección a los derechos humanos. Al contrario, en la dialéctica universalidad-regionalización, los fenómenos del universalismo y del regionalismo se pueden combinar, constituyendo “*formas complementarias*” de promoción y protección a los derechos humanos, y no “*formulas antitéticas y excluyentes*”, y que redundan en una mayor cobertura jurídica para sus destinatarios, como ha destacado el profesor y jurista HECTOR GROS ESPIELL<sup>673</sup>. En realidad, los “sistemas” regionales y universales de protección a los derechos humanos no son contradictorios, mas, al contrario, se completan.

Pensar en un órgano jurisdiccional internacional de naturaleza universal o global de protección de los derechos humanos es, en realidad, reafirmar los propósitos de universalidad de los propios derechos humanos, y es pugnar por el

---

<sup>672</sup> KAKOURIS, C. N., “L’universalité des droits de l’homme. Le droit d’être différent. Quelques observations”, en *Hacia un orden internacional y europeo. Estudios en homenaje al profesor don Manuel Díez de Velasco*, Tecnos, Madrid, 1993, p. 417.

<sup>673</sup> GROS ESPIELL, H., *Estudios sobre los derechos humanos II*, Civitas, Madrid, 1988, p. 292.



reconocimiento indeclinable de la efectividad de aquellos derechos, hasta porque, como ha apuntado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos-ACNUDH “*los Estados cumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos de manera integrada y no tratado por tratado, y las personas y grupos no disfrutan de sus derechos humanos o sufren violaciones haciendo distinciones entre tratados*”<sup>674</sup>.

No se ha inspirado este trabajo de tesis doctoral en la “*tentación de imitar a Procusto*”, buscando definir un modelo de tutela de los derechos humanos “*según nuestra propia talla*”<sup>675</sup>. En realidad, la “talla” de los derechos humanos ya se encuentra definida por la propia humanidad, por la comunidad internacional, y es la talla de la “universalidad”. Universalidad que no es sólo una característica del alcance a la exigencia de los derechos humanos, sino que también es una característica de sus vulneraciones.

Así, los esfuerzos en la universalidad de la protección de los derechos humanos refuerzan el concepto y la propia creencia en la universalidad de la proclamación de aquellos derechos. A no ser así, cuando la protección internacional se limita a una colectividad específica, sin un enfoque global, intersectorial y exhaustivo, como en el actual modelo jurisdiccional regional, no se puede dejar de admitir que la universalidad queda comprometida.

Y cuanto a la propiedad y plausibilidad de órganos supranacionales de alcance universal de protección de los derechos humanos son ejemplo del trabajo que viene desarrollando la comunidad internacional los órganos vinculados a la ONU, como el ECOSOC, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos-ACNUDH, y el más reciente Consejo de Derechos Humanos, todos, incluso, sin naturaleza convencional y que, por lo tanto, suficientes a comprobar la viabilidad de creación de un órgano judicial con idéntico alcance general de protección internacional.

---

<sup>674</sup> HRI/MC/2006/2, p. 17.

<sup>675</sup> Según observaciones de BORREGO BORREGO, J., *Hacia una Justicia Internacional*, op. cit., p. 139.

## **2 – LOS RASGOS DE LA PROTECCIÓN JUDICIAL**

En el presente trabajo de tesis doctoral su principal foco de desarrollo es la preocupación con la efectividad de los derechos humanos y que sólo se puede garantizar su alcance con mecanismos que aseguren sean obedecidos, es decir, que permitan ser los derechos humanos reconocidos en concreto, y no como mero discurso político o filosófico. Es siempre importante recordar que *“los derechos humanos son el tema de nuestro tiempo, digamos el rasgo más identificador de la cultura política y jurídica de la modernidad”*, como ha destacado el profesor GREGORIO PECES-BARBA<sup>676</sup>. Se puede afirmar que actualmente los derechos humanos se identifican como el vértice de la pirámide que es el orden internacional<sup>677</sup>, siendo su principal enfoque y más destacada preocupación, envuelto en las más diversificadas formas de incentivo a la cultura de su respeto y a las innumerables iniciativas de rechazo a las situaciones que resulten en su violación.

Para proteger los derechos humanos es necesario más que su proclamación; es necesaria la adopción de instrumentos que exijan sean observados o, cuando violados, que hagan cesar las violaciones. Como advierten MANFRED NOWAK y JULIA KOZMA, al proponer un Estatuto del Tribunal Mundial de Derechos Humanos *“where there is no remedy there is no right”*<sup>678</sup>. A propósito, hoy ya se reconoce *“la escandalosa paradoja que se produce entre el gran avance en el desarrollo teórico de los derechos humanos que se ha producido desde la aprobación de la Declaración Universal de 1948 y, por otro lado, la constatación de que la situación de la mayoría de la humanidad sigue siendo una situación marcada por la*

---

<sup>676</sup> PECES-BARBA, G., “Pasado y futuro de los derechos humanos”, en *Consolidación de Derechos y Garantías: Los grandes retos de los Derechos Humanos en el siglo XXI (Seminario Conmemorativo del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, p. 386.

<sup>677</sup> La expresión de los derechos humanos como “vértice de la pirámide del orden internacional” es citada por GERMÁN J. BIDART CAMPOS, en *La Interpretación del Sistema de Derechos Humanos*, EDIAR, Buenos Aires, 1999, pp. 169-186.

<sup>678</sup> “A World Court of Human Rights”, op. cit, pag. 3, en <<http://www.udhr60.ch/report/hrCourt-Nowak0609.pdf>> [Consulta: 2 de julio de 2011].

*pobreza, la ignorancia y por violaciones graves y sistemáticas de sus derechos más básicos*<sup>679</sup>.

Y cuanto a este aspecto de la efectiva protección internacional de los derechos humanos, un dato muy importante de la carencia de los mecanismos actuales es reconocido por la Secretaria-General de Naciones Unidas, al afirmar, en relación al sistema de tratados que, *“Pese a sus logros, el sistema sólo es conocido en los círculos académicos y los departamentos estatales, y entre los funcionarios que interactúan directamente con él, los abogados y las ONG especializados. Raras veces se considera al sistema de órganos creados en virtud de tratados un mecanismo accesible y eficaz para lograr cambios. Las víctimas de violaciones de los derechos humanos y los agentes de la sociedad civil suelen desconocer los complejos procedimientos del sistema y sus posibilidades. La cobertura que dan los medios de comunicación es deficiente y la utilización de jurisprudencia de estos órganos por los abogados y los sistemas judiciales nacionales, limitada. Las visitas de miembros de los órganos a los países siguen siendo excepcionales y el sistema suele calificarse de desconectado de la realidad sobre el terreno, ya que las reuniones sólo se celebran en Ginebra o Nueva York. El número de quejas presentadas a la Secretaría es bajo en comparación con las personas que viven bajo la jurisdicción de los Estados que han aceptado los procedimientos de queja por particulares y la mayoría de las quejas se dirigen a una minoría de Estados Partes. Los procedimientos de investigación en relación con la Convención contra la Tortura y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se han utilizado poco, mientras que nunca se ha recurrido a los mecanismos de queja entre Estados*<sup>680</sup>.

Y en el ámbito del derecho interno, constitucional, en los Estados democráticos, es en el Poder Judicial que se abrigan las concretas garantías de respeto a los derechos humanos, incluso teniendo aquel la última palabra a valorar en qué medida la actuación de los demás Poderes excede las limitaciones impuestas por

---

<sup>679</sup> Estas son palabras del Profesor JON SOBRINO, de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador, en el “Forum de Deusto”, VVAA, *Los Derechos Humanos en un mundo dividido*, op. cit., pp. 17-8.

<sup>680</sup> En el documento de la Secretaría General, HRI/MC/2006/2, página 13.

los derechos fundamentales, es decir, a los jueces cabe definir sobre la “*virtualidad jurídica de los derechos*”<sup>681</sup>.

Por el ejercicio de la jurisdicción, propia y exclusiva del órgano judicial, es que se tiene la potestad de decir el derecho en el caso concreto, en búsqueda de la paz jurídica y social. Es por la jurisdicción que se pronuncia el derecho válido a una situación específica, exigiéndose para ello la adopción de criterios predominantemente jurídicos, con la necesaria fundamentación, basada en la imparcialidad, independencia y transparencia, con respeto a las garantías del debido proceso, con la amplia defensa y contradictorio, dictada por un tercero ajeno a los intereses en conflicto, con la única sumisión a la norma, y con una actuación estrictamente técnica, sin las interferencias externas de los intereses políticos, económicos o culturales.

A su vez, la aplicación de las normas al caso concreto produce la irradiación de sus efectos como obligación de cumplimiento para las partes, y no como mera orientación y solicitud, sin fuerza coercitiva, propio de los sistemas no-judiciales, ya que no tiene sentido el reconocimiento de derechos sin la correspondiente capacidad de reclamarlos. En su origen, este poder decisorio de las instituciones judiciales tiene como atributo la autonomía y el carácter no-político de esas instituciones, rasgos no perceptibles en los mecanismos de protección no-judiciales<sup>682</sup>. Por ello, como destaca NORBERTO BOBBIO, sólo se podrá hablar legítimamente de la tutela internacional de los derechos del hombre cuando una jurisdicción internacional consiga imponer y sobreponerse a las jurisdicciones nacionales y cuando se traslade la garantía dentro del Estado – que aún es la característica predominante de la fase actual – a la garantía contra el Estado<sup>683</sup>.

---

<sup>681</sup> Expresión utilizada por LUIZ PRIETO SANCHÍS, en al artículo “La protección estatal de los derechos humanos”, en VVAA, *Diccionario Crítico de los Derechos Humanos*, Universidad Internacional de Andalucía, sede iberoamericana, Huelva, 2000, p. 204.

<sup>682</sup> Una situación real que demuestra esa limitación en la tutela ejercida por los órganos no-judiciales, es el caso de China, en lo cual la extinta Comisión de Derechos Humanos, órgano eminentemente político debido a su formación intergubernamental, no ha conseguido una actuación concreta y efectiva para analizar las vulneraciones a los derechos humanos en aquel país.

<sup>683</sup> BOBBIO, N., *A Era dos Direitos*, op. cit., pp. 40-41.

En la instancia judicial, por sus peculiaridades eminentemente técnicas, es que se puede identificar el mejor escenario para debatir el respeto a las diferencias de la humanidad. Por la instancia judicial se imponen deberes cuanto al cumplimiento de sus decisiones y se refuerza la necesidad indeclinable de respeto a los derechos humanos. Y es también por la jurisdicción que se ejerce la potestad de ejecutar la decisión, atributo que no se somete a la evaluación de cualquier otro poder o entidad.

Las experiencias internacionales con el Tribunal Internacional de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos son ejemplos asaz convincentes de la posibilidad, viabilidad y realidad en que se fija la opción por una instancia judicial supranacional de los derechos humanos.

La protección internacional de los derechos humanos no tiene otra razón que no sea ocupar el espacio de omisión o incapacidad de los Estados en garantizar el respecto a los derechos humanos. Como se ha visto en este estudio, en el capítulo sobre la estructura internacional de protección a los derechos humanos, si hay una estructura específica de protección judicial de alcance regional en parte de América, Europa y África, no se justifica que los demás individuos del mundo, no alcanzados por aquellas jurisdicciones, se vean huérfanos de un aparato de protección de igual importancia y efectividad en la garantía al respecto de los derechos humanos. La comunidad internacional sólo actúa en aquella protección cuando fallan las acciones de los Estados. Y cuando en esta falla hay una estructura atenta y disponible a superar la violación, que se convierte en derecho y deber de la Comunidad Internacional<sup>684</sup>, no hay como justificar que unos individuos puedan tener acceso a esta protección, por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y por el Tribunal Africano de Derechos Humanos, y otros no.

---

<sup>684</sup> Según palabras de PASTOR RIDRUEJO, contenidas en su artículo "El proceso de internacionalización de los derechos humanos. El fin del mito de la soberanía nacional (I): Plano Universal: La obra de Naciones Unidas", en VVAA, *Consolidación de Derechos y Garantías: Los grandes Retos de los Derechos Humanos en el siglo XXI*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, pp. 35-45.

Es evidente que no es fácil poner en práctica la concretización de la existencia de un órgano judicial internacional global/universal. Como se ha señalado en líneas atrás, entre estas dificultades se encuentra el rasgo del control social de la comunidad internacional que se basa, eminentemente, en la “influencia”, por sus formas de disuasión, desaliento y condicionamiento, al contrario del control social basado en el “poder”, como la jurisdicción, que se utiliza de la sanción, propio de los Estados, y no sintonizado con la comunidad internacional. No obstante, cabe saber cual es el grado de eficacia, es decir, cuales son las formas más eficaces y las menos eficaces en *“impedir o reducir al mínimo los comportamientos desviantes”*, con eso considerándose las tres formas de tutela de los derechos humanos, como son la promoción, el control y la garantía. Y es en la garantía, por la organización de *“una verdadera tutela jurisdiccional de carácter sustitutiva de la nacional”*, cuando esta no actúa o es ineficiente, que se puede admitir una verdadera tutela internacional<sup>685</sup>.

Importante señalar también que el derecho internacional de los derechos humanos vincula los Estados a obligaciones de respetar, proteger y realizar los derechos de aquella naturaleza previstos en los tratados y convenciones internacionales. Desde esa tipología de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos, cabe registrar que la obligación de realizar los derechos humanos implica que el Estado adopte medidas concretas a alcanzar la efectiva realización de aquellos derechos, y convirtiéndose tales obligaciones en medidas tanto en ámbito interno como internacional.

Y es con la judicialización que se asegura el primado del derecho en la búsqueda de la realización de la justicia, en la protección de los derechos humanos<sup>686</sup>. Con la institución judicial y su correspondiente tutela independiente e imparcial, es que se consigue promover condiciones de plena igualdad a las partes en el enfrentamiento de las violaciones cometidas, alcanzándose una garantía para todos, individuos demandantes y Estados demandados, alejándose de las tentaciones de la selectividad, discrecionalidad y casuismos. La judicialización, así, es

---

<sup>685</sup> BOBBIO, N. “Presente y Porvenir de los Derechos Humanos”, en VVAA, *Anuario de Derechos Humanos*, 1, Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Madrid, 1981, pp. 09-28.

<sup>686</sup> Estas afirmaciones son presentadas por CANÇADO TRINDADE, A. A., *Tratado....*, op. cit., p. 93.

la que mejor atiende a los propósitos humanitarios de los mecanismos de salvaguardia internacional de los derechos humanos, y se constituye en una garantía adicional cuando los mecanismos del derecho interno ya no son suficientes.

### **3 – CONTENIDO JURÍDICO DE LAS NORMAS DE DERECHOS HUMANOS**

Aspecto muy importante a considerar cuanto a la oportunidad, o mismo, necesidad de un órgano judicial internacional global de protección a los derechos humanos es identificar la naturaleza de las normas de esta categoría de derechos, si normas jurídicas o no, pues si así consideradas se refuerzan las justificaciones a un correspondiente órgano de idéntica naturaleza.

No es que el no reconocimiento de aquella naturaleza jurídica impida la necesidad de creación de una instancia jurisdiccional global, pero refuerza, le da un grande amparo técnico.

Y este tema, por su importancia, es objeto de discusión por la comunidad jurídica internacional, aunque no despierte la intensidad y relevancia que el propio tema contiene.

En primer lugar hay que hacer una distinción del alcance jurídico entre las normas de derechos humanos convencionales y las extra-convencionales. En relación a aquellas, por expresaren la voluntad del Estado en reconocer un abanico de situaciones que deban someterse a un grado específico de protección internacional, con sus mecanismos de cumplimiento, imponen obligaciones en el marco del derecho internacional y son invariablemente identificadas como disposiciones a guardaren naturaleza jurídica entre los Estados-parte, incluso, en general, incluyéndose en los ordenamientos internos.

A su vez, las normas extra-convencionales, que son consecuencia del propio sistema de la Organización de las Naciones Unidas, y del compromiso de los Estados-miembros en someterse a sus principios y reglas, en cuanto a éstas no hay firmado un consenso en la comunidad internacional y en el pensamiento de los

juristas en admitirlas como normas de contenido jurídico, no obstante admitir formaren un marco jurídico internacional en materia de derechos humanos, estableciendo principios y estándares de conducta que los gobiernos deben observar, y en eso convirtiéndose en fuentes consuetudinarias de derecho internacional.

La definición de la naturaleza de las normas de derechos humanos en el contexto de las Naciones Unidas, fruto de la “*cristalización del consenso de los Estados a favor del carácter jurídico, y por consiguiente obligatorio, de tales normas*”<sup>687</sup>, es una cuestión que ha pasado por un proceso de evolución. En los primeros años de vigencia de la Carta de San Francisco se debatía con más intensidad sobre las obligaciones jurídicas que ella imponía, principalmente en razón de su artículo 56, entendiendo algunos Estados que el único compromiso que asumían era el de la cooperación internacional. Pero, con el pasar del tiempo, ha prevalecido el entendimiento de que dichas normas disponían de contenido jurídico, imponiendo obligaciones a los Estados tanto en el plano internacional como en la necesidad de que se adopten medidas en el plano interno<sup>688</sup>, pasando en este caso a incorporarse a los sistemas jurídicos nacionales como principios o reglas mínimas del derecho interno.

Y la principal expresión de este reglamento normativo de la ONU es la Declaración Universal de los Derechos Humanos-DUDH, primer instrumento mundial de la historia de la humanidad a reunir los principios que consagran los derechos humanos, fundamentado en la dignidad e igualdad del ser humano, cualquier que sea su condición, y con eso abarcando las situaciones ya conocidas como violaciones de la dignidad humana, como todas las que vengan a surgir. Con cuanto sea indiscutible su contenido moral, pues firmó un compromiso de un ideal común al cual las naciones deberían se esforzar, su naturaleza jurídica es aún hoy de reconocimiento vacilante<sup>689</sup>, mismo cuando se tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos como instrumento de confirmación y que detalló los principios universales

<sup>687</sup> VILLÁN DURAN, C. *Curso ...*, op. cit. p. 124.

<sup>688</sup> PASTOR RIDRUEJO, J. A., *Curso de Derecho Internacional ...*, op. cit., p. 201.

<sup>689</sup> Vacilante también es su valor político, pues la DUDH fue aprobada por sólo 48 Estados-miembros, en un tiempo en que la ONU era compuesta por tan sólo 58 países, aunque no se conozca ninguna manifestación formal en contra los principios y objetivos de la DUDH. Fueron 48 votos a favor, 8 abstenciones, ningún voto en contra y 02 ausencias.



de derechos humanos ya consagrados en la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de San Francisco de 1945, y aunque se tenga la DUDH como inspirador de los tratados de derechos humanos que componen el acervo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Históricamente, un momento muy destacado al reconocimiento del valor jurídico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha observado con la *“Proclamación de Teherán”*, de 1968, en la Primera Conferencia Mundial de Derechos Humanos, ocasión en que se firmó el carácter vinculante de la DUDH, y desde ahí se pudiendo admitir su naturaleza jurídica, expresando en aquella oportunidad su alcance obligatorio para la comunidad internacional: *“2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos enuncia una concepción común a todos los pueblos de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana y la declara obligatoria para la comunidad internacional”*.

A su vez, en la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos, de 1993, se aprobó la Declaración de Viena, en la cual no hubo una manifestación de igual intensidad cuanto a la fuerza obligatoria y el valor jurídico de la DUDH, reportándose a ella como una *“fuente de inspiración”* para fijar las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

En este sentido, BOBBIO incluso ha afirmado que la Declaración Universal de Derechos Humanos *“proclama los principios de los que se hace pregonera, no como normas jurídicas, sino como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”*, aunque ella ha representado el momento inicial de la fase final del proceso de positivación universal de los derechos humanos<sup>690</sup>.

No obstante, y como bien acentúa VILLAN DURÁN, *“la propia Corte Internacional de Justicia confirmó el carácter jurídico y obligatorio de la DUDH al considerar en su fallo de 24 de mayo de 1980 relativo al personal diplomático y*

---

<sup>690</sup> En *“Presente y Porvenir de los Derechos Humanos”*, uno de los artículos publicados en VVAA, *Anuario de Derechos Humanos*, 1, Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Madrid, 1981, pp. 09-28.

*consular de los Estados Unidos en Teherán, que el hecho de mantener ilegalmente privados de su libertad a seres humanos y someterlos a presiones físicas, es incompatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como los principios fundamentales enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos*<sup>691</sup>.

Y según el mismo autor, también la Asamblea General afirmó *“la validez permanente de los principios y normas enunciados en los principales instrumentos relativos a la protección internacional de los derechos humanos, particularmente la Declaración Universal de Derechos Humanos*<sup>692</sup>.

Sobre este tema del valor jurídico de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, VILLÁN DURÁN concluye que *“en definitiva, la Declaración tiene un valor jurídico innegable ad intra, que la práctica ha convertido en obligatoria en el actuar de los órganos legislativos y de ejecución del sistema*<sup>693</sup>.

En esta dimensión *“ad intra”* no cabe olvidar que es en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se firman los parámetros para analizar la perspectiva de realización de los derechos humanos en cada país. Incluso, es importante registrar que los propios tratados de derechos humanos encuentran en la DUDH su referencia a concebir validez y alcance jurídico a sus disposiciones, siendo caso bastante expresivo de esta importancia referencial de la DUDH el contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño, por sus Preámbulos, destacándose que dicha Convención ha sido ratificada por todos los países integrantes de la ONU, hecho a demostrar la disposición de los Estados en admitir la fuerza normativa de la DUDH.

---

<sup>691</sup> VILLÁN DURÁN, C., “La Declaración Universal de Derechos Humanos en la Práctica de las Naciones Unidas”, en VVAA, *La Protección Internacional de los Derechos Humanos a los cincuenta años de la Declaración Universal*, BLANC ALTEMIR, A. (e.), Tecnos, Madrid, 2001, p. 58.

<sup>692</sup> ib. idem

<sup>693</sup> Idem, p. 59.

No se puede negar, como ha afirmado GERMÁN J. BIDART CAMPOS<sup>694</sup>, que el orden jurídico internacional se encuentra hoy encabezado por los derechos humanos, al punto de, en el seno de las Naciones Unidas no se puede admitir cualquier celebración de tratado, pacto o convención que contraríen la Carta de Naciones Unidas, siendo que de ésta hace parte integrante los derechos humanos contemplados por la Declaración Universal.

Este mismo autor, al discurrir sobre *“La internacionalización de los derechos humanos y su relación con el derecho constitucional”*, y tratar de la *“disputa en torno de la juridicidad y obligatoriedad de la Declaración de las Naciones Unidas”*, ha afirmado que *“La proclamación de Teherán del año 1968 viene a clausurar la discusión doctrinaria, porque declara obligatoria para la comunidad internacional la citada Declaración Universal de Derechos Humanos. De tal modo, esa comunidad internacional integrada por todos los Estados que son miembros de la ONU queda vinculada por tal declaración, que en conjunto con los pactos universales y regionales sobre derechos del hombre compone lo que la doctrina bien puede hoy considerar como principios generales del derecho internacional y hasta como ius cogens. Es decir, los derechos humanos en el seno de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional operan con fuerza de orden público internacional”*<sup>695</sup>.

Así, si en un primer momento la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía una naturaleza vinculante, ha evolucionado hoy hasta considerarse como un instrumento de obligaciones de los Estados miembros de la ONU<sup>696</sup>.

Importante notar cuanto a este aspecto, *“que ningún Estado se opuso entonces a la Declaración y, desde entonces, ningún Estado la ha impugnado, a pesar de la incorporación a la sociedad internacional de numerosos Estados surgidos de la descolonización y que no participaron en la configuración del orden*

---

<sup>694</sup> BIDART CAMPOS, G. J., *La Interpretación del Sistema de Derechos Humanos*, EDIAR, Buenos Aires, 1994. p. 170.

<sup>695</sup> BIDART CAMPOS, G. J., *Teoría General de los Derechos Humanos*, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1991, p. 422-3.

<sup>696</sup> Martín, C.; Rodríguez-Pinzón, D.; Guevara B., J. A., VVAA, *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, Universidad Iberoamericana, Fontamara, México, 2004, p. 10.

*internacional instaurado en la Carta de San Francisco. Por el contrario, muchos la han incorporado a sus ordenamientos jurídicos internos pudiendo ser invocada plenamente ante sus Tribunales. Este es el caso de España que no habiendo participado en el proceso de aprobación de la Resolución 217 (III) de la Asamblea General de la ONU, por no ser Parte de esta Organización Internacional en aquellos años, hoy, la ha incorporado a su ordenamiento con valor constitucional”, conforme señala FERNÁNDEZ SANCHES<sup>697</sup>.*

En refuerzo a la caracterización del contenido jurídico de las normas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y de su conversión de mera “fuente de inspiración” en “fuente de derecho”<sup>698</sup>, JEAN-BERNARD MARIE entendió que “el suceso decisivo que intervino en la definición y el reconocimiento de las normas de los derechos del hombre a nivel internacional ha sido sin duda la adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La misma constituye un documento fundamental no solamente para la sociedad internacional contemporánea sino para el futuro de toda la humanidad. La fuerza de la Declaración Universal, esencialmente moral en su origen, ha adquirido un carácter jurídico innegable como consecuencia de las numerosas referencias de las que ella ha sido objeto, tanto por los órganos de Naciones Unidas como por los Estados-miembros, muchos de los cuales han incluido sus disposiciones dentro del texto de sus respectivas constituciones”<sup>699</sup>.

A su vez, BLANC ALTEMIR afirma que “la Carta y la Declaración Universal son expresiones jurídicas positivas y jurídicamente obligatorias”<sup>700</sup>.

Al hablar sobre la “vocación prospectiva de la Declaración de 1789 y de la Declaración Universal de 1948”, JOSE MANUEL BANDRÉS señala la fuerza y validez

<sup>697</sup> FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P. A., “Presentación”, en VVAA, *La Desprotección Internacional de los Derechos Humanos (a la luz del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)*, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, p. 11/12.

<sup>698</sup> Expresiones utilizadas por KLAUS VASAK, y apuntadas por PEDRO NIKKEN, *La Protección Internacional ...*, op. cit., p. 267-268.

<sup>699</sup> MARIE, J.-B., “Los Mecanismos de Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, en VVAA, *La Protección Universal y Regional de los DDHH*, op. cit., p. 88.

<sup>700</sup> BLANC ALTEMIR, A., “Universalidad, Indivisibilidad e Interdependencia de los Derechos Humanos a los Cincuenta años de la Declaración Universal”, en VVAA, *La Protección Internacional de los Derechos Humanos a los Cincuenta años de la Declaración Universal*, Tecnos, Madrid, 2001, p. 17.

de aquellos instrumentos para orientar las coordenadas de futuro de la sociedad “*con el objetivo de afrontar y superar el desafío de su aplicación práctica*”<sup>701</sup>.

Por estas consideraciones, destacadas en citas de renombrados juristas internacionales, es importante realzar la pertinencia en hablar de una instancia judicial universal, o más directamente, de un “Tribunal Internacional de Derechos Humanos”, en virtud del contenido jurídico de las normas de derechos humanos, principalmente basadas en su Declaración Universal, y que, por eso, no se limitan a traducir una simple recomendación sin valoración jurídica efectiva o una mera indicación moral, sino que son normas obligatorias<sup>702</sup>, resultado de la “*conciencia jurídica de la humanidad, representada en la ONU y, como tal, fuente de un derecho superior, higher law, cuyos principios no pueden desconocer sus miembros*”, conforme advierte TRUYOL Y SERRA<sup>703</sup>. Por ello, hay que reconocer que desde 1948 hasta hoy la Declaración Universal ha ido mucho más allá<sup>704</sup>.

Y no es solo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que guarda esta naturaleza como norma jurídica. En el escenario regional, la Declaración Americana de 1948 ha sido reconocida como de carácter obligatorio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con base en la Carta de la OEA<sup>705</sup>. Como ha resaltado la Profa. LORETTA ORTIZ AHLF, de la Universidad Iberoamericana de la ciudad de México, “*el valor y fuerza jurídica de dichas Declaraciones está determinado por la Carta de la ONU o de la OEA*”<sup>706</sup>.

De todo modo, aunque no se reconozca directamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos fuerza jurídica suficiente a justificar ser la base

---

<sup>701</sup> VVAA, *La Protección Internacional de los Derechos Humanos a los Cincuenta Años de la Declaración Universal*, op. cit., p. 48.

<sup>702</sup> Sobre el tema del valor jurídico de las normas de derechos humanos, ver NIKKEN, P., *La Protección*,..., op. cit., pp. 261-284; VILLÁN DURÁN, C., *Curso* ..., op. cit. pp. 221-234.

<sup>703</sup> Según señala ANTONIO PÉREZ VOITURIEZ, en *XXI Jornadas de Estudios-Abogacía General del Estado*, p. 116.

<sup>704</sup> FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P. A., “Presentación”, en VVAA, *La Desprotección Internacional de los Derechos Humanos (a la luz del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)*, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, p. 11.

<sup>705</sup> Conforme señala LORETTA ORTIZ AHLF, op. cit., p. 27, apuntando que este reconocimiento ha ocurrido en el juzgamiento del Caso 2141, Informe Anual no. 23/81, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

<sup>706</sup> *Ibidem*, p. 44.

para la existencia de un órgano jurisdiccional internacional global, aún así en el seno de la comunidad internacional hay suficientes instrumentos legales a viabilizar la justificación de aquel órgano. De ellos se puede mencionar el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que confirió “*concreción jurídica*” y estableció “*obligaciones jurídicas*” a los principios proclamados por la Declaración Universal<sup>707</sup>.

Bajo este aspecto, otra importante razón a ser considerada como cauce jurídico a la creación de un órgano judicial internacional global es la característica jurídica de las normas internacionales de derechos humanos como “*ius cogens*”, así reconocidas por su aceptación por la comunidad internacional cuanto a determinados valores jurídicos esenciales, y que por eso se convierten en valores intangibles o irreductibles, y que solo se pueden modificar por una norma ulterior de Derecho Internacional general del mismo carácter, consonante asegura el artículo 53, del Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados. Son normas imperativas – *jus cogens* –, de observancia obligatoria por los Estados – *erga omnes* –, independientemente de su aceptación o consentimiento, de haber manifestado expresa conformidad con ella.

FERNANDO MARIÑO acentúa que las normas *ius cogens* son de “*autoridad reforzada*” y que se distinguen de todas las demás, “*simplemente obligatorias o dispositivas*”<sup>708</sup>. Y “*Existe, por lo demás, una estrecha relación entre normas generales imperativas y normas que imponen obligaciones de cumplimiento universalmente exigible. Tanto es así que podríamos decir que todas las normas de la primera categoría pertenecen a la segunda*”<sup>709</sup>.

CARRILLO SALCEDO, haciendo una breve aportación al tema del proceso de internacionalización de los derechos humanos, afirma que sus normas de protección, en cuanto garantía de la integridad moral y física de toda persona, son parte

---

<sup>707</sup> SALADO OSUNA, A., “La Protección Internacional de los Derechos Humanos”, VVAA, *Diccionario Crítico de los Derechos Humanos*, Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, 2000, pp. 210-221.

<sup>708</sup> MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando M., *Derecho Internacional Público (parte general)*, 3ª ed., Madrid, Trota, 1999, p. 70.

<sup>709</sup> Idem, p. 74.

integrante del orden jurídico internacional<sup>710</sup> y que “*en Derecho internacional general contemporáneo todos los Estados tienen la obligación jurídica, ‘omnium’ y ‘erga omnes’, de respetar los derechos fundamentales de toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción*”<sup>711</sup>.

Es oportuno acentuar, como destaca CANÇADO TRINDADE, que en los tiempos actuales el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye un ordenamiento jurídico marcado por la “*gradual erosión de la reciprocidad*” y por “*la emergencia pari passu de consideraciones superiores de orden público, reflejadas en las concepciones de las normas imperativas del derecho internacional general (el jus cogens) – en cuyo dominio hoy se sitúa el principio básico del non-refoulement, - de los derechos fundamentales inderogables, de las obligaciones erga omnes de protección (debidas a la comunidad internacional como un todo). La consagración de estas obligaciones representa la superación de un patrón de conducta erigido sobre la pretensa autonomía de la voluntad del Estado, del cual el propio derecho internacional buscó gradualmente liberarse al consagrar el concepto de jus cogens*”<sup>712</sup>.

Para LORETTA AHLF, aunque ni todas las normas internacionales de derechos humanos puedan ser consideradas normas *ius cogens*, “*por lo menos, de aquellas que de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana y la Europea nunca pueden suspenderse, ni en casos de excepción. Dichas normas engendran obligaciones erga omnes que los constituyen en los incipientes cimientos de un orden constitucional internacional basado en la absoluta primacía de ciertas normas y valores fundamentales, cuyo origen puede derivar de una norma consuetudinaria o convencional*”<sup>713</sup>.

---

<sup>710</sup> Prólogo del *Curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, VILLAN DURAN, C, op. cit. p. 23.

<sup>711</sup> Ídem, p. 22.

<sup>712</sup> CANÇADO TRINDADE, A. A., “Reflexiones sobre el Desarraigo como Problema de Derechos Humanos frente a la Conciencia Jurídica Internacional”, en CANÇADO TRINDADE, A. A., RUIZ DE SANTIAGO, J., *La Nueva Dimensión de las Necesidades de Protección...*, op. cit., pp. 63/6.

<sup>713</sup> LORETTA AHLF, Ortiz, “Fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, en VVAA, *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, Universidad Iberoamericana:Fontamara, México, 2004, p. 40.

En este tema de normas de derechos humanos a constituyeren normas *ius cogens* caracterizadas por normas inderogables y indestructibles, a formaren un núcleo duro, ANTONIO BLANC ALTEMIR advierte que esta perspectiva es compatible con la indivisibilidad de aquellos derechos, sin que resulte en una jerarquía entre aquellas y las demás, que también, en razón de la indivisibilidad exigen igual nivel de atención y urgencia, siendo aquella distinción un “*plus de fundamentabilidad*” derivado del carácter supra-positivo, meta-jurídico e incluso pre-jurídico, pero sin resultar en la distinción de las demás categorías de derechos<sup>714</sup>.

No se puede olvidar la relevancia de que la costumbre internacional refleja en el propio reconocimiento de ser fuente de derecho, como expresamente consta en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en su artículo 38.1.

Los valores jurídicos esenciales, derivados de la norma consuetudinaria o convencional, constituyen, así, un núcleo duro, o estándar mínimo, como apuntado páginas atrás, y que se encuentran asociados a la dignidad humana, pudiéndose definirlos como el derecho a la vida, a la prohibición de la tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes, a la prohibición de la esclavitud o servidumbre, y el derecho a las garantías jurídicas y procesales mínimas e indispensables, estos, incluso, reconocidos como no susceptibles de suspensión o derogación por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, por la Convención Americana de Derechos Humanos y por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y exactamente por integraren el núcleo duro de los derechos humanos, se identifican como expresión jurídica de una convicción jurídica universal<sup>715</sup>.

Tal es la importancia de las normas internacionales de derechos humanos, y la importancia jurídica de su contenido, que ni mismo se ha admitido manifestar reserva a los tratados de derechos humanos, habiendo los órganos internacionales

---

<sup>714</sup> BLANC ALTEMIR, A., “Universalidad, Indivisibilidad e Interdependencia de los Derechos Humanos a los Cincuenta años de la Declaración Universal”, en VVAA, *La Protección Internacional de los Derechos Humanos a los Cincuenta años de la Declaración Universal*, Tecnos, Madrid, 2001, p. 33.

<sup>715</sup> En palabras de CARRILLO SALCEDO, cf. BLANC ALTEMIR, A., “Universalidad, Indivisibilidad e Interdependencia de los Derechos Humanos a los Cincuenta años de la Declaración Universal”, en VVAA, *La Protección Internacional de los Derechos Humanos a los Cincuenta años de la Declaración Universal*, Tecnos, Madrid, 2001, p. 29.



considerado ilícito aquel intento. Véase, a propósito, que el Comité de Derechos Humanos, en su Observación 24, ha afirmado que *“dado que el objeto y fin del Primer Protocolo Facultativo es el de permitir que el Comité compruebe si el Estado respeta los derechos por los que se ha comprometido velar, toda reserva que trate de impedir esto sería contraria al objeto y fin del Primer Protocolo Facultativo, cuando no del Pacto”*<sup>716</sup>.

Incluso, ha ocurrido un hecho muy expresivo cuanto a los límites de reserva de los tratados de derechos humanos, y que se verificó en 1997, cuando Corea del Norte manifestó al Comité de Derechos Humanos su deseo de denunciar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ocasión en que el Comité afirmó que en el seno del Pacto no está permitida la denuncia del mismo<sup>717</sup>.

Por las razones expuestas, la consecuencia que se debe reconocer en cuanto a la naturaleza jurídica de dichas normas es que su incumplimiento no puede estar sometido sólo al juicio técnico-político de las organizaciones internacionales, sino que debe encontrarse bajo el manto de la protección también jurisdiccional, ejercida por una institución judicial internacional específica, con independencia y autonomía en sus labores, con la fuerza vinculativa y obligatoria de cumplimiento de sus decisiones, y a imponer consecuencias por la inercia estatal de su observancia.

#### **4 – NATURALEZA SUPRA-ESTATAL DE LAS NORMAS DE DERECHOS HUMANOS**

Un abordaje para reforzar la necesidad de no limitar la tutela de las normas de derechos humanos con exclusividad al derecho interno o nacional, es el reconocimiento de su naturaleza supra-estatal, y de ahí pudiendo justificar, también, un tratamiento de idéntica dimensión. Quiere decir eso que los derechos asegurados a la persona, en consecuencia de la propia condición humana que le califica, son derechos independientes de su vínculo como ciudadano de éste o aquel país, siendo

---

<sup>716</sup> Texto en ORTIZ AHLF, L., op. cit., p. 33

<sup>717</sup> CF. LORETTA ORTIZ AHLF, en VVAA, *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, FONTAMARA, México, 2004, p. 37.

una condición que lo persigue como individuo del mundo, incluso para asegurar la satisfacción de los derechos humanos “*contra o sin sus Estados*”, como ha afirmado LUIGI FERRAJOLI<sup>718</sup>, al referirse a la formulación de DWORKIN de tomar los derechos en serio.

No se puede dejar de reconocer en el ambiente jurídico interno de cada país el cuanto es difícil aceptar la supremacía del derecho supranacional de los derechos humanos, incluso sobre el derecho constitucional.

De todo modo, esta dimensión supra-estatal sobrepasa las limitaciones y restricciones propias de la tradición del Derecho Internacional, evolucionando del principio de que se debe el necesario reconocimiento y respeto a cada Nación aisladamente considerada, y de cuya primacía soberana no se distingue o se define, bajo el punto de vista jurídico, un grado de importancia entre cada Estado, para el dinamismo en el reconocimiento de los derechos humanos, y cuyo respeto se impone igualmente en contra de los intereses del Estado. Como ha afirmado el profesor PECES-BARBA, al hablar de la profundización del proceso de internacionalización de los derechos humanos, “*es evidente que esa dimensión y la superación de las soberanías nacionales es una exigencia ineludible*”<sup>719</sup>.

En este “fenómeno evolutivo” de la percepción supra-estatal o global de los derechos humanos se produce “*un cambio en la posición constitucional de la soberanía estatal ante el orden internacional, que hoy comienza a registrar jurídicamente el deber de solidaridad entre todos los Estados a fin de garantizar la protección universal y efectiva de los derechos humanos, en los términos del art. 56 de la Carta de las Naciones Unidas*”, como afirmó CARRILLO SALCEDO, y por la cual se van formando, en palabras del profesor, “*las dimensiones constitucionales del Derecho internacional contemporáneo*”<sup>720</sup>.

---

<sup>718</sup> FERRAJOLI, L., *Derechos y garantías – La ley del más débil*, op. cit., p. 31.

<sup>719</sup> PECES-BARBA, G., “Pasado y futuro de los derechos humanos”, en *Consolidación de Derechos y Garantías: Los grandes retos de los Derechos Humanos en el siglo XXI (Seminario Conmemorativo del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)*, op. cit., p. 386.

<sup>720</sup> Apuntes que constan del “prólogo” al *Curso de Derecho Internacional de Derechos Humanos*, de CARLOS VILLÁN DURÁN, op. cit., pp. 22-23.

Y, continuando con sus consideraciones sobre la dimensión supra-estatal de los derechos humanos, CARRILLO SALCEDO añade que *“La soberanía de los Estados sigue siendo un principio constitucional del Derecho internacional, y no ha sido desplazada de esta posición ni por el fenómeno de Organización internacional ni por el reconocimiento de la dignidad de la persona, símbolo de las transformaciones del orden internacional que habitualmente denominamos proceso de institucionalización y proceso de humanización del Derecho Internacional. Pero, ha quedado erosionada y relativizada por el desarrollo normativo que ha seguido a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, ya que en Derecho internacional general contemporáneo todos los Estados tienen la obligación jurídica, ‘omnium’ y ‘erga omnes’, de respetar los derechos fundamentales de toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción.[ ] Por consiguiente, si el trato que un Estado diera a sus nacionales era en el Derecho internacional tradicional una cuestión de jurisdicción interna (ya que el Derecho internacional no regía esta cuestión y se limitaba a regular la posición jurídica de los extranjeros), en el Derecho internacional contemporáneo ocurre lo contrario como consecuencia del desarrollo progresivo que el orden internacional ha experimentado en materia de reconocimiento y protección internacional de los derechos humanos”*<sup>721</sup>.

Como bien delimita la doctrina internacionalista<sup>722</sup>, los instrumentos normativos internacionales basados en los derechos humanos no se encuadran en la dimensión contractualista de los demás instrumentos internacionales sin aquella naturaleza. En éstos, se busca el establecimiento de un consenso de reciprocidad de derechos y deberes, con beneficios mutuos para los contratantes, en que se sopesan las ventajas y desventajas de cada Estado, en vista de la satisfacción de intereses propios y específicos de cada nación. A su vez, en aquellos se persigue un fin distinto, de un orden público internacional común, en busca de la consecución de un interés general a todos los pueblos, con los Estados asumiendo obligaciones con relación a cualquier individuo, sea su ciudadano o no.

---

<sup>721</sup> Ídem, p. 22.

<sup>722</sup> Véase por ejemplo CARRILLO SALCEDO, J. A., *Soberanía de los Estados y Derechos Humanos en Derecho Internacional Contemporáneo*, 2ª edición, Tecnos, Madrid, 2001.

Además de eso, en tiempos actuales el Estado ya no es más un fin en si mismo o un ideal supremo sometido sólo a su propia voluntad, sino un medio para realizar las aspiraciones y necesidades vitales de las personas. Esta emancipación del individuo con relación a la tutela absoluta del Estado bien revela la necesidad de proteger el ser humano contra la lesión de sus derechos provocada por el propio Estado<sup>723</sup>, resultando reforzada la característica de la dimensión supraestatal de las normas de derechos humanos.

Es importante señalar que si hace poco más de 20 años atrás la perspectiva de los derechos humanos sólo se podría concebir en la óptica occidental y capitalista, hoy son muchas las demostraciones de los avances que los derechos humanos han conquistado en el mundo oriental y de ideología socialista. PABLO ANTÓNIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ ha destacado que *“por ejemplo, no es hasta 1988 cuando, por primera vez, un país socialista, Hungría, ratificó el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es decir, que por primera vez, un país socialista admitía, jurídicamente, el protagonismo individual en el plano internacional. Polonia, por su parte, legalizó el sindicato Solidaridad y con ello el derecho inalienable de la libertad sindical. Por otro lado, la antigua Unión Soviética supo proyectar en esos años dos palabras rusas al mundo occidental: perestroika y glasnot y no sólo porque fracasó su modelo económico sino porque también se les estaba exigiendo la materialización de los derechos humanos y libertades fundamentales. Recordemos las manifestaciones nacionalistas de Georgia, Armenia, Lituania, que nada tenían que ver con la economía y mucho con los derechos humanos que eran lo que reclamaban”*<sup>724</sup>.

Estos puntos de justificación de la naturaleza especial de las normas de derechos humanos, con su dimensión global, sin fronteras, y que se ha convenido en identificar como la naturaleza “supra-estatal” o “supranacional” de los derechos humanos, no presenta otra razón que la de demostrar que la correspondiente tutela,

---

<sup>723</sup> CANÇADO TRINDADE, A. A., *Tratado .....*, op. cit., pp. 453-454.

<sup>724</sup> FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P. A., “Presentación”, en VVAA, *La Desprotección Internacional de los Derechos Humanos (a la luz del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)*, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, pp. 12-3.

cualquiera que sea su mecanismo, también se debe producir ampliamente en aquel contexto de dimensión global.

Incluso, no se puede dejar de admitir que las normas constitucionales “*sólo pueden interpretarse en el futuro en el sentido compatible con el texto de la Convención*”<sup>725</sup>, conforme ha afirmado RAUL ZAFARONI, refiriéndose a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y esto no significa ninguna sumisión de la soberanía estatal a los tratados internacionales pues la adopción de un instrumento internacional por el Estado es, también, reflejo de un auténtico acto y expresión de soberanía. Pero, una vez manifestada la voluntad estatal, fírmase en este momento “*un hecho histórico sobre el cual ya no es posible volver*”<sup>726</sup>, hasta porque es en el seno de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados que se definió, por su artículo 27, que “*una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.*”

La suscripción de un Tratado resulta en la expresión del principio de buena fe y por lo cual se firma el impedimento de oponer una supuesta violación del derecho interno, aún que de naturaleza constitucional.

Es ejemplo de relevancia de la supranacionalidad de las normas de derechos humanos la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Argentina, al sostener la obligatoriedad de las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al derecho interno. A su vez, por la Opinión Consultiva 13, la Corte Interamericana ha afirmado que la Comisión Interamericana tiene competencia para calificar como violatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos cualquier norma interna que no se ajuste a las obligaciones asumidas al ratificarla.

Haciendo una referencia del derecho internacional de los derechos humanos con el orden jurídico interno, el profesor AGUSTÍN GORDILLO ha destacado que “*todo el derecho interno está sometido a un derecho supranacional en materia de*

---

<sup>725</sup> ZAFARONI, R., *La Convención Americana sobre Derechos Humanos e el sistema penal*, Revista de Derecho Público, FDA, n° 2, Buenos Aires, 1997, p. 61.

<sup>726</sup> *Ibidem*.

*derechos humanos y libertades públicas. Por tales razones los derechos individuales preexisten a todo acto estatal: a la Constitución, a las sentencias, a las leyes y a los actos y reglamentos administrativos. Las leyes pueden regular los derechos de los individuos, fijando sus alcances y límites; pero aunque ninguna ley sea dictada, el derecho individual existe no obstante, por imperio de la Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás pactos internacionales de derechos humanos previstos en el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución*<sup>727</sup>.

## **5 – DIMENSIÓN SUBJETIVA - INDIVIDUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LAS VULNERACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS**

Es por la actuación judicial que se puede alcanzar con más eficacia la individualización del tratamiento de los casos de violaciones normativas. Y esta individualización se traduce en una iniciativa más apropiada, adecuada y eficiente para dicha protección, por reflejar la violación concretamente sufrida y retratar la dimensión del cumplimiento a los derechos humanos en cada país, aisladamente considerados. Por ello, cabe señalar que la práctica del régimen actual de protección a los derechos humanos se realiza, comúnmente, por el tratamiento generalizado de las mencionadas violaciones. Confirma esta observación el hecho de que las “denuncias particulares” no son previstas en todos los Convenios, y de que el sistema de Relatores Especiales – Resoluciones 1235 y 1503, de las Naciones Unidas - se caracteriza por su labor en los “*cuadros persistentes*” de violaciones, el que lleva a su tratamiento conjunto y generalizado, salvo en situaciones excepcionales amparadas por las “*acciones urgentes*”<sup>728</sup>.

A propósito, en el plan internacional global, el modo generalizado de tratar las violaciones a los derechos humanos, sin la individualización del caso y la correspondiente individualización del Estado violador, aminora su responsabilidad y reduce su mala imagen delante de la comunidad internacional, en la medida en que puede valerse del argumento de que no se encuentra sólo en tales reproches.

---

<sup>727</sup> GORDILLO, A., “La creciente internacionalización del derecho”, en *Derechos Humanos*, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 4ª. e. 1999, p.II-5.

<sup>728</sup> Sobre el tema ver la Primera Parte de esta tesis en el ítem b.2.1.1.3.

Además de eso, el tratamiento, por regla, generalizado de las violaciones a los derechos humanos puede llevar a la falsa idea de que, no habiéndose identificado “casos persistentes”, se pueden tolerar las violaciones, situación por sí misma incompatible con las razones que justifican el reconocimiento a esta categoría de derechos cualificada como “derechos humanos”, y cuya primera percepción es la de entender a la persona como individuo, y como tal debiéndolo tutelar. No siendo de esta manera, la subjetividad del término “persistente” y de la correspondiente imprecisión de las situaciones que se pueden caracterizar en aquel contexto, llevan a reconocer la fragilidad de la eficacia de esta protección internacional, más inclinada por el tratamiento colectivo, aunque no se pueda dejar de reconocer los relevantes pasos ya conquistados y los resultados favorables que ya se han alcanzado.

La individualización de la tutela a los derechos humanos es, así, una etapa indispensable en la conquista de un mayor grado de satisfacción de aquellos derechos, incluso bajo el punto de vista de la universalidad e indivisibilidad, en esto considerándose la natural selectividad que resulta de las protecciones colectivas, basadas en cuestiones temáticas y geográficas, y que, en consecuencia, son excluyentes de las situaciones no encuadradas en aquella misma selectividad.

Y, en este escenario, como ha afirmado la profesora NATIVIDAD FERNÁNDEZ SOLA, es por la justicia internacional que se puede conseguir “*hacer efectivas las normas jurídicas internacionales y restituir en sus derechos subjetivos a los sujetos internacionales lesionados por las infracciones a tales preceptos.(...) Se trata, por tanto, de hacer efectivo los derechos fundamentales de la persona humana*”<sup>729</sup>.

## **6 – DIMENSIÓN OBJETIVA DE LA TUTELA DE DERECHOS HUMANOS – RESTITUCIÓN, INDEMNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN**

Otra cuestión que justifica también la existencia de una instancia jurisdiccional global es la referente a la dimensión objetiva, o de contenido, de la tutela de los

---

<sup>729</sup> FERNÁNDEZ SOLA, N., “Dos modelos de justicia internacional: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional”, en VVAA, *Hacia una Justicia Internacional- XXI Jornada de Estudio*, Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, Civitas, Madrid, 2000, p. 181.

derechos humanos, y que debe proyectarse para alcanzar eficazmente tres resultados distintos: evitar la vulneración a dichos derechos; hacer cesar la vulneración ya iniciada o consumada; y garantizar la reparación o indemnización de la violación sufrida.

Los dos primeros resultados apuntados se pueden alcanzar con algún éxito en el marco de la protección no-judicial, pero ésta, por se encontrar con las limitaciones propias de los principios que rigen el entorno diplomático de las buenas relaciones entre los Estados, no presenta elementos suficientes que garanticen la restitución, indemnización y rehabilitación de la violación sufrida, y que sólo es posible alcanzar junto a las instancias judiciales.

Es importante señalar que el derecho a la restitución, indemnización y rehabilitación de la víctima se incluye en el cumplimiento de los principios de derechos humanos internacionalmente proclamados e, inclusive, era parte integrante de la pauta de objetivos a ser alcanzados por la extinta Comisión de Derechos Humanos<sup>730</sup>, conforme se ha definido en el proyecto de “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones de normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”<sup>731</sup>. Trátase también de una obligación proclamada en la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos, por la Declaración y Programa de Acción de Viena, conforme su artículo 27, en el sentido de que “*cada Estado debe prever un marco de recursos eficaces para reparar las infracciones o violaciones de los derechos humanos*”.

Sobre el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sistemáticamente enfatizado el deber triple de los Estados de prevenir, investigar y punir las violaciones de los derechos protegidos, así como reparar los daños e indemnizar las violaciones<sup>732</sup>.

---

<sup>730</sup> Conforme Resolución de la CDH 2003/34, 57ª sesión, el 23 de abril de 2003.

<sup>731</sup> Conforme Documentos E/CN.4/2000/62 y E/CN.4/2002/70

<sup>732</sup> CANÇADO TRINDADE, A. A., *Tratado ...*, op. cit., pp. 67-68.



Con la adopción de tales medidas es que se puede garantizar la eficacia de la protección de los derechos humanos, ya que el reconocimiento de la vulneración a dichos derechos en situaciones en las cuales no se pueda restablecer el “status quo”, y sin que exista la correspondiente compensación por el daño sufrido, resulta una declaración al vacío o ineficaz. Y no se puede olvidar que una medida sancionadora proporcional a la violación, más allá de representar la materialización del reproche internacional por el reconocimiento de la responsabilidad del Estado violador, puede resultar en efecto muy eficiente en lo que se refiere a la repercusión de desestímulo a que se inicien, prosigan o se repitan tales prácticas violadoras.

A propósito de la viabilidad de esta medida en un contexto internacional, y que impone obligaciones al Estado violador, la experiencia emanada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 41 de la Convención Europea de Derechos Humanos, es ejemplo asaz convincente. Dispone el artículo 41 cuanto a la satisfacción equitativa: *“Si el Tribunal declara que ha habido violación el Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa”*.

Y, no obstante limitarse la sentencia de aquel tribunal al efecto declaratorio y no ejecutivo, se ha creado una alternativa eficiente para hacer cumplir la sentencia internacional, y cuya ejecución se encuentra sometida a la legislación procesal de cada Estado, tratándose de *“un mecanismo que ha resultado útil en las últimas décadas”*<sup>733</sup>.

Otra experiencia de gran relevancia en el contexto de la reacción de la comunidad internacional en virtud de un hecho ilícito practicado por un Estado, es la adopción de las “contramedidas”, iniciativas reconocidas como legítimas en el Derecho Internacional, en sus dos modalidades de la “condicionalidad positiva” y de

---

<sup>733</sup> Según señala CONCEPCIÓN ESCOBAR HERNÁNDEZ, “La Protección Internacional de los Derechos Humanos”, en DIEZ DE VELASCO, M, *Instituciones ....*, op. cit., p. 579.

la “condicionalidad negativa”<sup>734</sup>. En un profundo estudio sobre el tema, el profesor FERNANDO MARIÑO destaca que una de esas “contramedidas” en casos de violación grave de las normas internacionales de derechos humanos podría ser la privación de la inmunidad de jurisdicción<sup>735</sup>.

## **7 – LA JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL**

La importancia de un órgano de jurisdicción internacional global se puede notar también en la formación de una jurisprudencia que pueda irradiar sus efectos a las jurisdicciones nacionales.

En cuanto la doctrina del derecho internacional público es mayoritaria en negar a la jurisprudencia el carácter como fuente de derecho internacional, reservando esta cualidad a los tratados, la costumbre y a los principios generales de derecho, no se puede negar la creciente importancia de la jurisprudencia internacional en la interpretación de las normas de derechos humanos, con influencia de los pronunciamientos, fallos y opiniones consultivas de los Tribunales Internacionales, específicamente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los tribunales nacionales<sup>736</sup>.

La jurisprudencia ha sido reconocida también cuanto a las decisiones adoptadas por los órganos del sistema de tratados de derechos humanos, en los casos de quejas individuales, y que han servido como fuente de derecho para los tribunales nacionales. En este punto, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha admitido que “*la suma de las decisiones relativas a los diversos casos forma un cuerpo de jurisprudencia sobre la interpretación y la aplicación de los tratados de*

---

<sup>734</sup> Sobre las “contramedidas” ver los estudios de MARIÑO MENÉNDEZ, F. M., *Derecho Internacional* ..., op. cit., pp. 489-513; FERRER LLORET, J., *Responsabilidad* ..., op. cit., pp. 244-257; VILLÁN DURÁN, C., *Curso* ..., op. cit., pp. 843-902.

<sup>735</sup> MARIÑO MENÉNDEZ, F. M., *Derecho Internacional* ..., op. cit., p. 108.

<sup>736</sup> Según acentúa ADELINA LOIANNO, “La supranacionalidad operativa de los derechos humanos en el derecho interno”, en GORDILLO, A., *Derechos Humanos*, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 4ª. e. 1999, p.III-20.

*derechos humanos, al cual hacen referencia con asiduidad los tribunales nacionales y regionales*<sup>737</sup>.

Es en la jurisprudencia internacional en materia de los derechos humanos que se ha desarrollado, con intensidad y de forma convergente, una interpretación dinámica o evolutiva de los tratados de protección de los derechos humanos, como ha acentuado CANÇADO TRINDADE <sup>738</sup>. No se trata aquí de reconocer el efecto vinculante de aquella jurisprudencia a las jurisdicciones internas, sino reconocer el precedente para la solución de casos semejantes, considerándose el principio de la seguridad jurídica que encauza las instituciones judiciales. En la práctica, estos efectos son muy bien evidenciados por JAVIER BORREGO BORREGO: *“No es que Estrasburgo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sea hoy casi una frase hecha: ‘Iré a Estrasburgo’, ‘el Tribunal Europeo de los DDHH me protegerá’, etc. Es que la jurisprudencia del Tribunal Europeo es invocada, no sólo por el Tribunal Constitucional, sino por cualquier Juzgado o Tribunal Español....*”<sup>739</sup>.

A su vez, la jurisprudencia internacional de derechos humanos, dictada por un Tribunal Internacional de Derechos Humanos, con alcance a todos los países, seguramente se puede convertir en otra oportunidad, coherente y fidedigna, en refuerzo al reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos, y en un fuerte instrumento para fragilizar los particularismos que impiden su amplia y eficaz realización.

Sobre este aspecto de la universalidad, de difícil comprensión cuando enfocada con la diversidad cultural, y con fuertes resistencias en el mundo no-occidental, el Juez BEDJAOUI, ex-Presidente del Tribunal Internacional de Justicia, lo tiene como uno de los principales y de los más difíciles problemas que enfrentan los derechos humanos, *“problema que sólo podrá ser abordado desde un imprescindible*

---

<sup>737</sup> HRI/MC/2006/2, p. 8.

<sup>738</sup> “Reflexiones sobre el Desarraigo como Problema de Derechos Humanos frente a la Conciencia Jurídica Internacional”, en CANÇADO TRINDADE, A. A., RUIZ DE SANTIAGO, J., *La Nueva Dimensión de las Necesidades de Protección del Ser Humano en el Inicio del Siglo XXI*, 2ª e., Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 2003, p. 66.

<sup>739</sup> BORREGO BORREGO, J., “El Nuevo Tribunal ....”, en VVAA, *Hacia una Justicia Internacional ...*, op. cit., p. 139.

*diálogo intercultural*<sup>740</sup>. Y un palco apropiado para un profundo e intenso debate de este “diálogo intercultural” puede identificarse con el órgano jurisdiccional internacional global de que trata esta tesis.

Una asociación importante que se hace a respecto de la jurisprudencia internacional es la citada por CANÇADO TRINDADE, al mencionar sobre la necesidad de despertar para una conciencia jurídica universal, *“para reconstruir, en este inicio del siglo XXI, el derecho internacional, con base en un nuevo paradigma, ya no más estatocéntrico, sino situando el ser humano en posición central y teniendo presentes los problemas que afectan a la humanidad como un todo”*<sup>741</sup>.

Más allá de esto, esa jurisprudencia internacional reforzada por las características de un tribunal universal, puede estimular fuertemente a que los órganos judiciales de cada país den una respuesta inmediata frente las violaciones que le son reclamadas, evitándose, en consecuencia, que toda demanda de vulneraciones a los derechos humanos pueda ser sometida a las instancias internacionales de protección.

Otro aspecto muy importante del efecto jurisprudencial internacional es aclarar la definición de términos, conceptos y definiciones que no se encuentran muy bien expuestas en los instrumentos normativos, principalmente considerando que en el seno del Derecho Internacional muchas situaciones son retratadas por términos y expresiones de contenido muy vago, genérico e impreciso, como por ejemplo “violación persistente” y “quebrantamiento de la paz”. Así es que, en un trabajo conjunto con la doctrina, la actividad jurisprudencial llevaría a profundizar el estudio y aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La existencia de un órgano jurisdiccional superior de alcance universal sería de gran importancia también para la uniformización de la jurisprudencia de los derechos

---

<sup>740</sup> VVAA, *Los Derechos Humanos en un mundo dividido*, op. cit., p. 16.

<sup>741</sup> CANÇADO TRINDADE, A. A., “Reflexiones sobre el Desarraigo como Problema de Derechos Humanos frente a la Conciencia Jurídica Internacional”, en CANÇADO TRINDADE, A. A., RUIZ DE SANTIAGO, J., *La Nueva Dimensión de las Necesidades de Protección del Ser Humano en el Inicio del Siglo XXI*, 2ª e., Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 2003, p. 69.

humanos, debiendo su entendimiento prevalecer sobre los demás órganos de protección internacional no-jurisdiccionales, en cualquier nivel internacional. Actualmente es muy notada la divergencia que se está formando en el ambiente internacional en cuanto a la jurisprudencia de los derechos humanos. Un ejemplo típico y muy ilustrativo es el que ocurre en el sistema de los órganos creados en virtud de tratados. Como destaca la Secretaría-General de las Naciones Unidas, *“La existencia de siete órganos que actúan independientemente para vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos hace que puedan darse interpretaciones divergentes que, a su vez, pueden generar incertidumbre respecto de conceptos y normas fundamentales de derechos humanos, con lo cual se socava la posibilidad de dar una interpretación global, exhaustiva e intersectorial de las disposiciones relativas a los derechos humanos. La falta de coordinación y colaboración entre los órganos puede dar lugar a jurisprudencia contradictoria, cuestión a la cual se hace frente específicamente en el proyecto de Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en el cual se exige que su Comité consulte con otros órganos con miras a asegurar la coherencia de sus observaciones y recomendaciones respectivas. La multiplicidad de recomendaciones derivadas de cada uno de los órganos dificulta que los Estados Partes y otros interesados nacionales se formen una imagen completa de las cuestiones y recomendaciones clave respecto de la situación imperante en los Estados en materia de derechos humanos. Ello puede disminuir la posibilidad de que los Estados Partes traduzcan estos resultados en planes y en programas nacionales intersectoriales integrados”*<sup>742</sup>.

Hay también un aspecto relevante, que es la aplicación del derecho consuetudinario en tema de derechos humanos. El derecho consuetudinario, por su propio rasgo, no tiene una regla propia a definir las situaciones que, por su práctica generalizada, las llevan a se identificar como una norma. Son los órganos jurisdiccionales internacionales que resuelven las cuestiones que afectan al derecho consuetudinario, y, principalmente, a la propia validación de una norma con un efectivo perfil jurídico, a imponer obligaciones *erga omnes*.

---

<sup>742</sup> HRI/MC/2006/2, p. 14.

En el seno de los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos es que se va dando *“seguimiento a la evolución alentadora de la consagración de las normas jus cogens y obligaciones erga omnes de protección, buscando asegurar su plena aplicación práctica, en beneficio de todos los seres humanos”*<sup>743</sup>.

Importante resaltar cuanto a las normas de derecho consuetudinario que muchas veces no se originan de una aceptación generalizada y unánime, mas conquistan un grado normativo en razón del *“amplio grado de consenso”*<sup>744</sup>, comportamiento este muy más accesible en un ambiente judicial.

Mas allá de otros tantos, sirve de ejemplo la posición manifestada por la Corte Suprema Argentina con relación a la fuerza de la Convención Interamericana de Derechos Humanos al afirmar *“su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación”*. Avanzando un poco más en el tema AGUSTÍN GORDILLO resalta que *“De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana”*. Y señala: *“parece ‘prima facie’ claro que el derecho interno, leyes incluidas, deberán ceder ante el derecho supranacional creado por los organismos a los que el país suscriba, y que corresponderá a los jueces locales aplicar dicho derecho supranacional de manera inmediatamente operativa y en base a la jurisprudencia internacional”*<sup>745</sup>.

Interesante contribución jurídica que ofrece AGUSTÍN GORDILLO es la que aboga la posibilidad de un Estado valerse de la jurisprudencia de un Tribunal internacional al cual no se encuentra sometido para aprovecharla internamente. Para tanto cita el caso de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó Suiza por violación al derecho a tener sentencia en un plazo razonable,

---

<sup>743</sup> CANÇADO TRINDADE, A. A., “Reflexiones sobre el Desarraigo como Problema de Derechos Humanos frente a la Conciencia Jurídica Internacional”, en CANÇADO TRINDADE, A. A., RUIZ DE SANTIAGO, J., *La Nueva Dimensión de las Necesidades ...*, op. cit., p. 82.

<sup>744</sup> ORTIZ AHLF, Loretta, op. cit., p. 27.

<sup>745</sup> GORDILLO, A., “La creciente internacionalización del derecho”, en *Derechos Humanos*, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 4ª. e. 1999, p.II-15.

sosteniendo que por no haber en el seno de la Corte Interamericana idéntico precedente con relación a aquel derecho, y que es también previsto en el Convenio Americano y el propio ordenamiento jurídico argentino, se podría aplicar en Argentina la jurisprudencia del tribunal europeo<sup>746</sup>.

En el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pueden citar varios juzgados de gran importancia en la protección y consecuente difusión de la cultura de los derechos humanos. Son casos de destaque<sup>747</sup>:

- 1 – Velásquez Rodríguez (Honduras) – reconocimiento de violación del derecho a la vida, integridad personal, libertad y obligación del Estado en garantizar los derechos humanos, decidiendo la Corte por la inversión de la prueba en los casos de desaparecimientos, por la ineficacia de los recursos internos y por la fijación de indemnizaciones por danos materiales y morales a los familiares de las víctimas, más allá de la responsabilidad criminal de los responsables
- 2 – Godínez Cruz (Honduras) – igual al caso anterior.
- 3 – Aloeboetoe (Surinam) – idem.
- 4 – Gangaram Panday (Surinam) – garantía de la libertad con el reconocimiento de la ilegalidad de prisión de la víctima.
- 5 – Neira Alegria y otros (Perú) – reconocimiento al derecho a la vida, a las libertades y a las garantías individuales mismo en los casos de estado de emergencia.
- 6 – Caballero Delgado y Santana (Colombia) – consideró el Estado responsable por la omisión en la prevención de los hechos y también por la

---

<sup>746</sup> GORDILLO, A., “La creciente internacionalización del derecho”, en *Derechos Humanos*, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 4ª. e. 1999, p.II-29-30.

<sup>747</sup> Algunos de los casos aquí citados fueron extraídos de la obra *Direitos Humanos em Juízo*, de ANDRÉ CARVALHO RAMOS, Max Limonad, São Paulo, 2001, pp. 521-529.

ausencia de efectiva persecución penal de los responsables por el desaparecimiento de las víctimas, habiendo en estos casos reconocimiento cuanto a la violación al derecho a la vida, a la libertad y a las obligaciones de garantizar los derechos humanos.

7 – Genie Lacayo (Nicaragua) – la Corte reconoce la violación al derecho a la garantía procesal de tramitación razonable del proceso judicial.

8 – Loayza Tamayo (Perú) – reconocimiento de violación a la libertad, integridad personal, debido proceso legal y al bis in idem, con la condena del Estado a la inmediata liberación de la víctima sin considerarse el cosa juzgada de las instancias internas.

9 – Castillo Paés (Perú) – idem al anterior, con reconocimiento de la prueba presumida por el largo tiempo transcurrido desde la desaparición.

10 – Suárez Rosero (Ecuador) – la Corte reconoció violación al derecho a la libertad por haber orden de prisión sin decisión judicial, por haber sido el reo mantenido incomunicado incluso de su abogado, y por violación a la presunción de inocencia.

11 – Blake (Guatemala) – violaciones al debido proceso legal, a la integridad física de los familiares de la víctima, con la condena del Estado a reparar los daños causados con punición de los asesinos.

12 – Paniagua Morales (Guatemala) – violación a la vida, a la integridad física, a la protección judicial y a la garantía de un proceso célere e imparcial, con la condena de los culpables y reconocimiento de que la impunidad propicia la repetición crónica de violaciones a los derechos humanos.

13 – Cesti Hurtado (Perú) – violación al debido proceso legal con anulación del proceso judicial militar y alejamiento de la alegación de *res judicata interna*.



14 – Castillo Petruzzi – reconocimiento de violación al debido proceso legal, a la libertad y a la necesidad de identificación de la tipificación penal y del libre acceso del abogado a los procesos.

Estos, son así, algunos breves casos citados para describir que las violaciones de derechos humanos que retractan no son ofensas exclusivas de las víctimas que lograron la protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que son casos de violaciones comunes en todas partes del mundo, sin cualquier privilegio de esta o aquella sociedad, por lo que a los individuos que sufren mismas violaciones pueden encontrar en la jurisprudencia dictada por aquella Corte Interamericana la expectativa de idéntica protección a su caso, y que mejor y más eficientemente estarían protegidos si hubiera una instancia jurisdiccional global a protegerlos.

## **8 – LA EXPERIENCIA POSITIVA DE LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Otro argumento importante a favor de la institución de un modelo de protección judicial de alcance universal es que, en el ámbito regional se ha consolidado esta opción, como retratan los modelos europeo, americano y africano, respectivamente, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Tribunal Africano de Derechos Humanos. Aquel modelo europeo, inclusive, enteramente recreado para priorizar la protección jurisdiccional, como demuestra la extinción del Comité Europeo de Derechos Humanos, a partir de 1999.

Esta garantía jurisdiccional ha llevado CARRILLO SALCEDO a afirmar que “*a pesar de la relevancia del catálogo de derechos y libertades reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en sus Protocolos adicionales de naturaleza normativa,(...) el rasgo más característico y significativo del Convenio Europeo consistió en la instauración, en 1950, de un conjunto de mecanismo*

*institucionalizado de garantía jurisdiccional integrado por dos órganos: la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos*<sup>748</sup>.

La experiencia de los modelos regionales de protección judicial internacional de los derechos humanos ya existentes, no dejan duda de la aprobación que este mecanismo representa en la tutela de aquellos derechos, y en la necesidad de proyectarlo como una alternativa para alcanzar la mayor efectividad posible. Y sobre esto, es muy importante señalar que los precedentes regionales de judicialización demostraron que no es necesario transformar el actual modelo de cooperación de una sociedad mundial formada por Estados soberanos<sup>749</sup>.

Una demostración clara y evidente de la importancia de la jurisdicción internacional de protección a los derechos humanos es la destacada por el Juez de la Corte Internacional de Justicia y ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CANÇADO TRINDADE, al afirmar que *“Nadie podría suponer o antever, hace algunos años atrás, que las causas de los desplazados, de los migrantes en búsqueda de alimento, vivienda, trabajo y educación, y de los niños abandonados en las calles de las ciudades de América Latina, alcanzasen un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es fruto, sobre todo, del despertar de la conciencia humana para las necesidades de protección de los más débiles y de los olvidados”*<sup>750</sup>.

La reciente creación del Tribunal Penal Internacional es también un hecho muy importante que revela la necesidad de la comunidad internacional de responder a las vulneraciones de los derechos humanos, dándoles un tratamiento judicial con vistas al establecimiento de sanciones que eviten la impunidad de tales violaciones.

Como ha señalado NICETO ALCALÁ-ZAMORA CASTILLO, *“ni la Carta de San Francisco, ni las Declaraciones de 1948, ni siquiera los Pactos y Convenciones*

<sup>748</sup> CARRILLO SALCEDO, J. A., *Soberanía de los Estados y Derechos Humanos en Derecho Internacional Contemporáneo*, op. cit., p. 127.

<sup>749</sup> Conforme ha señalado VILLÁN DURÁN, C., *Curso...*, op. cit., p. 179.

<sup>750</sup> “Reflexiones sobre el Desarraigo como Problema de Derechos Humanos frente a la Conciencia Jurídica Internacional”, en CANÇADO TRINDADE, A. A., RUIZ DE SANTIAGO, J., *La Nueva Dimensión de las Necesidades de Protección...*, op. cit., pp. 63/6.

*posteriores, brindarían protección adecuada a los derechos humanos en el plano internacional, si careciesen del mecanismo jurisdiccional y del instrumento procesal para sancionar las violaciones de los mismos....*<sup>751</sup>.

Así, por las jurisdicciones internacionales es que se ha conseguido asegurar un orden público internacional en el ámbito de la protección a los derechos humanos. Sobre ello, es importante destacar que los Tribunales regionales actualmente existentes, principalmente los Europeo y Americano, se dedican al tratamiento de temas que, en realidad, se caracterizan por ser comunes a todos los individuos del mundo, no especificando en sus decisiones aspectos peculiares de las respectivas culturas europea y americana.

## **9 – LAS LIMITACIONES DE LA JURISDICCIÓN UNIVERSAL EJERCIDA POR LOS PAISES**

Aún en el sentido de la oportunidad de aceptación del medio judicial como garantía del cumplimiento de los derechos humanos, se pueden mencionar las más recientes medidas en el ámbito de la jurisdicción universal, basada en los casos en que los Estados son llamados a reprimir violaciones contra los derechos humanos practicadas por otro Estado, como en la hipótesis del ciudadano de un país que sufre violación por otro país, y cuyo enjuiciamiento se observa en aquel país y no en el país de la violación.

En este tema cabe destacar la diferencia ente la jurisdicción universal y la jurisdicción internacional.

La jurisdicción universal es ejercida por los propios Estados, con su propia estructura judicial y los mecanismos y recursos procesales de que dispone. Es el enjuiciamiento nacional del extranjero que no se encuentra en el territorio del país que lo juzga. Lo que hay de universal es la extensión de la jurisdicción nacional de un cierto país al alcanzar un criminoso en cualquier sitio del mundo donde se encuentre

---

<sup>751</sup> ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, N., *La Protección Procesal Internacional de los Derechos Humanos*, op. cit., pp. 15-16.

y que haya cometido crimen contra un ciudadano suyo. En este escenario se admite la jurisdicción nacional como instrumento de persecución a todos los casos de violaciones a derechos contenidos en un tratado internacional que el país signatario se obligó a reprimirlos, que sólo por reflejo alcanza intereses de un Estado, y donde se tiene la configuración del ejercicio jurisdiccional delante del principio de la extraterritorialidad.

A su vez, la jurisdicción internacional es la conferida a un órgano judicial internacional, no integrante de la jurisdicción nacional, al cual pasa a someterse determinado país, por su exclusiva y propia opción, como son ejemplos los Tribunales Europeo, Interamericano y Africano de Derechos Humanos, el Tribunal Penal Internacional y el Tribunal Internacional de Justicia.

Jurisdicción internacional y jurisdicción universal así, son institutos jurídicos inconfundibles.

Como se ha registrado en líneas atrás<sup>752</sup>, en el ámbito de la jurisdicción española, los ilícitos perseguidos con base al principio de justicia universal son de naturaleza criminal, como el genocidio, terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronave, falsificación de moneda extranjera, los crímenes relativos a la prostitución, al tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes<sup>753</sup>.

A su vez, el ejemplo más conocido y concreto de la justicia o jurisdicción universal es el “caso Pinochet”, cuyo interés en el enjuiciamiento criminal de aquel ex-Presidente por jurisdicciones nacionales no se limitó al tan divulgado proceso que tramita el Poder Judicial español<sup>754</sup>, sino que también se ha manifestado junto a las

---

<sup>752</sup> Primera Parte, ítem 2.B, bajo el título “Justicia Penal Universal –Tribunales Penales Internacionales Provisorios.

<sup>753</sup> Estos datos son apuntados por JUAN JOSÉ DIEZ SANCHES, en *El Derecho Penal Internacional (Ámbito Espacial de la Ley Penal)*, COLEX, Madrid, 1990, pp. 186-196.

<sup>754</sup> Hasta octubre de 2008 se habían iniciado en España 17 demandas judiciales. De ellas, once fueron admitidas a trámite. En un caso –el ex militar argentino Adolfo Scilingo–, se ha llegado a celebrar un juicio oral que ha terminado en un sentencia condenatoria, según datos de Amnistía Internacional, en <http://www.es.amnesty.org/temas/justicia-internacional/otros-casos-abiertos-en-espana/>.

justicias de Francia, Suiza, Bélgica, Italia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Austria y Canadá<sup>755</sup>.

La jurisdicción universal se ha extendido también a otros casos, como la condena de cuatro Ruandeses por el Poder Judicial de Bélgica, por el genocidio de Ruanda en 1994. Y también se han iniciado enjuiciamientos al ex-Presidente de Chad, Hissein Habré, y contra el Primer Ministro de Israel, Ariel Sharon<sup>756</sup>.

Lo que es importante señalar es que mismo con la inexistencia de un órgano internacional de justicia, de alcance global, para responsabilizar los Estados violadores de derechos humanos, no se ha conseguido estimular el reconocimiento ni la aceptación amplia de la jurisdicción universal. En España, por ejemplo, el Tribunal Supremo Español ha resistido en reconocer que los delitos de genocidio, terrorismo y tortura, practicados en Guatemala entre 1962 a 1996<sup>757</sup>, y en los cuales fueron víctimas un agente diplomático y cuatro sacerdotes españoles, debería someterse a la jurisdicción española, con cauce en la jurisdicción universal<sup>758</sup>. Solamente con sentencia del Tribunal Constitucional, que sucedió aquella decisión del Tribunal Supremo, es que fuera reconocido el principio de jurisdicción penal universal en aquellos casos de crímenes contra la humanidad<sup>759</sup>.

Este registro demuestra la dificultad de la jurisdicción universal en asumir la defensa contra las violaciones de los derechos humanos y cuyo protagonismo, en ámbito criminal o no criminal en la protección de aquellos derechos, debería ser propio de una instancia judicial internacional, de alcance global, creada con atribuciones específicas en el trato de las violaciones de los derechos humanos<sup>760</sup>.

---

<sup>755</sup> Conforme datos presentados por ANTONIO PÉREZ VOITURIEZ, "Doble Sentido de la Internacionalización de la Protección de los Derechos Humanos", en VVAA, *Hacia una Justicia Internacional*, XXI Jornadas de Estudio, Abogacía General del Estado, Dirección del Servicio Jurídico del Estado, Civitas, Madrid, 2000, pp. 121-122.

<sup>756</sup> De acuerdo con el Informe 2002, de la Editorial de Amnistía Internacional, disponible en la Web <[www.edai.org/centro/Infoanu/2002/Info021intro.htm](http://www.edai.org/centro/Infoanu/2002/Info021intro.htm)>.

<sup>757</sup> En este período se apunta la muerte de más de 150 mil personas y de más de 45 mil desaparecidos.

<sup>758</sup> Sentencia Tribunal Supremo 327/2003, del 25 de febrero de 2003.

<sup>759</sup> Sentencia Tribunal Constitucional 237/2005, del 26 de septiembre de 2005.

<sup>760</sup> Otro caso también muy reciente de limitación de aquella jurisdicción fue la decisión de la Corte Internacional de Justicia, en fallo de 14 de febrero de 2002, al impedir que los tribunales belgas juzgasen al Ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática del Congo, por graves

Y, si se ha avanzado en aquella jurisdicción criminal, aunque limitadamente, con el Tribunal Penal Internacional, en la jurisdicción internacional global para actuar en contra las violaciones de naturaleza no-criminal, hay un inmenso hueco para ser cubierto.

## **10 – EL PODER JUDICIAL Y SU EFECTO DISUASIVO**

El modelo jurisdiccional es el medio de protección que dispone de la más amplia y efectiva garantía contra las violaciones de los derechos humanos, en vista de la propia fuerza de los efectos de las decisiones judiciales, que no se someten a la voluntad de terceros. En una instancia supranacional esta característica se puede producir con alguna semejanza a la fuerza impositiva de los modelos judiciales nacionales, al contrario de los modelos de protección no-judiciales, en los cuales las decisiones de los más diversos órganos internacionales se condicionan a la aceptabilidad del Estado.

Una crítica muy fuerte que se hace, por ejemplo, al sistema de tratados es la inexistencia de mecanismos eficaces para asegurar que el sistema tenga efectos sostenidos. En este tema, la Secretaría-General de Naciones Unidas tuvo la oportunidad de afirmar: *“Pese a que recientemente algunos órganos creados en virtud de tratados han introducido procedimientos de seguimiento y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha puesto en marcha actividades de cooperación técnica encaminadas a mejorar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados, una de las principales debilidades del sistema actual es la inexistencia de mecanismos eficaces y amplios de seguimiento para asegurar que el sistema tenga efectos sostenidos y sistemáticos para el disfrute de los derechos humanos en el plano nacional. Es frecuente que los Gobiernos presten una atención insuficiente a las recomendaciones aprobadas por los órganos y la falta de conciencia o de conocimiento entre la población nacional respecto de los*

---

violaciones al derecho internacional humanitario, entendiendo aquella Corte que dicha autoridad estaba protegida por la inmunidad de jurisdicción propia del cargo.

*procedimientos de vigilancia y sus recomendaciones hace que éstos sean invisibles en el plano nacional*<sup>761</sup>.

La institución judicial, forma la “*pieza fundamental de los sistemas de garantía y control*”<sup>762</sup>, y su importancia resulta, entre otros factores, de la naturaleza propia de las instituciones judiciales, alejadas de las presiones políticas, y que generan mayor temor en aquellos que se encuentran sometidos a ella.

Este temor es consecuencia también de los efectos obligatorios de cumplimiento que emergen de la decisión judicial, y cuya responsabilidad del condenado se proyecta a todas las dimensiones que la tutela de los derechos humanos debe imprimir, tales sean, el impedimento a la violación, su cese, y el deber de reparar o indemnizar cuando sea consumada la violación.

Sobre este aspecto, CANÇADO TRINDADE resalta que la jurisprudencia protectora de la Corte Interamericana ha efectivamente contribuido a la creación de un “orden público” internacional en la región, basado en la observancia de los derechos humanos. En un continente marcado por incertidumbres y amenazas constantes a dichos derechos, la jurisprudencia evolucionada de la Corte ha establecido límites al voluntarismo estatal, salvaguardando la integridad de la Convención Americana y fortaleciendo la posición de los individuos como sujetos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dotados de plena capacidad procesal internacional<sup>763</sup>.

También se considera como característica de este temor el hecho de que en la instancia judicial sus decisiones son adoptadas observando el principio del debido proceso, amplia defensa, del contradictorio y de la igualdad de las partes, lo que lleva a reconocer a la instancia judicial como un medio imparcial y no sometido a ingerencias externas, por lo que el grado de valoración de sus decisiones está reconocido ampliamente como el más acertado con relación a los demás

---

<sup>761</sup> Afirmaciones contenidas en el documento HRI/MC/2006/2

<sup>762</sup> CARRILLO SALCEDO, J. A., *Soberanía de los Estados y Derechos Humanos en Derecho Internacional Contemporáneo*, op. cit., p. 126.

<sup>763</sup> CANÇADO TRINDADE, A. A., *Tratado ...*, op. cit., p. 109.

procedimientos no-judiciales, siendo el medio más adecuado para el combate a la impunidad, resultando con mayor impacto las consecuencias de su condena.

En tiempos actuales, donde los medios de comunicación en masa proliferan con mucha intensidad, y se revelan cada vez más útiles en las estrategias de acompañamiento y control de las actuaciones de los gobiernos, es fácil percibir que una condena internacional mediante una instancia judicial, por la propia fuerza que emana, refuerza la “*movilización de la vergüenza*”<sup>764</sup>, y es algo que no suena bien a los intereses de los gobernantes en el contexto de la realización de sus políticas internas y de su visibilidad internacional.

Así es que, esta cierta “temeridad” por la instancia judicial conlleva un efecto preventivo, ya que a nadie le gusta soportar la carga de una condena judicial, cualquiera que sea el nivel en que se constate este hecho.

## **II – LOS VACÍOS JURÍDICOS QUE IMPIDEN LA TUTELA DE LOS DERECHOS HUMANOS – LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA**

El acceso a la protección judicial se impone como medida elemental, mínima e indispensable para asegurar el respeto a los derechos humanos, entre otras razones por permitir el restablecimiento de la igualdad entre el Estado violador y el individuo victimizado. La alternativa de una instancia jurisdiccional que alcance a todos los países, en reacción a sus violaciones de los derechos humanos, de naturaleza no-penal, se torna, así, un instrumento viable para superar los “huecos jurídicos” que no se pueden solucionar por las jurisdicciones nacionales, y, en consecuencia, se garantiza una respuesta a la promoción de la tutela judicial efectiva.

En la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2003/39, adoptada en su sesión de marzo-abril del 2003, aquel extinto órgano de Naciones Unidas reafirmó el compromiso de los Estados en observar los “principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”, “las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”, los “principios básicos para el tratamiento de los

---

<sup>764</sup> PASTOR RIDRUEJO, J. A., *Curso de Derecho Internacional* ..., op. cit., p. 209.



reclusos”, el “conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión” y “las salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte”, principios éstos que se tornan en una exigencia para la comunidad internacional cuando no los cumpla un Estado.

Pero, no basta esta preocupación de la comunidad internacional, representada por las manifestaciones de la extinta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el sentido de asegurar a todo individuo el derecho básico de socorrerse en un órgano judicial. El problema es que en tiempos actuales, con todo el progreso que dicha protección ha alcanzado, todavía no es suficiente para lograr un nivel satisfactorio sobre la cuestión, principalmente en razón de las circunstancias y situaciones que se encuentran al margen de aquella tutela, como la situación de los flujos migratorios, de los apátridas, de la inmunidad de jurisdicción y ejecución del Estado extranjero, de los detenidos de Guantánamo, de los abusos procesales practicados por los tribunales penales internacionales “ad hoc”, situaciones que, sin perjuicios de otras, se identifican como verdaderos agujeros negros jurídicos.

Estos casos serán descritos a continuación, pero apenas con el propósito de identificarlos como elementos de argumentación de esta tesis, sin la preocupación de avanzar en cada uno de aquellos temas, evitándose aislarse de su contenido principal, que es señalar la existencia de huecos jurídicos en la protección internacional, y no propiamente identificar cuales son dichos huecos.

## **1 – LOS SIN PATRIA**

La dinámica de la sociedad y los frecuentes y desarrollados medios de integración entre los pueblos ha traído, en consecuencia, una nueva y muy grave situación estrictamente involucrada con el tema de los derechos humanos, referente a los intensos flujos migratorios, y la consecuente violación de aquellos derechos, y que un estudio como el presente no puede olvidarse.

En el proceso de evolución histórica de los derechos humanos, con la Revolución Francesa hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no había mayores y relevantes preocupaciones con la distinción jurídica y social entre las “personas” y los “ciudadanos”, pues ni al menos se conocían los grados y la intensidad de migración que hoy se conoce en los más distintos puntos del mundo, y de los cuales resultan problemas de gran complejidad y dimensión que ultrapasan los intereses de los países afectados con dicho movimiento de gente.

Aunque los derechos humanos no tengan patria, color, genero, origen, la situación real es que en la practica de la tutela de dichos derechos estos son mucho más presentes en relación a los ciudadanos y menos a los individuos, es decir, a aquellos que se encuentran fuera de su patria, o mismo ni la tienen.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra, por sus artículos 13 y 15 el alcance de la tutela de los derechos humanos a cualquier persona, dónde quiere que se encuentre:

*“Artículo 13*

- 1. Todos tienen el derecho a la libertad de movimiento y de residencia dentro de las fronteras de cada estado.*
- 2. Todos tienen el derecho a abandonar cualquier país, inclusive el suyo, y a regresar a él.*

.....

*Artículo 15*

- 1. Todos tienen derecho a una nacionalidad.*
- 2. Nadie debe ser privado arbitrariamente de su nacionalidad ni negársele el derecho a cambiar de nacionalidad.”*

No obstante tan claras e inconfundibles palabras, nadie se arriesga a afirmar que estos derechos encuentran, en el escenario internacional, la protección compatible con el contenido mismo que proclaman, es decir, de que la dignidad es un atributo del hombre, donde quiera que se encuentre, y no sólo de aquel que mantiene vínculo jurídico con determinada nación.

Y la importancia de esta cuestión necesitar un foro propio y específico para la respectiva protección se debe al hecho de en él residir la suficiente e imprescindible exención a posibilitar el cumplimiento de aquellas disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que, naturalmente, van en contra los intereses del propio Estado quien vive con esta preocupante realidad de los flujos migratorios.

Sobre la cuestión, el reconocimiento de derechos direccionados solamente a los ciudadanos es, actualmente, *“un nuevo rasgo discriminatorio que decide quien continuará siendo titular de derechos fundamentales y a quienes se les protegerán esos derechos”*, como muy bien advierte TECLA MAZZARESE, incluso citando a FERRAJOLI:

*“La desigualdad se expresa esencialmente en la forma estatal de ciudadanía, cuya definición como pertenencia a una nación y a un territorio comprende la última gran restricción normativa del principio de la igualdad jurídica”*<sup>765</sup>.

Y del mismo jurista italiano es la observación de que los derechos fundamentales *“han sido siempre universales en el papel; aunque de jure siempre han sido derecho de la persona, desde la Declaración Francesa de 1789, de facto siempre han sido derechos del ciudadano”*<sup>766</sup>.

Haciendo un estudio muy profundizado, aunque breve, sobre el tema de los extranjeros y los derechos humanos, JAVIER DE LUCAS acentúa críticas muy oportunas cuanto al grande aislamiento de aquellos derechos y la condición de los extranjeros, auténtica segregación, y por la cual pugna por cambios que lleven a una emancipación no sólo política, sino emancipación humana. Así como en tiempos pasados las libertades públicas y los derechos políticos fueron sobre todo el triunfo de la burguesía frente al poder absoluto, y así como la conquista por derechos sociales fueron resultado del movimiento obrero, de los sindicatos, hoy no se puede negar que hay conquistas muy bien definidas que demandan ser alcanzadas por un nuevo

---

<sup>765</sup> MAZZARESE, T., “Está la era de los derechos cambiando?”, en VVAA, *Anuario de Derechos Humanos*, vol. 5, Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 2004, pp. 676-7.

<sup>766</sup> Idem, p. 677.

sujeto social que ha encontrado en las fronteras el muro más consistente, verdaderas barreras, en impedir la realización de derechos, y que son los inmigrantes. En palabras de JAVIER LUCAS, *“no es posible, por ejemplo, erigir una barrera en el reconocimiento de la satisfacción de necesidades básicas como la salud, o la educación, basándose en una falta administrativa como la ausencia de papeles.”* Y concluye el destacado profesor de la Universidad de Valencia: *“ En todo caso, ¿ podemos seguir manteniendo que creemos en el imperativo de la universalidad al mismo tiempo que con nuestras acciones, con nuestras decisiones, hacemos posible que hoy, todavía, las fronteras sean más fuertes que los derechos? Mientras los seres humanos puedan decir que no han nacido bien, en el lugar y en el momento adecuado, y que esa circunstancia de nacimiento es más fuerte que su dignidad de ser humano, seguir hablando de derechos humanos será un sarcasmo”*<sup>767</sup>.

Idéntica desprotección se observa también con relación a los apátridas, individuos que por no guardaren identidad nacional por cuestión de nacimiento geográfico – *“ius soliis”* – o de descendencia – *“ius sanguinis”* – no tienen su propia y natural patria, su ciudadanía, y desde ahí se ven sin la correspondiente protección que guardan los individuos-ciudadanos.

Estos algunos breves aspectos a reforzaren la existencia de huecos jurídicos que pueden encontrar en la jurisdicción internacional global el mecanismo de socorro a las violaciones de derechos humanos sufridas.

## **2 – LA INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN Y DE EJECUCIÓN DEL ESTADO EXTRANJERO**<sup>768</sup>

La situación anteriormente descrita no es la única donde la persona no encuentra socorro para las vulneraciones de derechos humanos que ha sufrido.

---

<sup>767</sup> Estas transcripciones están contenidas en el artículo “Multiculturalismo y Derechos Humanos”, publicado en VVAA, *Diccionario Crítico de los derechos Humanos*, Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, 2000, pp. 57-68.

<sup>768</sup> Sobre el tema ver MARINO MENÉNDEZ, F. M., *Curso ...*, op. cit., pp. 103-123.

Actualmente los Estados ejercen sus atribuciones estableciendo relaciones de las más diversas naturalezas, y no sólo en su ámbito territorial, sino también en el territorio de otros Estados, identificándose como “Estado extranjero” y asumiendo deberes y responsabilidades. Situación bastante común es la que deriva de las relaciones contractuales firmadas por el Estado extranjero con particulares, así como las que son consecuencia de los actos practicados por sus agentes en misiones diplomáticas o consulares.

La cuestión es que, delante de una conducta del Estado extranjero que genera una violación a un derecho, no tiene el ofendido la posibilidad de buscar eficazmente, junto a la justicia nacional, distinta de la justicia del país extranjero, una providencia que interfiera en aquella violación, debido a la inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero frente al juez nacional.

El caso se configura, concretamente, en las situaciones donde el Estado extranjero realiza contrataciones con ciudadanos nacionales del Estado donde se encuentra localizada su representación diplomática o consular, para prestar servicios imprescindibles a la regularidad de sus actividades, es decir, para viabilizar la realización de sus actos de gestión – “*acta juri imperi*” -. Como ejemplo, se puede mencionar las contrataciones laborales<sup>769</sup>, por las cuales, por regla, los Estados extranjeros deben respetar la legislación del Estado donde los servicios serán ejecutados. El problema surge con el eventual incumplimiento de los deberes laborales por el Estado extranjero, y cuya condición soberana impide o dificulta que se busque la protección judicial efectiva junto a la justicia nacional donde el derecho fue violado.

Dicha limitación se debe a las reglas consuetudinarias del Derecho Internacional que establecen limitaciones a que un Estado condene, por su Poder Judicial, a otro Estado, en vista de los principios de soberanía y no-intervención. De

---

<sup>769</sup> En España son ejemplo de casos concretos en el tema, los siguientes juzgados en el Tribunal Constitucional “STC 176/2001, de 17 de septiembre”; “STC 107/1992, de 1 de julio, FJ 5”; “SSTC 292/1994, de 27 de octubre, FJ 3”. En Brasil, de 1995 a 2000, se contaban 570 acciones judiciales contra Embajadas, Reparticiones Consulares y organismos internacionales, según datos contenidos en *Imunidade Soberana: O Estado Estrangeiro diante do Juiz Nacional*, Serie Cadernos do CEJ, vol 19, Conselho da Justiça Federal, Brasília, 201, pp. 44-5.

ahí que, en las relaciones comerciales entre Estados las divergencias se resuelven por el arbitraje internacional o por organismos internacionales mandatarios de aquellas atribuciones de solución de controversias.

Así, cuando la relación controvertida es entre un individuo en su territorio y un Estado extranjero, no existe en el escenario internacional un instrumento que asegure el aislamiento de la inmunidad de jurisdicción y de ejecución de aquel Estado extranjero. La solución que queda a la víctima de la violación es buscar socorro junto al propio Poder Judicial del Estado violador, solución que generalmente no se presenta fácilmente realizable, por las propias condiciones desfavorables a que estará sometida la víctima para litigar en un país extranjero. Así, este hecho, en realidad, genera una situación de impunidad que sobrepasa los límites de la inmunidad del Estado extranjero.

La cuestión se agrava cuando los derechos violados son derechos que se encuadran en el contexto de los derechos humanos, como la propia violación a un derecho laboral o de seguridad social. En estas situaciones la víctima es la parte más débil de la relación en litigio, y consecuentemente no dispondrá, en igualdad de condiciones, de los recursos para buscar el amparo judicial en el Estado extranjero violador de sus derechos.

No se desconoce que en tales casos el Estado extranjero puede renunciar a su inmunidad de jurisdicción para ser juzgado por el juez nacional. Ésta, inclusive, es la disposición contenida en el artículo 32, párrafo 4º de la Convención de Viena de 1961. Pero esta misma renuncia no autoriza que la eventual sentencia de condena por incumplimiento de los deberes legales del Estado extranjero sea ejecutada. Para esta hipótesis es necesaria una nueva autorización, es decir, siempre resguardando la discrecionalidad del Estado extranjero para admitir una condena contra sí.

Esta situación de incumplimiento a las normas laborales es sólo un ejemplo entre otras situaciones que pueden llevar al Estado extranjero a ser reconocido como violador de derechos humanos. Otros casos pueden estar relacionadas a la violación de la integridad moral, así como las situaciones que se encuentren en el ámbito de la

responsabilidad civil y donde los actos de los agentes del Estado extranjero pueden llevar a prácticas ilícitas afectando los intereses y derechos de los individuos nacionales. En este contexto se puede mencionar la hipótesis del daño material irreversible provocado por el Estado extranjero, o la contratación de servicios no pagados por la entidad diplomática.

En estos casos no se encuentra la víctima protegida por el poder judicial de su país, ya que las decisiones de éste no pueden alcanzar o imponer obligaciones al Estado extranjero. En casos tales y debido a la inmunidad de jurisdicción de que goza el Estado extranjero frente al poder judicial de otro Estado, no hay solución para salvaguardar los derechos violados por aquel.

Estas son algunas breves hipótesis de tantas otras que están sometidas a este vacío jurídico por la falta o deficiencia de protección judicial debido a la inmunidad de jurisdicción del Estado extranjero frente al juez nacional.

Así es que, con la implantación de un órgano jurisdiccional internacional global, esta inmunidad de jurisdicción y ejecución podría estar mitigada, en la medida en que, reconocida la situación violadora de derechos sin solución por las instancias nacionales, aquel órgano de jurisdicción internacional podría imponer la superación de la vulneración ocurrida.

### **3 – EL CASO DE LOS DETENIDOS EN GUANTÁNAMO**

Un caso muy presente y actual de la total ausencia de protección de los derechos humanos, sea en el ámbito nacional o internacional, a caracterizarse como un auténtico hueco jurídico, es la situación de los detenidos islámicos en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, Cuba<sup>770</sup>. La cifra oficial de reclusos y su identidad son un misterio, estimándose que fueron detenidos más de seiscientas personas, de más de cuarenta nacionalidades, acusados de combatir

---

<sup>770</sup> La bahía de Guantánamo ha sido invadida por fuerzas estadounidenses en 1898, y por un Convenio de Arrendamiento firmado en 1903, como resultado de la Enmienda Platt, EUA adquirió el derecho de explorar su territorio y sus aguas para el uso de estaciones navales. El Convenio ha entrado en vigor en octubre de 1903, con vigencia por un siglo.

junto al grupo Al-Qaeda y con la milicia Talibán, extendiéndose esas detenciones desde 2002, sin cargos ni juicios, y sin que puedan tener acceso a sus familiares, o a abogados. De aquellos, algunos pocos han sido formalmente acusados de crímenes de guerra. La gravedad de la situación, de flagrante violación a los principios más elementales de derechos humanos, es que no se encuentran sometidos a ningún tribunal que pueda garantizarles un mínimo de tutela a sus derechos vulnerados, situación que genera otra vulneración, atinente al hecho de que, en calidad de detenidos se encuentran impedidos de probar la ilegalidad de sus detenciones ante un órgano jurisdiccional, es decir, se encuentran impedidos de probar su inocencia.

Y esta peculiar situación se debe al hecho de que siendo la bahía de Guantánamo un territorio arrendado a Estados Unidos y, por eso, no sometido a la soberanía de Cuba, no se puede recurrir a las instancias judiciales de este Estado caribeño para cuestionar la situación de los derechos humanos de aquellos detenidos. A su vez, estando dicho territorio bajo la jurisdicción de Estados Unidos, era de suponer que desde el Poder Judicial de este país se pudiera obtener una respuesta a aquella situación. Pero, no fue ésta la posición del Poder Judicial norteamericano<sup>771</sup> que, instado a manifestarse sobre el tema en una demanda presentada por un grupo de dieciséis detenidos<sup>772</sup>, ha declarado que la jurisprudencia de Estados Unidos ha restringido la aplicación de su Constitución a los ciudadanos americanos que se encuentren fuera de su territorio, no alcanzando, así, a ciudadanos extranjeros fuera del territorio norteamericano, considerando que el territorio de la bahía de Guantánamo se encuentra bajo la jurisdicción de Cuba.

La posición afirmada por Estados Unidos, principalmente bajo el fundamento de que la lucha contra el terrorismo es un estado de guerra, y por ello no se aplican las normas de derechos humanos pues son normas de tiempos de paz, es de dudosa aceptabilidad desde el punto de vista jurídico, en la medida que ha ratificado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que exige, en su artículo 2.1, el compromiso y el respeto de cada uno de los Estados-parte para garantizar los derechos reconocidos

---

<sup>771</sup> Trátase de una decisión de la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, pudiendo la misma aún ser apelada ante la Suprema Corte de Estados Unidos.

<sup>772</sup> Doce de nacionalidad Kuwaití, dos británicos y dos australianos.



en el Pacto a todos los individuos que estén sujetos a su jurisdicción. Entre estos derechos se encuentra el previsto en el artículo 9.4, de garantizar que *“toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal”*.

Igualmente las autoridades americanas entienden que los detenidos no se encuadran en la situación de “presos de guerra”, lo que les aseguraría la protección de la Convención de Ginebra. A esto, se añade el hecho de que el caso mencionado ha sido llevado también a la Justicia Francesa con relación a dos ciudadanos franceses, y la Fiscalía ha rechazado la petición por entender que sólo Estados Unidos podrían decidir si los cautivos son o no presos de guerra. Todo este lío legal sin precedentes, verdadero agujero negro jurídico, ha generado como consecuencia un vacío jurídico en el derecho de recurrir a una instancia jurisdiccional en caso de privación de libertad, reflejando que la exacta dimensión del caso es que, en realidad, los detenidos en Guantánamo no se encuentran sometidos a ninguna jurisdicción<sup>773</sup>, hecho que desborda el mínimo razonable en la tutela de los derechos humanos.

Y no es admisible que un Estado actúe, al mismo tiempo, como Juez, Fiscal o defensor, pues esto supone violaciones de las más evidentes a un juicio justo e independiente. La situación es tan grave que ni mismo el intenso reproche de la comunidad internacional, con toda presión disponible a cambiar este estado de cosas, con la necesidad del cierre de la Base de Guantánamo, como lo ha propuesto el Parlamento Europeo, ha recibido la correspondiente atención de las autoridades americanas.

Que los Estados digan lo que quieran o decidan como quieran en relación a los derechos de los individuos es una cuestión que refleja el ejercicio de su soberanía, aunque ésta, en tiempos actuales, encuentre límites cuando se enfrente con principios y directrices de derechos humanos. Lo que es más grave es la constatación

---

<sup>773</sup> Queda aún el intento de un abogado de Qatar en pedir a la Justicia de Cuba la liberación de 92 detenidos en Guantánamo, conforme ha comunicado la cadena de prensa BBC en su página web <[www.news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin\\_america/newsis](http://www.news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsis)>, en noticia del 20/10/2002, con el titular “Guantánamo en los tribunales de Cuba.”

de que la comunidad internacional no dispone de medios para superar la situación de flagrante violación a los derechos humanos, como en este caso concreto, donde no hay una instancia jurisdiccional internacional que decida sobre la legalidad o no de tales detenciones, o para permitir el más elemental ejercicio del principio de la “presunción de inocencia”. Sobre esto, es importante recordar que Estados Unidos no es parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que, la eventual posibilidad de llevar tal caso a juzgamiento a la Corte Internacional de Justicia, dependería de la iniciativa de otro país, algo muy difícil de ocurrir en vista del predominio político que ostenta Estados Unidos en el seno mundial.

En definitiva, la situación como se encuentra permitiría hablar de una nueva categoría de individuos, la de los individuos sin derechos, más allá de los individuos con derechos, de primera y de segunda categorías tratados anteriormente en este trabajo<sup>774</sup>. Y, si se considera que los derechos son de la esencia de los seres humanos, a lo mejor esta nueva categoría bien se puede definir como una categoría de individuos - como se ha dicho - “*fuera de la humanidad*”.

#### **4 – LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS POR LOS TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES PROVISORIOS**

En capítulos atrás, cuando se trató de los Tribunales Internacionales Penales provisorios<sup>775</sup>, se han hecho registros de excesos, abusos y violaciones a derechos por los propios tribunales.

Por ejemplo, en el caso del Tribunal Especial de Derechos Humanos en Indonesia, creado para juzgar las graves violaciones cometidas en Timor Oriental, el Alto Comisionado de Naciones Unidas se ha manifestado cuanto a los resultados alcanzados, apuntando su profunda preocupación con algunos defectos procesales graves y que fueron advertidos por los observadores de las Naciones Unidas que siguieron la mayoría de los juicios, como la jurisdicción geográfica y temporal limitada del tribunal, la ausencia de fiscales y jueces experimentados, el ambiente intimidatorio

---

<sup>774</sup> En el título “Efectividad restringida”, de la Tercera Parte, ítem II.

<sup>775</sup> Segunda Parte, ítem 2.B.

y a veces hostil en la sala de audiencias, el trato hostil dispensado en el tribunal por algunos jueces, fiscales y defensores a los testigos originarios de Timor Oriental, la levedad de las condenas sin proporción razonable con la gravedad de los delitos cometidos y el hecho de que no haya indicios de que esos juicios van a ser objeto de un seguimiento o de que se vayan a formular cargos contra otros posibles responsables de delitos graves.

Hechos muy graves con críticas bastante severas se han observado también en relación a los juzgamientos de los altos cargos del Gobierno de Saddam Hussein en Irak, y por no haber respetado, en garantía a un juicio justo, *“el derecho a la presunción de inocencia; el derecho a guardar silencio y a no ser obligado a declarar en contra de sí mismo; el derecho a no ser sometido a la tortura ni a otras formas de trato o pena cruel, inhumano o degradante; la exclusión de las pruebas obtenidas como consecuencia de tortura y otras formas de malos tratos; el derecho de las personas detenidas, acusadas formalmente o recluidas a ser informadas de sus derechos, incluido el derecho a representación letrada; el derecho de las personas detenidas, acusadas formalmente o recluidas a la asistencia a un abogado, incluido el derecho a no ser interrogadas en ausencia de su abogado; la prohibición de la detención y reclusión arbitrarias en todas las situaciones; el derecho de las personas detenidas o recluidas a comparecer sin demora ante un juez; el derecho a impugnar la legalidad de la detención; el derecho a ser representado por un abogado de su elección sin restricciones innecesarias, como la exclusión de abogados no iraquíes como defensores principales; el requisito de que la parte acusadora deba demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable para conseguir una declaración de culpabilidad; criterios claros y rigurosos para cerrar una vista al público; la prohibición de los juicios in absentia; el derecho a recurrir contra la condena, reconociendo toda la gama de motivos para presentar recurso; el derecho a recibir indemnización por detención o reclusión arbitrarias; el derecho a recibir indemnización por error judicial; disposiciones adecuadas que regulen los juicios de menores; y el derecho a traducción e interpretación efectivas en todas las etapas de los procedimientos”*<sup>776</sup>.

---

<sup>776</sup> Estas providencias se encuentran listadas por Amnistía Internacional en el documento *“Iraq: Iraqi Special Tribunal-Fair trials not guaranteed”*, Índice AI: MDE 14/007/2005, del 13 de mayo de 2005, disponible en [web.amnesty.org/library..](http://web.amnesty.org/library..)

Específicamente en cuanto al juzgamiento de Saddam Hussein, “*se le han negado el acceso a asistencia letrada durante el primer año de su reclusión, y el Tribunal no se ha ocupado del modo adecuado de las quejas que sus abogados presentaron durante el juicio en relación con los procedimientos, mas allá del proceso de apelación que se ha llevado a cabo con apresuramiento y en él no se rectificó ninguna de las deficiencias del juicio*”<sup>777</sup>.

La gravedad de las situaciones retractadas, no bastasen el hecho en si mismo, es que fueron producidas en el entorno de la propia estructura de protección a los derechos humanos, y sin que se hubiesen adoptado medidas concretas a evitarlas o mismo reprocharlas, con las responsabilidades correspondientes, incluso por la falta de identificación de una instancia adecuada a la debida apuración de los hechos.

Así, con la existencia de un Tribunal Mundial de Derechos Humanos se puede concebir en su jurisdicción atribuciones para conocer y juzgar aquellos casos de violaciones al debido proceso, practicadas por los tribunales penales provisorios que no cumplen las reglas internacionales de derechos humanos, sin que eso se confunda con una instancia de revisión de las decisiones de mérito de aquellos tribunales, y ni que se convierta el Tribunal Mundial de Derechos Humanos, de naturaleza no-penal, en más una instancia jurisdiccional internacional penal.

### **III – EL TRIBUNAL MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS**

El discurso del alcance de una mayor efectividad en la realización de los derechos humanos se concluye en esta tesis con la propuesta de creación de un Tribunal Mundial de Derechos Humanos.

---

<sup>777</sup> Según Amnistía Internacional en su Informe 2007, disponible en <<http://thereport.amnesty.org/document/172>> [Consulta: 10 de agosto de 2009].

En los capítulos a continuación serán presentados algunos breves aspectos en los cuales se pueden amparar la existencia de aquel Tribunal, desde su base normativa, hasta su competencia, estructura y funcionamiento.

Es importante poner en relieve que el intento principal de esta tesis es justificar la necesidad de existencia de un tribunal internacional de derechos humanos, por reconocer que el sistema internacional de protección no se encuentra debidamente constituido para asegurar una mayor efectividad en la realización de aquellos derechos, y, a su vez, pudiendo avanzar en una mayor efectividad con la existencia de un órgano judicial internacional, en los modelos de los actuales tribunales de derechos humanos de jurisdicción continental/regional, pero con alcance más amplio, a toda la gente del mundo, víctima de graves violaciones no-criminales a los derechos humanos.

No cabe a esta tesis presentar un modelo completo, detallado, cerrado de aquel tribunal. La propia dimensión de las características que deben tener un tribunal, como su estructura, competencia y funcionamiento es, en realidad, un tema tan vasto y minucioso que comporta, eso sí, ser objeto de un trabajo específico, como alias, hicieron MANFRED NOWAK, JULIA KOZMA<sup>778</sup>, y MARTIN SCHEININ<sup>779</sup>, al presentaren una propuesta de Estatuto de un Tribunal Mundial de Derechos Humanos.

Así, los puntos a seguir, presentados en líneas generales, sirven, en realidad, como argumentos para reforzar un tema tan relevante y en lo cual no hay, todavía, una conciencia colectiva de su aceptabilidad, y para comprobar como es factible la existencia de un Tribunal Mundial de Derechos Humanos.

---

<sup>778</sup> "A World Court of Human Rights", texto original en inglés, disponible en <<http://www.udhr60.ch/report/hrCourt-Nowak0609.pdf>> [Consulta: 2 de julio de 2011].

<sup>779</sup> "Towards a World Court of Human Rights", texto original en inglés, disponible en <[http://www.udhr60.ch/report/hrCourt\\_scheinin0609.pdf](http://www.udhr60.ch/report/hrCourt_scheinin0609.pdf)> [Consulta: 2 de julio de 2011].

## **1 - BASE NORMATIVA PARA VIABILIZAR LA CREACIÓN DE UN ÓRGANO JUDICIAL INTERNACIONAL GLOBAL DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS**

*“La protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional deben ser universales y llevarse a cabo de modo incondicional”.* Este es el contenido del artículo 8, de la “Declaración y Programa de Acción de Viena”, proclamada en la Segunda Conferencia Mundial, y que refuerza el deseo de la comunidad internacional de no relajar en la preocupación de una efectiva protección a los derechos humanos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es otro documento que posee rasgos suficientes a ofrecer base para impulsar la creación de un órgano judicial universal, pues se ha convertido en *“el motor que ha echado a andar la maquinaria de protección internacional de los derechos humanos”*<sup>780</sup>, hasta porque la Declaración refleja la certidumbre de que toda la humanidad comparte algunos valores comunes<sup>781</sup>.

El preámbulo de la Declaración Universal es suficiente para traducir su importancia como cauce jurídico a la protección internacional de los derechos humanos:

### *“Preámbulo*

*Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;*

*Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del*

---

<sup>780</sup> FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P. A., “Presentación”, en VVAA, *La Desprotección Internacional de los Derechos Humanos (a la luz del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)*, Universidad de Huelva, Huelva, 1998, p. 11.

<sup>781</sup> MARKIEGI, X, “Balance en Euskadi 50 años después”, en *Los Derechos Humanos en un mundo dividido*, Universidad de Deusto, Bilbao, 1999, p. 248.

*hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;*

*Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;*

*Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;*

*Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;*

*Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y*

*Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;*  
*(...)”*

La Declaración, al proclamar el comprometimiento de la humanidad con el “reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”, considerando como “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho” y que es primordial “el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre” revélase como importante base a garantizar los intentos en tornar efectiva y real la práctica de respeto a los derechos humanos.

No se desconoce que la Declaración es una proclamación solemne de la Asamblea General de la ONU, y que, en su origen, no tenía efectos obligatorios a los Estados partes. Pero no se desconoce también que hoy, al contrario, “la gran mayoría de los derechos que contiene tienen naturaleza jurídica consuetudinaria y alcance ‘erga omnes’, por lo que su respeto y cumplimiento es exigible a todos los

*Estados*<sup>782</sup>. Así como ocurre con muchos otros instrumentos de las Naciones Unidas, de carácter meramente recomendatorio en su origen y que pueden “*llegar a tener fuerza vinculante cuando se convierten en práctica generalmente aceptada como Derecho por los Estados, esto es, cuando se rodean de los elementos materiales y espirituales que determinan la existencia de una costumbre*”<sup>783</sup>, y pudiendo generar, en consecuencia, lo que se conoce como la obligatoriedad consuetudinaria.

Otra base importante para amparar la existencia de un tribunal internacional de derechos humanos es la Carta de Naciones Unidas.

En sus “propósitos y principios”, contenidos en el artículo 1.3, emerge el compromiso de hacer realidad la cooperación internacional “*en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos*”, como también reafirma el artículo 55.c, en el sentido del “*respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivo de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades*”, comprometiendo a todos sus miembros a “*tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de sus propósitos consignados en el artículo 55*”, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56, compromiso que fue reafirmado en la mencionada Segunda Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, en 1993, en Viena, incluso al establecer como prioritaria la cuestión de los derechos humanos por la comunidad internacional.

Del texto mencionado se señala la preocupación que la Carta ha destacado en cuanto a la “*efectividad*” en hacer cumplir tales derechos, compromiso en el cual se basa el presente trabajo para justificar la necesidad de adoptar medidas más eficientes contra las vulneraciones de los derechos humanos.

---

<sup>782</sup> QUISPE, Florabel, “El agotamiento de recursos internos en los sistemas regionales de protección de los derechos humanos”, en VVAA, *Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos*, Ano 8, vol. 8, n. 8, Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, Fortaleza, 2008, p. 81.

<sup>783</sup> RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, en VVAA, *Consolidación de Derechos y Garantías: Los Grandes Retos de los Derechos Humanos en el Siglo XXI.*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, p. 267.



Sobre esto no está demás recordar que en los objetivos de la constitución de la Organización de las Naciones Unidas se incluye *“reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”,* así como, la de *“crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional”*.

Y para el alcance de sus objetivos, propósitos y principios, la propia Carta ha asegurado a las Naciones Unidas el poder de definir y establecer *“los órganos subsidiarios que se estimen necesarios”*, conforme el contenido de su artículo 7.2.

A su vez, la Carta de Naciones Unidas ha conferido específicamente a la Asamblea General, en el artículo 22, la posibilidad de establecer organismos subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus funciones.

Con relación a la Asamblea General, y siguiendo los propósitos de la Carta de Naciones Unidas, ejemplos muy destacables son los órganos por ella creados, como el Alto Comisionado de Derechos Humanos para Naciones Unidas-ACNUDH, en 1993, por la Resolución 48/141, e, recientemente, el Consejo de Derechos Humanos, por la Resolución A/RES/60/251, aprobada el 15 de marzo de 2006.

Estos órganos creados por iniciativa de la Asamblea General, muestran una nueva fase de mayor intensidad de sus labores, fruto de los poderes que ya dispone para concretar la defensa de los derechos humanos, hasta porque, de acuerdo con el artículo 13.1.b, de la Carta de Naciones Unidas, le cabe hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos.

En los casos apuntados, la justificación para la existencia, así como la plena y regular labor de aquellas instituciones, no fue otro que el propio deber de las Naciones Unidas en adoptar medidas que tornen efectiva la tutela de los derechos humanos, como se ha definido en las disposiciones constitutivas de la Carta de su creación.

Así, debido a su elevada autoridad política y a su relevante significación moral para todos los Estados, la creación de un Tribunal Mundial de Derechos Humanos puede darse por iniciativa de la Asamblea General, con la proposición o recomendación de un nuevo Tratado internacional, como un nuevo Protocolo al Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Otra alternativa a la creación de aquel tribunal es la presentada por MANFRED NOWAK y JULIA KOZMA, de la Universidad de Viena, al proponer un modelo similar al de la creación del Tribunal Penal Internacional, y que se basaría en un nuevo tratado, el Estatuto del Tribunal Internacional de Derechos Humanos, elaborado por el Consejo de Derechos Humanos y aprobado por la Asamblea General, o aprobado por una conferencia especial de los Estados-Parte, como el Estatuto de Roma. Aquel Estatuto entraría en vigor después del depósito de los instrumentos de ratificación de un número definido de Estados, y que sugieren sean 20 países.

Bajo el tema, han dicho: *“Our proposal of establishing a World Court of Human Rights could be achieved smoothly without any treaty amendment and without abolishing the present treaty monitoring bodies. Similar to the ICC, the World Court would be based on a new treaty, the Statute of the World Court of Human Rights. As other human rights treaties, this Statute should be drafted by the Human Rights Council and adopted by the General Assembly. If States would prefer, it could also be drafted and adopted by a special State Conference, similar to the Rome Statute of the ICC. In any case, the Statute shall enter into force after a sufficient number of States, as provided for in the Statute, will have deposited their instruments of ratification, accession nor succession”*<sup>784</sup>.

El modo como se podría crear el Tribunal Mundial también es presentado por STEFAN TRECHSEL, ex Presidente de la Comisión Europea de Derechos Humanos, al publicar el artículo “A World Court for Human Rights?”<sup>785</sup> y que admite la posibilidad

---

<sup>784</sup> “A World Court of Human Rights”, op. cit, página 19.

<sup>785</sup> Publicado en 2004, en Northwestern University Journal of International Human Rights, 1 NW. U. J. INT'L HUM. RTS. 3, at Volume 1, de la el Northwestern University School of Law, disponible en Internet, <<http://www.law.northwestern.edu/journals/jihr/v1/3/trechsel.pdf>>[Consulta: 8 de julio de 2011].

de se observar el mismo modelo del Estatuto de Roma. Sugiere, también, un modelo basado en la Corte Internacional de Justicia, por una enmienda a la Carta de Naciones Unidas, con el voto de dos tercios de sus miembros, realzando que esta opción resultaría en proporcionar la máxima autoridad a aquel órgano<sup>786</sup>.

También MARTIN SCHEININ<sup>787</sup>, al proponer la creación de un Tribunal Mundial de Derechos Humanos, presenta como base para su existencia un tratado internacional elaborado, aprobado y ratificado por los Estados, y de modo que ningún Estado se convertirá en parte del Estatuto sin su explícito consentimiento. Incluso presenta como modelo más cercano al tribunal el Comité de Derechos Humanos<sup>788</sup>.

Las propuestas presentadas, así, refuerzan el entendimiento de que hay posibilidades jurídicas de creación de un tribunal internacional de derechos humanos.

## **2 – COMPETENCIA MATERIAL DEL TRIBUNAL MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS**

Cuanto al alcance de las violaciones a derechos humanos sometidas a un Tribunal Mundial, estas podrían considerar, como punto de partida, los derechos que se identifican como “estándar mínimo universal”, que son intangibles, inviolables, inherentes a la dignidad de la persona, y que son, como apuntado en líneas atrás, el derecho a la vida, a la integridad física y moral, incluyendo el derecho a no ser sometido a esclavitud, o servidumbre, el derecho a un juicio imparcial, a la legalidad, a la irretroactividad de la ley penal, a ser sometido a un proceso debido y a gozar de las garantías penales básicas, a la personalidad jurídica y a crear una familia y el derecho a las libertades de pensamiento, conciencia y religión<sup>789</sup>.

---

<sup>786</sup> Idem, p. 07.

<sup>787</sup> “Towards a World Court of Human Rights”, pág. 19, texto original en inglés, disponible en <[http://www.udhr60.ch/report/hrCourt\\_scheinin0609.pdf](http://www.udhr60.ch/report/hrCourt_scheinin0609.pdf)> [Consulta: 2 de julio de 2011].

<sup>788</sup> Idem, p. 10.

<sup>789</sup> Esta mención al estándar mínimo universal es del profesor FERNANDO MARIÑO y fue mencionada en la Cuarta Parte, I.1, bajo el título “El discurso de la universalidad como cauce de una jurisdicción global”.

Más allá, se puede considerar como alcanzados por la competencia de un Tribunal Mundial de Derechos Humanos los derechos apuntados por el artículo 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como derechos inalcanzables por la suspensión o restricción del estado de excepción, y así explícitamente reconocidos:

*“1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.*  
*2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.*  
*(...)”*

Los mencionados artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18 disponen sobre el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida, a no ser sometido a la tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, a no ser sometido a la esclavitud o a la servidumbre, a no ser encarcelado por solo no poder cumplir una obligación contractual, el derecho a la no retroactividad de la ley penal, al derecho al reconocimiento de la personalidad y a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión.

En la Convención Europea y la Convención Americana también se registran derechos con aquella naturaleza de intangibilidad<sup>790</sup>. Podría optarse también por otras violaciones a los derechos civiles y políticos, y relacionadas, por ejemplo, a determinados y muy definidos valores como al derecho a la no discriminación, a la

---

<sup>790</sup> Conforme apuntado por LEANDRO DESPOUY al discurrir sobre la “Intangibilidad del Ejercicio de los Derechos Humanos Fundamentales”, en *Los Derechos Humanos y los Estados de Excepción*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1999, pp. 47-54.

integridad física y moral de las personas, a la libertad de locomoción, de pensamiento, y de los temas involucrados con el amplio acceso a un Judiciario libre e independiente, como las garantías procesales de un Juez natural, de la independencia interna y externa de la magistratura, de la cosa juzgada, del contradictorio, la paridad entre acusación y defensa, la presunción de inocencia, la publicidad, sin perjuicio de nuevos desafíos en se evitar violaciones a derechos esenciales a la manutención de una vida digna, como de los refugiados por desplazamientos forzados o expulsiones masivas, es decir, en un catálogo mínimo de protección.

En la definición del que podría ser un cartel mínimo de protección universal, BOBBIO habla en “*valor absoluto*” para definir el status que compete a poquísimos derechos humanos, “*valederos en todas las situaciones y para todos los hombres sin distinción*”<sup>791</sup>, cita, entre estos, el derecho a no ser sometido a la tortura y a la esclavitud, pues las correspondientes acciones que se consideran ilícitas son condenadas universalmente.

A su vez, los derechos sociales, económicos y culturales, por ejemplo y, en un primero momento, estarían excluidos de la competencia del Tribunal Mundial, pues el propio Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sólo trató tales derechos como compromisos de los Estados-partes en adoptar medidas para lograr progresivamente su plena efectividad, conforme su artículo 2.1, al contrario de los derechos descritos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que han sido considerados como obligaciones a los Estados-parte.

Aspecto importante cuanto al alcance de los derechos económicos, sociales y culturales es que en los sistemas judiciales internacionales de protección a los derechos humanos, dichos derechos, sólo raramente, en casos muy específicos, encuentranse alcanzados por la jurisdicción de los tribunales europeo, americano y africano.

---

<sup>791</sup> NORBERTO BOBBIO, en su artículo “Presente y Porvenir de los derechos Humanos”, en VVAA, *Anuario de Derechos Humanos...*, op. cit., pp. 09-28.

En el Tribunal Europeo la competencia se restringe a los temas de derechos humanos definidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus Protocolos 1, 4, 6, 7, y 13. En ellos, la esencia de la protección se concentra en los derechos civiles y políticos, y excepcionalmente se pudiendo mencionar derechos de la categoría económico, social o cultural, como el derecho a la instrucción, previsto en el artículo 2, del Protocolo 1<sup>792</sup>, el derecho a la indemnización por error judicial, en el artículo 3, del Protocolo 7<sup>793</sup>, y los derechos que deben ser observados en el ámbito familiar, conforme artículo 5, del mismo Protocolo 7.

De igual modo, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, instrumento al cual se vinculan los países sometidos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al tratar de los derechos económicos, sociales y culturales, en su artículo 26, ha definido apenas un compromiso en se adoptar providencias para lograr progresivamente su plena efectividad. Mismo el protocolo adicional a la Convención Interamericana, “Protocolo de San Salvador”, del 17 de noviembre de 1988, al dar otra dimensión a los derechos económicos, sociales y culturales, disponiendo cuanto a la obligación de los estados-partes en adoptar medidas al cumplimiento de aquellos derechos, solamente ha previsto ser sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana la violación a los derechos de asociación sindical y al derecho de educación, conforme definido en su artículo 19.6<sup>794</sup>, a pesar de aquel Protocolo traer un abanico de derechos mucho más amplio, como el derecho al trabajo, derechos sindicales, derecho a la seguridad social, a la salud, a un medio ambiente sano, a la alimentación, derecho a los beneficios de la cultura, derecho a la constitución y protección de la familia, derecho de la niñez, protección de los ancianos y protección de los minusválidos<sup>795</sup>.

---

<sup>792</sup> Firmado em Paris, el 20 de marzo de 1952, y ratificado em Itália, em 26 de octubre de 1955.

<sup>793</sup> Suscrito em Estraburgo el 22 de noviembre de 1984 y en vigor en Itália, el 1 de febrero de 1992.

<sup>794</sup> “19.6. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

<sup>795</sup> En el artículo doctrinario intitulado “Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales”, el profesor y juez MANUEL E. VENTURA ROBLES, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presenta cuatro casos contenciosos y un de opinión consultiva en que la Corte Interamericana enfrentó la violación de los derechos sociales, económicos y culturales, en aquellos casos contenciosos, específicamente, en

El mismo fenómeno de ausencia de justicialidad internacional de los derechos económicos, sociales y culturales observase en relación al sistema africano, a pesar de aquellos derechos estar en la Carta Africana de Derechos Humanos, juntamente previstos con los derechos civiles y políticos, pero no se conociendo conquistas en su protección por la Corte Africana de Derechos Humanos.

En realidad, el que se viene observando en las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales es que el incumplimiento a sus obligaciones lleva a la violación de los propios derechos civiles y políticos, como, por ejemplo, a la tortura física y moral, a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es decir, de modo reflejo la ausencia de vivienda, alimentación, empleo, educación, medio ambiente sano, o mismo la deficiencia en estas, es que pueden, también, desencadenar violaciones a la integridad física, moral, o a las libertades de las personas<sup>796</sup>, y desde ahí justificando una demanda junto a un tribunal internacional.

La reducida y concreta intervención judicial internacional en temas de derechos económicos, sociales y culturales llevó el Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos MANUEL E. VENTURA ROBLES a afirmar que la justicialidad de aquellos derechos es, en realidad, un tema de gran desafío hacia el futuro<sup>797</sup>.

Y a pesar de los sistemas regionales no contemplaren un alcance muy amplio de su competencia jurisdiccional, MANFRED NOWAK y JULIA KOSMA, en el reciente trabajo doctrinario sobre la creación de un Tribunal Mundial de Derechos Humanos<sup>798</sup>, presentado en 2009, proponen que su competencia debe alcanzar a los derechos humanos previstos en los tratados de Naciones Unidas y sus organismos

---

temas de la costumbre de las comunidades indígenas (Caso Aloeboetoe vs. Suriname; Caso de la Comunidad Indígena Mayagna –Sumo Awas Tingni vs. Nicaragua), de derechos sindicales (Caso Baena Ricerdo y otros vs. Panamá), y de derechos a la seguridad social (Caso de los Cinco Pensionistas vs. Perú). La opinión consultiva abordó el tema de violación al derecho laboral de los migrantes indocumentados. El trabajo fue publicado en la *Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos*, número 40, julio-diciembre de 2004, San Jose Costa Rica, 2005, pp. 87-131.

<sup>796</sup> Eso, alias, es la advertencia presentada por la ONG Organización Mundial contra la Tortura, en artículo disponible en <<http://www.omct.org/es/escr/about/disrespect-lead-to-violence/>> [Consulta: 10 de junio de 2011].

<sup>797</sup> Op. cit., p. 131.

<sup>798</sup> Op. cit., págs. 48-50.

especializados, y que se encuentran apuntados en el anexo I<sup>799</sup> del proyecto de Estatuto que sugieren, en conformidad con el artículo 7. A su vez, sostienen que los Estados pueden declarar reservas, aún que sean a algunas de sus disposiciones, y, todavía, declarar sin efectos la reserva, a cualquier tiempo.

La propuesta encuéntrase presentada en estos términos:

*“Article 35: Entry into force*

*1. The present Statute shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification, accession or succession.*

*2. For each State ratifying the present Statute or acceding or succeeding to it after the deposit of the twentieth instrument of ratification, accession or succession, the present Statute shall enter into force on the thirtieth day after the deposit of its own instrument of ratification, accession or sucesión.*

---

<sup>799</sup> Son treinta convenios: Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de 1966; Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, destinado a la abolición de la pena de muerte, de 1990; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966; Convención sobre la Abolición de la Esclavitud, de 1926; Protocolo de Enmienda a la Convención de Abolición de la Esclavitud, de 1930; Convenio 29 sobre el Trabajo Forzado, de 1930; Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948; Convención 87 de la OIT sobre la Libertad Sindical y el Derecho de Sindicalización, de 1948; Convención 98 de la OIT sobre el Derecho de Sindicalización y Negociación Colectiva, de 1949; Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1967; Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, de 1952; Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954; Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, de 1956; Convención 105 de la OIT sobre la Abolición del Trabajo Forzado, de 1957; Convención 111 de la OIT sobre la Discriminación en el Empleo y Ocupación, de 1958; Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de Matrimonios, de 1962; Convención sobre la Eliminación de la Discriminación en la Educación, UNESCO, de 1962; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965; Convención sobre todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crues, Inhumanos o Degradantes, de 1984; Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados, de 2000; Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, Prostitución y Pornografía Infantil, de 2000; Convención 169, de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de 1989, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, de 1990; Convenio 182 de la OIT sobre las Formas de Trabajo Infantil, de 1999; Convenio 183, de la OIT relativo a la Protección de la Maternidad, de 2000; Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada del Delito Transnacional, Protocolo de Palermo, de 2000; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006; Convenio Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2006.



#### *Article 36: Reservations*

- 1. Each State may, at the time of ratification of this Statute or accession thereto, declare that it does not recognize the jurisdiction of the Court in relation to certain human rights treaties listed in Annex 1 or certain provisions thereof.*
- 2. Any State Party having made a reservation in accordance with paragraph 1 of this Article may, at any time, withdraw this reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.*
- 3. Other reservations shall not be made to this Statute.*

#### *Alternative Article 36: Declaration on jurisdiction and reservations by States Parties*

- 1. Each State may, at the time of ratification of this Statute or accession thereto, declare which human rights treaties listed in Annex 1 shall be subject to the jurisdiction of the Court.*
- 2. Any State Party may at any later time declare that it also recognizes the jurisdiction of the Court with respect to other treaties listed in Annex 1.*
- 3. A declaration made under this Article cannot be withdrawn.*
- 4. No reservations to the present Statute shall be permitted.”<sup>800</sup>*

Evidente que definir un catálogo mínimo de derechos<sup>801</sup> que deban estar sometidos a un órgano de jurisdicción universal no es tarea fácil, y resulta en labor complejo y de difícil solución. A cada día aparecen *nuevas demandas de libertad y de poderes*<sup>802</sup>, nuevas situaciones y desafíos que se identifican como necesarios a recibir el reconocimiento y protección con status de derechos humanos, o sea “*las nuevas fronteras que el mundo se plantea*”<sup>803</sup>, como el derecho a un medio ambiente sano, al patrimonio genético, la identidad colectiva, las comunicaciones virtuales, las

---

<sup>800</sup> Idem, pp. 45-6.

<sup>801</sup> En los XXI Cursos de Verano en San Sebastián/XIV Cursos Europeos-UPV/EHU 2002, se han debatido temas como “Los avances tecnológicos y los riesgos del progreso en los derechos fundamentales”, “La ausencia de garantías en las bases de datos de ADN en la investigación penal”, “La agencia de protección de datos como instrumento de garantía de los derechos de los ciudadanos”, conforme se puede ver en *Derechos Humanos y nuevas tecnologías (Colección “Jornada sobre derechos humanos” n. 6)*, Ararteko, San Sebastián, 2001.

<sup>802</sup> NORBERTO BOBBIO, en su artículo “Presente y Porvenir de los derechos Humanos”, en VVAA, *Anuario de Derechos Humanos*, 1, Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Madrid, 1981, pp. 09-28.

<sup>803</sup> OSSET, M., *Más allá de los derechos humanos*, DVD ediciones, Barcelona, 2001, p. 305.

relaciones afectivas transnacionales<sup>804</sup>, derecho al acceso a medicamentos esenciales, como tuberculosis, SIDA y malaria, y mismo el derecho a la transferencia tecnológica a asegurar una mejor calidad de vida como una condición mínima a la dignidad humana, como son los recursos disponibles al acceso a agua potable, alimentos, vestuario y enseñanza<sup>805</sup>.

Efectivamente es una tarea difícil la definición de un estándar mínimo de protección jurisdiccional internacional a toda la gente. Las demandas de tutelar ciertos derechos antes inimaginables tornan aquella tarea desafiadora en la misma medida en que se reconoce que, siendo los derechos humanos fruto de la propia civilización, son derechos históricos, y, por eso, mutables, susceptibles de transformación y ampliación muy considerables<sup>806</sup>.

Hasta mismo los estudiosos de los derechos humanos encuentran dificultades de definir un rol mínimo de estos derechos que formen un núcleo duro, común e indispensable a toda la gente del mundo<sup>807</sup>, independientemente de las particularidades de raza, etnia, cultura, sexo, historia, etc.

---

<sup>804</sup> En este caso son muy típicas las situaciones de parejas con distintas nacionalidades y que tienen hijos. Con la ruptura del matrimonio y el cambio de domicilio de uno de la pareja a otro país, generalmente a su país de origen, y en vista del deseo de los padres de mantener el convívio permanente con su hijo, se instaura preocupante pelea, muchas veces acentuada por las legislaciones nacionales, a proteger situaciones distintas a favor del padre o de la madre, cuestiones que, por sus complejidades, muchas veces esbarran en la protección internacional al derecho del niño, al derecho de la mujer, a temas de cárcel privado, de secuestro y que muchas veces las justicias nacionales no consiguen dar solución que se adecuen a las normas internacionales de derechos humanos.

<sup>805</sup> FLAVIA PIOVESAN, en entrevista a la Revista eletrónica CONJUR, publicada el 05 de abril de 2009, bajo el título “Direitos Humanos terão jurisprudência global”, en [www.conjur.com.br](http://www.conjur.com.br).

<sup>806</sup> Como ha dicho NORBERTO BOBBIO en su artículo “Presente y Porvenir de los derechos Humanos”, en VVAA, *Anuario de Derechos Humanos*,,,, op. cit., pp. 09-28.

<sup>807</sup> Como ejemplo se puede citar el catálogo ofrecido por el profesor NATAN LERNER, de la Universidad de Tel Aviv, Israel, que imparte Derecho Internacional y Derechos Humanos en las Facultades de Derecho del Centro Interdisciplinario Herzliya, y que, sin excluir derechos de otra naturaleza, describe un rol bien amplio y definido cuanto a los derechos de las minorías que la comunidad internacional debe reconocer y proteger, como el derecho a la existencia y seguridad física, a la no discriminación, a la preservación de la identidad del grupo, incluso el derecho a ser diferente; el derecho a medidas especiales para asegurar la identidad colectiva y los derechos de las minorías; el derecho a decidir quien está calificado para ser miembro del grupo minoritario; el derecho a establecer instituciones; el derecho a asociarse, comunicarse, federarse y cooperar con grupos similares; el derecho a imponer deberes y cargas a los miembros de las minoría a fin de asegurar su existencia y de las de sus instituciones, escuelas, etc; el derecho, en determinadas situaciones a estar representadas en las diferentes ramas del gobierno y al reconocimiento de determinada personalidad legal, a nivel nacional o internacional; el derecho, en determinados casos, a la auto-determinación, que puede o no involucrar el derecho a una soberanía distinta. Este catálogo es presentado en su artículo “Las Minorías Étnicas, Religiosas y Culturales en el Derecho Internacional Contemporáneo”, en VVAA,

No obstante, y contrariamente a la tendencia actual de se expandir cada vez más el catálogo de derechos que se identifican como “derechos humanos”, esta realidad no se puede traducir en imposibilidad y obstáculo a impedir el propio reconocimiento de una protección jurisdiccional internacional global a unos derechos mínimos e irrenunciables, ejercida por un Tribunal Mundial de Derechos Humanos, pues, indudablemente, estos derechos mínimos e irrenunciables, comunes a cualquier individuo, existen de verdad, y hasta porque lo esencial no son más las declaraciones de derechos sino que su efectiva protección.

Desde ahí la importancia de que esta protección, por lo menos, se haga de verdad en aquellas situaciones improrrogables a la preservación de la propia condición humana de sus titulares, en cualquier tiempo y lugar, constituyéndose en un sustrato de derechos predicable a todos<sup>808</sup>.

La jurisdicción supranacional ejercida por un Tribunal Mundial de Derechos Humanos podría, así, identificarse con *“un conjunto de derechos humanos básicos inviolables que son innegociables, es decir, que no están sujetos a diferentes interpretaciones, son un mínimo imprescindible para llevar a cabo una vida con dignidad”*, como ha manifestado el Profesor ERNESTO GARZÓN VALDÉS, al discurrir sobre la universalidad de los derechos humanos como una conquista histórica a la que no se debería renunciar<sup>809</sup>.

Por otro lado, el Tribunal Mundial de Derechos Humanos no tendría cualquier competencia criminal, y solamente se vincularía a demandas contra los Estados, no se admitiendo conocer demandas dirigidas contra un individuo o institución privada como no se admiten en los actuales tribunales internacionales de derechos humanos<sup>810</sup>.

---

*Boletín Europeo de la Universidad de La Rioja-BEUR*, n. 4, diciembre 1998 (suplemento), Logroño, 1998, pp. 02-06.

<sup>808</sup> VELARDE, C., *Universalismo de Derechos Humanos – Análisis a la luz del debate anglosajón*, Thomson Civitas, Madrid, 2003, p. 18.

<sup>809</sup> Conferencia en el *“Forum de Deusto”*, p. 16.

<sup>810</sup> En reciente trabajo, publicado en 2009, MANFRED NOWAK y JULIA KOSMA, “A World Court Human Rights”, en <<http://www.udhr60.ch/report/hrCourt-Nowak0609.pdf>> [Consulta: 2 de julio de 2011], y MARTIN SCHEININ “Towards a World Court Human Rights”, en <[http://www.udhr60.ch/report/hrCourt\\_scheinin0609.pdf](http://www.udhr60.ch/report/hrCourt_scheinin0609.pdf)> [Consulta: 2 de julio de 2011], defienden

Un detalle importante es que la competencia material debe estar limitada al componente temporal, es decir, el tribunal solamente debe conocer de los hechos que se refieran a acontecimientos ocurridos tras las ratificaciones de su funcionamiento. Mas allá, la posibilidad de demandas no debe referirse a hechos ocurridos a más de seis meses, ni a casos con procesos judiciales en que el agotamiento de los recursos internos ya haya ultrapasado aquel período.

### **3 – COMPETENCIA FUNCIONAL DEL TRIBUNAL MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS**

En el tópico anterior se trató de los temas que pueden ser objeto de un Tribunal Mundial de Derechos Humanos. Ahora se va a tratar de los límites del funcionamiento del tribunal, o de los límites de su campo de actuación.

Es importante afirmar que la necesidad de un Tribunal Mundial de Derechos Humanos se presenta como alternativa para llenar el hueco al que están sometidas muchas víctimas de violaciones no-penales de derechos humanos que no disponen de ninguna estructura internacional para su protección. Los modelos actuales de protección internacional jurisdiccional, de límites regionales en parte de América y Caribe, en parte de África, y en parte de Europa, no alcanzan gran parte de la población mundial, la cual queda desamparada de idéntica e calificada protección.

Así, al plantearse la posibilidad de creación de un Tribunal Mundial de alcance global no se está imaginando que sirva como parte integrante de los sistemas regionales ya existentes. Definitivamente no. Trátase de un sistema autónomo, independiente, coexistiendo con los sistemas jurisdiccionales internacionales regionales, y exactamente con la misma autonomía e independencia que los tribunales regionales actuales observan entre sí. No se trata, en hipótesis alguna de admitir que sea un tribunal internacional de segundo grado, o un tribunal de recurso, en relación a los tribunales europeo, americano y africano. Las víctimas de

---

que las violaciones de derechos humanos deben ser consideradas también en relación a particulares, como organizaciones internacionales, empresas transnacionales, organizaciones no-gubernamentales y por comunidades autónomas dentro de un Estado.

violaciones a derechos humanos ya protegidas por los sistemas regionales es que pasarán a tener más una posibilidad de protección internacional jurisdiccional, en estos casos, de naturaleza complementaria, si acaso no actúa la jurisdicción internacional regional, y que estaría automáticamente excluida con la actuación del tribunal internacional de derechos humanos.

No obstante la restricción de la competencia de un Tribunal Mundial de Derechos Humanos en relación a otros Tribunales Internacionales de aquella misma naturaleza, un punto muy importante a posibilitar la actuación de aquel Tribunal Mundial es con relación a los tribunales penales internacionales provisorios. En este sentido, un caso concreto y muy destacable ha sido el juzgamiento y condena a la muerte de Saddam Hussein por el Tribunal Especial en Irak, como se ha destacado anteriormente<sup>811</sup>, y que, según Amnistía Internacional, se han producido graves violaciones a las garantías de un enjuiciamiento justo e imparcial.

#### **4 – ESTRUCTURA**

Tratándose de un Tribunal vinculado a las Naciones Unidas, su estructura debe vincularse a la propia dimensión de aquella organización internacional. Más allá, es muy significativo que todos los países tengan la oportunidad de estar presente en aquel órgano, por su propia identidad universal, y como modo de legitimar el alcance de sus decisiones por todos los países.

Con este propósito, el Tribunal podría tener su estructura formada por un número de Jueces correspondiente a un tercio de los países integrantes de la ONU, y considerándose en aquel resultado los múltiplos de 3, de modo que, actualmente, con 192 países, el número de jueces sería de 60.

El tiempo de mandato podría ser limitado a doce años, sin la posibilidad de renovación del mandato del país al período subsecuente. En los primeros 12 años de existencia del Tribunal 20 jueces tendrían mandato limitado a 4 años, y otros 20 a 8

---

<sup>811</sup> En el capítulo de esta tesis, "Las violaciones a Derechos Humanos por los Tribunales Penales Internacionales Provisorios, Cuarte Parte, I, 11.

años, con sus sucesores pasando a tener mandato de 12 años. Así, a partir de aquellos primeros mandatos de 4, 8 y 12 años, todos los demás Jueces pasarían a tener mandato de 12 años, con renovación de un tercio de los miembros del Tribunal a cada 4 años, con la salida de los que han completado el período de 12 años.

Los mandatos pertenecerían a los Estados, de modo que, por cualquier motivo de vacancia del cargo durante el mandato, el propio país del Juez que generó la vaga se encargaría de indicar nuevo miembro. En la composición del Tribunal siempre debería haber representantes de todos los continentes.

El tiempo de 12 años de mandato permitiría un gran y profundizado conocimiento de los temas de derechos humanos por cada miembro del Tribunal y la no renovación del mandato evitaría la ingerencia política de los Estados con mandato para prorrogaren su permanencia en el Tribunal, más allá de evitar que otros intereses pudiesen influenciar en su composición.

La convivencia de todos los Jueces del Tribunal por un período mínimo de 04 años y por hasta 12 años, facilitaría la fijación de la jurisprudencia del Tribunal debido al intercambio de la experiencia de los casos antiguos con los nuevos casos.

El Tribunal podría dividirse en múltiples órganos de trabajo, donde se producirían los juzgados, como las Salas, y que serían agrupadas en sesiones, definidas en razón de los temas en foco. Podría tener un órgano más amplio, la Gran Sala, para tratar de la uniformización de la jurisprudencia, de la “competencia constitucional”, siendo su composición formada por 1/4 de los jueces con mandato hasta 4 años, 1/4 de Jueces con mandato entre 4 y 8 años, y 1/4 con más de 8 años totalizando 15 Jueces, y siempre procurándose mantener la representación de todos los continentes y culturas.

Las labores del Tribunal podrían observarse con procedimientos que permitan a un solo Juez rechazar las demandas manifiestamente inadmisibles, o en grupo de tres Jueces para resolver los casos admitidos sobre los cuales haya una jurisprudencia clara. Este modelo de actuación y trabajo, que fue aprobado por el

Consejo de Europa para el Tribunal de Estrasburgo, permitiría mayor agilidad en los juzgamientos, evitándose el grave problema de atascos actualmente observados por los Tribunales Regionales de Derechos Humanos, en razón de los miles de casos demandados y que no vienen encontrando una respuesta célere de solución<sup>812</sup>.

## **5 – MECANISMOS DE DEMANDA AL TRIBUNAL**

Las demandas junto al Tribunal podrán ser presentadas por los mecanismos de denuncia interestatal, por denuncia oficial o por denuncia particular.

La denuncia interestatal debe ser prevista por la propia posibilidad de permitir a los Estados una participación directa y efectiva en el control y protección internacional de los derechos humanos, incluso permitiendo una condición de igualdad entre todos los países. Este modelo es disponible en los más diversos medios de protección internacional y su previsión como acceso al Tribunal Internacional de Derechos Humanos reforzaría la importancia de este mecanismo.

En la denuncia interestatal se podrían contener algunas limitaciones como la prevista en los sistemas regionales, de no se poder denunciar al Estado que no haya admitido ser denunciado, y no se admitir la denuncia de un Estado cuando este no haya admitido ser demandado junto al tribunal internacional.

Otra forma es la posibilidad de la denuncia oficial, que es la demanda presentada por un órgano de derechos humanos de Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos y/o el Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos. En estos casos, la actuación de esos órganos se daría directamente junto al tribunal y tras la imposibilidad de se alcanzar éxito en el enfrentamiento de violaciones sufridas cuando ya sometidas a órganos

---

<sup>812</sup> La situación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un caso típico del grave problema que el excesivo número de demandas viene causando, llegando aquel Tribunal a acumular, en datos de marzo de 2009, más de 100.000 demandas pendientes. Para solución del grave problema, el Consejo de Europa há alcanzado, em 12 de mayo de 2009, un acuerdo para desatascar el Tribunal, permitiendo que un solo Juez, al invés de tres, rechace las demandas manifiestamente inadmisibles y que três Jueces, y no más siete, resuelvan los casos com jurisprudência clara.

convencionales o extraconvencionales del sistema de naciones unidas, o mismo para dar al caso una mayor dimensión para su solución.

La demanda individual también debe ser admitida, pero limitada a algunas situaciones definidas en la competencia del tribunal, como puede ser en los casos de extrema gravedad y violación a algunas categorías de derechos humanos, como la protección a la vida, a la integridad física y a las detenciones arbitrarias, y a exigir una acción inmediata con el fin de evitar daños irreparables. Las demandas partirían de la propia víctima o grupo de víctimas.

Y una vez admitida la demanda individual, la víctima podría acompañar su caso directamente junto al Tribunal Mundial, ejerciendo plenamente su participación en el proceso, en igualdad procesal con relación al Estado demandado, siguiéndose, en este aspecto, los modelos de los tribunales europeo e interamericano.

Como la denuncia individual estaría limitada a un reducido abanico de situaciones, como dicho, de riesgo de muerte y a la integridad física, y de detenciones arbitrarias, se puede admitir que dicha demanda sea presentada directamente junto al tribunal, como en el modelo del Tribunal de Estrasburgo. Por ser restricta la posibilidad de demanda individual no se correría el riesgo que viene soportando aquel tribunal europeo, con el desbordamiento de su capacidad, con más de 120.000 demandas pendientes, en datos de marzo del 2009, comprometiendo su propia finalidad, principalmente cuando se tiene la pronta solución judicial como una situación reconocida como de derechos humanos.

Las demás violaciones de derechos admitidas en la competencia del tribunal y que no serían posibles de demanda individual estarían sometidas a la iniciativa de la denuncia interestatal o oficial.



El agotamiento de los recursos internos<sup>813</sup> es una condición de admisibilidad indispensable para aceptar una demanda interestatal, oficial o individual. En este punto, la excepción debe verificarse con relación a los casos en que la violación a derecho humano se identifica con la falta de un órgano judicial independiente o que no observe las garantías procesales, como la de un juicio exento, la amplia defensa, el contradictorio, la igualdad procesal de las partes y un juicio rápido. La existencia de estos casos atraería al Tribunal la competencia para juzgar las violaciones de derechos humanos que el tribunal nacional, por la violación a las garantías procesales, no ha podido incumbirse en el caso concreto.

A su vez, bajo cualquier hipótesis no se admitirían demandas interestatales, oficiales o individuales que se encuentran en tramitación o hayan tramitado por otro tribunal internacional de derechos humanos. Ese impedimento es consecuencia de la propia condición de no ser el Tribunal Mundial de Derechos Humanos una instancia de recurso de otro órgano jurisdiccional internacional, y que, por ser autónomos e independientes, debe el Tribunal Mundial respetar las demás decisiones.

En todos los casos de demandas el Tribunal estaría autorizado a utilizar medidas provisionales urgentes, a ejemplo de los modelos de aquella naturaleza existentes en los tribunales europeo, interamericano y africano de derechos humanos y para evitar que la continuidad de la violación resulte en la continuidad del sufrimiento personal o en hecho irreversible.

Por último, un importante papel que puede desempeñar el Tribunal Mundial de Derechos Humanos es de la jurisdicción consultiva, y relacionada a los casos de interpretación de los tratados de derechos humanos, incluso cuanto a la compatibilidad de la legislación nacional al derecho internacional de los derechos humanos. En todo caso respetada la competencia atribuida al Tribunal Internacional de Justicia en este tema.

---

<sup>813</sup> Sobre el tema ver QUISPE, Florabel, "El Agotamiento de Recursos Internos en los Sistemas Regionales de Protección de los Derechos Humanos", *Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos*, op. cit., pp. 79-91.

Sea en la jurisdicción contenciosa, sea en la consultiva, los modelos y experiencias ya obtenidos con los tribunales regionales europeo, interamericano y africano de protección a los derechos humanos ofrecen subsidios muy profundizados de los mecanismos de protección internacional y de la dinámica de funcionamiento que puede ser aprovechada por el Tribunal Mundial de Derechos Humanos.

## **CONCLUSIÓN**

1 – Desde la mitad del siglo pasado los derechos humanos pasaron a ejercer importante protagonismo en el orden jurídico internacional. Pasadas más de seis décadas, fueron muy expresivos los avances internacionales en el reconocimiento de derechos comunes a todos los hombres.

En aquel período se desencadenó también la trayectoria internacional para garantizar el cumplimiento y para reaccionar en contra a las violaciones de los derechos humanos.

Ya en 1968, la “Proclamación de Teherán”, adoptada por la Primera Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, afirmaba, en su ítem 4, que lo mucho que se había conquistado hasta entonces aún no superaba lo mucho que restaba por hacer en la esfera de la aplicación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Veinticinco años después, la “Declaración y Programa de Acción de Viena”, adoptada en la Segunda Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, del 25 de junio de 1993, ha reforzado el deseo de la comunidad internacional de no relajar en la preocupación de una efectiva protección a los derechos humanos, y expresó la necesidad en superar los desafíos a la plena realización de aquellos derechos y de emprender esfuerzos en su promoción y protección. En este contexto, su artículo 8 evidenció que *“La protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional deben ser universales y llevarse a cabo de modo incondicional”*.

2 – En este escenario de la protección internacional de los derechos humanos, y con el objetivo de alcanzar resultados aún más satisfactorios, en los últimos años fueron adoptadas iniciativas muy concretas, como la creación de nuevos órganos de tratados, el funcionamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la instalación del Tribunal Penal Internacional, y, más recientemente, el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos.

Y no obstante las relevantes conquistas en la estructura internacional global/mundial de protección, estas no se presentaron suficientes para ultrapasar las limitaciones que impiden la efectividad de los derechos humanos, o de hacer cesar sus graves violaciones, traducándose, así, en un modelo de protección todavía incompleto.

Retrato más visible de la necesidad de superación de desafíos del sistema de protección global/mundial son las deficiencias del funcionamiento de los Comités mundiales de derechos humanos. Reconocidos como columnas centrales del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, por su significativa contribución a la promoción y protección, y con largas conquistas alcanzadas, las dificultades enfrentadas por los Comités ya repercuten en su propia credibilidad, como se ha reconocido en la Declaración de Marrakesh, del 10 de junio de 2010, el que indica que los órganos de tratados deben someterse a un proceso de cambio profundo y una mejora importante con el fin de lograr sus objetivos.

3 - Por otro lado, una de las providencias reconocidas como más eficientes para reaccionar en contra a las violaciones de derechos humanos son las que resultan de los tribunales internacionales. Esta protección, todavía, aunque bastante actuante en el continente europeo, en el continente americano es limitada a América del Sur y Central, tiene su funcionamiento muy deficiente en África, e es inexistente en el continente asiático y Oceanía. Son más de ochenta por ciento de la población del mundo sin la protección por un sistema judicial internacional de derechos humanos, y, el que es más grave, en un contingente en que una buena parte de las personas no dispone ni siquiera de una adecuada protección judicial nacional a dar respuesta a las graves violaciones de aquellos derechos, el que bien revela que, a lo mejor, la protección internacional no existe donde es la más necesaria.

Este escenario de la protección judicial internacional existente para algunas personas y para otros no, refleja la constatación de un verdadero y gran apartheid global, aun más cuando violados idénticos derechos, en una realidad que no distingue raza, sexo, etnia, credo, edad, como se pudiera admitir individuos “*fuera de la humanidad*”.

4 – La constatación de deficiencias en el sistema internacional de protección a los derechos humanos es motivo suficiente para despertar en la conciencia colectiva la necesidad de se aproximar cada vez más del problema, en un auténtico enfrentamiento que lleve a se buscar la máxima efectividad posible en la protección internacional de los derechos humanos.

Con este propósito, esta tesis sostiene la necesidad de creación de un Tribunal Mundial de Derechos Humanos. Un tribunal en los moldes de los tribunales internacionales europeo, interamericano y africano de derechos humanos, pero, común a toda la gente del mundo, y para reaccionar a las graves violaciones no-penales de aquellos derechos, y desde cuando el Estado violador no haya adoptado medidas eficaces al cese de la violación y ni cuando los mecanismos internacionales disponibles, mundiales o regionales, tengan sido suficientes para estancar la continuidad de la violación sufrida o para impedir su inicio.

Un tribunal que sea integrado al sistema de Naciones Unidas, con autonomía e independencia, con actuación complementaria a los tribunales nacionales, cuando dejan de actuar o no actúan satisfactoriamente en contra las violaciones de derechos humanos, y con actuación subsidiaria a los tribunales internacionales regionales, si acaso no responden a aquellas violaciones.

5 – La importancia de una tutela judicial se debe al hecho de que en ella se encuentran algunas características como la autonomía, imparcialidad, independencia y transparencia, no disponibles en la protección no-judicial, y, de regla, en una actuación predominantemente técnica y sin las interferencias externas de los intereses políticos, económicos o culturales. En la actuación jurisdiccional las soluciones no tienen solo efectos de orientación o recomendación, sino que de obligación, vinculantes, incluso se pudiendo prever reparación o indemnización. No es demás señalar que el principio de la buena fe y de la obligatoriedad, consagrados en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, traduce la imposición del Estado en cumplir sus compromisos derivados de los tratados internacionales ratificados.

Mas allá, las soluciones judiciales llevan a se crear una jurisprudencia internacional y que, por la autoridad de los juzgados, puede hasta mismo irradiar sus efectos a las jurisdicciones nacionales y a los demás tribunales internacionales. Los resultados alcanzados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son ejemplos muy destacables del éxito en aquel mecanismo de protección de los derechos humanos.

6 – En el actual ambiente universal/global de protección a los derechos humanos es factible se plantear la existencia de un Tribunal Mundial de Derechos Humanos, incluso con la posibilidad de su existencia ya recibiendo atención de la doctrina internacionalista. Su creación, por ejemplo, puede darse por un tratado internacional elaborado por el Consejo de Derechos Humanos y aprobado por la Asamblea General, o aprobado por una conferencia especial de los Estados-Partes, como en el modelo de creación del Tribunal Penal Internacional. Puede también ser un tratado propuesto o recomendado por la Asamblea General, y hasta mismo puede ser presentado como un nuevo Protocolo al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. No se descarta, incluso, la posibilidad de su creación en los moldes de la Corte Internacional de Justicia, con una enmienda a la Carta de Naciones Unidas, como ya mencionado en la doctrina.

La competencia del tribunal, por lo menos en un primero momento, sería limitada a los casos de graves violaciones a los derechos humanos considerados como intangibles, inviolables e inherentes a la dignidad de la persona, integrantes de un “estándar mínimo universal”, como son el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a no ser sometido a esclavitud o servidumbre, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la personalidad jurídica, a crear una familia, a un juicio imparcial, a la legalidad, a la no discriminación, a la irretroactividad de la ley penal, a un proceso debido y a las garantías penales básicas, y sin perjuicio de su competencia expandirse con el tiempo.

Los derechos económicos, sociales y culturales, no obstante los avances de su justicialidad, incluso con la breve posibilidad de reclamaciones individuales ante al respectivo Comité, no serían, inicialmente, alcanzados por el nuevo tribunal, como se

observa en la experiencia de los tribunales internacionales regionales de derechos humanos, que definen limitaciones de sus competencias a tales derechos. Y ese límite de la competencia de un órgano judicial internacional, en los primeros momentos de su existencia, también es un ejemplo en el Tribunal Penal Internacional, y que admite la posibilidad de su expansión.

7 – Las demandas junto al Tribunal pueden darse por el mecanismo de denuncia interestatal, con la participación directa y efectiva de los Estados en el control y protección internacional de los derechos humanos, pero solamente admitida cuando hubiera omisión en el enfrentamiento de la violación en ámbito nacional o internacional.

Otra forma es la posibilidad de la demanda oficial, presentada por un órgano de derechos humanos de Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos Humanos o el Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos. En estos casos, la actuación de esos órganos se daría directamente junto al tribunal y cuando los medios de protección disponibles, nacionales o internacionales, no se presentan suficientes a impedir la violación o a hacer cesar su continuidad.

La demanda individual por la propia víctima debe ser prevista, exigiéndose el agotamiento de los recursos internos o la ineficacia de los mecanismos de protección internacionales.

Bajo cualquier hipótesis no se admitirán demandas con relación a casos que se encuentran en tramitación o hayan tramitado por otro tribunal internacional de derechos humanos, como los Tribunales Europeo, Americano y Africano, pues el Tribunal Mundial de Derechos Humanos no funcionará como una instancia de recurso de las decisiones de aquellos tribunales.

Deben ser previstas medidas provisionales en casos urgentes, de extrema gravedad, para evitar daños irreparables a la vida y a la integridad física, situaciones en que se observaría excepción al agotamiento de los recursos internos.

El Tribunal Mundial de Derechos Humanos ejercería también la jurisdicción consultiva relacionada a los casos de interpretación de los tratados de derechos humanos, incluso cuanto a la compatibilidad de la legislación nacional.

8 – El modelo judicial es la lógica que gobierna la protección de todos los derechos y es adoptada por todas las naciones. La existencia de un sistema judicial autónomo e independiente es, incluso, una exigencia contenida en tratados internacionales de derechos humanos, como disponen los artículos 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 2.3, 6.2, 9.3, 9.4, 10.2.b, 14 y 15, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 6º, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el artículo 8º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 13 de la Carta Africana de Derechos Humanos.

En la protección internacional global/universal esta evidencia no puede ser diferente, más allá cuando existe en el mismo escenario internacional, pero limitada a apenas algunas regiones del mundo, y como última alternativa de solución de conflictos.

La existencia de un Tribunal Mundial de Derechos Humanos, no bastase traducir la necesidad de enfrentamiento de un desafío contemporáneo de avanzar hacia la más posible efectividad en el cumplimiento de aquellos derechos, expresa la simple lógica de que los conflictos se resuelven de verdad cuando se tiene una solución dictada por un órgano técnico, neutro, independiente y autónomo, y que disponga de poderes para hacer cumplir sus decisiones, como son los órganos judiciales.



## **BIBLIOGRAFÍA**

ALBANESE, S., *Promoción y protección internacional de los derechos humanos*, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 1992.

ABRISKETA, J., “*Tribunales Penales Internacionales ad hoc (para ex Yugoslavia y Ruanda)*”, en web: <<http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/219>>.

ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, N., *La protección procesal internacional de los derechos humanos*, Civitas, Madrid, 1975.

ALSTON, P., *Diritti Umani y globalización – Il ruolo dell’Europa (Human Rights in Europe and the World: The Challenges of Integration and Globalization)*, traducción Paolo de Stefani, Ega, Torino, 2002.

BALLESTEROS, J., *Derechos Humanos. Concepto, fundamento, sujetos*, Tecnos, Madrid, 1992.

BANDRÉS, J. M., “Reflexiones sobre el paralelismo entre la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa”, en VVAA, *La Protección Internacional de los Derechos Humanos a los Cincuenta Años de la Declaración Universal*, Tecnos, Madrid, 2001, p. 48.

BIDART CAMPOS, G. J., *Teoría General de los Derechos Humanos*, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1991.

\_\_\_\_\_, *La Interpretación del Sistema de Derechos Humanos*, EDIAR, Buenos Aires, 1999.

BJÖRN ARP, *La Nueva Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN: ¿Un avance global de derechos humanos o un tigre sin dientes?*. En web: <[http://www.reei.org/reei20/doc/Articulo\\_ARP\\_Bjorn.pdf](http://www.reei.org/reei20/doc/Articulo_ARP_Bjorn.pdf)>.

BLANC ALTEMIR, A., “Universalidad, Indivisibilidad e Interdependencia de los Derechos Humanos a los Cincuenta años de la Declaración Universal”, en VVAA, *La Protección Internacional de los Derechos Humanos a los Cincuenta años de la Declaración Universal*, Tecnos, Madrid, 2001.

BOBBIO, N., *A Era dos Direitos* (“L’età dei Diritti”), trad. Carlos Nelson Coutinho, Campus, Rio de Janeiro, 1992.

\_\_\_\_\_, “Presente y Porvenir de los derechos Humanos”, en VVAA, *Anuario de Derechos Humanos*, 1, Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Madrid, 1981.

BORREGO BORREGO, J., “El Nuevo Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y otros Órganos Internacionales de Protección de los Dererchos Humanos” en VVAA,

*Hacia una Justicia Internacional – XXI Jornadas de Estudio – Abogacía General del Estado, Dirección del Servicio Jurídico del Estado, Civitas, Madrid, 2000.*

CANÇADO TRINDADE, A. A., *A Proteção Internacional dos Direitos Humanos: fundamentos jurídicos e instrumentos básicos*, Saraiva, São Paulo, 1991.

\_\_\_\_\_, *O acesso direto à Justiça Internacional*, Direito & Justiça – Correio Braziliense, Brasília, 2001.

\_\_\_\_\_, *Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos*, vol III, Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 2003.

CANÇADO TRINDADE, A. A., RUIZ DE SANTIAGO, J., *La Nueva Dimensión de las Necesidades de Protección del Ser Humano en el Inicio del Siglo XXI*, 2ª e., Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, 2003.

CARVALHO RAMOS, A., *Proceso Internacional de Direitos Humanos*, Renovar, Rio de Janeiro, 2002.

CARRILLO SALCEDO, J. A., “El proceso de internacionalización de los derechos humanos. El fin del mito de la soberanía nacional (II). Plano regional: El sistema de protección instituido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en VVAA, *Consolidación de derechos y garantías: los grandes retos de los derechos humanos en el siglo XXI, Seminario conmemorativo del 50 aniversario de la declaración de los derechos humanos*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999.

\_\_\_\_\_, en VVAA, *La Protección Internacional de los Derechos Humanos a los Cincuenta años de la Declaración Universal*, Tecnos, Madrid, 2001.

\_\_\_\_\_, *Soberanía de los Estados y Derechos Humanos en Derecho Internacional Contemporáneo*, 2ª edición, Tecnos, Madrid, 2001.

CASADEVANTE ROMANI, C. F., “El Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, en VVAA, *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, CASADEVANTE ROMANI, C., F., (coord), Dilex, Madrid, 2000.

CASAL, P., “Ideas para una teoría de la justicia universal con una intención cosmopolita”, en *ISEGORÍA-Revista de Filosofía Moral y Política*, n. 22, Centro Superior de Investigaciones Científicas-CSIC, Madrid, 2000.

CASANOVAS Y LA ROSA, O., en DÍAZ BARRADO, *El Derecho Internacional del Tiempo Presente*, Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, Dykinson, 2004.

CISNAL DE UGARTE, E. S., LIESA, C.R.F., GONZÁLEZ, C.M., *Descripción, análisis y comentarios al Tratado de la Unión Europea*, McGraw-Hill, Madrid, 1993.

CLARIANA, G., “Otras Organizaciones Internacionales en el ámbito europeo – en la Europa oriental”, en DIEZ DE VELASCO, M., *Las Organizaciones Internacionales*, 12ª. edición, Tecnos, Madrid, 2000.

CONZENDLEY, C. M. B., “Sistema de Incorporação das Normas do MERCOSUL a Orden Jurídica Interna”, 2001, en web <[www.mercosul.gov.br](http://www.mercosul.gov.br)>.

DAL MASO JARDIN, T., “O Tribunal Penal Internacional e sua Importância para os Direitos Humanos”, en web: <[www.dhnet.org.br/direitis/sio/tpi/dalmaso](http://www.dhnet.org.br/direitis/sio/tpi/dalmaso)>

DELGADO, I., L. y MARTÍNEZ, M. M. M., *La Corte Penal Internacional – Justicia versus Impunidad*, Ariel, Barcelona, 2001.

DESPOUY, L., “Intangibilidad del Ejercicio de los Derechos Humanos Fundamentales”, en *Los Derechos Humanos y los Estados de Excepción*, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1999.

DÍAZ BARRADO, C. M., *El Derecho Internacional del Tiempo Presente*, Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, Dykinson, 2004.

DIEZ DE VELASCO, M., *Las Organizaciones Internacionales*, 12ª. edición, Tecnos, Madrid, 2000.

\_\_\_\_\_, *Instituciones de Derecho Internacional Público*, 13ª. edición, Tecnos, Madrid, 2002.

DIEZ SANCHES, J. J., *El Derecho Penal Internacional (Ámbito Espacial de la Ley Penal)*, COLEX, Madrid, 1990.

DOMINGUEZ REDONDO, E., “Crisis y fundamentos de los procedimientos públicos especiales” (tesina), de la Universidad Carlos III de Madrid, 1998.

ESCOBAR HERNÁNDEZ, C., “Logros: La Acción de la O.E.A. en el ámbito de los derechos humanos”, en DIEZ DE VELASCO, *Las Organizaciones Internacionales*, 12ª. edición, Tecnos, Madrid, 2000.

\_\_\_\_\_, “La Protección Internacional de los Derechos Humanos”, en DIEZ DE VELASCO, M., *Instituciones de Derecho Internacional Público*, 13ª. edición, Tecnos, Madrid, 2002.

\_\_\_\_\_, *La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Violación de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales: Estudio de los Procedimientos Públicos Especiales*, Tomo III, Editorial de la Universidad Complutense, Madrid, 1988.

ESPIELL, G., en BLANC ALTEMIR, A., “Universalidad, Indivisibilidad e Interdependencia de los Derechos Humanos a los Cincuenta años de la Declaración Universal”, en VVAA, *La Protección Internacional de los Derechos Humanos a los Cincuenta años de la Declaración Universal*, Tecnos, Madrid, 2001.

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P. A., “Presentación”, en VVAA, *La Desprotección Internacional de los Derechos Humanos (a la luz del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)*, Universidad de Huelva, Huelva, 1998.

FERNÁNDEZ SOLA, N., “Dos modelos de justicia internacional: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional”, en VVAA, *Hacia una Justicia Internacional- XXI Jornada de Estudio*, Abocacia General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, Civitas, Madrid, 2000.

FERRAJOLI, L., *Derechos y Garantías – La ley del más débil*, 2ª edición, traducción Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi, Trotta, Madrid, 2001.

\_\_\_\_\_, *Diritti fondamentali-Un dibattito teorico*, 2ª edición, Laterza, Roma, 2002.

FERRER LLORET, J., *Responsabilidad Internacional del Estado y Derechos Humanos*, Tecnos, Madrid, 1998.

GARCÍA DE ENTERRÍA, E., en VVAA, *La Protección Internacional de los Derechos Humanos a los Cincuenta Años de la Declaración Universal*. Tecnos, Madrid, 2001.

GARCIA HUIDOBRO, J., “A Protecção das pessoas”, en VVAA, *Direitos Humanos-Teorías e Práticas*, Almedina, Coimbra, 2003.

GARCÍA ORRICO, D., Instituto Universitario Gutierrez Mellado, de investigación sobre paz, seguridad y defensa, Madrid España, en web: <<http://www.iugm.es/ARCHIVOS/Resoluciondeconflictos/UNMIK>>.

GIFRA DURALL, J., “La reforma de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos: ¿una mejora de los mecanismos extra convencionales?”, en *Anuario de Derechos Humanos*, Nueva Época, vol. 10, 2009, pp. 223-259, disponible en web: <<http://revistas.ucm.es/der/02120364/articulos/ANDH0909110223A.PDF>>

GIMENEZ GARCÍA, F., “El Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos: El Consejo de Europa y la Carta Social (II)”, VVAA, *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, Editorial Dilex, Madrid, 2000.

GOMÉZ DEL PRADO, J. L., “La Protección de los Derechos Humanos en el Sistema de las Naciones Unidas y de los Organismos Especializados”, en VVAA, *Recueil des Cours, Trentième session d'enseignement*, Institut International des Droits de L'Homme, Estrasburgo, 1999.

GONZÁLEZ CAMPOS, J. D., SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I., SAÉNS DE SANTA MARÍA, P. A., *Curso de Derecho Internacional Público*, 7ª. ed., Civitas, Madrid, 2002.

GONZÁLEZ GONZÁLES, R., “El control internacional de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas inhumanas y degradantes” (tesis), Granada, editorial de la Universidad, 1998.

GORDILLO, A., “Los derechos humanos en un mundo nuevamente en crisis y transformación”, en *Derechos Humanos*, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 4ª. e. 1999.

\_\_\_\_\_, “La creciente internacionalización del derecho”, en *Derechos Humanos*, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 4ª. e. 1999.

GORDON LAUREN, P., “Nuevos retos para los derechos humanos. El futuro a la luz del pasado” en VVAA, *Anuario de Derechos Humanos, Nueva Época*, vol. V, Instituto de Derechos Humanos, Universidad Complutense, Madrid, 2004.

GUERRERO PERALTA, O. J., en VVAA (coord. Kai Ambos), *La Nueva Justicia Penal Internacional – Desarrollos Post-Roma -*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002.

HERRAIZ, I., *La crisis de los Derechos Humanos*, artículo publicado en 30 de abril de 2003, disponible en web <[www.lainsigna.org](http://www.lainsigna.org)>.

JENKS, C. W., *El derecho común de la humanidad*, traducción de M. T. Ramirez de Arellano, Tecnos, Madrid, 1986.

LERNER, N., “Las Minorías Étnicas, Religiosas y Culturales en el Derecho Internacional Contemporáneo”, en VVAA, *Boletín Europeo de la Universidad de La Rioja-BEUR*, n. 4, diciembre 1998 (suplemento), Logroño, 1998.

LOIANNO, A., “La supranacionalidad operativa de los derechos humanos en el derecho interno”, en GORDILLO, A., *Derechos Humanos*, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 4ª. e. 1999.

LUCAS, J., “Algunos equívocos sobre el concepto y fundamentación de los derechos humanos”, en BALLESTEROS, J., *Derechos Humanos. Concepto, fundamento, sujetos*, Tecnos, Madrid, 1992.

\_\_\_\_\_, “Multiculturalismo y Derechos Humanos”, en VVAA, *Diccionario Crítico de los derechos Humanos*, Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, 2000.

LUHMANN, N., *I Diritti Fondamentali come Istituzione (Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie)*, traducción Stefano Magnolo, Dedalo, Bari, 2002.

LUÑO, P., “La Universalidad de los Derechos Humanos”, en VVAA, *Diccionario Crítico de los Derechos Humanos*, Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, 2000.

MARIE, J.-B., “Los Mecanismos de Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, en VVAA, *La Protección Universal y Regional de los DDHH*, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 1995.

MARIÑO MENÉNDEZ, F. M., *Derecho Internacional Público (parte general)*, 3ª ed., Madrid, Trota, 1999.

\_\_\_\_\_, “La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (O.S.C.E.)”, en DIEZ DE VELASCO, M., ., *Las Organizaciones Internacionales*, 12ª. edición, Tecnos, Madrid, 2000.

MARKIEGI, X, “Balance en Euskadi 50 años después”, en *Los Derechos Humanos en un mundo dividido*, Universidad de Deusto, Bilbao, 1999.

MARTIN, C.; RODRÍGUEZ-PINZÓN, D.; GUEVARA B., J. A., en VVAA, *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, Universidad Iberoamericana, Fontamara, México, 2004.

MATHIEU, J.-L., *La Défense Internationale des Droits de L’Homme*, Presses Universitaires de France, Paris, 1993.

MAZZARESE, T. “¿Está la era de los derechos cambiando?”, en VVAA, *Anuario de Derechos Humanos*, vol. V, Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2004.

MENGOZZI, P., *Derecho Comunitario y de la Unión Europea (Il Diritto comunitario e dell’Unione Europea)*, traducción Javier Fernández Pons, Tecnos, Madrid, 2000.

MIRANDA, J., “A Incorporação ao Direito Interno de instrumentos jurídicos de Direito Internacional Humanitário e Direito Internacional dos Direitos Humanos”, en VVAA, “*O Tribunal Penal Internacional e a Constituição Brasileira*”, Revista do Conselho de Justiça Federal, n. 11, Brasília, 2000.

\_\_\_\_\_, “Presentación”, VVAA, *Direitos Humanos-Teorias e Práticas*, Almedina, Coimbra, 2003.

MOHAMED AMÍN AL-MIDANI, “La Liga de Estados Árabes y los Derechos Humanos”, en VVAA, *La Protección Universal y Regional de los Derechos Humanos*, Instituto de Relaciones Internacionales, Departamento de Derechos Humanos, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 1995.

MORENILLA RODRÍGUEZ, J. M., *Los Sistemas para la Protección Internacional de los Derechos Humanos*, Centro de Publicaciones del Ministerio de Justicia, Madrid, 1986.

NASCIMENTO E SILVA, G. E., “O Tribunal Penal Internacional e a Constituição Brasileira”, en VVAA, Revista del Consejo de la Justicia Federal, no. 11, Brasília, 2000.

NATAN, L., “Las Minorías Étnicas, Religiosas y Culturales en el Derecho Internacional Contemporáneo”, en VVAA, *Boletín Europeo de la Universidad de La Rioja-BEUR*, n. 4, diciembre 1998 (suplemento), Logroño, 1998.

NIKKEN, P., *La Protección Internacional de los Derechos Humanos-Su Desarrollo Progresivo* -, Civitas, Madrid, 1987.

NOWAK, Manfred y KOSMA, Julia, “A World Court of Human Rights”, en web: <<http://www.udhr60.ch/report/hrCourt-Nowak0609.pdf>>.

OCHOA RUIZ, N., “*Crónica de derechos humanos- (enero-junio 2006)*”, Revista Electrónica de Estudios Internacionales (2006), página 17, disponible en web: <[http://www.reei.org/reei%2012/CronicaDerechosHumanos\(reei12\).pdf](http://www.reei.org/reei%2012/CronicaDerechosHumanos(reei12).pdf)>.

ORTIZ AHLF, L., “Fuentes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, en VVAA, *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, Universidad Iberoamericana:Fontamara, México, 2004.

OSSET, M., *Más allá de los derechos humanos*, DVD ediciones, Barcelona, 2001.

PAPISCA, A., “Infrastruttura Diritti Umani Per il Sistema Democratico” en VVAA, *Costituzione Diritti Umani Garanzie*, CEDAM , Padova, 1998.

PASTOR PALOMAR, A., “El Sistema Europeo: El Consejo de Europa (I)”, en VVAA, *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, CASADEVANTE ROMANI, C.F. (coord.), Dilex, Madrid, 2000.

PASTOR RIDRUEJO, J. A., *Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales*, Tecnos, Madrid, 8ª. ed., 2002.

\_\_\_\_\_, “El proceso de internacionalización de los derechos humanos. El fin del mito de la soberanía nacional (I): Plano Universal: La obra de Naciones Unidas”, en VVAA, *Consolidación de Derechos y Garantías: Los grandes Retos de los Derechos Humanos en el siglo XXI*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999.

\_\_\_\_\_, *La Protección Internacional de los Derechos Humanos: Una Comparación entre el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana*, publicado en la Revista Electronica Iberoamericana-ALCUE, vol., 1, nº. 1, 2007, disponible en la web:<

[http://www.urjc.es/ceib/investigacion/publicaciones/REIB\\_01\\_JA\\_Pastor\\_Ridruejo.pdf](http://www.urjc.es/ceib/investigacion/publicaciones/REIB_01_JA_Pastor_Ridruejo.pdf).>

\_\_\_\_\_, “Prólogo”, en VELARDE, C., *Universalismo de Derechos Humanos – Análisis a la luz del debate anglosajón*, Thonson Civitas, Madrid, 2003.

PECES-BARBA, G., “Pasado y futuro de los derechos humanos”, en VVAA., *Consolidación de Derechos y Garantías: Los grandes retos de los Derechos Humanos en el siglo XXI (Seminario Conmemorativo del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999.

PELLET, A., “Los Derechos Humanos en un mundo dividido”, en VVAA, “*Presentación temática del ciclo ‘Los Derechos Humanos en un mundo dividido’*”, Universidad de Deusto, Bilbao, 1999.

PEREZ LUÑO, A. E., “La Universalidad de los Derechos Humanos”, en VVAA, *Diccionario Crítico de los Derechos Humanos*, Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, 2000.

PÉREZ VOITURIEZ, A., “Doble Sentido de la Internacionalización de la Protección de los Derechos Humanos”, en VVAA, *Hacia una Justicia Internacional*, XXI Jornadas de Estudio, Abogacía General del Estado, Dirección del Servicio Jurídico del Estado, Civitas, Madrid, 2000.

PHILPOT, J., “*El Tribunal Internacional para Ruanda: La Justicia traicionada*”, en [www.inshuti.org/jurista.htm](http://www.inshuti.org/jurista.htm).

PIOVESAN, F., *Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional*, 2ª. ed., Max Limonad, São Paulo, 1997.

\_\_\_\_\_, en “Direitos Humanos terão jurisprudência global”, en la web: [www.conjur.com.br](http://www.conjur.com.br).

PODESTÁ, B. de, en el texto “*A integração regional e as possibilidades de uma Agenda Social*”, de noviembre de 2000, disponible en web: [www.sela.org](http://www.sela.org).

PRIETO SANCHÍS, L., “La protección estatal de los derechos humanos”, en VVAA, *Diccionario Crítico de los Derechos Humanos*, Universidad Internacional de Andalucía, sede iberoamericana, Huelva, 2000.

PUREZA, J. M., *O patrimônio Comum da Humanidade: Rumo a um direito internacional de solidariedade?*, Coimbra, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1995.

QUISPE, F., “*El Agotamiento de Recursos Internos em los Sistemas Regionales de Protección de los Derechos Humanos*”, en Revista del Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, año 8, vol.8, número 8 – 2008, Fortaleza, 2008, pp. 79/91.

QUOC DINH, N., DAILLIER, P., PELLET, A., *Direito Internacional Público (Droit International Public)*, 4ª edición, trad. Vítor Marques Coelho, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1999.

RAMÓN AROZARENA, en su artículo “*Rwanda: Hace 10 años, 10 años después*”, escrito en junio de 2004, disponible en web: [www.inshuti.org/arozare.htm](http://www.inshuti.org/arozare.htm).

RAWLS, J., *El derecho de gentes y “Una revisión de la idea de razón pública”*, trad. Hernando Valencia Villa, Paidós, Barcelona, 2001.

RODRÍGUEZ CARRIÓN, A. J., “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, en VVAA, *Consolidación de Derechos y Garantías: Los Grandes Retos de los Derechos Humanos en el Siglo XXI.*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999.

RODRÍGUEZ-TOUBES MUÑIZ, J., *La razón de los derechos*, Tecnos, Madrid, 1995;

ROLDÁN BARBERO, J., *Ensayo sobre el Derecho Internacional Público 1*, Almería: Universidad de Almería – Servicio de Publicaciones, Almería, 1996.



ROSSANA GONZÁLEZ GONZÁLES, “El control internacional de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas inhumanas y degradantes” (tesis), Granada, editorial de la Universidad, 1998.

RUIZ MIGUEL, C., “La naturaleza jurídica multidimensional de los derechos fundamentales”, en *Derechos Constitucionales y Pluralidad de Ordenamientos*, Cedecs, Barcelona, 2001.

SALADO OSUNA, A., “La Protección Internacional de los Derechos Humanos”, en VVAA, *Diccionario Crítico de los Derechos Humanos*, Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, 2000.

SANÉ, P., “*Forum de Deusto*”, en VVAA, *Los Derechos Humanos en un mundo dividido*, Universidad de Deusto, Bilbao, 1999.

SARLET, I. W., “*A Eficácia dos Direitos Fundamentais*”, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2001.

SCHEININ, Martin, “Towards a World Court of Human Rights”, en web: <[http://www.udhr60.ch/report/hrCourt\\_scheinin0609.pdf](http://www.udhr60.ch/report/hrCourt_scheinin0609.pdf)>.

SOBRINO, J., “*Forum de Deusto*”, en VVAA, *Los Derechos Humanos en un mundo dividido*, Universidad de Deusto, Bilbao, 1999.

TRECHSEL, Stefan, “A World Court of Human Rights?”, *Northwestern University Journal of International Human Rights*, 1 NW. U. J. INT’L HUM. RTS. 3, at Volume 1, 2004, en web: <<http://www.law.northwestern.edu/journals/jihr/v1/3/trechsel.pdf>>.

TRUYOL y SERRA, A., *Los Derechos Humanos*, 4ª edición, Tecnos, Madrid, 2000.

VASAK, K, en NIKKEN, P., *La Protección Internacional de los Derechos Humanos-Su Desarrollo Progresivo* -, Civitas, Madrid, 1987.

VELARDE, C., *Universalismo de Derechos Humanos – Análisis a la luz del debate anglosajón*, Thomson Civitas, Madrid, 2003.

VENTURA ROBLES, Manuel E., *Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos*, número 40, julio-diciembre de 2004, San Jose Costa Rica, 2005.

VIDIGAL DE OLIVEIRA, A., “*Tribunal Penal Internacional – Cuestiones Controvertidas*”, Instituto Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, 2003.

VILLÁN DURÁN, C., *Curso de derecho internacional de los derechos humanos*, Trotta, Madrid, 2002.

\_\_\_\_\_, “La Declaración Universal de Derechos Humanos en la Práctica de las Naciones Unidas”, en VVAA., *La Protección Internacional de los Derechos Humanos a los Cincuenta Años de la Declaración Universal*, Tecnos, Madrid, 2001.

VVAA, *Anuario de Derechos Humanos*, 1, Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Madrid, 1981.

VVAA, *Anuario de Derechos Humanos*, vol. V, Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2004.

VVAA, *Anuario de Derechos Humanos, Nueva Época*, vol. V, Instituto de Derechos Humanos, Universidad Complutense, Madrid, 2004.

VVAA, *Boletín Europeo de la Universidad de La Rioja-BEUR*, n. 4, diciembre 1998 (suplemento), Logroño, 1998.

VVAA, *Consolidación de derechos y garantías: los grandes retos de los derechos humanos en el siglo XXI, Seminario conmemorativo del 50 aniversario de la declaración de los derechos humanos*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999

VVAA, *Constituzione Diritti Umani Garanzie*, CEDAM , Padova, 1998.

VVAA, *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, CASADEVANTE ROMANI, C., F., (coord), Dilex, Madrid, 2000

VVAA, *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, Editorial Dilex, Madrid, 2000.

VVAA, *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, Universidad Iberoamericana, Fontamara, México, 2004.

VVAA, *Diccionario Crítico de los Derechos Humanos*”, Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, 2000.

VVAA, *Directos Humanos-Teorías y Prácticas*, Almedina, Coimbra, 2003.

VVAA, *La Protección Universal y Regional de los DDHH*”, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 1995.

VVAA, *Hacia una Justicia Internacional – XXI Jornadas de Estudio – Abogacía General del Estado*, Dirección del Servicio Jurídico del Estado, Civitas, Madrid, 2000.

VVAA, *Historia de los Derechos Fundamentales, Tomo III, Siglo XIX, volumen III, El Derecho Positivo de los Derechos Humanos. Derechos Humanos y Comunidad Internacional*, Director PECES-BARBA MARTINEZ, G. y otros, Madrid, Dykinson S. L., 2007.

VVAA, *Imunidade Soberana: O Estado Estrangeiro diante do Juiz Nacional*, Serie Cadernos do CEJ, vol 19, Conselho da Justiça Federal, Brasília, 2001.

VVAA, *ISEGORÍA-Revista de Filosofía Moral y Política*, n. 22, Centro Superior de Investigaciones Científicas-CSIC, Madrid, 2000.

VVAA, *La Desprotección Internacional de los Derechos Humanos (a la luz del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)*, Universidad de Huelva, Huelva, 1998.

VVAA, *La Nueva Justicia Penal Internacional – desarrollos post-Roma* (Coored. Kai Ambos), Tirant lo Banch, Valencia, 2002.

VVAA, *La Protección Internacional de los Derechos Humanos a los Cincuenta Años de la Declaración Universal*, Tecnos, Madrid, 2001.

VVAA, *La Protección Universal y Regional de los Derechos Humanos*, Instituto de Relaciones Internacionales, Departamento de Derechos Humanos, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 1995.

VVAA, *Los Derechos Humanos en un mundo dividido*, Universidad de Deusto, Bilbao, 1999.

VVAA, “O Tribunal Penal Internacional e a Constituição Brasileira”, *Revista do Conselho de Justiça Federal*, n. 11, Brasília, 2000.

VVAA, “Presentación temática del ciclo ‘Los Derechos Humanos en un mundo dividido’”, Universidad de Deusto, Bilbao, 1999.

VVAA, *Recueil des Cours, Trentième session d’enseignement*, Institut International des Droits de L’Homme, Estrasburgo, 1999

ZAFARONI, R., *La Convención Americana sobre Derechos Humanos e el sistema penal*, “Revista de Derecho Público, FDA, nº 2, Buenos Aires, 1997.

ZAMORA, MIGUEL AGUDO, *La Protección de los Derechos en la Unión Europea. Claves para Entender la Evolución Histórica desde el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea al Tratado por el que se Establece una Constitución para Europa*, en web: <[www.ugr.es/~redce/REDCE4/articulos/13bisagudo.htm](http://www.ugr.es/~redce/REDCE4/articulos/13bisagudo.htm)>.

## Consultas en Internet:

Amnistía Internacional  
<http://www.amnesty.org/es>

Asociación de Naciones Del Sureste Asiaático-ASEAN  
[www.aseansec.org](http://www.aseansec.org)

BBC News  
<http://www.news.bb.co.uk>

Centro Árabe para el Derecho Internacional Humanitario y Educación en Derechos Humanos-ACIHL  
[www.acihl.org](http://www.acihl.org)

Centro de Informaciones de Naciones Unidas  
<http://www.cinu.org.mx>

Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
[www.cidh.oas.org](http://www.cidh.oas.org)

Comunidad Andina  
[www.comunidadandina.org](http://www.comunidadandina.org)

Consejo de Europa  
[www.coe.int](http://www.coe.int)

Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
[www.csic.es](http://www.csic.es)

Corte Africana  
[www.african-court.org](http://www.african-court.org)

Corte Interamericana de Derechos Humanos  
[www.corteidh.or.cr](http://www.corteidh.or.cr)

Corte Internacional de Justicia  
[www.icj-cij.org](http://www.icj-cij.org)

Diário Independente Iberoamericano La Insigna  
[www.lainsigna.org](http://www.lainsigna.org)

Graduate Institute of International and Development Studies  
[www.graduateinstitute.ch](http://www.graduateinstitute.ch)

Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional Universidad del País Vasco  
[www.dicc.hegoa.efaber.net](http://www.dicc.hegoa.efaber.net)

Instituto de Investigación Jurídica – Biblioteca Jurídica (México)  
[www.bibliojuridica.org](http://www.bibliojuridica.org)

Instituto Universitário General Gutiérrez Mellado  
[www. iugm.es](http://www.iugm.es)

Mercado Común del Cone Sur-MERCOSUR  
[www.mercosul.gov.br](http://www.mercosul.gov.br)

Naciones Unidas  
<http://www.un.org>

Northwestern Law University (Chicago/EUA)  
[www.law.northwestern.edu](http://www.law.northwestern.edu)

Radio Nederland  
[www.rnw.nl](http://www.rnw.nl)

Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos  
<http://www.ohchr.org>

Organización Estados Americanos-OEA  
[www.oas.org](http://www.oas.org)

Organización Mundial contra la Tortura  
[www.omct.org](http://www.omct.org)

Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa-OSCE  
[www.osce.org](http://www.osce.org)

Parlamento Europeo – Unión Europea  
[www.europarl.eu.int](http://www.europarl.eu.int)

Revista Eletrónica de Derechos InternacionAles (España)  
[www.reei.org](http://www.reei.org)

Sistema de Difusión Electrónica de los Documentos de Naciones Unidas  
<http://daccess-dds-ny.un.org>

Sistema Econômico Latinoamericano y Del Caribe  
[www. sela.org](http://www.sela.org)

Unión Africana  
[www.africa-union.org](http://www.africa-union.org)

Unión Europea  
[www. Europa.eu](http://www.Europa.eu)

Universidad Autónoma de Madrid-UAM  
[www.uam.es](http://www.uam.es)

Universidad Carlos III de Madrid  
[www.uc3m.es](http://www.uc3m.es)

Universidad Católica de La Plata (Argentina)  
[www.dipublico.com.ar](http://www.dipublico.com.ar)

Universidad Complutense de Madrid  
<http://www.ucm.es>

Universidad Rey Juan Carlos  
[www. urjc.es](http://www.urjc.es)

## **ANEXOS**

### **(1)**

#### **ACERVO NORMATIVO DE DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN NIVEL UNIVERSAL/GLOBAL**

- CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS
- CARTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS<sup>814</sup>
  - Declaración Universal de Derechos Humanos
  - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
  - Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
  - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
  - Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
  - Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte
- INSTRUMENTOS UNIVERSALES DE LOS DERECHOS HUMANOS POR TEMAS (en orden alfabética):
  - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
    - Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos
    - Principios básicos para el tratamiento de los reclusos
    - Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión
    - Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad

---

<sup>814</sup> La definición del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, juntamente con la Declaración Universal de Derechos Humanos, como siendo la “*Carta Internacional de Derechos Humanos*” es dada por la doctrina internacional, como se puede ver en VILLAN DURÁN, C., *Curso...*, op. cit., pp. 212/3.

- Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte
  - Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
  - Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley
  - Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)
  - Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing)
  - Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad)
  - Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder
  - Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura
  - Principios Básicos sobre la Función de los Abogados
  - Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias
  - Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
  - Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones
  - Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (todavía no está en vigor)
- 
- BIENESTAR, PROGRESO Y DESARROLLO SOCIAL
  - Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social
  - Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición
  - Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz y en beneficio de la humanidad
  - Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz



- Declaración sobre el derecho al desarrollo
- Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos
- CRÍMENES DE GUERRA y CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD, INCLUSO EL GENOCIDIO
  - Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
  - Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad
  - Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad
- DERECHO HUMANITARIO
  - Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra
  - Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra
  - Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I)
  - Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)
- DISCAPACITADOS
  - Declaración de los derechos del Retrasado Mental
  - Declaración de los Derechos de los Impedidos
  - La protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental
  - Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad
  - Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

- Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- DISCRIMINACIÓN
  - Convenio sobre igualdad de remuneración
  - Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación
  - Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
  - Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales
  - Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza
  - Protocolo para instituir una Comisión de Conciliación y Buenos Oficios facultada para resolver las controversias a que pueda dar lugar la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza
  - Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones
  - Conferencia Mundial contra el Racismo, en 2001 (Declaración y el Programa de acción de Durban)
- EMPLEO
  - Convenio sobre la política del empleo, 1964 (Nº 22)
- ESCLAVITUD, SERVIDUMBRE, TRABAJO FORZOSO e INSTITUCIONES y PRÁCTICAS ANÁLOGAS
  - Convención sobre la Esclavitud
  - Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926
  - Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud
  - Convenio sobre el trabajo forzoso
  - Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso

- Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena
- Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
  
- LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
- Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (N°87)
- Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (N°98)
  
- LIBRE DETERMINACIÓN
- Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales
- Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1962, titulada "Soberanía permanente sobre los recursos naturales"
- Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación, y el entrenamiento de los mercenarios
  
- MATRIMONIO
- Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios
- Recomendación sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios
  
- MUJER
- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
- Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado

- Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
  
- NACIONALIDAD, APATRIDIA, ASILO y REFUGIADOS
  - Convención para reducir los casos de apatridia
  - Convención sobre el Estatuto de los Apátridas
  - Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
  - Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados
  - Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven
  
- NIÑO
  - Convención sobre los Derechos del Niño
  - Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados
  - Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía
  - Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados
  - Convenio sobre la edad mínima, 1973
  - Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999
  
- PERSONAS DE EDAD
  - Ejecución del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento y actividades conexas
  
- PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
  - Declaración y Programa de Acción de Viena
  - Declaración del milenio
  - Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos

- PUEBLOS INDÍGENAS Y DE LAS MINORÍAS

- Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
- Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989
- Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas

- SALUD

- Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA

- TORTURA

- Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
- Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
- Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes

- TRABAJADORES MIGRATORIOS

- Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares

## (2)

### **CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS**

#### **NOTA DE INTRODUCCIÓN**

La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta.

El 17 de diciembre de 1963 la Asamblea General aprobó enmiendas a los Artículos 23, 27 y 61 de la Carta, las que entraron en vigor el 31 de agosto de 1965. El 20 de diciembre de 1971 la Asamblea General aprobó otra enmienda al Artículo 61, la que entró en vigor el 24 de septiembre de 1973. Una enmienda al Artículo 109, aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1965, entró en vigor el 12 de junio de 1968.

La enmienda al Artículo 23 aumentó el número de miembros del Consejo de Seguridad de once a quince. El Artículo 27 enmendado estipula que las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros (anteriormente siete) y sobre todas las demás cuestiones por el voto afirmativo de nueve miembros (anteriormente siete), incluso los votos afirmativos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

La enmienda al Artículo 61 que entró en vigor el 31 de agosto de 1965 aumentó el número de miembros del Consejo Económico y Social de dieciocho a veintisiete. Con la otra enmienda a dicho Artículo, que entro en vigor el 24 de septiembre de 1973, se volvió a aumentar el número de miembros del Consejo de veintisiete a cincuenta y cuatro.

La enmienda al Artículo 109, que corresponde al párrafo 1 de dicho Artículo, dispone que se podrá celebrar una Conferencia General de los Estados Miembros con el propósito de revisar la Carta, en la fecha y lugar que se determinen por el voto de las dos terceras partes de los Miembros de la Asamblea General y por el voto de cualesquiera nueve miembros (anteriormente siete) del Consejo de Seguridad. El párrafo 3 del mismo Artículo, que se refiere al examen de la cuestión de una posible conferencia de revisión en el décimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, ha sido conservado en su forma primitiva por lo que toca a una decisión de "siete miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad", dado que en 1955 la Asamblea General, en su décimo período ordinario de sesiones, y el Consejo de Seguridad tomaron medidas acerca de dicho párrafo.

---

## **PREÁMBULO**

### **NOSOTROS LOS PUEBLOS DE LAS NACIONES UNIDAS RESUELTOS**

a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,

a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional,

a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,

### **Y CON TALES FINALIDADES**

a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos,

a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,

a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común, y

a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todas las naciones,

### **HEMOS DECIDIDO UNIR NUESTROS ESFUERZOS PARA REALIZAR ESTOS DISEÑOS**

Por lo tanto, nuestros respectivos Gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas, y por este acto establecen una organización internacional que se denominará las Naciones Unidas.

---

## **CAPÍTULO I**

### **PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS**

---

#### **Artículo 1**

**Los propósitos de las Naciones Unidas son:**

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o

arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;

2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal;

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y

4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.

## **Artículo 2**

Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:

1. La Organización esta basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros.

2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta.

3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.

4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

5. Los Miembros de la Organización prestaron a ésta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva.

6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales.

7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII.

---

## **CAPÍTULO II**

### **MIEMBROS**

---

## **Artículo 3**

Son Miembros originarios de las Naciones Unidas los Estados que habiendo participado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional celebrada en San Francisco, o que habiendo firmado previamente la



Declaración de las Naciones Unidas de 1 de enero de 1942, suscriban esta Carta y la ratifiquen de conformidad con el Artículo 110.

#### **Artículo 4**

1. Podrán ser Miembros de las Naciones Unidas todos los demás Estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta Carta, y que, a juicio de la Organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo.

2. La admisión de tales Estados como Miembros de las Naciones Unidas se efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.

#### **Artículo 5**

Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya sido objeto de acción preventiva o coercitiva por parte del Consejo de Seguridad podrá ser suspendido por la Asamblea General, a recomendación del Consejo de Seguridad, del ejercicio de los derechos y privilegios inherentes a su calidad de Miembro. El ejercicio de tales derechos y privilegios podrá ser restituido por el Consejo de Seguridad.

#### **Artículo 6**

Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los Principios contenidos en esta Carta podrá ser expulsado de la Organización por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.

---

### **CAPÍTULO III**

#### **ÓRGANOS**

---

#### *Artículo 7*

1. Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas:

una Asamblea General

un Consejo de Seguridad

un Consejo Económico y Social

un Consejo de Administración Fiduciaria

una Corte Internacional de Justicia

y una Secretaría.

2. Se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones de la presente Carta, los órganos subsidiarios que se estimen necesarios.

#### **Artículo 8**

La Organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres para participar en condiciones de igualdad y en cualquier carácter en las funciones de sus órganos principales y subsidiarios.

---

### **CAPÍTULO IV**

#### **LA ASAMBLEA GENERAL**

---

## **COMPOSICIÓN**

### **Artículo 9**

1. La Asamblea General estará integrada por todos los Miembros de las Naciones Unidas.
2. Ningún Miembro podrá tener más de cinco representantes en la Asamblea General.

## **FUNCIONES y PODERES**

### **Artículo 10**

La Asamblea General podrá discutir cualesquier asuntos o cuestiones dentro de los límites de esta Carta o que se refieran a los poderes y funciones de cualquiera de los órganos creados por esta Carta, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12 podrá hacer recomendaciones sobre tales asuntos o cuestiones a los Miembros de las Naciones Unidas o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos.

### **Artículo 11**

1. La Asamblea General podrá considerar los principios generales de la cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el desarme y la regulación de los armamentos, y podrá también hacer recomendaciones respecto de tales principios a los Miembros o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos.

La Asamblea General podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier Miembro de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, o que un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas presente de conformidad con el Artículo 35, párrafo 2, y salvo lo dispuesto en el Artículo 12, podrá hacer recomendaciones acerca de tales cuestiones al Estado o Estados interesados o al Consejo de Seguridad o a éste y a aquéllos. Toda cuestión de esta naturaleza con respecto a la cual se requiera acción será referida al Consejo de Seguridad por la Asamblea General antes o después de discutirla.

La Asamblea General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia situaciones susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.

2. Los poderes de la Asamblea General enumerados en este Artículo no limitarán el alcance general del Artículo 10.

### **Artículo 12**

1. Mientras el Consejo de Seguridad esté desempeñando las funciones que le asigna esta Carta con respecto a una controversia o situación, la Asamblea General no hará recomendación alguna sobre tal controversia o situación, a no ser que lo solicite el Consejo de Seguridad.
2. El Secretario General, con el consentimiento del Consejo de Seguridad, informará a la Asamblea General, en cada periodo de sesiones, sobre todo asunto relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que estuviere tratando el Consejo de Seguridad, e informará asimismo a la Asamblea General, o a los Miembros de las Naciones Unidas si la Asamblea no estuviere reunida, tan pronto como el Consejo de Seguridad cese de tratar dichos asuntos.

### **Artículo 13**

1. La Asamblea General promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines siguientes:
  - a. fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación;

b. fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

2. Los demás poderes, responsabilidades y funciones de la Asamblea General con relación a los asuntos que se mencionan en el inciso b del párrafo 1 precedente quedan enumerados en los Capítulos IX y X.

#### **Artículo 14**

Salvo lo dispuesto en el Artículo 12, la Asamblea General podrá recomendar medidas para el arreglo pacífico de cualesquiera situaciones, sea cual fuere su origen, que a juicio de la Asamblea puedan perjudicar el bienestar general o las relaciones amistosas entre naciones, incluso las situaciones resultantes de una violación de las disposiciones de esta Carta que enuncian los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas.

#### **Artículo 15**

1. La Asamblea General recibirá y considerará informes anuales y especiales del Consejo de Seguridad. Estos informes comprenderán una relación de las medidas que el Consejo de Seguridad haya decidido aplicar o haya aplicado para mantener la paz y la seguridad internacionales.

2. La Asamblea General recibirá y considerará informes de los demás órganos de las Naciones Unidas.

#### **Artículo 16**

La Asamblea General desempeñará, con respecto al régimen internacional de administración fiduciaria, las funciones que se le atribuyen conforme a los Capítulos XII y XIII, incluso la aprobación de los acuerdos de administración fiduciaria de zonas no designadas como estratégicas.

#### **Artículo 17**

1. La Asamblea General examinará y aprobará el presupuesto de la Organización.

Los miembros sufragarán los gastos de la Organización en la proporción que determine la Asamblea General.

2. La Asamblea General considerará y aprobará los arreglos financieros y presupuestarios que se celebren con los organismos especializados de que trata el Artículo 57 y examinará los presupuestos administrativos de tales organismos especializados con el fin de hacer recomendaciones a los organismos correspondientes.

#### **VOTACIÓN**

#### **Artículo 18**

1. Cada Miembro de la Asamblea General tendrá un voto.

Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se tomarán por el voto de una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y votantes. Estas cuestiones comprenderán: las recomendaciones relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, la elección de los miembros del Consejo Económico y Social, la elección de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria de conformidad con el inciso c, párrafo 1, del Artículo 86, la admisión de nuevos Miembros a las Naciones Unidas, la suspensión de los derechos y privilegios de los Miembros, la expulsión de Miembros, las cuestiones relativas al funcionamiento del régimen de administración fiduciaria y las cuestiones presupuestarias.

2. Las decisiones sobre otras cuestiones, incluso la determinación de categorías adicionales de cuestiones que deban resolverse por mayoría de dos tercios, se tomarán por la mayoría de los miembros presentes y votantes.

#### **Artículo 19**

El Miembro de las Naciones Unidas que esté en mora en el pago de sus cuotas financieras para los gastos de la Organización, no tendrá voto en la Asamblea General cuando la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos. La Asamblea General podrá, sin embargo, permitir que dicho Miembro vote si llegare a la conclusión de que la mora se debe a circunstancias ajenas a la voluntad de dicho Miembro.

#### **PROCEDIMIENTO**

#### **Artículo 20**

La Asamblea General se reunirá anualmente en sesiones ordinarias y, cada vez que las circunstancias lo exijan, en sesiones extraordinarias. El Secretario General convocará a sesiones extraordinarias a solicitud del Consejo de Seguridad o de la mayoría de los Miembros de las Naciones Unidas.

#### **Artículo 21**

La Asamblea General dictará su propio reglamento y elegirá su Presidente para cada periodo de sesiones.

#### **Artículo 22**

La Asamblea General podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus funciones.

---

### **CAPÍTULO V**

#### **EL CONSEJO DE SEGURIDAD**

---

#### **COMPOSICIÓN**

#### **Artículo 23**

1. El Consejo de Seguridad se compondrá de quince miembros de las Naciones Unidas. La República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, serán miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Asamblea General elegirá otros diez Miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, prestando especial atención, en primer término, a la contribución de los Miembros de las Naciones Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los demás propósitos de la Organización, como también a una distribución geográfica equitativa.

2. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad serán elegidos por un periodo de dos años. En la primera elección de los miembros no permanentes que se celebre después de haberse aumentado de once a quince el número de miembros del Consejo de Seguridad, dos de los cuatro miembros nuevos serán elegidos por un periodo de un año. Los miembros salientes no serán reelegibles para el periodo subsiguiente.

3. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un representante.

#### **FUNCIONES y PODERES**

#### **Artículo 24**

1. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de

mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad.

2. En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá de acuerdo con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas. Los poderes otorgados al Consejo de Seguridad para el desempeño de dichas funciones quedan definidos en los Capítulos VI, VII, VIII y XII.

3. El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para su consideración informes anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales.

#### **Artículo 25**

Los Miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta Carta.

#### **Artículo 26**

A fin de promover el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con la menor desviación posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos, el Consejo de Seguridad tendrá a su cargo, con la ayuda del Comité de Estado Mayor a que se refiere el Artículo 47, la elaboración de planes que se someterán a los Miembros de las Naciones Unidas para el establecimiento de un sistema de regulación de los armamentos.

### **VOTACIÓN**

#### **Artículo 27**

1. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un voto.
2. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros.
3. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las demás cuestiones serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros, incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes; pero en las decisiones tomadas en virtud del Capítulo VI y del párrafo 3 del Artículo 52, la parte en una controversia se abstendrá de votar.

### **PROCEDIMIENTO**

#### **Artículo 28**

1. El Consejo de Seguridad será organizado de modo que pueda funcionar continuamente. Con tal fin, cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá en todo momento su representante en la sede de la Organización.
2. El Consejo de Seguridad celebrará reuniones periódicas en las cuales cada uno de sus miembros podrá, si lo desea, hacerse representar por un miembro de su Gobierno o por otro representante especialmente designado.
3. El Consejo de Seguridad podrá celebrar reuniones en cualesquiera lugares, fuera de la sede de la Organización, que juzgue más apropiados para facilitar sus labores.

#### **Artículo 29**

El Consejo de Seguridad podrá establecer los organismos subsidiarios que estime necesarios para el desempeño de sus funciones.

#### **Artículo 30**

El Consejo de Seguridad dictará su propio reglamento, el cual establecerá el método de elegir su Presidente.

### **Artículo 31**

Cualquier Miembro de las Naciones Unidas que no sea miembro del Consejo de Seguridad podrá participar sin derecho a voto en la discusión de toda cuestión llevada ante el Consejo de Seguridad cuando éste considere que los intereses de ese Miembro están afectados de manera especial.

### **Artículo 32**

El Miembro de las Naciones Unidas que no tenga asiento en el Consejo de Seguridad o el Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas, si fuere parte en una controversia que esté considerando el Consejo de Seguridad, será invitado a participar sin derecho a voto en las discusiones relativas a dicha controversia. El Consejo de Seguridad establecerá las condiciones que estime justas para la participación de los Estados que no sean Miembros de las Naciones Unidas.

---

## **CAPÍTULO VI**

### **ARREGLO PACÍFICO DE CONTROVERSIAS**

---

### **Artículo 33**

1. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.

2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos medios.

### **Artículo 34**

El Consejo de Seguridad podrá investigar toda controversia, o toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o dar origen a una controversia, a fin de determinar si la prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

### **Artículo 35**

1. Todo Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar cualquiera controversia, o cualquiera situación de la naturaleza expresada en el Artículo 34, a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General.

2. Un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas podrá llevar a la atención del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General toda controversia en que sea parte, si acepta de antemano, en lo relativo a la controversia, las obligaciones de arreglo pacífico establecidas en esta Carta.

3. El procedimiento que siga la Asamblea General con respecto a asuntos que le sean presentados de acuerdo con este Artículo quedará sujeto a las disposiciones de los Artículos 11 y 12.

### **Artículo 36**

- El Consejo de Seguridad podrá, en cualquier estado en que se encuentre una controversia de la naturaleza de que trata el Artículo 33 o una situación de índole semejante, recomendar los procedimientos o métodos de ajuste que sean apropiados.

- El Consejo de Seguridad deberá tomar en consideración todo procedimiento que las partes hayan adoptado para el arreglo de la controversia.

- Al hacer recomendaciones de acuerdo con este Artículo, el Consejo de Seguridad deberá tomar también en consideración que las controversias de orden jurídico, por regla general, deben ser sometidas por las partes a la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de la Corte.

#### **Artículo 37**

1. Si las partes en una controversia de la naturaleza definida en el Artículo 33 no lograren arreglarla por los medios indicados en dicho Artículo, la someterán al Consejo de Seguridad.

2. Si el Consejo de Seguridad estimare que la continuación de la controversia es realmente susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el Consejo decidirá si ha de proceder de conformidad con el Artículo 36 o si ha de recomendar los términos de arreglo que considere apropiados.

#### **Artículo 38**

Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 33 a 37, el Consejo de Seguridad podrá, si así lo solicitan todas las partes en una controversia, hacerles recomendaciones a efecto de que se llegue a un arreglo pacífico.

---

### **CAPÍTULO VII**

### **ACCIÓN EN CASO DE AMENAZAS A LA PAZ, QUEBRANTAMIENTOS DE LA PAZ O ACTOS DE AGRESIÓN**

---

#### **Artículo 39**

El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá que medidas serán tomadas de conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

#### **Artículo 40**

A fin de evitar que la situación se agrave, el Consejo de Seguridad, antes de hacer las recomendaciones o decidir las medidas de que trata el Artículo 39, podrá instar a las partes interesadas a que cumplan con las medidas provisionales que juzgue necesarias o aconsejables. Dichas medidas provisionales no perjudicarán los derechos, las reclamaciones o la posición de las partes interesadas. El Consejo de Seguridad tomará debida nota del incumplimiento de dichas medidas provisionales.

#### **Artículo 41**

El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas.

#### **Artículo 42**

Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones Unidas.

### **Artículo 43**

1. Todos los Miembros de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, se comprometen a poner a disposición del Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicite, y de conformidad con un convenio especial o con convenios especiales, las fuerzas armadas, la ayuda y las facilidades, incluso el derecho de paso, que sean necesarias para el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales.

Dicho convenio o convenios fijarán el número y clase de las fuerzas, su grado de preparación y su ubicación general, como también la naturaleza de las facilidades y de la ayuda que habrán de darse.

2. El convenio o convenios serán negociados a iniciativa del Consejo de Seguridad tan pronto como sea posible; serán concertados entre el Consejo de Seguridad y Miembros individuales o entre el Consejo de Seguridad y grupos de Miembros, y estarán sujetos a ratificación por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales.

### **Artículo 44**

Cuando el Consejo de Seguridad haya decidido hacer uso de la fuerza, antes de requerir a un Miembro que no éste representado en él a que provea fuerzas armadas en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Artículo 43, invitará a dicho Miembro, si éste así lo deseara, a participar en las decisiones del Consejo de Seguridad relativas al empleo de contingentes de fuerzas armadas de dicho Miembro.

### **Artículo 45**

A fin de que la Organización pueda tomar medidas militares urgentes, sus Miembros mantendrán contingentes de fuerzas aéreas nacionales inmediatamente disponibles para la ejecución combinada de una acción coercitiva internacional. La potencia y el grado de preparación de estos contingentes y los planes para su acción combinada serán determinados, dentro de los límites establecidos en el convenio o convenios especiales de que trata el Artículo 43, por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado Mayor.

### **Artículo 46**

Los planes para el empleo de la fuerza armada serán hechos por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité de Estado Mayor.

### **Artículo 47**

1. Se establecerá un Comité de Estado Mayor para asesorar y asistir al Consejo de Seguridad en todas las cuestiones relativas a las necesidades militares del Consejo para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, al empleo y comando de las fuerzas puestas a su disposición, a la regulación de los armamentos y al posible desarme.

El Comité de Estado Mayor estará integrado por los Jefes de Estado Mayor de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad o sus representantes. Todo Miembro de las Naciones Unidas que no éste permanentemente representado en el Comité será invitado por éste a asociarse a sus labores cuando el desempeño eficiente de las funciones del Comité requiera la participación de dicho Miembro.

El Comité de Estado Mayor tendrá a su cargo, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, la dirección estratégica de todas las fuerzas armadas puestas a disposición del Consejo. Las cuestiones relativas al comando de dichas fuerzas serán resueltas posteriormente.



2. El Comité de Estado Mayor, con autorización del Consejo de Seguridad y después de consultar con los organismos regionales apropiados, podrá establecer subcomités regionales.

#### **Artículo 48**

1. La acción requerida para llevar a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales será ejercida por todos los Miembros de las Naciones Unidas o por algunos de ellos, según lo determine el Consejo de Seguridad.

2. Dichas decisiones serán llevadas a cabo por los Miembros de las Naciones Unidas directamente y mediante su acción en los organismos internacionales apropiados de que formen parte.

#### **Artículo 49**

Los Miembros de las Naciones Unidas deberán prestarse ayuda mutua para llevar a cabo las medidas dispuestas por el Consejo de Seguridad.

#### **Artículo 50**

Si el Consejo de Seguridad tomare medidas preventivas o coercitivas contra un Estado, cualquier otro Estado, sea o no Miembro de las Naciones Unidas, que confrontare problemas económicos especiales originados por la ejecución de dichas medidas, tendrá el derecho de consultar al Consejo de Seguridad acerca de la solución de esos problemas.

#### **Artículo 51**

Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

---

### **CAPÍTULO VIII**

#### **ACUERDOS REGIONALES**

---

#### **Artículo 52**

1. Ninguna disposición de esta Carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de acción regional, siempre que dichos acuerdos u organismos, y sus actividades, sean compatibles con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas.

Los Miembros de las Naciones Unidas que sean partes en dichos acuerdos o que constituyan dichos organismos, harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad.

El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de dichos acuerdos u organismos regionales, procediendo, bien a iniciativa de los Estados interesados, bien a instancia del Consejo de Seguridad.

2. Este Artículo no afecta en manera alguna la aplicación de los Artículos 34 y 35.

### **Artículo 53**

1. El Consejo de Seguridad utilizará dichos acuerdos u organismos regionales, si a ello hubiere lugar, para aplicar medidas coercitivas bajo su autoridad. Sin embargo, no se aplicarán medidas coercitivas en virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales sin autorización del Consejo de Seguridad, salvo que contra Estados enemigos, según se les define en el párrafo 2 de este Artículo, se tomen las medidas dispuestas en virtud del Artículo 107 o en acuerdos regionales dirigidos contra la renovación de una política de agresión de parte de dichos Estados, hasta tanto que a solicitud de los gobiernos interesados quede a cargo de la Organización la responsabilidad de prevenir nuevas agresiones de parte de aquellos Estados.

2. El término "Estados enemigos" empleado en el párrafo 1 de este Artículo se aplica a todo Estado que durante la segunda guerra mundial haya sido enemigo de cualquiera de los signatarios de esta Carta.

### **Artículo 54**

Se deberá mantener en todo tiempo al Consejo de Seguridad plenamente informado de las actividades emprendidas o proyectadas de conformidad con acuerdos regionales o por organismos regionales con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales.

---

## **CAPÍTULO IX**

## **COOPERACIÓN INTERNACIONAL ECONÓMICA Y SOCIAL**

---

### **Artículo 55**

Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social; b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.

### **Artículo 56**

Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55.

### **Artículo 57**

1. Los distintos organismos especializados establecidos por acuerdos intergubernamentales, que tengan amplias atribuciones internacionales definidas en sus estatutos, y relativas a materias de carácter económico, social, cultural, educativo, sanitario, y otras conexas, serán vinculados con la Organización de acuerdo con las disposiciones del Artículo 63. 2. Tales organismos especializados así vinculados con la Organización se denominarán en adelante "los organismos especializados".

### **Artículo 58**

La Organización hará recomendaciones con el objeto de coordinar las normas de acción y las actividades de los organismos especializados.

## **Artículo 59**

La Organización iniciará, cuando hubiere lugar, negociaciones entre los Estados interesados para crear los nuevos organismos especializados que fueren necesarios para la realización de los propósitos enunciados en el Artículo 55.

## **Artículo 60**

La responsabilidad por el desempeño de las funciones de la Organización señaladas en este Capítulo corresponderá a la Asamblea General y, bajo la autoridad de ésta, al Consejo Económico y Social, que dispondrá a este efecto de las facultades expresadas en el Capítulo X.

---

## **CAPÍTULO X**

### **EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL**

---

#### **COMPOSICIÓN**

##### **Artículo 61**

1. El Consejo Económico y Social estará integrado por cincuenta y cuatro Miembros de las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General.

Salvo lo prescrito en el párrafo 3, dieciocho miembros del Consejo Económico y Social serán elegidos cada año por un periodo de tres años. Los miembros salientes serán reelegibles para el periodo subsiguiente.

En la primera elección que se celebre después de haberse aumentado de veintisiete a cincuenta y cuatro el número de miembros del Consejo Económico y Social, además de los miembros que se elijan para sustituir a los nueve miembros cuyo mandato expire al final de ese año, se elegirán veintisiete miembros más. El mandato de nueve de estos veintisiete miembros adicionales así elegidos expirará al cabo de un año y el de otros nueve miembros una vez transcurridos dos años, conforme a las disposiciones que dicte la Asamblea General.

2. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un representante.

#### **FUNCIONES y PODERES**

##### **Artículo 62**

1. El Consejo Económico y Social podrá hacer o iniciar estudios e informes con respecto a asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea General, a los Miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados interesados.

El Consejo Económico y Social podrá hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y la efectividad de tales derechos y libertades.

El Consejo Económico y Social podrá formular proyectos de convención con respecto a cuestiones de su competencia para someterlos a la Asamblea General.

2. El Consejo Económico y Social podrá convocar, conforme a las reglas que prescriba la Organización, conferencias internacionales sobre asuntos de su competencia.

##### **Artículo 63**

1. El Consejo Económico y Social podrá concertar con cualquiera de los organismos especializados de que trata el Artículo 57, acuerdos por medio de los cuales se establezcan las condiciones en que dichos organismos habrán de

vincularse con la Organización. Tales acuerdos estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea General.

2. El Consejo Económico y Social podrá coordinar las actividades de los organismos especializados mediante consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones, como también mediante recomendaciones a la Asamblea General y a los Miembros de las Naciones Unidas.

#### **Artículo 64**

1. El Consejo Económico y Social podrá tomar las medidas apropiadas para obtener informes periódicos de los organismos especializados. También podrá hacer arreglos con los Miembros de las Naciones Unidas y con los organismos especializados para obtener informes con respecto a las medidas tomadas para hacer efectivas sus propias recomendaciones y las que haga la Asamblea General acerca de materias de la competencia del Consejo.

2. El Consejo Económico y Social podrá comunicar a la Asamblea General sus observaciones sobre dichos informes.

#### **Artículo 65**

El Consejo Económico y Social podrá suministrar información al Consejo de Seguridad y deberá darle la ayuda que éste le solicite.

#### **Artículo 66**

1. El Consejo Económico y Social desempeñará las funciones que caigan dentro de su competencia en relación con el cumplimiento de las recomendaciones de la Asamblea General.

El Consejo Económico y Social podrá prestar, con aprobación de la Asamblea General, los servicios que le soliciten los Miembros de las Naciones Unidas y los organismos especializados.

2. El Consejo Económico y Social desempeñará las demás funciones prescritas en otras partes de esta Carta o que le asignare la Asamblea General.

#### **VOTACIÓN**

#### **Artículo 67**

1. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un voto.

2. Las decisiones del Consejo Económico y Social se tomarán por la mayoría de los miembros presentes y votantes.

#### **PROCEDIMIENTO**

#### **Artículo 68**

El Consejo Económico y Social establecerá comisiones de orden económico y social y para la promoción de los derechos humanos, así como las demás comisiones necesarias para el desempeño de sus funciones.

#### **Artículo 69**

El Consejo Económico y Social invitará a cualquier Miembro de las Naciones Unidas a participar, sin derecho a voto, en sus deliberaciones sobre cualquier asunto de particular interés para dicho Miembro.

#### **Artículo 70**

El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos para que representantes de los organismos especializados participen, sin derecho a voto, en sus deliberaciones y en las de las comisiones que establezca, y para que sus propios representantes participen en las deliberaciones de aquellos organismos.

#### **Artículo 71**

El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la

competencia del Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con organizaciones internacionales y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo Miembro de las Naciones Unidas.

#### **Artículo 72**

1. El Consejo Económico y Social dictará su propio reglamento, el cual establecerá el método de elegir su Presidente.
2. El Consejo Económico y Social se reunirá cuando sea necesario de acuerdo con su reglamento, el cual incluirá disposiciones para la convocación a sesiones cuando lo solicite una mayoría de sus miembros.

---

### **CAPÍTULO XI**

#### **DECLARACIÓN RELATIVA A TERRITORIOS NO AUTÓNOMOS**

---

#### **Artículo 73**

Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos territorios, y asimismo se obligan:

a. a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso; b. a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto; c. a promover la paz y la seguridad internacionales; d. a promover medidas constructivas de desarrollo, estimular la investigación, y cooperar unos con otros y, cuando y donde fuere del caso, con organismos internacionales especializados, para conseguir la realización práctica de los propósitos de carácter social, económico y científico expresados en este Artículo; y e. a transmitir regularmente al Secretario General, a título informativo y dentro de los límites que la seguridad y consideraciones de orden constitucional requieran, la información estadística y de cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios por los cuales son respectivamente responsables, que no sean de los territorios a que se refieren los Capítulos XII y XIII de esta Carta.

#### **Artículo 74**

Los Miembros de las Naciones Unidas convienen igualmente en que su política con respecto a los territorios a que se refiere este Capítulo, no menos que con respecto a sus territorios metropolitanos, deberá fundarse en el principio general de la buena vecindad, teniendo debidamente en cuenta los intereses y el bienestar del resto del mundo en cuestiones de carácter social, económico y comercial.

---

### **CAPÍTULO XII**

#### **RÉGIMEN INTERNACIONAL DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA**

---

## **Artículo 75**

La Organización establecerá bajo su autoridad un régimen internacional de administración fiduciaria para la administración y vigilancia de los territorios que puedan colocarse bajo dicho régimen en virtud de acuerdos especiales posteriores. A dichos territorios se les denominará "territorios fideicometidos."

## **Artículo 76**

Los objetivos básicos del régimen de administración fiduciaria, de acuerdo con los Propósitos de las Naciones Unidas enunciados en el Artículo 1 de esta Carta, serán:

a. fomentar la paz y la seguridad internacionales; b. promover el adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes de los territorios fideicometidos, y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independencia, teniéndose en cuenta las circunstancias particulares de cada territorio y de sus pueblos y los deseos libremente expresados de los pueblos interesados, y según se dispusiere en cada acuerdo sobre administración fiduciaria; c. promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, así como el reconocimiento de la interdependencia de los pueblos del mundo; y d. asegurar tratamiento igual para todos los Miembros de las Naciones Unidas y sus nacionales en materias de carácter social, económico y comercial, así como tratamiento igual para dichos nacionales en la administración de la justicia, sin perjuicio de la realización de los objetivos arriba expuestos y con sujeción a las disposiciones del Artículo 80.

## **Artículo 77**

1. El régimen de administración fiduciaria se aplicará a los territorios de las siguientes categorías que se colocaren bajo dicho régimen por medio de los correspondientes acuerdos:

a. territorios actualmente bajo mandato; b. territorios que, como resultado de la segunda guerra mundial, fueren segregados de Estados enemigos, y  
c. territorios voluntariamente colocados bajo este régimen por los Estados responsables de su administración.

2. Será objeto de acuerdo posterior el determinar cuáles territorios de las categorías anteriormente mencionadas serán colocados bajo el régimen de administración fiduciaria y en qué condiciones.

## **Artículo 78**

El régimen de administración fiduciaria no se aplicará a territorios que hayan adquirido la calidad de Miembros de las Naciones Unidas, cuyas relaciones entre sí se basarán en el respeto al principio de la igualdad soberana.

## **Artículo 79**

Los términos de la administración fiduciaria para cada territorio que haya de colocarse bajo el régimen expresado, y cualquier modificación o reforma, deberán ser acordados por los Estados directamente interesados, incluso la potencia mandataria en el caso de territorios bajo mandato de un Miembro de las Naciones Unidas, y serán aprobados según se dispone en los Artículos 83 y 85.

## **Artículo 80**

1. Salvo lo que se conviniere en los acuerdos especiales sobre administración fiduciaria concertados de conformidad con los Artículos 77, 79 y 81 y mediante los cuales se coloque cada territorio bajo el régimen de administración fiduciaria, y hasta tanto se concierten tales acuerdos, ninguna disposición de este Capítulo será interpretada en el sentido de que modifica en manera alguna los derechos de

cualesquiera Estados o pueblos, o los términos de los instrumentos internacionales vigentes en que sean partes Miembros de las Naciones Unidas.

2. El párrafo 1 de este Artículo no será interpretado en el sentido de que da motivo para demorar o diferir la negociación y celebración de acuerdos para aplicar el régimen de administración fiduciaria a territorios bajo mandato y otros territorios, conforme al Artículo 77.

#### **Artículo 81**

El acuerdo sobre administración fiduciaria contendrá en cada caso las condiciones en que se administrará el territorio fideicometido, y designará la autoridad que ha de ejercer la administración. Dicha autoridad, que en lo sucesivo se denominará la "autoridad administradora", podrá ser uno o más Estados o la misma Organización.

#### **Artículo 82**

Podrán designarse en cualquier acuerdo sobre administración fiduciaria, una o varias zonas estratégicas que comprendan parte o la totalidad del territorio fideicometido a que se refiera el acuerdo, sin perjuicio de los acuerdos especiales celebrados con arreglo al Artículo 43.

#### **Artículo 83**

1. Todas las funciones de las Naciones Unidas relativas a zonas estratégicas, incluso la de aprobar los términos de los acuerdos sobre administración fiduciaria y de las modificaciones o reformas de los mismos, serán ejercidas por el Consejo de Seguridad.

Los objetivos básicos enunciados en el Artículo 76 serán aplicables a la población de cada zona estratégica.

2. Salvo las disposiciones de los acuerdos sobre administración fiduciaria y sin perjuicio de las exigencias de la seguridad, el Consejo de Seguridad aprovechará la ayuda del Consejo de Administración Fiduciaria para desempeñar, en las zonas estratégicas, aquellas funciones de la Organización relativas a materias políticas, económicas, sociales y educativas que correspondan al régimen de administración fiduciaria.

#### **Artículo 84**

La autoridad administradora tendrá el deber de velar por que el territorio fideicometido contribuya al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Con tal fin, la autoridad administradora podrá hacer uso de las fuerzas voluntarias, de las facilidades y de la ayuda del citado territorio, a efecto de cumplir con las obligaciones por ella contraídas a este respecto ante el Consejo de Seguridad, como también para la defensa local y el mantenimiento de la ley y del orden dentro del territorio fideicometido.

#### **Artículo 85**

1. Las funciones de la Organización en lo que respecta a los acuerdos sobre administración fiduciaria relativos a todas las zonas no designadas como estratégicas, incluso la de aprobar los términos de los acuerdos y las modificaciones o reformas de los mismos serán ejercidas por la Asamblea General.

2. El Consejo de Administración Fiduciaria, bajo la autoridad de la Asamblea General, ayudará a ésta en el desempeño de las funciones aquí enumeradas.

---

### **CAPÍTULO XIII**

### **EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA**

---



## **COMPOSICIÓN**

### **Artículo 86**

1. El Consejo de Administración Fiduciaria estará integrado por los siguientes Miembros de las Naciones Unidas:

- a. los Miembros que administren territorios fideicometidos;
- b. los Miembros mencionados por su nombre en el Artículo 23 que no estén administrando territorios fideicometidos; y
- c. tantos otros Miembros elegidos por periodos de tres años por la Asamblea General cuantos sean necesarios para asegurar que el número total de miembros del Consejo de Administración Fiduciaria se divida por igual entre los Miembros de las Naciones Unidas administradores de tales territorios y los no administradores.

2. Cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria designará a una persona especialmente calificada para que lo represente en el Consejo.

### **FUNCIONES y PODERES**

#### **Artículo 87**

En el desempeño de sus funciones, la Asamblea General y, bajo su autoridad, el Consejo de Administración Fiduciaria, podrán :

- a. considerar informes que les haya rendido la autoridad administradora;
- b. aceptar peticiones y examinarlas en consulta con la autoridad administradora;
- c. disponer visitas periódicas a los territorios fideicometidos en fechas convenidas con la autoridad administradora; y
- d. tomar estas y otras medidas de conformidad con los términos de los acuerdos sobre administración fiduciaria.

#### **Artículo 88**

El Consejo de Administración Fiduciaria formulará un cuestionario sobre el adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes de cada territorio fideicometido; y la autoridad administradora de cada territorio fideicometido dentro de la competencia de la Asamblea General, rendirá a ésta un informe anual sobre la base de dicho cuestionario.

## **VOTACIÓN**

### **Artículo 89**

1. Cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria tendrá un voto.
2. Las decisiones del Consejo de Administración Fiduciaria serán tomadas por el voto de la mayoría de los miembros presentes y votantes.

## **PROCEDIMIENTO**

### **Artículo 90**

1. El Consejo de Administración Fiduciaria dictará su propio reglamento, el cual establecerá el método de elegir su Presidente.
2. El Consejo de Administración Fiduciaria se reunirá cuando sea necesario, según su reglamento. Este contendrá disposiciones sobre convocación del Consejo a solicitud de la mayoría de sus miembros.



## **Artículo 91**

El Consejo de Administración Fiduciaria, cuando lo estime conveniente, se valdrá de la ayuda del Consejo Económico y Social y de la de los organismos especializados con respecto a los asuntos de la respectiva competencia de los mismos.

---

## **CAPÍTULO XIV**

### **LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA**

---

## **Artículo 92**

La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas; funcionará de conformidad con el Estatuto anexo, que está basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional, y que forma parte integrante de esta Carta.

## **Artículo 93**

1. Todos los Miembros de las Naciones Unidas son *ipso facto* partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
2. Un Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas podrá llegar a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, de acuerdo con las condiciones que determine en cada caso la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad.

## **Artículo 94**

1. Cada Miembro de las Naciones Unidas compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte.
2. Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo.

## **Artículo 95**

Ninguna de las disposiciones de esta Carta impedirá a los Miembros de las Naciones Unidas encomendar la solución de sus diferencias a otros tribunales en virtud de acuerdos ya existentes o que puedan concertarse en el futuro.

## **Artículo 96**

1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica.
2. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados que en cualquier momento sean autorizados para ello por la Asamblea General, podrán igualmente solicitar de la Corte opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades.

---

## **CAPÍTULO XV**

### **LA SECRETARÍA**

---

## **Artículo 97**

La Secretaría se compondrá de un Secretario General y del personal que requiera la Organización. El Secretario General será nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. El Secretario General será el más alto funcionario administrativo de la Organización.

### **Artículo 98**

El Secretario General actuará como tal en todas las sesiones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social y del Consejo de Administración Fiduciaria, y desempeñará las demás funciones que le encomienden dichos órganos. El Secretario General rendirá a la Asamblea General un informe anual sobre las actividades de la Organización.

### **Artículo 99**

El Secretario General podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

### **Artículo 100**

1. En el cumplimiento de sus deberes, el Secretario General y el personal de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la Organización, y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la Organización.

2. Cada uno de los Miembros de las Naciones Unidas se compromete a respetar el carácter exclusivamente internacional de las funciones del Secretario General y del personal de la Secretaría, y a no tratar de influir sobre ellos en el desempeño de sus funciones.

### **Artículo 101**

1. El personal de la Secretaría será nombrado por el Secretario General de acuerdo con las reglas establecidas por la Asamblea General.

Se asignará permanentemente personal adecuado al Consejo Económico y Social, al Consejo de Administración Fiduciaria y, según se requiera, a otros órganos de las Naciones Unidas. Este personal formará parte de la Secretaría.

2. La consideración primordial que se tendrá en cuenta al nombrar el personal de la Secretaría y al determinar las condiciones del servicio, es la necesidad de asegurar el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad. Se dará debida consideración también a la importancia de contratar el personal en forma de que haya la más amplia representación geográfica posible.

---

## **CAPÍTULO XVI**

### **DISPOSICIONES VARIAS**

---

### **Artículo 102**

1. Todo tratado y todo acuerdo internacional concertados por cualesquiera Miembros de las Naciones Unidas después de entrar en vigor esta Carta, serán registrados en la Secretaría y publicados por ésta a la mayor brevedad posible.

2. Ninguna de las partes en un tratado o acuerdo internacional que no haya sido registrado conforme a las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo, podrá invocar dicho tratado o acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas.

### **Artículo 103**

En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta.

#### **Artículo 104**

La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de la capacidad jurídica que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos.

#### **Artículo 105**

1. La Organización gozará, en el territorio de cada uno de sus Miembros, de los privilegios e inmunidades necesarios para la realización de sus propósitos.

Los representantes de los Miembros de la Organización y los funcionarios de ésta, gozarán asimismo de los privilegios e inmunidades necesarios para desempeñar con independencia sus funciones en relación con la Organización.

2. La Asamblea General podrá hacer recomendaciones con el objeto de determinar los pormenores de la aplicación de los párrafos 1 y 2 de este Artículo, o proponer convenciones a los Miembros de las Naciones Unidas con el mismo objeto.

---

### **CAPÍTULO XVII**

#### **ACUERDOS TRANSITORIOS SOBRE SEGURIDAD**

---

#### **Artículo 106**

Mientras entran en vigor los convenios especiales previstos en el Artículo 43, que a juicio del Consejo de Seguridad lo capaciten para ejercer las atribuciones a que se refiere el Artículo 42, las partes en la Declaración de las Cuatro Potencias firmada en Moscú el 30 de octubre de 1943, y Francia, deberán, conforme a las disposiciones del párrafo 5 de esa Declaración, celebrar consultas entre sí, y cuando a ello hubiere lugar, con otros miembros de la Organización, a fin de acordar en nombre de ésta la acción conjunta que fuere necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales.

#### **Artículo 107**

Ninguna de las disposiciones de esta Carta invalidará o impedirá cualquier acción ejercida o autorizada como resultado de la segunda guerra mundial con respecto a un Estado enemigo de cualquiera de los signatarios de esta Carta durante la citada guerra, por los gobiernos responsables de dicha acción.

---

### **CAPÍTULO XVIII**

#### **REFORMAS**

---

#### **Artículo 108**

Las reformas a la presente Carta entrarán en vigor para todos los Miembros de las Naciones Unidas cuando hayan sido adoptadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General y ratificadas, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales, por las dos terceras partes de los Miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

#### **Artículo 109**

1. Se podrá celebrar una Conferencia General de los Miembros de las Naciones Unidas con el propósito de revisar esta Carta, en la fecha y lugar que se determinen por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea General y por el voto de cualesquiera nueve miembros del Consejo de Seguridad. Cada Miembro de las Naciones Unidas tendrá un voto en la Conferencia.

Toda modificación de esta Carta recomendada por el voto de las dos terceras partes de la Conferencia entrará en vigor al ser ratificada de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales, por las dos terceras partes de los Miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

2. Si no se hubiere celebrado tal Conferencia antes de la décima reunión anual de la Asamblea General después de entrar en vigor esta Carta, la proposición de convocar tal Conferencia será puesta en la agenda de dicha reunión de la Asamblea General, y la Conferencia será celebrada si así lo decidieren la mayoría de los miembros de la Asamblea General y siete miembros cualesquiera del Consejo de Seguridad.

---

## **CAPÍTULO XIX**

### **RATIFICACIÓN Y FIRMA**

---

#### **Artículo 110**

1. La presente Carta será ratificada por los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales.

Las ratificaciones serán entregadas para su depósito al Gobierno de los Estados Unidos de América, el cual notificará cada depósito a todos los Estados signatarios así como al Secretario General de la Organización cuando haya sido designado.

La presente Carta entrará en vigor tan pronto como hayan sido depositadas las ratificaciones de la República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, y por la mayoría de los demás Estados signatarios. Acto seguido se dejará constancia de las ratificaciones depositadas en un protocolo que extenderá el Gobierno de los Estados Unidos de América, y del cual transmitirá copias a todos los Estados signatarios.

2. Los Estados signatarios de esta Carta que la ratifiquen después que haya entrado en vigor adquirirán la calidad de miembros originarios de las Naciones Unidas en la fecha del depósito de sus respectivas ratificaciones.

#### **Artículo 111**

La presente Carta, cuyos textos en chino, francés, ruso, inglés y español son igualmente auténticos, será depositada en los archivos del Gobierno de los Estados Unidos de América. Dicho Gobierno enviará copias debidamente certificadas de la misma a los Gobiernos de los demás Estados signatarios.

EN FE DE LO CUAL LOS Representantes de los Gobiernos de las Naciones Unidas han suscrito esta Carta.

FIRMADA en la ciudad de San Francisco, a los veintiséis días del mes de junio de mil novecientos cuarenta y cinco.

### (3)

## **REGLAS DE BEIJING**

Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing)

Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985

Primera parte  
Principios generales

#### 1. Orientaciones fundamentales

1.1 Los Estados Miembros procurarán, en consonancia con sus respectivos intereses generales, promover el bienestar del menor y de su familia.

1.2 Los Estados Miembros se esforzarán por crear condiciones que garanticen al menor una vida significativa en la comunidad fomentando, durante el período de edad en que el menor es más propenso a un comportamiento desviado, un proceso de desarrollo personal y educación lo más exento de delito y delincuencia posible.

1.3 Con objeto de promover el bienestar del menor, a fin de reducir la necesidad de intervenir con arreglo a la ley, y de someter a tratamiento efectivo, humano y equitativo al menor que tenga problemas con la ley, se concederá la debida importancia a la adopción de medidas concretas que permitan movilizar plenamente todos los recursos disponibles, con inclusión de la familia, los voluntarios y otros grupos de carácter comunitario, así como las escuelas y otras instituciones de la comunidad.

1.4 La justicia de menores se ha de concebir como una parte integrante del proceso de desarrollo nacional de cada país y deberá administrarse en el marco general de justicia social para todos los menores, de manera que contribuya a la protección de los jóvenes y al mantenimiento del orden pacífico de la sociedad.

1.5 Las presentes Reglas se aplicarán según el contexto de las condiciones económicas, sociales y culturales que predominen en cada uno de los Estados Miembros.

1.6 Los servicios de justicia de menores se perfeccionarán y coordinarán sistemáticamente con miras a elevar y mantener la competencia de sus funcionarios, e incluso los métodos, enfoques y actitudes adoptados.

Comentario<sup>815</sup>

---

<sup>815</sup> Los comentarios presentados son del propio texto original de la Asamblea General.

Estas orientaciones básicas de carácter general se refieren a la política social en su conjunto y tienen por objeto promover el bienestar del menor en la mayor medida posible, lo que permitiría reducir al mínimo el número de casos en que haya de intervenir el sistema de justicia de menores y, a su vez, reduciría al mínimo los perjuicios que normalmente ocasiona cualquier tipo de intervención. Esas medidas de atención de los menores con fines de prevención del delito antes del comienzo de la vida delictiva constituyen requisitos básicos de política destinados a obviar la necesidad de aplicar las presentes Reglas.

Las reglas 1.1 a 1.3 señalan el importante papel que una política social constructiva respecto al menor puede desempeñar, entre otras cosas, en la prevención del delito y la delincuencia juveniles. La regla 1.4 define la justicia de menores como parte integrante de la justicia social por los menores, mientras que la regla 1.6 se refiere a la necesidad de perfeccionar la justicia de menores de manera continua, para que no quede a la zaga de la evolución de una política social progresiva en relación con el menor en general, teniendo presente la necesidad de mejorar de manera coherente los servicios de personal.

La regla 1.5 procura tener en cuenta las condiciones imperantes en los Estados Miembros, que podrían ocasionar que la manera de aplicar determinadas reglas en uno de ellos fuera necesariamente diferente de la manera adoptada en otros Estados.

## 2. Alcance de las Reglas y definiciones utilizadas

2.1 Las Reglas mínimas que se enuncian a continuación se aplicarán a los menores delincuentes con imparcialidad, sin distinción alguna, por ejemplo, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

2.2 Para los fines de las presentes Reglas, los Estados Miembros aplicarán las definiciones siguientes en forma compatible con sus respectivos sistemas y conceptos jurídicos:

- a) Menor es todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede ser castigado por un delito en forma diferente a un adulto;
- b) Delito es todo comportamiento (acción u omisión) penado por la ley con arreglo al sistema jurídico de que se trate; y
- c) Menor delincuente es todo niño o joven al que se ha imputado la comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la comisión de un delito.

2.3 En cada jurisdicción nacional se procurará promulgar un conjunto de leyes, normas y disposiciones aplicables específicamente a los menores delincuentes, así como a los órganos e instituciones encargados de las funciones de administración de la justicia de menores, conjunto que tendrá por objeto:

- a) Responder a las diversas necesidades de los menores delincuentes, y al mismo tiempo proteger sus derechos básicos;
- b) Satisfacer las necesidades de la sociedad;
- c) Aplicar cabalmente y con justicia las reglas que se enuncian a continuación.

## Comentario

Las Reglas mínimas se han formulado deliberadamente de manera que sean aplicables en diferentes sistemas jurídicos y, al mismo tiempo, establezcan algunas normas mínimas para el tratamiento de los menores delincuentes con arreglo a cualquier definición de la noción de joven y a cualquier sistema de tratamiento de los menores delincuentes. Las Reglas se aplicarán siempre con imparcialidad y sin distinción alguna.

Por lo tanto, la regla 2.1 destaca la importancia de que las Reglas se apliquen siempre con imparcialidad y sin distinción alguna. Su formación responde al principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño.

La regla 2.2 define "menor" y "delito" como componentes del concepto de "menor delincuente", que es el objeto principal de las presentes Reglas mínimas (no obstante, véanse también las reglas 3 y 4). Cabe señalar que las reglas disponen expresamente que corresponderá a cada sistema jurídico nacional fijar las edades mínima y máxima a estos efectos, respetando así cabalmente los sistemas económico, social, político, cultural y jurídico de los Estados Miembros. Ello significa que la noción de "menor" se aplicará a jóvenes de edades muy diferentes, edades que van de los 7 años hasta los 18 años o más. Dicha flexibilidad parece inevitable en vista de la diversidad de sistemas jurídicos nacionales, tanto más cuanto que no restringe los efectos de las Reglas mínimas.

La regla 2.3 responde a la necesidad de leyes nacionales que tengan expresamente por objeto la aplicación óptima de las Reglas mínimas, tanto desde un punto de vista jurídico como práctico.

## 3. Ampliación del ámbito de aplicación de las Reglas

3.1 Las disposiciones pertinentes de las Reglas no sólo se aplicarán a los menores delincuentes, sino también a los menores que puedan ser procesados por realizar cualquier acto concreto que no sea punible tratándose del comportamiento de los adultos.

3.2 Se procurará extender el alcance de los principios contenidos en las Reglas a todos los menores comprendidos en los procedimientos relativos a la atención al menor y a su bienestar.

3.3 Se procurará asimismo extender el alcance de los principios contenidos en las Reglas a los delincuentes adultos jóvenes.

## Comentario

La regla 3 amplía el ámbito de aplicación de la protección otorgada por las Reglas mínimas para la administración de la justicia de menores de modo que abarque:

a) Los llamados "delitos en razón de su condición" previstos en diversos sistemas jurídicos nacionales con arreglo a los cuales se considera delito en los menores una gama de comportamiento distinta y, por lo general, más amplia que en el caso de los adultos (por ejemplo, ausencias injustificadas, desobediencia en la escuela y en la familia, ebriedad en público, etc.) (regla 3.1);

- b) Los procedimientos relativos a la atención al menor y a su bienestar (regla 3.2);
- c) El procesamiento de los delincuentes adultos jóvenes, aunque en este caso la aplicación de las Reglas dependerá de las disposiciones pertinentes sobre la mayoría de edad (regla 3.3).

La ampliación del ámbito de aplicación de las Reglas de modo que abarquen las tres esferas antes mencionadas parece justificada. La regla 3.1 prevé garantías mínimas en esas esferas, y se estima que la regla 3.2 constituye un paso positivo en el establecimiento de un sistema más imparcial, equitativo y humano de justicia para todos los menores que transgredan la ley.

#### 4. Mayoría de edad penal

4.1 En los sistemas jurídicos que reconozcan el concepto de mayoría de edad penal con respecto a los menores, su comienzo no deberá fijarse a una edad demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que acompañan la madurez emocional, mental e intelectual.

##### Comentario

La edad mínima a efectos de responsabilidad penal varía considerablemente en función de factores históricos y culturales. El enfoque moderno consiste en examinar si los niños pueden hacer honor a los elementos morales y psicológicos de responsabilidad penal; es decir, si puede considerarse al niño, en virtud de su discernimiento y comprensión individuales, responsable de un comportamiento esencialmente antisocial. Si el comienzo de la mayoría de edad penal se fija a una edad demasiado temprana o si no se establece edad mínima alguna, el concepto de responsabilidad perdería todo sentido. En general, existe una estrecha relación entre el concepto de responsabilidad que dimana del comportamiento delictivo o criminal y otros derechos y responsabilidades sociales (como el estado civil, la mayoría de edad a efectos civiles, etc.).

Por consiguiente, es necesario que se hagan esfuerzos para convenir en una edad mínima razonable que pueda aplicarse a nivel internacional.

#### 5. Objetivos de la justicia de menores

5.1 El sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito.

##### Comentario

La regla 5 se refiere a dos de los más importantes objetivos de la justicia de menores. El primer objetivo es el fomento del bienestar del menor. Este es el enfoque principal de los sistemas jurídicos en que los menores delincuentes son procesados por tribunales de familia o autoridades administrativas, pero también debe hacerse hincapié en el bienestar de los menores en los sistemas judiciales que siguen el modelo del tribunal penal, contribuyendo así a evitar las sanciones meramente penales. (Véase también la regla 14.)

El segundo objetivo es el "principio de la proporcionalidad". Este principio es conocido como un instrumento para restringir las sanciones punitivas, y se expresa principalmente mediante la fórmula de que el autor ha de llevarse su merecido según



la gravedad del delito. La respuesta a los jóvenes delincuentes no sólo deberá basarse en el examen de la gravedad del delito, sino también en circunstancias personales. Las circunstancias individuales del delincuente (por ejemplo, su condición social, su situación familiar, el daño causado por el delito u otros factores en que intervengan circunstancias personales) han de influir en la proporcionalidad de la reacción (por ejemplo, teniendo en consideración los esfuerzos del delincuente para indemnizar a la víctima o su buena disposición para comenzar una vida sana y útil).

Por el mismo motivo, las respuestas destinadas a asegurar el bienestar del joven delincuente pueden sobrepasar lo necesario y, por consiguiente, infringir los derechos fundamentales del joven, como ha ocurrido en algunos sistemas de justicia de menores. En este aspecto también corresponde salvaguardar la proporcionalidad de la respuesta en relación con las circunstancias del delincuente y del delito, incluida la víctima.

En definitiva, la regla 5 sólo exige que la respuesta en los casos concretos de delincuencia o criminalidad de menores sea adecuada, ni más ni menos. Los temas que las reglas vinculan entre sí pueden contribuir a estimular adelantos en ambos sentidos: los tipos de respuesta nuevos e innovadores son tan necesarios como las precauciones para evitar cualquier ampliación indebida de la red de control social oficial sobre los menores.

## 6. Alcance de las facultades discrecionales

6.1 Habida cuenta de las diversas necesidades especiales de los menores, así como de la diversidad de medidas disponibles, se facultará un margen suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales en las diferentes etapas de los juicios y en los distintos niveles de la administración de justicia de menores, incluidos los de investigación, procesamiento, sentencia y de las medidas complementarias de las decisiones.

6.2 Se procurará, no obstante, garantizar la debida competencia en todas las fases y niveles en el ejercicio de cualquiera de esas facultades discrecionales.

6.3 Los que ejerzan dichas facultades deberán estar especialmente preparados o capacitados para hacerlo juiciosamente y en consonancia con sus respectivas funciones y mandatos.

### Comentario

Las reglas 6.1, 6.2 y 6.3 tratan varios aspectos importantes de una administración de justicia de menores eficaz, justa y humanitaria: la necesidad de permitir el ejercicio de las facultades discrecionales en todos los niveles importantes del procedimiento, de modo que los que adoptan determinaciones puedan tomar las medidas que estimen más adecuadas en cada caso particular, y la necesidad de prever controles y equilibrios a fin de restringir cualquier abuso de las facultades discrecionales y salvaguardar los derechos del joven delincuente. La competencia y el profesionalismo son los instrumentos más adecuados para restringir el ejercicio excesivo de dichas facultades. Por ello, se hace especial hincapié en la idoneidad profesional y en la capacitación de los expertos como un medio valioso para asegurar el ejercicio

prudente de las facultades discrecionales en materia de delincuencia de menores. (Véanse también las reglas 1.6 y 2.2.) En este contexto, se pone de relieve la formulación de directrices concretas acerca del ejercicio de dichas facultades y el establecimiento de un sistema de revisión y de apelación u otro sistema análogo a fin de permitir el examen minucioso de las decisiones y la competencia. Esos mecanismos no se concretan en el presente documento, pues no se prestan fácilmente para incorporarlos en reglas mínimas internacionales, que probablemente no podrán abarcar todas las diferencias que existen en los sistemas judiciales.

## 7. Derechos de los menores

7.1 En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior.

### Comentario

La regla 7.1 hace hincapié en algunos aspectos importantes que representan elementos fundamentales de todo juicio imparcial y justo y que son internacionalmente reconocidos en los instrumentos de derechos humanos vigentes. (Véase también la regla 14.) La presunción de inocencia, por ejemplo, también figura en el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el párrafo 2 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Las reglas 14 y siguientes de las presentes Reglas mínimas precisan cuestiones que son importantes con respecto al procedimiento en los asuntos de menores en particular, mientras que la regla 7.1 ratifica en forma general las garantías procesales más fundamentales.

## 8. Protección de la intimidad

8.1 Para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, se respetará en todas las etapas el derecho de los menores a la intimidad.

8.2 En principio, no se publicará ninguna información que pueda dar lugar a la individualización de un menor delincuente.

### Comentario

La regla 8 destaca la importancia de la protección del derecho de los menores a la intimidad. Los jóvenes son particularmente vulnerables a la difamación. Los estudios criminológicos sobre los procesos de difamación han suministrado pruebas sobre los efectos perjudiciales (de diversos tipos) que dimanar de la individualización permanente de los jóvenes como "delincuentes" o "criminales".

La regla 8 también hace hincapié en la importancia de proteger a los menores de los efectos adversos que pueden resultar de la publicación en los medios de comunicación de informaciones acerca del caso (por ejemplo, el nombre de los menores que se presume delincuentes o que son condenados). Corresponde proteger y defender, al menos en principio, el interés de la persona. (El contenido general de la regla 8 se sigue concretando en la regla 21.)

## 9. Cláusulas de salvedad

9.1 Ninguna disposición de las presentes Reglas podrá ser interpretada en el sentido de excluir a los menores del ámbito de la aplicación de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas y de otros instrumentos y normas reconocidos por la comunidad internacional relativos al cuidado y protección de los jóvenes.

### Comentario

La regla 9 tiene por objeto evitar todo equívoco en lo tocante a la interpretación y aplicación de las presentes Reglas en consonancia con los principios contenidos en los instrumentos y normas internacionales pertinentes -- vigentes o en desarrollo -- relativos a los derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de los Derechos del Niño y el proyecto de convención sobre los derechos del niño. Conviene precisar que la aplicación de las presentes Reglas es sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera instrumentos internacionales que contengan disposiciones de aplicación más amplia. (Véase también la regla 27.)

### Segunda parte

#### Investigación y procesamiento

## 10. Primer contacto

10.1 Cada vez que un menor sea detenido, la detención se notificará inmediatamente a sus padres o su tutor, y cuando no sea posible dicha notificación inmediata, se notificará a los padres o al tutor en el más breve plazo posible.

10.2 El juez, funcionario u organismo competente examinará sin demora la posibilidad de poner en libertad al menor.

10.3 Sin perjuicio de que se consideren debidamente las circunstancias de cada caso, se establecerán contactos entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el menor delincuente para proteger la condición jurídica del menor, promover su bienestar y evitar que sufra daño.

### Comentario

En principio, la regla 10.1 figura en la regla 92 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.

La posibilidad de poner en libertad al menor (regla 10.2) deberá ser examinada sin demora por el juez u otros funcionarios competentes. Por éstos se entiende toda persona o institución en el más amplio sentido de la palabra, incluidas las juntas de la comunidad y las autoridades de policía, que tengan facultades para poner en libertad a la persona detenida. (Véase también el párr. 3 del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.)

La regla 10.3 trata de algunos aspectos fundamentales del procedimiento y del comportamiento que deben observar los agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los casos de delincuencia de menores. La expresión "evitar ... daño" constituye una fórmula flexible que abarca múltiples

aspectos de posible interacción (por ejemplo, el empleo de un lenguaje duro, la violencia física, el contacto con el ambiente). Como la participación en actuaciones de la justicia de menores puede por sí sola causar "daño" a los menores, la expresión "evitar ... daño" debe, por consiguiente, interpretarse en el sentido amplio de reducir al mínimo el daño al menor en la primera instancia, así como cualquier daño adicional o innecesario. Ello es de particular importancia en el primer contacto con las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley, que puede influir profundamente en la actitud del menor hacia el Estado y la sociedad. Además, el éxito de cualquier otra intervención depende en gran medida de esos primeros contactos. En tales casos, la comprensión y la firmeza bondadosa son importantes.

## 11. Remisión de casos

11.1 Se examinará la posibilidad, cuando proceda, de ocuparse de los menores delincuentes sin recurrir a las autoridades competentes, mencionadas en la regla 14.1 infra, para que los juzguen oficialmente.

11.2 La policía, el Ministerio fiscal y otros organismos que se ocupen de los casos de delincuencia de menores estarán facultados para fallar dichos casos discrecionalmente, sin necesidad de vista oficial, con arreglo a los criterios establecidos al efecto en los respectivos sistemas jurídicos y también en armonía con los principios contenidos en las presentes Reglas.

11.3 Toda remisión que signifique poner al menor a disposición de las instituciones pertinentes de la comunidad o de otro tipo estará supeditada al consentimiento del menor o al de sus padres o su tutor; sin embargo, la decisión relativa a la remisión del caso se someterá al examen de una autoridad competente, cuando así se solicite.

11.4 Para facilitar la tramitación discrecional de los casos de menores, se procurará facilitar a la comunidad programas de supervisión y orientación temporales, restitución y compensación a las víctimas.

### Comentario

La remisión, que entraña la supresión del procedimiento ante la justicia penal y, con frecuencia, la reorientación hacia servicios apoyados por la comunidad, se practica habitualmente en muchos sistemas jurídicos con carácter oficial y oficioso. Esta práctica sirve para mitigar los efectos negativos de la continuación del procedimiento en la administración de la justicia de menores (por ejemplo, el estigma de la condena o la sentencia). En muchos casos la no intervención sería la mejor respuesta. Por ello la remisión desde el comienzo y sin envío a servicios sustitutorios (sociales) puede constituir la respuesta óptima. Así sucede especialmente cuando el delito no tiene un carácter grave y cuando la familia, la escuela y otras instituciones de control social oficioso han reaccionado ya de forma adecuada y constructiva o es probable que reaccionen de ese modo.

Como se prevé en la regla 11.2, la remisión puede utilizarse en cualquier momento del proceso de adopción de decisiones por la policía, el Ministerio fiscal u otros órganos como los tribunales, juntas o consejos. La remisión pueden realizarla una, varias o todas las autoridades, según las reglas y normas de los respectivos sistemas

y en consonancia con las presentes Reglas. No debe limitarse necesariamente a los casos menores, de modo que la remisión se convierta en un instrumento importante.

La regla 11.3 pone de relieve el requisito primordial de asegurar el consentimiento del menor delincuente (o de sus padres o tutores) con respecto a las medidas de remisión recomendadas (la remisión que consiste en la prestación de servicios a la comunidad sin dicho consentimiento, constituiría una infracción al Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso). No obstante, es necesario que la validez del consentimiento se pueda impugnar, ya que el menor algunas veces podría prestarlo por pura desesperación. La regla subraya que se deben tomar precauciones para disminuir al mínimo la posibilidad de coerción e intimidación en todos los niveles del proceso de remisión. Los menores no han de sentirse presionados (por ejemplo, a fin de evitar la comparecencia ante el tribunal) ni deben ser presionados para lograr su consentimiento en los programas de remisión. Por ello, se aconseja que se tomen disposiciones para una evaluación objetiva de la conveniencia de que intervenga una "autoridad competente cuando así se solicite" en las actuaciones relativas a menores delincuentes. (La "autoridad competente" puede ser distinta de la que se menciona en la regla 14.)

La regla 11.4 recomienda que se prevean opciones sustitutorias viables del procesamiento ante la justicia de menores en la forma de una remisión basada en la comunidad. Se recomiendan especialmente los programas que entrañan la avenencia mediante la indemnización de la víctima y los que procuran evitar futuras transgresiones de la ley gracias a la supervisión y orientación temporales. Los antecedentes de fondo de los casos particulares determinarán el carácter adecuado de la remisión, aun cuando se hayan cometido delitos más graves (por ejemplo, el primer delito, el hecho que se haya cometido bajo la presión de los compañeros del menor, etc.)

## 12. Especialización policial

12.1 Para el mejor desempeño de sus funciones, los agentes de policía que traten a menudo o de manera exclusiva con menores o que se dediquen fundamentalmente a la prevención de la delincuencia de menores, recibirán instrucción y capacitación especial. En las grandes ciudades habrá contingentes especiales de policía con esa finalidad.

### Comentario

La regla 12 señala la necesidad de impartir una formación especializada a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que intervengan en la administración de la justicia de menores. Como la policía es el primer punto de contacto con el sistema de la justicia de menores, es muy importante que actúe de manera informada y adecuada.

Aunque la relación entre la urbanización y el delito es sin duda compleja, el incremento de la delincuencia juvenil va unido al crecimiento de las grandes ciudades, sobre todo a un crecimiento rápido y no planificado. Por consiguiente, son indispensables contingentes especializados de policía, no sólo como garantía de la aplicación de los principios concretos previstos en el presente instrumento (como la regla 1.6), sino también, de forma más general, para mejorar la prevención y

represión de la delincuencia de menores y el tratamiento de los menores delincuentes.

### 13. Prisión preventiva

13.1 Sólo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y durante el plazo más breve posible.

13.2 Siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias de la prisión preventiva, como la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia o el traslado a un hogar o a una institución educativa.

13.3 Los menores que se encuentren en prisión preventiva gozarán de todos los derechos y garantías previstos en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas.

13.4 Los menores que se encuentren en prisión preventiva estarán separados de los adultos y reclusos en establecimientos distintos o en recintos separados en los establecimientos en que haya detenidos adultos.

13.5 Mientras se encuentren bajo custodia, los menores recibirán cuidados, protección y toda la asistencia -- social, educacional, profesional, psicológica, médica y física -- que requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características individuales.

#### Comentario

No se debe subestimar el peligro de que los menores sufran "influencias corruptoras" mientras se encuentren en prisión preventiva. De ahí la importancia de insistir en la necesidad de medidas sustitutorias. De esta forma la regla 13.1 anima a idear medidas nuevas e innovadoras que permitan evitar dicha prisión preventiva en interés del bienestar del menor.

Los menores que se encuentren en prisión preventiva deben gozar de todos los derechos y garantías previstas en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, especialmente en el artículo 9, en el inciso b del párrafo 2 del artículo 10 y en el párrafo 3 de dicho artículo.

La regla 13.4 no impedirá a los Estados tomar otras medidas contra la influencia negativa de los delincuentes adultos que sean al menos tan eficaces como las mencionadas en la regla.

Las diferentes formas de asistencia que pueden llegar a ser necesarias se han enumerado para señalar la amplia gama de necesidades concretas de los jóvenes reclusos que hay que atender (por ejemplo, mujeres u hombres, toxicómanos, alcohólicos, menores con perturbaciones mentales, jóvenes que sufren el trauma, por ejemplo, del propio arresto, etc.).

Las diversas características físicas y psicológicas de los jóvenes reclusos pueden justificar medidas de clasificación por las que algunos de ellos estén reclusos aparte mientras se encuentren en prisión preventiva, lo que contribuye a evitar que se

conviertan en víctimas de otros reclusos y permite prestarles una asistencia más adecuada.

El Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en su resolución 4, sobre la elaboración de normas de justicia de menores, especificaba que dichas reglas debían, entre otras cosas, reflejar el principio básico de que la prisión preventiva debe usarse únicamente como último recurso, que no debe mantenerse a ningún menor en una institución donde sea vulnerable a las influencias negativas de reclusos adultos y que deben tenerse siempre en cuenta las necesidades propias de su estado de desarrollo.

### Tercera parte

#### De la sentencia y la resolución

#### 14. Autoridad competente para dictar sentencia

14.1 Todo menor delincuente cuyo caso no sea objeto de remisión (con arreglo a la regla 11) será puesto a disposición de la autoridad competente (corte, tribunal, junta, consejo, etc.), que decidirá con arreglo a los principios de un juicio imparcial y equitativo.

14.2 El procedimiento favorecerá los intereses del menor y se sustanciará en un ambiente de comprensión, que permita que el menor participe en él y se exprese libremente.

#### Comentario

No es fácil elaborar una definición de órgano o persona competente para dictar sentencia que goce de aceptación universal. Con "autoridad competente" se trata de designar a aquellas personas que presiden cortes o tribunales (unipersonales o colegiados), incluidos los jueces letrados y no letrados, así como las administrativas (por ejemplo, los sistemas escocés y escandinavo), u otros organismos comunitarios y más oficiosos de arbitraje, cuya naturaleza les faculta para dictar sentencia.

Sea como fuere, el procedimiento aplicable a los menores delincuentes deberá ceñirse a las reglas mínimas que se aplican en casi todo el mundo a todo delincuente que disponga de defensa con arreglo al procedimiento penal conocido como "debido proceso legal". De conformidad con el debido proceso, en un "juicio imparcial y equitativo" deben darse garantías tales como la presunción de inocencia, la presentación y examen de testigos, la igualdad en materia de medios de defensa judicial, el derecho a no responder, el derecho a decir la última palabra en la vista, el derecho de apelación, etc. (Véase también la regla 7.1)

#### 15. Asesoramiento jurídico y derechos de los padres y tutores

15.1 El menor tendrá derecho a hacerse representar por un asesor jurídico durante todo el proceso o a solicitar asistencia jurídica gratuita cuando esté prevista la prestación de dicha ayuda en el país.

15.2 Los padres o tutores tendrán derecho a participar en las actuaciones y la autoridad competente podrá requerir su presencia en defensa del menor. No

obstante, la autoridad competente podrá denegar la participación si existen motivos para presumir que la exclusión es necesaria en defensa del menor.

#### Comentario

La terminología que se usa en la regla 15.1 es similar a la de la regla 93 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Si bien el asesoramiento jurídico y la asistencia judicial gratuita son necesarias para garantizar la asistencia judicial al menor, el derecho de los padres o tutores a participar según se indica en la regla 15.2 debe considerarse como una asistencia general al menor, de naturaleza psicológica y emotiva, que se extiende a lo largo de todo el proceso.

La autoridad competente, para dictar una sentencia justa en el caso, puede utilizar con provecho, sobre todo, la colaboración de los representantes legales del menor (o, a los mismos efectos, de algún otro asistente personal en el que el menor pueda depositar y deposite realmente su confianza). Este interés puede verse frustrado si la presencia de los padres o tutores en las vistas ejerce una influencia negativa, por ejemplo si manifiestan una actitud hostil hacia el menor, de ahí que deba preverse la posibilidad de su exclusión de la vista.

### 16. Informes sobre investigaciones sociales

16.1 Para facilitar la adopción de una decisión justa por parte de la autoridad competente, y a menos que se trate de delitos leves, antes de que esa autoridad dicte una resolución definitiva se efectuará una investigación completa sobre el medio social y las condiciones en que se desarrolla la vida del menor y sobre las circunstancias en las que se hubiere cometido el delito.

#### Comentario

Los informes preparados sobre la base de investigaciones de carácter social (informes sociales o informes previos a la sentencia) constituyen una ayuda indispensable en la mayoría de los procesos incoados a menores delincuentes. La autoridad competente debe estar informada de los antecedentes sociales y familiares del menor, su trayectoria escolar, sus experiencias educativas, etc. Con ese fin, en algunos ámbitos judiciales se recurre a servicios sociales especiales o a personal especializado que dependen de los tribunales o de las juntas. Otras clases de personal, como los agentes de libertad vigilada, pueden desempeñar las mismas funciones. Así la regla exige que haya servicios sociales adecuados que preparen informes especializados basados en investigaciones de carácter social.

### 17. Principios rectores de la sentencia y la resolución

17.1 La decisión de la autoridad competente se ajustará a los siguientes principios:

- a) La respuesta que se dé al delito será siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del delito, sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las necesidades de la sociedad;
- b) Las restricciones a la libertad personal del menor se impondrán sólo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible;
- c) Sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el menor sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada;



d) En el examen de los casos se considerará primordial el bienestar del menor.

17.2 Los delitos cometidos por menores no se sancionarán en ningún caso con la pena capital.

17.3 Los menores no serán sancionados con penas corporales.

17.4 La autoridad competente podrá suspender el proceso en cualquier momento.

#### Comentario

El principal problema con que se tropieza al elaborar directrices para la resolución judicial en casos de menores estriba en el hecho de que están sin resolver algunos conflictos entre opciones fundamentales, tales como los siguientes:

- a) Rehabilitación frente a justo merecido;
- b) Asistencia frente a represión y castigo;
- c) Respuesta en función de las circunstancias concretas de cada caso frente a respuesta en función de la protección de la sociedad en general;
- d) Disuasión de carácter general frente a incapacitación individual.

Los conflictos entre estas opciones son más acusados en los casos de menores que en los casos de adultos. Con la diversidad de causas y respuestas que caracterizan a la delincuencia juvenil se da un intrincado entrelazamiento de estas alternativas.

No incumbe a las presentes Reglas mínimas para la administración de la justicia de menores prescribir el enfoque que haya que seguir, sino más bien determinar uno que esté en la mayor consonancia posible con los principios aceptados a escala internacional. Por consiguiente, los elementos fundamentales contenidos en la regla 17.1, especialmente en los incisos a y c, deben considerarse principalmente como directrices prácticas para establecer un punto de partida común; si las autoridades pertinentes actúan en consonancia con ellas (véase también la regla 5), podrán hacer una importante contribución a la protección de los derechos fundamentales de los menores delincuentes, especialmente los derechos fundamentales a la educación y al desarrollo de la personalidad.

El inciso b de la regla 17.1 significa que los enfoques estrictamente punitivos no son adecuados. Si bien en los casos de adultos, y posiblemente también en los casos de delitos graves cometidos por menores, tenga todavía cierta justificación la idea de justo merecido y de sanciones retributivas, en los casos de menores siempre tendrá más peso el interés por garantizar el bienestar y el futuro del joven.

De conformidad con la resolución 8 del Sexto Congreso de las Naciones Unidas, dicho inciso alienta el uso, en la mayor medida posible, de medidas sustitutorias de la reclusión en establecimientos penitenciarios teniendo presente el imperativo de responder a las necesidades concretas de los jóvenes. Debe, pues, hacerse pleno uso de toda la gama de sanciones sustitutorias existentes, y deben establecerse otras nuevas sanciones, sin perder de vista la seguridad pública. Habría de hacerse uso de la libertad vigilada en la mayor medida posible, mediante la suspensión de condenas, condenas condicionales, órdenes de las juntas y otras resoluciones.

El inciso c de la regla 17.1 corresponde a uno de los principios rectores contenidos en la resolución 4 del Sexto congreso, que propugna evitar el encarcelamiento en casos de menores salvo que no haya otra respuesta adecuada para proteger la seguridad pública.

La disposición que prohíbe la pena capital, contenida en la regla 17.2, está en consonancia con el párrafo 5 del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La disposición por la que se prohíbe el castigo corporal (regla 17.3) está en consonancia con el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el proyecto de convención sobre los derechos del niño.

La facultad de suspender el proceso en cualquier momento (regla 17.4) es una característica inherente al tratamiento dado a los menores frente al dado a los adultos. En cualquier momento pueden llegar a conocimiento de la autoridad competente circunstancias que parezcan aconsejar la suspensión definitiva del proceso.

## 18. Pluralidad de medidas resolutorias

18.1 Para mayor flexibilidad y para evitar en la medida de lo posible el confinamiento en establecimientos penitenciarios, la autoridad competente podrá adoptar una amplia diversidad de decisiones. Entre tales decisiones, algunas de las cuales pueden aplicarse simultáneamente, figuran las siguientes:

- a) Ordenes en materia de atención, orientación y supervisión;
- b) Libertad vigilada;
- c) Ordenes de prestación de servicios a la comunidad;
- d) Sanciones económicas, indemnizaciones y devoluciones;
- e) Ordenes de tratamiento intermedio y otras formas de tratamiento;
- f) Ordenes de participar en sesiones de asesoramiento colectivo y en actividades análogas;
- g) Ordenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida u otros establecimientos educativos;
- h) Otras órdenes pertinentes.

18.2 Ningún menor podrá ser sustraído, total o parcialmente, a la supervisión de sus padres, a no ser que las circunstancias de su caso lo hagan necesario.

### Comentario

La regla 18.1 constituye un intento de enumerar algunas de las respuestas y sanciones importantes a que se ha recurrido hasta la fecha y cuyos buenos resultados han podido comprobarse en diferentes sistemas jurídicos. En general,

constituyen opciones prometedoras que convendría difundir y perfeccionar. La regla no alude a las necesidades de personal, dado que en algunas regiones es previsible escasez de personal idóneo; en esas regiones pueden experimentarse o elaborarse medidas cuya aplicación exija menos personal.

Los ejemplos citados en la regla 18.1 tienen en común, ante todo, el hecho de que se basan en la comunidad y apelan a su participación para la aplicación efectiva de resoluciones alternativas. Las correcciones aplicadas en la comunidad son una medida tradicional que asume en la actualidad múltiples facetas. Por ello debería alentarse a las autoridades pertinentes a que prestaran servicios de base comunitaria.

La regla 18.2 hace referencia a la importancia de la familia que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es "el elemento natural y fundamental de la sociedad". Dentro de la familia, los padres tienen, no sólo el derecho, sino también la responsabilidad de atender y supervisar a sus hijos. Por consiguiente, la regla 18.2 establece que la separación de los hijos respecto de sus padres sea una medida aplicada como último recurso. Sólo puede recurrirse a ella cuando los hechos que constituyen el caso exigen claramente la adopción de esta grave medida (por ejemplo, el abuso de menores).

## 19. Carácter excepcional del confinamiento en establecimientos penitenciarios

19.1 El confinamiento de menores en establecimientos penitenciarios se utilizará en todo momento como último recurso y por el más breve plazo posible.

### Comentario

Los criminólogos más avanzados abogan por el tratamiento fuera de establecimientos penitenciarios. Las diferencias encontradas en el grado de eficacia del confinamiento en establecimientos penitenciarios comparado con las medidas que excluyen dicho confinamiento son pequeñas o inexistentes. Es evidente que las múltiples influencias negativas que todo ambiente penitenciario parece ejercer inevitablemente sobre el individuo no pueden neutralizarse con un mayor cuidado en el tratamiento. Sucede así sobre todo en el caso de los menores, que son especialmente vulnerables a las influencias negativas; es más, debido a la temprana etapa de desarrollo en que éstos se encuentran, no cabe duda de que tanto la pérdida de la libertad como el estar aislados de su contexto social habitual agudizan los efectos negativos.

La regla 19 pretende restringir el confinamiento en establecimientos penitenciarios en dos aspectos: en cantidad ("último recurso") y en tiempo ("el más breve plazo posible"). La regla 19 recoge uno de los principios rectores básicos de la resolución 4 del Sexto Congreso de las Naciones Unidas: un menor delincuente no puede ser encarcelado salvo que no exista otra respuesta adecuada. La regla, por consiguiente, proclama el principio de que, si un menor debe ser confinado en un establecimiento penitenciario, la pérdida de la libertad debe limitarse al menor grado posible, a la vez que se hacen arreglos institucionales especiales para su confinamiento sin perder de vista las diferencias entre los distintos tipos de delincuentes, delitos y establecimientos penitenciarios. En definitiva, deben considerarse preferibles los establecimientos "abiertos" a los "cerrados". Por otra parte, cualquier instalación debe ser de tipo correccional o educativo antes que carcelario.

## 20. Prevención de demoras innecesarias

20.1 Todos los casos se tramitarán desde el comienzo de manera expedita y sin demoras innecesarias.

#### Comentario

La rapidez en la tramitación de los casos de menores es de fundamental importancia. De no ser así, peligrarían cualesquiera efectos positivos que el procedimiento y la resolución pudieran acarrear. Con el transcurso del tiempo, el menor tendrá dificultades intelectuales y psicológicas cada vez mayores, por no decir insuperables, para establecer una relación entre el procedimiento y la resolución, por una parte, y el delito, por otra.

## 21. Registros

21.1 Los registros de menores delincuentes serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán ser consultados por terceros. Sólo tendrán acceso a dichos archivos las personas que participen directamente en la tramitación de un caso en curso, así como otras personas debidamente autorizadas.

21.2 Los registros de menores delincuentes no se utilizarán en procesos de adultos relativos a casos subsiguientes en los que esté implicado el mismo delincuente.

#### Comentario

La regla trata de ser una transacción entre intereses contrapuestos en materia de registros y expedientes: los de los servicios de policía, el Ministerio fiscal y otras autoridades por aumentar la vigilancia, y los intereses del delincuente. (Véase también la regla 8.) La expresión "otras personas debidamente autorizadas" suele aplicarse, entre otros, a los investigadores.

## 22. Necesidad de personal especializado y capacitado

22.1 Para garantizar la adquisición y el mantenimiento de la competencia profesional necesaria a todo el personal que se ocupa de casos de menores, se impartirá enseñanza profesional, cursos de capacitación durante el servicio y cursos de repaso, y se emplearán otros sistemas adecuados de instrucción.

22.2 El personal encargado de administrar la justicia de menores responderá a las diversas características de los menores que entran en contacto con dicho sistema. Se procurará garantizar una representación equitativa de mujeres y de minorías en los organismos de justicia de menores.

#### Comentario

Las personas competentes para conocer en estos casos pueden tener orígenes muy diversos (jueces municipales en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en las regiones en que ha tenido influencia el sistema jurídico de ese país; jueces con formación jurídica en los países que siguen el derecho romano y en las regiones de su influencia; personas con formación jurídica o sin ella designadas por elección o por nombramiento administrativo, miembros de juntas de la comunidad, etc., en otras regiones). Es indispensable que todas estas personas tengan siquiera una formación mínima en materia de derecho, sociología, psicología, criminología y ciencias del comportamiento. Esta es una cuestión a la que se atribuye tanta importancia como a la especialización orgánica y a la independencia de la autoridad competente.

Tratándose de trabajadores sociales y de agentes de libertad vigilada, tal vez no sea viable la exigencia de especialización profesional como requisito previo para el desempeño de funciones en el ámbito de la delincuencia juvenil. De modo que la titulación mínima podrá obtenerse mediante la instrucción profesional en el empleo.

Las titulaciones profesionales constituyen un elemento fundamental para garantizar la administración imparcial y eficaz de la justicia de menores. Por consiguiente, es necesario mejorar los sistemas de contratación, ascenso y capacitación profesional del personal y dotarlo de los medios necesarios para el desempeño correcto de sus funciones.

Para lograr la imparcialidad de la administración de la justicia de menores debe evitarse todo género de discriminación por razones políticas, sociales, sexuales, raciales, religiosas, culturales o de otra índole en la selección, contratación y ascenso del personal encargado de la justicia de menores. Así lo recomendó el Sexto Congreso. Por otra parte, el Sexto Congreso hizo un llamamiento a los Estados Miembros para que garantizaran el tratamiento justo y equitativo de las mujeres como miembros del personal encargado de administrar la justicia penal y recomendó que se adoptaran medidas especiales para contratar, dar capacitación y facilitar el ascenso de personal femenino en la administración de la justicia de menores.

#### Cuarta parte

#### Tratamiento fuera de los establecimientos penitenciarios

##### 23. Ejecución efectiva de la resolución

23.1 Se adoptarán disposiciones adecuadas para la ejecución de las órdenes que dicte la autoridad competente, y que se mencionan en la regla 14.1, por esa misma autoridad o por otra distinta si las circunstancias así lo exigen.

23.2 Dichas disposiciones incluirán la facultad otorgada a la autoridad competente para modificar dichas órdenes periódicamente según estime pertinente, a condición de que la modificación se efectúe en consonancia con los principios enunciados en las presentes Reglas.

#### Comentario

En los casos de menores, más que en los de adultos, las resoluciones tienden a influir en la vida del menor durante largos períodos de tiempo. De ahí la importancia de que la autoridad competente o un órgano independiente (junta de libertad bajo palabra, autoridad encargada de supervisar la libertad vigilada, institución de bienestar juvenil u otras autoridades) con calificaciones iguales a las de la autoridad competente que conoció del caso originalmente, supervisen la ejecución de la sentencia. La creación del cargo de juez de la ejecución de penas en algunos países obedece a este propósito.

La composición, los poderes y las funciones de la autoridad deben ser flexibles; en la regla 23 se describen en general con objeto de facilitar su amplia aceptación.

##### 24. Prestación de asistencia

24.1 Se procurará proporcionar a los menores, en todas las etapas del procedimiento, asistencia en materia de alojamiento, enseñanza o capacitación profesional, empleo o cualquiera otra forma de asistencia, útil y práctica, para facilitar el proceso de rehabilitación.

#### Comentario

La consideración fundamental es la promoción del bienestar del menor. Por tanto, la regla 24 subraya la importancia de facilitar instalaciones, servicios y otra asistencia necesaria que redunde en los mejores intereses del menor durante todo el proceso de rehabilitación.

### 25. Movilización de voluntarios y otros servicios de carácter comunitario

25.1 Se recurrirá a los voluntarios, a las organizaciones de voluntarios, a las instituciones locales y a otros recursos de la comunidad para que contribuyan eficazmente a la rehabilitación del menor en un ambiente comunitario y, en la forma en que ésta sea posible, en el seno de la unidad familiar.

#### Comentario

Esta regla refleja la necesidad de que todas las actividades relacionadas con los delinquentes menores estén orientadas a la rehabilitación. La cooperación de la comunidad es indispensable para seguir eficazmente las directrices de la autoridad competente. Los voluntarios y los servicios de carácter voluntario, en particular, resultan una fuente de actividades útiles, en gran medida no utilizada actualmente. En algunos casos, la cooperación de antiguos delinquentes (incluidos antiguos toxicómanos) puede ser extremadamente valiosa.

La regla 25 deriva de los principios estipulados en las reglas 1.1 a 1.6 y sigue las disposiciones pertinentes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

#### Quinta parte

### Tratamiento en establecimientos penitenciarios

### 26. Objetivos del tratamiento en establecimientos penitenciarios

26.1 La capacitación y el tratamiento de menores confinados en establecimientos penitenciarios tienen por objeto garantizar su cuidado y protección, así como su educación y formación profesional para permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo en la sociedad.

26.2 Los menores confinados en establecimientos penitenciarios recibirán los cuidados, la protección y toda la asistencia necesaria -- social, educacional, profesional, psicológica, médica y física -- que puedan requerir debido a su edad, sexo y personalidad y en interés de su desarrollo sano.

26.3 Los menores confinados en establecimientos penitenciarios se mantendrán separados de los adultos y estarán detenidos en un establecimiento separado o en una parte separada de un establecimiento en el que también estén encarcelados adultos.

26.4 La delincuente joven confinada en un establecimiento merece especial atención en lo que atañe a sus necesidades y problemas personales. En ningún caso recibirá

menos cuidados, protección, asistencia, tratamiento y capacitación que el delincuente joven. Se garantizará su tratamiento equitativo.

26.5 En el interés y bienestar del menor confinado en un establecimiento penitenciario, tendrán derecho de acceso los padres o tutores.

26.6 Se fomentará la cooperación entre los ministerios y los departamentos para dar formación académica o, según proceda, profesional adecuada al menor que se encuentre confinado en un establecimiento penitenciario a fin de garantizar que al salir no se encuentre en desventaja en el plano de la educación.

#### Comentario

Los objetivos del tratamiento en establecimientos, tal como se enuncian en las reglas 26.1 y 26.2, serían aceptables para cualquier sistema o cultura. No obstante, dichos objetivos no se han alcanzado en todos los lugares y aún queda mucho por hacer en este sentido.

La asistencia médica y psicológica, en particular, es extremadamente importante para los toxicómanos confinados en establecimientos, y para los jóvenes violentos y enfermos mentales.

Evitar las influencias negativas ejercidas por delincuentes adultos y proteger el bienestar del menor en un ambiente penitenciario, como se estipula en la regla 26.3, está en armonía con los principios rectores básicos de las Reglas establecidos por el Sexto Congreso en su resolución 4. Esta regla no impedirá a los Estados tomar otras medidas contra la influencia negativa de los delincuentes adultos que sean al menos tan eficaces como las mencionadas en la regla. (Véase también la regla 13.4)

La regla 26.4 obedece a que las delincuentes suelen recibir menos atención que los delincuentes, como indicó el Sexto Congreso. En particular, la resolución 9 del Sexto Congreso pide que se dé un tratamiento equitativo a la delincuente en todas las etapas del proceso de justicia penal y que se preste especial atención a sus problemas y necesidades particulares mientras esté confinada. Además, esta regla debería también considerarse teniendo en cuenta la Declaración de Caracas del Sexto Congreso que, entre otras cosas, pide un tratamiento igual en la administración de justicia penal, y la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

El derecho de acceso (regla 26.5) dimana de las disposiciones de las reglas 7.1, 10.1, 15.2 y 18.2. La cooperación entre ministerios y entre departamentos (regla 26.6) es de particular importancia para mejorar en términos generales la calidad del tratamiento y la capacitación en los establecimientos penitenciarios.

27. Aplicación de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas

27.1 En principio, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y las recomendaciones conexas serán aplicables en la medida pertinente al tratamiento de

los menores delincuentes en establecimientos penitenciarios, inclusive los que estén en prisión preventiva.

27.2 Con objeto de satisfacer las diversas necesidades del menor específicas a su edad, sexo y personalidad, se procurará aplicar los principios pertinentes de las mencionadas Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos en toda la medida de lo posible.

#### Comentario

Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos figuran entre los primeros instrumentos de ese tipo promulgados por las Naciones Unidas. En general se reconoce que dichas Reglas han tenido consecuencias a escala mundial. Pese a que hay países en los que su aplicación es más una aspiración que una realidad, esas Reglas siguen ejerciendo una importante influencia en la administración humanitaria y equitativa de los establecimientos correccionales.

Algunos principios fundamentales relativos a los menores delincuentes en establecimientos penitenciarios están recogidos ya en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (cuartos destinados al alojamiento, características arquitectónicas de los locales, camas, ropas, quejas y peticiones, contactos con el mundo exterior, alimentación, atención médica, servicios religiosos, separación por edades, personal, trabajo, etc.), así como los relativos a las medidas punitivas, disciplinarias y de coerción aplicables a los delincuentes peligrosos. Sería inoportuno modificar dichas Reglas mínimas en función de las características especiales que han de tener los establecimientos penitenciarios de menores dentro del ámbito de las presentes Reglas mínimas para la administración de la justicia de menores.

La regla 27 se centra en los requisitos necesarios aplicables a un menor confinado en un establecimiento penitenciario (regla 27.1), así como en las diversas necesidades específicas a su edad, sexo y personalidad (regla 27.2). Por consiguiente, los objetivos y el contenido de la regla están relacionados con las disposiciones pertinentes de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.

#### 28. Frecuente y pronta concesión de la libertad condicional

28.1 La autoridad pertinente recurrirá en la mayor medida posible a la libertad condicional y la concederá tan pronto como sea posible.

28.2 Los menores en libertad condicional recibirán asistencia del correspondiente funcionario a cuya supervisión estarán sujetos, y el pleno apoyo de la comunidad.

#### Comentario

La facultad para conceder la libertad condicional puede conferirse a la autoridad que se menciona en la regla 14.1 o a una autoridad distinta. De ahí que en el presente caso proceda hablar de "correspondiente" y no de autoridad "competente".

Cuando las circunstancias lo permitan, se deberá optar por conceder la libertad condicional en lugar de dejar que el menor cumpla toda la pena. Cuando se tengan pruebas de un progreso satisfactorio hacia la rehabilitación, siempre que sea posible podrá concederse la libertad condicional, incluso a delincuentes que se consideraron peligrosos en el momento de su confinamiento en un establecimiento penitenciario. Al



igual que la libertad vigilada, la libertad condicional podrá supeditarse al cumplimiento satisfactorio de los requisitos especificados por las autoridades pertinentes durante un período de tiempo estipulado en la orden, por ejemplo, el relativo al "buen comportamiento" del delincuente, la participación en programas comunitarios, su residencia en establecimientos de transición, etc.

Cuando se conceda la libertad condicional a un delincuente se deberá designar a un agente de libertad vigilada o a otro funcionario para que supervise su comportamiento y le preste asistencia (en particular si aún no se ha implantado el régimen de libertad vigilada), y estimular el apoyo de la comunidad.

## 29. Sistemas intermedios

29.1 Se procurará establecer sistemas intermedios como establecimientos de transición, hogares educativos, centros de capacitación diurnos y otros sistemas pertinentes que puedan facilitar la adecuada reintegración de los menores a la sociedad.

### Comentario

No hace falta subrayar la importancia de la asistencia postcarcelaria. La presente regla hace hincapié en la necesidad de establecer una red de mecanismos intermedios.

Esta regla recalca también la necesidad de una gama de instalaciones y servicios destinados a satisfacer las necesidades del joven delincuente que vuelve a la comunidad y a facilitar asesoramiento y apoyo estructural como un paso importante hacia la buena reintegración en la sociedad.

## Sexta parte

### Investigación, planificación y formulación y evaluación de políticas

30. La investigación como base de la planificación y de la formulación y la evaluación de políticas

30.1 Se procurará organizar y fomentar las investigaciones necesarias como base para una planificación y una formulación de políticas que sean efectivas.

30.2 Se procurará revisar y evaluar periódicamente las tendencias, los problemas y las causas de la delincuencia y criminalidad de menores, así como las diversas necesidades particulares del menor en custodia.

30.3 Se procurará establecer con carácter regular un mecanismo de evaluación e investigación en el sistema de administración de justicia de menores y recopilar y analizar los datos y la información pertinentes con miras a la debida evaluación y perfeccionamiento ulterior de dicho sistema.

30.4 La prestación de servicios en la administración de justicia de menores se preparará y ejecutará de modo sistemático como parte integrante de los esfuerzos de desarrollo nacional.

### Comentario

La utilización de la investigación como base de una política racional de justicia de menores se ha reconocido ampliamente que constituye un importante mecanismo para lograr que las medidas prácticas tengan en cuenta la evolución y el mejoramiento continuos del sistema de justicia de menores. En la esfera de la delincuencia de menores es especialmente importante la influencia recíproca entre la investigación y las políticas. Debido a los cambios rápidos y a menudo espectaculares del estilo de vida de la juventud y de las formas y dimensiones de la criminalidad de menores, la respuesta de la sociedad y la justicia a la criminalidad y a la delincuencia de menores pronto quedan anticuadas e inadecuadas.

Por consiguiente, la regla 30 establece criterios para integrar la investigación en el proceso de formulación y aplicación de políticas en la administración de justicia de menores. La regla subraya en particular la necesidad de una revisión y evaluación regulares de los actuales programas y medidas y de una planificación en el contexto más amplio de los objetivos globales de desarrollo.

La evaluación constante de las necesidades del menor, así como de las tendencias y problemas de la delincuencia, es un requisito previo para perfeccionar los métodos de formulación de políticas adecuadas y establecer intervenciones apropiadas estructuradas y no estructuradas. En este contexto, la investigación por personas y órganos independientes debería recibir el respaldo de agencias competentes, y para ello podrá ser útil recabar y tener en cuenta las opiniones del propio menor, no sólo de aquellos que están en contacto con el sistema.

El proceso de planificación debe subrayar en particular un sistema más eficaz y equitativo de suministro de los servicios necesarios. Para ello debería efectuarse una evaluación detallada y regular de la amplia gama de necesidades y problemas particulares del menor y una determinación precisa de las prioridades. A este respecto, debería también coordinarse el empleo de los recursos existentes, en particular las medidas sustitutorias y el apoyo de la comunidad que servirían para elaborar determinados procedimientos encaminados a aplicar y supervisar los programas establecidos.

## (4)

### **REGLAS DE TOKIO**

Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)

Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990

#### I. Principios generales

##### 1. Objetivos fundamentales

1.1 Las presentes Reglas mínimas contienen una serie de principios básicos para promover la aplicación de medidas no privativas de la libertad, así como salvaguardias mínimas para las personas a quienes se aplican medidas sustitutivas de la prisión.

1.2 Las Reglas tienen por objeto fomentar una mayor participación de la comunidad en la gestión de la justicia penal, especialmente en lo que respecta al tratamiento del delincuente, así como fomentar entre los delincuentes el sentido de su responsabilidad hacia la sociedad.

1.3 Las Reglas se aplicarán teniendo en cuenta las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de cada país, así como los propósitos y objetivos de su sistema de justicia penal.

1.4 Al aplicar las Reglas, los Estados Miembros se esforzarán por alcanzar un equilibrio adecuado entre los derechos de los delincuentes, los derechos de las víctimas y el interés de la sociedad en la seguridad pública y la prevención del delito.

1.5 Los Estados Miembros introducirán medidas no privativas de la libertad en sus respectivos ordenamientos jurídicos para proporcionar otras opciones, y de esa manera reducir la aplicación de las penas de prisión, y racionalizar las políticas de justicia penal, teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos, las exigencias de la justicia social y las necesidades de rehabilitación del delincuente.

##### 2. Alcance de las medidas no privativas de la libertad

2.1 Las disposiciones pertinentes de las presentes Reglas se aplicarán a todas las personas sometidas a acusación, juicio o cumplimiento de una sentencia, en todas las fases de la administración de la justicia penal. A los efectos de las Reglas, estas personas se designarán "delincuentes", independientemente de que sean sospechosos o de que hayan sido acusados o condenados.

2.2 Las Reglas se aplicarán sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición.

2.3 A fin de asegurar una mayor flexibilidad, compatible con el tipo y la gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del delincuente y la protección de la sociedad, y evitar la aplicación innecesaria de la pena de prisión, el sistema de justicia penal establecerá una amplia serie de medidas no privativas de la libertad, desde la fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la sentencia. El número y el tipo de las medidas no privativas de la libertad disponibles deben estar determinados de manera tal que sea posible fijar de manera coherente las penas.

2.4 Se alentará y supervisará atentamente el establecimiento de nuevas medidas no privativas de la libertad y su aplicación se evaluará sistemáticamente.

2.5 Se considerará la posibilidad de ocuparse de los delincuentes en la comunidad, evitando recurrir a procesos formales o juicios ante los tribunales, de conformidad con las salvaguardias y las normas jurídicas.

2.6 Las medidas no privativas de la libertad serán utilizadas de acuerdo con el principio de mínima intervención.

2.7 La utilización de medidas no privativas de la libertad será parte de un movimiento en pro de la despenalización y destipificación de delitos, y no estarán encaminadas a obstaculizar ni a diferir las iniciativas en ese sentido.

### 3. Salvaguardias legales

3.1 La introducción, definición y aplicación de medidas no privativas de la libertad estarán prescritas por la ley.

3.2 La selección de una medida no privativa de la libertad se basará en los criterios establecidos con respecto al tipo y gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del delincuente, los objetivos de la condena y los derechos de las víctimas.

3.3 La autoridad judicial u otra autoridad independiente competente ejercerá sus facultades discrecionales en todas las fases del procedimiento, actuando con plena responsabilidad y exclusivamente de conformidad con la ley.

3.4 Las medidas no privativas de la libertad que impongan una obligación al delincuente, aplicadas antes o en lugar del procedimiento o del juicio, requerirán su consentimiento.

3.5 Las decisiones sobre la imposición de medidas no privativas de la libertad estarán sometidas a la revisión de una autoridad judicial u otra autoridad competente e independiente, a petición del delincuente.

3.6 El delincuente estará facultado para presentar peticiones o reclamaciones ante la autoridad judicial u otra autoridad competente e independiente sobre cuestiones que afecten a sus derechos individuales en la aplicación de las medidas no privativas de la libertad.

3.7 Se preverán disposiciones adecuadas para el recurso y, si es posible, la reparación en caso de agravio relacionado con un incumplimiento de las normas sobre derechos humanos internacionalmente reconocidos.

3.8 Las medidas no privativas de la libertad no supondrán ninguna experimentación médica o psicológica con el delincuente, ni riesgo indebido de daños físicos o mentales.

3.9 La dignidad del delincuente sometido a medidas no privativas de la libertad será protegida en todo momento.

3.10 Durante la aplicación de las medidas no privativas de la libertad, los derechos del delincuente no podrán ser objeto de restricciones que excedan las impuestas por la autoridad competente que haya adoptado la decisión de aplicar la medida.

3.11 Durante la aplicación de las medidas no privativas de la libertad se respetarán tanto el derecho del delincuente como el de su familia a la intimidad.

3.12 El expediente personal del delincuente se mantendrá de manera estrictamente confidencial e inaccesible a terceros. Sólo tendrán acceso al expediente las personas directamente interesadas en la tramitación del caso u otras personas debidamente autorizadas.

#### 4. Cláusula de salvaguardia

4.1 Ninguna de las disposiciones en las presentes Reglas será interpretada de modo que excluya la aplicación de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos<sup>79</sup>, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing)<sup>82</sup>, el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión<sup>35</sup> ni de ningún otro instrumento o norma sobre derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional que guarden relación con el tratamiento del delincuente y con la protección de sus derechos humanos fundamentales.

#### II. Fase anterior al juicio

##### 5. Disposiciones previas al juicio

5.1. Cuando así proceda y sea compatible con el ordenamiento jurídico, la policía, la fiscalía u otros organismos que se ocupen de casos penales deberán estar facultados para retirar los cargos contra el delincuente si consideran que la protección de la sociedad, la prevención del delito o la promoción del respeto a la ley y los derechos de las víctimas no exigen llevar adelante el caso. A efectos de decidir si corresponde el retiro de los cargos o la institución de actuaciones, en cada ordenamiento jurídico

se formulará una serie de criterios bien definidos. En casos de poca importancia el fiscal podrá imponer las medidas adecuadas no privativas de la libertad, según corresponda.

## 6. La prisión preventiva como último recurso

6.1 En el procedimiento penal sólo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima.

6.2 Las medidas sustitutivas de la prisión preventiva se aplicarán lo antes posible. La prisión preventiva no deberá durar más del tiempo que sea necesario para el logro de los objetivos indicados en la regla 6.1 y deberá ser aplicada con humanidad y respeto por la dignidad del ser humano.

6.3 El delincuente tendrá derecho a apelar ante una autoridad judicial u otra autoridad independiente y competente en los casos en que se imponga prisión preventiva.

## III. Fase de juicio y sentencia

### 7. Informes de investigación social

7.1 Cuando exista la posibilidad de preparar informes de investigación social, la autoridad judicial podrá valerse de un informe preparado por un funcionario u organismo competente y autorizado. El informe contendrá información sobre el entorno social del delincuente que sea pertinente al tipo de infracción que comete habitualmente el individuo y a los delitos que se le imputan. También deberá contener información y recomendaciones que sean pertinentes al procedimiento de fijación de condenas. Deberá ceñirse a los hechos y ser objetivo e imparcial; toda apreciación personal tendrá que formularse claramente como tal.

### 8. Imposición de sanciones

8.1 La autoridad judicial, que tendrá a su disposición una serie de sanciones no privativas de la libertad, al adoptar su decisión deberá tener en consideración las necesidades de rehabilitación del delincuente, la protección de la sociedad y los intereses de la víctima, quien será consultada cuando corresponda.

8.2 Las autoridades competentes podrán tomar las medidas siguientes:

- a) Sanciones verbales, como la amonestación, la reprensión y la advertencia;
- b) Libertad condicional;
- c) Penas privativas de derechos o inhabilitaciones;
- d) Sanciones económicas y penas en dinero, como multas y multas sobre los ingresos calculados por días;
- e) Incautación o confiscación;
- f) Mandamiento de restitución a la víctima o de indemnización;
- g) Suspensión de la sentencia o condena diferida;
- h) Régimen de prueba y vigilancia judicial;

- i) Imposición de servicios a la comunidad;
- j) Obligación de acudir regularmente a un centro determinado;
- k) Arresto domiciliario;
- l) Cualquier otro régimen que no entrañe reclusión;
- m) Alguna combinación de las sanciones precedentes.

#### IV. Fase posterior a la sentencia

##### 9. Medidas posteriores a la sentencia

9.1 Se pondrá a disposición de la autoridad competente una amplia serie de medidas sustitutivas posteriores a la sentencia a fin de evitar la reclusión y prestar asistencia a los delincuentes para su pronta reinserción social.

9.2 Podrán aplicarse medidas posteriores a la sentencia como las siguientes:

- a) Permisos y centros de transición;
- b) Liberación con fines laborales o educativos;
- c) Distintas formas de libertad condicional;
- d) La remisión;
- e) El indulto.

9.3 La decisión con respecto a las medidas posteriores a la sentencia, excepto en el caso del indulto, será sometida a la revisión de una autoridad judicial u otra autoridad competente e independiente, si lo solicita el delincuente.

9.4 Se considerarán cuanto antes las posibilidades de poner en libertad al recluso de un establecimiento y asignarlo a un programa no privativo de la libertad.

#### V. Aplicación de las medidas no privativas de la libertad

##### 10. Régimen de vigilancia

10.1 El objetivo de la supervisión es disminuir la reincidencia y ayudar al delincuente en su reinserción social de manera que se reduzca a un mínimo la probabilidad de que vuelva a la delincuencia.

10.2 Si la medida no privativa de la libertad entraña un régimen de vigilancia, la vigilancia será ejercida por una autoridad competente, en las condiciones concretas que haya prescrito la ley.

10.3 En el marco de cada medida no privativa de la libertad, se determinará cuál es el tipo más adecuado de vigilancia y tratamiento para cada caso particular con el propósito de ayudar al delincuente a enmendar su conducta delictiva. El régimen de vigilancia y tratamiento se revisará y reajustará periódicamente, cuando sea necesario.

10.4 Se brindará a los delincuentes, cuando sea necesario, asistencia psicológica, social y material y oportunidades para fortalecer los vínculos con la comunidad y facilitar su reinserción social.

## 11. Duración

11.1 La duración de las medidas no privativas de la libertad no superará el plazo establecido por la autoridad competente de conformidad con la ley.

11.2 Estará prevista la interrupción anticipada de la medida en caso de que el delincuente haya reaccionado positivamente a ella.

## 12. Obligaciones

12.1 Cuando la autoridad competente decida las obligaciones que deberá cumplir el delincuente, tendrá en cuenta las necesidades de la sociedad y las necesidades y los derechos del delincuente y de la víctima.

12.2 Las obligaciones que ha de cumplir el delincuente serán prácticas, precisas y tan pocas como sea posible, y tendrán por objeto reducir las posibilidades de reincidencia en el comportamiento delictivo e incrementar las posibilidades de reinserción social del delincuente, teniendo en cuenta las necesidades de la víctima.

12.3 Al comienzo de la aplicación de una medida no privativa de la libertad, el delincuente recibirá una explicación, oral y escrita, de las condiciones que rigen la aplicación de la medida, incluidos sus obligaciones y derechos.

12.4 La autoridad competente podrá modificar las obligaciones impuestas de conformidad con lo previsto en la legislación y según el progreso realizado por el delincuente.

## 13. Proceso de tratamiento

13.1 En el marco de una medida no privativa de la libertad determinada, cuando corresponda, se establecerán diversos sistemas, por ejemplo, ayuda psicosocial individualizada, terapia de grupo, programas residenciales y tratamiento especializado de distintas categorías de delincuentes, para atender a sus necesidades de manera más eficaz.

13.2 El tratamiento deberá ser dirigido por profesionales con adecuada formación y experiencia práctica.

13.3 Cuando se decida que el tratamiento es necesario, se hará todo lo posible por comprender la personalidad, las aptitudes, la inteligencia y los valores del delincuente, y especialmente las circunstancias que lo llevaron a la comisión del delito.

13.4 La autoridad competente podrá hacer participar a la comunidad y a los sistemas de apoyo social en la aplicación de las medidas no privativas de la libertad.

13.5 El número de casos asignados se mantendrá, en lo posible, dentro de límites compatibles con la aplicación eficaz de los programas de tratamiento.



13.6 La autoridad competente abrirá y mantendrá un expediente para cada delincuente.

#### 14. Disciplina e incumplimiento de las obligaciones

14.1 El incumplimiento de las obligaciones impuestas al delincuente puede dar lugar a la modificación o revocación de la medida no privativa de la libertad.

14.2 La modificación o revocación de la medida no privativa de la libertad corresponderá a la autoridad competente; procederá a ello solamente después de haber examinado cuidadosamente los hechos aducidos por el funcionario supervisor y por el delincuente.

14.3 El fracaso de una medida no privativa de la libertad no significará automáticamente la imposición de una medida privativa de la libertad.

14.4 En caso de modificación o revocación de la medida no privativa de la libertad, la autoridad competente intentará imponer una medida sustitutiva no privativa de la libertad que sea adecuada. Sólo se podrá imponer la pena de prisión cuando no haya otras medidas sustitutivas adecuadas.

14.5 En caso de que el delincuente no cumpla las obligaciones impuestas, la ley determinará a quién corresponde dictar la orden de detenerlo o de mantenerlo bajo supervisión.

14.6 En caso de modificación o revocación de la medida no privativa de la libertad, el delincuente podrá recurrir ante una autoridad judicial u otra autoridad competente e independiente.

#### VI. Personal

##### 15. Contratación

15.1 En la contratación del personal no se hará discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición. Los criterios para la contratación del personal tendrán en cuenta la política nacional en favor de los sectores desfavorecidos y la diversidad de los delincuentes que haya que supervisar.

15.2 Las personas designadas para aplicar las medidas no privativas de la libertad deberán ser personas aptas para la función y, cuando sea posible, tener formación profesional y experiencia práctica adecuadas. Estas calificaciones se especificarán claramente.

15.3 Para conseguir y contratar personal profesional calificado se harán nombramientos con categoría de funcionario público, sueldos adecuados y prestaciones sociales que estén en consonancia con la naturaleza del trabajo y se ofrecerán amplias oportunidades de progreso profesional y ascenso.

##### 16. Capacitación del personal

16.1 El objetivo de la capacitación será explicar claramente al personal sus funciones en lo que atañe a la rehabilitación del delincuente, la garantía de los derechos de los delincuentes y la protección de la sociedad. Mediante capacitación, el personal también deberá comprender la necesidad de cooperar y coordinar las actividades con los organismos interesados.

16.2 Antes de entrar en funciones, el personal recibirá capacitación que comprenda información sobre el carácter de las medidas no privativas de la libertad, los objetivos de la supervisión y las distintas modalidades de aplicación de las medidas no privativas de la libertad.

16.3 Después de la entrada en funciones, el personal mantendrá y mejorará sus conocimientos y aptitudes profesionales asistiendo a cursos de capacitación durante el servicio y a cursos de actualización. Se proporcionarán instalaciones adecuadas a ese efecto.

## VII. Voluntarios y otros recursos comunitarios

### 17. Participación de la sociedad

17.1 La participación de la sociedad debe alentarse pues constituye un recurso fundamental y uno de los factores más importantes para fortalecer los vínculos entre los delincuentes sometidos a medidas no privativas de la libertad y sus familias y la comunidad. Deberá complementar la acción de la administración de la justicia penal.

17.2 La participación de la sociedad será considerada una oportunidad para que los miembros de la comunidad contribuyan a su protección.

### 18. Comprensión y cooperación de la sociedad

18.1 Debe alentarse a los organismos gubernamentales, al sector privado y a la comunidad en general para que apoyen a las organizaciones de voluntarios que fomenten la aplicación de medidas no privativas de la libertad.

18.2 Se organizarán regularmente conferencias, seminarios, simposios y otras actividades para hacer cobrar conciencia de la necesidad de que la sociedad participe en la aplicación de medidas no privativas de la libertad.

18.3 Se utilizarán todos los medios de comunicación para propiciar una actitud constructiva en la comunidad, que dé lugar a actividades que propicien una aplicación más amplia del régimen no privativo de la libertad y la reinserción social de los delincuentes.

18.4 Se hará todo lo posible por informar a la sociedad acerca de la importancia de su función en la aplicación de las medidas no privativas de la libertad.

### 19. Voluntarios

19.1 Los voluntarios serán seleccionados cuidadosamente y contratados en función de las aptitudes y del interés que demuestren en su labor. Se impartirá capacitación adecuada para el desempeño de las funciones específicas que les hayan sido encomendadas y contarán con el apoyo y asesoramiento de la autoridad competente, a la que tendrán oportunidad de consultar.

19.2 Los voluntarios alentarán a los delincuentes y a sus familias a establecer vínculos significativos y contactos más amplios con la comunidad, brindándoles asesoramiento y otras formas adecuadas de asistencia acorde con sus capacidades y las necesidades del delincuente.

19.3 Los voluntarios estarán asegurados contra accidentes, lesiones y daños a terceros en el ejercicio de sus funciones. Les serán reembolsados los gastos autorizados que hayan efectuado durante su trabajo. Gozarán del reconocimiento público por los servicios que presten en pro del bienestar de la comunidad.

## VIII. Investigación, planificación y formulación y evaluación de políticas

### 20. Investigación y planificación

20.1 Como aspecto esencial del proceso de planificación, se hará lo posible para que las entidades tanto públicas como privadas colaboren en la organización y el fomento de la investigación sobre la aplicación a los delincuentes de un régimen no privativo de la libertad.

20.2 Se harán investigaciones periódicas de los problemas que afectan a los destinatarios de las medidas, los profesionales, la comunidad y los órganos normativos.

20.3 Dentro del sistema de justicia penal se crearán mecanismos de investigación e información para reunir y analizar datos y estadísticas sobre la aplicación a los delincuentes de un régimen no privativo de la libertad.

### 21. Formulación de la política y elaboración de programas

21.1 Se planificarán y aplicarán sistemáticamente programas de medidas no privativas de la libertad como parte integrante del sistema de justicia penal en el marco del proceso nacional de desarrollo.

21.2 Se efectuarán evaluaciones periódicas con miras a lograr una aplicación más eficaz de las medidas no privativas de la libertad.

21.3 Se realizarán estudios periódicos para evaluar los objetivos, el funcionamiento y la eficacia de las medidas no privativas de la libertad.

### 22. Vínculos con organismos y actividades pertinentes

22.1 Se crearán a diversos niveles mecanismos apropiados para facilitar el establecimiento de vínculos entre los servicios encargados de las medidas no privativas de la libertad, otras ramas del sistema de justicia penal, y los organismos

de desarrollo y bienestar social, tanto gubernamentales como no gubernamentales, en sectores como la salud, la vivienda, la educación, el trabajo y los medios de comunicación.

## 23. Cooperación internacional

23.1 Se hará lo posible por promover la cooperación científica entre los países en cuanto al régimen sin internamiento. Deberán reforzarse la investigación, la capacitación, la asistencia técnica y el intercambio de información entre los Estados Miembros sobre medidas no privativas de la libertad, por conducto de los institutos de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente y en estrecha colaboración con la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de la Secretaría de las Naciones Unidas.

23.2 Deberán fomentarse los estudios comparados y la armonización de las disposiciones legislativas para ampliar la gama de opciones sin internamiento y facilitar su aplicación a través de las fronteras nacionales, de conformidad con el Tratado modelo sobre el traspaso de la vigilancia de los delincuentes bajo condena condicional o en libertad condicional 83.

## **(5)**

### **DIRECTRICES DE RIAD**

Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil  
(Directrices de Riad)

Adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990

#### **I. Principios fundamentales**

1. La prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, pueden adquirir actitudes no criminógenas.

2. Para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, y respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia.

3. A los efectos de la interpretación de las presentes Directrices, se debe centrar la atención en el niño. Los jóvenes deben desempeñar una función activa y participativa en la sociedad y no deben ser considerados meros objetos de socialización o control.

4. En la aplicación de las presentes Directrices y de conformidad con los ordenamientos jurídicos nacionales, los programas preventivos deben centrarse en el bienestar de los jóvenes desde su primera infancia.

5. Deberá reconocerse la necesidad y la importancia de aplicar una política progresista de prevención de la delincuencia, así como de estudiar sistemáticamente y elaborar medidas pertinentes que eviten criminalizar y penalizar al niño por una conducta que no causa graves perjuicios a su desarrollo ni perjudica a los demás. La política y las medidas de esa índole deberán incluir:

- a) La creación de oportunidades, en particular educativas, para atender a las diversas necesidades de los jóvenes y servir de marco de apoyo para velar por el desarrollo personal de todos los jóvenes, en particular de aquellos que están patentemente en peligro o en situación de riesgo social y necesitan cuidado y protección especiales;
- b) La formulación de doctrinas y criterios especializados para la prevención de la delincuencia, basados en las leyes, los procesos, las instituciones, las instalaciones y una red de servicios, cuya finalidad sea reducir los motivos, la necesidad y las oportunidades de comisión de las infracciones o las condiciones que las propicien;
- c) Una intervención oficial que se guíe por la justicia y la equidad, y cuya finalidad primordial sea velar por el interés general de los jóvenes;
- d) La protección del bienestar, el desarrollo, los derechos y los intereses de todos los jóvenes;

- e) El reconocimiento del hecho de que el comportamiento o la conducta de los jóvenes que no se ajustan a los valores y normas generales de la sociedad son con frecuencia parte del proceso de maduración y crecimiento y tienden a desaparecer espontáneamente en la mayoría de las personas cuando llegan a la edad adulta;
- f) La conciencia de que, según la opinión predominante de los expertos, calificar a un joven de "extraviado", "delincuente" o "predelincuente" a menudo contribuye a que los jóvenes desarrollen pautas permanentes de comportamiento indeseable.

6. Deben crearse servicios y programas con base en la comunidad para la prevención de la delincuencia juvenil, sobre todo si no se han establecido todavía organismos oficiales. Sólo en última instancia ha de recurrirse a organismos oficiales de control social.

## II. Alcance de las Directrices

7. Las presentes Directrices deberán interpretarse y aplicarse en el marco general de la Declaración Universal de Derechos Humanos<sup>5</sup>, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales<sup>33</sup>, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos<sup>33</sup>, la Declaración de los Derechos del Niño<sup>85</sup>, y la Convención sobre los Derechos del Niño<sup>52</sup>, y en el contexto de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing)<sup>82</sup>, así como de otros instrumentos y normas relativos a los derechos, los intereses y el bienestar de todos los menores y jóvenes.

8. Las presentes Directrices deberán igualmente aplicarse en el contexto de las condiciones económicas, sociales y culturales imperantes en cada uno de los Estados Miembros.

## III. Prevención general

9. Deberán formularse en todos los niveles del gobierno planes generales de prevención que, entre otras cosas, comprendan:

- a) Análisis a fondo del problema y reseñas de programas y servicios, facilidades y recursos disponibles;
- b) Funciones bien definidas de los organismos, instituciones y personal competentes que se ocupan de actividades preventivas;
- c) Mecanismos para la coordinación adecuada de las actividades de prevención entre los organismos gubernamentales y no gubernamentales;
- d) Políticas, estrategias y programas basados en estudios de pronósticos que sean objeto de vigilancia permanente y evaluación cuidadosa en el curso de su aplicación;
- e) Métodos para disminuir eficazmente las oportunidades de cometer actos de delincuencia juvenil;
- f) Participación de la comunidad mediante una amplia gama de servicios y programas;
- g) Estrecha cooperación interdisciplinaria entre los gobiernos nacionales, estatales, provinciales y municipales, con la participación del sector privado, de ciudadanos representativos de la comunidad interesada y de organismos laborales, de cuidado del niño, de educación sanitaria, sociales, judiciales y de los servicios de aplicación de la ley en la adopción de medidas coordinadas para prevenir la delincuencia juvenil y los delitos de los jóvenes.

- h) Participación de los jóvenes en las políticas y en los procesos de prevención de la delincuencia juvenil, incluida la utilización de los recursos comunitarios, y la aplicación de programas de autoayuda juvenil y de indemnización y asistencia a las víctimas;
- i) Personal especializado en todos los niveles.

#### IV. Procesos de socialización

10. Deberá prestarse especial atención a las políticas de prevención que favorezcan la socialización e integración eficaces de todos los niños y jóvenes, en particular por conducto de la familia, la comunidad, los grupos de jóvenes que se encuentran en condiciones similares, la escuela, la formación profesional y el medio laboral, así como mediante la acción de organizaciones voluntarias. Se deberá respetar debidamente el desarrollo personal de los niños y jóvenes y aceptarlos, en pie de igualdad, como copartícipes en los procesos de socialización e integración.

##### A. La familia

11. Toda sociedad deberá asignar elevada prioridad a las necesidades y el bienestar de la familia y de todos sus miembros.

12. Dado que la familia es la unidad central encargada de la integración social primaria del niño, los gobiernos y la sociedad deben tratar de preservar la integridad de la familia, incluida la familia extensa. La sociedad tiene la obligación de ayudar a la familia a cuidar y proteger al niño y asegurar su bienestar físico y mental. Deberán prestarse servicios apropiados, inclusive de guarderías.

13. Los gobiernos deberán adoptar una política que permita a los niños criarse en un ambiente familiar de estabilidad y bienestar. Deberán facilitarse servicios adecuados a las familias que necesiten asistencia para resolver situaciones de inestabilidad o conflicto.

14. Cuando no exista un ambiente familiar de estabilidad y bienestar, los intentos de la comunidad por ayudar a los padres en este aspecto hayan fracasado y la familia extensa no pueda ya cumplir esta función, se deberá recurrir a otras posibles modalidades de colocación familiar, entre ellas los hogares de guarda y la adopción, que en la medida de lo posible deberán reproducir un ambiente familiar de estabilidad y bienestar y, al mismo tiempo, crear en los niños un sentimiento de permanencia, para evitar los problemas relacionados con el "desplazamiento" de un lugar a otro.

15. Deberá prestarse especial atención a los niños de familias afectadas por problemas creados por cambios económicos, sociales y culturales rápidos y desiguales, en especial a los niños de familias indígenas o de inmigrantes y refugiados. Como tales cambios pueden perturbar la capacidad social de la familia para asegurar la educación y crianza tradicionales de los hijos, a menudo como resultado de conflictos culturales o relacionados con el papel del padre o de la madre, será necesario elaborar modalidades innovadoras y socialmente constructivas para la socialización de los niños.

16. Se deberán adoptar medidas y elaborar programas para dar a las familias la oportunidad de aprender las funciones y obligaciones de los padres en relación con el desarrollo y el cuidado de sus hijos, para lo cual se fomentarán relaciones positivas entre padres e hijos, se hará que los padres cobren conciencia de los problemas de los niños y los jóvenes y se fomentará la participación de los jóvenes en las actividades familiares y comunitarias.

17. Los gobiernos deberán adoptar medidas para fomentar la unión y la armonía en la familia y desalentar la separación de los hijos de sus padres, salvo cuando circunstancias que afecten al bienestar y al futuro de los hijos no dejen otra opción viable.

18. Es importante insistir en la función socializadora de la familia y de la familia extensa; es igualmente importante reconocer el papel futuro, las responsabilidades, la participación y la colaboración de los jóvenes en la sociedad.

19. Al garantizar el derecho de los niños a una socialización adecuada, los gobiernos y otras instituciones deben basarse en los organismos sociales y jurídicos existentes pero, cuando las instituciones y costumbres tradicionales resulten insuficientes, deberán también prever y permitir medidas innovadoras.

## B. La educación

20. Los gobiernos tienen la obligación de dar a todos los jóvenes acceso a la enseñanza pública.

21. Los sistemas de educación, además de sus posibilidades de formación académica y profesional, deberán dedicar especial atención a:

- a) Enseñar los valores fundamentales y fomentar el respeto de la identidad propia y de las características culturales del niño, de los valores sociales del país en que vive el niño, de las civilizaciones diferentes de la suya y de los derechos humanos y libertades fundamentales;
- b) Fomentar y desarrollar en todo lo posible la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física de los jóvenes;
- c) Lograr que los jóvenes participen activa y eficazmente en el proceso educativo en lugar de ser meros objetos pasivos de dicho proceso;
- d) Desarrollar actividades que fomenten un sentimiento de identidad y pertenencia a la escuela y la comunidad;
- e) Alentar a los jóvenes a comprender y respetar opiniones y puntos de vista diversos, así como las diferencias culturales y de otra índole;
- f) Suministrar información y orientación en lo que se refiere a la formación profesional, las oportunidades de empleo y posibilidades de carrera;
- g) Proporcionar apoyo emocional positivo a los jóvenes y evitar el maltrato psicológico;
- h) Evitar las medidas disciplinarias severas, en particular los castigos corporales.

22. Los sistemas de educación deberán tratar de trabajar en cooperación con los padres, las organizaciones comunitarias y los organismos que se ocupan de las actividades de los jóvenes.



23. Deberá darse información a los jóvenes y a sus familias sobre la ley y sus derechos y obligaciones con respecto a la ley, así como sobre el sistema de valores universales, incluidos los instrumentos de las Naciones Unidas.

24. Los sistemas de educación deberán cuidar y atender de manera especial a los jóvenes que se encuentren en situación de riesgo social. Deberán prepararse y utilizarse plenamente programas de prevención y materiales didácticos, planes de estudios, criterios e instrumentos especializados.

25. Deberá prestarse especial atención a la adopción de políticas y estrategias generales de prevención del uso indebido, por los jóvenes, del alcohol, las drogas y otras sustancias. Deberá darse formación y dotarse de medios a maestros y otros profesionales a fin de prevenir y resolver estos problemas. Deberá darse a los estudiantes información sobre el empleo y el uso indebido de drogas, incluido el alcohol.

26. Las escuelas deberán servir de centros de información y consulta para prestar atención médica, asesoramiento y otros servicios a los jóvenes, sobre todo a los que están especialmente necesitados y son objeto de malos tratos, abandono, victimización y explotación.

27. Se aplicarán diversos programas educativos para lograr que los maestros, otros adultos y los estudiantes comprendan los problemas, necesidades y preocupaciones de los jóvenes, especialmente de aquellos que pertenecen a grupos más necesitados, menos favorecidos, a grupos de bajos ingresos y a minorías étnicas u otros grupos minoritarios.

28. Los sistemas escolares deberán tratar de alcanzar y promover los niveles profesionales y educativos más elevados en lo que respecta a programas de estudio, métodos y criterios didácticos y de aprendizaje, contratación y formación de personal docente capacitado. Deberá practicarse una supervisión y evaluación regulares de los resultados, tarea que se encomendará a las organizaciones profesionales y a los órganos competentes.

29. En cooperación con grupos de la comunidad, los sistemas educativos deberán planificar, organizar y desarrollar actividades extracurriculares que sean de interés para los jóvenes.

30. Deberá prestarse ayuda especial a niños y jóvenes que tengan dificultades para cumplir las normas de asistencia, así como a los que abandonan los estudios.

31. Las escuelas deberán fomentar la adopción de políticas y normas equitativas y justas, y los estudiantes estarán representados en los órganos encargados de formular la política escolar, incluida la política disciplinaria, y participarán en la adopción de decisiones.

C. La comunidad

32. Deberán establecerse servicios y programas de carácter comunitario, o fortalecerse los ya existentes, que respondan a las necesidades, problemas, intereses e inquietudes especiales de los jóvenes y ofrezcan, a ellos y a sus familias, asesoramiento y orientación adecuados.

33. Las comunidades deberán adoptar o reforzar una amplia gama de medidas de apoyo comunitario a los jóvenes, incluido el establecimiento de centros de desarrollo comunitario, instalaciones y servicios de recreo, a fin de hacer frente a los problemas especiales de los menores expuestos a riesgo social. Esta forma de ayuda deberá prestarse respetando los derechos individuales.

34. Deberán establecerse servicios especiales para brindar alojamiento adecuado a los jóvenes que no puedan seguir viviendo en sus hogares o que carezcan de hogar.

35. Se organizarán diversos servicios y sistemas de ayuda para hacer frente a las dificultades que experimentan los jóvenes al pasar a la edad adulta. Entre estos servicios deberán figurar programas especiales para los jóvenes toxicómanos en los que se dé máxima importancia a los cuidados, el asesoramiento, la asistencia y a las medidas de carácter terapéutico.

36. Los gobiernos y otras instituciones deberán dar apoyo financiero y de otra índole a las organizaciones voluntarias que prestan servicios a los jóvenes.

37. En el plano local deberán crearse o reforzarse organizaciones juveniles que participen plenamente en la gestión de los asuntos comunitarios. Estas organizaciones deberán alentar a los jóvenes a organizar proyectos colectivos y voluntarios, en particular proyectos cuya finalidad sea prestar ayuda a los jóvenes que la necesiten.

38. Los organismos gubernamentales deberán asumir especialmente la responsabilidad del cuidado de los niños sin hogar o los niños de la calle y de proporcionarles los servicios que necesiten. Deberá hacerse fácilmente accesible a los jóvenes la información acerca de servicios locales, alojamiento, empleo y otras formas y fuentes de ayuda.

39. Deberá organizarse una gran variedad de instalaciones y servicios recreativos de especial interés para los jóvenes, a los que éstos tengan fácil acceso.

#### D. Los medios de comunicación

40. Deberá alentarse a los medios de comunicación a que garanticen que los jóvenes tengan acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales.

41. Deberá alentarse a los medios de comunicación a que den a conocer la contribución positiva de los jóvenes a la sociedad.

42. Deberá alentarse a los medios de comunicación a que difundan información relativa a la existencia en la sociedad de servicios, instalaciones y oportunidades destinados a los jóvenes.

43. Deberá instarse a los medios de comunicación en general, y a la televisión y al cine en particular, a que reduzcan al mínimo el nivel de pornografía, drogadicción y violencia en sus mensajes y den una imagen desfavorable de la violencia y la explotación, eviten presentaciones degradantes especialmente de los niños, de la mujer y de las relaciones interpersonales y fomenten los principios y modelos de carácter igualitario.

44. Los medios de comunicación deberán percatarse de la importancia de su función y su responsabilidad sociales, así como de su influencia en las comunicaciones relacionadas con el uso indebido de drogas y alcohol entre los jóvenes. Deberán utilizar su poder para prevenir el uso indebido de drogas mediante mensajes coherentes con un criterio equilibrado. Deberán fomentar campañas eficaces de lucha contra las drogas en todos los niveles.

#### V. Política social

45. Los organismos gubernamentales deberán asignar elevada prioridad a los planes y programas dedicados a los jóvenes y suministrar suficientes fondos y recursos de otro tipo para prestar servicios eficaces, proporcionar las instalaciones y el personal para brindar servicios adecuados de atención médica, salud mental, nutrición, vivienda y otros servicios necesarios, en particular de prevención y tratamiento del uso indebido de drogas y alcohol, y cerciorarse de que esos recursos lleguen a los jóvenes y redunden realmente en beneficio de ellos.

46. Sólo deberá recluirse a los jóvenes en instituciones como último recurso y por el período mínimo necesario, y deberá darse máxima importancia a los propios intereses del joven. Los criterios para autorizar una intervención oficial de esta índole deberán definirse estrictamente y limitarse a las situaciones siguientes: a) cuando el niño o joven haya sufrido lesiones físicas causadas por los padres o tutores; b) cuando el niño o joven haya sido víctima de malos tratos sexuales, físicos o emocionales por parte de los padres o tutores; c) cuando el niño o joven haya sido descuidado, abandonado o explotado por los padres o tutores; d) cuando el niño o joven se vea amenazado por un peligro físico o moral debido al comportamiento de los padres o tutores; y e) cuando se haya manifestado en el propio comportamiento del niño o del joven un grave peligro físico o psicológico para el niño o el joven mismo y ni los padres o tutores, ni el propio joven ni los servicios comunitarios no residenciales puedan hacer frente a dicho peligro por otro medio que no sea la reclusión en una institución.

47. Los organismos gubernamentales deberán dar a los jóvenes oportunidad de continuar su educación a jornada completa, financiada por el Estado cuando los padres o tutores no los puedan mantener, y de adquirir experiencia profesional.

48. Los programas de prevención de la delincuencia deberán planificarse y ejecutarse sobre la base de conclusiones fiables que sean resultado de una investigación

científica, y periódicamente deberán ser supervisados, evaluados y readaptados en consonancia con esas conclusiones.

49. Deberá difundirse entre la comunidad profesional y el público en general información científica acerca del tipo de comportamiento o de situación que pueda resultar en la victimización de los jóvenes, en daños y malos tratos físicos y psicológicos contra ellos o en su explotación.

50. La participación en todos los planes y programas deberá ser, en general, voluntaria. Los propios jóvenes deberán intervenir en su formulación, desarrollo y ejecución.

51. Los gobiernos deberán comenzar a estudiar o seguir estudiando, formulando y aplicando políticas, medidas y estrategias dentro y fuera del sistema de justicia penal para prevenir la violencia en el hogar contra los jóvenes o que los afecte, y garantizar un trato justo a las víctimas de ese tipo de violencia.

## VI. Legislación y administración de la justicia de menores

52. Los gobiernos deberán promulgar y aplicar leyes y procedimientos especiales para fomentar y proteger los derechos y el bienestar de todos los jóvenes.

53. Deberán promulgarse y aplicarse leyes que prohíban la victimización, los malos tratos y la explotación de los niños y jóvenes, así como su utilización para actividades delictivas.

54. Ningún niño o joven deberá ser objeto de medidas de corrección o castigo severos o degradantes en el hogar, en la escuela ni en ninguna otra institución.

55. Deberán aprobarse y aplicarse leyes para limitar y controlar el acceso de los niños y jóvenes a las armas de cualquier tipo.

56. A fin de impedir que prosiga la estigmatización, victimización y criminalización de los jóvenes, deberán promulgarse leyes que garanticen que ningún acto que no sea considerado delito ni sea sancionado cuando lo comete un adulto se considere delito ni sea objeto de sanción cuando es cometido por un joven.

57. Debería considerarse la posibilidad de establecer un puesto de mediador o un órgano análogo independiente para los jóvenes que garantice el respeto de su condición jurídica, sus derechos y sus intereses, así como la posibilidad de remitir los casos a los servicios disponibles. El mediador u otro órgano designado supervisaría además la aplicación de las Directrices de Riad, las Reglas de Beijing y las Reglas para la protección de los menores privados de libertad. El mediador u otro órgano publicaría periódicamente un informe sobre los progresos alcanzados y las dificultades encontradas en el proceso de aplicación. Se deberían establecer también servicios de defensa jurídica del niño.

58. Deberá capacitarse personal de ambos sexos encargado de hacer cumplir la ley y de otras funciones pertinentes para que pueda atender a las necesidades especiales de los jóvenes; ese personal deberá estar al corriente de los programas y

posibilidades de remisión a otros servicios, y recurrir a ellos en la medida de lo posible con el fin de sustraer a los jóvenes al sistema de justicia penal.

59. Deberán promulgarse y aplicarse estrictamente leyes para proteger a los niños y a los jóvenes del uso indebido de drogas y de los traficantes de droga.

## VII. Investigación, formulación de normas y coordinación

60. Se procurará fomentar la interacción y coordinación, con carácter multidisciplinario e intradisciplinario, de los organismos y servicios económicos, sociales, educativos y de salud con el sistema de justicia, los organismos dedicados a los jóvenes, a la comunidad y al desarrollo y otras instituciones pertinentes, y deberán establecerse los mecanismos apropiados a tal efecto.

61. Deberá intensificarse, en los planos nacional, regional e internacional, el intercambio de información, experiencia y conocimientos técnicos obtenidos gracias a los proyectos, programas, prácticas e iniciativas relacionadas con la delincuencia juvenil, la prevención de la delincuencia y la justicia de menores.

62. Deberá promoverse e intensificarse la cooperación regional e internacional en asuntos relativos a la delincuencia juvenil, la prevención de la delincuencia juvenil y la justicia de menores, con la participación de profesionales, expertos y autoridades.

63. Todos los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones interesadas deberán apoyar firmemente la cooperación técnica y científica en asuntos prácticos relacionados con la formulación de normas, en particular en los proyectos experimentales, de capacitación y demostración, sobre cuestiones concretas relativas a la prevención de la delincuencia juvenil y de delitos cometidos por jóvenes.

64. Deberá alentarse la colaboración en las actividades de investigación científica sobre las modalidades eficaces de prevención de la delincuencia juvenil y de los delitos cometidos por jóvenes y difundirse ampliamente y evaluarse sus conclusiones.

65. Los órganos, institutos, organismos y oficinas competentes de las Naciones Unidas deberán mantener una estrecha colaboración y coordinación en distintas cuestiones relacionadas con los niños, la justicia de menores y la prevención de la delincuencia juvenil y de los delitos cometidos por jóvenes.

66. Sobre la base de las presentes Directrices, la Secretaría de las Naciones Unidas, en cooperación con las instituciones interesadas, deberá desempeñar un papel activo de la investigación, colaboración científica, formulación de opciones de política, y en el examen y supervisión de su aplicación, y servir de fuente de información fidedigna acerca de modalidades eficaces para la prevención de la delincuencia.

(6)

## **PRINCIPIOS DE PARIS**

### **PRINCIPIOS RELATIVOS AL ESTATUTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Nota: En octubre de 1991, el Centro de Derechos Humanos organizó una reunión técnica internacional a fin de examinar y actualizar la información relativa a las instituciones nacionales de derechos humanos existentes. A la reunión asistieron representantes de instituciones nacionales, Estados, las Naciones Unidas, sus organismos especializados, organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales.

Además de intercambiar puntos de vista sobre las disposiciones vigentes, los participantes formularon un amplio conjunto de recomendaciones sobre la función y la composición, así como sobre el estatuto y las funciones de las instituciones nacionales de derechos humanos. A continuación, se resumen estas recomendaciones, que la Comisión de Derechos Humanos hizo suyas en marzo de 1992.

#### **A. Competencias y atribuciones**

1. La institución nacional será competente en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos.

2. La institución nacional dispondrá del mandato más amplio posible, claramente enunciado en un texto constitucional o legislativo, que establezca su composición y su ámbito de competencia.

3. La institución nacional tendrá, en particular, las siguientes atribuciones:

a) presentar, a título consultivo, al gobierno, al Parlamento y a cualquier otro órgano pertinente, a instancia de las autoridades interesadas o en ejercicio de su facultad de autosumisión, dictámenes, recomendaciones, propuestas e informes sobre todas las cuestiones relativas a la protección y promoción de los derechos humanos; la institución nacional podrá decidir hacerlos públicos; los dictámenes, las recomendaciones, las proposiciones y los informes, así como cualquier prerrogativa de la institución nacional, abarcarán las siguientes esferas:

i) todas las disposiciones de carácter legislativo y administrativo, así como las relativas a la organización judicial, destinadas a preservar y ampliar la protección de los derechos humanos; a este respecto, la institución nacional examinará la legislación y los textos administrativos en vigor, así como los proyectos y proposiciones de ley y hará las recomendaciones que considere apropiadas para garantizar que esos textos respeten los principios fundamentales en materia de derechos humanos; en caso necesario, la institución nacional recomendará la aprobación de una nueva legislación, la modificación de la legislación en vigor y la adopción de medidas administrativas o su modificación;

- ii) toda situación de violación de los derechos humanos de la cual decida ocuparse;
- iii) la elaboración de informes sobre la situación nacional en materia de derechos humanos en general o sobre cuestiones más específicas;
- iv) señalar a la atención del Gobierno las situaciones de violación de los derechos humanos en cualquier parte del país, proponer medidas encaminadas a poner término a esas situaciones y, en su caso, emitir un dictamen sobre la posición y reacción del gobierno;
- b) promover y asegurar que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales se armonicen con los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que el Estado sea parte, y que su aplicación sea efectiva;
- c) alentar la ratificación de esos instrumentos o la adhesión a esos textos y asegurar su aplicación;
- d) contribuir a la elaboración de los informes que los Estados deban presentar a los órganos y comités de las Naciones Unidas, así como a las instituciones regionales, en cumplimiento de sus obligaciones contraídas en virtud de tratados y, en su caso, emitir un dictamen a ese respecto, en el marco del respeto de su independencia;
- e) cooperar con las Naciones Unidas y los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas, las instituciones regionales y las instituciones de otros países que sean competentes en las esferas de la promoción y protección de los derechos humanos;
- f) colaborar a la elaboración de programas relativos a la enseñanza y la investigación en la esfera de los derechos humanos y participar en su aplicación en el ámbito escolar, universitario y profesional;
- g) dar a conocer los derechos humanos y la lucha contra todas las formas de discriminación, en particular la discriminación racial, sensibilizando a la opinión pública, en particular mediante la información y la enseñanza, recurriendo para ello a todos los medios de comunicación.

## **B. Composición y garantías de independencia y pluralismo**

1. La composición de la institución nacional y el nombramiento de sus miembros, por vía de elección o de otro modo, deberán ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales (de la sociedad civil) interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante facultades que permitan lograr la cooperación eficaz o la participación de los representantes de:

- las organizaciones no gubernamentales competentes en la esfera de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación racial, los sindicatos, las organizaciones socioprofesionales interesadas, en particular juristas, médicos, periodistas y personalidades científicas;
- las corrientes de pensamiento filosófico y religioso;
- los universitarios y especialistas calificados;
- el Parlamento;
- las administraciones (de incluirse, los representantes de las administraciones sólo participarán en los debates a título consultivo).

2. La institución nacional dispondrá de una infraestructura apropiada para el buen desempeño de sus funciones, y en particular de créditos suficientes. Esos créditos deberán destinarse principalmente a la dotación de personal y locales propios, a fin

de lograr la autonomía respecto del Estado y no estar sujeta a controles financieros que podrían limitar su independencia.

3. En el interés de la estabilidad del mandato de los miembros de la institución nacional, sin la cual no habrá una verdadera independencia, su nombramiento se hará mediante acto oficial en el que se señale un plazo determinado de duración del mandato. Este podrá prorrogarse bajo reserva de que se siga garantizado el pluralismo de la composición.

### **C. Modalidades de funcionamiento**

En el marco de sus actividades, la institución nacional deberá:

1. Examinar libremente todas las cuestiones comprendidas en el ámbito de su competencia, que le sean sometidas por el gobierno o que decida conocer en virtud de sus atribuciones, a propuesta de sus miembros o de cualquier solicitante;
2. recibir todos los testimonios y obtener todas las informaciones y documentos necesarios para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia;
3. dirigirse a la opinión pública, directamente o por intermedio de cualquier órgano de comunicación, especialmente para dar a conocer sus opiniones y recomendaciones;
4. reunirse de manera regular y cada vez que sea necesario, en presencia de todos sus miembros, debidamente convocados;
5. establecer grupos de trabajo integrados por sus miembros, cada vez que sea necesario, así como secciones locales o regionales para facilitar el desempeño de sus funciones;
6. mantener la coordinación con los demás órganos de carácter jurisdiccional o de otra índole encargados de la promoción y protección de los derechos humanos (en particular, ombudsman, mediadores u otras instituciones similares);
7. establecer relaciones con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de la promoción y protección de los derechos humanos, el desarrollo económico y social, la lucha contra el racismo, la protección de los grupos especialmente vulnerables (en particular, niños, trabajadores migratorios, refugiados, incapacitados físicos y mentales) o de otras esferas especializadas, habida cuenta de la importancia fundamental de la labor de esas organizaciones para ampliar la acción de las instituciones nacionales.

### **D. Principios complementarios relativos al estatuto de las comisiones dotadas de competencia cuasi jurisdiccional**

La institución nacional podrá estar facultada para recibir y examinar denuncias y demandas relativas a situaciones particulares. Podrán recurrir a ella los particulares, sus representantes, terceros, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de sindicatos y cualquier otra organización representativa. En ese caso, y sin perjuicio de



los principios antes mencionados que se refieren a otros aspectos de la competencia de las comisiones, las funciones que se les encomienden podrán inspirarse en los siguientes principios:

1. tratar de hallar una solución amistosa mediante la conciliación o, dentro de los límites establecidos por ley, mediante decisiones obligatorias o, en su caso, cuando sea necesario, siguiendo un procedimiento de carácter confidencial;
2. informar al autor de la demanda acerca de sus derechos, en particular de los recursos de que dispone, y facilitarle el acceso a esos recursos;
3. conocer de todas las denuncias o demandas o transmitirlos a cualquier otra autoridad competente, dentro de los límites establecidos por ley;
4. formular recomendaciones a las autoridades competentes, en particular proponer modificaciones o reformas de leyes, reglamentos y prácticas administrativas, especialmente cuando ellas sean la fuente de las dificultades encontradas por los demandantes para hacer valer sus derechos.

(7)

## **RESOLUCIÓN ASAMBLEA GENERAL 53/144**



**Asamblea  
General**

Distr.  
GENERAL  
A/RES/53/144  
8 de marzo de 1999

**Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos**

### **Resolución aprobada por la Asamblea General 53/144**

*La Asamblea General,*

*Reafirmando* la importancia de la observancia de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas para la promoción y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas en todos los países del mundo,

*Tomando nota* de la resolución 1998/7 de la Comisión de Derechos Humanos, de 3 de abril de 1998 Véase *Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 1998, Suplemento No. 3 (E/1998/23)*, cap. II, secc. A., por la cual la Comisión aprobó el texto del proyecto de declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos,

*Tomando nota asimismo* de la resolución 1998/33 del Consejo Económico y Social, de 30 de julio de 1998, por la cual el Consejo recomendó a la Asamblea General que aprobara el proyecto de declaración,

*Consciente* de la importancia de la aprobación del proyecto de declaración en el contexto del cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos Resolución 217 A (III).

1. *Aprueba* la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades

fundamentales universalmente reconocidos que figura en el anexo de la presente resolución;

2. *Invita* a los gobiernos, a los organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que intensifiquen sus esfuerzos por difundir la Declaración, promover el respeto universal hacia ella y su comprensión, y pide al Secretario General que incluya el texto de la Declaración en la próxima edición de *Derechos humanos: Recopilación de instrumentos internacionales*.

85a. sesión plenaria  
9 de diciembre de 1998

## ANEXO

### **Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos**

*La Asamblea General,*

*Reafirmando* la importancia que tiene la observancia de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas para la promoción y la protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los seres humanos en todos los países del mundo,

*Reafirmando también* la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos<sup>2</sup> y de los Pactos internacionales de derechos humanos Resolución 2200 A (XXI), anexo. como elementos fundamentales de los esfuerzos internacionales para promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la importancia de los demás instrumentos de derechos humanos adoptados en el marco del sistema de las Naciones Unidas y a nivel regional,

*Destacando* que todos los miembros de la comunidad internacional deben cumplir, conjunta y separadamente, su obligación solemne de promover y fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción alguna, en particular sin distinción por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, y reafirmando la importancia particular de lograr la cooperación internacional para el cumplimiento de esta obligación, de conformidad con la Carta,

*Reconociendo* el papel importante que desempeña la cooperación internacional y la valiosa labor que llevan a cabo los individuos, los grupos y las instituciones al contribuir a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos, incluso en relación con violaciones masivas, flagrantes o sistemáticas como las que resultan del *apartheid*, de todas las formas de discriminación racial, colonialismo, dominación u ocupación

extranjera, agresión o amenazas contra la soberanía nacional, la unidad nacional o la integridad territorial, y de la negativa a reconocer el derecho de los pueblos a la libre determinación y el derecho de todos los pueblos a ejercer plena soberanía sobre su riqueza y sus recursos naturales,

*Reconociendo* la relación entre la paz y la seguridad internacionales y el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y consciente de que la ausencia de paz y seguridad internacionales no excusa la inobservancia de esos derechos,

*Reiterando* que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son universalmente indivisibles e interdependientes y que están relacionados entre sí, debiéndose promover y aplicar de una manera justa y equitativa, sin perjuicio de la aplicación de cada uno de esos derechos y libertades,

*Destacando* que la responsabilidad primordial y el deber de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales incumbe al Estado,

*Reconociendo* el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover el respeto y el conocimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el plano nacional e internacional,

*Declara:*

#### *Artículo 1*

Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.

#### *Artículo 2*

1. Los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos y libertades.
2. Los Estados adoptarán las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para asegurar que los derechos y libertades a que se hace referencia en la presente Declaración estén efectivamente garantizados.

#### *Artículo 3*

El derecho interno, en cuanto concuerda con la Carta de las Naciones Unidas y otras obligaciones internacionales del Estado en la esfera de los derechos humanos y las libertades fundamentales, es el marco jurídico en el cual se deben materializar y ejercer los derechos humanos y las libertades fundamentales y en el cual deben llevarse a cabo todas las actividades a que se hace referencia en la presente Declaración para la promoción, protección y realización efectiva de esos derechos y libertades.

#### *Artículo 4*

Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que menoscabe o contradiga los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas ni de que limite las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos<sup>2</sup>, de los Pactos internacionales de derechos humanos<sup>3</sup> o de otros instrumentos y compromisos internacionales aplicables en esta esfera, o constituya excepción a ellas.

#### *Artículo 5*

A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional:

- a) A reunirse o manifestarse pacíficamente;
- b) A formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos;
- c) A comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales.

#### *Artículo 6*

Toda persona tiene derecho, individualmente y con otras:

- a) A conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos y libertades fundamentales, con inclusión del acceso a la información sobre los medios por los que se da efecto a tales derechos y libertades en los sistemas legislativo, judicial y administrativo internos;
- b) Conforme a lo dispuesto en los instrumentos de derechos humanos y otros instrumentos internacionales aplicables, a publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;
- c) A estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados.

#### *Artículo 7*

Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos, y a preconizar su aceptación.

#### *Artículo 8*

1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a tener la oportunidad efectiva, sobre una base no discriminatoria, de participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos.
2. Ese derecho comprende, entre otras cosas, el que tiene toda persona, individual o colectivamente, a presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento, y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

### *Artículo 9*

1. En el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidas la promoción y la protección de los derechos humanos a que se refiere la presente Declaración, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a disponer de recursos eficaces y a ser protegida en caso de violación de esos derechos.

2. A tales efectos, toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido presuntamente violados tiene el derecho, bien por sí misma o por conducto de un representante legalmente autorizado, a presentar una denuncia ante una autoridad judicial independiente, imparcial y competente o cualquier otra autoridad establecida por la ley y a que esa denuncia sea examinada rápidamente en audiencia pública, y a obtener de esa autoridad una decisión, de conformidad con la ley, que disponga la reparación, incluida la indemnización que corresponda, cuando se hayan violado los derechos o libertades de esa persona, así como a obtener la ejecución de la eventual decisión y sentencia, todo ello sin demora indebida.

3. A los mismos efectos, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, entre otras cosas, a:

a) Denunciar las políticas y acciones de los funcionarios y órganos gubernamentales en relación con violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante peticiones u otros medios adecuados ante las autoridades judiciales, administrativas o legislativas internas o ante cualquier otra autoridad competente prevista en el sistema jurídico del Estado, las cuales deben emitir su decisión sobre la denuncia sin demora indebida;

b) Asistir a las audiencias, los procedimientos y los juicios públicos para formarse una opinión sobre el cumplimiento de las normas nacionales y de las obligaciones y los compromisos internacionales aplicables;

c) Ofrecer y prestar asistencia letrada profesional u otro asesoramiento y asistencia pertinentes para defender los derechos humanos y las libertades fundamentales.

4. A los mismos efectos, toda persona tiene el derecho, individual o colectivamente, de conformidad con los instrumentos y procedimientos internacionales aplicables, a dirigirse sin trabas a los organismos internacionales que tengan competencia general o especial para recibir y examinar comunicaciones sobre cuestiones de derechos humanos y libertades fundamentales, y a comunicarse sin trabas con ellos.

5. El Estado realizará una investigación rápida e imparcial o adoptará las medidas necesarias para que se lleve a cabo una indagación cuando existan motivos razonables para creer que se ha producido una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier territorio sometido a su jurisdicción.

### *Artículo 10*

Nadie participará, por acción o por el incumplimiento del deber de actuar, en la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y nadie será castigado ni perseguido por negarse a hacerlo.

### *Artículo 11*

Toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho al legítimo ejercicio de su ocupación o profesión. Toda persona que, a causa de su profesión, pueda afectar a la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales de otras personas deberá respetar esos derechos y libertades y cumplir las normas nacionales e internacionales de conducta o ética profesional u ocupacional que sean pertinentes.

### *Artículo 12*

1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
2. El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.
3. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

### *Artículo 13*

Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, en concordancia con el artículo 3 de la presente Declaración.

### *Artículo 14*

1. Incumbe al Estado la responsabilidad de adoptar medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole apropiadas para promover en todas las personas sometidas a su jurisdicción la comprensión de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
2. Entre esas medidas figuran las siguientes:
  - a) La publicación y amplia disponibilidad de las leyes y reglamentos nacionales y de los instrumentos internacionales básicos de derechos humanos;
  - b) El pleno acceso en condiciones de igualdad a los documentos internacionales en la esfera de los derechos humanos, incluso los informes periódicos del Estado a los órganos establecidos por los tratados internacionales sobre derechos humanos en los que sea Parte, así como las actas resumidas de los debates y los informes oficiales de esos órganos.
3. El Estado garantizará y apoyará, cuando corresponda, la creación y el desarrollo de otras instituciones nacionales independientes destinadas a la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el territorio sometido a su jurisdicción, como, por ejemplo, mediadores, comisiones de derechos humanos o cualquier otro tipo de instituciones nacionales.

### *Artículo 15*

Incumbe al Estado la responsabilidad de promover y facilitar la enseñanza de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todos los niveles de la educación, y de garantizar que los que tienen a su cargo la formación de abogados, funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, personal de las fuerzas armadas y funcionarios públicos incluyan en sus programas de formación elementos apropiados de la enseñanza de los derechos humanos.

### *Artículo 16*

Los particulares, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones pertinentes tienen la importante misión de contribuir a sensibilizar al público sobre las cuestiones relativas a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales mediante actividades de enseñanza, capacitación e investigación en esas esferas con el objeto de fortalecer, entre otras cosas, la comprensión, la tolerancia, la paz y las relaciones de amistad entre las naciones y entre todos los grupos raciales y religiosos, teniendo en cuenta las diferentes mentalidades de las sociedades y comunidades en las que llevan a cabo sus actividades.

### *Artículo 17*

En el ejercicio de los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración, ninguna persona, individual o colectivamente, estará sujeta a más limitaciones que las que se impongan de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales aplicables y determine la ley, con el solo objeto de garantizar el debido reconocimiento y respeto de los derechos y libertades ajenos y responder a las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática.

### *Artículo 18*

1. Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad y dentro de ella, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.  
2. A los individuos, los grupos, las instituciones y las organizaciones no gubernamentales les corresponde una importante función y una responsabilidad en la protección de la democracia, la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la contribución al fomento y progreso de las sociedades, instituciones y procesos democráticos.  
3. Análogamente, les corresponde el importante papel y responsabilidad de contribuir, como sea pertinente, a la promoción del derecho de toda persona a un orden social e internacional en el que los derechos y libertades enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos puedan tener una aplicación plena.

### *Artículo 19*

Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que confiera a un individuo, grupo u órgano de la sociedad o a cualquier Estado el derecho a desarrollar actividades o realizar actos que tengan por objeto suprimir los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración.

### *Artículo 20*

Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se interpretará en el sentido de que permita a los Estados apoyar y promover actividades de individuos, grupos de individuos, instituciones u organizaciones no gubernamentales, que estén en contradicción con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

© Copyright 1996-2000

**Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights  
Geneva, Switzerland**



(8)

## **RESOLUCIÓN 5/1 CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS**



### **Consejo de Derechos Humanos**

**A/HRC/5/21**

#### **5/1. Construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos**

*El Consejo de Derechos Humanos,*

*Actuando en cumplimiento* del mandato que le confirió la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 60/251 de 15 de marzo de 2006,

*Habiendo examinado* el proyecto de texto sobre construcción institucional presentado por el Presidente del Consejo,

1. *Aprueba* el proyecto de texto titulado "Consejo de Derechos Humanos: construcción institucional" que figura en el anexo de la presente resolución, comprendido(s) su(s) apéndice(s),

2. *Decide* someter el siguiente proyecto de resolución a la Asamblea General para que lo apruebe con carácter prioritario a fin de facilitar la aplicación oportuna del texto anexo:

*"La Asamblea General,*

*Tomando nota* de la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos de 18 de junio de 2007,

1. *Acoge con satisfacción* el texto titulado "Consejo de Derechos Humanos: construcción institucional" que figura en el anexo de la presente resolución, comprendido(s) su(s) apéndice(s)."

*Novena sesión*  
*18 de junio de 2007*

[Resolución aprobada sin votación.]<sup>816</sup>

---

<sup>816</sup> Véase A/HRC/5/21, cap. III, párrs. 60 a 62.

## **Anexo**

### **CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS: CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL**

#### **I. MECANISMO DE EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL**

##### **A. Base del examen**

1. El examen se basará en lo siguiente:
  - a) La Carta de las Naciones Unidas;
  - b) La Declaración Universal de Derechos Humanos;
  - c) Los instrumentos de derechos humanos en que es Parte un Estado;
  - d) Las promesas y compromisos que hayan asumido voluntariamente los Estados, incluidos aquellos contraídos al presentar sus candidaturas para el Consejo de Derechos Humanos (en adelante "el Consejo");
2. Además de lo anterior y dada la naturaleza complementaria y de mutua relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el examen tendrá en cuenta el derecho internacional humanitario aplicable.

##### **B. Principios y objetivos**

###### **1. Principios**

3. El examen periódico universal debería:
  - a) Promover la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la interrelación de todos los derechos humanos.
  - b) Ser un mecanismo cooperativo basado en información objetiva y fidedigna y en un diálogo interactivo.
  - c) Asegurar una cobertura universal y la igualdad de trato a todos los Estados.
  - d) Ser un proceso intergubernamental dirigido por los Miembros de las Naciones Unidas y orientado a la acción.
  - e) Contar con la plena participación del país examinado.
  - f) Complementar y no duplicar la labor de otros mecanismos de derechos humanos, aportando así un valor agregado.
  - g) Desarrollarse de una manera objetiva, transparente, no selectiva y constructiva que evite la confrontación y la politización.
  - h) No imponer una carga excesiva al Estado examinado o a la agenda del Consejo.

- i) No prolongarse demasiado. Debería ser realista y no consumir una cantidad desproporcionada de tiempo y de recursos humanos y financieros.
- j) No disminuir la capacidad del Consejo para responder a las situaciones urgentes en materia de derechos humanos.
- k) Integrar plenamente una perspectiva de género.
- l) Sin perjuicio de las obligaciones previstas en los elementos que constituyen la base del examen, tener en cuenta el nivel de desarrollo y las particularidades de los países.
- m) Asegurar la participación de todos los actores interesados pertinentes, con inclusión de las organizaciones no gubernamentales y de las instituciones nacionales de derechos humanos, de conformidad con la resolución 60/251 de la Asamblea General de 15 de marzo de 2006 y la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social de 25 de julio de 1996, así como cualquier decisión que el Consejo pueda adoptar al respecto.

## **2. Objetivos**

### **4. Los objetivos del examen serán:**

- a) El mejoramiento de la situación de los derechos humanos en el terreno;
- b) El cumplimiento de las obligaciones y los compromisos del Estado en materia de derechos humanos y la evaluación de los avances y los retos a los que se enfrenta;
- c) El fortalecimiento de la capacidad del Estado y de la asistencia técnica, en consulta con el Estado examinado y con su consentimiento;
- d) El intercambio de las mejores prácticas entre los Estados y otros actores interesados;
- e) El apoyo a la cooperación en la promoción y protección de los derechos humanos;
- f) El fomento de la plena cooperación y el compromiso con el Consejo, otros órganos de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

## **C. Periodicidad y orden del examen**

- 5. El examen comenzará tras la aprobación por el Consejo del mecanismo de examen periódico universal.
- 6. El orden del examen debería reflejar los principios de universalidad e igualdad de trato.
- 7. El orden del examen debería establecerse lo antes posible a fin de que los Estados puedan prepararse adecuadamente.

8. Todos los Estados miembros del Consejo serán objeto del examen durante el período en que formen parte del Consejo.
9. Los miembros iniciales del Consejo, especialmente aquellos elegidos por períodos de uno o dos años, deberían ser examinados en primer lugar.
10. Debería ser objeto de examen una combinación de Estados miembros y Estados observadores del Consejo.
11. Al seleccionar a los países para el examen debería respetarse una distribución geográfica equitativa.
12. Se determinará por sorteo cuáles serán el Estado miembro y el Estado observador de cada grupo regional que se habrán de examinar primero de modo que se garantice una distribución geográfica equitativa. Luego se seguirá el orden alfabético, empezando por los países así seleccionados a menos que otros países se ofrezcan voluntariamente para el examen.
13. El período entre los ciclos de examen debería ser razonable para tener en cuenta la capacidad de los Estados de prepararse y la capacidad de los otros actores interesados para responder a las peticiones resultantes del examen.
14. En el primer ciclo la periodicidad del examen será de cuatro años. Ello supondrá el examen de 48 Estados por año durante tres períodos de sesiones del grupo de trabajo de dos semanas cada uno<sup>a</sup>.

## **D. Proceso y modalidades del examen**

### **1. Documentación**

15. El examen se basaría en los siguientes documentos:
  - a) La información preparada por el Estado examinado, que podrá consistir en un informe nacional, sobre la base de las directrices generales que adopte el Consejo en su sexto período de sesiones (primer período de sesiones del segundo ciclo) y cualquier otra información que considere pertinente el Estado examinado, que podrá presentarse verbalmente o por escrito. La exposición por escrito que resuma la información no deberá exceder de 20 páginas, a fin de garantizar la igualdad de trato a todos los Estados y evitar la sobrecarga del mecanismo. Se alienta a los Estados a que preparen la información mediante un amplio proceso de consulta a nivel nacional con todos los actores interesados pertinentes.
  - b) Además, una compilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la información contenida en los informes de los órganos de tratados, los procedimientos especiales, incluidas las observaciones y comentarios del Estado

---

<sup>a</sup> El examen periódico universal es un proceso evolutivo; el Consejo, una vez concluido el primer ciclo de examen, podrá revisar las modalidades y la periodicidad de este mecanismo a la luz de las prácticas óptimas y las lecciones aprendidas.

examinado, y otros documentos oficiales pertinentes de las Naciones Unidas, que no excederá de diez páginas.

- c) La información creíble y fidedigna adicional que proporcionen otros interlocutores pertinentes al examen periódico universal, que también deba considerar el Consejo en el examen. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos preparará un resumen de dicha información que no excederá de diez páginas.

16. Los documentos preparados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos deberán elaborarse conforme a la estructura de las directrices generales que adopte el Consejo en relación con la información preparada por el Estado interesado.

17. Tanto la exposición escrita del Estado como los resúmenes preparados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estarán listos seis semanas antes del examen por el grupo de trabajo para que los documentos puedan distribuirse simultáneamente en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, de conformidad con la resolución 53/208 de la Asamblea General de 14 de enero de 1999.

## **2. Modalidades**

18. Las modalidades del examen serán las siguientes:

- a) El examen se efectuará en un grupo de trabajo encabezado por el Presidente del Consejo e integrado por los 47 Estados miembros del Consejo. Cada Estado miembro determinará la composición de su delegación<sup>b</sup>.
- b) Los Estados observadores podrán participar en el examen, incluido el diálogo interactivo.
- c) Otros actores interesados pertinentes podrán asistir al examen en el grupo de trabajo.
- d) Se establecerá un grupo de tres relatores, seleccionados por sorteo entre los miembros del Consejo y procedentes de diferentes grupos regionales (*troika*), para facilitar cada examen, incluida la preparación del informe del grupo de trabajo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos prestará a los relatores la asistencia y pondrá a su disposición los conocimientos especializados necesarios.

19. El país examinado podrá pedir que uno de los tres relatores sea de su propio grupo regional y también podrá pedir sólo en una ocasión que se sustituya a un relator.

---

<sup>b</sup> Se debería establecer un Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias para el Examen Periódico Universal a fin de facilitar la participación de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, en el mecanismo del examen periódico universal.

20. Un relator podrá pedir que se le excuse de participar en un determinado proceso de examen.

21. El diálogo interactivo entre el país examinado y el Consejo tendrá lugar en el grupo de trabajo. Los relatores podrán compilar las cuestiones o preguntas que hayan de transmitirse al Estado examinado para facilitar su preparación y para centrar debidamente el diálogo interactivo, garantizando a la vez la equidad y la transparencia.

22. El examen de cada país durará tres horas en el grupo de trabajo. Además se asignará hasta una hora al examen del resultado por el pleno del Consejo.

23. Se asignará media hora a la aprobación del informe de cada país examinado en el grupo de trabajo.

24. Debería preverse un intervalo razonable entre el examen y la aprobación del informe de cada Estado en el grupo de trabajo.

25. El resultado final del examen será adoptado por el pleno del Consejo.

## **E. Resultado del examen**

### **1. Forma de presentación del resultado del examen**

26. El resultado del examen se presentará en un informe que consistirá en un resumen de las actuaciones del proceso de examen, las conclusiones y/o recomendaciones, y los compromisos voluntarios del Estado examinado.

### **2. Contenido del resultado del examen**

27. El examen periódico universal es un mecanismo cooperativo. Su resultado podrá incluir, entre otros:

- a) Una evaluación objetiva y transparente de la situación de los derechos humanos en el país examinado, que incluya los avances y los retos a los que se enfrenta el país;
- b) Intercambio de las mejores prácticas;
- c) Énfasis en el fortalecimiento de la cooperación para la promoción y protección de los derechos humanos;
- d) La prestación de asistencia técnica y el fomento de la capacidad en consulta con el país examinado y con su consentimiento<sup>c</sup>;
- e) Los compromisos y promesas contraídos voluntariamente por el país examinado.

### **3. Adopción del resultado del examen**

---

<sup>c</sup> El Consejo debería decidir si recurrir a los mecanismos financieros ya existentes o crear un nuevo mecanismo.

28. El país examinado debería involucrarse plenamente en el resultado del examen.

29. Antes de que el pleno del Consejo apruebe el resultado del examen, el Estado examinado debería tener la oportunidad de presentar sus respuestas a las cuestiones o preguntas que no se hayan tratado lo suficiente en el diálogo interactivo.

30. El Estado examinado y los Estados miembros del Consejo, así como los Estados observadores, tendrán la oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre el resultado del examen antes de que el pleno adopte las medidas correspondientes.

31. Otros actores interesados pertinentes tendrán la oportunidad de hacer observaciones generales antes de que el pleno adopte el resultado del examen.

32. Las recomendaciones que cuenten con el apoyo del Estado examinado se señalarán como tales. Otras recomendaciones se recogerán junto con las observaciones correspondientes del Estado examinado. Unas y otras se incluirán en el informe final que ha de adoptar el Consejo.

## **F. Seguimiento del examen**

33. El resultado del examen periódico universal, que ha de ser un mecanismo cooperativo, debería ser aplicado principalmente por el Estado examinado y, según corresponda, por otros actores interesados pertinentes.

34. El examen siguiente debería centrarse, entre otras cosas, en la aplicación del resultado del examen precedente.

35. En la agenda del Consejo debería figurar como tema permanente el examen periódico universal.

36. La comunidad internacional prestará asistencia para la aplicación de las recomendaciones y conclusiones relativas al fomento de la capacidad y la asistencia técnica, en consulta con el país examinado y con su consentimiento.

37. Al considerar el resultado del examen periódico universal, el Consejo decidirá si se necesitan medidas de seguimiento concretas y cuándo se han de adoptar.

38. Tras haber agotado todos los esfuerzos por alentar a un Estado a que coopere con el mecanismo de examen periódico universal, el Consejo abordará, según corresponda, los casos persistentes de no cooperación con el mecanismo.

## **II. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES**

### **A. Selección y nombramiento de los titulares de mandatos**

39. Al proponer, seleccionar y nombrar a los titulares de mandatos serán de fundamental importancia los siguientes criterios generales: a) conocimientos especializados; b) experiencia en la esfera del mandato; c) independencia; d) imparcialidad; e) integridad personal; y f) objetividad.

40. Se debería prestar la debida atención al equilibrio de género y a una representación geográfica equitativa, así como a una representación apropiada de diferentes sistemas jurídicos.

41. Los requisitos técnicos y objetivos para los candidatos seleccionables como titulares de mandatos serán aprobados por el Consejo en su sexto período de sesiones (primer período de sesiones del segundo ciclo) para garantizar que los candidatos seleccionables sean personas altamente calificadas con reconocida competencia, conocimientos especializados pertinentes y amplia experiencia profesional en la esfera de los derechos humanos.

42. Podrán proponer candidatos a titulares de mandatos de procedimientos especiales las siguientes entidades: a) gobiernos; b) grupos regionales que operen dentro del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas; c) organizaciones internacionales o sus oficinas (por ejemplo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos); d) organizaciones no gubernamentales; e) otros órganos de derechos humanos y f) candidaturas individuales.

43. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos preparará de inmediato, mantendrá y actualizará periódicamente una lista pública de los candidatos seleccionables, con un formato estandarizado, en la que figurarán sus datos personales, áreas de especialización y experiencia profesional. Se publicarán las vacantes de mandatos que vayan surgiendo.

44. Se respetará el principio de no acumulación simultánea de funciones de derechos humanos.

45. La duración del desempeño del cargo por el titular de un mandato, ya sea temático o relativo a un país, no excederá de seis años (dos períodos de tres años en el caso de los titulares de mandatos temáticos).

46. Quedarán excluidas las personas que ocupen cargos de decisión en gobiernos o en cualquier organización o entidad que pudieren dar lugar a un conflicto de intereses con las responsabilidades inherentes al mandato. Los titulares de mandatos actuarán a título personal.

47. Se crearía un grupo consultivo para proponer al Presidente, como mínimo un mes antes del comienzo del período de sesiones en que el Consejo vaya a considerar la selección de titulares de mandatos, una lista de los candidatos que posean las más altas calificaciones para los mandatos respectivos y cumplan los criterios generales y los requisitos particulares.

48. El grupo consultivo también considerará debidamente las exclusiones de candidatos propuestos de la lista pública de candidatos seleccionables que hayan sido señaladas a su atención.

49. Al comienzo del ciclo anual del Consejo se invitaría a los grupos regionales a designar a un miembro del grupo consultivo, quien ejercería sus funciones a título



personal. El grupo recibirá asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

50. El grupo consultivo considerará a los candidatos que figuren en la lista pública; no obstante, en circunstancias excepcionales y si para un determinado puesto se justifica, el grupo podrá considerar otras candidaturas con calificaciones equivalentes o más apropiadas para el puesto. Las recomendaciones que se formulen al Presidente serán públicas y deberán fundamentarse.

51. El grupo consultivo debería tener en cuenta, según corresponda, la opinión de los actores interesados, incluidos los titulares de mandatos en funciones o salientes, al determinar los conocimientos especializados, la experiencia, las competencias y otros requisitos necesarios para cada mandato.

52. Sobre la base de las recomendaciones del grupo consultivo y tras celebrar amplias consultas, en particular por conducto de los coordinadores regionales, el Presidente del Consejo identificará a un candidato idóneo para cada vacante. El Presidente presentará a los Estados miembros y a los observadores una lista de los candidatos que han de ser propuestos como mínimo dos semanas antes del comienzo del período de sesiones en que el Consejo considere los nombramientos.

53. De ser necesario, el Presidente celebrará consultas adicionales para obtener el respaldo de los candidatos propuestos. El nombramiento de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales se completará después de la aprobación del Consejo. Los titulares de mandatos serán nombrados antes de que concluya el período de sesiones.

## **B. Examen, racionalización y perfeccionamiento de los mandatos**

54. El examen, la racionalización y el perfeccionamiento de los mandatos, así como la creación de nuevos mandatos, deberán regirse por los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, diálogo internacional constructivo y cooperación, con miras a reforzar la promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo.

55. El examen, la racionalización y el perfeccionamiento de cada mandato tendrían lugar en el contexto de las negociaciones de las resoluciones pertinentes. Se podrá realizar una evaluación del mandato en un segmento separado del diálogo interactivo entre el Consejo y los titulares de mandatos de los procedimientos especiales.

56. El examen, la racionalización y el perfeccionamiento de los mandatos se centrarían en su pertinencia, alcance y contenido y se inscribirían en el marco de las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas, el sistema de los procedimientos especiales y la resolución 60/251 de la Asamblea General.

57. Toda decisión de racionalizar, fusionar o en su caso poner término a un mandato debería guiarse siempre por la necesidad de mejorar el disfrute y la protección de los derechos humanos.

58. El Consejo debería esforzarse siempre por conseguir mejoras:

- a) Los mandatos deberían ofrecer siempre una posibilidad clara de incrementar el nivel de protección y promoción de los derechos humanos, así como de coherencia dentro del sistema de derechos humanos.
- b) Debería prestarse la misma atención a todos los derechos humanos. El equilibrio de los mandatos temáticos debería reflejar ampliamente la aceptación de la igual importancia de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo.
- c) Debería hacerse todo lo posible para evitar duplicaciones innecesarias.
- d) Se identificarán y abordarán los vacíos temáticos, incluso por medios distintos a la creación de nuevos mandatos de procedimientos especiales, como ampliar un mandato ya existente, señalar una cuestión transversal a la atención de los titulares de mandatos o solicitar una acción conjunta a los titulares de mandatos a quienes pueda concernir.
- e) Cuando se estudie la posibilidad de fusionar mandatos, se deberían tener en cuenta el contenido y las funciones predominantes de cada mandato, así como el volumen de trabajo de cada titular de mandato.
- f) Al crear o examinar mandatos, se debería tratar de determinar si la estructura del mecanismo (experto, relator o grupo de trabajo) es la más eficaz para mejorar la protección de los derechos humanos.
- g) Los nuevos mandatos deberían ser lo más claros y específicos que sea posible, a fin de evitar toda ambigüedad.

59. Sería deseable tener uniformidad en la nomenclatura de los titulares de mandatos, los títulos de los mandatos, así como el proceso de selección y nombramiento, a fin de facilitar la comprensión de todo el sistema.

60. Los períodos de los mandatos temáticos serán de tres años. Los períodos de los mandatos por países serán de un año.

61. Los mandatos que figuran en el apéndice I se renovarán, en su caso, hasta la fecha en que sean examinados por el Consejo de acuerdo con su programa de trabajo<sup>d</sup>.

62. Los actuales titulares de mandatos podrán seguir ejerciendo su función, siempre que no hayan superado el límite de desempeño del cargo de seis años (apéndice II). Excepcionalmente, podrá prorrogarse el mandato de los titulares que hayan ejercido su cargo más de seis años hasta que el Consejo examine el mandato correspondiente y concluya el proceso de selección y nombramiento.

---

<sup>d</sup> Los mandatos relativos a los países reúnen los siguientes criterios:

- Hay un mandato del Consejo pendiente de realización; o
- Hay un mandato de la Asamblea General pendiente de realización; o
- La naturaleza del mandato es para servicios de asesoramiento y asistencia técnica.

63. Las decisiones de crear, examinar o poner término a mandatos por países también deberían tener en cuenta los principios de cooperación y diálogo genuino dirigidos a fortalecer la capacidad de los Estados miembros para cumplir sus obligaciones de derechos humanos.

64. En caso de situaciones de violaciones de los derechos humanos o de falta de cooperación que precisen la atención del Consejo deberían aplicarse los principios de objetividad, no selectividad y la eliminación del doble rasero y de la politización.

### **III. COMITÉ ASESOR DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS**

65. El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos (en adelante "el Comité Asesor"), integrado por 18 expertos que actuarán a título personal, funcionará como "grupo de reflexión" del Consejo y trabajará bajo su dirección. El establecimiento de este órgano subsidiario y su funcionamiento se regirán por las directrices que se estipulan a continuación.

#### **A. Presentación de candidaturas**

66. Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas podrán proponer o respaldar a candidatos de su propia región. Al seleccionar a sus candidatos, los Estados deberían consultar con sus instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil y, a este respecto, indicar los nombres de aquellas que apoyen a sus candidatos.

67. El objetivo es lograr que el Consejo disponga de los mejores conocimientos especializados posibles. Con este fin, el Consejo establecerá y aprobará en su sexto período de sesiones (primer período de sesiones del segundo ciclo) los requisitos técnicos y objetivos para la presentación de candidaturas. Éstos deberían comprender:

- a) Competencia y experiencia reconocidas en la esfera de los derechos humanos;
- b) Gran integridad moral;
- c) Independencia e imparcialidad.

68. Quedarán excluidas las personas que ocupen cargos de decisión en gobiernos o en cualquier organización o entidad que pudieren dar lugar a un conflicto de intereses con las responsabilidades inherentes al mandato. Los miembros elegidos del Comité Asesor actuarán a título personal.

69. Se respetará el principio de no acumulación simultánea de funciones de derechos humanos.

#### **B. Elección**

70. El Consejo elegirá a los miembros del Comité Asesor, en votación secreta, de la lista de candidatos que se hayan propuesto conforme a los requisitos acordados.

71. La lista de candidatos se cerrará dos meses antes de la fecha de la elección. La Secretaría pondrá dicha lista y la información pertinente a disposición de los Estados miembros y del público por lo menos un mes antes de la elección.

72. Se prestará la debida atención al equilibrio de género y a una adecuada representación de diferentes civilizaciones y sistemas jurídicos.

73. La distribución geográfica será la siguiente:

- Estados de África: 5;
- Estados de Asia: 5;
- Estados de Europa oriental: 2;
- Estados de América Latina y el Caribe: 3;
- Estados de Europa occidental y otros Estados: 3.

74. Los miembros del Comité Asesor ejercerán sus funciones por un período de tres años y podrán ser reelegidos una vez. En el primer mandato, un tercio de los expertos desempeñarán su función por un año y otro tercio por dos años. El escalonamiento de los períodos se decidirá por sorteo.

### **C. Funciones**

75. La función del Comité Asesor será proporcionar conocimientos especializados al Consejo de la forma en que éste lo solicite, centrándose principalmente en un asesoramiento basado en estudios e investigaciones. Además, proporcionará tales conocimientos especializados sólo cuando el Consejo lo solicite, en cumplimiento de sus resoluciones y bajo su orientación.

76. El Comité Asesor debería estar orientado a la implementación, y el alcance de su asesoramiento deberá limitarse a las cuestiones temáticas que guardan relación con el mandato del Consejo, a saber, la promoción y protección de todos los derechos humanos.

77. El Comité Asesor no adoptará resoluciones ni decisiones. Podrá formular, dentro del ámbito de trabajo establecido por el Consejo y para que éste las examine y apruebe, sugerencias para mejorar su eficiencia procedimental, así como propuestas de nuevos estudios dentro del ámbito de trabajo establecido por el Consejo.

78. El Consejo fijará directrices específicas para el Comité Asesor cuando le solicite una contribución sustantiva, y revisará la totalidad o partes de esas directrices cuando lo estime necesario en el futuro.

### **D. Métodos de trabajo**

79. El Comité Asesor celebrará hasta dos períodos de sesiones anuales, de un máximo de diez días laborables por año. Podrán programarse períodos de sesiones adicionales de forma ad hoc, previa aprobación del Consejo.

80. El Consejo podrá solicitar al Comité Asesor que efectúe determinadas tareas que podrían realizarse de forma colectiva, a través de un equipo más reducido o individualmente. El Comité Asesor informará al Consejo de tales esfuerzos.

81. Se alienta a los miembros del Comité Asesor a comunicarse individualmente o en grupos entre los períodos de sesiones. Sin embargo, el Comité Asesor no establecerá órganos subsidiarios a menos que el Consejo lo autorice a hacerlo.

82. Se insta al Comité Asesor a que, en el desempeño de su mandato, establezca una interacción con los Estados, las instituciones nacionales de derechos humanos, las ONG y otras entidades de la sociedad civil, de conformidad con las modalidades que apruebe el Consejo.

83. Los Estados miembros y los observadores, incluidos los Estados que no sean miembros del Consejo, los organismos especializados, otras organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos, así como las ONG, tendrán derecho a participar en la labor del Comité Asesor sobre la base de las disposiciones, en particular la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social, y las prácticas observadas por la Comisión de Derechos Humanos y por el Consejo, al mismo tiempo que se asegurará la contribución más eficaz posible de esas entidades.

84. El Consejo decidirá en su sexto período de sesiones (primer período de sesiones del segundo ciclo) los mecanismos más apropiados para continuar la labor de los Grupos de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, las Formas Contemporáneas de la Esclavitud y las Minorías y del Foro Social.

#### **IV. PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA**

##### **A. Objetivo y alcance**

85. Se está estableciendo un procedimiento de denuncia para abordar los cuadros persistentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de todos los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales que se produzcan en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia.

86. La resolución 1503 (XLVIII) del Consejo Económico y Social, de 27 de mayo de 1970, revisada por la resolución 2000/3 de 19 de junio de 2000, sirvió como base de trabajo y se mejoró cuando fue necesario para asegurar un procedimiento de denuncia imparcial, objetivo, eficiente, orientado a las víctimas y oportuno. Se mantendrá el carácter confidencial del procedimiento con el objeto de aumentar la cooperación con el Estado interesado.

##### **B. Criterios de admisibilidad de las comunicaciones**

87. Una comunicación relacionada con una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales será admisible a los efectos de este procedimiento, siempre que:

- a) No tenga motivaciones manifiestamente políticas y su objeto sea compatible con la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables en el campo de los derechos humanos.

- b) Contenga una descripción fáctica de las presuntas violaciones, incluidos los derechos que supuestamente se hayan vulnerado.
- c) El lenguaje empleado no sea insultante. Sin embargo, la comunicación podrá ser examinada si cumple los demás criterios de admisibilidad una vez suprimidas las expresiones insultantes.
- d) La presente una persona o un grupo de personas que afirmen ser víctimas de violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales, o una persona o grupo de personas, incluidas ONG, que actúen de buena fe de conformidad con los principios de derechos humanos, no tengan posturas políticamente motivadas contrarias a lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas y que sostengan tener conocimiento directo y fidedigno de esas violaciones. Sin embargo, las comunicaciones que estén debidamente fundamentadas no serán inadmisibles sólo porque la información de los autores individuales sea de segunda mano, a condición de que se acompañen de pruebas claras.
- e) No se base exclusivamente en informes difundidos por los medios de comunicación.
- f) No se refiera a un caso que parezca revelar un cuadro persistente de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos del que ya se esté ocupando un procedimiento especial, un órgano creado en virtud de un tratado u otro procedimiento de denuncia análogo, de las Naciones Unidas o regional, en la esfera de los derechos humanos.
- g) Se hayan agotado los recursos de la jurisdicción interna, salvo que parezca que esos recursos serían ineficaces o podrían prolongarse injustificadamente.

88. Las instituciones nacionales de derechos humanos que se han establecido y trabajan conforme a los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales (Principios de París), en particular en lo referente a la competencia cuasi judicial, pueden constituir un medio eficaz para hacer frente a violaciones individuales de los derechos humanos.

### **C. Grupos de trabajo**

89. Se establecerán dos grupos de trabajo distintos con el mandato de examinar las comunicaciones y señalar a la atención del Consejo los cuadros persistentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

90. Ambos grupos de trabajo operarán, en la mayor medida posible, sobre la base del consenso. De no haber consenso, las decisiones se adoptarán por mayoría simple de votos. Los grupos de trabajo podrán establecer sus propios reglamentos.

## **1. Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones: composición, mandato y atribuciones**

91. El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos nombrará a cinco de sus miembros, uno de cada grupo regional, para que constituyan el Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones, teniendo debidamente en cuenta el equilibrio de género.

92. En caso de que se produzca una vacante, el Comité Asesor nombrará de entre sus miembros a un experto independiente y altamente calificado del mismo grupo regional.

93. Habida cuenta de la necesidad de conocimientos especializados independientes y de continuidad en el examen y la evaluación de las comunicaciones recibidas, los expertos independientes y altamente calificados del Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones serán nombrados por un período de tres años, y su mandato podrá renovarse una sola vez.

94. El Presidente del Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones tendrá el cometido de realizar, junto con la Secretaría, el examen inicial de las comunicaciones recibidas, basado en los criterios de admisibilidad, antes de transmitir las a los Estados interesados. El Presidente rechazará las comunicaciones manifiestamente infundadas o anónimas, que, por consiguiente, no se transmitirán al Estado en cuestión. Con el fin de asegurar la rendición de cuentas y la transparencia, el Presidente del Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones proporcionará a todos los miembros de éste una lista de las comunicaciones rechazadas tras el examen inicial. En esa lista se debería indicar los motivos de todas las decisiones que hayan dado lugar al rechazo de una comunicación. Todas las comunicaciones que no hayan sido rechazadas se transmitirán al Estado interesado a fin de recabar su parecer sobre las denuncias de violaciones.

95. Los miembros del Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones adoptarán una decisión sobre la admisibilidad de las comunicaciones y evaluarán las denuncias de violaciones en cuanto al fondo, en particular para determinar si las comunicaciones, por sí solas o en combinación con otras, parecen revelar un cuadro persistente de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. El Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones proporcionará al Grupo de Trabajo sobre las Situaciones un expediente en el que figurarán todas las comunicaciones admisibles, así como las recomendaciones al respecto. Cuando el Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones requiera un examen más a fondo o información adicional, podrá mantener un caso en estudio hasta su siguiente período de sesiones y solicitar esa información al Estado interesado. El Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones podrá decidir desestimar un caso. Todas las decisiones del Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones se basarán en una rigurosa aplicación de los criterios de admisibilidad y deberán estar debidamente justificadas.

## **2. Grupo de Trabajo sobre las Situaciones: composición, mandato y atribuciones**

96. Cada grupo regional nombrará a un representante de un Estado miembro del Consejo, teniendo debidamente en cuenta el equilibrio de género, para que integre el

Grupo de Trabajo sobre las Situaciones. El nombramiento será por un año. El mandato podrá renovarse una vez si el Estado en cuestión es miembro del Consejo.

97. Los miembros del Grupo de Trabajo sobre las Situaciones desempeñarán sus funciones a título personal. Para cubrir una vacante, el grupo regional al que corresponda la vacante nombrará a un representante de los Estados miembros del mismo grupo regional.

98. El Grupo de Trabajo sobre las Situaciones, basándose en la información y las recomendaciones que le haya facilitado el Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones, deberá presentar al Consejo un informe sobre los cuadros persistentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y formular recomendaciones al Consejo sobre la manera de proceder, normalmente en forma de un proyecto de resolución o decisión relativo a la situación que se le haya remitido. Cuando el Grupo de Trabajo sobre las Situaciones requiera un examen más a fondo o información adicional, los miembros podrán mantener un caso en estudio hasta su siguiente período de sesiones. El Grupo de Trabajo sobre las Situaciones también podrá decidir desestimar un caso.

99. Todas las decisiones del Grupo de Trabajo sobre las Situaciones deberán estar debidamente justificadas e indicar las razones de la interrupción del examen de una situación o de las medidas recomendadas al respecto. Toda decisión de que se deje de examinar un asunto debería adoptarse por consenso o, si ello no es posible, por mayoría simple de votos.

#### **D. Modalidades de trabajo y confidencialidad**

100. Puesto que el procedimiento de denuncia ha de ser, entre otras cosas, un procedimiento orientado a las víctimas, confidencial y oportuno, ambos Grupos de Trabajo se reunirán al menos dos veces al año, durante cinco días laborables en cada período de sesiones, a fin de examinar prontamente las comunicaciones recibidas, incluidas las correspondientes respuestas de los Estados, y las situaciones de las que ya se esté ocupando el Consejo en el marco del procedimiento de denuncia.

101. El Estado interesado cooperará con el procedimiento de denuncia y hará todo lo posible para proporcionar respuestas sustantivas en uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas a cada una de las solicitudes de los Grupos de Trabajo o del Consejo. Asimismo, se esforzará al máximo por proporcionar una respuesta dentro de los tres meses siguientes a la formulación de las solicitudes. Sin embargo, de ser necesario, este plazo podrá prorrogarse a petición del Estado interesado.

102. La Secretaría deberá poner los expedientes confidenciales a disposición de todos los miembros del Consejo, al menos con dos semanas de antelación, a fin de que cuenten con tiempo suficiente para considerarlos.

103. El Consejo examinará, con la frecuencia que sea necesaria pero al menos una vez al año, los cuadros persistentes de violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que el Grupo de Trabajo sobre las Situaciones señale a su atención.



104. Los informes que el Grupo de Trabajo sobre las Situaciones remita al Consejo se examinarán de manera confidencial, a menos que el Consejo decida otra cosa. Cuando el Grupo de Trabajo sobre las Situaciones recomiende al Consejo que examine una situación en sesión pública, particularmente en caso de manifiesta e inequívoca falta de cooperación, el Consejo examinará esa recomendación con carácter prioritario en su período de sesiones siguiente.

105. Para garantizar que el procedimiento de denuncia esté orientado a las víctimas, sea eficiente y se lleve a cabo de manera oportuna, el período de tiempo entre la transmisión de la denuncia al Estado interesado y su examen por el Consejo no excederá, en principio, de 24 meses.

#### **E. Participación del denunciante y del Estado interesado**

106. El procedimiento de denuncia garantizará que tanto el denunciante como el Estado interesado sean informados de las actuaciones en las etapas clave siguientes:

- a) Cuando una comunicación sea considerada inadmisible por el Grupo de Trabajo sobre las Comunicaciones o cuando pase al examen del Grupo de Trabajo sobre las Situaciones; o cuando uno de los Grupos de Trabajo o el Consejo decida mantener pendiente la comunicación;
- b) Cuando se adopte el resultado final.

107. Además, el denunciante será informado cuando su comunicación quede registrada en el procedimiento de denuncia.

108. Si el denunciante solicita que no se dé a conocer su identidad, ésta no se comunicará al Estado interesado.

#### **F. Medidas**

109. De conformidad con la práctica establecida, la medida que se adopte respecto de una situación particular debería ser una de las siguientes opciones:

- a) Que se deje de examinar la situación cuando no su justifique su examen o la adopción de medidas ulteriores;
- b) Que se mantenga la situación en estudio y se solicite al Estado interesado que proporcione información adicional dentro de un plazo de tiempo razonable;
- c) Que se mantenga la situación en estudio y se nombre a un experto independiente y altamente calificado para que siga de cerca la situación e informe al Consejo al respecto;
- d) Que se deje de examinar el asunto en virtud del procedimiento de denuncia confidencial para proceder a su examen público;

- e) Que se recomiende al ACNUDH que preste cooperación técnica, asistencia para el fomento de la capacidad o servicios de asesoramiento al Estado interesado.

## **V. AGENDA Y MARCO PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO**

### **A. Principios**

- Universalidad;
- Imparcialidad;
- Objetividad;
- No selectividad;
- Diálogo constructivo y cooperación;
- Previsibilidad;
- Flexibilidad;
- Transparencia;
- Rendición de cuentas;
- Equilibrio;
- Carácter incluyente/exhaustivo;
- Perspectiva de género;
- Implementación y seguimiento de las decisiones.

### **B. Agenda**

Tema 1 - Cuestiones de organización y de procedimiento

Tema 2 - Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General

Tema 3 - Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo

Tema 4 - Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo

Tema 5 - Órganos y mecanismos de derechos humanos

Tema 6 - Examen Periódico Universal

Tema 7 - Situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados

Tema 8 - Seguimiento y aplicación de la Declaración y Programa de Acción de Viena

Tema 9 - Racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, seguimiento y aplicación de la Declaración y Programa de Acción de Durban

Tema 10 - Asistencia técnica y fomento de la capacidad

### **C. Marco para el programa de trabajo**

Tema 1 - Cuestiones de organización y de procedimiento

- Elección de la Mesa
- Aprobación del programa de trabajo anual
- Aprobación del programa de trabajo del período de sesiones, incluidos otros asuntos
- Selección y nombramiento de los titulares de mandatos
- Elección de los miembros del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos
- Aprobación del informe del período de sesiones
- Aprobación del informe anual

Tema 2 - Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General

- Presentación del informe anual y actualizaciones

Tema 3 - Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo

- Derechos económicos, sociales y culturales
- Derechos civiles y políticos
- Derechos de los pueblos, y grupos e individuos específicos
- Derecho al desarrollo
- Interrelación de los derechos humanos y cuestiones temáticas de derechos humanos

Tema 4 - Situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo

Tema 5 - Órganos y mecanismos de derechos humanos

- Informe del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos
- Informe del procedimiento de denuncia

Tema 6 - Examen Periódico Universal

Tema 7 - Situación de los derechos humanos en Palestina y otros territorios árabes ocupados

- Violaciones de los derechos humanos y consecuencias de la ocupación por Israel de Palestina y otros territorios árabes ocupados
- Derecho a la libre determinación del pueblo palestino

Tema 8 - Seguimiento y aplicación de la Declaración y Programa de Acción de Viena

Tema 9 - Racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, seguimiento y aplicación de la Declaración y Programa de Acción de Durban

Tema 10 - Asistencia técnica y fomento de la capacidad.

## **VI. MÉTODOS DE TRABAJO**

110. Los métodos de trabajo, de conformidad con la resolución 60/251 de la Asamblea General, deberían ser transparentes, imparciales, equitativos, justos y pragmáticos, y promover la claridad, la previsibilidad y la inclusión. También podrán actualizarse y ajustarse a medida que pase el tiempo.

### **A. Disposiciones institucionales**

#### **1. Reuniones informativas sobre resoluciones o decisiones en perspectiva**

111. Estas reuniones sobre las resoluciones o decisiones en perspectiva tendrían solamente un carácter informativo, y en ellas se informaría a las delegaciones de las resoluciones y/o decisiones registradas o cuyo registro esté previsto. Las reuniones serán organizadas por las delegaciones interesadas.

#### **2. Reuniones informativas abiertas del Presidente sobre resoluciones, decisiones y otros asuntos conexos**

112. Las reuniones informativas abiertas del Presidente sobre resoluciones, decisiones y otros asuntos conexos ofrecerán información acerca del estado de las negociaciones sobre proyectos de resolución y/o decisión, de forma que las delegaciones puedan hacerse con una idea general de la situación en que se encuentran esos proyectos. Las consultas tendrán una función puramente informativa, combinada con la información que figura en la extranet, y se celebrarán de forma transparente e incluyente. No servirán de foro de negociación.

### **3. Consultas oficiosas sobre propuestas convocadas por los principales patrocinadores**

113. Las consultas oficiosas serán el principal medio de negociación de los proyectos de resolución y/o decisión, y su convocación será responsabilidad del(los) patrocinador(es). Se debería celebrar al menos una consulta oficiosa abierta sobre cada proyecto de resolución y/o de decisión antes de que el Consejo lo examine para pronunciarse al respecto. En la medida de lo posible, las consultas deberían programarse de una forma oportuna, transparente e incluyente que tenga en cuenta las dificultades que enfrentan las delegaciones, especialmente las más pequeñas.

### **4. Función de la Mesa**

114. La Mesa se ocupará de las cuestiones de organización y de procedimiento. La Mesa comunicará regularmente el contenido de sus reuniones mediante un resumen informativo que elaborará oportunamente.

### **5. Otras formas de trabajo, como debates de grupos de expertos, seminarios y mesas redondas**

115. La utilización de estas otras formas de trabajo, incluidos los temas y las modalidades, sería decidida por el Consejo caso por caso. Esas formas de trabajo podrán servir de herramientas al Consejo para mejorar el diálogo y el entendimiento mutuo sobre ciertos temas. Se debería utilizar en el contexto de la agenda y del programa anual de trabajo del Consejo, y deberían reforzar y/o complementar su naturaleza intergubernamental. No se emplearán en sustitución o reemplazo de mecanismos de derechos humanos ya existentes ni de los métodos de trabajo establecidos.

### **6. Segmento de alto nivel**

116. El segmento de alto nivel se celebrará una vez al año durante el período de sesiones principal del Consejo. Le seguirá un segmento general, en el que las delegaciones que no hayan participado en el segmento de alto nivel podrán formular declaraciones de carácter general.

## **B. Cultura de trabajo**

117. Es necesario lo siguiente:

- a) La notificación temprana de las propuestas;
- b) El registro temprano de los proyectos de resolución y de decisión, preferentemente antes del final de la penúltima semana del período de sesiones;
- c) La distribución temprana de todos los informes, especialmente los de los procedimientos especiales, que se transmitirán a las delegaciones en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas al menos 15 días antes de la fecha de su examen por el Consejo;

- d) Que los patrocinadores de las resoluciones sobre países se responsabilicen de asegurar el más amplio apoyo posible para sus iniciativas (preferentemente 15 miembros) antes de que se adopte cualquier medida;
- e) La medida en el recurso a las resoluciones, a fin de evitar la proliferación de éstas, sin perjuicio del derecho de los Estados a decidir sobre la periodicidad de la presentación de sus proyectos de propuestas, mediante:
  - i) La reducción al mínimo de la duplicación innecesaria de iniciativas sometidas a la Asamblea General/Tercera Comisión;
  - ii) La agrupación de los temas de la agenda;
  - iii) El escalonamiento del registro de decisiones y/o resoluciones así como del examen de medidas en relación con temas o cuestiones de la agenda.

### **C. Otros resultados, además de las resoluciones y las decisiones**

118. Los otros resultados podrán incluir recomendaciones, conclusiones, resúmenes de los debates y una declaración del Presidente. Como esos resultados tendrían repercusiones jurídicas distintas, deberían complementar y no reemplazar a las resoluciones y decisiones.

### **D. Períodos extraordinarios de sesiones del Consejo**

119. Las siguientes disposiciones servirán de complemento al marco general que constituyen la resolución 60/251 de la Asamblea General y el reglamento del Consejo de Derechos Humanos.

120. El reglamento de los períodos extraordinarios de sesiones será conforme al reglamento aplicable a los períodos ordinarios de sesiones del Consejo.

121. La solicitud de celebración de un período extraordinario de sesiones, de conformidad con el requisito establecido en el párrafo 10 de la resolución 60/251 de la Asamblea General, se presentará al Presidente y a la secretaría del Consejo. En ella se especificará el tema que se propone examinar y se incluirá cualquier otra información pertinente que los patrocinadores deseen proporcionar.

122. El período extraordinario de sesiones se convocará tan pronto como sea posible después de que se comunique la solicitud oficial, pero, en principio, no antes de dos días hábiles ni más tarde de cinco días hábiles contados a partir de la recepción oficial de la solicitud. La duración del período extraordinario de sesiones no excederá de tres días (seis sesiones de trabajo), a menos que el Consejo decida otra cosa.

123. La secretaría del Consejo comunicará inmediatamente la solicitud de celebración de un período extraordinario de sesiones y cualquier información adicional que proporcionen los patrocinadores en la solicitud, así como las fechas de celebración del período extraordinario de sesiones, a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, y pondrá la información a disposición de los organismos

especializados, otras organizaciones intergubernamentales y las instituciones nacionales de derechos humanos, así como las ONG reconocidas como entidades de carácter consultivo, por los medios de comunicación más convenientes y expeditivos. La documentación del período extraordinario de sesiones, en particular los proyectos de resolución y de decisión, debería ponerse a disposición de todos los Estados en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas de forma equitativa, oportuna y transparente.

124. Antes del período extraordinario de sesiones, el Presidente del Consejo debería celebrar consultas informativas abiertas sobre su dirección y organización. A este respecto, podrá también pedirse a la Secretaría que proporcione información adicional, entre otras cosas sobre los métodos de trabajo de períodos extraordinarios de sesiones anteriores.

125. Los miembros del Consejo, los Estados interesados, los Estados observadores, los organismos especializados, otras organizaciones intergubernamentales y las instituciones nacionales de derechos humanos, así como ONG reconocidas como entidades de carácter consultivo, podrán hacer contribuciones al período extraordinario de sesiones de conformidad con el reglamento del Consejo.

126. Si el Estado solicitante u otros Estados tienen la intención de presentar proyectos de resolución o de decisión durante el período extraordinario de sesiones, los textos deberían distribuirse según lo establecido en los artículos pertinentes del reglamento del Consejo. No obstante, se insta a los patrocinadores a que presenten dichos textos lo antes posible.

127. Los patrocinadores de un proyecto de resolución o de decisión deberían celebrar consultas abiertas sobre el texto de su(s) proyecto(s) de resolución o de decisión con miras a conseguir la participación más amplia posible en su examen y, de ser posible, lograr un consenso al respecto.

128. El período extraordinario de sesiones debería permitir un debate participativo y estar orientado al logro de resultados prácticos, cuya aplicación pueda supervisarse y sobre la que pueda informarse en el siguiente período ordinario de sesiones del Consejo para la posible adopción de una decisión de seguimiento.

## **VII. REGLAMENTO<sup>e</sup>**

### **Períodos de sesiones**

#### *Reglamento*

#### *Artículo 1*

El Consejo de Derechos Humanos aplicará el reglamento establecido para las Comisiones Principales de la Asamblea General, según proceda, a no ser que la Asamblea o el Consejo decidan posteriormente otra cosa.

---

<sup>e</sup> Las cifras que figuran entre corchetes remiten a los artículos idénticos o correspondientes del reglamento de la Asamblea General o sus Comisiones Principales (A/520/Rev.16).

### *Períodos ordinarios de sesiones*

### *Número de períodos de sesiones*

#### *Artículo 2*

El Consejo de Derechos Humanos se reunirá periódicamente a lo largo del año y celebrará como mínimo tres períodos de sesiones por año del Consejo, incluido un período de sesiones principal, que tendrán una duración total no inferior a diez semanas.

### *Ingreso como miembro*

#### *Artículo 3*

Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de nueva elección asumirán su condición de miembros el primer día del año del Consejo, reemplazando a los Estados miembros que hayan concluido sus respectivos mandatos.

### *Lugar de reunión*

#### *Artículo 4*

El Consejo de Derechos Humanos tendrá su sede en Ginebra.

### *Períodos extraordinarios de sesiones*

### *Celebración de períodos extraordinarios de sesiones*

#### *Artículo 5*

El reglamento de los períodos extraordinarios de sesiones del Consejo de Derechos Humanos será el mismo que se aplique a los períodos ordinarios de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

#### *Artículo 6*

El Consejo de Derechos Humanos celebrará períodos extraordinarios de sesiones, cuando sea necesario, a solicitud de un miembro del Consejo con el apoyo de un tercio de los miembros de éste.

### *Participación de observadores del Consejo y celebración de consultas con éstos*

#### *Artículo 7*

a) El Consejo aplicará el reglamento establecido para las comisiones de la Asamblea General, según proceda, a no ser que la Asamblea o el Consejo decidan posteriormente otra cosa, y la participación de observadores y la celebración de consultas con éstos, incluidos Estados que no sean miembros del Consejo, los organismos especializados, otras organizaciones intergubernamentales y las instituciones nacionales de derechos humanos, así como las organizaciones no gubernamentales, se basará en las disposiciones, en particular la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social, de 25 de julio de 1996, y las prácticas observadas



por la Comisión de Derechos Humanos, al mismo tiempo que se asegura la contribución más eficaz posible de esas entidades.

b) La participación de las instituciones nacionales de derechos humanos se basará en las disposiciones y prácticas convenidas por la Comisión de Derechos Humanos, incluida la resolución 2005/74 de 20 de abril de 2005, procurando asegurar la contribución más eficaz posible de esas entidades.

#### *Organización de los trabajos y agenda de los períodos ordinarios de sesiones* *Reuniones de organización*

#### *Artículo 8*

a) Al principio de cada año del Consejo, éste celebrará una reunión de organización para elegir su Mesa y examinar y aprobar la agenda, el programa de trabajo y el calendario de los períodos ordinarios de sesiones del año del Consejo indicando, de ser posible, la fecha límite para la conclusión de sus trabajos, las fechas aproximadas en que se examinarán los temas y el número de sesiones que deberán asignarse a cada tema.

b) El Presidente del Consejo convocará también reuniones de organización dos semanas antes del comienzo de cada período de sesiones y, de ser necesario, durante el período de sesiones del Consejo para estudiar cuestiones de organización y de procedimiento que guarden relación con ese período de sesiones. *Presidente y Vicepresidentes*

#### *Elecciones*

#### *Artículo 9*

a) Al comienzo de cada año del Consejo, en su reunión de organización, el Consejo elegirá, de entre los representantes de sus miembros, a un Presidente y a cuatro Vicepresidentes. El Presidente y los Vicepresidentes constituirán la Mesa. Uno de los Vicepresidentes actuará de Relator.

b) En la elección del Presidente del Consejo, se prestará debida consideración a la rotación geográfica equitativa de este cargo entre los siguientes grupos regionales: Estados de África, Estados de Asia, Estados de Europa Oriental, Estados de América Latina y el Caribe, y Estados de Europa Occidental y otros Estados. Los cuatro Vicepresidentes del Consejo serán elegidos, sobre la base de la distribución geográfica equitativa, de entre los grupos regionales distintos del grupo regional al que pertenezca el Presidente. La selección del Relator se basará en la rotación geográfica.

#### **Mesa**

#### *Artículo 10*

La Mesa se ocupará de las cuestiones de organización y de procedimiento.

## *Duración del mandato*

### *Artículo 11*

El Presidente y los Vicepresidentes, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 13, permanecerán en sus funciones por un período de un año. No serán reelegibles para ocupar inmediatamente el mismo puesto.

### *Ausencia del Presidente o de un Vicepresidente*

### *Artículo 12 [105]*

Cuando el Presidente estime necesario ausentarse durante una sesión o parte de ella, designará a uno de los Vicepresidentes para que desempeñe sus funciones. Cuando un Vicepresidente actúe como Presidente, tendrá las mismas atribuciones y obligaciones que el Presidente. Si el Presidente cesa en el cargo en virtud de lo dispuesto en el artículo 13, los restantes miembros de la Mesa designarán a uno de los Vicepresidentes para que desempeñe sus funciones hasta la elección de un nuevo Presidente.

### *Sustitución del Presidente o de un Vicepresidente*

### *Artículo 13*

Si el Presidente o uno de los Vicepresidentes se ve en la imposibilidad de ejercer sus funciones o deja de ser representante de un miembro del Consejo, o si el Miembro de las Naciones Unidas del cual es representante deja de ser miembro del Consejo, cesará en el cargo y se elegirá para el resto del mandato a un nuevo Presidente o Vicepresidente.

### *Secretaría*

### *Deberes de la secretaría*

### *Artículo 14 [47]*

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos actuará de secretaría del Consejo. En esa función recibirá, traducirá, imprimirá y distribuirá en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas los documentos, informes y resoluciones del Consejo, sus comités y sus órganos; interpretará a otros idiomas los discursos pronunciados en las sesiones; redactará, imprimirá y distribuirá las actas del período de sesiones; custodiará y conservará en debida forma los documentos en los archivos del Consejo; distribuirá todos los documentos del Consejo a los miembros y observadores y, en general, ejecutará todas las demás tareas que el Consejo pueda necesitar.

### *Actas e informe*

### *Informe a la Asamblea General*

### *Artículo 15*

El Consejo presentará un informe anual a la Asamblea General.

## *Sesiones públicas y privadas del Consejo de Derechos Humanos*

### *Principios generales*

#### *Artículo 16 [60]*

Las sesiones del Consejo serán públicas, a menos que el Consejo decida, debido a circunstancias excepcionales, reunirse en sesión privada.

### **Sesiones privadas**

#### *Artículo 17 [61]*

Toda decisión tomada por el Consejo en sesión privada se anunciará en una de sus próximas sesiones públicas.

### *Procedimiento de trabajo*

### *Grupos de trabajo y otros mecanismos*

#### *Artículo 18*

El Consejo podrá establecer grupos de trabajo y otros mecanismos. Los miembros decidirán acerca de la participación en esos órganos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7. A menos que el Consejo decida otra cosa, el reglamento del Consejo se aplicará según proceda, a esos órganos.

### **Quórum**

#### *Artículo 19 [67]*

El Presidente podrá declarar abierta la sesión y permitir el desarrollo del debate cuando esté presente un tercio por lo menos de los miembros del Consejo. Se requerirá la presencia de la mayoría de los miembros para tomar cualquier decisión.

### *Mayoría necesaria*

#### *Artículo 20 [125]*

Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría simple de los miembros presentes y votantes, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 19.

## **Apéndice I**

### **MANDATOS RENOVADOS HASTA QUE EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS PUEDA EXAMINARLOS CON ARREGLO A SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO**

Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Haití  
nombrado por el Secretario General

Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Somalia  
nombrado por el Secretario General

Experto independiente encargado de examinar las consecuencias de las políticas de reforma económica y de la deuda externa para el goce efectivo de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales

Experto independiente encargado de la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza

Experto independiente sobre cuestiones de las minorías

Experto independiente sobre la cooperación técnica y los servicios de asesoramiento en Liberia

Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Burundi

Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo

Experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional

Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana

Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación

Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias

Relator Especial sobre el derecho a la alimentación

Relator Especial sobre el derecho a la educación

Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados

Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias

Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo

Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión

Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Sudán

Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea

Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 (la duración establecida de este mandato es hasta el término de la ocupación).

Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar

Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas

Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía

Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias

Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias

Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia

Relator Especial sobre los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños

Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes

Relator Especial sobre los efectos nocivos para el goce de los derechos humanos del traslado y vertimiento ilícitos de productos y desechos tóxicos y peligrosos

Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado

Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos

Representante Especial del Secretario General encargado de examinar la situación de los derechos humanos en Camboya

Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales

Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos

## Apéndice II

### PERÍODOS DE SERVICIO DE LOS TITULARES DE MANDATOS

Titular de mandato	Mandato	Período de servicio
Charlotte Abaka	Experta independiente sobre la situación de los derechos humanos en Liberia	Julio de 2006 (primer período)

<b>Titular de mandato</b>	<b>Mandato</b>	<b>Período de servicio</b>
Yakin Ertürk	Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias	Julio de 2006 (primer período)
Manuela Castriello	Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria	Julio de 2006 (primer período)
Joel Adebayo Adekanye	Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias	Julio de 2006 (segundo período)
Saeed Rajaei Khorasani	Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias	Julio de 2006 (primer período)
Joe Frans	Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana	Julio de 2006 (primer período)
Leandro Despouy	Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados	Agosto de 2006 (primer período)
Hina Jilani	Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos	Agosto de 2006 (segundo período)
Soledad Villagra Biedermann	Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria	Agosto de 2006 (segundo período)
Miloon Kothari	Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado	Septiembre de 2006 (segundo período)
Jean Ziegler	Relator Especial sobre el derecho a la alimentación	Septiembre de 2006 (segundo período)
Paulo Sérgio Pinheiro	Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar	Diciembre de 2006 (segundo período)
Darko Göttlicher	Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias	Enero de 2007 (primer período)
Tamás Bán	Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria	Abril de 2007 (segundo período)
Ghanim Alnajjar	Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en	Mayo de 2007

<b>Titular de mandato</b>	<b>Mandato</b>	<b>Período de servicio</b>
	Somalia nombrado por el Secretario General	(segundo período)
John Dugard	Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967	Junio de 2007 (segundo período)
Rodolfo Stavenhagen	Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas	Junio de 2007 (segundo período)
Arjun Sengupta	Experto independiente encargado de la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza	Julio de 2007 (primer período)
Akich Okola	Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Burundi	Julio de 2007 (primer período)
Titinga Frédéric Pacéré	Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo	Julio de 2007 (primer período)
Philip Alston	Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias	Julio de 2007 (primer período)
Asma Jahangir	Relatora Especial sobre la libertad de religión o de creencias	Julio de 2007 (primer período)
Okechukwu Ibeanu	Relator Especial sobre los efectos nocivos para el goce de los derechos humanos del traslado y vertimiento ilícitos de productos y desechos tóxicos y peligrosos	Julio de 2007 (primer período)
Vernor Muñoz Villalobos	Relator Especial sobre el derecho a la educación	Julio de 2007 (primer período)
Juan Miguel Petit	Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía	Julio de 2007 (segundo período)
Vitit Muntarhorn	Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea	Julio de 2007 (primer período)
Leila Zerrougui	Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria	Agosto de 2007 (segundo período)
Santiago Corcuera	Grupo de Trabajo sobre las	Agosto de 2007

<b>Titular de mandato</b>	<b>Mandato</b>	<b>Período de servicio</b>
Cabezut	Desapariciones Forzadas o Involuntarias	(primer período)
Walter Kälin	Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos	Septiembre de 2007 (primer período)
Sigma Huda	Relatora Especial sobre los derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños	Octubre de 2007 (primer período)
Bernards Andrew Nyamwaya Mudho	Experto independiente encargado de examinar las consecuencias de las políticas de reforma económica y de la deuda externa para el goce efectivo de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales	Noviembre de 2007 (segundo período)
Manfred Nowak	Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes	Noviembre de 2007 (primer período)
Louis Joinet	Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Haití nombrado por el Secretario General	Febrero de 2008 (segundo período)
Rudi Muhammad Rizki	Experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional	Julio de 2008 (primer período)
Gay McDougall	Experta independiente sobre cuestiones de las minorías	Julio de 2008 (primer período)



<b>Titular de mandato</b>	<b>Mandato</b>	<b>Período de servicio</b>
Doudou Diène	Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia	Julio de 2008 (segundo período)
Jorge A. Bustamante	Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes	Julio de 2008 (primer período)
Martin Scheinin	Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo	Julio de 2008 (primer período)
Sima Samar	Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en el Sudán	Julio de 2008 (primer período)
John Ruggie	Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales	Julio de 2008 (primer período)
Seyyed Mohammad Hashemi	Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria	Julio de 2008 (segundo período)
Najat Al-Hajjaji	Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación	Julio de 2008 (primer período)
Amada Benavides de Pérez	Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación	Julio de 2008 (primer período)
Alexander Nikitin	Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación	Julio de 2008 (primer período)
Shaista Shameem	Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación	Julio de 2007 (primer período)

<b>Titular de mandato</b>	<b>Mandato</b>	<b>Período de servicio</b>
Ambeyi Ligabo	Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión	Agosto de 2008 (segundo período)
Paul Hunt	Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental	Agosto de 2008 (segundo período)
Peter Lesa Kasanda	Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana	Agosto de 2008 (segundo período)
Stephen J. Toope	Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria	Septiembre de 2008 (segundo período)
George N. Jabbour	Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana	Septiembre de 2008 (segundo período)
Irina Zlatescu	Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana	Octubre de 2008 (segundo período)
José Gómez del Prado	Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación	Octubre de 2008 (primer período)
Yash Ghai	Representante Especial del Secretario General encargado de examinar la situación de los derechos humanos en Camboya	Noviembre de 2008 (primer período)

(9)

## **RESOLUCIÓN 5/2 CONSEJO DERECHOS HUMANOS**



### **Consejo de Derechos Humanos**

#### **5/2. Código de conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos**

*El Consejo de Derechos Humanos,*

*Inspirado* en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, y teniendo en cuenta las obligaciones consiguientes, en particular, la obligación de los Estados de cooperar en la promoción del respeto universal de los derechos humanos consagrados en dichos instrumentos,

*Recordando* la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados el 25 de junio de 1993 por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos,

*Recordando también* que en su resolución 60/251 de 15 de marzo de 2006, titulada "Consejo de Derechos Humanos", la Asamblea General:

a) *Reafirmó* que todos los derechos humanos eran universales e indivisibles, estaban relacionados entre sí, eran interdependientes y se reforzaban mutuamente y que debían tratarse de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dando a todos el mismo peso;

b) *Reconoció* que la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos eran los pilares del sistema de las Naciones Unidas y que estaban vinculados entre sí y se reforzaban mutuamente;

c) *Decidió* que los miembros elegidos al Consejo debían aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos y cooperar plenamente con el Consejo;

d) *Subrayó* la importancia de "garantizar la universalidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos y de eliminar la aplicación de un doble rasero y la politización";

e) *Reconoció además* que la promoción y protección de los derechos humanos debían "basarse en los principios de la cooperación y el diálogo genuino y obedecer al propósito de fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos en beneficio de toda la humanidad";

f) *Decidió* que la labor del Consejo estaría "guiada por los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, diálogo internacional constructivo y cooperación a fin de impulsar la promoción y protección de todos los derechos humanos, es decir, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo";

g) *Decidió también* que "los métodos de trabajo del Consejo [debían] ser transparentes, justos e imparciales y posibilitar un diálogo genuino, estar orientados a los resultados, permitir debates ulteriores de seguimiento de las recomendaciones y su cumplimiento, así como una interacción sustantiva con procedimientos y mecanismos especiales";

*Subrayando* el carácter central de los conceptos de imparcialidad y objetividad, así como la competencia especializada de los titulares de mandatos, en el contexto de los procedimientos especiales, junto con la necesidad de prestar la debida atención a todas las violaciones de los derechos humanos, dondequiera que se produzcan,

*Teniendo presente* que la eficiencia del sistema de los procedimientos especiales debería reforzarse mediante la consolidación de la condición de los titulares de mandatos y la aprobación de principios y reglamentos que tengan en cuenta los aspectos específicos de sus mandatos,

*Considerando* que es necesario prestar asistencia a todos los interesados, incluidos los Estados, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales y los particulares, para que comprendan mejor y apoyen las actividades de los titulares de mandatos,

*Recordando* los Artículos 100, 104 y 105 de la Carta de las Naciones Unidas, la sección 22 del artículo VI de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, de 13 de febrero de 1946, y el párrafo 6 de la resolución 60/251 de la Asamblea General,

*Tomando nota* de la decisión 1/102 del Consejo, de 30 de junio de 2006, por la que el Consejo decidió prorrogar excepcionalmente por un año los mandatos y el servicio de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, así como del procedimiento establecido con arreglo a la resolución 1503 (XLVIII) del Consejo Económico y Social, de 27 de mayo de 1970,

*Tomando nota asimismo* de la decisión 1/104 de 30 de junio de 2006, por la que el Consejo estableció el Grupo de Trabajo Intergubernamental abierto con el cometido de formular recomendaciones sobre la cuestión de examinar y en lo posible mejorar y racionalizar todos los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades de la Comisión de Derechos Humanos, a fin de mantener un sistema de procedimientos especiales de conformidad con el párrafo 6 de la resolución 60/251 de la Asamblea General,

*Tomando nota además* de la resolución 2/1 de 27 de noviembre de 2006, en que el Consejo pidió al Grupo de Trabajo Intergubernamental abierto que "elaborara un proyecto de código de conducta para la labor de los procedimientos especiales",

*Considerando* que ese código de conducta es parte integrante del examen, la mejora y la racionalización previstas en la resolución 60/251 de la Asamblea General que, entre otras cosas, procura intensificar la cooperación entre los gobiernos y los titulares de mandatos, que es fundamental para el funcionamiento eficaz del sistema,

*Considerando también* que dicho código de conducta fortalecerá la capacidad de los titulares de mandatos para ejercer sus funciones, realizando al mismo tiempo su autoridad moral y credibilidad, y exigirá el apoyo de otros interesados, y en particular de los Estados,

*Considerando además* que debería distinguirse entre, por una parte, la independencia de los titulares de mandatos, que es de carácter absoluto, y, por otra, sus prerrogativas, que están limitadas por su mandato, el mandato del Consejo de Derechos Humanos y las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas,

*Consciente* de que es conveniente enunciar en detalle y completar las reglas y principios que rigen el comportamiento de los titulares de mandatos y aumentar su visibilidad,

*Tomando nota* del Estatuto relativo a la condición y los derechos y deberes básicos de los funcionarios que no forman parte del personal de la Secretaría y de los expertos en misión, aprobado por la Asamblea General en su resolución 56/280, de 27 de marzo de 2002,

*Tomando nota también* del proyecto de Manual de los Procedimientos Especiales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobado en 1999 por la sexta reunión anual de titulares de mandatos, en su forma revisada,

*Tomando conocimiento* de las deliberaciones y propuestas del Grupo de Trabajo Intergubernamental abierto sobre el examen de los mandatos,

1. *Insta* a todos los Estados a que cooperen con los procedimientos especiales y los ayuden en el desempeño de sus tareas, les faciliten oportunamente toda información necesaria y respondan sin dilación indebida a las comunicaciones que éstos les transmitan;

2. *Aprueba* el Código de Conducta para los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, cuyo texto se adjunta a la presente resolución y cuyas disposiciones deberá difundir la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos entre los titulares de mandatos, los Estados Miembros de las Naciones Unidas y otros interesados.

*Novena*  
18 de junio de 2007

*sesión*

[Resolución aprobada sin votación.]<sup>817</sup>

## **Anexo**

### **PROYECTO DE CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS TITULARES DE MANDATOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS**

#### *Artículo 1*

##### *Propósito del Código de Conducta*

El propósito del presente Código de Conducta es reforzar la eficacia del sistema de los procedimientos especiales definiendo las normas de comportamiento ético y conducta profesional que deberán observar los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos (en adelante los "titulares de mandatos") en el desempeño de sus funciones.

#### *Artículo 2*

##### *Condición del Código de Conducta*

1. Las disposiciones del presente Código complementan las del Estatuto relativo a la condición y los derechos y deberes básicos de los funcionarios que no forman parte del personal de la Secretaría y de los expertos en misión (ST/SGB/2002/9) (en adelante "el Estatuto").
2. Las disposiciones del proyecto de Manual de los Procedimientos Especiales de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deberán estar en consonancia con las del presente Código.
3. Los titulares de mandatos recibirán del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto con la documentación relativa a su misión, un ejemplar del presente Código del que deberán acusar recibo.

#### *Artículo 3*

##### *Principios de conducta generales*

Los titulares de mandatos son expertos independientes de las Naciones Unidas. En el desempeño de su mandato, deberán:

- a) Actuar a título independiente y ejercer sus funciones de conformidad con su mandato, mediante una evaluación profesional e imparcial de los hechos basada en las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas, sin ningún tipo de influencia, incitación, presión, amenaza o injerencia externa, ya sea directa o

---

<sup>817</sup> Véase A/HRC/5/21, cap. III, párr. 62.

indirecta, de parte alguna, sea o no parte interesada, y por motivo alguno; el concepto de independencia está vinculado a la condición de los titulares de mandatos y a su libertad de evaluar las cuestiones de derechos humanos que deben examinar en virtud de su mandato;

b) Tener presente el mandato del Consejo, que es responsable de promover el respeto universal por la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, mediante el diálogo y la cooperación, como se especifica en la resolución 60/251 de la Asamblea General de 15 de marzo de 2006;

c) Ejercer sus funciones de acuerdo con su mandato y de conformidad con el Estatuto, así como con el presente Código;

d) Centrarse exclusivamente en la realización de su mandato, teniendo presente en todo momento la obligación fundamental de actuar con la veracidad, la lealtad y la independencia que exige su mandato;

e) Demostrar el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad, entendiéndose por ello, en particular, pero no exclusivamente, la probidad, la imparcialidad, la equidad, la honradez y la buena fe;

f) No solicitar ni aceptar instrucciones de ningún gobierno, particular, organización gubernamental o no gubernamental o grupo de presión en absoluto;

g) Adoptar en todo momento una conducta acorde con su condición;

h) Ser conscientes de la importancia de sus deberes y responsabilidades, tomando en consideración la naturaleza particular de su mandato y comportándose de modo tal que se mantenga y refuerce la confianza depositada en ellos por todos los interesados;

i) Abstenerse de aprovechar sus cargos o los conocimientos adquiridos en el desempeño de sus funciones para obtener beneficios personales, ya sean financieros o de otro tipo, o para favorecer o causar perjuicios a familiares, asociados cercanos o terceros;

j) Abstenerse de aceptar honores, condecoraciones, favores, obsequios o remuneración de fuente gubernamental o no gubernamental alguna por actividades llevadas a cabo en el desempeño de su mandato.

#### *Artículo 4*

##### *Condición de los titulares de mandatos*

1. Los titulares de mandatos ejercerán sus funciones a título personal, y sus responsabilidades no serán de orden nacional sino exclusivamente de orden internacional.

2. En el ejercicio de sus funciones, los titulares de mandatos tendrán derecho a las prerrogativas e inmunidades previstas en los instrumentos internacionales pertinentes, en particular en la sección 22 del artículo VI de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.

3. Sin perjuicio de esas prerrogativas e inmunidades, los titulares de mandatos desempeñarán sus funciones respetando plenamente la legislación y los reglamentos nacionales del país en que cumplan su misión. Cuando se presente un problema a este respecto, se adherirán estrictamente a lo dispuesto en el párrafo e) de la cláusula 1 del Estatuto.

#### *Artículo 5*

##### *Declaración solemne*

Antes de asumir sus funciones, los titulares de mandatos deberán hacer por escrito la siguiente declaración solemne:

"Declaro solemnemente que cumpliré mis deberes y ejerceré mis funciones con toda imparcialidad, lealtad y conciencia, en el respeto de la verdad, y que desempeñaré dichas funciones y regularé mi conducta de forma totalmente acorde con las disposiciones de mi mandato, la Carta de las Naciones Unidas, los intereses de las Naciones Unidas y el objetivo de promover y proteger los derechos humanos sin solicitar o aceptar instrucción alguna de ninguna otra parte."

#### *Artículo 6*

##### *Prerrogativas*

Sin menoscabo de las prerrogativas previstas como parte de su mandato, los titulares de mandatos deberán:

a) Tratar siempre de establecer los hechos, sobre la base de información objetiva y fidedigna que dimanen de fuentes pertinentes y creíbles, y que hayan contrastado debidamente en el mayor grado posible;

b) Tener en cuenta de forma íntegra y oportuna la información, en particular aquella proporcionada por el Estado de que se trate, sobre las situaciones que atañan a su mandato;

c) Evaluar toda la información teniendo en cuenta las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas que guarden relación con su mandato y las convenciones internacionales en que sea parte el Estado de que se trate;

d) Estar facultados para señalar a la atención del Consejo cualquier propuesta que pueda mejorar la capacidad de los procedimientos especiales para desempeñar su mandato.

#### *Artículo 7*

##### *Observancia de las disposiciones del mandato*

Los titulares de mandatos deberán ejercer sus funciones con estricta observancia de su mandato y, en particular, velar por que sus recomendaciones no excedan de su respectivo mandato o del mandato del propio Consejo.

#### *Artículo 8*



## *Fuentes de información*

En sus actividades de reunión de información los titulares de mandatos deberán:

- a) Guiarse por los principios de discreción, transparencia, imparcialidad y ecuanimidad;
- b) Preservar la confidencialidad de las fuentes de testimonios si su divulgación pudiera causar perjuicio a las personas interesadas;
- c) Apoyarse en hechos objetivos y fiables, basándose en normas de prueba que se ajusten al carácter no judicial de los informes y conclusiones que han de redactar;
- d) Dar a los representantes del Estado de que se trate la oportunidad de formular sus observaciones sobre las evaluaciones hechas por los titulares de mandatos y de responder a las denuncias formuladas contra dicho Estado, y adjuntar a sus informes un resumen de las respuestas por escrito del Estado.

## *Artículo 9*

### *Cartas de transmisión de denuncias*

En aras de la eficacia y armonización en la tramitación de las cartas de transmisión de denuncias por los procedimientos especiales, los titulares de mandatos deberán valorar si cumplen los siguientes criterios:

- a) Las comunicaciones no deberán ser manifiestamente infundadas ni tener motivaciones políticas;
- b) Las comunicaciones deberán incluir una descripción fáctica de las presuntas violaciones de los derechos humanos;
- c) Los términos en que estén redactadas las comunicaciones no deberán ser insultantes;
- d) Las comunicaciones deberán ser presentadas por una persona o un grupo de personas que afirmen ser víctima de violaciones, o por cualquier persona o un grupo de personas, incluidas organizaciones no gubernamentales, que actúe de buena fe de conformidad con los principios de derechos humanos, no tenga motivaciones políticas contrarias a lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas y afirme tener conocimiento directo y fidedigno de dichas violaciones, corroborado por información clara;
- e) Las comunicaciones no se deberán basar exclusivamente en informes difundidos por los medios de comunicación.

## *Artículo 10*

### *Llamamientos urgentes*

Los titulares de mandatos podrán recurrir a los llamamientos urgentes en los casos en que las presuntas violaciones requieran medidas perentorias por entrañar pérdidas de vidas humanas, situaciones que pongan en peligro la vida o un daño

inminente o continuo de mucha gravedad para las víctimas, que no se pueda atender oportunamente mediante el procedimiento previsto en el artículo 9 del presente Código.

#### *Artículo 11*

##### *Visitas al terreno*

Los titulares de mandatos deberán:

- a) Velar por que su visita se realice de conformidad con las condiciones de su mandato;
- b) Asegurarse de que su visita tenga lugar con el consentimiento, o por invitación, del Estado de que se trate;
- c) Preparar su visita en colaboración estrecha con la misión permanente del Estado de que se trate acreditada ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, salvo que el Estado en cuestión designe a otra autoridad al efecto;
- d) Ultimar el programa oficial de sus visitas directamente con funcionarios del país anfitrión, con apoyo administrativo y logístico del organismo de las Naciones Unidas y/o el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el país, que también podrá facilitar ayuda para la organización de reuniones privadas;
- e) Procurar entablar un diálogo con las autoridades competentes del gobierno y con todos los demás interlocutores; la promoción del diálogo y la cooperación para garantizar la plena eficacia de los procedimientos especiales serán una obligación común de los titulares de los mandatos, del Estado de que se trate y de los mencionados interlocutores;
- f) Tener derecho, a petición suya, en consulta con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y previo acuerdo entre el gobierno anfitrión y el titular del mandato, a contar con protección oficial durante su visita, sin perjuicio de la privacidad y confidencialidad que exija el desempeño de sus funciones.

#### *Artículo 12*

##### *Opiniones privadas y carácter público del mandato*

Los titulares de mandatos deberán:

- a) Tener presente la necesidad de que sus opiniones políticas personales no vayan en desmedro del cumplimiento de su misión, y basar sus conclusiones y recomendaciones en evaluaciones objetivas de las situaciones de los derechos humanos;
- b) Al cumplir su mandato, hacer gala de prudencia, moderación y discreción para no menoscabar el reconocimiento del carácter independiente de su mandato o el clima necesario para desempeñarlo debidamente.

#### *Artículo 13*

## *Recomendaciones y conclusiones*

Los titulares de mandatos deberán:

a) Al expresar sus opiniones ponderadas, particularmente en sus declaraciones públicas sobre denuncias de violaciones de derechos humanos, indicar también con imparcialidad las respuestas dadas por el Estado de que se trate;

b) Al informar sobre un Estado determinado, velar por que sus declaraciones sobre la situación de los derechos humanos en el país sean en todo momento compatibles con su mandato y con la integridad, independencia e imparcialidad que exige su condición, y puedan promover un diálogo constructivo entre los interesados, así como la cooperación en la promoción y protección de los derechos humanos;

c) Velar por que las autoridades del Estado de que se trate sean las primeras en tener conocimiento de sus conclusiones y recomendaciones en relación con dicho Estado y dispongan de tiempo suficiente para dar una respuesta, y por que, igualmente, el Consejo sea el primer receptor de las conclusiones o recomendaciones dirigidas a ese órgano.

### *Artículo 14*

#### *Comunicación con los gobiernos*

Los titulares de mandatos dirigirán todas sus comunicaciones a los gobiernos interesados por conductos diplomáticos, a menos que el gobierno interesado y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos decidan otra cosa.

### *Artículo 15*

#### *Responsabilidad ante el Consejo*

En el desempeño de su mandato, los titulares de mandatos responderán ante el Consejo.

(10)

## **MANDATOS POR PAÍSES**

1 de agosto de 2010<sup>818</sup>

<b>Título / Mandato</b>	<b>Mandato creado</b>		<b>Mandato renovado</b>		<b>Nombre y país de origen del titular del mandato</b>
	<b>en</b>	<b>por</b>	<b>en</b>	<b>por</b>	
Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en <u>Burundi</u>	2004	Comisión de Derechos Humanos Resolución 2004/82 (duración del mandato no especificada)	2008	Consejo de Derechos Humanos Resolución 9/19	Sr. Fatsah OUGUERGOUZ ( <i>Alegría</i> )
Relator especial de los derechos humanos en <u>Camboya</u>	1993	Comisión de Derechos Humanos Resolución 1993/6	2009	Consejo de Derechos Humanos Resolución <u>12/25</u> (por 1 año)	Sr. Surya Prasad SUBEDI ( <i>Nepal</i> )
Relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la <u>República Popular Democrática de Corea</u>	2004	Comisión de Derechos Humanos Resolución 2004/13 (duración del mandato no especificada)	2010	Consejo de Derechos Humanos Resolución <u>13/14</u> (por 1 año)	Sr. Marzuki DARUSMAN ( <i>Indonesia</i> )
Experto independiente nombrado por el Secretario General sobre la situación de los derechos humanos en <u>Haití</u>	1995	Comisión de Derechos Humanos Resolución 1995/70 (duración del mandato no especificada)	2008	Consejo de Derechos Humanos PRST/9/1	Sr. Michel FROST ( <i>Francia</i> )

<sup>818</sup> Datos obtenidos en septiembre de 2011 junto a la página oficial del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, web <<http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/chr/special/countries.htm>>.

Relator especial sobre la situación de los derechos humanos en <u>Myanmar</u>	1992	Comisión de Derechos Humanos Resolución 1992/58	2010	Consejo de Derechos Humanos Resolución <u>13/25</u> (por 1 año)	Sr. Tomas Ojea QUINTANA (Argentina)
Relator especial sobre la situación de los derechos humanos en los <u>Territorios Palestinos ocupados desde 1967</u>	1993	Comisión de Derechos Humanos Resolución 1993/2 A (“hasta el fin de la ocupación israelí”)			Sr. Richard FALK (Estados Unidos de América)
Experto independiente e nombrado por el Secretario General sobre la situación de los derechos humanos en <u>Somalia</u>	1993	Comisión de Derechos Humanos Resolución 1993/86	2009	Consejo de Derechos Humanos Resolución <u>12/26</u> (por 1 año)	Sr. Shamsul BARI (Bangladesh)
Experto independiente e sobre la situación de los derechos humanos en el <u>Sudán</u>	2005	Comisión de Derechos Humanos Resolución 2005/82 (por 1 año)	2010	Consejo de Derechos Humanos Decisión 14/117	Sr. Mohamed Chande OTHMAN (Tanzania)

(11)

## MANDATOS TEMÁTICOS

1 de mayo de 2011

Título / Mandato	Mandato establecido		Mandato renovado		Nombre y país de origen del (los) titular (es) del mandato	
	en	por	en	por		
Relator especial sobre <b>vivienda adecuada</b> como un elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado	2000	Comisión de Derechos Humanos Resolución 2000/9	2007	Consejo de Derechos Humanos Resolución 6/27	Sra. Raquel ROLNIK (Brasil)	srhousing@ohchr.org
			2010	Consejo de Derechos Humanos Resolución 15/8		
Grupo de Trabajo sobre las personas de <b>descendencia africana</b>	2002	Comisión de Derechos Humanos Resolución 2002/68	2003	Consejo de Derechos Humanos Resolución 2003/30	- Sra. Maya SAHLI (Argelia) - Sra. Mireille FANON-MENDES_FRANCE (France)	africandescent@ohchr.org
			2008	Consejo de Derechos Humanos Resolución 9/14	- Sra. Monorama BISWAS (Bangladesh) - Sra. Mirjana NAJCEVSJA (ex República Yugoslava de Macedonia) - Sra. Verene SHEPHERD (Jamaica)	
Grupo de Trabajo sobre la <b>detención arbitraria</b>	1991	Comisión de Derechos Humanos Resolución 1991/42	1997	Consejo de Derechos Humanos Resolución 1997/50	- Sr. El Hadji Malick SOW (Senegal) Presidente - Sra. Shaheen Sardar ALI (Pakistán)	wgad@ohchr.org
			2010	Consejo de Derechos Humanos Resolución 15/18	Vicepresidente - Sr. Roberto GARRETON (Chile) - Sr. Vladimir TOCHILOVSKY (Federación de Rusia) - Sr. Mads ANDENAS (Noruega)	
Experta	2009	Consejo			Sra. Farida	ieulturalrights@o

independiente en la esfera de los <b>derechos culturales</b>		de Derechos Humanos Resolución 10/23			SHAHEED (Pakistán)	hchr.org
Relator especial sobre el <b>derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas</b>	2010	Consejo de Derechos Humanos resolución 15/21			Sr. Maina KIAI (Kenya)	freeassembly@ohchr.org
Relator especial sobre las formas contemporáneas de la <b>esclavitud</b>	2007	Consejo de Derechos Humanos Resolución 6/14	2010	Consejo de Derechos Humanos resolución 15/2	Sra. Gulnara SHAHINIAN (Armenia)	srs slavery@ohchr.org
Relator especial sobre la <b>venta de niños</b> , la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía	1990	Comisión de Derechos Humanos Resolución 1990/68	2008 2011	Consejo de Derechos Humanos Resolución 7/13 (por 3 años) Consejo de Derechos Humanos Resolución 16/12	Sra. Najat Maalla M'JID (Marruecos)	srsaleofchildren@ohchr.org
Relator especial sobre el derecho a la <b>educación</b>	1998	Comisión de Derechos Humanos Resolución 1998/33	2008	Consejo de Derechos Humanos Resolución 8/4 (por 3 años)	Sr. Kishore SINGH (India)	sreducation@ohchr.org
Grupo de trabajo sobre <b>desapariciones forzadas o involuntarias</b>	1980	Comisión de Derechos Humanos Resolución	2007	Consejo de Derechos Humanos Resolución 7/12	- Sr. Jeremy SARKIN (Sudáfrica): Presidente-Relator - Sr. Ariel DULITZKY (Argentina) - Sra Jasminka DZUMHUR (Bosnia y	wgeid@ohchr.org

		ón 20 (XXX VI)	2011	Consejo de Derechos Humanos Resolución 16/16	<i>Herzegovina</i> - Sr. Olivier de FROUVILLE ( <i>Francia</i> ) Sr. Osman EL- HAJJE ( <i>Libano</i> )	
Relator especial sobre <b>ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias</b>	1982	Comisió n de Derecho s Humano s Resoluci ón 1982/35	2008	Consejo de Derechos Humanos Resolución 8/3	Sr. Christof HEYNS ( <i>Sudáfrica</i> )	eje@ohchr.org
Relator especial sobre <b>la extrema pobreza y los derechos humanos</b>	1998	Comisió n de Derecho s Humano s Resoluci ón 1998/25	2008	Consejo de Derechos Humanos Resolución 8/11	Sra. Maria Magdalena SEPÚLVEDA CARMONA ( <i>Chile</i> )	srextremepoverty @ohchr.org
Relator especial sobre el derecho a <b>la alimentación</b>	2000	Comisió n de Derecho s Humano s Resoluci ón 2000/10	2010	Consejo de Derechos Humanos Resolución 13/4	Sr. Olivier de SCHUTTER ( <i>Bélgica</i> )	srfood@ohchr.org
Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la <b>libertad de opinión y de expresión</b>	1993	Comisió n de Derecho s Humano s Resoluci ón 1993/45	2008  2011	Consejo de Derechos Humanos Resolución 7/36 ( <i>por 3 años</i> )  Consejo de Derechos Humanos Resolución 16/4	Sr. Frank La RUE ( <i>Guatemala</i> )	freedex@ohchr.org
Relator especial sobre <b>la libertad de religión o de creencias</b>	1986	Comisió n de Derecho s Humano s Resoluci	2010	Consejo de Derechos Humanos Resolución 14/11	Sr. Heiner BIELEFELDT ( <i>Alemania</i> )	freedomofreligion @ohchr.org



		ón 1986/20				
Relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de <b>salud</b> física y mental	2002	Comisió n de Derecho s Humano s Resoluci ón 2002/31	2010	Consejo de Derechos Humanos Resolución 15/22	Sr. Anand GROVER ( <i>India</i> )	srhealth@ohchr.org
Representant e especial del Secretario General sobre la situación de los <b>defensores de los derechos humanos</b>	2000	Comisió n de Derecho s Humano s Resoluci ón 2000/61	2008  2011	Consejo de Derechos Humanos Resolución 7/8  Consejo de Derechos Humanos Resolución 16/5	Sra. Margaret SEKAGGYA ( <i>Uganda</i> )	defenders@ohchr.org urgent- action@ohchr.org
Relator especial sobre la <b>independencia de los magistrados y abogados</b>	1994	Comisió n de Derecho s Humano s Resoluci ón 1994/41	2008	Consejo de Derechos Humanos Resolución 8/6	Sra. Gabriela KNAUL ( <i>Brasil</i> )	srindependencejl @ohchr.org
Relator especial sobre los derechos de los pueblos <b>indígenas</b>	2001	Comisió n de Derecho s Humano s Resoluci ón 2001/57	2010	Consejo de Derechos Humanos Resolución 15/14 (por 3 años)	Sr. James ANAYA ( <i>Estados Unidos de América</i> )	indigenous@ohchr.org
Relator especial sobre los derechos humanos de las <b>personas internamente desplazadas</b>	2004	Comisió n de Derecho s Humano s Resoluci ón 2004/55	2010	Consejo de Derechos Humanos 14/6	Sr. Chaloka BEYANI ( <i>Zambia</i> )	idp@ohchr.org
Grupo de Trabajo sobre el uso de <b>mercenarios</b>	2005	Comisió n de Derecho s	2010	Consejo de Derechos Humanos	Sra. Faiza PATEL ( <i>Pakistán</i> ) Sra. Patricia ARIAS ( <i>Chile</i> )	mercenaries@ohchr.org

como medio de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación		Humanos Resolución 2005/2		Resolución 15/12	Sr. José Luis GÓMEZ DEL PRADO (España) Sra. Elżbieta KARSKA (Polonia) Sr. Anton KATZ (Sudáfrica)	
Relator especial sobre los derechos humanos de los <b>migrantes</b>	1999	Comisión de Derechos Humanos Resolución 1999/44	2008	Consejo de Derechos Humanos Resolución 8/10 y 17/12	Sr. François CREPEAU (Canadá)	migrant@ohchr.org
Experto independiente sobre <b>cuestiones de las minorías</b>	2005	Comisión de Derechos Humanos Resolución 2005/79	2008 2011	Consejo de Derechos Humanos Resolución 7/6 Consejo de Derechos Humanos Resolución 16/6	Sra. Rita IZSÁK (Hungría)	minorityissues@ohchr.org
Relator especial sobre formas contemporáneas de <b>racismo</b> , discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia	1993	Comisión de Derechos Humanos Resolución 1993/20	2008 2011	Consejo de Derechos Humanos Resolución 7/34 Consejo de Derechos Humanos Resolución 16/33	Sr. Githu MUIGAI (Kenya)	racism@ohchr.org
Relator especial con el acceso al <b>agua</b> potable y el saneamiento	2008	Consejo de Derechos Humanos Resolución 7/22		Consejo de Derechos Humanos Resolución 16/2	Sra. Catarina de ALBUQUERQUE (Portugal)	iewater@ohchr.org
Experto independiente sobre los <b>derechos humanos y la solidaridad internacional</b>	2005	Comisión de Derechos Humanos Resolución	2008	Consejo de Derechos Humanos Resolución 7/5	Sra. Virginia Dandan (Filipinas)	iesolidarity@ohchr.org

		ón 2005/55				
Experto independiente sobre <b>las consecuencias de la deuda externa y de las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales</b>	2000	Comisión de Derechos Humanos Resolución 2000/82	2008	Consejo de Derechos Humanos Resolución 7/4	Sr. Cephas LUMINA ( <i>Zambia</i> )	ieforeigndebt@ohchr.org
			2011	Consejo de Derechos Humanos Resolución 16/14		
Relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el <b>terrorismo</b>	2005	Comisión de Derechos Humanos Resolución 2005/80	2010	Consejo de Derechos Humanos Resolución 15/15	Sr. Ben EMMERSON ( <i>Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte</i> )	srct@ohchr.org
Relator especial sobre la cuestión de la <b>tortura</b> y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes	1985	Comisión de Derechos Humanos Resolución 1985/33	2008	Consejo de Derechos Humanos Resolución 8/8	Sr. Juan MENDEZ ( <i>Argentina</i> )	sr-torture@ohchr.org
			2011	Consejo de Derechos Humanos Resolución 16/23		
Relator especial sobre los efectos nocivos para el goce de los derechos humanos del traslado y vertimiento ilícitos de	1995	Comisión de Derechos Humanos Resolución 1995/81	2008	Consejo de Derechos Humanos Resolución 9/1	Sr. Calin GEORGESCU ( <i>Rumanía</i> )	srtoxicwaste@ohchr.org

<b>productos y desechos tóxicos y peligrosos</b>						
Relator especial sobre la <b>trata de personas</b> , especialmente las mujeres y los niños	2004	Comisión de Derechos Humanos Resolución 2004/110	2008	Consejo de Derechos Humanos Resolución 8/12	Sra. Joy Ngozi EZEILO ( <i>Nigeria</i> )	srtrafficking@ohchr.org
Representante especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las <b>empresas transnacionales y otras empresas comerciales</b>	2005	Comisión de Derechos Humanos Resolución 2005/69	2008	Consejo de Derechos Humanos Resolución 8/7	Sr. John RUGGIE ( <i>Estados Unidos de América</i> )	lwendland@ohchr.org
Grupo de trabajo sobre la cuestión de la <b>discriminación contra la mujer</b> en la legislación y en la práctica	2010	Consejo de Derechos Humanos resolución 15/23			Sra. Emma AOUIJ ( <i>Túnez</i> ) Sra. Mercedes BARGUET ( <i>México</i> ) Sra. Kamala CHANDRAKIRANA ( <i>Indonesia</i> ) Sra. Frances RADAY ( <i>Israel/Reino Unido</i> ) Sra. Eleonara ZIELINKSKA ( <i>Polonia</i> )	wgdiscriminationwomen@ohchr.org
Relatora especial sobre la violencia contra la <b>mujer</b>	1994	Consejo de Derechos Humanos resolución 1994/45	2008 2011	Consejo de Derechos Humanos Resolución 7/24  Consejo de Derechos Humanos Resolución 16/7	Sra. Rashida MANJOO ( <i>Sudáfrica</i> )	vaw@ohchr.org

(12)

**PAÍSES EXAMINADOS POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN VIRTUD DEL PROCEDIMIENTO 1503 (hasta 2005)**

STATE	YEAR	SESSION
1. AFGHANISTAN	1981-1984	37th-40th
2. ALBANIA	1984-1988 1995	40th-44th 51st
3. ANTIGUA & BARBUDA	1997	53rd
4. ARGENTINA	1980-1984	36th-40th
5. ARMENIA	1994-1996	50th-52nd
6. AZERBAIJAN	1994-1996	50th-52nd
7. BAHRAIN	1991-1993	47th-49th
8. BENIN	1984-1985 1988	40th-41st 44th
9. BOLIVIA	1977-1981 2004	33rd-37th 60th
10. BOTSWANA	1997	53rd
11. BRAZIL	1974-1976	30th-32nd
12. BRUNEI DARUSSALAM	1988-1990	44th-46th
13. BURMA ( MYANMAR )	1979-1980 1990-1992	35th-36th 46th-48th
14. BURUNDI	1974-1975	30th-31st
15. CENTRAL AFRICAN REP.	1980-1981	36th-37th
16. CHAD	1991-1999 2002-2003	47th-55th 58th-59th
17. CHILE	1975-1976 1978-1979 1981 2000	31st-32nd 34th-35th 37th 56th
18. CONGO	2000, 2001	56th, 57th
19. CZECH REPUBLIC	1997	53rd
20. DJIBOUTI	2003, 2004	59th-60th
21. EL SALVADOR	1981	37th
22. EQUATORIAL GUINEA	1976-1979	32nd-35th
23. ESTONIA	1994 1997	50th 53rd
24. ETHIOPIA	1978-1981	34th-37th

25. GABON	1986	42nd
26. GAMBIA	1997-1999	53rd-55th
27. GERMANY	1994	50th
28 GERMANY (Dem. Rep.)	1981-1983	37th-39th
29. GRENADA	1988	44th
30 GUATEMALA	1981	37th
31. GUYANA	1974-1975	30th-31st
32. HAITI	1981-1987 1989-1990	37th-43rd 45th-46th
33. HONDURAS	1988-1989 2004-2005	44th-45th 60th-61st
34. INDONESIA (& East Timor)	1978-1981 1983-1985	34th-37th 39th-41st
35. IRAN	1974-1975 1983	30th-31st 39th
36. IRAQ	1988-1989	44th-45th
37. ISRAEL	1975-1977	31st-33rd
38. JAPAN	1981 1998	37th 54th
39. KAMPUCHEA DEMOC.	1979	35th
40. KENYA	1993 2000	49th 56th
41. KOREA , Republic of	1977-1982	33rd-38th
42. KUWAIT	1994	50th
43. KYRGYZSTAN	1997-1998	53rd-54th
44. LAO PEOPLE'S D.R.	1995	51st
45. LATVIA	1995 1997 2000	51st 53rd 56th
46. LEBANON	1997	53rd
47. LIBERIA	2002-2003	58th – 59th
48. LITHUANIA	1997	53rd
49. MALAWI	1977-1980	33rd-36th
50. MALAYSIA	1984	40th
51. MALDIVES	2001	57th
52. MALI	1996	52nd
53. MOLDOVA	1995	51st
54. MOZAMBIQUE	1981	37th
55. NEPAL	1996	52nd

	1999	55th
56. NIGERIA	2002	58th
57. PAKISTAN	1984 1985 1988	40th 41st 44th
58. PARAGUAY	1978-1990 1998	34th-46th 54th
59. PERU	1998	54th
60. PHILIPPINES	1984-1986	40th-42nd
61. PORTUGAL	1974-1975	30th-31st
62. RWANDA	1993-1995	49th-51st
63. SAUDI ARABIA	1995-1998 1999	51st-54th 55th
64. SIERRA LEONE	1996-1999	52nd-55th
65. SLOVENIA	1995, 1996	51st, 52nd
66. SOMALIA	1989-1994	45th-50th
67. SUDAN	1991-1993	47th-49th
68. SYRIAN ARAB REPUBLIC	1989, 1992 1997	45th, 48th 53rd
69. THAILAND	1995, 1996	51st, 52nd
70. TOGO	2001, 2002	57th, 58th
71. TURKEY	1983-1986	39th-42nd
72. UGANDA	1975-1981 1995 2000-2001	31st-37th 51st 56th-57th
73. UNITED ARAB EMIRATES	2000	56th
74. UNITED KINGDOM	1974-1975	30th-31st
75. United Rep.of TANZANIA	1974-1975 1997	30th-31st 53rd
76. U.S.A.	1997	53rd
77. URUGUAY	1978-1985	34th-41st
78. UZBEKISTAN	1996-1997 2003-2005	52nd-53rd 59th-61st
79. VENEZUELA	1982	38th
80. VIET NAM	1994 2000	50th 56th
81. ZAIRE	1985-1989 1991-1993	41st-45th 47th-49th
82. YEMEN	1998 1999	54th 55th

	2000	56th
83. ZIMBABWE	2000	56th
84. ZAMBIA	2002	58th



(13)

**PAÍSES QUE HAN CURSADO INVITACIÓN PERMANENTE A LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES (el 31 de agosto de 2011)**

<b>País</b>	<b>Fecha en que se formuló la invitación</b>
<b>Albania</b>	2 December 2009
<b>Argentina</b>	3 December 2002
<b>Australia</b>	7 August 2008
<b>Austria</b>	
<b>Andorra</b>	3 November 2010
<b>Armenia</b>	April 2006
<b>Belgium</b>	March 2001
<b>Bolivia</b>	10 February 2010
<b>Bosnia and Herzegovina</b>	7 May 2010
<b>Brazil</b>	
<b>Bulgaria</b>	March 2001
<b>Canada</b>	April 1999
<b>Chile</b>	12 May 2009
<b>Colombia</b>	17 March 2003
<b>Costa Rica</b>	
<b>Croatia</b>	13 March 2003
<b>Cyprus</b>	March 2001
<b>Czech Republic</b>	September 2000
<b>Denmark</b>	March 2001
<b>Ecuador</b>	9 January 2003
<b>El Salvador</b>	9 February 2010
<b>Estonia</b>	March 2001
<b>Finland</b>	April 2001
<b>France</b>	26 March 2002
<b>Georgia</b>	30 March 2010
<b>Germany</b>	
<b>Ghana</b>	21 April 2006
<b>Greece</b>	2001
<b>Guatemala</b>	April 2001
<b>Guinea-Bissau</b>	7 May 2010
<b>Honduras</b>	12 May 2010
<b>Hungary</b>	March 2001

<b>Iceland</b>	September 2000
<b>Iraq</b>	16 February 2010
<b>Ireland</b>	
<b>Islamic Republic of Iran</b>	
<b>Italy</b>	
<b>Latvia</b>	March 2001
<b>Japan</b>	1 March 2011
<b>Jordan</b>	20 April 2006
<b>Kazakhstan</b>	28 July 2009
<b>Kuwait</b>	12 May 2010
<b>Lebanon</b>	17 March 2011
<b>Liechtenstein</b>	21 January 2003
<b>Lithuania</b>	March 2001
<b>Luxembourg</b>	
<b>Madagascar</b>	26 August 2011
<b>Maldives</b>	2 May 2006
<b>Malta</b>	March 2001
<b>Marshall Islands</b>	4 March 2011
<b>Mexico</b>	March 2001
<b>Moldova (Republic of)</b>	2 June 2010
<b>Monaco</b>	22 October 2008
<b>Mongolia</b>	9 April 2004
<b>Montenegro</b>	11 October 2005
<b>Nauru</b>	30 May 2011
<b>Netherlands</b>	April 2001
<b>New Zealand</b>	3 February 2004
<b>Nicaragua</b>	26 April 2006
<b>Norway</b>	26 March 1999
<b>Palau</b>	3 May 2011
<b>Panama</b>	14 March 2011
<b>Papua New Guinea</b>	11 May 2011
<b>Paraguay</b>	28 March 2003
<b>Peru</b>	
<b>Poland</b>	March 2001
<b>Portugal</b>	
<b>Qatar</b>	1 June 2010
<b>Republic of Korea</b>	3 March 2008

<b>Romania</b>	March 2001
<b>Rwanda</b>	27 June 2011
<b>San Marino</b>	3 April 2003
<b>Serbia</b>	11 October 2005
<b>Sierra Leone</b>	7 April 2003
<b>Slovakia</b>	March 2001
<b>Slovenia</b>	2002
<b>South Africa</b>	17 July 2003
<b>Spain</b>	
<b>Sweden</b>	
<b>Switzerland</b>	April 2002
<b>The former Yugoslav Republic of Macedonia</b>	13 October 2004
<b>Turkey</b>	March 2001
<b>Tunisia</b>	28 February 2011
<b>Ukraine</b>	23 June 2006
<b>United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland</b>	March 2001
<b>Uruguay</b>	18 March 2005
<b>Vanuatu</b>	12 May 2009
<b>Zambia</b>	16 July 2008

(14)

## **ESTATUTO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA**

### **Artículo 1**

LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA establecida por la Carta de las Naciones Unidas, como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, quedará constituida y funcionará conforme a las disposiciones del presente Estatuto.

## **CAPITULO I ORGANIZACION DE LA CORTE**

### **Artículo 2**

La Corte será un cuerpo de magistrados independientes elegidos, sin tener en cuenta su nacionalidad, de entre personas que gocen de alta consideración moral y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países, o que sean jurisconsultos de reconocida competencia en materia de derecho internacional.

### **Artículo 3**

1. La Corte se compondrá de quince miembros, de los cuales no podrá haber dos que sean nacionales del mismo Estado.
2. Toda persona que para ser elegida miembro de la Corte pudiera ser tenida por nacional de más de un Estado, será considerada nacional del Estado donde ejerza ordinariamente sus derechos civiles y políticos.

### **Artículo 4**

1. Los miembros de la Corte serán elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de una nómina de candidatos propuestos por los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje, de conformidad con las disposiciones siguientes.
2. En el caso de los Miembros de las Naciones Unidas que no estén representados en la Corte Permanente de Arbitraje, los candidatos serán propuestos por grupos nacionales que designen a este efecto sus respectivos gobiernos, en condiciones iguales a las estipuladas para los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje por el Artículo 44 de la Convención de La Haya de 1907, sobre arreglo pacífico de las controversias internacionales.
3. A falta de acuerdo especial, la Asamblea General fijará, previa recomendación del Consejo de Seguridad, las condiciones en que pueda participar en la elección de los miembros de la Corte, un Estado que sea parte en el presente Estatuto sin ser Miembro de las Naciones Unidas.

### **Artículo 5**

1. Por lo menos tres meses antes de la fecha de la elección, el Secretario General de las Naciones Unidas invitará por escrito a los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje pertenecientes a los Estados partes en este Estatuto y a los miembros de los grupos nacionales designados según el párrafo 2 del Artículo 4 a que, dentro de un plazo determinado y por grupos nacionales, propongan como candidatos a personas que estén en condiciones de desempeñar las funciones de miembros de la Corte.

2. Ningún grupo podrá proponer más de cuatro candidatos, de los cuales no más de dos serán de su misma nacionalidad. El número de candidatos propuestos por un grupo no será, en ningún caso, mayor que el doble del número de plazas por llenar.

### **Artículo 6**

Antes de proponer estos candidatos, se recomienda a cada grupo nacional que consulte con su mas alto tribunal de justicia, sus facultades y escuelas de derecho, sus academias nacionales y las secciones nacionales de academias internacionales dedicadas al estudio del derecho.

### **Artículo 7**

1. El Secretario General de las Naciones Unidas preparará una lista por orden alfabético de todas las personas así designadas. Salvo lo que se dispone en el párrafo 2 del Artículo 12, únicamente esas personas serán elegibles.
2. El Secretario General presentará esta lista a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad.

### **Artículo 8**

La Asamblea General y el Consejo de Seguridad procederán independientemente a la elección de los miembros de la Corte.

### **Artículo 9**

En toda elección, los electores tendrán en cuenta no sólo que las personas que hayan de elegirse reúnan individualmente las condiciones requeridas, sino también que en el conjunto estén representadas las grandes civilizaciones y los principales sistemas jurídicos del mundo.

### **Artículo 10**

1. Se considerarán electos los candidatos que obtengan una mayoría absoluta de votos en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad.
2. En las votaciones del Consejo de Seguridad, sean para elegir magistrados o para designar los miembros de la comisión prevista en el Artículo 12, no habrá distinción alguna entre miembros permanentes y miembros no permanentes del Consejo de Seguridad.
3. En el caso de que más de un nacional del mismo Estado obtenga una mayoría absoluta de votos tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad, se considerará electo el de mayor edad.

### **Artículo 11**

Si después de la primera sesión celebrada para las elecciones quedan todavía una o más plazas por llenar, se celebrará una segunda sesión y, si necesario fuere, una tercera.

### **Artículo 12**

1. Si después de la tercera sesión para elecciones quedan todavía una o más plazas por llenar, se podrá constituir en cualquier momento, a petición de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad, una comisión conjunta compuesta de seis miembros, tres nombrados por la Asamblea General y tres por el Consejo de Seguridad, con el objeto de escoger, por mayoría absoluta de votos, un nombre para

cada plaza aún vacante, a fin de someterlo a la aprobación respectiva de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.

2. Si la comisión conjunta acordare unánimemente proponer a una persona que satisfaga las condiciones requeridas, podrá incluirla en su lista, aunque esa persona no figure en la lista de candidatos a que se refiere el Artículo 7.

3. Si la comisión conjunta llegare a la conclusión de que no logrará asegurar la elección, los miembros de la Corte ya electos llenarán las plazas vacantes dentro del término que fije el Consejo de Seguridad, escogiendo a candidatos que hayan recibido votos en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad.

4. En caso de empate en la votación, el magistrado de mayor edad decidirá con su voto.

### **Artículo 13**

1. Los miembros de la Corte desempeñarán sus cargos por nueve años, y podrán ser reelectos. Sin embargo, el periodo de cinco de los magistrados electos en la primera elección expirará a los tres años, y el periodo de otros cinco magistrados expirará a los seis años.

2. Los magistrados cuyos periodos hayan de expirar al cumplirse los mencionados periodos iniciales de tres y de seis años, serán designados mediante sorteo que efectuará el Secretario General de las Naciones Unidas inmediatamente después de terminada la primera elección.

3. Los miembros de la Corte continuarán desempeñando las funciones de sus cargos hasta que tomen posesión sus sucesores. Después de reemplazados, continuarán conociendo de los casos que hubieren iniciado, hasta su terminación.

4. Si renunciare un miembro de la Corte, dirigirá la renuncia al Presidente de la Corte, quien la transmitirá al Secretario General de las Naciones Unidas. Esta última notificación determinará la vacante del cargo.

### **Artículo 14**

Las vacantes se llenarán por el mismo procedimiento seguido en la primera elección, con arreglo a la disposición siguiente: dentro de un mes de ocurrida la vacante, el Secretario General de las Naciones Unidas extenderá las invitaciones que dispone el Artículo 5, y el Consejo de Seguridad fijará la fecha de la elección.

### **Artículo 15**

Todo miembro de la Corte electo para reemplazar a otro que no hubiere terminado su periodo desempeñará el cargo por el resto del periodo de su predecesor.

### **Artículo 16**

1. Ningún miembro de la Corte podrá ejercer función política o administrativa alguna, ni dedicarse a ninguna otra ocupación de carácter profesional.

2. En caso de duda, la Corte decidirá.

### **Artículo 17**

1. Los miembros de la Corte no podrán ejercer funciones de agente, consejero o abogado en ningún asunto.

2. No podrán tampoco participar en la decisión de ningún asunto en que hayan intervenido anteriormente como agentes, consejeros o abogados de cualquiera de las partes, o como miembros de un tribunal nacional o internacional o de una comisión investigadora, o en cualquier otra calidad.

3. En caso de duda, la Corte decidirá.

### **Artículo 18**

1. No será separado del cargo ningún miembro de la Corte a menos que, a juicio unánime de los demás miembros, haya dejado de satisfacer las condiciones requeridas.
2. El Secretario de la Corte comunicará oficialmente lo anterior al Secretario General de las Naciones Unidas.
3. Esta comunicación determinará la vacante del cargo.

### **Artículo 19**

En el ejercicio de las funciones del cargo, los miembros de la Corte gozarán de privilegios e inmunidades diplomáticos.

### **Artículo 20**

Antes de asumir las obligaciones del cargo, cada miembro de la Corte declarará solemnemente, en sesión pública, que ejercerá sus atribuciones con toda imparcialidad y conciencia.

### **Artículo 21**

1. La Corte elegirá por tres años a su Presidente y Vicepresidente; éstos podrán ser reelectos.
2. La Corte nombrará su Secretario y podrá disponer el nombramiento de los demás funcionarios que fueren menester.

### **Artículo 22**

1. La sede de la Corte será La Haya. La Corte podrá, sin embargo, reunirse y funcionar en cualquier otro lugar cuando lo considere conveniente.
2. El Presidente y el Secretario residirán en la sede de la Corte.

### **Artículo 23**

1. La Corte funcionará permanentemente, excepto durante las vacaciones judiciales, cuyas fechas y duración fijará la misma Corte.
2. Los miembros de la Corte tienen derecho a usar de licencias periódicas, cuyas fechas y duración fijará la misma Corte, teniendo en cuenta la distancia de La Haya al domicilio de cada magistrado.
3. Los miembros de la Corte tienen la obligación de estar en todo momento a disposición de la misma, salvo que estén en uso de licencia o impedidos de asistir por enfermedad o por razones graves debidamente explicadas al Presidente.

### **Artículo 24**

1. Si por alguna razón especial uno de los miembros de la Corte considerare que no debe participar en la decisión de determinado asunto, lo hará saber así al Presidente.
2. Si el Presidente considerare que uno de los miembros de la Corte no debe conocer de determinado asunto por alguna razón especial, así se lo hará saber.
3. Si en uno de estos casos el miembro de la Corte y el Presidente estuvieren en desacuerdo, la cuestión será resuelta por la Corte.

### **Artículo 25**

1. Salvo lo que expresamente disponga en contrario este Estatuto, la Corte ejercerá sus funciones en sesión plenaria.
2. El Reglamento de la Corte podrá disponer que, según las circunstancias y por turno, se permita a uno o más magistrados no asistir a las sesiones, a condición de que no se reduzca a menos de once el número de magistrados disponibles para constituir la Corte.
3. Bastará un quórum de nueve magistrados para constituir la Corte.

#### **Artículo 26**

1. Cada vez que sea necesario, la Corte podrá constituir una o más Salas compuestas de tres o más magistrados, según lo disponga la propia Corte, para conocer de determinadas categorías de negocios, como los litigios de trabajo y los relativos al tránsito y las comunicaciones.
2. La Corte podrá constituir en cualquier tiempo una Sala para conocer de un negocio determinado. La Corte fijará, con la aprobación de las partes, el número de magistrados de que se compondrá dicha Sala.
3. Si las partes lo solicitaren, las Salas de que trate este Artículo oirán y fallarán los casos.

#### **Artículo 27**

Se considerará dictada por la Corte la sentencia que dicte cualquiera de las Salas de que tratan los Artículos 26 y 29.

#### **Artículo 28**

La Salas de que tratan los Artículos 26 y 29 podrán reunirse y funcionar, con el consentimiento de las partes, en cualquier lugar que no sea La Haya.

#### **Artículo 29**

Con el fin de facilitar el pronto despacho de los asuntos, la Corte constituirá anualmente una Sala de cinco magistrados que, a petición de las partes, podrá oír y fallar casos sumariamente. Se designarán además dos magistrados para reemplazar a los que no pudieren actuar.

#### **Artículo 30**

1. La Corte formulará un reglamento mediante el cual determinará la manera de ejercer sus funciones. Establecerá, en particular, sus reglas de procedimiento.
2. El Reglamento de la Corte podrá disponer que haya asesores con asiento en la Corte o en cualquiera de sus Salas, pero sin derecho a voto.

#### **Artículo 31**

1. Los magistrados de la misma nacionalidad de cada una de las partes litigantes conservarán su derecho a participar en la vista del negocio de que conoce la Corte.
2. Si la Corte incluyere entre los magistrados del conocimiento uno de la nacionalidad de una de las partes, cualquier otra parte podrá designar a una persona de su elección para que tome asiento en calidad de magistrado. Esa persona deberá escogerse preferiblemente de entre las que hayan sido propuestas como candidatos de acuerdo con los Artículos 4 y 5.



3. Si la Corte no incluyere entre los magistrados del conocimiento ningún magistrado de la nacionalidad de las partes, cada una de éstas podrá designar uno de acuerdo con el párrafo 2 de este Artículo.

4. Las disposiciones de este Artículo se aplicarán a los casos de que tratan los Artículos 26 y 29. En tales casos, el Presidente pedirá a uno de los miembros de la Corte que constituyen la Sala, o a dos de ellos, si fuere necesario, que cedan sus puestos a los miembros de la Corte que sean de la nacionalidad de las partes interesadas, y si no los hubiere, o si estuvieren impedidos, a los magistrados especialmente designados por las partes.

5. Si varias partes tuvieran un mismo interés, se contarán como una sola parte para los fines de las disposiciones precedentes. En caso de duda, la Corte decidirá.

6. Los magistrados designados según se dispone en los párrafos 2, 3 y 4 del presente Artículo, deberán tener las condiciones requeridas por los Artículos 2, 17 (párrafo 2), 20 y 24 del presente Estatuto, y participarán en las decisiones de la Corte en términos de absoluta igualdad con sus colegas.

### **Artículo 32**

1. Cada miembro de la Corte percibirá un sueldo anual.

2. El Presidente percibirá un estipendio anual especial.

3. El Vicepresidente percibirá un estipendio especial por cada día que desempeñe las funciones de Presidente.

4. Los magistrados designados de acuerdo con el artículo 31, que no sean miembros de la Corte, percibirán remuneración por cada día que desempeñen las funciones del cargo.

5. Los sueldos, estipendios y remuneraciones serán fijados por la Asamblea General, y no podrán ser disminuidos durante el periodo del cargo.

6. El sueldo del Secretario será fijado por la Asamblea General a propuesta de la Corte.

7. La Asamblea General fijará por reglamento las condiciones para conceder pensiones de retiro a los miembros de la Corte y al Secretario, como también las que rijan el reembolso de gastos de viaje a los miembros de la Corte y al Secretario.

8. Los sueldos, estipendios y remuneraciones arriba mencionados estarán exentos de toda clase de impuestos.

### **Artículo 33**

Los gastos de la Corte serán sufragados por las Naciones Unidas de la manera que determine la Asamblea General.

## **CAPITULO II**

## **COMPETENCIA DE LA CORTE**

### **Artículo 34**

1. Sólo los Estados podrán ser partes en casos ante la Corte.

2. Sujeta a su propio Reglamento y de conformidad con el mismo, la Corte podrá solicitar de organizaciones internacionales públicas información relativa a casos que se litiguen ante la Corte, y recibirá la información que dichas organizaciones envíen a iniciativa propia.

3. Cuando en un caso que se litigue ante la Corte se discuta la interpretación del instrumento constitutivo de una organización internacional pública, o de una

convención internacional concertada en virtud del mismo, el Secretario lo comunicará a la respectiva organización internacional pública y le enviará copias de todo el expediente.

### **Artículo 35**

1. La Corte estará abierta a los Estados partes en este Estatuto.
2. Las condiciones bajo las cuales la Corte estará abierta a otros Estados serán fijadas por el Consejo de Seguridad con sujeción a las disposiciones especiales de los tratados vigentes, pero tales condiciones no podrán en manera alguna colocar a las partes en situación de desigualdad ante la Corte.
3. Cuando un Estado que no es Miembro de las Naciones Unidas sea parte en un negocio, la Corte fijará la cantidad con que dicha parte debe contribuir a los gastos de la Corte. Esta disposición no es aplicable cuando dicho Estado contribuye a los gastos de la Corte.

### **Artículo 36**

1. La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes.
2. Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como obligatoria *ipso facto* y sin convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen sobre:
  - a. la interpretación de un tratado;
  - b. cualquier cuestión de derecho internacional;
  - c. la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación de una obligación internacional;
  - d. la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el quebrantamiento de una obligación internacional.
3. La declaración a que se refiere este Artículo podrá hacerse incondicionalmente o bajo condición de reciprocidad por parte de varios o determinados Estados, o por determinado tiempo.
4. Estas declaraciones serán remitidas para su depósito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias de ellas a las partes en este Estatuto y al Secretario de la Corte.
5. Las declaraciones hechas de acuerdo con el Artículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional que estén aún vigentes, serán consideradas, respecto de las partes en el presente Estatuto, como aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia por el periodo que aún les quede de vigencia y conforme a los términos de dichas declaraciones.
6. En caso de disputa en cuanto a si la Corte tiene o no jurisdicción, la Corte decidirá.

### **Artículo 37**

Cuando un tratado o convención vigente disponga que un asunto sea sometido a una jurisdicción que debía instituir la Sociedad de las Naciones, o a la Corte Permanente de Justicia Internacional, dicho asunto, por lo que respecta a las partes en este Estatuto, será sometido a la Corte Internacional de Justicia.

### **Artículo 38**

1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:
  - a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;
  - b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;
  - c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;
  - d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.
2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio *ex aequo et bono*, si las partes así lo convinieren.

### **CAPITULO III**

#### **PROCEDIMIENTO**

##### **Artículo 39**

1. Los idiomas oficiales de la Corte serán el francés y el inglés. Si las partes acordaren que el procedimiento se siga en francés, la sentencia se pronunciará en este idioma. Si acordaren que el procedimiento se siga en inglés, en este idioma se pronunciará la sentencia.
2. A falta de acuerdo respecto del idioma que ha de usarse, cada parte podrá presentar sus alegatos en el que prefiera, y la Corte dictará la sentencia en francés y en inglés. En tal caso, la Corte determinará al mismo tiempo cuál de los dos textos hará fe.
3. Si lo solicitare una de las partes, la Corte la autorizará para usar cualquier idioma que no sea ni el francés ni el inglés.

##### **Artículo 40**

1. Los negocios serán incoados ante la Corte, según el caso, mediante notificación del compromiso o mediante solicitud escrita dirigida al Secretario. En ambos casos se indicarán el objeto de la controversia y las partes.
2. El Secretario comunicará inmediatamente la solicitud a todos los interesados.
3. El Secretario notificará también a los Miembros de las Naciones Unidas por conducto del Secretario General, así como a los otros Estados con derecho a comparecer ante la Corte.

##### **Artículo 41**

1. La Corte tendrá facultad para indicar, si considera que las circunstancias así lo exigen, las medidas provisionales que deban tomarse para resguardar los derechos de cada una de las partes.
2. Mientras se pronuncia el fallo, se notificarán inmediatamente a las partes y al Consejo de Seguridad las medidas indicadas.

##### **Artículo 42**

1. Las partes estarán representadas por agentes.
2. Podrán tener ante la Corte consejeros o abogados.
3. Los agentes, los consejeros y los abogados de las partes ante la Corte gozarán de los privilegios e inmunidades necesarios para el libre desempeño de sus funciones.

### **Artículo 43**

1. El procedimiento tendrá dos fases: una escrita y otra oral.
2. El procedimiento escrito comprenderá la comunicación, a la Corte y a las partes, de memorias, contramemorias y, si necesario fuere, de réplicas, así como de toda pieza o documento en apoyo de las mismas.
3. La comunicación se hará por conducto del Secretario, en el orden y dentro de los términos fijados por la Corte.
4. Todo documento presentado por una de las partes será comunicado a la otra mediante copia certificada.
5. El procedimiento oral consistirá en la audiencia que la Corte otorgue, a testigos, peritos, agentes, consejeros y abogados.

### **Artículo 44**

1. Para toda modificación que deba hacerse a personas que no sean los agentes, consejeros o abogados, la Corte se dirigirá directamente al gobierno del Estado en cuyo territorio deba diligenciarse.
2. Se seguirá el mismo procedimiento cuando se trate de obtener pruebas en el lugar de los hechos.

### **Artículo 45**

El Presidente dirigirá las vistas de la Corte y, en su ausencia, el Vicepresidente; y si ninguno de ellos pudiere hacerlo, presidirá el más antiguo de los magistrados presentes.

### **Artículo 46**

Las vistas de la Corte serán públicas, salvo lo que disponga la propia Corte en contrario, o que las partes pidan que no se admita al público.

### **Artículo 47**

1. De cada vista se levantará un acta, que firmarán el Secretario y el Presidente.
2. Esta acta será la única auténtica.

### **Artículo 48**

La Corte dictará las providencias necesarias para el curso del proceso, decidirá la forma y términos a que cada parte debe ajustar sus alegatos, y adoptará las medidas necesarias para la práctica de pruebas.

### **Artículo 49**

Aun antes de empezar una vista, la Corte puede pedir a los agentes que produzcan cualquier documento o den cualesquiera explicaciones. Si se negaren a hacerlo, se dejará constancia formal del hecho.

### **Artículo 50**

La Corte podrá, en cualquier momento, comisionar a cualquier individuo, entidad, negociado, comisión u otro organismo que ella escoja, para que haga una investigación o emita un dictamen pericial.

#### **Artículo 51**

Las preguntas pertinentes que se hagan a testigos y peritos en el curso de una vista, estarán sujetas a las condiciones que fije la Corte en las reglas de procedimiento de que trata el Artículo 30.

#### **Artículo 52**

Una vez recibidas las pruebas dentro del término fijado, la Corte podrá negarse a aceptar toda prueba adicional, oral o escrita, que una de las partes desee presentar, salvo que la otra de su consentimiento.

#### **Artículo 53**

1. Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor.
2. Antes de dictar su decisión, la Corte deberá asegurarse no sólo de que tiene competencia conforme a las disposiciones de los Artículos 36 y 37, sino también de que la demanda está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho.

#### **Artículo 54**

1. Cuando los agentes, consejeros y abogados, conforme a lo proveído por la Corte, hayan completado la presentación de su caso, el Presidente declarará terminada la vista.
2. La Corte se retirará a deliberar.
3. Las deliberaciones de la Corte se celebrarán en privado y permanecerán secretas.

#### **Artículo 55**

1. Todas las decisiones de la Corte se tomarán por mayoría de votos de los magistrados presentes.
2. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente o del magistrado que lo reemplace.

#### **Artículo 56**

1. El fallo será motivado.
2. El fallo mencionará los nombres de los magistrados que hayan tomado parte en él.

#### **Artículo 57**

Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los magistrados, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente.

#### **Artículo 58**

El fallo será firmado por el Presidente y el Secretario, y será leído en sesión pública después de notificarse debidamente a los agentes.

#### **Artículo 59**

La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido.

### **Artículo 60**

El fallo será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o el alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes.

### **Artículo 61**

1. Sólo podrá pedirse la revisión de un fallo cuando la solicitud se funde en el descubrimiento de un hecho de tal naturaleza que pueda ser factor decisivo y que, al pronunciarse el fallo, fuera desconocido de la Corte y de la parte que pida la revisión, siempre que su desconocimiento no se deba a negligencia.
2. La Corte abrirá el proceso de revisión mediante una resolución en que se haga constar expresamente la existencia del hecho nuevo, en que se reconozca que éste por su naturaleza justifica la revisión, y en que se declare que hay lugar a la solicitud.
3. Antes de iniciar el proceso de revisión la Corte podrá exigir que se cumpla lo dispuesto por el fallo.
4. La solicitud de revisión deberá formularse dentro del término de seis meses después de descubierto el hecho nuevo.
5. No podrá pedirse la revisión una vez transcurrido el término de diez años desde la fecha del fallo.

### **Artículo 62**

1. Si un Estado considerare que tiene un interés de orden jurídico que puede ser afectado por la decisión del litigio, podrá pedir a la Corte que le permita intervenir.
2. La Corte decidirá con respecto a dicha petición.

### **Artículo 63**

1. Cuando se trate de la interpretación de una convención en la cual sean partes otros Estados además de las partes en litigio, el Secretario notificará inmediatamente a todos los Estados interesados.
2. Todo Estado así notificado tendrá derecho a intervenir en el proceso; pero si ejerce ese derecho, la interpretación contenida en el fallo será igualmente obligatoria para él.

### **Artículo 64**

Salvo que la Corte determine otra cosa, cada parte sufragará sus propias costas.

## **CAPITULO IV OPINIONES CONSULTIVAS**

### **Artículo 65**

1. La Corte podrá emitir opiniones consultivas respecto de cualquier cuestión jurídica, a solicitud de cualquier organismo autorizado para ello por la Carta de las Naciones Unidas, o de acuerdo con las disposiciones de la misma.
2. Las cuestiones sobre las cuales se solicite opinión consultiva serán expuestas a la Corte mediante solicitud escrita, en que se formule en términos precisos la cuestión respecto de la cual se haga la consulta. Con dicha solicitud se acompañarán todos los documentos que puedan arrojar luz sobre la cuestión.

### **Artículo 66**

1. Tan pronto como se reciba una solicitud de opinión consultiva, el Secretario la notificará a todos los Estados que tengan derecho a comparecer ante la Corte.
2. El Secretario notificará también, mediante comunicación especial y directa a todo Estado con derecho a comparecer ante la Corte, y a toda organización internacional que a juicio de la Corte, o de su Presidente si la Corte no estuviere reunida, puedan suministrar alguna información sobre la cuestión, que la Corte estará lista para recibir exposiciones escritas dentro del término que fijará el Presidente, o para oír en audiencia pública que se celebrará al efecto, exposiciones orales relativas a dicha cuestión.
3. Cualquier Estado con derecho a comparecer ante la Corte que no haya recibido la comunicación especial mencionada en el párrafo 2 de este Artículo, podrá expresar su deseo de presentar una exposición escrita o de ser oído y la Corte decidirá.
4. Se permitirá a los Estados y a las organizaciones que hayan presentado exposiciones escritas u orales, o de ambas clases, discutir las exposiciones presentadas por otros Estados u organizaciones en la forma, en la extensión y dentro del término que en cada caso fije la Corte, o su Presidente si la Corte no estuviere reunida. Con tal fin, el Secretario comunicará oportunamente tales exposiciones escritas a los Estados y organizaciones que hayan presentado las suyas.

#### **Artículo 67**

La Corte pronunciará sus opiniones consultivas en audiencia pública, previa notificación al Secretario General de las Naciones Unidas y a los representantes de los Miembros de las Naciones Unidas, de los otros Estados y de las organizaciones internacionales directamente interesados.

#### **Artículo 68**

En el ejercicio de sus funciones consultivas, la Corte se guiará además por las disposiciones de este Estatuto que rijan en materia contenciosa, en la medida en que la propia Corte las considere aplicables.

### **CAPITULO V REFORMAS**

#### **Artículo 69**

Las reformas al presente Estatuto se efectuarán mediante el mismo procedimiento que establece la Carta de las Naciones Unidas para la reforma de dicha Carta, con sujeción a las disposiciones que la Asamblea General adopte, previa recomendación del Consejo de Seguridad, con respecto a la participación de Estados que sean partes en el Estatuto, pero no Miembros de las Naciones Unidas.

#### **Artículo 70**

La Corte estará facultada para proponer las reformas que juzgue necesarias al presente Estatuto, comunicándolas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas a fin de que sean consideradas de conformidad con las disposiciones del Artículo 69.

(15)

## **PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS**

STATUS AS AT : 24-09-2011 07:14:07 EDT

### **CHAPTER IV HUMAN RIGHTS**

#### **4 . International Covenant on Civil and Political Rights**

New York, 16 December 1966

**Entry into force** : 23 March 1976, in accordance with article 49, for all provisions except those of article 41; 28 March 1979 for the provisions of article 41 (Human Rights Committee), in accordance with paragraph 2 of the said article 41

**Registration** : 23 March 1976, No. 14668

**Status** : Signatories : 74. Parties : 167

**Text** : United Nations, *Treaty Series*, vol. 999, p. 171 and vol. 1057, p. 407 (procès-verbal of rectification of the authentic Spanish text); depositary notification C.N.782.2001.TREATIES-6 of 5 October 2001 [Proposal of correction to the original of the Covenant (Chinese authentic text)] and C.N.8.2002.TREATIES-1 of 3 January 2002 [Rectification of the original of the Covenant (Chinese authentic text)].

**Note** : The Covenant was opened for signature at New York on 19 December 1966.

Participant	Signature	Accession(a), Succession(d), Ratification
Afghanistan		24 Jan 1983 a
Albania		4 Oct 1991 a
Algeria	10 Dec 1968	12 Sep 1989
Andorra	5 Aug 2002	22 Sep 2006
Angola		10 Jan 1992 a
Argentina	19 Feb 1968	8 Aug 1986
Armenia		23 Jun 1993 a
Australia	18 Dec 1972	13 Aug 1980
Austria	10 Dec 1973	10 Sep 1978
Azerbaijan		13 Aug 1992 a



Bahamas	4 Dec 2008	23 Dec 2008
Bahrain		20 Sep 2006 a
Bangladesh		6 Sep 2000 a
Barbados		5 Jan 1973 a
Belarus	19 Mar 1968	12 Nov 1973
Belgium	10 Dec 1968	21 Apr 1983
Belize		10 Jun 1996 a
Benin		12 Mar 1992 a
Bolivia		12 Aug 1982 a
Bosnia and Herzegovina <sup>1</sup>		1 Sep 1993 d
Botswana	8 Sep 2000	8 Sep 2000
Brazil		24 Jan 1992 a
Bulgaria	8 Oct 1968	21 Sep 1970
Burkina Faso		4 Jan 1999 a
Burundi		9 May 1990 a
Cambodia <sup>2, 3</sup>	17 Oct 1980	26 May 1992 a
Cameroon		27 Jun 1984 a
Canada		19 May 1976 a
Cape Verde		6 Aug 1993 a
Central African Republic		8 May 1981 a
Chad		9 Jun 1995 a
Chile	16 Sep 1969	10 Feb 1972
China <sup>4, 5, 6</sup>	5 Oct 1998	
Colombia	21 Dec 1966	29 Oct 1969
Comoros	25 Sep 2008	
Congo		5 Oct 1983 a
Costa Rica	19 Dec 1966	29 Nov 1968
Côte d'Ivoire		26 Mar 1992 a
Croatia <sup>1</sup>		12 Oct 1992 d
Cuba	28 Feb 2008	
Cyprus	19 Dec 1966	2 Apr 1969
Czech Republic <sup>7</sup>		22 Feb 1993 d
Democratic People's Republic of Korea <sup>8</sup>		14 Sep 1981 a
Democratic Republic of the Congo		1 Nov 1976 a
Denmark	20 Mar 1968	6 Jan 1972
Djibouti		5 Nov 2002 a
Dominica		17 Jun 1993 a

Dominican Republic		4 Jan 1978 a
Ecuador	4 Apr 1968	6 Mar 1969
Egypt	4 Aug 1967	14 Jan 1982
El Salvador	21 Sep 1967	30 Nov 1979
Equatorial Guinea		25 Sep 1987 a
Eritrea		22 Jan 2002 a
Estonia		21 Oct 1991 a
Ethiopia		11 Jun 1993 a
Finland	11 Oct 1967	19 Aug 1975
France		4 Nov 1980 a
Gabon		21 Jan 1983 a
Gambia		22 Mar 1979 a
Georgia		3 May 1994 a
Germany <sup>9, 10</sup>	9 Oct 1968	17 Dec 1973
Ghana	7 Sep 2000	7 Sep 2000
Greece		5 May 1997 a
Grenada		6 Sep 1991 a
Guatemala		5 May 1992 a
Guinea	28 Feb 1967	24 Jan 1978
Guinea-Bissau	12 Sep 2000	1 Nov 2010
Guyana	22 Aug 1968	15 Feb 1977
Haiti		6 Feb 1991 a
Honduras	19 Dec 1966	25 Aug 1997
Hungary	25 Mar 1969	17 Jan 1974
Iceland	30 Dec 1968	22 Aug 1979
India		10 Apr 1979 a
Indonesia		23 Feb 2006 a
Iran (Islamic Republic of)	4 Apr 1968	24 Jun 1975
Iraq	18 Feb 1969	25 Jan 1971
Ireland	1 Oct 1973	8 Dec 1989
Israel	19 Dec 1966	3 Oct 1991
Italy	18 Jan 1967	15 Sep 1978
Jamaica	19 Dec 1966	3 Oct 1975
Japan	30 May 1978	21 Jun 1979
Jordan	30 Jun 1972	28 May 1975
Kazakhstan	2 Dec 2003	24 Jan 2006
Kenya		1 May 1972 a
Kuwait		21 May 1996 a

Kyrgyzstan		7 Oct 1994 a
Lao People's Democratic Republic	7 Dec 2000	25 Sep 2009
Latvia		14 Apr 1992 a
Lebanon		3 Nov 1972 a
Lesotho		9 Sep 1992 a
Liberia	18 Apr 1967	22 Sep 2004
Libyan Arab Jamahiriya		15 May 1970 a
Liechtenstein		10 Dec 1998 a
Lithuania		20 Nov 1991 a
Luxembourg	26 Nov 1974	18 Aug 1983
Madagascar	17 Sep 1969	21 Jun 1971
Malawi		22 Dec 1993 a
Maldives		19 Sep 2006 a
Mali		16 Jul 1974 a
Malta		13 Sep 1990 a
Mauritania		17 Nov 2004 a
Mauritius		12 Dec 1973 a
Mexico		23 Mar 1981 a
Monaco	26 Jun 1997	28 Aug 1997
Mongolia	5 Jun 1968	18 Nov 1974
Montenegro <sup>11</sup>		23 Oct 2006 d
Morocco	19 Jan 1977	3 May 1979
Mozambique		21 Jul 1993 a
Namibia		28 Nov 1994 a
Nauru	12 Nov 2001	
Nepal		14 May 1991 a
Netherlands	25 Jun 1969	11 Dec 1978
New Zealand <sup>12</sup>	12 Nov 1968	28 Dec 1978
Nicaragua		12 Mar 1980 a
Niger		7 Mar 1986 a
Nigeria		29 Jul 1993 a
Norway	20 Mar 1968	13 Sep 1972
Pakistan	17 Apr 2008	23 Jun 2010
Palau	20 Sep 2011	
Panama	27 Jul 1976	8 Mar 1977
Papua New Guinea		21 Jul 2008 a
Paraguay		10 Jun 1992 a
Peru	11 Aug 1977	28 Apr 1978

Philippines	19 Dec 1966	23 Oct 1986
Poland	2 Mar 1967	18 Mar 1977
Portugal <sup>4</sup>	7 Oct 1976	15 Jun 1978
Republic of Korea		10 Apr 1990 a
Republic of Moldova		26 Jan 1993 a
Romania	27 Jun 1968	9 Dec 1974
Russian Federation	18 Mar 1968	16 Oct 1973
Rwanda		16 Apr 1975 a
Samoa		15 Feb 2008 a
San Marino		18 Oct 1985 a
Sao Tome and Principe	31 Oct 1995	
Senegal	6 Jul 1970	13 Feb 1978
Serbia <sup>1</sup>		12 Mar 2001 d
Seychelles		5 May 1992 a
Sierra Leone		23 Aug 1996 a
Slovakia <sup>7</sup>		28 May 1993 d
Slovenia <sup>1</sup>		6 Jul 1992 d
Somalia		24 Jan 1990 a
South Africa	3 Oct 1994	10 Dec 1998
Spain	28 Sep 1976	27 Apr 1977
Sri Lanka		11 Jun 1980 a
St. Lucia	22 Sep 2011	
St. Vincent and the Grenadines		9 Nov 1981 a
Sudan		18 Mar 1986 a
Suriname		28 Dec 1976 a
Swaziland		26 Mar 2004 a
Sweden	29 Sep 1967	6 Dec 1971
Switzerland		18 Jun 1992 a
Syrian Arab Republic		21 Apr 1969 a
Tajikistan		4 Jan 1999 a
Thailand		29 Oct 1996 a
The former Yugoslav Republic of Macedonia <sup>1</sup>		18 Jan 1994 d
Timor-Leste		18 Sep 2003 a
Togo		24 May 1984 a
Trinidad and Tobago		21 Dec 1978 a
Tunisia	30 Apr 1968	18 Mar 1969
Turkey	15 Aug 2000	23 Sep 2003
Turkmenistan		1 May 1997 a

Uganda		21 Jun 1995 a
Ukraine	20 Mar 1968	12 Nov 1973
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland <sup>6</sup>	16 Sep 1968	20 May 1976
United Republic of Tanzania		11 Jun 1976 a
United States of America	5 Oct 1977	8 Jun 1992
Uruguay	21 Feb 1967	1 Apr 1970
Uzbekistan		28 Sep 1995 a
Vanuatu	29 Nov 2007	21 Nov 2008
Venezuela (Bolivarian Republic of)	24 Jun 1969	10 May 1978
Viet Nam		24 Sep 1982 a
Yemen		9 Feb 1987 a
Zambia		10 Apr 1984 a
Zimbabwe		13 May 1991 a

(16)

## **PRIMERO PROTOCOLO FACULTATIVO AL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS**

STATUS AS AT : 24-09-2011 07:14:07 EDT

### **CHAPTER IV HUMAN RIGHTS**

#### **5 . Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights**

New York, 16 December 1966

**Entry into force** : 23 March 1976, in accordance with article 9

**Registration** : 23 March 1976, No. 14668

**Status** : Signatories : 35. Parties : 114. <sup>1, 2, 3</sup>

**Text** : United Nations, *Treaty Series* , vol. 999, p. 171.

**Note** : The Protocol was opened for signature at New York on 19 December 1966.

Participant <sup>4, 5</sup>	Signature, Succession to signature(d)	Ratification, Accession(a), Succession(d)
Albania		4 Oct 2007 a
Algeria		12 Sep 1989 a
Andorra	5 Aug 2002	22 Sep 2006
Angola		10 Jan 1992 a
Argentina		8 Aug 1986 a
Armenia		23 Jun 1993 a
Australia		25 Sep 1991 a
Austria	10 Dec 1973	10 Dec 1987
Azerbaijan		27 Nov 2001 a
Barbados		5 Jan 1973 a
Belarus		30 Sep 1992 a
Belgium		17 May 1994 a
Benin		12 Mar 1992 a
Bolivia		12 Aug 1982 a

Bosnia and Herzegovina	1 Mar 1995	1 Mar 1995
Brazil		25 Sep 2009 a
Bulgaria		26 Mar 1992 a
Burkina Faso		4 Jan 1999 a
Cambodia	27 Sep 2004	
Cameroon		27 Jun 1984 a
Canada		19 May 1976 a
Cape Verde		19 May 2000 a
Central African Republic		8 May 1981 a
Chad		9 Jun 1995 a
Chile		27 May 1992 a
Colombia	21 Dec 1966	29 Oct 1969
Congo		5 Oct 1983 a
Costa Rica	19 Dec 1966	29 Nov 1968
Côte d'Ivoire		5 Mar 1997 a
Croatia		12 Oct 1995 a
Cyprus	19 Dec 1966	15 Apr 1992
Czech Republic <sup>6</sup>		22 Feb 1993 d
Democratic Republic of the Congo		1 Nov 1976 a
Denmark	20 Mar 1968	6 Jan 1972
Djibouti		5 Nov 2002 a
Dominican Republic		4 Jan 1978 a
Ecuador	4 Apr 1968	6 Mar 1969
El Salvador	21 Sep 1967	6 Jun 1995
Equatorial Guinea		25 Sep 1987 a
Estonia		21 Oct 1991 a
Finland	11 Dec 1967	19 Aug 1975
France		17 Feb 1984 a
Gambia		9 Jun 1988 a
Georgia		3 May 1994 a
Germany		25 Aug 1993 a
Ghana	7 Sep 2000	7 Sep 2000
Greece		5 May 1997 a
Guatemala		28 Nov 2000 a
Guinea	19 Mar 1975	17 Jun 1993
Guinea-Bissau	12 Sep 2000	
Guyana <sup>2</sup>		5 Jan 1999 a
Honduras	19 Dec 1966	7 Jun 2005

Hungary		7 Sep 1988 a
Iceland		22 Aug 1979 a
Ireland		8 Dec 1989 a
Italy	30 Apr 1976	15 Sep 1978
Jamaica <sup>3</sup>	[19 Dec 1966 ]	[ 3 Oct 1975 ]
Kazakhstan	25 Sep 2007	30 Jun 2009
Kyrgyzstan		7 Oct 1994 a
Latvia		22 Jun 1994 a
Lesotho		6 Sep 2000 a
Liberia	22 Sep 2004	
Libyan Arab Jamahiriya		16 May 1989 a
Liechtenstein		10 Dec 1998 a
Lithuania		20 Nov 1991 a
Luxembourg		18 Aug 1983 a
Madagascar	17 Sep 1969	21 Jun 1971
Malawi		11 Jun 1996 a
Maldives		19 Sep 2006 a
Mali		24 Oct 2001 a
Malta		13 Sep 1990 a
Mauritius		12 Dec 1973 a
Mexico		15 Mar 2002 a
Mongolia		16 Apr 1991 a
Montenegro <sup>7</sup>		23 Oct 2006 d
Namibia		28 Nov 1994 a
Nauru	12 Nov 2001	
Nepal		14 May 1991 a
Netherlands <sup>8</sup>	25 Jun 1969	11 Dec 1978
New Zealand <sup>9</sup>		26 May 1989 a
Nicaragua		12 Mar 1980 a
Niger		7 Mar 1986 a
Norway	20 Mar 1968	13 Sep 1972
Panama	27 Jul 1976	8 Mar 1977
Paraguay		10 Jan 1995 a
Peru	11 Aug 1977	3 Oct 1980
Philippines	19 Dec 1966	22 Aug 1989
Poland		7 Nov 1991 a
Portugal	1 Aug 1978	3 May 1983
Republic of Korea		10 Apr 1990 a



Republic of Moldova	16 Sep 2005	23 Jan 2008
Romania		20 Jul 1993 a
Russian Federation		1 Oct 1991 a
San Marino		18 Oct 1985 a
Sao Tome and Principe	6 Sep 2000	
Senegal	6 Jul 1970	13 Feb 1978
Serbia	12 Mar 2001 d	6 Sep 2001
Seychelles		5 May 1992 a
Sierra Leone		23 Aug 1996 a
Slovakia <sup>6</sup>		28 May 1993 d
Slovenia		16 Jul 1993 a
Somalia		24 Jan 1990 a
South Africa		28 Aug 2002 a
Spain		25 Jan 1985 a
Sri Lanka		3 Oct 1997 a
St. Vincent and the Grenadines		9 Nov 1981 a
Suriname		28 Dec 1976 a
Sweden	29 Sep 1967	6 Dec 1971
Tajikistan		4 Jan 1999 a
The former Yugoslav Republic of Macedonia	12 Dec 1994 d	12 Dec 1994
Togo		30 Mar 1988 a
Trinidad and Tobago <sup>1</sup>		[14 Nov 1980 a]
Tunisia		29 Jun 2011 a
Turkey	3 Feb 2004	24 Nov 2006
Turkmenistan		1 May 1997 a
Uganda		14 Nov 1995 a
Ukraine		25 Jul 1991 a
Uruguay	21 Feb 1967	1 Apr 1970
Uzbekistan		28 Sep 1995 a
Venezuela (Bolivarian Republic of)	15 Nov 1976	10 May 1978
Zambia		10 Apr 1984 a

(17)

## **SEGUNDO PROTOCOLO FACULTATIVO AL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS**

STATUS AS AT : 24-09-2011 07:14:07 EDT

### **CHAPTER IV HUMAN RIGHTS**

**12 . Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty**  
 New York, 15 December 1989

**Entry into force** : 11 July 1991, in accordance with article 8(1)

**Registration** : 11 July 1991, No. 14668

**Status** : Signatories : 35. Parties : 73

**Text** : United Nations, *Treaty Series* , vol. 1642, p. 414.

**Note** : The said Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, was adopted by resolution 44/128<sup>1</sup> of 15 December 1989 at the Forty-fourth session of the General Assembly of the United Nations and is open for signature at the United Nations Headquarters in New York by all States having signed the International Covenant on Civil and Political Rights.

Participant	Signature	Ratification, Accession(a), Succession(d)
Albania		17 Oct 2007 a
Andorra	5 Aug 2002	22 Sep 2006
Argentina	20 Dec 2006	2 Sep 2008
Australia		2 Oct 1990 a
Austria	8 Apr 1991	2 Mar 1993
Azerbaijan		22 Jan 1999 a
Belgium	12 Jul 1990	8 Dec 1998
Bosnia and Herzegovina	7 Sep 2000	16 Mar 2001
Brazil		25 Sep 2009 a
Bulgaria	11 Mar 1999	10 Aug 1999
Canada		25 Nov 2005 a

Cape Verde		19 May 2000 a
Chile	15 Nov 2001	26 Sep 2008
Colombia		5 Aug 1997 a
Costa Rica	14 Feb 1990	5 Jun 1998
Croatia		12 Oct 1995 a
Cyprus <sup>2</sup>		10 Sep 1999 a
Czech Republic		15 Jun 2004 a
Denmark	13 Feb 1990	24 Feb 1994
Djibouti		5 Nov 2002 a
Ecuador		23 Feb 1993 a
Estonia		30 Jan 2004 a
Finland	13 Feb 1990	4 Apr 1991
France		2 Oct 2007 a
Georgia		22 Mar 1999 a
Germany <sup>3</sup>	13 Feb 1990	18 Aug 1992
Greece		5 May 1997 a
Guinea-Bissau	12 Sep 2000	
Honduras	10 May 1990	1 Apr 2008
Hungary		24 Feb 1994 a
Iceland	30 Jan 1991	2 Apr 1991
Ireland		18 Jun 1993 a
Italy	13 Feb 1990	14 Feb 1995
Kyrgyzstan		6 Dec 2010 a
Liberia		16 Sep 2005 a
Liechtenstein		10 Dec 1998 a
Lithuania	8 Sep 2000	27 Mar 2002
Luxembourg	13 Feb 1990	12 Feb 1992
Malta <sup>4</sup>		29 Dec 1994 a
Mexico		26 Sep 2007 a
Monaco		28 Mar 2000 a
Montenegro <sup>5</sup>		23 Oct 2006 d
Mozambique		21 Jul 1993 a
Namibia		28 Nov 1994 a
Nepal		4 Mar 1998 a
Netherlands <sup>6</sup>	9 Aug 1990	26 Mar 1991
New Zealand <sup>7</sup>	22 Feb 1990	22 Feb 1990
Nicaragua	21 Feb 1990	25 Feb 2009
Norway	13 Feb 1990	5 Sep 1991

Panama		21 Jan 1993 a
Paraguay		18 Aug 2003 a
Philippines	20 Sep 2006	20 Nov 2007
Poland	21 Mar 2000	
Portugal	13 Feb 1990	17 Oct 1990
Republic of Moldova		20 Sep 2006 a
Romania	15 Mar 1990	27 Feb 1991
Rwanda		15 Dec 2008 a
San Marino	26 Sep 2003	17 Aug 2004
Sao Tome and Principe	6 Sep 2000	
Serbia		6 Sep 2001 a
Seychelles		15 Dec 1994 a
Slovakia	22 Sep 1998	22 Jun 1999
Slovenia	14 Sep 1993	10 Mar 1994
South Africa		28 Aug 2002 a
Spain <sup>8</sup>	23 Feb 1990	11 Apr 1991
Sweden	13 Feb 1990	11 May 1990
Switzerland		16 Jun 1994 a
The former Yugoslav Republic of Macedonia		26 Jan 1995 a
Timor-Leste		18 Sep 2003 a
Turkey	6 Apr 2004	2 Mar 2006
Turkmenistan		11 Jan 2000 a
Ukraine		25 Jul 2007 a
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	31 Mar 1999	10 Dec 1999
Uruguay	13 Feb 1990	21 Jan 1993
Uzbekistan		23 Dec 2008 a
Venezuela (Bolivarian Republic of)	7 Jun 1990	22 Feb 1993

(18)

## **PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

STATUS AS AT : 24-09-2011 07:14:07 EDT

### **CHAPTER IV HUMAN RIGHTS**

#### **3 . International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights** New York, 16 December 1966

**Entry into force** : 3 January 1976, in accordance with article 27 <sup>1</sup>

**Registration** : 3 January 1976, No. 14531 <sup>1</sup>

**Status** : Signatories : 70. Parties : 160

**Text** : United Nations, *Treaty Series*, vol. 993, p. 3; depositary notification C.N.781.2001.TREATIES-6 of 5 October 2001 [Proposal of correction to the original of the Covenant (Chinese authentic text) and C.N.7.2002.TREATIES-1 of 3 January 2002 [Rectification of the original of the Covenant (Chinese authentic text)].

**Note** : The Covenant was opened for signature at New York on 19 December 1966.

Participant <sup>2</sup>	Signature	Ratification, Accession(a), Succession(d)
Afghanistan		24 Jan 1983 a
Albania		4 Oct 1991 a
Algeria	10 Dec 1968	12 Sep 1989
Angola		10 Jan 1992 a
Argentina	19 Feb 1968	8 Aug 1986
Armenia		13 Sep 1993 a
Australia	18 Dec 1972	10 Dec 1975
Austria	10 Dec 1973	10 Sep 1978
Azerbaijan		13 Aug 1992 a
Bahamas	4 Dec 2008	23 Dec 2008
Bahrain		27 Sep 2007 a
Bangladesh		5 Oct 1998 a

Barbados		5 Jan 1973 a
Belarus	19 Mar 1968	12 Nov 1973
Belgium	10 Dec 1968	21 Apr 1983
Belize	6 Sep 2000	
Benin		12 Mar 1992 a
Bolivia		12 Aug 1982 a
Bosnia and Herzegovina <sup>3</sup>		1 Sep 1993 d
Brazil		24 Jan 1992 a
Bulgaria	8 Oct 1968	21 Sep 1970
Burkina Faso		4 Jan 1999 a
Burundi		9 May 1990 a
Cambodia <sup>4, 5</sup>	17 Oct 1980	26 May 1992 a
Cameroon		27 Jun 1984 a
Canada		19 May 1976 a
Cape Verde		6 Aug 1993 a
Central African Republic		8 May 1981 a
Chad		9 Jun 1995 a
Chile	16 Sep 1969	10 Feb 1972
China <sup>6, 7, 8</sup>	27 Oct 1997	27 Mar 2001
Colombia	21 Dec 1966	29 Oct 1969
Comoros	25 Sep 2008	
Congo		5 Oct 1983 a
Costa Rica	19 Dec 1966	29 Nov 1968
Côte d'Ivoire		26 Mar 1992 a
Croatia <sup>3</sup>		12 Oct 1992 d
Cuba	28 Feb 2008	
Cyprus	9 Jan 1967	2 Apr 1969
Czech Republic <sup>9</sup>		22 Feb 1993 d
Democratic People's Republic of Korea		14 Sep 1981 a
Democratic Republic of the Congo		1 Nov 1976 a
Denmark	20 Mar 1968	6 Jan 1972
Djibouti		5 Nov 2002 a
Dominica		17 Jun 1993 a
Dominican Republic		4 Jan 1978 a
Ecuador	29 Sep 1967	6 Mar 1969
Egypt	4 Aug 1967	14 Jan 1982
El Salvador	21 Sep 1967	30 Nov 1979

Equatorial Guinea		25 Sep 1987 a
Eritrea		17 Apr 2001 a
Estonia		21 Oct 1991 a
Ethiopia		11 Jun 1993 a
Finland	11 Oct 1967	19 Aug 1975
France		4 Nov 1980 a
Gabon		21 Jan 1983 a
Gambia		29 Dec 1978 a
Georgia		3 May 1994 a
Germany <sup>10</sup>	9 Oct 1968	17 Dec 1973
Ghana	7 Sep 2000	7 Sep 2000
Greece		16 May 1985 a
Grenada		6 Sep 1991 a
Guatemala		19 May 1988 a
Guinea	28 Feb 1967	24 Jan 1978
Guinea-Bissau		2 Jul 1992 a
Guyana	22 Aug 1968	15 Feb 1977
Honduras	19 Dec 1966	17 Feb 1981
Hungary	25 Mar 1969	17 Jan 1974
Iceland	30 Dec 1968	22 Aug 1979
India		10 Apr 1979 a
Indonesia		23 Feb 2006 a
Iran (Islamic Republic of)	4 Apr 1968	24 Jun 1975
Iraq	18 Feb 1969	25 Jan 1971
Ireland	1 Oct 1973	8 Dec 1989
Israel	19 Dec 1966	3 Oct 1991
Italy	18 Jan 1967	15 Sep 1978
Jamaica	19 Dec 1966	3 Oct 1975
Japan	30 May 1978	21 Jun 1979
Jordan	30 Jun 1972	28 May 1975
Kazakhstan	2 Dec 2003	24 Jan 2006
Kenya		1 May 1972 a
Kuwait		21 May 1996 a
Kyrgyzstan		7 Oct 1994 a
Lao People's Democratic Republic	7 Dec 2000	13 Feb 2007
Latvia		14 Apr 1992 a
Lebanon		3 Nov 1972 a
Lesotho		9 Sep 1992 a

Liberia	18 Apr 1967	22 Sep 2004
Libyan Arab Jamahiriya		15 May 1970 a
Liechtenstein		10 Dec 1998 a
Lithuania		20 Nov 1991 a
Luxembourg	26 Nov 1974	18 Aug 1983
Madagascar	14 Apr 1970	22 Sep 1971
Malawi		22 Dec 1993 a
Maldives		19 Sep 2006 a
Mali		16 Jul 1974 a
Malta	22 Oct 1968	13 Sep 1990
Mauritania		17 Nov 2004 a
Mauritius		12 Dec 1973 a
Mexico		23 Mar 1981 a
Monaco	26 Jun 1997	28 Aug 1997
Mongolia	5 Jun 1968	18 Nov 1974
Montenegro <sup>11</sup>		23 Oct 2006 d
Morocco	19 Jan 1977	3 May 1979
Namibia		28 Nov 1994 a
Nepal		14 May 1991 a
Netherlands <sup>12</sup>	25 Jun 1969	11 Dec 1978
New Zealand <sup>13</sup>	12 Nov 1968	28 Dec 1978
Nicaragua		12 Mar 1980 a
Niger		7 Mar 1986 a
Nigeria		29 Jul 1993 a
Norway	20 Mar 1968	13 Sep 1972
Pakistan	3 Nov 2004	17 Apr 2008
Palau	20 Sep 2011	
Panama	27 Jul 1976	8 Mar 1977
Papua New Guinea		21 Jul 2008 a
Paraguay		10 Jun 1992 a
Peru	11 Aug 1977	28 Apr 1978
Philippines	19 Dec 1966	7 Jun 1974
Poland	2 Mar 1967	18 Mar 1977
Portugal <sup>6</sup>	7 Oct 1976	31 Jul 1978
Republic of Korea		10 Apr 1990 a
Republic of Moldova		26 Jan 1993 a
Romania	27 Jun 1968	9 Dec 1974
Russian Federation	18 Mar 1968	16 Oct 1973



Rwanda		16 Apr 1975 a
San Marino		18 Oct 1985 a
Sao Tome and Principe	31 Oct 1995	
Senegal	6 Jul 1970	13 Feb 1978
Serbia <sup>3</sup>		12 Mar 2001 d
Seychelles		5 May 1992 a
Sierra Leone		23 Aug 1996 a
Slovakia <sup>9</sup>		28 May 1993 d
Slovenia <sup>3</sup>		6 Jul 1992 d
Solomon Islands <sup>14</sup>		17 Mar 1982 d
Somalia		24 Jan 1990 a
South Africa	3 Oct 1994	
Spain	28 Sep 1976	27 Apr 1977
Sri Lanka		11 Jun 1980 a
St. Vincent and the Grenadines		9 Nov 1981 a
Sudan		18 Mar 1986 a
Suriname		28 Dec 1976 a
Swaziland		26 Mar 2004 a
Sweden	29 Sep 1967	6 Dec 1971
Switzerland		18 Jun 1992 a
Syrian Arab Republic		21 Apr 1969 a
Tajikistan		4 Jan 1999 a
Thailand		5 Sep 1999 a
The former Yugoslav Republic of Macedonia <sup>3</sup>		18 Jan 1994 d
Timor-Leste		16 Apr 2003 a
Togo		24 May 1984 a
Trinidad and Tobago		8 Dec 1978 a
Tunisia	30 Apr 1968	18 Mar 1969
Turkey	15 Aug 2000	23 Sep 2003
Turkmenistan		1 May 1997 a
Uganda		21 Jan 1987 a
Ukraine	20 Mar 1968	12 Nov 1973
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland <sup>8, 15</sup>	16 Sep 1968	20 May 1976
United Republic of Tanzania		11 Jun 1976 a
United States of America	5 Oct 1977	
Uruguay	21 Feb 1967	1 Apr 1970
Uzbekistan		28 Sep 1995 a

Venezuela (Bolivarian Republic of)	24 Jun 1969	10 May 1978
Viet Nam		24 Sep 1982 a
Yemen <sup>16</sup>		9 Feb 1987 a
Zambia		10 Apr 1984 a
Zimbabwe		13 May 1991 a

(19)

## **PROTOCOLO FACULTATIVO AL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES**

STATUS AS AT : 24-09-2011 07:14:07 EDT

### **CHAPTER IV HUMAN RIGHTS**

#### **3 .a Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights**

New York, 10 December 2008

**Not yet in force** : in accordance with article 18 which reads as follows: "1. The present Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the tenth instrument of ratification or accession. 2. For each State ratifying or acceding to the present Protocol, after the deposit of the tenth instrument of ratification or accession, the Protocol shall enter into force three months after the date of the deposit of its instrument of ratification or accession.

**Status** : Signatories : 37. Parties : 4

**Text** : Doc.A/63/435; C.N.869.2009.TREATIES-34 of 11 December 2009 (Rectification of the original of the Protocol (French authentic text) and transmission of the Procès-verbal).

**Note** : The above Optional Protocol was adopted on 10 December 2008 during the sixty-third session of the General Assembly by resolution A/RES/63/117. In accordance with article 17, the Optional Protocol shall be open for signature by any State that has signed, ratified or acceded to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The signing ceremony was held on 24 September 2009 during the 2009 Treaty Event at the United Nations Headquarters in New York.

Participant	Signature	Accession(a), Ratification
Argentina	24 Sep 2009	
Armenia	29 Sep 2009	
Azerbaijan	25 Sep 2009	
Belgium	24 Sep 2009	

Bolivia (Plurinational State of)	12 Feb 2010
Bosnia and Herzegovina	12 Jul 2010
Chile	24 Sep 2009
Congo	25 Sep 2009
Costa Rica	28 Apr 2011
Democratic Republic of the Congo	23 Sep 2010
Ecuador	24 Sep 2009 11 Jun 2010
El Salvador	25 Sep 2009 20 Sep 2011
Finland	24 Sep 2009
Gabon	24 Sep 2009
Ghana	24 Sep 2009
Guatemala	24 Sep 2009
Guinea-Bissau	25 Sep 2009
Italy	28 Sep 2009
Kazakhstan	23 Sep 2010
Luxembourg	24 Sep 2009
Madagascar	25 Sep 2009
Maldives	21 Sep 2011
Mali	24 Sep 2009
Mongolia	23 Dec 2009 1 Jul 2010
Montenegro	24 Sep 2009
Netherlands	24 Sep 2009
Paraguay	6 Oct 2009
Portugal	24 Sep 2009
Senegal	24 Sep 2009
Slovakia	24 Sep 2009
Slovenia	24 Sep 2009
Solomon Islands	24 Sep 2009
Spain	24 Sep 2009 23 Sep 2010
Timor-Leste	28 Sep 2009
Togo	25 Sep 2009
Ukraine	24 Sep 2009
Uruguay	24 Sep 2009

(20)

## **CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL**

STATUS AS AT : 24-09-2011 07:14:07 EDT

### **CHAPTER IV HUMAN RIGHTS**

#### **2 . International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination**

New York, 7 March 1966

**Entry into force** : 4 January 1969, in accordance with article 19<sup>1</sup>

**Registration** : 12 March 1969, No. 9464

**Status** : Signatories : 86. Parties : 174

**Text** : United Nations, *Treaty Series* , vol. 660, p. 195.

**Note** : The Convention was adopted by the General Assembly of the United Nations in resolution 2106 (XX)<sup>2</sup> of 21 December 1965.

Participant <sup>3</sup>	Signature	Ratification, Accession(a), Succession(d)
Afghanistan		6 Jul 1983 a
Albania		11 May 1994 a
Algeria	9 Dec 1966	14 Feb 1972
Andorra	5 Aug 2002	22 Sep 2006
Antigua and Barbuda		25 Oct 1988 d
Argentina	13 Jul 1967	2 Oct 1968
Armenia		23 Jun 1993 a
Australia	13 Oct 1966	30 Sep 1975
Austria	22 Jul 1969	9 May 1972
Azerbaijan		16 Aug 1996 a
Bahamas		5 Aug 1975 d
Bahrain		27 Mar 1990 a
Bangladesh		11 Jun 1979 a
Barbados		8 Nov 1972 a
Belarus	7 Mar 1966	8 Apr 1969

Belgium	17 Aug 1967	7 Aug 1975
Belize	6 Sep 2000	14 Nov 2001
Benin	2 Feb 1967	30 Nov 2001
Bhutan	26 Mar 1973	
Bolivia	7 Jun 1966	22 Sep 1970
Bosnia and Herzegovina <sup>4</sup>		16 Jul 1993 d
Botswana		20 Feb 1974 a
Brazil	7 Mar 1966	27 Mar 1968
Bulgaria	1 Jun 1966	8 Aug 1966
Burkina Faso		18 Jul 1974 a
Burundi	1 Feb 1967	27 Oct 1977
Cambodia	12 Apr 1966	28 Nov 1983
Cameroon	12 Dec 1966	24 Jun 1971
Canada	24 Aug 1966	14 Oct 1970
Cape Verde		3 Oct 1979 a
Central African Republic	7 Mar 1966	16 Mar 1971
Chad		17 Aug 1977 a
Chile	3 Oct 1966	20 Oct 1971
China <sup>5, 6, 7</sup>		29 Dec 1981 a
Colombia	23 Mar 1967	2 Sep 1981
Comoros	22 Sep 2000	27 Sep 2004
Congo		11 Jul 1988 a
Costa Rica	14 Mar 1966	16 Jan 1967
Côte d'Ivoire		4 Jan 1973 a
Croatia <sup>4</sup>		12 Oct 1992 d
Cuba	7 Jun 1966	15 Feb 1972
Cyprus	12 Dec 1966	21 Apr 1967
Czech Republic <sup>8</sup>		22 Feb 1993 d
Democratic Republic of the Congo		21 Apr 1976 a
Denmark <sup>9</sup>	21 Jun 1966	9 Dec 1971
Djibouti	14 Jun 2006	
Dominican Republic		25 May 1983 a
Ecuador		22 Sep 1966 a
Egypt	28 Sep 1966	1 May 1967
El Salvador		30 Nov 1979 a
Equatorial Guinea		8 Oct 2002 a
Eritrea		31 Jul 2001 a
Estonia		21 Oct 1991 a

Ethiopia		23 Jun 1976 a
Fiji		11 Jan 1973 d
Finland	6 Oct 1966	14 Jul 1970
France		28 Jul 1971 a
Gabon	20 Sep 1966	29 Feb 1980
Gambia		29 Dec 1978 a
Georgia		2 Jun 1999 a
Germany <sup>10</sup>	10 Feb 1967	16 May 1969
Ghana	8 Sep 1966	8 Sep 1966
Greece	7 Mar 1966	18 Jun 1970
Grenada	17 Dec 1981	
Guatemala	8 Sep 1967	18 Jan 1983
Guinea	24 Mar 1966	14 Mar 1977
Guinea-Bissau	12 Sep 2000	1 Nov 2010
Guyana	11 Dec 1968	15 Feb 1977
Haiti	30 Oct 1972	19 Dec 1972
Holy See	21 Nov 1966	1 May 1969
Honduras		10 Oct 2002 a
Hungary	15 Sep 1966	4 May 1967
Iceland	14 Nov 1966	13 Mar 1967
India	2 Mar 1967	3 Dec 1968
Indonesia		25 Jun 1999 a
Iran (Islamic Republic of)	8 Mar 1967	29 Aug 1968
Iraq	18 Feb 1969	14 Jan 1970
Ireland	21 Mar 1968	29 Dec 2000
Israel	7 Mar 1966	3 Jan 1979
Italy	13 Mar 1968	5 Jan 1976
Jamaica	14 Aug 1966	4 Jun 1971
Japan		15 Dec 1995 a
Jordan		30 May 1974 a
Kazakhstan		26 Aug 1998 a
Kenya		13 Sep 2001 a
Kuwait		15 Oct 1968 a
Kyrgyzstan		5 Sep 1997 a
Lao People's Democratic Republic		22 Feb 1974 a
Latvia		14 Apr 1992 a
Lebanon		12 Nov 1971 a
Lesotho		4 Nov 1971 a

Liberia		5 Nov 1976 a
Libyan Arab Jamahiriya		3 Jul 1968 a
Liechtenstein		1 Mar 2000 a
Lithuania	8 Jun 1998	10 Dec 1998
Luxembourg	12 Dec 1967	1 May 1978
Madagascar	18 Dec 1967	7 Feb 1969
Malawi		11 Jun 1996 a
Maldives		24 Apr 1984 a
Mali		16 Jul 1974 a
Malta	5 Sep 1968	27 May 1971
Mauritania	21 Dec 1966	13 Dec 1988
Mauritius		30 May 1972 a
Mexico	1 Nov 1966	20 Feb 1975
Monaco		27 Sep 1995 a
Mongolia	3 May 1966	6 Aug 1969
Montenegro <sup>11</sup>		23 Oct 2006 d
Morocco	18 Sep 1967	18 Dec 1970
Mozambique		18 Apr 1983 a
Namibia <sup>12</sup>		11 Nov 1982 a
Nauru	12 Nov 2001	
Nepal		30 Jan 1971 a
Netherlands	24 Oct 1966	10 Dec 1971
New Zealand <sup>13</sup>	25 Oct 1966	22 Nov 1972
Nicaragua		15 Feb 1978 a
Niger	14 Mar 1966	27 Apr 1967
Nigeria		16 Oct 1967 a
Norway	21 Nov 1966	6 Aug 1970
Oman		2 Jan 2003 a
Pakistan	19 Sep 1966	21 Sep 1966
Palau	20 Sep 2011	
Panama	8 Dec 1966	16 Aug 1967
Papua New Guinea		27 Jan 1982 a
Paraguay	13 Sep 2000	18 Aug 2003
Peru	22 Jul 1966	29 Sep 1971
Philippines	7 Mar 1966	15 Sep 1967
Poland	7 Mar 1966	5 Dec 1968
Portugal <sup>6</sup>		24 Aug 1982 a
Qatar		22 Jul 1976 a



Republic of Korea	8 Aug 1978	5 Dec 1978
Republic of Moldova		26 Jan 1993 a
Romania		15 Sep 1970 a
Russian Federation	7 Mar 1966	4 Feb 1969
Rwanda		16 Apr 1975 a
San Marino	11 Dec 2001	12 Mar 2002
Sao Tome and Principe	6 Sep 2000	
Saudi Arabia		23 Sep 1997 a
Senegal	22 Jul 1968	19 Apr 1972
Serbia <sup>4</sup>		12 Mar 2001 d
Seychelles		7 Mar 1978 a
Sierra Leone	17 Nov 1966	2 Aug 1967
Slovakia <sup>8</sup>		28 May 1993 d
Slovenia <sup>4</sup>		6 Jul 1992 d
Solomon Islands		17 Mar 1982 d
Somalia	26 Jan 1967	26 Aug 1975
South Africa	3 Oct 1994	10 Dec 1998
Spain		13 Sep 1968 a
Sri Lanka		18 Feb 1982 a
St. Kitts and Nevis		13 Oct 2006 a
St. Lucia		14 Feb 1990 d
St. Vincent and the Grenadines		9 Nov 1981 a
Sudan		21 Mar 1977 a
Suriname		15 Mar 1984 d
Swaziland		7 Apr 1969 a
Sweden	5 May 1966	6 Dec 1971
Switzerland		29 Nov 1994 a
Syrian Arab Republic		21 Apr 1969 a
Tajikistan		11 Jan 1995 a
Thailand		28 Jan 2003 a
The former Yugoslav Republic of Macedonia <sup>4</sup>		18 Jan 1994 d
Timor-Leste		16 Apr 2003 a
Togo		1 Sep 1972 a
Tonga		16 Feb 1972 a
Trinidad and Tobago	9 Jun 1967	4 Oct 1973
Tunisia	12 Apr 1966	13 Jan 1967
Turkey	13 Oct 1972	16 Sep 2002
Turkmenistan		29 Sep 1994 a

Uganda		21 Nov 1980 a
Ukraine	7 Mar 1966	7 Mar 1969
United Arab Emirates		20 Jun 1974 a
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland <sup>5, 14</sup>	11 Oct 1966	7 Mar 1969
United Republic of Tanzania		27 Oct 1972 a
United States of America	28 Sep 1966	21 Oct 1994
Uruguay	21 Feb 1967	30 Aug 1968
Uzbekistan		28 Sep 1995 a
Venezuela (Bolivarian Republic of)	21 Apr 1967	10 Oct 1967
Viet Nam		9 Jun 1982 a
Yemen <sup>15</sup>		18 Oct 1972 a
Zambia	11 Oct 1968	4 Feb 1972
Zimbabwe		13 May 1991 a

(21)

**CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA  
ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN RACIAL  
- ENMIENDA AL ARTÍCULO 8 -**

STATUS AS AT : 24-09-2011 07:14:07 EDT

**CHAPTER IV  
HUMAN RIGHTS**

**2 .a Amendment to article 8 of the International Convention on the  
Elimination of All Forms of Racial Discrimination**

New York, 15 January 1992

**Not yet in force** : see paragraph 4 of the Decision of the State Parties which reads as follows: "The amendment shall enter into force when it has been approved by the General Assembly and accepted by a two thirds majority of States parties which shall have so notified the Secretary-General as depositary."

**Status** : Parties : 43

**Text** : Doc. CERD/sp/45.

**Note** : The amendment proposed by the Government of Australia and circulated by the Secretary-General under cover of depositary notification C.N.285.1991.TREATIES-4 of 20 December 1991, was adopted by the States Parties to the Convention at their Fourteenth Meeting and submitted to the General Assembly in accordance with article 23 of the Convention. The General Assembly endorsed the said amendment at its Forty-seventh session by resolution 47/111 of 16 December 1992.

Participant	Acceptance(A)
Australia	15 Oct 1993 A
Bahamas	31 Mar 1994 A
Bahrain	29 Jun 2000 A
Belize	5 Mar 2004 A
Bulgaria	2 Mar 1995 A
Burkina Faso	9 Aug 1993 A
Canada	8 Feb 1995 A

China	10 Jul 2002 A
Colombia	5 Oct 1999 A
Costa Rica	13 Dec 2000 A
Cuba	21 Nov 1996 A
Cyprus	28 Sep 1998 A
Czech Republic	6 Aug 2002 A
Denmark	3 Sep 1993 A
Ecuador	26 Sep 2006 A
Finland	9 Feb 1994 A
France	1 Sep 1994 A
Germany	8 Oct 1996 A
Guinea	31 May 2000 A
Holy See	14 Mar 2002 A
Iceland	14 Mar 2001 A
Iran (Islamic Republic of)	8 Nov 2005 A
Iraq	25 May 2001 A
Ireland	29 Dec 2000 A
Liberia	16 Sep 2005 A
Liechtenstein	28 Apr 2000 A
Luxembourg	12 Aug 2004 A
Mexico	16 Sep 1996 A
Netherlands <sup>1</sup>	24 Jan 1995 A
New Zealand <sup>2</sup>	8 Oct 1993 A
Norway	6 Oct 1993 A
Poland	23 Aug 2002 A
Republic of Korea	30 Nov 1993 A
Saudi Arabia	28 Feb 2003 A
Seychelles	23 Jul 1993 A
Slovakia	9 Aug 2006 A
Sweden	14 May 1993 A
Switzerland	16 Dec 1996 A
Syrian Arab Republic	25 Feb 1998 A
Trinidad and Tobago	23 Aug 1993 A
Ukraine	17 Jun 1994 A
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	7 Feb 1994 A
Zimbabwe	10 Apr 1997 A

(22)

## **CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER**

STATUS AS AT : 24-09-2011 07:14:07 EDT

### **CHAPTER IV HUMAN RIGHTS**

#### **8 . Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women**

New York, 18 December 1979 <sup>1</sup>

**Entry into force** : 3 September 1981, in accordance with article 27(1)

**Registration** : 3 September 1981, No. 20378

**Status** : Signatories : 99. Parties : 187

**Text** : United Nations, *Treaty Series* , vol. 1249, p. 13.

**Note** : The Convention was opened for signature at the United Nations Headquarters on 1 March 1980.

Participant	Signature	Ratification, Accession(a), Succession(d)
Afghanistan	14 Aug 1980	5 Mar 2003
Albania		11 May 1994 a
Algeria <sup>2</sup>		22 May 1996 a
Andorra		15 Jan 1997 a
Angola		17 Sep 1986 a
Antigua and Barbuda		1 Aug 1989 a
Argentina	17 Jul 1980	15 Jul 1985
Armenia		13 Sep 1993 a
Australia <sup>3</sup>	17 Jul 1980	28 Jul 1983
Austria <sup>4</sup>	17 Jul 1980	31 Mar 1982
Azerbaijan		10 Jul 1995 a
Bahamas		6 Oct 1993 a
Bahrain		18 Jun 2002 a
Bangladesh <sup>5</sup>		6 Nov 1984 a

Barbados	24 Jul 1980	16 Oct 1980
Belarus	17 Jul 1980	4 Feb 1981
Belgium <sup>6</sup>	17 Jul 1980	10 Jul 1985
Belize	7 Mar 1990	16 May 1990
Benin	11 Nov 1981	12 Mar 1992
Bhutan	17 Jul 1980	31 Aug 1981
Bolivia	30 May 1980	8 Jun 1990
Bosnia and Herzegovina <sup>7</sup>		1 Sep 1993 d
Botswana		13 Aug 1996 a
Brazil <sup>8</sup>	31 Mar 1981	1 Feb 1984
Brunei Darussalam		24 May 2006 a
Bulgaria <sup>9</sup>	17 Jul 1980	8 Feb 1982
Burkina Faso		14 Oct 1987 a
Burundi	17 Jul 1980	8 Jan 1992
Cambodia <sup>10, 11</sup>	17 Oct 1980	15 Oct 1992 a
Cameroon	6 Jun 1983	23 Aug 1994
Canada <sup>12</sup>	17 Jul 1980	10 Dec 1981
Cape Verde		5 Dec 1980 a
Central African Republic		21 Jun 1991 a
Chad		9 Jun 1995 a
Chile	17 Jul 1980	7 Dec 1989
China <sup>13, 14</sup>	17 Jul 1980	4 Nov 1980
Colombia	17 Jul 1980	19 Jan 1982
Comoros		31 Oct 1994 a
Congo	29 Jul 1980	26 Jul 1982
Cook Islands <sup>15</sup>		11 Aug 2006 a
Costa Rica	17 Jul 1980	4 Apr 1986
Côte d'Ivoire	17 Jul 1980	18 Dec 1995
Croatia <sup>7</sup>		9 Sep 1992 d
Cuba	6 Mar 1980	17 Jul 1980
Cyprus <sup>16</sup>		23 Jul 1985 a
Czech Republic <sup>17</sup>		22 Feb 1993 d
Democratic People's Republic of Korea <sup>18</sup>		27 Feb 2001 a
Democratic Republic of the Congo	17 Jul 1980	17 Oct 1986
Denmark <sup>19</sup>	17 Jul 1980	21 Apr 1983
Djibouti		2 Dec 1998 a
Dominica	15 Sep 1980	15 Sep 1980

Dominican Republic	17 Jul 1980	2 Sep 1982
Ecuador	17 Jul 1980	9 Nov 1981
Egypt <sup>20</sup>	16 Jul 1980	18 Sep 1981
El Salvador	14 Nov 1980	19 Aug 1981
Equatorial Guinea		23 Oct 1984 a
Eritrea		5 Sep 1995 a
Estonia		21 Oct 1991 a
Ethiopia	8 Jul 1980	10 Sep 1981
Fiji <sup>21</sup>		28 Aug 1995 a
Finland	17 Jul 1980	4 Sep 1986
France <sup>22</sup>	17 Jul 1980	14 Dec 1983
Gabon	17 Jul 1980	21 Jan 1983
Gambia	29 Jul 1980	16 Apr 1993
Georgia		26 Oct 1994 a
Germany <sup>23, 24, 25</sup>	17 Jul 1980	10 Jul 1985
Ghana	17 Jul 1980	2 Jan 1986
Greece	2 Mar 1982	7 Jun 1983
Grenada	17 Jul 1980	30 Aug 1990
Guatemala	8 Jun 1981	12 Aug 1982
Guinea <sup>26</sup>	17 Jul 1980	9 Aug 1982
Guinea-Bissau	17 Jul 1980	23 Aug 1985
Guyana	17 Jul 1980	17 Jul 1980
Haiti	17 Jul 1980	20 Jul 1981
Honduras	11 Jun 1980	3 Mar 1983
Hungary <sup>27</sup>	6 Jun 1980	22 Dec 1980
Iceland	24 Jul 1980	18 Jun 1985
India	30 Jul 1980	9 Jul 1993
Indonesia	29 Jul 1980	13 Sep 1984
Iraq		13 Aug 1986 a
Ireland <sup>28</sup>		23 Dec 1985 a
Israel <sup>29</sup>	17 Jul 1980	3 Oct 1991
Italy	17 Jul 1980	10 Jun 1985
Jamaica <sup>30</sup>	17 Jul 1980	19 Oct 1984
Japan	17 Jul 1980	25 Jun 1985
Jordan	3 Dec 1980	1 Jul 1992
Kazakhstan		26 Aug 1998 a
Kenya		9 Mar 1984 a
Kiribati		17 Mar 2004 a

Kuwait <sup>31</sup>		2 Sep 1994 a
Kyrgyzstan		10 Feb 1997 a
Lao People's Democratic Republic	17 Jul 1980	14 Aug 1981
Latvia		14 Apr 1992 a
Lebanon		16 Apr 1997 a
Lesotho <sup>32</sup>	17 Jul 1980	22 Aug 1995
Liberia		17 Jul 1984 a
Libyan Arab Jamahiriya <sup>33</sup>		16 May 1989 a
Liechtenstein <sup>34</sup>		22 Dec 1995 a
Lithuania		18 Jan 1994 a
Luxembourg	17 Jul 1980	2 Feb 1989
Madagascar	17 Jul 1980	17 Mar 1989
Malawi <sup>35</sup>		12 Mar 1987 a
Malaysia <sup>36</sup>		5 Jul 1995 a
Maldives <sup>37, 38</sup>		1 Jul 1993 a
Mali	5 Feb 1985	10 Sep 1985
Malta		8 Mar 1991 a
Marshall Islands		2 Mar 2006 a
Mauritania <sup>39</sup>		10 May 2001 a
Mauritius <sup>40</sup>		9 Jul 1984 a
Mexico	17 Jul 1980	23 Mar 1981
Micronesia (Federated States of)		1 Sep 2004 a
Monaco		18 Mar 2005 a
Mongolia <sup>41</sup>	17 Jul 1980	20 Jul 1981
Montenegro <sup>42</sup>		23 Oct 2006 d
Morocco		21 Jun 1993 a
Mozambique		21 Apr 1997 a
Myanmar		22 Jul 1997 a
Namibia		23 Nov 1992 a
Nauru		23 Jun 2011 a
Nepal	5 Feb 1991	22 Apr 1991
Netherlands <sup>43</sup>	17 Jul 1980	23 Jul 1991
New Zealand <sup>44, 45, 46, 47, 48</sup>	17 Jul 1980	10 Jan 1985
Nicaragua	17 Jul 1980	27 Oct 1981
Niger <sup>49</sup>		8 Oct 1999 a
Nigeria	23 Apr 1984	13 Jun 1985
Norway	17 Jul 1980	21 May 1981
Oman		7 Feb 2006 a



Pakistan		12 Mar 1996 a
Palau	20 Sep 2011	
Panama	26 Jun 1980	29 Oct 1981
Papua New Guinea		12 Jan 1995 a
Paraguay		6 Apr 1987 a
Peru	23 Jul 1981	13 Sep 1982
Philippines	15 Jul 1980	5 Aug 1981
Poland <sup>50</sup>	29 May 1980	30 Jul 1980
Portugal <sup>13, 51</sup>	24 Apr 1980	30 Jul 1980
Qatar		29 Apr 2009 a
Republic of Korea <sup>52</sup>	25 May 1983	27 Dec 1984
Republic of Moldova		1 Jul 1994 a
Romania <sup>53</sup>	4 Sep 1980	7 Jan 1982
Russian Federation <sup>54</sup>	17 Jul 1980	23 Jan 1981
Rwanda	1 May 1980	2 Mar 1981
Samoa		25 Sep 1992 a
San Marino	26 Sep 2003	10 Dec 2003
Sao Tome and Principe	31 Oct 1995	3 Jun 2003
Saudi Arabia	7 Sep 2000	7 Sep 2000
Senegal	29 Jul 1980	5 Feb 1985
Serbia <sup>7</sup>		12 Mar 2001 d
Seychelles		5 May 1992 a
Sierra Leone	21 Sep 1988	11 Nov 1988
Singapore <sup>55</sup>		5 Oct 1995 a
Slovakia <sup>17</sup>		28 May 1993 d
Slovenia <sup>7</sup>		6 Jul 1992 d
Solomon Islands		6 May 2002 a
South Africa	29 Jan 1993	15 Dec 1995
Spain	17 Jul 1980	5 Jan 1984
Sri Lanka	17 Jul 1980	5 Oct 1981
St. Kitts and Nevis		25 Apr 1985 a
St. Lucia		8 Oct 1982 a
St. Vincent and the Grenadines		4 Aug 1981 a
Suriname		1 Mar 1993 a
Swaziland		26 Mar 2004 a
Sweden <sup>56, 57</sup>	7 Mar 1980	2 Jul 1980
Switzerland <sup>58</sup>	23 Jan 1987	27 Mar 1997
Syrian Arab Republic		28 Mar 2003 a

Tajikistan		26 Oct 1993 a
Thailand <sup>59</sup>		9 Aug 1985 a
The former Yugoslav Republic of Macedonia <sup>7</sup>		18 Jan 1994 d
Timor-Leste		16 Apr 2003 a
Togo		26 Sep 1983 a
Trinidad and Tobago	27 Jun 1985	12 Jan 1990
Tunisia	24 Jul 1980	20 Sep 1985
Turkey		20 Dec 1985 a
Turkmenistan		1 May 1997 a
Tuvalu		6 Oct 1999 a
Uganda	30 Jul 1980	22 Jul 1985
Ukraine	17 Jul 1980	12 Mar 1981
United Arab Emirates <sup>60</sup>		6 Oct 2004 a
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland <sup>14, 61, 62, 63</sup>	22 Jul 1981	7 Apr 1986
United Republic of Tanzania	17 Jul 1980	20 Aug 1985
United States of America	17 Jul 1980	
Uruguay	30 Mar 1981	9 Oct 1981
Uzbekistan		19 Jul 1995 a
Vanuatu		8 Sep 1995 a
Venezuela (Bolivarian Republic of)	17 Jul 1980	2 May 1983
Viet Nam	29 Jul 1980	17 Feb 1982
Yemen <sup>64</sup>		30 May 1984 a
Zambia	17 Jul 1980	21 Jun 1985
Zimbabwe		13 May 1991 a

(23)

**CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS  
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER**  
**- ENMIENDA AL ARTÍCULO 20, PÁRRAFO 1 -**

STATUS AS AT : 24-09-2011 07:14:07 EDT

**CHAPTER IV  
HUMAN RIGHTS**

**8 .a Amendment to article 20, paragraph 1 of the Convention on the  
Elimination of All Forms of Discrimination against Women**

New York, 22 December 1995

**Not yet in force** : see paragraph 3 of Resolution 50/202 which reads as follows:  
"The amendment shall enter into force following consideration by the General Assembly and when it has been accepted by a two-thirds majority of States parties which shall have so notified the Secretary-General as depositary of the Convention."

**Status** : Parties : 64

**Text** : Doc. CEDAW/SP/1995/2.

**Note** : The amendment was proposed by the Governments of Denmark, Iceland, Finland, Norway and Sweden and communicated by the Secretary-General by depositary notification C.N.373.1994.TREATIES-8 of 23 January 1995 in accordance with article 26 (1) of the Convention. At their eighth meeting held on 22 May 1995, the States Parties to the above Convention decided to amend article 20 (1) of the Convention and adopted the amendment. By Resolution 50/202 adopted at its fiftieth session held on 22 December 1995, the General Assembly noted with approval the amendment.

Participant	Acceptance(A)
Albania	20 May 2011 A
Andorra	14 Oct 2002 A
Argentina	9 Jul 2009 A
Australia	4 Jun 1998 A

Austria	11 Sep 2000 A
Azerbaijan	23 May 2008 A
Bahamas	17 Jan 2003 A
Bangladesh	3 May 2007 A
Brazil	5 Mar 1997 A
Bulgaria	15 Sep 2010 A
Canada	3 Nov 1997 A
Chile	8 May 1998 A
China	10 Jul 2002 A
Cook Islands	27 Nov 2007 A
Costa Rica	27 Apr 2009 A
Croatia	24 Oct 2003 A
Cuba	7 Mar 2008 A
Cyprus	30 Jul 2002 A
Czech Republic	30 Jun 2011 A
Denmark	12 Mar 1996 A
Egypt	2 Aug 2001 A
Finland	18 Mar 1996 A
France	8 Aug 1997 A
Georgia	30 Sep 2005 A
Germany	25 Feb 2002 A
Grenada	12 Dec 2007 A
Guatemala	3 Jun 1999 A
Iceland	8 May 2002 A
Ireland	11 Jun 2004 A
Italy	31 May 1996 A
Japan	12 Jun 2003 A
Jordan	11 Jan 2002 A
Kuwait	23 May 2011 A
Lesotho	12 Nov 2001 A
Liberia	16 Sep 2005 A
Liechtenstein	15 Apr 1997 A
Lithuania	5 Aug 2004 A
Luxembourg	1 Jul 2003 A
Madagascar	19 Jul 1996 A
Maldives	7 Feb 2002 A
Mali	20 Jun 2002 A
Malta	5 Mar 1997 A

Mauritius	29 Oct 2002 A
Mexico	16 Sep 1996 A
Mongolia	19 Dec 1997 A
Morocco	31 Mar 2010 A
Nauru	23 Jun 2011 A
Netherlands <sup>1</sup>	10 Dec 1997 A
New Zealand	26 Sep 1996 A
Niger	1 May 2002 A
Norway	29 Mar 1996 A
Panama	5 Nov 1996 A
Philippines	12 Nov 2003 A
Poland	23 Dec 2010 A
Portugal	8 Jan 2002 A
Republic of Korea	12 Aug 1996 A
Singapore	30 Aug 2010 A
Slovenia	10 Nov 2006 A
Spain	26 Jan 2010 A
Sweden	17 Jul 1996 A
Switzerland	2 Dec 1997 A
Turkey	9 Dec 1999 A
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland <sup>2</sup>	19 Nov 1996 A
Uruguay	8 Jan 2004 A

(24)

**PROTOCOLO FACULTATIVO A LA  
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS  
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER**

STATUS AS AT : 24-09-2011 07:14:07 EDT

**CHAPTER IV  
HUMAN RIGHTS**

**8 .b Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms  
of Discrimination against Women**

New York, 6 October 1999

**Entry into force** : 22 December 2000, in accordance with article 16(1)(see paragraph 16 of Resolution A/RES/54/4)

**Registration** : 22 December 2000, No. 20378

**Status** : Signatories : 79. Parties : 102

**Text** : United Nations, *Treaty Series* , vol. 2131, p. 83.

**Note** : The Protocol was adopted by resolution A/RES/54/4 of 6 October 1999 at the fifty-fourth session of the General Assembly of the United Nations. In accordance with its article 15 (1), the Protocol will be open for signature by any State that has signed, ratified or acceded to the Convention at United Nations Headquarters in New York from 10 December 1999.

Participant	Signature	Ratification, Accession(a), Succession(d)
Albania		23 Jun 2003 a
Andorra	9 Jul 2001	14 Oct 2002
Angola		1 Nov 2007 a
Antigua and Barbuda		5 Jun 2006 a
Argentina <sup>1</sup>	28 Feb 2000	20 Mar 2007
Armenia		14 Sep 2006 a
Australia		4 Dec 2008 a
Austria	10 Dec 1999	6 Sep 2000
Azerbaijan	6 Jun 2000	1 Jun 2001
Bangladesh	6 Sep 2000	6 Sep 2000

Belarus	29 Apr 2002	3 Feb 2004
Belgium	10 Dec 1999	17 Jun 2004
Belize		9 Dec 2002 a
Benin	25 May 2000	
Bolivia	10 Dec 1999	27 Sep 2000
Bosnia and Herzegovina	7 Sep 2000	4 Sep 2002
Botswana		21 Feb 2007 a
Brazil	13 Mar 2001	28 Jun 2002
Bulgaria	6 Jun 2000	20 Sep 2006
Burkina Faso	16 Nov 2001	10 Oct 2005
Burundi	13 Nov 2001	
Cambodia	11 Nov 2001	13 Oct 2010
Cameroon		7 Jan 2005 a
Canada		18 Oct 2002 a
Chile	10 Dec 1999	
Colombia	10 Dec 1999	23 Jan 2007
Congo	29 Sep 2008	
Cook Islands		27 Nov 2007 a
Costa Rica	10 Dec 1999	20 Sep 2001
Croatia	5 Jun 2000	7 Mar 2001
Cuba	17 Mar 2000	
Cyprus	8 Feb 2001	26 Apr 2002
Czech Republic	10 Dec 1999	26 Feb 2001
Denmark	10 Dec 1999	31 May 2000
Dominican Republic	14 Mar 2000	10 Aug 2001
Ecuador	10 Dec 1999	5 Feb 2002
El Salvador	4 Apr 2001	
Equatorial Guinea		16 Oct 2009 a
Finland	10 Dec 1999	29 Dec 2000
France	10 Dec 1999	9 Jun 2000
Gabon		5 Nov 2004 a
Georgia		1 Aug 2002 a
Germany	10 Dec 1999	15 Jan 2002
Ghana	24 Feb 2000	3 Feb 2011
Greece	10 Dec 1999	24 Jan 2002
Guatemala	7 Sep 2000	9 May 2002
Guinea-Bissau	12 Sep 2000	5 Aug 2009
Hungary		22 Dec 2000 a

Iceland	10 Dec 1999	6 Mar 2001
Indonesia	28 Feb 2000	
Ireland	7 Sep 2000	7 Sep 2000
Italy	10 Dec 1999	22 Sep 2000
Kazakhstan	6 Sep 2000	24 Aug 2001
Kyrgyzstan		22 Jul 2002 a
Lesotho	6 Sep 2000	24 Sep 2004
Liberia	22 Sep 2004	
Libyan Arab Jamahiriya		18 Jun 2004 a
Liechtenstein	10 Dec 1999	24 Oct 2001
Lithuania	8 Sep 2000	5 Aug 2004
Luxembourg	10 Dec 1999	1 Jul 2003
Madagascar	7 Sep 2000	
Malawi	7 Sep 2000	
Maldives		13 Mar 2006 a
Mali		5 Dec 2000 a
Mauritius	11 Nov 2001	31 Oct 2008
Mexico	10 Dec 1999	15 Mar 2002
Mongolia	7 Sep 2000	28 Mar 2002
Montenegro <sup>2</sup>		23 Oct 2006 d
Mozambique		4 Nov 2008 a
Namibia	19 May 2000	26 May 2000
Nepal	18 Dec 2001	15 Jun 2007
Netherlands <sup>3</sup>	10 Dec 1999	22 May 2002
New Zealand <sup>4</sup>	7 Sep 2000	7 Sep 2000
Niger		30 Sep 2004 a
Nigeria	8 Sep 2000	22 Nov 2004
Norway	10 Dec 1999	5 Mar 2002
Panama	9 Jun 2000	9 May 2001
Paraguay	28 Dec 1999	14 May 2001
Peru	22 Dec 2000	9 Apr 2001
Philippines	21 Mar 2000	12 Nov 2003
Poland		22 Dec 2003 a
Portugal	16 Feb 2000	26 Apr 2002
Republic of Korea		18 Oct 2006 a
Republic of Moldova		28 Feb 2006 a
Romania	6 Sep 2000	25 Aug 2003
Russian Federation	8 May 2001	28 Jul 2004



Rwanda		15 Dec 2008 a
San Marino		15 Sep 2005 a
Sao Tome and Principe	6 Sep 2000	
Senegal	10 Dec 1999	26 May 2000
Serbia		31 Jul 2003 a
Seychelles	22 Jul 2002	1 Mar 2011
Sierra Leone	8 Sep 2000	
Slovakia	5 Jun 2000	17 Nov 2000
Slovenia	10 Dec 1999	23 Sep 2004
Solomon Islands		6 May 2002 a
South Africa		18 Oct 2005 a
Spain	14 Mar 2000	6 Jul 2001
Sri Lanka		15 Oct 2002 a
St. Kitts and Nevis		20 Jan 2006 a
Sweden	10 Dec 1999	24 Apr 2003
Switzerland	15 Feb 2007	29 Sep 2008
Tajikistan	7 Sep 2000	
Thailand	14 Jun 2000	14 Jun 2000
The former Yugoslav Republic of Macedonia	3 Apr 2000	17 Oct 2003
Timor-Leste		16 Apr 2003 a
Tunisia		23 Sep 2008 a
Turkey	8 Sep 2000	29 Oct 2002
Turkmenistan		20 May 2009 a
Ukraine	7 Sep 2000	26 Sep 2003
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland <sup>5</sup>		17 Dec 2004 a
United Republic of Tanzania		12 Jan 2006 a
Uruguay	9 May 2000	26 Jul 2001
Vanuatu		17 May 2007 a
Venezuela (Bolivarian Republic of)	17 Mar 2000	13 May 2002
Zambia	29 Sep 2008	

(25)

**CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA TORTURA Y  
OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O  
DEGRADANTES**

STATUS AS AT : 24-09-2011 07:14:07 EDT

**CHAPTER IV  
HUMAN RIGHTS**

**9 . Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading  
Treatment or Punishment**

New York, 10 December 1984

**Entry into force** : 26 June 1987, in accordance with article 27(1) <sup>1</sup>

**Registration** : 26 June 1987, No. 24841

**Status** : Signatories : 78. Parties : 149

**Text** : United Nations, *Treaty Series* , vol. 1465, p. 85.

**Note** : The Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, was adopted by resolution 39/46<sup>2</sup> of 10 December 1984 at the thirty-ninth session of the General Assembly of the United Nations. The Convention is open for signature by all States, in accordance with its article 25.

Participant <sup>3</sup>	Signature	Ratification, Accession(a), Succession(d)
Afghanistan	4 Feb 1985	1 Apr 1987
Albania		11 May 1994 a
Algeria	26 Nov 1985	12 Sep 1989
Andorra	5 Aug 2002	22 Sep 2006
Antigua and Barbuda		19 Jul 1993 a
Argentina	4 Feb 1985	24 Sep 1986
Armenia		13 Sep 1993 a
Australia	10 Dec 1985	8 Aug 1989
Austria	14 Mar 1985	29 Jul 1987
Azerbaijan		16 Aug 1996 a
Bahamas	16 Dec 2008	

Bahrain		6 Mar 1998 a
Bangladesh		5 Oct 1998 a
Belarus	19 Dec 1985	13 Mar 1987
Belgium	4 Feb 1985	25 Jun 1999
Belize		17 Mar 1986 a
Benin		12 Mar 1992 a
Bolivia	4 Feb 1985	12 Apr 1999
Bosnia and Herzegovina <sup>4</sup>		1 Sep 1993 d
Botswana	8 Sep 2000	8 Sep 2000
Brazil	23 Sep 1985	28 Sep 1989
Bulgaria	10 Jun 1986	16 Dec 1986
Burkina Faso		4 Jan 1999 a
Burundi		18 Feb 1993 a
Cambodia		15 Oct 1992 a
Cameroon		19 Dec 1986 a
Canada	23 Aug 1985	24 Jun 1987
Cape Verde		4 Jun 1992 a
Chad		9 Jun 1995 a
Chile	23 Sep 1987	30 Sep 1988
China <sup>5, 6</sup>	12 Dec 1986	4 Oct 1988
Colombia	10 Apr 1985	8 Dec 1987
Comoros	22 Sep 2000	
Congo		30 Jul 2003 a
Costa Rica	4 Feb 1985	11 Nov 1993
Côte d'Ivoire		18 Dec 1995 a
Croatia <sup>4</sup>		12 Oct 1992 d
Cuba	27 Jan 1986	17 May 1995
Cyprus	9 Oct 1985	18 Jul 1991
Czech Republic <sup>7</sup>		22 Feb 1993 d
Democratic Republic of the Congo		18 Mar 1996 a
Denmark	4 Feb 1985	27 May 1987
Djibouti		5 Nov 2002 a
Dominican Republic	4 Feb 1985	
Ecuador	4 Feb 1985	30 Mar 1988
Egypt		25 Jun 1986 a
El Salvador		17 Jun 1996 a
Equatorial Guinea		8 Oct 2002 a
Estonia		21 Oct 1991 a

Ethiopia		14 Mar 1994 a
Finland	4 Feb 1985	30 Aug 1989
France	4 Feb 1985	18 Feb 1986
Gabon	21 Jan 1986	8 Sep 2000
Gambia	23 Oct 1985	
Georgia		26 Oct 1994 a
Germany <sup>3, 8</sup>	13 Oct 1986	1 Oct 1990
Ghana	7 Sep 2000	7 Sep 2000
Greece <sup>8</sup>	4 Feb 1985	6 Oct 1988
Guatemala		5 Jan 1990 a
Guinea	30 May 1986	10 Oct 1989
Guinea-Bissau	12 Sep 2000	
Guyana	25 Jan 1988	19 May 1988
Holy See		26 Jun 2002 a
Honduras		5 Dec 1996 a
Hungary	28 Nov 1986	15 Apr 1987
Iceland	4 Feb 1985	23 Oct 1996
India	14 Oct 1997	
Indonesia	23 Oct 1985	28 Oct 1998
Iraq		7 Jul 2011 a
Ireland	28 Sep 1992	11 Apr 2002
Israel	22 Oct 1986	3 Oct 1991
Italy	4 Feb 1985	12 Jan 1989
Japan		29 Jun 1999 a
Jordan		13 Nov 1991 a
Kazakhstan		26 Aug 1998 a
Kenya		21 Feb 1997 a
Kuwait		8 Mar 1996 a
Kyrgyzstan		5 Sep 1997 a
Lao People's Democratic Republic	21 Sep 2010	
Latvia		14 Apr 1992 a
Lebanon		5 Oct 2000 a
Lesotho		12 Nov 2001 a
Liberia		22 Sep 2004 a
Libyan Arab Jamahiriya		16 May 1989 a
Liechtenstein	27 Jun 1985	2 Nov 1990
Lithuania		1 Feb 1996 a
Luxembourg	22 Feb 1985	29 Sep 1987

Madagascar	1 Oct 2001	13 Dec 2005
Malawi		11 Jun 1996 a
Maldives		20 Apr 2004 a
Mali		26 Feb 1999 a
Malta		13 Sep 1990 a
Mauritania		17 Nov 2004 a
Mauritius		9 Dec 1992 a
Mexico	18 Mar 1985	23 Jan 1986
Monaco		6 Dec 1991 a
Mongolia		24 Jan 2002 a
Montenegro <sup>9</sup>		23 Oct 2006 d
Morocco	8 Jan 1986	21 Jun 1993
Mozambique		14 Sep 1999 a
Namibia		28 Nov 1994 a
Nauru	12 Nov 2001	
Nepal		14 May 1991 a
Netherlands <sup>10</sup>	4 Feb 1985	21 Dec 1988
New Zealand	14 Jan 1986	10 Dec 1989
Nicaragua	15 Apr 1985	5 Jul 2005
Niger		5 Oct 1998 a
Nigeria	28 Jul 1988	28 Jun 2001
Norway	4 Feb 1985	9 Jul 1986
Pakistan	17 Apr 2008	23 Jun 2010
Palau	20 Sep 2011	
Panama	22 Feb 1985	24 Aug 1987
Paraguay	23 Oct 1989	12 Mar 1990
Peru	29 May 1985	7 Jul 1988
Philippines		18 Jun 1986 a
Poland	13 Jan 1986	26 Jul 1989
Portugal <sup>5</sup>	4 Feb 1985	9 Feb 1989
Qatar		11 Jan 2000 a
Republic of Korea		9 Jan 1995 a
Republic of Moldova		28 Nov 1995 a
Romania		18 Dec 1990 a
Russian Federation	10 Dec 1985	3 Mar 1987
Rwanda		15 Dec 2008 a
San Marino	18 Sep 2002	27 Nov 2006
Sao Tome and Principe	6 Sep 2000	

Saudi Arabia		23 Sep 1997 a
Senegal	4 Feb 1985	21 Aug 1986
Serbia <sup>4</sup>		12 Mar 2001 d
Seychelles		5 May 1992 a
Sierra Leone	18 Mar 1985	25 Apr 2001
Slovakia <sup>7</sup>		28 May 1993 d
Slovenia		16 Jul 1993 a
Somalia		24 Jan 1990 a
South Africa	29 Jan 1993	10 Dec 1998
Spain	4 Feb 1985	21 Oct 1987
Sri Lanka		3 Jan 1994 a
St. Vincent and the Grenadines		1 Aug 2001 a
Sudan	4 Jun 1986	
Swaziland		26 Mar 2004 a
Sweden	4 Feb 1985	8 Jan 1986
Switzerland	4 Feb 1985	2 Dec 1986
Syrian Arab Republic		19 Aug 2004 a
Tajikistan		11 Jan 1995 a
Thailand		2 Oct 2007 a
The former Yugoslav Republic of Macedonia <sup>4</sup>		12 Dec 1994 d
Timor-Leste		16 Apr 2003 a
Togo	25 Mar 1987	18 Nov 1987
Tunisia	26 Aug 1987	23 Sep 1988
Turkey	25 Jan 1988	2 Aug 1988
Turkmenistan		25 Jun 1999 a
Uganda		3 Nov 1986 a
Ukraine	27 Feb 1986	24 Feb 1987
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland <sup>6, 11</sup>	15 Mar 1985	8 Dec 1988
United States of America <sup>12</sup>	18 Apr 1988	21 Oct 1994
Uruguay	4 Feb 1985	24 Oct 1986
Uzbekistan		28 Sep 1995 a
Vanuatu		12 Jul 2011 a
Venezuela (Bolivarian Republic of)	15 Feb 1985	29 Jul 1991
Yemen		5 Nov 1991 a
Zambia		7 Oct 1998 a

(26)

**CONVENCIÓN INTERNACIONAL**  
**CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS**  
**CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES**  
**- ENMIENDAS A LOS ARTÍCULOS 17 (7) Y 18 (5) -**

STATUS AS AT : 24-09-2011 07:14:07 EDT

**CHAPTER IV**  
**HUMAN RIGHTS**

**9 .a Amendments to articles 17 (7) and 18 (5) of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment**  
New York, 8 September 1992

**Not yet in force** : see article 29 of the Convention which reads as follows: "1. Any State Party to this Convention may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties with a request that they notify him whether they favor a conference of States parties for the purpose of considering and voting upon the proposal. In the event that within four months from the date of such communication at least one third of the States Parties favours such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of the States Parties present and voting at the conference shall be submitted by the Secretary-General to all the States Parties for acceptance. 2. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of this article shall enter into force when two thirds of the States Parties to this Convention have notified the Secretary-General of the United Nations that they have accepted it in accordance with their respective constitutional processes. 3. When amendments enter into force, they shall be binding on those States Parties which have accepted them, other States Parties still being bound by the provisions of this Convention and any earlier amendments which they have accepted."

**Status** : Parties : 28

**Text** : Doc. CAT/sp/1992/L.1.

**Note** : The amendments were proposed by the Government of Australia and circulated by the Secretary-General under cover

of depositary notification C.N.10.1992.TREATIES-1 of 28 February 1992, in accordance with article 29 (1) of the Convention. The Conference of the States Parties convened by the Secretary-General in accordance with article 29 (1) adopted, on 8 September 1992, the amendments which were subsequently endorsed by the General Assembly in resolution 47/111<sup>1</sup> of 16 December 1992.

Participant	Acceptance(A)
Australia	15 Oct 1993 A
Bulgaria	2 Mar 1995 A
Canada	8 Feb 1995 A
China	10 Jul 2002 A
Colombia	1 Sep 1999 A
Cyprus	22 Feb 1994 A
Denmark	3 Sep 1993 A
Ecuador	6 Sep 1995 A
Finland	5 Feb 1993 A
France	24 May 1994 A
Germany	8 Oct 1996 A
Iceland	23 Oct 1996 A
Liberia	16 Sep 2005 A
Liechtenstein	24 Aug 1994 A
Luxembourg	31 Jan 2005 A
Mexico	15 Mar 2002 A
Netherlands <sup>2</sup>	24 Jan 1995 A
New Zealand	8 Oct 1993 A
Norway	6 Oct 1993 A
Philippines	27 Nov 1996 A
Poland	23 Mar 2009 A
Portugal	17 Apr 1998 A
Seychelles	23 Jul 1993 A
Spain	5 May 1999 A
Sweden	14 May 1993 A
Switzerland	10 Dec 1993 A
Ukraine	17 Jun 1994 A
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	7 Feb 1994 A



(27)

**PROTOCOLO FACULTATIVO A LA  
CONVENCIÓN INTERNACIONAL CONTRA  
LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS  
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES**

STATUS AS AT : 03-11-2009 01:47:59 EDT

**CHAPTER IV  
HUMAN RIGHTS**

**9 .b Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel,  
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment**  
 New York, 18 December 2002

**Entry into force** : 22 June 2006, in accordance with article 28(1) which reads as follows: "1. The present Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession. 2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession, the present Protocol shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of its own instrument of ratification or accession."

**Registration** : 22 June 2006, No. 24841

**Status** : Signatories : 63. Parties : 50

**Text** : GA Resolution A/RES/57/199 of 9 January 2003.

**Note** : The above Protocol was adopted on 18 December 2002 at the fifty-seventh session of the General Assembly of the United Nations by resolution A/RES/57/199. In accordance with article 27 (1), the Protocol was opened for signature on 4 February 2003, the first possible date, by any State that has signed the Convention. In accordance with operative paragraph 1 of General Assembly resolution A/RES/57/199, the Protocol is available for signature, ratification and accession at United Nations Headquarters in New York.

Participant	Signature, Succession to	Ratification, Accession(a), Succession(d)
-------------	-----------------------------	--

	signature(d)	
Albania		1 Oct 2003 a
Argentina	30 Apr 2003	15 Nov 2004
Armenia		14 Sep 2006 a
Australia	19 May 2009	
Austria	25 Sep 2003	
<u>Azerbaijan</u>	15 Sep 2005	28 Jan 2009
<u>Belgium</u>	24 Oct 2005	
Benin	24 Feb 2005	20 Sep 2006
Bolivia	22 May 2006	23 May 2006
Bosnia and Herzegovina	7 Dec 2007	24 Oct 2008
Brazil	13 Oct 2003	12 Jan 2007
Burkina Faso	21 Sep 2005	
Cambodia	14 Sep 2005	30 Mar 2007
Chile	6 Jun 2005	12 Dec 2008
Congo	29 Sep 2008	
Costa Rica	4 Feb 2003	1 Dec 2005
Croatia	23 Sep 2003	25 Apr 2005
Cyprus	26 Jul 2004	29 Apr 2009
Czech Republic	13 Sep 2004	10 Jul 2006
Denmark <sup>1</sup>	26 Jun 2003	25 Jun 2004
Ecuador	24 May 2007	
Estonia	21 Sep 2004	18 Dec 2006
Finland	23 Sep 2003	
<u>France</u>	16 Sep 2005	11 Nov 2008
Gabon	15 Dec 2004	
Georgia		9 Aug 2005 a
<u>Germany</u>	20 Sep 2006	4 Dec 2008
Ghana	6 Nov 2006	
Guatemala	25 Sep 2003	9 Jun 2008
Guinea	16 Sep 2005	
Honduras	8 Dec 2004	23 May 2006
Iceland	24 Sep 2003	
Ireland	2 Oct 2007	
Italy	20 Aug 2003	
Kazakhstan	25 Sep 2007	22 Oct 2008
Kyrgyzstan		29 Dec 2008 a
Lebanon		22 Dec 2008 a

Liberia		22 Sep 2004 a
Liechtenstein	24 Jun 2005	3 Nov 2006
Luxembourg	13 Jan 2005	
Madagascar	24 Sep 2003	
Maldives	14 Sep 2005	15 Feb 2006
Mali	19 Jan 2004	12 May 2005
Malta	24 Sep 2003	24 Sep 2003
Mauritius		21 Jun 2005 a
Mexico	23 Sep 2003	11 Apr 2005
Montenegro <sup>2</sup>	23 Oct 2006 d	6 Mar 2009
Netherlands	3 Jun 2005	
New Zealand <sup>3</sup>	23 Sep 2003	14 Mar 2007
Nicaragua	14 Mar 2007	25 Feb 2009
Nigeria		27 Jul 2009 a
Norway	24 Sep 2003	
Paraguay	22 Sep 2004	2 Dec 2005
Peru		14 Sep 2006 a
Poland	5 Apr 2004	14 Sep 2005
Portugal	15 Feb 2006	
Republic of Moldova	16 Sep 2005	24 Jul 2006
<u>Romania</u>	24 Sep 2003	2 Jul 2009
Senegal	4 Feb 2003	18 Oct 2006
Serbia	25 Sep 2003	26 Sep 2006
Sierra Leone	26 Sep 2003	
Slovenia		23 Jan 2007 a
South Africa	20 Sep 2006	
Spain	13 Apr 2005	4 Apr 2006
Sweden	26 Jun 2003	14 Sep 2005
Switzerland	25 Jun 2004	24 Sep 2009
The former Yugoslav Republic of Macedonia	1 Sep 2006	13 Feb 2009
Timor-Leste	16 Sep 2005	
Togo	15 Sep 2005	
Turkey	14 Sep 2005	
Ukraine	23 Sep 2005	19 Sep 2006
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	26 Jun 2003	10 Dec 2003
Uruguay	12 Jan 2004	8 Dec 2005

(28)

## **CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO**

STATUS AS AT : 24-09-2011 07:14:07 EDT

### **CHAPTER IV HUMAN RIGHTS**

#### **11 . Convention on the Rights of the Child** New York, 20 November 1989

**Entry into force** : 2 September 1990, in accordance with article 49(1)

**Registration** : 2 September 1990, No. 27531

**Status** : Signatories : 140. Parties : 193

**Text** : United Nations, *Treaty Series* , vol. 1577, p. 3; depositary notifications C.N.147.1993.TREATIES-5 of 15 May 1993 [amendments to article 43 (2)]<sup>1</sup>; and C.N.322.1995.TREATIES-7 of 7 November 1995 [amendment to article 43 (2)].

**Note** : The Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, was adopted by resolution 44/25<sup>2</sup> of 20 November 1989 at the Forty-fourth session of the General Assembly of the United Nations. The Convention is open for signature by all States at the Headquarters of the United Nations in New York.

Participant	Signature	Ratification, Acceptance(A), Accession(a), Succession(d)
Afghanistan	27 Sep 1990	28 Mar 1994
Albania	26 Jan 1990	27 Feb 1992
Algeria	26 Jan 1990	16 Apr 1993
Andorra	2 Oct 1995	2 Jan 1996
Angola	14 Feb 1990	5 Dec 1990
Antigua and Barbuda	12 Mar 1991	5 Oct 1993
Argentina	29 Jun 1990	4 Dec 1990
Armenia		23 Jun 1993 a
Australia	22 Aug 1990	17 Dec 1990
Austria	26 Aug 1990	6 Aug 1992
Azerbaijan		13 Aug 1992 a

Bahamas	30 Oct 1990	20 Feb 1991
Bahrain		13 Feb 1992 a
Bangladesh	26 Jan 1990	3 Aug 1990
Barbados	19 Apr 1990	9 Oct 1990
Belarus	26 Jan 1990	1 Oct 1990
Belgium	26 Jan 1990	16 Dec 1991
Belize	2 Mar 1990	2 May 1990
Benin	25 Apr 1990	3 Aug 1990
Bhutan	4 Jun 1990	1 Aug 1990
Bolivia	8 Mar 1990	26 Jun 1990
Bosnia and Herzegovina <sup>3</sup>		1 Sep 1993 d
Botswana		14 Mar 1995 a
Brazil	26 Jan 1990	24 Sep 1990
Brunei Darussalam		27 Dec 1995 a
Bulgaria	31 May 1990	3 Jun 1991
Burkina Faso	26 Jan 1990	31 Aug 1990
Burundi	8 May 1990	19 Oct 1990
Cambodia		15 Oct 1992 a
Cameroon	25 Sep 1990	11 Jan 1993
Canada	28 May 1990	13 Dec 1991
Cape Verde		4 Jun 1992 a
Central African Republic	30 Jul 1990	23 Apr 1992
Chad	30 Sep 1990	2 Oct 1990
Chile	26 Jan 1990	13 Aug 1990
China <sup>4, 5</sup>	29 Aug 1990	2 Mar 1992
Colombia	26 Jan 1990	28 Jan 1991
Comoros	30 Sep 1990	22 Jun 1993
Congo		14 Oct 1993 a
Cook Islands		6 Jun 1997 a
Costa Rica	26 Jan 1990	21 Aug 1990
Côte d'Ivoire	26 Jan 1990	4 Feb 1991
Croatia <sup>3</sup>		12 Oct 1992 d
Cuba	26 Jan 1990	21 Aug 1991
Cyprus	5 Oct 1990	7 Feb 1991
Czech Republic <sup>6</sup>		22 Feb 1993 d
Democratic People's Republic of Korea	23 Aug 1990	21 Sep 1990
Democratic Republic of the Congo	20 Mar 1990	27 Sep 1990

Denmark <sup>7</sup>	26 Jan 1990	19 Jul 1991
Djibouti	30 Sep 1990	6 Dec 1990
Dominica	26 Jan 1990	13 Mar 1991
Dominican Republic	8 Aug 1990	11 Jun 1991
Ecuador	26 Jan 1990	23 Mar 1990
Egypt <sup>8</sup>	5 Feb 1990	6 Jul 1990
El Salvador	26 Jan 1990	10 Jul 1990
Equatorial Guinea		15 Jun 1992 a
Eritrea	20 Dec 1993	3 Aug 1994
Estonia		21 Oct 1991 a
Ethiopia		14 May 1991 a
Fiji	2 Jul 1993	13 Aug 1993
Finland	26 Jan 1990	20 Jun 1991
France	26 Jan 1990	7 Aug 1990
Gabon	26 Jan 1990	9 Feb 1994
Gambia	5 Feb 1990	8 Aug 1990
Georgia		2 Jun 1994 a
Germany <sup>9</sup>	26 Jan 1990	6 Mar 1992
Ghana	29 Jan 1990	5 Feb 1990
Greece	26 Jan 1990	11 May 1993
Grenada	21 Feb 1990	5 Nov 1990
Guatemala	26 Jan 1990	6 Jun 1990
Guinea		13 Jul 1990 a
Guinea-Bissau	26 Jan 1990	20 Aug 1990
Guyana	30 Sep 1990	14 Jan 1991
Haiti	26 Jan 1990	8 Jun 1995
Holy See	20 Apr 1990	20 Apr 1990
Honduras	31 May 1990	10 Aug 1990
Hungary	14 Mar 1990	7 Oct 1991
Iceland	26 Jan 1990	28 Oct 1992
India		11 Dec 1992 a
Indonesia	26 Jan 1990	5 Sep 1990
Iran (Islamic Republic of)	5 Sep 1991	13 Jul 1994
Iraq		15 Jun 1994 a
Ireland	30 Sep 1990	28 Sep 1992
Israel	3 Jul 1990	3 Oct 1991
Italy	26 Jan 1990	5 Sep 1991
Jamaica	26 Jan 1990	14 May 1991

Japan	21 Sep 1990	22 Apr 1994
Jordan	29 Aug 1990	24 May 1991
Kazakhstan	16 Feb 1994	12 Aug 1994
Kenya	26 Jan 1990	30 Jul 1990
Kiribati		11 Dec 1995 a
Kuwait	7 Jun 1990	21 Oct 1991
Kyrgyzstan		7 Oct 1994 a
Lao People's Democratic Republic		8 May 1991 a
Latvia		14 Apr 1992 a
Lebanon	26 Jan 1990	14 May 1991
Lesotho	21 Aug 1990	10 Mar 1992
Liberia	26 Apr 1990	4 Jun 1993
Libyan Arab Jamahiriya		15 Apr 1993 a
Liechtenstein <sup>10</sup>	30 Sep 1990	22 Dec 1995
Lithuania		31 Jan 1992 a
Luxembourg	21 Mar 1990	7 Mar 1994
Madagascar	19 Apr 1990	19 Mar 1991
Malawi		2 Jan 1991 a
Malaysia		17 Feb 1995 a
Maldives	21 Aug 1990	11 Feb 1991
Mali	26 Jan 1990	20 Sep 1990
Malta	26 Jan 1990	30 Sep 1990
Marshall Islands	14 Apr 1993	4 Oct 1993
Mauritania	26 Jan 1990	16 May 1991
Mauritius		26 Jul 1990 a
Mexico	26 Jan 1990	21 Sep 1990
Micronesia (Federated States of)		5 May 1993 a
Monaco		21 Jun 1993 a
Mongolia	26 Jan 1990	5 Jul 1990
Montenegro <sup>11</sup>		23 Oct 2006 d
Morocco	26 Jan 1990	21 Jun 1993
Mozambique	30 Sep 1990	26 Apr 1994
Myanmar		15 Jul 1991 a
Namibia	26 Sep 1990	30 Sep 1990
Nauru		27 Jul 1994 a
Nepal	26 Jan 1990	14 Sep 1990
Netherlands <sup>12</sup>	26 Jan 1990	6 Feb 1995 A
New Zealand <sup>13</sup>	1 Oct 1990	6 Apr 1993

Nicaragua	6 Feb 1990	5 Oct 1990
Niger	26 Jan 1990	30 Sep 1990
Nigeria	26 Jan 1990	19 Apr 1991
Niue		20 Dec 1995 a
Norway	26 Jan 1990	8 Jan 1991
Oman		9 Dec 1996 a
Pakistan	20 Sep 1990	12 Nov 1990
Palau		4 Aug 1995 a
Panama	26 Jan 1990	12 Dec 1990
Papua New Guinea	30 Sep 1990	2 Mar 1993
Paraguay	4 Apr 1990	25 Sep 1990
Peru	26 Jan 1990	4 Sep 1990
Philippines	26 Jan 1990	21 Aug 1990
Poland	26 Jan 1990	7 Jun 1991
Portugal <sup>4</sup>	26 Jan 1990	21 Sep 1990
Qatar	8 Dec 1992	3 Apr 1995
Republic of Korea	25 Sep 1990	20 Nov 1991
Republic of Moldova		26 Jan 1993 a
Romania	26 Jan 1990	28 Sep 1990
Russian Federation	26 Jan 1990	16 Aug 1990
Rwanda	26 Jan 1990	24 Jan 1991
Samoa	30 Sep 1990	29 Nov 1994
San Marino		25 Nov 1991 a
Sao Tome and Principe		14 May 1991 a
Saudi Arabia		26 Jan 1996 a
Senegal	26 Jan 1990	31 Jul 1990
Serbia <sup>3</sup>		12 Mar 2001 d
Seychelles		7 Sep 1990 a
Sierra Leone	13 Feb 1990	18 Jun 1990
Singapore		5 Oct 1995 a
Slovakia <sup>6</sup>		28 May 1993 d
Slovenia <sup>3</sup>		6 Jul 1992 d
Solomon Islands		10 Apr 1995 a
Somalia	9 May 2002	
South Africa	29 Jan 1993	16 Jun 1995
Spain	26 Jan 1990	6 Dec 1990
Sri Lanka	26 Jan 1990	12 Jul 1991
St. Kitts and Nevis	26 Jan 1990	24 Jul 1990



St. Lucia	30 Sep 1990	16 Jun 1993
St. Vincent and the Grenadines	20 Sep 1993	26 Oct 1993
Sudan	24 Jul 1990	3 Aug 1990
Suriname	26 Jan 1990	1 Mar 1993
Swaziland	22 Aug 1990	7 Sep 1995
Sweden	26 Jan 1990	29 Jun 1990
Switzerland	1 May 1991	24 Feb 1997
Syrian Arab Republic	18 Sep 1990	15 Jul 1993
Tajikistan		26 Oct 1993 a
Thailand		27 Mar 1992 a
The former Yugoslav Republic of Macedonia <sup>3, 14</sup>		2 Dec 1993 d
Timor-Leste		16 Apr 2003 a
Togo	26 Jan 1990	1 Aug 1990
Tonga		6 Nov 1995 a
Trinidad and Tobago	30 Sep 1990	5 Dec 1991
Tunisia	26 Feb 1990	30 Jan 1992
Turkey	14 Sep 1990	4 Apr 1995
Turkmenistan		20 Sep 1993 a
Tuvalu		22 Sep 1995 a
Uganda	17 Aug 1990	17 Aug 1990
Ukraine	21 Feb 1990	28 Aug 1991
United Arab Emirates		3 Jan 1997 a
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland <sup>5, 15</sup>	19 Apr 1990	16 Dec 1991
United Republic of Tanzania	1 Jun 1990	10 Jun 1991
United States of America	16 Feb 1995	
Uruguay	26 Jan 1990	20 Nov 1990
Uzbekistan		29 Jun 1994 a
Vanuatu	30 Sep 1990	7 Jul 1993
Venezuela (Bolivarian Republic of)	26 Jan 1990	13 Sep 1990
Viet Nam	26 Jan 1990	28 Feb 1990
Yemen <sup>16</sup>	13 Feb 1990	1 May 1991
Zambia	30 Sep 1990	6 Dec 1991
Zimbabwe	8 Mar 1990	11 Sep 1990

(29)

**CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO**  
**- ENMIENDA AL ARTÍCULO 43 (2) -**

STATUS AS AT : 24-09-2011 07:14:07 EDT

**CHAPTER IV**  
**HUMAN RIGHTS**

**11 .a Amendment to article 43 (2) of the Convention on the Rights of the Child**

New York, 12 December 1995

**Entry into force** : 18 November 2002, in accordance with article 50(2)

**Registration** : 18 November 2002, No. 27531

**Status** : Parties : 143

**Text** : United Nations, *Treaty Series*, vol. 2199, p. 210; Doc. CRC/SP/1995/L.1/Rev.1.

**Note** : The amendment was proposed by the Government of Costa Rica and circulated by the Secretary-General under cover of depositary notification C.N.138.1995.TREATIES-3 of 22 May 1995 in accordance with article 50 (1) of the Convention. The Conference of the States Parties, convened by the Secretary-General in accordance with article 50 (1) of the Convention, adopted the amendment on 12 December 1995 which was subsequently approved by General Assembly in Resolution No. 155 of 21 December 1995.

Participant	Acceptance(A), Succession(d)
Algeria	21 Jan 1998 A
Andorra	17 Jan 1997 A
Argentina	2 Mar 1999 A
Austria	1 Feb 2002 A
Bahamas	23 Oct 2001 A
Bahrain	13 Jun 2000 A
Bangladesh	23 Apr 1997 A
Belarus	23 Sep 2003 A
Belgium	29 Jun 2004 A
Belize	15 Dec 2000 A

Bhutan	17 Mar 1999 A
Bolivia	15 Mar 1999 A
Botswana	6 Mar 2002 A
Brazil	26 Feb 1998 A
Brunei Darussalam	28 Jun 2000 A
Bulgaria	25 Jun 1999 A
Burkina Faso	26 Jul 1999 A
Cambodia	12 Aug 1997 A
Cameroon	5 Oct 2001 A
Canada	17 Sep 1997 A
Chad	16 May 2002 A
Chile	19 Aug 1997 A
China	10 Jul 2002 A
Colombia	31 Jan 1997 A
Congo	28 Feb 2000 A
Costa Rica	12 Feb 1997 A
Côte d'Ivoire	25 Sep 2001 A
Croatia	26 May 1998 A
Cuba	23 Oct 1996 A
Cyprus	20 Sep 2001 A
Czech Republic	23 May 2000 A
Democratic People's Republic of Korea	23 Feb 2000 A
Denmark	10 Sep 1996 A
Djibouti	21 Sep 2001 A
Dominica	5 Jul 2001 A
Ecuador	25 Feb 1998 A
Egypt	28 Dec 1998 A
Estonia	6 Dec 2000 A
Ethiopia	15 Apr 1998 A
Fiji	20 Aug 1997 A
Finland	3 Jan 1997 A
France	20 Jun 1997 A
Georgia	11 Apr 2000 A
Germany	25 Jun 1997 A
Ghana	3 Feb 2011 A
Greece	23 Sep 1997 A
Grenada	20 May 1999 A
Guatemala	26 Dec 2002 A

Guinea	14 May 1999 A
Guyana	15 Sep 1998 A
Haiti	20 Dec 2000 A
Holy See	15 Aug 1996 A
Iceland	14 Jan 2000 A
Indonesia	17 Dec 1998 A
Iran (Islamic Republic of)	13 Nov 2001 A
Iraq	31 Dec 2001 A
Ireland	18 Nov 2002 A
Israel	27 Dec 1999 A
Italy	14 Sep 1999 A
Jamaica	6 Apr 1998 A
Japan	12 Jun 2003 A
Jordan	24 Sep 2002 A
Kenya	12 Feb 2003 A
Kiribati	9 Sep 2002 A
Kuwait	9 May 2003 A
Kyrgyzstan	31 May 2000 A
Lao People's Democratic Republic	22 Sep 1997 A
Latvia	15 Nov 2005 A
Lebanon	14 Jul 2000 A
Lesotho	12 Nov 2001 A
Liberia	16 Sep 2005 A
Libyan Arab Jamahiriya	24 Sep 2004 A
Liechtenstein	21 Jan 2000 A
Lithuania	27 Mar 2002 A
Luxembourg	11 Jul 2000 A
Malaysia	19 Aug 2002 A
Maldives	2 Nov 1998 A
Mali	4 Mar 1999 A
Malta	1 May 1997 A
Mauritania	20 Aug 1999 A
Mauritius	25 Aug 1999 A
Mexico	22 Sep 1997 A
Monaco	26 May 1999 A
Mongolia	19 Dec 1997 A
Montenegro <sup>1</sup>	23 Oct 2006 d
Morocco	27 Jan 1997 A

Mozambique	4 Mar 1999 A
Myanmar	9 Jun 2000 A
Namibia	11 Dec 2001 A
Netherlands <sup>2</sup>	4 Dec 1996 A
New Zealand <sup>3</sup>	16 Jun 2000 A
Nicaragua	23 Jan 2003 A
Niger	24 Oct 2001 A
Norway	24 Feb 2000 A
Oman	16 Oct 2002 A
Pakistan	19 Jan 2000 A
Palau	26 Apr 2002 A
Panama	5 Nov 1996 A
Paraguay	12 Dec 2003 A
Peru	26 Jan 2000 A
Philippines	14 Jan 1998 A
Poland	2 Sep 1999 A
Portugal	29 Jun 1998 A
Qatar	5 May 1999 A
Republic of Korea	3 Feb 1999 A
Republic of Moldova	30 Jan 1998 A
Romania	3 Oct 2002 A
Russian Federation	1 May 1998 A
Rwanda	19 Sep 2001 A
Samoa	22 Mar 2002 A
San Marino	10 Oct 2000 A
Saudi Arabia	30 Jun 1997 A
Senegal	5 Nov 2003 A
Serbia	4 Oct 2001 A
Sierra Leone	27 Nov 2001 A
Singapore	29 Mar 2000 A
Slovakia	29 Jul 1999 A
South Africa	5 Aug 1997 A
Spain	13 Jan 1998 A
Sri Lanka	29 Feb 2000 A
Sudan	9 Apr 2001 A
Suriname	23 May 2002 A
Swaziland	17 Jan 2002 A
Sweden	17 Oct 1996 A

Switzerland	2 Dec 1997 A
Syrian Arab Republic	16 Jun 2000 A
Thailand	30 Apr 1998 A
The former Yugoslav Republic of Macedonia	16 Oct 1996 A
Togo	19 Jun 1996 A
Trinidad and Tobago	1 Nov 1996 A
Tunisia	29 Mar 2001 A
Turkey	9 Dec 1999 A
Uganda	27 Jun 1997 A
Ukraine	3 Jul 2003 A
United Arab Emirates	11 Nov 1997 A
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	17 Jul 1997 A
Uruguay	17 Feb 1999 A
Uzbekistan	25 Apr 1997 A
Venezuela (Bolivarian Republic of)	2 Nov 1998 A
Viet Nam	11 Jan 2000 A
Yemen	3 Apr 1997 A
Zambia	9 Aug 2000 A
Zimbabwe	27 Aug 2002 A

(30)

**PROTOCOLO FACULTATIVO**  
**A LA CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS DEL NIÑO**  
**RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN**  
**LOS CONFLICTOS ARMADOS**

STATUS AS AT : 24-09-2011 07:14:07 EDT

**CHAPTER IV**  
**HUMAN RIGHTS**

**11 .b Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on  
 the Involvement of Children in armed conflict**  
 New York, 25 May 2000

**Entry into force** : 12 February 2002, in accordance with article 10(1)

**Registration** : 12 February 2002, No. 27531

**Status** : Signatories : 129. Parties : 142

**Text** : United Nations, *Treaty Series*, vol. 2173, p. 222;  
 Doc.A/RES/54/263; and C.N.1031.2000.TREATIES-82 of 14  
 November 2000 [Rectification of the original of the Protocol  
 (Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish  
 authentic texts)]; C.N.865.2001.TREATIES-10 of 13  
 September 2001 [Rectification of the original of the Protocol  
 (Chinese, English, French, Russian and Spanish authentic  
 texts)].

**Note** : The Optional Protocol was adopted by resolution  
 A/RES/54/263 of 25 May 2000 at the fifty-fourth session of the  
 General Assembly of the United Nations. In accordance with  
 its article 9 (1), the Optional Protocol will be open for signature  
 by any State that is a party to the Convention or has signed it.

Participant	Signature	Ratification, Accession(a), Succession(d)
Afghanistan		24 Sep 2003 a
Albania		9 Dec 2008 a
Algeria		6 May 2009 a
Andorra	7 Sep 2000	30 Apr 2001
Angola		11 Oct 2007 a
Argentina	15 Jun 2000	10 Sep 2002

Armenia	24 Sep 2003	30 Sep 2005
Australia	21 Oct 2002	26 Sep 2006
Austria	6 Sep 2000	1 Feb 2002
Azerbaijan	8 Sep 2000	3 Jul 2002
Bahrain		21 Sep 2004 a
Bangladesh	6 Sep 2000	6 Sep 2000
Belarus		25 Jan 2006 a
Belgium <sup>1</sup>	6 Sep 2000	6 May 2002
Belize	6 Sep 2000	1 Dec 2003
Benin	22 Feb 2001	31 Jan 2005
Bhutan	15 Sep 2005	9 Dec 2009
Bolivia		22 Dec 2004 a
Bosnia and Herzegovina	7 Sep 2000	10 Oct 2003
Botswana	24 Sep 2003	4 Oct 2004
Brazil	6 Sep 2000	27 Jan 2004
Bulgaria	8 Jun 2001	12 Feb 2002
Burkina Faso	16 Nov 2001	6 Jul 2007
Burundi	13 Nov 2001	24 Jun 2008
Cambodia	27 Jun 2000	16 Jul 2004
Cameroon	5 Oct 2001	
Canada	5 Jun 2000	7 Jul 2000
Cape Verde		10 May 2002 a
Central African Republic	27 Sep 2010	
Chad	3 May 2002	28 Aug 2002
Chile	15 Nov 2001	31 Jul 2003
China <sup>2, 3</sup>	15 Mar 2001	20 Feb 2008
Colombia	6 Sep 2000	25 May 2005
Congo		24 Sep 2010 a
Costa Rica	7 Sep 2000	24 Jan 2003
Croatia	8 May 2002	1 Nov 2002
Cuba	13 Oct 2000	9 Feb 2007
Cyprus	1 Jul 2008	2 Jul 2010
Czech Republic	6 Sep 2000	30 Nov 2001
Democratic Republic of the Congo	8 Sep 2000	11 Nov 2001
Denmark <sup>4</sup>	7 Sep 2000	27 Aug 2002
Djibouti	14 Jun 2006	27 Apr 2011
Dominica		20 Sep 2002 a
Dominican Republic	9 May 2002	



Ecuador	6 Sep 2000	7 Jun 2004
Egypt		6 Feb 2007 a
El Salvador	18 Sep 2000	18 Apr 2002
Eritrea		16 Feb 2005 a
Estonia	24 Sep 2003	
Ethiopia	28 Sep 2010	
Fiji	16 Sep 2005	
Finland	7 Sep 2000	10 Apr 2002
France	6 Sep 2000	5 Feb 2003
Gabon	8 Sep 2000	21 Sep 2010
Gambia	21 Dec 2000	
Georgia		3 Aug 2010 a
Germany	6 Sep 2000	13 Dec 2004
Ghana	24 Sep 2003	
Greece	7 Sep 2000	22 Oct 2003
Guatemala	7 Sep 2000	9 May 2002
Guinea-Bissau	8 Sep 2000	
Guyana		11 Aug 2010 a
Haiti	15 Aug 2002	
Holy See	10 Oct 2000	24 Oct 2001
Honduras		14 Aug 2002 a
Hungary	11 Mar 2002	24 Feb 2010
Iceland	7 Sep 2000	1 Oct 2001
India	15 Nov 2004	30 Nov 2005
Indonesia	24 Sep 2001	
Iran (Islamic Republic of)	21 Sep 2010	
Iraq		24 Jun 2008 a
Ireland	7 Sep 2000	18 Nov 2002
Israel	14 Nov 2001	18 Jul 2005
Italy	6 Sep 2000	9 May 2002
Jamaica	8 Sep 2000	9 May 2002
Japan	10 May 2002	2 Aug 2004
Jordan	6 Sep 2000	23 May 2007
Kazakhstan	6 Sep 2000	10 Apr 2003
Kenya	8 Sep 2000	28 Jan 2002
Kuwait		26 Aug 2004 a
Kyrgyzstan		13 Aug 2003 a
Lao People's Democratic Republic		20 Sep 2006 a

Latvia	1 Feb 2002	19 Dec 2005
Lebanon	11 Feb 2002	
Lesotho	6 Sep 2000	24 Sep 2003
Liberia	22 Sep 2004	
Libyan Arab Jamahiriya		29 Oct 2004 a
Liechtenstein	8 Sep 2000	4 Feb 2005
Lithuania	13 Feb 2002	20 Feb 2003
Luxembourg	8 Sep 2000	4 Aug 2004
Madagascar	7 Sep 2000	22 Sep 2004
Malawi	7 Sep 2000	21 Sep 2010
Maldives	10 May 2002	29 Dec 2004
Mali	8 Sep 2000	16 May 2002
Malta	7 Sep 2000	9 May 2002
Mauritius	11 Nov 2001	12 Feb 2009
Mexico	7 Sep 2000	15 Mar 2002
Micronesia (Federated States of)	8 May 2002	
Monaco	26 Jun 2000	13 Nov 2001
Mongolia	12 Nov 2001	6 Oct 2004
Montenegro <sup>5</sup>		2 May 2007 d
Morocco	8 Sep 2000	22 May 2002
Mozambique		19 Oct 2004 a
Namibia	8 Sep 2000	16 Apr 2002
Nauru	8 Sep 2000	
Nepal	8 Sep 2000	3 Jan 2007
Netherlands	7 Sep 2000	24 Sep 2009
New Zealand <sup>2</sup>	7 Sep 2000	12 Nov 2001
Nicaragua		17 Mar 2005 a
Nigeria	8 Sep 2000	
Norway	13 Jun 2000	23 Sep 2003
Oman		17 Sep 2004 a
Pakistan	26 Sep 2001	
Panama	31 Oct 2000	8 Aug 2001
Paraguay	13 Sep 2000	27 Sep 2002
Peru	1 Nov 2000	8 May 2002
Philippines	8 Sep 2000	26 Aug 2003
Poland	13 Feb 2002	7 Apr 2005
Portugal	6 Sep 2000	19 Aug 2003
Qatar		25 Jul 2002 a

Republic of Korea	6 Sep 2000	24 Sep 2004
Republic of Moldova	8 Feb 2002	7 Apr 2004
Romania	6 Sep 2000	10 Nov 2001
Russian Federation	15 Feb 2001	24 Sep 2008
Rwanda		23 Apr 2002 a
San Marino	5 Jun 2000	
Saudi Arabia		10 Jun 2011 a
Senegal	8 Sep 2000	3 Mar 2004
Serbia	8 Oct 2001	31 Jan 2003
Seychelles	23 Jan 2001	10 Aug 2010
Sierra Leone	8 Sep 2000	15 May 2002
Singapore	7 Sep 2000	11 Dec 2008
Slovakia	30 Nov 2001	7 Jul 2006
Slovenia	8 Sep 2000	23 Sep 2004
Solomon Islands	24 Sep 2009	
Somalia	16 Sep 2005	
South Africa	8 Feb 2002	24 Sep 2009
Spain	6 Sep 2000	8 Mar 2002
Sri Lanka	21 Aug 2000	8 Sep 2000
St. Lucia	22 Sep 2011	
St. Vincent and the Grenadines		29 Mar 2011 a
Sudan	9 May 2002	26 Jul 2005
Suriname	10 May 2002	
Sweden	8 Jun 2000	20 Feb 2003
Switzerland	7 Sep 2000	26 Jun 2002
Syrian Arab Republic		17 Oct 2003 a
Tajikistan		5 Aug 2002 a
Thailand		27 Feb 2006 a
The former Yugoslav Republic of Macedonia	17 Jul 2001	12 Jan 2004
Timor-Leste		2 Aug 2004 a
Togo	15 Nov 2001	28 Nov 2005
Tunisia	22 Apr 2002	2 Jan 2003
Turkey	8 Sep 2000	4 May 2004
Turkmenistan		29 Apr 2005 a
Uganda		6 May 2002 a
Ukraine	7 Sep 2000	11 Jul 2005
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	7 Sep 2000	24 Jun 2003

United Republic of Tanzania		11 Nov 2004 a
United States of America	5 Jul 2000	23 Dec 2002
Uruguay	7 Sep 2000	9 Sep 2003
Uzbekistan		23 Dec 2008 a
Vanuatu	16 Sep 2005	26 Sep 2007
Venezuela (Bolivarian Republic of)	7 Sep 2000	23 Sep 2003
Viet Nam	8 Sep 2000	20 Dec 2001
Yemen		2 Mar 2007 a
Zambia	29 Sep 2008	

(31)

**PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA  
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO  
RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, LA PROSTITUCIÓN INFANTIL  
Y LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS EN LA PORNOGRAFÍA**

STATUS AS AT : 24-09-2011 07:14:07 EDT

**CHAPTER IV  
HUMAN RIGHTS**

**11 .c Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on  
the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography**  
 New York, 25 May 2000

**Entry into force** : 18 January 2002, in accordance with article 14(1)

**Registration** : 18 January 2002, No. 27531

**Status** : Signatories : 119. Parties : 148

**Text** : United Nations, *Treaty Series*, vol. 2171, p. 227;  
 Doc. A/RES/54/263; C.N.1032.2000.TREATIES-72 of 14  
 November 2000 [rectification of the the original of the  
 Protocol (Arabic, Chinese, English, French, Russian and  
 Spanish authentic texts)]; C.N.1008.2002.TREATIES-42 of 17  
 September 2002 (proposal of corrections to the original  
 chinese text) and C.N.1312.2002.TREATIES-49 of 16  
 December 2002 [rectification of the original of the Protocol  
 (Chinese authentic text)].

**Note** : The Optional Protocol was adopted by resolution  
 A/RES/54/263 of 25 May 2000 at the fifty-fourth session of the  
 General Assembly of the United Nations. In accordance with  
 its article 13 (1), the Optional Protocol will be open for  
 signature by any State that is a party to the Convention or has  
 signed it.

Participant	Signature	Ratification, Accession(a), Succession(d)
Afghanistan		19 Sep 2002 a
Albania		5 Feb 2008 a
Algeria		27 Dec 2006 a
Andorra	7 Sep 2000	30 Apr 2001

Angola		24 Mar 2005 a
Antigua and Barbuda	18 Dec 2001	30 Apr 2002
Argentina	1 Apr 2002	25 Sep 2003
Armenia	24 Sep 2003	30 Jun 2005
Australia	18 Dec 2001	8 Jan 2007
Austria	6 Sep 2000	6 May 2004
Azerbaijan	8 Sep 2000	3 Jul 2002
Bahrain		21 Sep 2004 a
Bangladesh	6 Sep 2000	6 Sep 2000
Belarus		23 Jan 2002 a
Belgium <sup>1</sup>	6 Sep 2000	17 Mar 2006
Belize	6 Sep 2000	1 Dec 2003
Benin	22 Feb 2001	31 Jan 2005
Bhutan	15 Sep 2005	26 Oct 2009
Bolivia	10 Nov 2001	3 Jun 2003
Bosnia and Herzegovina	7 Sep 2000	4 Sep 2002
Botswana		24 Sep 2003 a
Brazil	6 Sep 2000	27 Jan 2004
Brunei Darussalam		21 Nov 2006 a
Bulgaria	8 Jun 2001	12 Feb 2002
Burkina Faso	16 Nov 2001	31 Mar 2006
Burundi		6 Nov 2007 a
Cambodia	27 Jun 2000	30 May 2002
Cameroon	5 Oct 2001	
Canada	10 Nov 2001	14 Sep 2005
Cape Verde		10 May 2002 a
Central African Republic	27 Sep 2010	
Chad	3 May 2002	28 Aug 2002
Chile	28 Jun 2000	6 Feb 2003
China <sup>2</sup>	6 Sep 2000	3 Dec 2002
Colombia	6 Sep 2000	11 Nov 2003
Comoros		23 Feb 2007 a
Congo		27 Oct 2009 a
Costa Rica	7 Sep 2000	9 Apr 2002
Croatia	8 May 2002	13 May 2002
Cuba	13 Oct 2000	25 Sep 2001
Cyprus	8 Feb 2001	6 Apr 2006
Czech Republic	26 Jan 2005	

Democratic Republic of the Congo		11 Nov 2001 a
Denmark <sup>3</sup>	7 Sep 2000	24 Jul 2003
Djibouti	14 Jun 2006	27 Apr 2011
Dominica		20 Sep 2002 a
Dominican Republic		6 Dec 2006 a
Ecuador	6 Sep 2000	30 Jan 2004
Egypt		12 Jul 2002 a
El Salvador	13 Sep 2002	17 May 2004
Equatorial Guinea		7 Feb 2003 a
Eritrea		16 Feb 2005 a
Estonia	24 Sep 2003	3 Aug 2004
Fiji	16 Sep 2005	
Finland	7 Sep 2000	
France	6 Sep 2000	5 Feb 2003
Gabon	8 Sep 2000	1 Oct 2007
Gambia	21 Dec 2000	8 Apr 2010
Georgia		28 Jun 2005 a
Germany	6 Sep 2000	15 Jul 2009
Ghana	24 Sep 2003	
Greece	7 Sep 2000	22 Feb 2008
Guatemala	7 Sep 2000	9 May 2002
Guinea-Bissau	8 Sep 2000	1 Nov 2010
Guyana		30 Jul 2010 a
Haiti	15 Aug 2002	
Holy See	10 Oct 2000	24 Oct 2001
Honduras		8 May 2002 a
Hungary	11 Mar 2002	24 Feb 2010
Iceland	7 Sep 2000	9 Jul 2001
India	15 Nov 2004	16 Aug 2005
Indonesia	24 Sep 2001	
Iran (Islamic Republic of)		26 Sep 2007 a
Iraq		24 Jun 2008 a
Ireland	7 Sep 2000	
Israel	14 Nov 2001	23 Jul 2008
Italy	6 Sep 2000	9 May 2002
Jamaica	8 Sep 2000	26 Aug 2011
Japan	10 May 2002	24 Jan 2005
Jordan	6 Sep 2000	4 Dec 2006

Kazakhstan	6 Sep 2000	24 Aug 2001
Kenya	8 Sep 2000	
Kuwait		26 Aug 2004 a
Kyrgyzstan		12 Feb 2003 a
Lao People's Democratic Republic		20 Sep 2006 a
Latvia	1 Feb 2002	22 Feb 2006
Lebanon	10 Oct 2001	8 Nov 2004
Lesotho	6 Sep 2000	24 Sep 2003
Liberia	22 Sep 2004	
Libyan Arab Jamahiriya		18 Jun 2004 a
Liechtenstein	8 Sep 2000	
Lithuania		5 Aug 2004 a
Luxembourg	8 Sep 2000	2 Sep 2011
Madagascar	7 Sep 2000	22 Sep 2004
Malawi	7 Sep 2000	7 Oct 2009
Maldives	10 May 2002	10 May 2002
Mali		16 May 2002 a
Malta	7 Sep 2000	28 Sep 2010
Mauritania		23 Apr 2007 a
Mauritius	11 Nov 2001	14 Jun 2011
Mexico	7 Sep 2000	15 Mar 2002
Micronesia (Federated States of)	8 May 2002	
Monaco	26 Jun 2000	24 Sep 2008
Mongolia	12 Nov 2001	27 Jun 2003
Montenegro <sup>4</sup>		23 Oct 2006 d
Morocco	8 Sep 2000	2 Oct 2001
Mozambique		6 Mar 2003 a
Namibia	8 Sep 2000	16 Apr 2002
Nauru	8 Sep 2000	
Nepal	8 Sep 2000	20 Jan 2006
Netherlands <sup>5</sup>	7 Sep 2000	23 Aug 2005
New Zealand <sup>6</sup>	7 Sep 2000	20 Sep 2011
Nicaragua		2 Dec 2004 a
Niger	27 Mar 2002	26 Oct 2004
Nigeria	8 Sep 2000	27 Sep 2010
Norway	13 Jun 2000	2 Oct 2001
Oman		17 Sep 2004 a
Pakistan	26 Sep 2001	5 Jul 2011



Panama	31 Oct 2000	9 Feb 2001
Paraguay	13 Sep 2000	18 Aug 2003
Peru	1 Nov 2000	8 May 2002
Philippines	8 Sep 2000	28 May 2002
Poland	13 Feb 2002	4 Feb 2005
Portugal	6 Sep 2000	16 May 2003
Qatar		14 Dec 2001 a
Republic of Korea	6 Sep 2000	24 Sep 2004
Republic of Moldova	8 Feb 2002	12 Apr 2007
Romania	6 Sep 2000	18 Oct 2001
Rwanda		14 Mar 2002 a
San Marino	5 Jun 2000	
Saudi Arabia		18 Aug 2010 a
Senegal	8 Sep 2000	5 Nov 2003
Serbia	8 Oct 2001	10 Oct 2002
Seychelles	23 Jan 2001	
Sierra Leone	8 Sep 2000	17 Sep 2001
Slovakia	30 Nov 2001	25 Jun 2004
Slovenia	8 Sep 2000	23 Sep 2004
Solomon Islands	24 Sep 2009	
South Africa		30 Jun 2003 a
Spain	6 Sep 2000	18 Dec 2001
Sri Lanka	8 May 2002	22 Sep 2006
St. Lucia	22 Sep 2011	
St. Vincent and the Grenadines		15 Sep 2005 a
Sudan		2 Nov 2004 a
Suriname	10 May 2002	
Sweden	8 Sep 2000	19 Jan 2007
Switzerland	7 Sep 2000	19 Sep 2006
Syrian Arab Republic		15 May 2003 a
Tajikistan		5 Aug 2002 a
Thailand		11 Jan 2006 a
The former Yugoslav Republic of Macedonia	17 Jul 2001	17 Oct 2003
Timor-Leste		16 Apr 2003 a
Togo	15 Nov 2001	2 Jul 2004
Tunisia	22 Apr 2002	13 Sep 2002
Turkey	8 Sep 2000	19 Aug 2002
Turkmenistan		28 Mar 2005 a

Uganda		30 Nov 2001 a
Ukraine	7 Sep 2000	3 Jul 2003
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	7 Sep 2000	20 Feb 2009
United Republic of Tanzania		24 Apr 2003 a
United States of America	5 Jul 2000	23 Dec 2002
Uruguay	7 Sep 2000	3 Jul 2003
Uzbekistan		23 Dec 2008 a
Vanuatu	16 Sep 2005	17 May 2007
Venezuela (Bolivarian Republic of)	7 Sep 2000	8 May 2002
Viet Nam	8 Sep 2000	20 Dec 2001
Yemen		15 Dec 2004 a
Zambia	29 Sep 2008	

(32)

# **CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES**

STATUS AS AT : 24-09-2011 07:14:07 EDT

## **CHAPTER IV HUMAN RIGHTS**

### **13 . International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families**

New York, 18 December 1990

**Entry into force** : 1 July 2003, in accordance with article 87(1)

**Registration** : 1 July 2003, No. 39481

**Status** : Signatories : 32. Parties : 45

**Text** : United Nations, *Treaty Series*, vol. 2220, p. 3; Doc. A/RES/45/158.

**Note** : The Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, was adopted by Resolution 45/158<sup>1</sup> of 18 December 1990 at the forty-fifth session of the General Assembly of the United Nations. The Convention is open for signature by all States in accordance with its article 86 (1).

Participant	Signature, Succession to signature(d)	Ratification, Accession(a), Succession(d)
Albania		5 Jun 2007 a
Algeria		21 Apr 2005 a
Argentina	10 Aug 2004	23 Feb 2007
Azerbaijan		11 Jan 1999 a
Bangladesh	7 Oct 1998	24 Aug 2011
Belize		14 Nov 2001 a
Benin	15 Sep 2005	
Bolivia		16 Oct 2000 a
Bosnia and Herzegovina		13 Dec 1996 a
Burkina Faso	16 Nov 2001	26 Nov 2003

Cambodia	27 Sep 2004	
Cameroon	15 Dec 2009	
Cape Verde		16 Sep 1997 a
Chile	24 Sep 1993	21 Mar 2005
Colombia		24 May 1995 a
Comoros	22 Sep 2000	
Congo	29 Sep 2008	
Ecuador		5 Feb 2002 a
Egypt		19 Feb 1993 a
El Salvador	13 Sep 2002	14 Mar 2003
Gabon	15 Dec 2004	
Ghana	7 Sep 2000	7 Sep 2000
Guatemala	7 Sep 2000	14 Mar 2003
Guinea		7 Sep 2000 a
Guinea-Bissau	12 Sep 2000	
Guyana	15 Sep 2005	7 Jul 2010
Honduras		9 Aug 2005 a
Indonesia	22 Sep 2004	
Jamaica	25 Sep 2008	25 Sep 2008
Kyrgyzstan		29 Sep 2003 a
Lesotho	24 Sep 2004	16 Sep 2005
Liberia	22 Sep 2004	
Libyan Arab Jamahiriya		18 Jun 2004 a
Mali		5 Jun 2003 a
Mauritania		22 Jan 2007 a
Mexico	22 May 1991	8 Mar 1999
Montenegro <sup>2</sup>	23 Oct 2006 d	
Morocco	15 Aug 1991	21 Jun 1993
Nicaragua		26 Oct 2005 a
Niger		18 Mar 2009 a
Nigeria		27 Jul 2009 a
Palau	20 Sep 2011	
Paraguay	13 Sep 2000	23 Sep 2008
Peru	22 Sep 2004	14 Sep 2005
Philippines	15 Nov 1993	5 Jul 1995
Rwanda		15 Dec 2008 a
Sao Tome and Principe	6 Sep 2000	
Senegal		9 Jun 1999 a

Serbia	11 Nov 2004	
Seychelles		15 Dec 1994 a
Sierra Leone	15 Sep 2000	
Sri Lanka		11 Mar 1996 a
St. Vincent and the Grenadines		29 Oct 2010 a
Syrian Arab Republic		2 Jun 2005 a
Tajikistan	7 Sep 2000	8 Jan 2002
Timor-Leste		30 Jan 2004 a
Togo	15 Nov 2001	
Turkey	13 Jan 1999	27 Sep 2004
Uganda		14 Nov 1995 a
Uruguay		15 Feb 2001 a

(33)

## **CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

STATUS AS AT : 24-09-2011 07:14:07 EDT

### **CHAPTER IV HUMAN RIGHTS**

#### **15 . Convention on the Rights of Persons with Disabilities** New York, 13 December 2006

**Entry into force** : 3 May 2008, in accordance with article 45(1)

**Registration** : 3 May 2008, No. 44910

**Status** : Signatories : 153. Parties : 104

**Text** : Doc.A/61/611.

**Note** : The above Convention was adopted on 13 December 2006 during the sixty-first session of the General Assembly by resolution A/RES/61/106. In accordance with its article 42, the Convention shall be open for signature by all States and by regional integration organizations at United Nations Headquarters in New York as of 30 March 2007.

Participant	Signature	Formal confirmation(c), Accession(a), Ratification
Albania	22 Dec 2009	
Algeria	30 Mar 2007	4 Dec 2009
Andorra	27 Apr 2007	
Antigua and Barbuda	30 Mar 2007	
Argentina	30 Mar 2007	2 Sep 2008
Armenia	30 Mar 2007	22 Sep 2010
Australia	30 Mar 2007	17 Jul 2008
Austria	30 Mar 2007	26 Sep 2008
Azerbaijan	9 Jan 2008	28 Jan 2009
Bahrain	25 Jun 2007	22 Sep 2011
Bangladesh	9 May 2007	30 Nov 2007
Barbados	19 Jul 2007	
Belgium	30 Mar 2007	2 Jul 2009

Belize	9 May 2011	2 Jun 2011
Benin	8 Feb 2008	
Bhutan	21 Sep 2010	
Bolivia (Plurinational State of) <sup>1</sup>	13 Aug 2007	16 Nov 2009
Bosnia and Herzegovina	29 Jul 2009	12 Mar 2010
Brazil	30 Mar 2007	1 Aug 2008
Brunei Darussalam	18 Dec 2007	
Bulgaria	27 Sep 2007	
Burkina Faso	23 May 2007	23 Jul 2009
Burundi	26 Apr 2007	
Cambodia	1 Oct 2007	
Cameroon	1 Oct 2008	
Canada	30 Mar 2007	11 Mar 2010
Cape Verde	30 Mar 2007	
Central African Republic	9 May 2007	
Chile	30 Mar 2007	29 Jul 2008
China <sup>2</sup>	30 Mar 2007	1 Aug 2008
Colombia	30 Mar 2007	10 May 2011
Comoros	26 Sep 2007	
Congo	30 Mar 2007	
Cook Islands		8 May 2009 a
Costa Rica	30 Mar 2007	1 Oct 2008
Côte d'Ivoire	7 Jun 2007	
Croatia	30 Mar 2007	15 Aug 2007
Cuba	26 Apr 2007	6 Sep 2007
Cyprus	30 Mar 2007	27 Jun 2011
Czech Republic	30 Mar 2007	28 Sep 2009
Denmark	30 Mar 2007	24 Jul 2009
Dominica	30 Mar 2007	
Dominican Republic	30 Mar 2007	18 Aug 2009
Ecuador	30 Mar 2007	3 Apr 2008
Egypt	4 Apr 2007	14 Apr 2008
El Salvador	30 Mar 2007	14 Dec 2007
Estonia	25 Sep 2007	
Ethiopia	30 Mar 2007	7 Jul 2010
European Union	30 Mar 2007	23 Dec 2010 c
Fiji	2 Jun 2010	
Finland	30 Mar 2007	

France	30 Mar 2007	18 Feb 2010
Gabon	30 Mar 2007	1 Oct 2007
Georgia	10 Jul 2009	
Germany	30 Mar 2007	24 Feb 2009
Ghana	30 Mar 2007	
Greece	30 Mar 2007	
Grenada	12 Jul 2010	
Guatemala <sup>3</sup>	30 Mar 2007	7 Apr 2009
Guinea	16 May 2007	8 Feb 2008
Guyana	11 Apr 2007	
Haiti		23 Jul 2009 a
Honduras	30 Mar 2007	14 Apr 2008
Hungary	30 Mar 2007	20 Jul 2007
Iceland	30 Mar 2007	
India	30 Mar 2007	1 Oct 2007
Indonesia	30 Mar 2007	
Iran (Islamic Republic of)		23 Oct 2009 a
Ireland	30 Mar 2007	
Israel	30 Mar 2007	
Italy	30 Mar 2007	15 May 2009
Jamaica	30 Mar 2007	30 Mar 2007
Japan	28 Sep 2007	
Jordan	30 Mar 2007	31 Mar 2008
Kazakhstan	11 Dec 2008	
Kenya	30 Mar 2007	19 May 2008
Kyrgyzstan	21 Sep 2011	
Lao People's Democratic Republic	15 Jan 2008	25 Sep 2009
Latvia	18 Jul 2008	1 Mar 2010
Lebanon	14 Jun 2007	
Lesotho		2 Dec 2008 a
Liberia	30 Mar 2007	
Libyan Arab Jamahiriya	1 May 2008	
Lithuania	30 Mar 2007	18 Aug 2010
Luxembourg	30 Mar 2007	
Madagascar	25 Sep 2007	
Malawi	27 Sep 2007	27 Aug 2009
Malaysia	8 Apr 2008	19 Jul 2010
Maldives	2 Oct 2007	5 Apr 2010



Mali	15 May 2007	7 Apr 2008
Malta	30 Mar 2007	
Mauritius	25 Sep 2007	8 Jan 2010
Mexico	30 Mar 2007	17 Dec 2007
Micronesia (Federated States of)	23 Sep 2011	
Monaco	23 Sep 2009	
Mongolia		13 May 2009 a
Montenegro	27 Sep 2007	2 Nov 2009
Morocco	30 Mar 2007	8 Apr 2009
Mozambique	30 Mar 2007	
Namibia	25 Apr 2007	4 Dec 2007
Nepal	3 Jan 2008	7 May 2010
Netherlands	30 Mar 2007	
New Zealand <sup>4</sup>	30 Mar 2007	25 Sep 2008
Nicaragua	30 Mar 2007	7 Dec 2007
Niger	30 Mar 2007	24 Jun 2008
Nigeria	30 Mar 2007	24 Sep 2010
Norway	30 Mar 2007	
Oman	17 Mar 2008	6 Jan 2009
Pakistan	25 Sep 2008	5 Jul 2011
Palau	20 Sep 2011	
Panama	30 Mar 2007	7 Aug 2007
Papua New Guinea	2 Jun 2011	
Paraguay	30 Mar 2007	3 Sep 2008
Peru	30 Mar 2007	30 Jan 2008
Philippines	25 Sep 2007	15 Apr 2008
Poland	30 Mar 2007	
Portugal	30 Mar 2007	23 Sep 2009
Qatar	9 Jul 2007	13 May 2008
Republic of Korea	30 Mar 2007	11 Dec 2008
Republic of Moldova	30 Mar 2007	21 Sep 2010
Romania	26 Sep 2007	31 Jan 2011
Russian Federation	24 Sep 2008	
Rwanda		15 Dec 2008 a
San Marino	30 Mar 2007	22 Feb 2008
Saudi Arabia		24 Jun 2008 a
Senegal	25 Apr 2007	7 Sep 2010
Serbia	17 Dec 2007	31 Jul 2009

Seychelles	30 Mar 2007	2 Oct 2009
Sierra Leone	30 Mar 2007	4 Oct 2010
Slovakia	26 Sep 2007	26 May 2010
Slovenia	30 Mar 2007	24 Apr 2008
Solomon Islands	23 Sep 2008	
South Africa	30 Mar 2007	30 Nov 2007
Spain	30 Mar 2007	3 Dec 2007
Sri Lanka	30 Mar 2007	
St. Lucia	22 Sep 2011	
St. Vincent and the Grenadines		29 Oct 2010 a
Sudan	30 Mar 2007	24 Apr 2009
Suriname	30 Mar 2007	
Swaziland	25 Sep 2007	
Sweden	30 Mar 2007	15 Dec 2008
Syrian Arab Republic	30 Mar 2007	10 Jul 2009
Thailand	30 Mar 2007	29 Jul 2008
The former Yugoslav Republic of Macedonia	30 Mar 2007	
Togo	23 Sep 2008	1 Mar 2011
Tonga	15 Nov 2007	
Trinidad and Tobago	27 Sep 2007	
Tunisia	30 Mar 2007	2 Apr 2008
Turkey	30 Mar 2007	28 Sep 2009
Turkmenistan		4 Sep 2008 a
Uganda	30 Mar 2007	25 Sep 2008
Ukraine	24 Sep 2008	4 Feb 2010
United Arab Emirates	8 Feb 2008	19 Mar 2010
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	30 Mar 2007	8 Jun 2009
United Republic of Tanzania	30 Mar 2007	10 Nov 2009
United States of America	30 Jul 2009	
Uruguay	3 Apr 2007	11 Feb 2009
Uzbekistan	27 Feb 2009	
Vanuatu	17 May 2007	23 Oct 2008
Viet Nam	22 Oct 2007	
Yemen	30 Mar 2007	26 Mar 2009
Zambia	9 May 2008	1 Feb 2010

(34)

**PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA  
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS  
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

STATUS AS AT : 24-09-2011 07:14:07 EDT

**CHAPTER IV  
HUMAN RIGHTS**

**15 .a Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with  
Disabilities**

New York, 13 December 2006

**Entry into force** : 3 May 2008, in accordance with article 13(1)

**Registration** : 3 May 2008, No. 44910

**Status** : Signatories : 90. Parties : 62

**Text** : Doc.A/61/611.

**Note** : The above Optional Protocol was adopted on 13 December 2006 during the sixty-first session of the General Assembly by resolution A/RES/61/106. In accordance with its article 10, the Optional Protocol shall be open for signature by all signatory States and regional integration organizations of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities at United Nations Headquarters in New York as of 30 March 2007.

Participant	Signature	Formal confirmation(c), Accession(a), Ratification
Algeria	30 Mar 2007	
Andorra	27 Apr 2007	
Antigua and Barbuda	30 Mar 2007	
Argentina	30 Mar 2007	2 Sep 2008
Armenia	30 Mar 2007	
Australia		21 Aug 2009 a
Austria	30 Mar 2007	26 Sep 2008
Azerbaijan	9 Jan 2008	28 Jan 2009
Bangladesh		12 May 2008 a

Belgium	30 Mar 2007	2 Jul 2009
Benin	8 Feb 2008	
Bolivia (Plurinational State of) <sup>1</sup>	13 Aug 2007	16 Nov 2009
Bosnia and Herzegovina	29 Jul 2009	12 Mar 2010
Brazil	30 Mar 2007	1 Aug 2008
Bulgaria	18 Dec 2008	
Burkina Faso	23 May 2007	23 Jul 2009
Burundi	26 Apr 2007	
Cambodia	1 Oct 2007	
Cameroon	1 Oct 2008	
Central African Republic	9 May 2007	
Chile	30 Mar 2007	29 Jul 2008
Congo	30 Mar 2007	
Cook Islands		8 May 2009 a
Costa Rica	30 Mar 2007	1 Oct 2008
Côte d'Ivoire	7 Jun 2007	
Croatia	30 Mar 2007	15 Aug 2007
Cyprus	30 Mar 2007	27 Jun 2011
Czech Republic	30 Mar 2007	
Dominican Republic	30 Mar 2007	18 Aug 2009
Ecuador	30 Mar 2007	3 Apr 2008
El Salvador	30 Mar 2007	14 Dec 2007
Fiji	2 Jun 2010	
Finland	30 Mar 2007	
France	23 Sep 2008	18 Feb 2010
Gabon	25 Sep 2007	
Georgia	10 Jul 2009	
Germany	30 Mar 2007	24 Feb 2009
Ghana	30 Mar 2007	
Greece	27 Sep 2010	
Guatemala	30 Mar 2007	7 Apr 2009
Guinea	31 Aug 2007	8 Feb 2008
Haiti		23 Jul 2009 a
Honduras	23 Aug 2007	16 Aug 2010
Hungary	30 Mar 2007	20 Jul 2007
Iceland	30 Mar 2007	
Italy	30 Mar 2007	15 May 2009
Jamaica	30 Mar 2007	

Jordan	30 Mar 2007	
Kazakhstan	11 Dec 2008	
Latvia	22 Jan 2010	31 Aug 2010
Lebanon	14 Jun 2007	
Liberia	30 Mar 2007	
Lithuania	30 Mar 2007	18 Aug 2010
Luxembourg	30 Mar 2007	
Madagascar	25 Sep 2007	
Mali	15 May 2007	7 Apr 2008
Malta	30 Mar 2007	
Mauritius	25 Sep 2007	
Mexico	30 Mar 2007	17 Dec 2007
Mongolia		13 May 2009 a
Montenegro	27 Sep 2007	2 Nov 2009
Morocco		8 Apr 2009 a
Namibia	25 Apr 2007	4 Dec 2007
Nepal	3 Jan 2008	7 May 2010
Nicaragua	21 Oct 2008	2 Feb 2010
Niger	2 Aug 2007	24 Jun 2008
Nigeria	30 Mar 2007	24 Sep 2010
Panama	30 Mar 2007	7 Aug 2007
Paraguay	30 Mar 2007	3 Sep 2008
Peru	30 Mar 2007	30 Jan 2008
Portugal	30 Mar 2007	23 Sep 2009
Qatar	9 Jul 2007	
Romania	25 Sep 2008	
Rwanda		15 Dec 2008 a
San Marino	30 Mar 2007	22 Feb 2008
Saudi Arabia		24 Jun 2008 a
Senegal	25 Apr 2007	
Serbia	17 Dec 2007	31 Jul 2009
Seychelles	30 Mar 2007	
Sierra Leone	30 Mar 2007	
Slovakia	26 Sep 2007	26 May 2010
Slovenia	30 Mar 2007	24 Apr 2008
Solomon Islands	24 Sep 2009	
South Africa	30 Mar 2007	30 Nov 2007
Spain	30 Mar 2007	3 Dec 2007

St. Vincent and the Grenadines		29 Oct 2010 a
Sudan		24 Apr 2009 a
Swaziland	25 Sep 2007	
Sweden	30 Mar 2007	15 Dec 2008
Syrian Arab Republic		10 Jul 2009 a
The former Yugoslav Republic of Macedonia	29 Jul 2009	
Togo	23 Sep 2008	1 Mar 2011
Tunisia	30 Mar 2007	2 Apr 2008
Turkey	28 Sep 2009	
Turkmenistan		10 Nov 2010 a
Uganda	30 Mar 2007	25 Sep 2008
Ukraine	24 Sep 2008	4 Feb 2010
United Arab Emirates	12 Feb 2008	
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	26 Feb 2009	7 Aug 2009
United Republic of Tanzania	29 Sep 2008	10 Nov 2009
Yemen	11 Apr 2007	26 Mar 2009
Zambia	29 Sep 2008	

(35)

**CONVENCIÓN INTERNACIONAL  
PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS  
PERSONAS CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA**

STATUS AS AT : 24-09-2011 07:14:07 EDT

**CHAPTER IV  
HUMAN RIGHTS**

**16 . International Convention for the Protection of All Persons from  
Enforced Disappearance**

New York, 20 December 2006

**Entry into force** : 23 December 2010, in accordance with article 39(1) which reads as follows: "This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession."

**Registration** : 23 December 2010, No. 48088

**Status** : Signatories : 89. Parties : 30

**Text** : Doc.A/61/488. C.N.737.2008.TREATIES-12 of 2 October 2008 (Proposal of corrections to the original text of the Convention (Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts) and to the Certified True Copies) and C.N.1040.2008.TREATIES-20 of 2 January 2009 (Corrections).

**Note** : The above Convention was adopted on 20 December 2006 during the sixty-first session of the General Assembly by resolution A/RES/61/177. In accordance with its article 38, the Convention shall be open for signature by all Member States of the United Nations. The Convention shall be open for signature on 6 February 2007 in Paris, France, and thereafter at United Nations Headquarters in New York.

Participant	Signature	Accession(a), Ratification
Albania	6 Feb 2007	8 Nov 2007
Algeria	6 Feb 2007	
Argentina	6 Feb 2007	14 Dec 2007
Armenia	10 Apr 2007	24 Jan 2011
Austria	6 Feb 2007	

Azerbaijan	6 Feb 2007	
Belgium	6 Feb 2007	2 Jun 2011
Benin	19 Mar 2010	
Bolivia	6 Feb 2007	17 Dec 2008
Bosnia and Herzegovina	6 Feb 2007	
Brazil	6 Feb 2007	29 Nov 2010
Bulgaria	24 Sep 2008	
Burkina Faso	6 Feb 2007	3 Dec 2009
Burundi	6 Feb 2007	
Cameroon	6 Feb 2007	
Cape Verde	6 Feb 2007	
Chad	6 Feb 2007	
Chile	6 Feb 2007	8 Dec 2009
Colombia	27 Sep 2007	
Comoros	6 Feb 2007	
Congo	6 Feb 2007	
Costa Rica	6 Feb 2007	
Croatia	6 Feb 2007	
Cuba	6 Feb 2007	2 Feb 2009
Cyprus	6 Feb 2007	
Denmark	25 Sep 2007	
Ecuador	24 May 2007	20 Oct 2009
Finland	6 Feb 2007	
France	6 Feb 2007	23 Sep 2008
Gabon	25 Sep 2007	19 Jan 2011
Germany	26 Sep 2007	24 Sep 2009
Ghana	6 Feb 2007	
Greece	1 Oct 2008	
Grenada	6 Feb 2007	
Guatemala	6 Feb 2007	
Haiti	6 Feb 2007	
Honduras	6 Feb 2007	1 Apr 2008
Iceland	1 Oct 2008	
India	6 Feb 2007	
Indonesia	27 Sep 2010	
Iraq		23 Nov 2010 a
Ireland	29 Mar 2007	
Italy	3 Jul 2007	



Japan	6 Feb 2007	23 Jul 2009
Kazakhstan		27 Feb 2009 a
Kenya	6 Feb 2007	
Lao People's Democratic Republic	29 Sep 2008	
Lebanon	6 Feb 2007	
Lesotho	22 Sep 2010	
Liechtenstein	1 Oct 2007	
Lithuania	6 Feb 2007	
Luxembourg	6 Feb 2007	
Madagascar	6 Feb 2007	
Maldives	6 Feb 2007	
Mali	6 Feb 2007	1 Jul 2009
Malta	6 Feb 2007	
Mexico	6 Feb 2007	18 Mar 2008
Monaco	6 Feb 2007	
Mongolia	6 Feb 2007	
Montenegro	6 Feb 2007	20 Sep 2011
Morocco	6 Feb 2007	
Mozambique	24 Dec 2008	
Netherlands <sup>1</sup>	29 Apr 2008	23 Mar 2011
Niger	6 Feb 2007	
Nigeria		27 Jul 2009 a
Norway	21 Dec 2007	
Palau	20 Sep 2011	
Panama	25 Sep 2007	24 Jun 2011
Paraguay	6 Feb 2007	3 Aug 2010
Portugal	6 Feb 2007	
Republic of Moldova	6 Feb 2007	
Romania	3 Dec 2008	
Samoa	6 Feb 2007	
Senegal	6 Feb 2007	11 Dec 2008
Serbia	6 Feb 2007	18 May 2011
Sierra Leone	6 Feb 2007	
Slovakia	26 Sep 2007	
Slovenia	26 Sep 2007	
Spain	27 Sep 2007	24 Sep 2009
St. Vincent and the Grenadines	29 Mar 2010	
Swaziland	25 Sep 2007	

Sweden	6 Feb 2007	
Switzerland	19 Jan 2011	
The former Yugoslav Republic of Macedonia	6 Feb 2007	
Togo	27 Oct 2010	
Tunisia	6 Feb 2007	29 Jun 2011
Uganda	6 Feb 2007	
United Republic of Tanzania	29 Sep 2008	
Uruguay	6 Feb 2007	4 Mar 2009
Vanuatu	6 Feb 2007	
Venezuela (Bolivarian Republic of)	21 Oct 2008	
Zambia	27 Sep 2010	4 Apr 2011

(36)

## **CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA**

### **PREÁMBULO**

### **CAPÍTULO I. DIGNIDAD**

### **CAPÍTULO II. LIBERTADES**

### **CAPÍTULO III. IGUALDAD**

### **CAPÍTULO IV. SOLIDARIDAD**

### **CAPÍTULO V. CIUDADANÍA**

### **CAPÍTULO VI. JUSTICIA**

### **CAPÍTULO VII. DISPOSICIONES GENERALES**

### **PREÁMBULO**

1.- Los pueblos europeos han establecido entre sí una unión cada vez más estrecha y han decidido compartir un porvenir pacífico basado en valores comunes.

2.- La Unión está fundada sobre los principios indivisibles y universales de dignidad de hombres y mujeres, libertad, igualdad y solidaridad; reposa en el principio de democracia y el Estado de Derecho.

3.- La Unión contribuye al fomento de tales valores comunes mediante el respeto de la diversidad de culturas y tradiciones de los pueblos europeos, así como de la identidad nacional de los Estados miembros y de su organización de los poderes públicos en el plano nacional, regional y local; vela, merced a la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios, por un desarrollo equilibrado y sostenible.

4.- Mediante la adopción de la presente Carta, la Unión tiene la intención de reforzar la protección de los derechos fundamentales, dotándolos de mayor presencia, a tenor de la evolución de la sociedad, del progreso social y de los avances científicos y tecnológicos.

5.- La presente Carta reafirma, respetando las competencias y misiones de la Comunidad y de la Unión, así como el principio de subsidiariedad, los derechos resultantes especialmente de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, del Tratado de la Unión Europea y de los Tratados comunitarios, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de las Cartas Sociales adoptadas por la Comunidad y por el Consejo de Europa, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

**6.-** El disfrute de tales derechos origina responsabilidades y deberes tanto respecto de los demás como de la comunidad humana y de las futuras generaciones.

**7.-** En consecuencia, la presente Carta garantiza a todos los derechos y libertades enunciados a continuación.

## **CAPÍTULO I: DIGNIDAD**

### **Artículo 1. Dignidad de la persona**

Se respetará y protegerá la dignidad de la persona.

### **Artículo 2. Derecho a la vida**

**1.-** Toda persona tiene derecho a la vida.

**2.-** Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado.

### **Artículo 3. Derecho a la integridad de la persona**

**1.-** Toda persona tiene derecho a su integridad física y mental.

**2.-** En el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular los principios siguientes:

- consentimiento libre e informado de la persona de que se trate,
- prohibición de las prácticas eugenésicas, y en particular de las que tienen por finalidad la selección de las personas,
- prohibición de que el cuerpo humano o partes del mismo se conviertan en objeto de lucro,
- prohibición de la clonación reproductora de seres humanos.

### **Artículo 4. Prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes**

Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

### **Artículo 5. Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado**

**1.-** Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre.

**2.-** Nadie podrá ser constreñido a realizar un trabajo forzado u obligatorio.

**3.-** Se prohíbe la trata de seres humanos.

## **CAPÍTULO II: LIBERTADES**

## **Artículo 6. Derecho a la libertad y a la seguridad**

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.

## **Artículo 7. Respeto a la vida privada y familiar**

Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y del secreto de sus comunicaciones.

## **Artículo 8. Protección de datos de carácter personal**

Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines determinados y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente.

## **Artículo 9. Derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia**

Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que rijan su ejercicio.

## **Artículo 10. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión**

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.

## **Artículo 11. Libertad de expresión y de información**

1.- Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.

2.- Se garantiza la libertad de los medios de comunicación y la libertad de información dentro del respeto del pluralismo y de la transparencia.

## **Artículo 12. Libertad de reunión y de asociación**

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico.

Los partidos políticos a escala europea contribuyen a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión.

## **Artículo 13. Libertad de investigación**

La investigación científica es libre.

#### **Artículo 14. Derecho a la educación**

1.- Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y continua. Este derecho incluye la facultad de seguir gratuitamente la enseñanza obligatoria.

2.- Se garantizan, de acuerdo con las normas nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como del derecho de los padres a asegurar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.

#### **Artículo 15. Libertad profesional**

1.- Para ganarse la vida, toda persona tiene derecho a ejercer una profesión libremente escogida.

2.- Todo ciudadano de la Unión posee la libertad de buscar un empleo, de trabajar, de establecerse o de prestar o recibir servicios en cualquier Estado miembro.

3.- Los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de los Estados miembros tienen derecho a unas condiciones laborales equivalentes a aquellas que disfrutaban los ciudadanos de la Unión.

#### **Artículo 16. Libertad de empresa**

Se reconoce la libertad de empresa.

#### **Artículo 17. Derecho a la propiedad**

1.- Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus bienes adquiridos legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en los casos y condiciones previstos por la ley y a cambio de una justa indemnización. El uso de los bienes podrá regularse en la medida que resulte necesario para el interés general.

2.- Se protegerá la propiedad intelectual.

#### **Artículo 18. Derecho de asilo**

Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el estatuto de los refugiados y de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

#### **Artículo 19. Protección en caso de alejamiento, expulsión y extradición**

**1.- Se prohíben las expulsiones colectivas.**

**2.-** Nadie podrá ser alejado, expulsado o extraditado a un Estado en que pueda ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.

### **CAPÍTULO III. IGUALDAD**

#### **Artículo 20. Igualdad ante la Ley**

Todas las personas, hombres y mujeres, son iguales ante la Ley.

#### **Artículo 21. Igualdad y no discriminación**

**1.-** Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por motivos de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

**2.-** Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea, y sin perjuicio de las disposiciones particulares de dichos Tratados.

#### **Artículo 22. Igualdad entre hombres y mujeres**

Debe garantizarse la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en materia de empleo y de trabajo, incluida la igualdad de retribución por un mismo trabajo o por un trabajo de valor igual.

El principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales.

#### **Artículo 23. Protección de los niños**

**1.-** Los niños tienen derecho para su bienestar a la protección y a los cuidados necesarios. Podrán expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta en relación con los asuntos que les afecten, en función de su edad y de su madurez.

**2.-** En todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial.

#### **Artículo 24. Integración de las personas discapacitadas**

Las personas discapacitadas tienen derecho a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad.

## **CAPÍTULO IV. SOLIDARIDAD**

### **Artículo 25. Derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa**

Se deberá garantizar a los trabajadores y sus representantes la información y la consulta, con anticipación suficiente, sobre los asuntos que les afecten en el seno de la empresa, conforme al Derecho comunitario y a las legislaciones y prácticas nacionales.

### **Artículo 26. Derecho de negociación y de acción colectiva**

Los empresarios y los trabajadores tienen derecho a negociar y a celebrar convenios colectivos y, en caso de conflicto de intereses, a emprender acciones colectivas para la defensa de sus intereses, conforme al Derecho comunitario y a las legislaciones y prácticas nacionales.

### **Artículo 27. Derecho de acceso a los servicios de empleo**

Toda persona tiene derecho de acceso a un servicio de empleo.

### **Artículo 28. Protección en caso de despido injustificado**

Los trabajadores tienen derecho a una protección en caso de despido injustificado.

### **Artículo 29. Condiciones de trabajo justas y equitativas**

- 1.- Todo trabajador tiene derecho a condiciones de trabajo sanas, seguras y dignas.
- 2.- Todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo y a períodos diarios y semanales de descanso, así como a un período anual de vacaciones pagadas.

### **Artículo 30. Protección de los jóvenes en el trabajo**

Está prohibido el trabajo infantil. La edad mínima de admisión al trabajo no debe ser inferior a la edad en que concluye la escolaridad obligatoria, sin perjuicio de disposiciones más favorables para los jóvenes y salvo excepciones limitadas.

Los jóvenes admitidos a trabajar deben disponer de unas condiciones de trabajo adaptadas a su edad y deben estar protegidos frente a la explotación económica y cualquier trabajo que pueda ser perjudicial para su seguridad, salud o desarrollo físico, mental, moral o social, o poner en peligro su educación.

### **Artículo 31 Conciliación de la vida familiar y de la vida profesional**

Se garantizará la protección de la familia en los planos jurídico, económico y social.



Toda persona debe poder conciliar la vida familiar y la profesional, lo que conlleva en particular el derecho a la protección frente a todo despido por maternidad, así como el derecho a licencia por maternidad y a licencia parental con motivo del nacimiento o la adopción de un niño.

### **Artículo 32. Seguridad Social y ayuda social**

1.- La Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de la seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una protección en caso de maternidad, enfermedad, accidente laboral, dependencia o vejez, así como en caso de pérdida de empleo, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales.

2.- Los trabajadores nacionales de un Estado miembro que residan en otro Estado miembro, así como los miembros de su familia, tienen derecho a las mismas prestaciones de seguridad social, a las mismas ventajas sociales y al mismo acceso a la atención sanitaria que los nacionales de este Estado miembro.

3.- La Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda a la vivienda para garantizar una existencia digna a toda persona que no disponga de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales.

### **Artículo 33. Protección de la salud**

Toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales.

### **Artículo 34. Acceso a los servicios de interés económico general**

La Unión respeta el acceso a los servicios de interés económico general, tal como disponen las legislaciones y prácticas nacionales, de conformidad con las disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con el fin de promover la cohesión social y territorial de la Unión.

### **Artículo 35. Protección del medio ambiente**

Todas las políticas de la Unión garantizarán la protección y conservación de un entorno con la calidad de vida adecuada, así como la mejora de la calidad del medio ambiente, teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenible.

### **Artículo 36. Protección de los consumidores**

Las políticas de la Unión garantizarán un alto nivel de protección de la salud, de la seguridad y de los intereses de los consumidores.

## **CAPÍTULO V. CIUDADANÍA**

## **Artículo 37. Derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo**

1.- Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a ser elector y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo en el Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

2.- Los diputados del Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto.

## **Artículo 38. Derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales**

Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

## **Artículo 39. Derecho a una buena administración**

1.- Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.

2.- Este derecho incluye en particular:

- el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente;

- el derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional de los asuntos;

- la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones.

3.- Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.

4.- Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas oficiales de éstas y recibir una contestación en esa misma lengua.

## **Artículo 40. Derecho de acceso a los documentos**

Todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tiene derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.

## **Artículo 41. El Defensor del Pueblo**

Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo de la Unión los casos de mala administración de las instituciones u órganos comunitarios, con exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

#### **Artículo 42. Derecho de petición**

Todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene el derecho de petición ante el Parlamento Europeo.

#### **Artículo 43. Libertad de circulación y de residencia**

1.- Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, se podrá conceder libertad de circulación a los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de un Estado miembro.

#### **Artículo 44. Protección diplomática y consular**

Todo ciudadano de la Unión podrá acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sea nacional, a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado.

### **CAPÍTULO VI. JUSTICIA**

#### **Artículo 45. Derecho a un recurso efectivo y a un tribunal imparcial**

1.- Toda persona cuyos derechos y libertades hayan sido violados tiene derecho a un recurso efectivo ante un tribunal.

2.- Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar.

3.- Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia.

#### **Artículo 46. Presunción de inocencia y derechos de la defensa**

1.- Todo acusado se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.

**2.-** Se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la defensa.

#### **Artículo 47. Principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas**

**1.-** Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el Derecho nacional o el Derecho internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. Si, con posterioridad a esta infracción, la ley dispone una pena más leve, deberá ser aplicada ésta.

**2.-** El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o una omisión que, en el momento de su comisión, fuera constitutiva de delito según el Derecho internacional.

**3.-** La intensidad de las penas será proporcional a la gravedad de las infracciones.

#### **Artículo 48. Derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito**

Nadie podrá ser juzgado o condenado penalmente a causa de una infracción de la cual ya haya sido absuelto o condenado mediante sentencia penal firme conforme a la ley.

### **CAPÍTULO VII. DISPOSICIONES GENERALES**

#### **Artículo 49. Ámbito de aplicación**

**1.-** Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones y órganos de la Unión, respetando el principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Por consiguiente, éstos respetarán los derechos, observarán los principios y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias.

**2.-** La presente Carta no crea ninguna competencia ni ninguna misión nueva para la Comunidad ni para la Unión y no modifica las competencias y misiones definidas por los Tratados.

#### **Artículo 50. Limitación de los derechos garantizados**

**1.-** Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá haber sido estipulada por la autoridad legislativa competente. Respetando el principio de proporcionalidad, sólo se podrán introducir limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Unión, o a otros intereses legítimos en una sociedad democrática o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.

**2.-** Los derechos reconocidos por la presente Carta que tienen su fundamento en los Tratados comunitarios o en el Tratado de la Unión Europea se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados por éstos.

**3.-** En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán similares a los que les confiere dicho Convenio, a menos que la presente Carta no garantice una protección más elevada o más amplia.

#### **Artículo 51. Nivel de protección**

Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho Internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión, la Comunidad o los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los Estados miembros.

#### **Artículo 52. Prohibición del abuso de derecho**

Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá ser interpretada en el sentido de que implique un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en la presente Carta o a limitaciones más amplias de estos derechos y libertades que las previstas en la presente Carta.